

D.C.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito

AMPARO DIRECTO

Número de expediente

Número de Origen.-

NEUN:

Fecha Ingreso: 13/11/2019

Número de Control de O.C.C.-

Materia.- Civil

Quejoso:

DC.-

Autoridad Responsable: SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Tercero Interesado:

Acto Reclamado: Sentencia definitiva, SENTENCIA 10/10/2019

Articulos Constitucionales Violados: 1, 6, 7, 14, 16, 22, 133

Resolución Inicial:

Sentido:

Turno:

Magistrado.

Fecha Ejecutoria:

Sentido:

Fecha Archivo:

Magistrados:

Secretario.

Mgdo. Pdte. Daniel Horacio Escudero Contreras

Mgdo. José Rigoberto Dueñas Calderón

Mgdo. María Concepción Alonso Flores

TURNO DE AMPARO DIRECTO

OCC 1.1.0.79

Fecha de recibido: martes, 12/11/2019

No. de registro: 013439/2019

Fecha de turno: martes, 12/11/2019

Hora de recibido: 13:49 Hrs.

Hora de turno: 15:57 Hrs.

Turnado al:

Número de folio: 25652

Firma autógrafa: SI

Quejoso:

Tercero interesado:

Autoridad de 2a. instancia: 6A. SALA CIVIL DEL TRIB. SUP. JUST. DE LA CDMX

Reclama la sentencia de fecha: jueves, 10/10/2019

Número de tocas:

Numero de oficio:

No. Juicio de primera instancia:

Autoridad de primera instancia: JUEZ 16° DE LO CIVIL DE LA CDMX

Original: 1

Copias de original: ***

Anexos: 2

Copias de anexos: ***

Descripcion de anexos: 4 TOCAS 5 LEGAJOS 2 EXPS. T- RGZ Y R- DGCR

Observaciones: ***

Incompetencia o Desechamiento: ***

Fecha de cambio de turno: ***

Hora de cambio de turno: ***

Relacionado por OCC (REYNALDO con Amparo en revisión Numero

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega:

Servidor Público que recibe:

Órgano de su adscripción:

Fecha:

Hora:

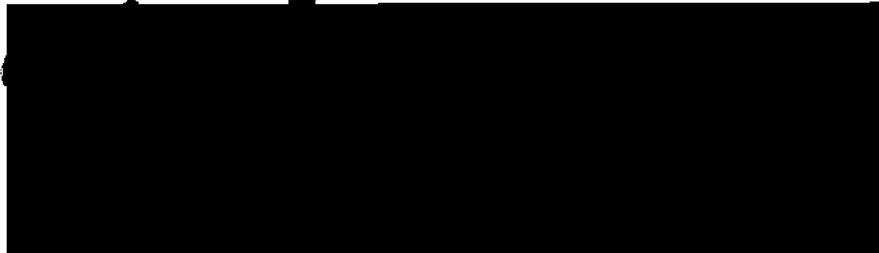
Firma

Hora:





DC.



Asunto.- Se rinde informe justificado.
Se remite demanda de amparo, toca, autos, documentos y emplazamiento.
Toca Número: 9

P.3.

H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO.
P R E S E N T E.

Secretaría de Acuerdos

Toca Núm.

Of.

Constante en setenta y siete fojas útiles, permito remitir a usted la demanda original de amparo con la certificación a que se refiere el artículo 178 de la Vigente Ley de Amparo, promovida por [redacted], apoderado legal de [redacted] -a quien se le tiene por reconocida su personalidad a foja 87 del expediente principal,- contra actos de esta sala, así como dos copias simples de la misma, y tres legajos de copias certificadas, y en vía de informe justificado manifiesto a usted, que:

SI ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, en virtud de que, efectivamente esta sala dictó sentencia con fecha diez de octubre del dos mil diecinueve, en el toca anotado al rubro a que se refiere el quejoso, y en la misma obran los fundamentos legales y consideraciones jurídicas que sirvieron de base para dictarla, los cuales se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesaria.

Con el objeto de acreditar la legalidad del acto reclamado, le remito a usted el toca anotado al rubro del cual emana el mismo en 384 fojas útiles, y los tocas [redacted] en 24, 19 y 24 fojas respectivamente, así como los autos originales del juicio ORDINARIO CIVIL DAÑO MORAL, seguido por [redacted] en contra de [redacted] expediente número [redacted] en dos tomos en 164 y 171 fojas, un bolsa con documentos como se relaciona en el oficio que remite el A quo a sala y que obra a foja 311 del toca; se hace de su conocimiento que los cuadernos de agravios obran glosados al toca anotado al margen; también se le remite la constancia del emplazamiento, y se le comunica que hasta la fecha no existe diversa demanda de garantías pendiente de remitir.

Reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida Consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
LA C. PRESIDENTA DE LA SEXTA SALA CIVIL.

MAG. LIC. DELIA ROSEY PUEBLA.

Aal.

ATA SALA CIVIL

SECRETARÍA DE ACUERDOS

08 NOV 12 P 1:49

Don Cupes
dos autos
Cinco hojas
dos autos

[REDACTED]

413

[REDACTED]

- Memenda de aypura original 77-folios

- Testimonio del Instrumento [REDACTED]
3-folios

- 1-bolsa cerrada

- 1-urexo original en 1-folios

- Toca [REDACTED] en 384-folios

- Exp. [REDACTED] en 2-tomos en 1164 y
171-folios

- 3-tocas [REDACTED]

- 5-folios en 72, 84, 435 y 2-con
folios irregulares con la leyenda
traslada

[REDACTED]
abogados

QUEJOSO: [REDACTED]

JUICIO: AMPARO DIRECTO.

3
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA
FEDERAL

2019 NOV -5 AM 9:11

C. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO, EN TURNO.

SEXTA SALA CIVIL

[REDACTED], en mi carácter de apoderado legal de [REDACTED], personalidad que acredito en términos del Instrumento Notarial número [REDACTED] expedido ante la fe del Notario Público núm. [REDACTED] de la Ciudad de México, Lic. Mario Rischia Velázquez (ANEXO "A"), señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en [REDACTED]

[REDACTED], autorizando en los términos más amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los señores Licenciados en Derecho [REDACTED]

[REDACTED] con Cédula Profesional número [REDACTED] así como para recibir indistintamente notificaciones, toda clase de documentos y valores, y hacer uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza para la reproducción de actuaciones judiciales y documentos exhibidos a los C. Pasantes en Derecho [REDACTED]

[REDACTED], ante Ustedes con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, artículos 34, 170 fr. I, 171, 172, 175, 176 y demás relativos de la Ley de Amparo, vengo en nombre de mi representado a promover demanda de **AMPARO DIRECTO** en contra de la Sentencia de fecha 10 de enero del 2019, publicada mediante Boletín Judicial número "175" de fecha 11 de octubre y surtiendo sus efectos el 14 de octubre del 2019, mediante la cual se revoca la Sentencia Definitiva de fecha 26 de marzo del 2019, dictada por el Juez natural, que resulta a todas luces violatoria de los Derechos Fundamentales consagrados a favor de mi mandante, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos Tratados Internacionales de los que México es parte, a cuyo efecto y cumpliendo con lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Amparo, proporciono a Ustedes los siguientes datos:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO:

[REDACTED], con domicilio en Avenida [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO

[REDACTED], con domicilio en la calle de [REDACTED],
[REDACTED]

III.- AUTORIDAD RESPONSABLE

LOS C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEXTA SALA CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio conocido.

IV.- ACTO RECLAMADO:

La Sentencia de fecha 10 de octubre de 2019, publicada mediante Boletín Judicial número " [REDACTED] " de fecha 11 de octubre y surtiendo sus efectos el 14 de octubre del 2019, mediante la cual se revoca la Sentencia Definitiva de fecha 26 de marzo del 2019, dictada por el Juez natural

VII.- PRECEPTOS QUE CONTIENEN DERECHOS HUMANOS VIOLADOS:

Los artículos 1, 6, 7, 14, 16, 22 y 133 Constitucionales, los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), los artículos 3, 5, 14 y demás relativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos IV y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

CONCEPTOS DE VIOLACION

PRIMERO.- La sentencia señalada como acto reclamado, viola los derechos fundamentales consagrados a favor de mi mandante en los artículos 1, 6, 7, 14, 16 y 133 Constitucionales, en los artículos 1, 8, 9, 13, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en los artículos 3, 5, 14, 19, 26 y demás relativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los artículos IV y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por violación a los artículos 1, 2, 22, segundo transitorio y demás relativos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal (en lo sucesivo "Ley Especial de la Materia"), del propio artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) a

B+A

contrario-sensu, de los artículos 81, 402, 486, 570, 571 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que la hoy Sala responsable elabora una sentencia notoriamente extensa, pretendiendo con lo anterior "cumplir" con la obligación que tiene como autoridad judicial de fundar y motivar la misma, sin embargo por mas casuística y extensa que ésta sea, si no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, si la misma no fue dictada conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, si no fue dictada conforme a la letra de la ley, y solo a falta de ésta la funda en los principios generales del derecho, resulta innegable que la misma emerge como una resolución a todas luces ilegal.

En efecto, la determinación de la Sala responsable al dictar la sentencia señalada como acto reclamado, más que una resolución que resuelve un conflicto entre 2 personas, parece un extenso y agotador ejercicio por parte de la hoy responsable, en tratar de encontrar un camino aparentemente legal, pretendiendo "fundar" y "motivar" una sentencia con "interpretaciones" desafortunadas de la ley, con el único fin de revocar una sentencia apegada a derecho dictada en primera instancia, en una litis clara que no dejaba lugar a interpretaciones, si se toma en cuenta claro está lo preceptuado en la Constitución, en la legislación especial de la materia, en los tratados internacionales y en las tesis y resoluciones que sobre la materia la propia Suprema Corte de Justicia se ha venido pronunciando desde hace más de 10 años.

La Sala responsable se desvincula de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el **análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis**, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, **apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla** y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que

06
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

De lo anterior resulta claro que la Sala responsable no solo debió fundar y motivar la sentencia señalada como acto reclamado, sino que dicha "motivación" y "fundamentación" debió ser acorde con las leyes aplicables y vigentes, situación que evidentemente no sucedió con el hoy acto reclamado, ya que no obstante los esfuerzos de la responsable por tratar de cubrir los requisitos de fundamentación y motivación, la sentencia que se combate tiene la base de preceptos legales por decir lo menos erróneos, lo cual deriva en su ilegalidad, ya que en términos de ley lo esencial es el fondo y no la apariencia.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la siguiente Jurisprudencia por Contradicción de Tesis dictada por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, y que a la letra dice:

Novena Época

Registro: 176546

Primera Sala

Jurisprudencia

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXII, Diciembre de 2005

Materia(s): (Común)

Tesis: 1a./J. 139/2005

Pag: 162

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.

Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del

TRIBUNAL
PRIMERA SALA
CUITO

BH-A

07

juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

TRIBUNAL
PRIMER CIRCUITO
QUITO

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.
(énfasis añadido)

La Sala responsable va más allá de sus facultades legales al momento de dictar la sentencia señalada como acto reclamado, al tergiversar preceptos legales para tratarlos de ajustar de manera forzada al hecho que dio origen al juicio natural, no obstante que la ley es clara al señalar la tramitación y derecho aplicables a los asuntos de daño moral que deriven de supuestos abusos a la libertad de prensa y de expresión. En ese sentido, el Maestro Ignacio Burgoa mencionaba lo siguiente: "Sólo cuando no hay norma jurídica positiva para resolver un conflicto, el juez debe acudir a los principios generales del Derecho, según lo manda nuestro

B+A

03
artículo 14 constitucional. De ahí que el juez debe juzgar "secundum leges", es decir, conforme a las leyes, no a éstas según su idea, sentimiento o concepto de justicia." ¹

La Sala responsable como cualquier Juez, debe ser en términos de los artículos 1 y 133 de nuestra Carta Magna, guardián de la misma; la Sala responsable tenía la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de mi mandante, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como de respetar y aplicar lo preceptuado en la misma, en las leyes que de ella emanen, y en los tratados internacionales, y no obstante lo anterior la misma no lo hizo al dictar la penosa e ilegal sentencia que aquí se impugna.

En efecto, la sala responsable de manera por demás irresponsable y tendenciosa, pretende insistir en tratar de forzar la aplicación de 2 ordenamientos distintos para sancionar un solo hecho como generador de daño moral por supuestos abusos al derecho de libertad de información y expresión, al mencionar en las fojas 67 y 68 lo siguiente:

RECIBIDO
FUNDACION
ITO
"Como consecuencia de ello, y toda vez que como se analizó en líneas anteriores, esta Alzada estima que pueden concurrir en la reparación del daño moral, no sólo las sanciones establecidas en la ley especial, sino también las marcadas en el Código Civil, por ser de distinta naturaleza unas de otras, y que en caso de imponerse no implicarían una doble condena como así lo determinó la autoridad federal en la tesis que se repite es del tenor siguiente:

DAÑO MORAL. CONCURRENCIA DE ORDENAMIENTOS POR ABUSO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El daño moral se indemniza prescindiendo de que la lesión repercuta en el patrimonio material del dañado, y se regula en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, en el que se precisan los bienes jurídicos tutelados (sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos y la consideración que de una persona tienen los demás). No obstante, cuando la afectación a algunos de esos bienes (vida privada, honor e imagen) se genere del abuso de los derechos a la información y de la libertad de expresión, es aplicable la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, según su artículo 1. Tal distinción importa en asuntos donde se involucran, en la misma demanda, como bienes lesionados, los previstos en una y otra legislación (por ejemplo, honor, imagen y sentimientos con proyección a aspectos físicos), y se hace derivar el daño de un mismo comportamiento o hecho

009

generador (abuso de los derechos a la información y libre expresión), en los que resulta necesaria, sin que nada obste para ello, la aplicación tanto del código como de la ley mencionados, pues esa misma conducta es susceptible de afectar a los derechos tutelados en ambas normativas, y es diferente el contenido de la reparación del daño, que en la ley especial comprende publicar o divulgar la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y opiniones que constituyeron la afectación (artículo 39), y sólo en caso de que no se pudiese resarcir así el daño, se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, con un tope máximo del monto por indemnización (artículo 41). En cambio, en el código la reparación consiste, a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando sea posible, o en el pago de daños y perjuicios (artículo 1915, primer párrafo), y el cuántum de la indemnización -rectius, compensación, por tratarse de daño moral- se determina tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, y las demás circunstancias del caso (artículo 1916, último párrafo), es decir, hay una variación de factores a ponderar, y no se contiene una taxativa predeterminada del monto.

Época: Novena Época.- Registro: 162896.- Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C.311 C. Página: 2281

Más aun cuando no se soslaya el hecho de que con esta Ley no se observa que el legislador haya pretendido derogar el contenido estipulado en el Código Civil en tratándose de la tipificación del daño moral, porque ello no se desprende de los transitorios del nuevo ordenamiento especializado en otros temas en el derecho al honor."

Como sus señorías podrán observar, la sala responsable miente, ya que basta leer los artículos 1 y segundo transitorio de la Ley Especial de la Materia, para observar claramente que el legislador, por disposición expresa, determinó que en tratándose de asuntos de daño moral que deriven de supuestos abusos de libertad de información y expresión, será aplicable dicha ley, y que la parte relativa que contemplaba el daño moral en esos aspectos (abusos de libertad de información y expresión) en el artículo 1916 del Código Civil se derogaba, al igual que todo el artículo 1916 Bis.

Aunado a lo anterior, la tesis que inserta si bien pudiese ser un elemento orientador, la misma no tiene categoría de absoluta ni obligatoria, toda vez que la misma es aislada y no puede ir más allá que lo preceptuado por

nuestro Máximo Tribunal en los últimos años como por ejemplo el criterio emitido por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal de nombre "DAÑO MORAL. MARCO NORMATIVO APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL", publicada en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CLXX/2012 (10a.), Página: 479 a que hago referencia más adelante, por la propia Ley, por diversos tratados internacionales, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo completamente desestimado lo anterior por dicha sala, con el único afán de encontrar un camino mediante el cual el hoy quejoso pudiese ser juzgado a la luz de dos ordenamientos, buscando una sanción descabellada como la que se pretende imponer en la resolución que se combate.

Retomando lo arriba mencionado, relativo a la obligación que tiene cualquier juzgador sobre el control constitucional de las leyes (artículos 1 y 133 constitucionales), continúa diciendo el Maestro Burgoa lo siguiente: "Es evidente que esa trascendental actividad de control debe desempeñarse por verdaderos y auténticos funcionarios judiciales que no solamente deriven su carácter de un simple nombramiento formal, sino que merezcan este alto honor al conjuntar diversas cualidades que justifiquen su designación. En otras palabras, los jueces venales y los de consigna manchan su investidura al punto de ser indignos de ostentarla. Su conducta pública, prostituida por el soborno o corrompida por presión de los llamados "jefes de Estado" y de sus subordinados en el orden gubernativo, significa un atentado a la Constitución y a la ley, aunque se disfrace con la falsa etiqueta de una "resolución judicial"; y ese atentado es traición contra el pueblo, al que jamás debe despojarse de su fe en la justicia, cuya devaluación, por sus negativas y trascendentales consecuencias, es mucho más deplorable que la monetaria".²

La hoy Sala responsable insisto, pretende juzgar la Litis materia del juicio principal a la luz de 2 leyes por extraño que parezca, una ley anterior derogada y una posterior (artículo 1916 y 1916 Bis del Código Civil y artículo 1 y segundo transitorio de la Ley Especial de la Materia) en la regulación que realizan sobre la misma materia (daño moral), que gozan de la misma jerarquía normativa, expedidas por la misma autoridad legislativa (Asamblea Legislativa del Distrito Federal) y con el mismo ámbito espacial de vigencia, sin embargo no existe conflicto entre ellas, ya que aun cuando no hubiese disposición derogatoria (que en el presenta caso SI LA HAY tal como se observa en el artículo 1 de la Ley Especial de la Materia"), opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles.

² Ibidem, pág. 73.

Del análisis gramatical de los artículos mencionados (1916 y 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal y 1 y segundo transitorio de la Ley Especial de la Materia) se aprecia que el 1916 señala lo que es el Daño Moral, como se regula y la discrecionalidad del Juez para determinar la indemnización cuando se cause, el 1916 Bis se encuentra derogado, el artículo 1 de la Ley Especial de la Materia claramente menciona que dicha ley tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, que tratándose de daño al patrimonio moral **diverso al provocado por abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión**, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal; y el artículo segundo transitorio de dicha ley menciona claramente que se deroga el último párrafo del artículo 1916 y el artículo 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal, donde anteriormente se regulaba el daño moral provocado por abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, por lo que si la citada ley fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2006, se abroga la parte del artículo 1916 que regulaba el daño moral por abusos a la libertad de información y expresión, y se abroga el artículo 1916 Bis el mismo 19 de mayo de 2006, resulta lógico y claro señalar que no existe conflicto entre esas normas, máxime cuando existe disposición derogatoria expresa, operando con mayor razón el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 195858

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo VIII, Julio de 1998

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 32/98

Página: 5

CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR.

Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una posterior en la regulación que realizan sobre la misma materia, si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, cabe concluir que no existe conflicto entre ellas, porque aun

cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles.

Amparo en revisión 153/98. Servicios Inmobiliarios ICA, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 183/98. ICA Construcción Urbana, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 185/98. Grupo ICA, S.A. de C.V. y coags. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 195/98. ICA Ingeniería, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 199/98. Aviateca, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de julio en curso, aprobó, con el número 32/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de julio de mil novecientos noventa y ocho. (énfasis añadido)

Resulta un hecho notorio que desde el mes de mayo de 2006 en que fue publicada la Ley Especial de la Materia, existe disposición expresa tanto en su artículo 1 como en el segundo transitorio, de derogar la regulación del daño moral por supuestos abusos de la libertad de expresión que antes se contemplaba en el artículo 1916 del Código Civil y en el derogado 1916 Bis, para ser regulada a partir de esa fecha en dicha ley, tal como se observa en los artículos referidos que al efecto transcribo:

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general en el Distrito Federal, y se inspiran en la protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en los términos

del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión.

Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al regulado en el párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

SEGUNDO.- Se deroga el último párrafo del artículo 1916 y el artículo 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal.

(énfasis añadido)

En efecto, en la Ciudad de México desde el mes de mayo de 2006, se prevé la existencia de dos regímenes normativos distintos para regular la responsabilidad civil por afectaciones al patrimonio moral: 1) si la acción para reclamar la reparación del daño tiene como origen el ejercicio presuntamente abusivo de las libertades de expresión e información, el marco normativo aplicable será el previsto en la Ley Especial de la Materia; 2) si por el contrario, la acción tiene su origen en un hecho o acto jurídico distinto, entonces el marco normativo aplicable es el previsto en el artículo 1916 del Código Civil para la Ciudad de México. Así pues, el primero de los regímenes antes descritos ha derogado al previsto en el Código Civil en materia de afectaciones al patrimonio moral derivadas del ejercicio de las libertades de expresión e información, según se desprende de la redacción del artículo 1o. de la ley antes citada y del hecho consistente en que la ley representa una norma especial -y posterior- respecto del artículo 1916 del Código Civil, en tanto regula una especie del género identificado como responsabilidad por daño moral. Lo anterior se refuerza con la exposición de motivos de dicha ley, como elemento coadyuvante para reconstruir la voluntad del legislador, según la cual resultaba necesario substituir la figura del daño moral prevista en el Código Civil, con una ley especial de naturaleza civil que, por un lado, despenalizara los denominados delitos contra el honor y, por otro, permitiera un proceso ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de la personalidad lesionados, con motivo del ejercicio de los derechos a las libertades de expresión e información.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis dictada por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, y que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2001284

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1

Materia(s): Civil

Tesis: 1a. CLXX/2012 (10a.)

Página: 479

DAÑO MORAL. MARCO NORMATIVO APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL.

En el Distrito Federal se prevé la existencia de dos regímenes normativos distintos para regular la responsabilidad civil por afectaciones al patrimonio moral: si la acción para reclamar la reparación del daño tiene como origen el **ejercicio presuntamente abusivo de las libertades de expresión e información**, el marco normativo aplicable es el previsto en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal; si, por el contrario, la acción tiene su origen en un hecho o acto jurídico distinto, entonces el marco normativo aplicable es el previsto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Así pues, el primero de los regímenes antes descritos **ha derogado** al previsto en el Código Civil en materia de afectaciones al patrimonio moral derivadas del ejercicio de las libertades de expresión e información, según se desprende de la redacción del artículo 1o. de la ley antes citada y del hecho consistente en que la ley representa **una norma especial -y posterior- respecto del artículo 1916 del Código Civil**, en tanto regula una especie del género identificado como responsabilidad por daño moral. Lo anterior se refuerza con la exposición de motivos de la ley, como elemento coadyuvante para reconstruir la voluntad del legislador, según la cual resultaba necesario substituir la figura del daño moral prevista en el Código Civil con una ley especial de naturaleza civil que, por un lado, despenalice los denominados delitos contra el honor y, por otro, que permita un proceso ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de la personalidad lesionados con motivo del ejercicio de los derechos a las libertades de expresión e información.

Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de

15

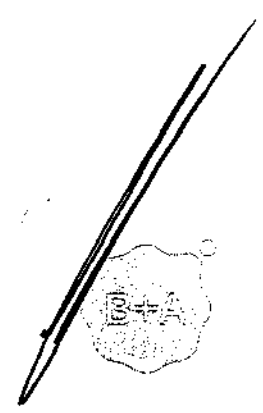
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

(énfasis añadido)

Si atendemos a la exposición de motivos de la Ley Especial de la Materia, como elemento coadyuvante para reconstruir la voluntad del legislador, encontramos en ésta que el legislador manifiesta de manera clara lo siguiente:

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos *(Recuérdese que la Convención forma parte del sistema jurídico mexicano en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.) tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. En el decreto por el cual se aprueba la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la CIDH (D.O.F. 24 de febrero de 1999), México reconoce como obligatoria de pleno derecho a competencia contenciosa de la CIDH, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención de conformidad con el artículo 62(1) de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la Corte, la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. Con respecto a la segunda dimensión social del derecho a la libertad de expresión es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. *(Coso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No 74, párr. 146; Caso "La última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr 64 y La Colegiación Obligatoria de



6

Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5 párr 30.)

Por otra parte, por razones técnicas se han creados dos figuras relacionadas, la libertad de expresión cuando se refiere únicamente a la transmisión de ideas, opiniones y conjeturas sobre cualquier materia y la libertad de información, cuando trata de la búsqueda, la investigación y la difusión de hechos y datos de interés público, razón por la cual por analogía la libertad de expresión está prevista en el artículo 6° constitucional y la libertad de información en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. *(Cfr Ernesto Villanueva. Derecho mexicano de la información. México Oxford University Press 2000)

De la misma manera, la Corte ha hecho referencia a su Opinión Consultiva OC-5/85, a la Corte Europea de Derechos Humanos a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas *(Aprobaron el 11 de septiembre de 2001 la carta Democrática Interamericana.) quienes se han pronunciado en establecer la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión.

Existe una coincidencia en los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos y en el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.

Se ha reconocido por la Corte que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas

informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan.

En este sentido, la Corte ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca. *(Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 1, párr. 150)

Con todo, es importante destacar que el derecho a las libertades de expresión e información no son un derecho absoluto, sino que pueden ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convención Americana, en su artículo 132, prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o a protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.

Respecto de estos requisitos la Corte señaló que: la "necesidad" y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las

restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo *(Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas, supra nota 1, párr. 46; ver también Eur. Court H. R. Case of The SundayTimes v. United Kingdom, Case of The Sunda y Times v United Kingdom Judgment of 29 March, 1979, Series A no. 30; y Eur. Court H. R., Case of Barthold v Germany Judgement of 25 March, 1985, Series A no 90. para. 59)

A su vez, la Corte Europea de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que 'necesarias', sin ser sinónimo de 'indispensables', implica la 'existencia de una 'necesidad social imperiosa' y que para que una restricción sea 'necesaria' no es suficiente demostrar que sea 'útil', 'razonable' u 'oportuna' *(Cfr. La Colegiación obligatoria de periodistas, supra nota 85, párr. 46; Eur Court H. R., Case of The Sunday Times, supra nota 5, para. 59.) Este concepto de 'necesidad social imperiosa' fue hecho suyo por la Corte en su Opinión Consultiva OC-5/85.

De este modo, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En México, cuando entra en colisión el derecho a las libertades de expresión e información con otros bienes jurídicos protegidos como el derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen, se ha buscado resolver de manera paralela por la vía penal y por la vía civil. Es importante señalar que la vía civil debe ser la única vía legítima para resolver este conflicto de derechos.³

³ ASAMBLEA Legislativa del Distrito Federal, *Exposición de Motivos de la Ley De Responsabilidad Civil Para La Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal*, Diario de los Debates, México, 29 de septiembre de 2005, págs.27, 28, 29.

Continúa la exposición de motivos, detallando la importancia de despenalizar los actos que deriven de supuestos abusos de libertad de expresión en el ámbito penal, so pena de crear censura previa y un sistema autoritario, de allí la necesidad de sancionar en una ley especial éstos abusos en la ley que se propone y que dichos actos no sean delitos, y finalmente concluye de manera clara por qué se reforma el artículo 1916 del Código Civil y se deroga el 1916 Bis del mismo ordenamiento, para regular los actos generadores de daño moral por abusos a la libertad de información y de expresión, señalando lo siguiente:

Esta forma de enfrentar la ilicitud parece especialmente adecuada en el supuesto de (algunas o todas las) afectaciones al honor, la buena fama, el prestigio de los particulares. Esto así, porque a través de la vía civil se obtienen los resultados que se querría derivar de la vía penal, sin los riesgos y desventajas que ésta presenta. En efecto, la sentencia civil condenatoria constituye, de suyo, una declaración de ilicitud no menos enfática y eficaz que la condena penal: señala, bajo un título jurídico diferente, lo mismo que se espera de ésta, a saber, que el demandado incurrió en un comportamiento injusto en agravio del demandante, a quien le asiste el derecho y la razón. De esta suerte, la sentencia entraña, por sí misma, una reparación consecuente con la necesidad de satisfacer el honor de quien reclama la tutela judicial.

En esta iniciativa se busca proteger el derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen a la luz de los estándares democráticos internacionales, tal y como se han expuesto, en los párrafos anteriores. Para tal efecto, esta iniciativa considera que las figuras de la difamación y de las calumnias previstos como tipos penales en el Código Penal vigente en el Distrito Federal y la figura del daño moral incluida en el Código Civil vigente deben ser sustituidas por una ley especial de naturaleza civil que, por un lado, despenalice los denominados delitos contra el honor y, por otro, que permita un proceso ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de la personalidad lesionados con motivo del ejercicio del derecho a las libertades de expresión e información. (énfasis añadido)

Los contenidos de la ley se integra con cinco Títulos: Primero.- Disposiciones Comunes,

Segundo.- Vida Privada, Honor y Propia Imagen,
Tercera.- Afectación al Patrimonio Moral,
Cuarto.- Medios de Defensa del Derecho a la Vida Privada, al Honor y la Propia Imagen, Quinta.- Responsabilidades y Sanciones con sus respectivos transitorios.

La presente ley es de la primera en integrar las propuestas de avanzada de los tratadistas europeos, norteamericanos y latinoamericanos que se han ocupado de la forma de regulación de esta materia. Por primera vez se integra el concepto de Malicia Efectiva y se modifican los alcances del Daño al Patrimonio Moral. Se integran las sanciones de defensa del Patrimonio Moral en el ámbito civil quitando esas medidas intimidatorias en materia Penal.⁴

Por todo lo anterior, resulta un hecho notorio que la legislación y la ratio-legis de la Ley Especial de la Materia es clara y no deja lugar a dudas sobre su literalidad, ni tampoco lugar a interpretación alguna, por lo que al no haber dictado la sentencia que se combate conforme a la letra de la ley como lo exige el artículo 14 Constitucional, la sala responsable viola la garantía del debido proceso consagrado a favor de mi mandante, y en consecuencia dicha sentencia resulta ilegal por donde se le vea, por lo que la misma nos deja más preguntas que respuestas, más dudas sobre la imparcialidad, legalidad y cumplimiento irrestricto de la ley, como alguno de los Magistrados de la Sala responsable pregona así conducirse en sus redes sociales, por lo que vale la pena citar de nuevo al Maestro Burgoa en la obra arriba citada, que menciona de manera textual lo siguiente: "El limitado arbitrio judicial, por no decir la arbitrariedad de los jueces, es sumamente peligroso y propende hacia la injusticia, como acontece generalmente en el mundo anglosajón, en que muchos casos impera la "ley del encaje" de que nos habla Miguel de Cervantes Saavedra, y que equivale al capricho, a la obstinación, a la tozudez, e incapacidad comprensiva y necesidad del juzgador. Más vale una ley injusta que un juez necio, ignorante y corrupto. Aquella puede suavizarse en su aplicación, en tanto que éste, por lo contrario, es impermeable a todo intento de convencimiento, pues se erige en una especie de "rey judicial absoluto", cuya testarudez convierte en ley: "Quod iudex Vult, legis habet vigorem." Ante esta actitud judicial salen sobrando todos los argumentos jurídicos que los abogados esgriman fundándose en los estudios que hayan emprendido".⁵

⁴ Ibidem, pág. 30

⁵ BURGOA, Op. Cit. pág. 77

21

SEGUNDO.- La sentencia señalada como acto reclamado, viola los derechos fundamentales consagrados a favor de mi mandante en los artículos 1, 6, 7, 14, 16 y 133 Constitucionales, en los artículos 1, 8, 9, 13, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en los artículos 3, 5, 14, 19, 26 y demás relativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los artículos IV y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por violación a los artículos 1, 2, 7, 14, 15, 25, 29, 30 a contrario sensu, 31, 33, 34, 36, 37 y demás relativos de la Ley Especial de la Materia, de los artículos 81, 278, 281, 286, 289, 296, 402 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que existe evidencia suficiente además de ser **un hecho notorio** de que el hoy tercero interesado fue electo como Presidente Municipal de Saltillo Coahuila y posteriormente Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, atendiendo a **su confesión expresa** en su escrito inicial de demanda donde menciona que es una figura pública en términos de la Fr. VII del artículo 7 de la Ley Especial de la Materia

Refuerza lo anterior, el contenido de la siguiente tesis jurisprudencial:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta Tomo: XVII, Febrero de 2003

Tesis: VI.3o.A.17 K

Página: 1065

Materia: Común

Tesis aislada.

HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.

Esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos. No es el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese conocimiento o esa posibilidad de

conocimiento no deriva de una relación individual con los hechos en el momento en que se producen o se han producido, sino sólo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se hace depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho, en el momento en que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en que el conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue que en ese caso los Jueces están imposibilitados para introducir a la litis, a manera de hecho notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el interesado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 308/2002. Materiales de Construcción Berleon, S.A. de C.V. 23 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVIII, página 2643, tesis de rubro: "HECHOS NOTORIOS, NATURALEZA DE LOS."

Por si fuese poco lo anterior, existen publicaciones en diversos medios como periódicos, revistas etc... cotejadas e incluidas en el Instrumento Notarial número [REDACTED] exhibido junto con el escrito de contestación de demanda como ANEXO "2" relativas a críticas y señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos hacia el hoy tercero interesado, de la aceptación expresa de éste en el sentido de ser figura pública al momento de desahogar la prueba confesional a su cargo en la audiencia de fecha 31 de agosto de 2017, al contestar que **SI** a las siguientes posiciones calificadas de legales por el juez natural:

1. Dirá si es cierto como lo es, que en el año 2002 usted fue electo como Presidente Municipal de Saltillo Coahuila para el periodo 2003-2005.
2. Dirá si es cierto como lo es, que en el año 2005 usted fue electo como Gobernador del Estado de Coahuila para el periodo 2003-2005.
3. Dirá si es cierto como lo es, que en el año 2011 usted fue presidente del Partido Revolucionario institucional (PRI).

4. Dirá si es cierto como lo es, que usted fue candidato a Diputado por el Estado de Coahuila en las pasadas elecciones, por el Partido Joven.

5. Dirá si es cierto como lo es, que aunado a los puestos mencionados en las posiciones anteriores, usted ha desempeñado otros cargos públicos.

6. Dirá si es cierto como lo es, que derivado de los cargos públicos que usted ha desempeñado, Usted es una figura pública.

13. Dirá si es cierto como lo es, que usted aparece en diversos medios de comunicación.

23. Dirá si es cierto como lo es, que usted está a favor de los derechos fundamentales de libertad de expresión y prensa consagradas en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Inserto fotografía fiel de la audiencia de desahogo de pruebas de fecha 31 de agosto de 2017 en la parte que interesa, donde el hoy tercero interesado contestó que SI a las posiciones arriba señaladas

declaración la ratifica y firma al margen y calce para constancia. SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE LA PARTE ACTORA EL

quien estando presente y protestado que fue de las penas en que incurrir los falsos declarantes protestó conducirse con verdad y quedar enterado de las penas que establece el Código Penal y por sus generales dio llamarse como ha quedado escrito. Ser de 51 años de Edad. Originario de Saltillo, Coahuila. 6° Mixteco

Estado Civil Casado. Ocupación Profesor y Empresario. Instrucción Doctor en Educación. Se procedió a extraer del Seguro del Juzgado el sobre cerrado que dice contiene pliego de posiciones para ser abierto por la parte actora y abierto fue por el C. Juez se extrajo el pliego correspondiente el cual arroja la cantidad de 27 POSICIONES de las cuales fueron calificadas de legales la 1, la 10, la 13, la 15 a la 17 y 23 por estas debidamente formuladas conforme a la Ley de la materia se designa la marcada con el número la 12, la 14, la 15 a la 20, 25 y 26 POR INCIDIOSAS la 21 y 27 POR NO SER HECHO PROPIO QUE INCIDIOSA la 22 POR NO SER HECHO PROPIO la 24 POR SER AFUERA DE LÍNEA y se le previene para el caso de negarse a contestar se le tendrá por contestado en sentido negativo y las posiciones que se le formularon contestó A LA 1. Que si es cierto. A LA 2. Que si es cierto formularon contestó A LA 3. Que si es cierto. A LA 4. Que si es cierto. A LA 5. Que si es cierto. A LA 6. Que si es cierto. A LA 7. Que si es cierto. A LA 8. Que si es cierto. A LA 9. Que si es cierto. A LA 10. Que si es cierto. A LA 11. Que si es cierto. A LA 12. Que si es cierto. A LA 13. Que si es cierto. A LA 14. Que si es cierto. A LA 15. Que si es cierto. A LA 16. Que si es cierto. A LA 17. Que si es cierto. A LA 18. Que si es cierto. A LA 19. Que si es cierto. A LA 20. Que si es cierto. A LA 21. Que si es cierto. A LA 22. Que si es cierto. A LA 23. Que si es cierto. A LA 24. Que si es cierto. A LA 25. Que si es cierto. A LA 26. Que si es cierto. A LA 27. Que si es cierto.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ASO DEL CENTRO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO SEXTO DE LA CIVIL

cargos públicos en el año del dos mil once y en el año del dos mil diecisiete mi registrado en la lista plurinominal. A LA 13. Que si es cierto. A LA 15. Que no es cierto y aclara que el interpuesto denuncias, e enviado cartas aclaratorias y en algunos casos los periodistas que me han señalado han buscado mi punto de vista. A LA 16. Que no es cierto y aclara que no he consentido las acusaciones, afirmaciones, calumnias por supuesto no las he consentido lo que si he consentido son entrevistas que me han solicitado. A LA 17. Que no es cierto y aclara que no se a que fama se refiere como académico, doctor en investigación, como político, no se a que se refiere la pregunta es tan amplia que tendría desde mi punto de vista que se refiere. A LA 23. Que si es cierto y aclara que estoy totalmente a favor de la libertad de expresión de prensa, pero estoy en contra de la difamación y calumnia aclarando que de las cuatro maestras que he cursado una de ellas es sobre la comunicación y periodismo. EN USO DE LA PALABRA LA

B=A

En las posiciones verbales Tercera y Cuarta, el tercero interesado contestó que SI había recibido críticas a su desempeño como gobernador de Coahuila ANTES y DESPUES de la nota que originó la demanda del juicio natural, por lo que dicho tercero interesado claramente resulta una figura pública conforme a los parámetros contenidos en la "Relatoría Especial para la Libertad de Expresión", incluida en el Informe Anual de 1999, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo CIDH)⁶, concretamente en lo que denominó sistema dual de protección, donde los límites de crítica son más amplios si esta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna. Lo es así ya que en un sistema inspirado en valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.

Pues bien el hoy tercero interesado es una figura pública, se desempeñó como funcionario público, y en consecuencia como tal, éste debe demostrar un mayor grado de tolerancia frente al escrutinio público de sus actividades. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan sus actividades o acciones.⁷ Esta aclaración es esencial en el sentido que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante toda su vida, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública, tal como se trata del tercero interesado [REDACTED], quien se encontraba al momento de publicarse la nota de la que tanto se duele realizada por mi mandante, inmerso en un escándalo de corrupción ante la opinión pública nacional e internacional, respecto de su actuar como Gobernador del Estado de Coahuila, siendo difundidas varias notas del tema en diversos medios de comunicación como prensa, revistas, radio, televisión y otros, tanto nacionales como extranjeros, noticias que fueron publicadas y difundidas varios meses antes de las publicaciones materia del juicio natural y que al día de hoy siguen saliendo, situación que debió analizar con más profundidad y detalle la sala responsable.

La Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, se ha pronunciado sobre las condiciones que deben satisfacerse para imponer responsabilidad por invasiones al honor de funcionarios u otras personas con responsabilidades públicas,

⁶ Ver CIDH, *Informe Anual*, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II.B, apartado 1, 1999.
⁷ Corte IDH, *Caso Herrera Ulloa*, párr. 129, y *Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C, No. 177, párrafo 86.

estableciendo criterios muy estrictos que evidentemente la sala responsable no tomó en consideración al momento de emitir la sentencia que se combate, mismos que se observan en la siguiente Tesis:

Época: Novena Época

Registro: 165763

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCXXI/2009

Página: 283

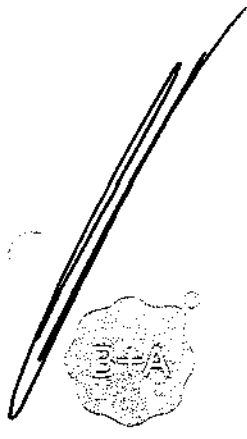
**LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN.
LA RESPONSABILIDAD POR INVASIONES AL HONOR DE
FUNCIONARIOS U OTRAS PERSONAS CON
RESPONSABILIDADES PÚBLICAS SÓLO PUEDE DARSE BAJO
CIERTAS CONDICIONES, MÁS ESTRUCTAS QUE LAS QUE SE
APLICAN EN EL CASO DE EXPRESIONES O INFORMACIONES
REFERIDAS A CIUDADANOS PARTICULARES.**

Para que la exigencia de responsabilidad ulterior por la emisión de expresiones invasoras del honor de funcionarios públicos u otras personas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas constituya una reacción jurídica necesaria, idónea y proporcional, deben satisfacerse **condiciones más estrictas** que las que se aplican en caso de invasiones al derecho al honor de ciudadanos particulares. Entre ellas se cuentan las siguientes: a) cobertura legal y redacción clara. Las causas por las que pueda exigirse responsabilidad deben constar en una ley, en sentido formal y material. Las leyes que establecen limitaciones a las libertades de expresarse e informar deben estar redactadas en términos claros y precisos para garantizar la seguridad jurídica, proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad de las autoridades y evitar la disuasión expresiva y la autocensura, pues las fórmulas vagas o ambiguas no permiten a los ciudadanos anticipar las consecuencias de sus actos, otorgan una discrecionalidad excesiva a las autoridades y tienen un clarísimo efecto disuasivo en el plano del ejercicio ordinario de las libertades. Cuando las normas de responsabilidad son de naturaleza penal y permiten privar a los individuos de bienes y derechos centrales -incluida, en algunas ocasiones, su libertad- las exigencias anteriores cobran todavía más importancia; b) intención específica o negligencia patente. Las expresiones

6

e informaciones deben analizarse bajo el estándar de la "malicia", esto es, bajo un estándar que exige que la expresión que alegadamente causa un daño a la reputación de un servidor público se haya emitido con la intención de causar ese daño, con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia en el control de su veracidad; de otro modo las personas podrían abrigar el temor de poder incurrir de modo inadvertido en responsabilidad por la emisión de expresiones o informaciones, lo cual podría llevarlos, directa o indirectamente, a restringir abruptamente el ejercicio de sus derechos a expresarse o informar; c) materialidad y acreditación del daño. Las reglas de imputación de responsabilidad posterior deben requerir que quien alega que cierta expresión o información causa daño en su honorabilidad tenga la carga de probar que el daño es real, que efectivamente se produjo; d) doble juego de la exceptio veritatis. Quien se expresa debe siempre poder bloquear una imputación de responsabilidad ulterior probando que los hechos a los que se refiere son ciertos y, complementariamente, **no puede ser obligado a probar, como condición sine qua non para evitar esa responsabilidad, que los hechos sobre los cuales se expresó son ciertos**; e) gradación de medios de exigencia de responsabilidad. El ordenamiento jurídico no puede contemplar una vía única de exigencia de responsabilidad, porque el requisito de que las afectaciones de derechos sean necesarias, adecuadas y proporcionales demanda la existencia de medidas leves para reaccionar a afectaciones leves y medidas más graves para casos más graves. Además, hay que tener presente que al lado de exigencia de responsabilidad civil y penal existe otra vía, ahora expresamente mencionada en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el derecho de réplica que, por su menor impacto en términos de afectación de derechos, está llamado a tener un lugar muy destacado en el diseño del mapa de consecuencias jurídicas derivables del ejercicio de la libertad de expresión; f) minimización de las restricciones indirectas. Al interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales y legales en la materia no debe olvidarse que la plena garantía de las libertades consagradas en los artículos 6o. y 7o. de la Carta Magna no sólo exige evitar restricciones injustificadas directas, sino también indirectas. La proscripción de restricciones indirectas tiene

U
A
J



muchas derivaciones posibles, pero entre ellas está sin duda la que obliga a prestar especial atención a las reglas de distribución de responsabilidad al interior del universo de sujetos implicados en la cadena de difusión de noticias y opiniones. Se trata, en otras palabras, de **no generar dinámicas de distribución de responsabilidad entre ciudadanos, periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación** que lleven a unos a hallar interés en el silenciamiento o la restricción expresiva de los demás.

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.

(énfasis añadido)

Como se menciona, existen diversas publicaciones donde se critica arduamente la labor del hoy tercero interesado como gobernador del Estado de Coahuila, sin embargo existe el Informe de la Deuda Pública del estado de Coahuila del año 2011 rendido por la "Auditoria Superior del Estado de Coahuila", que en sus conclusiones, determinó diversas anomalías y malos manejos, destacando que:

a) En el periodo 2006-2011 (periodo en que el hoy tercero interesado gobernó el estado de Coahuila), la deuda de dicho Estado pasó de 420.0 (Cuatrocientos punto cero) Millones de Pesos a 36,509.6 (Treinta y Seis Mil Quinientos Nueve punto Seis) Millones de Pesos, es decir un incremento real de 6,679.0% en este periodo, y una tasa de crecimiento promedio real anual de 132.4%, representando un crecimiento de 86.9 veces en ese periodo.

b) Que la deuda del estado de Coahuila al cierre del año 2011, muestra que el 97.9% (noventa y siete punto nueve por ciento) es deuda del gobierno estatal, 1.7% (uno punto siete por ciento) de los municipios, 0.2% (cero punto dos por ciento) de los organismos estatales y 0.2% (cero punto dos por ciento) de los organismos municipales.

c) Que las empresas calificadoras de la deuda subnacional y particularmente las encargadas de asignársela al estado de Coahuila, como Fitch Ratings, degradaron en 8 posiciones la calificación de la entidad entre 2006 y 2011, al pasar de AA+ a BBB-, situación que se agravó al primer trimestre de 2012, al disminuir su calificación un escalón más, a BB+, con lo cual la entidad pasó de tener una alta calidad crediticia de AA+ en 2006, a una con carácter especulativo (BB+), lo que indica, de acuerdo a las agencias calificadoras, que el pago

B+HA

de las obligaciones financieras de la entidad presenta cierto grado de incertidumbre.

Lo anterior, se observa en las Conclusiones que dio la "Auditoria Superior del Estado de Coahuila", del "Informe Especial sobre el estado que guardan las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Estado de Coahuila", para atender la solicitud realizada por la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal mediante oficio No. CP2R3A.-485 de fecha 30 de mayo de 2012, mismas que pueden ser consultadas en Internet en la siguiente dirección:

<http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2015/10/Informe ASF.pdf>

Estas conclusiones, y diversas publicaciones de notas y artículos que señalan la corrupción, malos manejos, violación de derechos humanos e impunidad del tercero interesado, anteriores al 20 de enero del 2016, fecha de publicación del artículo denominado "Hay que esperar" del que tanto se duele el tercero interesado, también aparecen en el Instrumento Notarial exhibido como ANEXO "1" junto con el escrito de contestación de demanda, y no obstante lo anterior, la sala responsable omite tomarlos en cuenta en su dimensión adecuada, ya que no basta mencionarlos para tratar de cubrir el principio de congruencia, sino que debieron analizarse en el sentido que marca la propia Ley Especial de la materia, la Constitución y demás ordenamientos legales multicitados.

En ese sentido, el artículo "Habrá que esperar" que da origen a la demanda del juicio natural, no se advierte que contenga insinuaciones insidiosas ni imputaciones de hechos o actos que no se expresen con apego a la veracidad, ya que no debe pasar por alto que al momento de publicarse el mismo, el hoy tercero interesado se encontraba detenido por la Audiencia Nacional Española, en Madrid, por lo que dicha circunstancia aunada al contenido de la información contenida en diversos medios de comunicación, que forman parte desde hace mucho tiempo del dominio público, el hoy quejoso tuvo al menos una presunción fundada sobre la veracidad de dichos hechos. La sala responsable por el contrario, señala que mi mandante se precipitó al difundir el artículo multicitado, debiendo esperar a que se sancionara o no al tercero interesado, pues la detención estaba a título de probabilidad, que no se respetó por parte del quejoso la presunción de inocencia del tercero interesado, que por la preparación académica del quejoso ésta debió haber esperado a que se resolviera el asunto etcétera, razonamientos todos ellos equivocados, dado lo que la propia Corte ha resuelto sobre el doble juego de la "Exceptio Veritatis", donde se determina que tanto la información que se publique incluso aquella que se denomina "errónea", "no oportuna" o

20

"incompleta" al igual que los juicios de valor, se estima innecesario exigir la comprobación de hechos concretos vertidos por el informador, porque sobre ellos pueden existir interpretaciones distintas e implicar su censura casi automática, lo que anularía prácticamente todo el debate político y el intercambio de ideas como método indudable para la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de sistemas democráticos, tal como se observa en los siguientes criterios jurisprudenciales, dictados por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal y por el Séptimo tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito:

Época: Décima Época

Registro: 2001677

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1

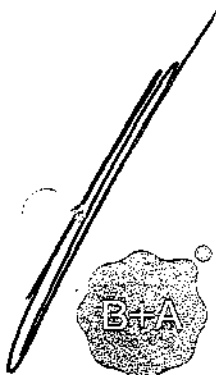
Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCXXIII/2012 (10a.)

Página: 512

LIBERTAD DE INFORMACIÓN. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR SU EJERCICIO.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la información debe cumplir con dos requisitos internos: la veracidad y la imparcialidad, cuya comprensión debe actualizarse y aplicarse de conformidad con la doctrina que la Primera Sala ha ido desarrollando en sus sentencias recientes. La evolución de la doctrina de este alto tribunal respecto a la libertad de información nos permite atender, en casos de interés público y sobre figuras públicas, a la principal consecuencia del sistema de protección dual, es decir, al estándar de la real malicia. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles en supuestos muy específicos: (i) respecto a servidores públicos, cuando se difunda información falsa -a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación sobre si era o no falsa- y con la clara intención de dañar; y (ii) por lo que hace a personas privadas con proyección pública, cuando se difunda información a sabiendas de su falsedad. Es relevante matizar que si la noticia inexacta involucra a figuras particulares en cuestiones también particulares, no tiene aplicación la doctrina de la "real malicia", funcionando en su reemplazo los principios generales sobre responsabilidad civil. Lo mismo ocurre si se trata de personas con proyección pública pero en aspectos concernientes a su vida privada que



30

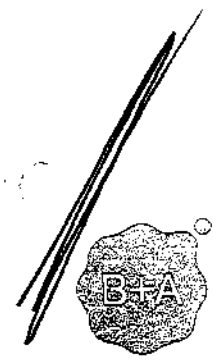
carezcan de relación con el interés público. En cuanto al alcance de esta doctrina en materia probatoria para aquellos casos en que se analice la eventual responsabilidad de una persona por un supuesto exceso en el ejercicio de su libertad de información, se reitera la doctrina de esta Primera Sala sobre el doble juego de la exceptio veritatis, en cuanto a que su acreditación **impide cualquier intento de fincar responsabilidad al autor de la nota periodística, así como en cuanto a que tampoco se requiere dicha acreditación como requisito sine qua non para evitar una condena.**

Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
(énfasis añadido)

Época: Décima Época
Registro: 2002640
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: I.7o.C.4 K (10a.)
Página: 2198

RESPONSABILIDAD POR EXPRESIONES QUE ATENTAN CONTRA EL HONOR DE SERVIDORES PÚBLICOS Y SIMILARES. DEMOSTRACIÓN DE SU CERTEZA EN EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

En la tesis aislada de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RESPONSABILIDAD POR INVASIONES AL HONOR DE FUNCIONARIOS U OTRAS PERSONAS CON RESPONSABILIDADES PÚBLICAS SÓLO PUEDE DARSE BAJO CIERTAS CONDICIONES, MÁS ESTRICTAS QUE LAS QUE SE APLICAN EN EL CASO DE EXPRESIONES O INFORMACIONES REFERIDAS A CIUDADANOS PARTICULARES." (IUS 165763); la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que quien se expresa debe siempre poder bloquear una imputación de responsabilidad ulterior probando que los hechos a los que se refiere son ciertos, pero que de manera complementaria **no podía ser obligado a demostrar su certeza para evitar la responsabilidad cuando se le demanda, lo cual se denominó doble juego de la exceptio veritatis.** De



lo anterior deriva incertidumbre en saber cuándo se debe obligar al emisor de información acreditar la veracidad de ésta y cuando no, precisamente por tratarse de un doble juego. Por ende, en ejercicio del control de convencionalidad previsto en los artículos 10. y 133 del Pacto Federal, se debe atender a lo dispuesto en el precepto 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a su interpretación consignada en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría Especial constituida dentro de la Organización de Estados Americanos (aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000). Esto, pues de acuerdo al principio séptimo de dicha declaración se tiene que **la información abarca incluso aquella que se denomina "errónea", "no oportuna" o "incompleta"**. Por ende, al igual que los juicios de valor, se estima innecesario exigir la comprobación de hechos concretos vertidos por el informador, porque sobre ellos pueden existir interpretaciones distintas e implicar su censura casi automática, lo que anularía prácticamente todo el debate político y el intercambio de ideas como método indudable para la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de sistemas democráticos. Máxime que no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Consecuentemente, es indispensable tomar en consideración este criterio al aplicar el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 656/2012. Tomás Yarrington Ruvalcaba. 15 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: María Antonieta Castellanos Morales.

Nota: La tesis citada, aparece publicada con la clave o número de identificación 1a. CCXXI/2009 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 283.

Por lo anterior, resulta irrelevante que mi mandante fuese una persona preparada con altos conocimientos en derechos humanos o un simple periodista sin experiencia o estudios en la materia, además de que su actuar se realizó al amparo de lo que prescribe el Artículo 5 de la Ley de Imprenta (una de las leyes más antiguas y vigente en nuestro país), que establece claramente que no se considerará maliciosa una manifestación o expresión aunque sean ofensivos sus términos por su propia significación, en los casos de excepción que la ley establezca y cuando el acusado pruebe que los hechos imputados al quejoso son ciertos, o que tuvo motivos fundados para considerarlos verdaderos y que los publicó con fines honestos.

Al efecto, transcribo el artículo 5 de la Ley de Imprenta para su mejor y más rápida comprensión:

ARTICULO 5.- No se considera maliciosa una manifestación o expresión aunque sean ofensivos sus términos por su propia significación, en los casos de excepción que la ley establezca expresamente, y además, cuando el acusado pruebe que los hechos imputados al quejoso son ciertos, o que tuvo motivos fundados para considerarlos verdaderos y que los publicó con fines honestos.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó las bases para definir que regulación puede constituir una reacción jurídica necesaria, idónea y proporcional frente a expresiones invasoras del honor de funcionarios públicos u otras personas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas, por lo que la Primera Sala del máximo Tribunal, en el Amparo 28/2010 sostuvo que la principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina de la "real malicia" o "malicia efectiva", conforme a la cual la imposición de sanciones civiles derivada de la emisión de opiniones, ideas o juicios, corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe información falsa (en el caso del derecho a la información) o que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión), esto es, con la única intención de dañar, precisando que si la noticia inexacta involucra a figuras particulares en cuestiones particulares, no tiene aplicación dicha doctrina, situación que en el presente caso no se da, ya que el artículo publicado por el quejoso del cual se duele mi contrario, hace referencia a la corrupción y violación de derechos humanos cometidos por dicho tercero durante su mandato como gobernador del estado de Coahuila, por lo que en términos del Amparo referido, para acreditar la intención del suscrito en el artículo referido, se deberá atender a las pruebas idóneas, es decir a la información difundida y su contexto.

33

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que deriva del Amparo 28/2010, dictada recientemente por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, y que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2003303

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 38/2013 (10a.)

Página: 538

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.

Para el análisis de los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como

"real malicia" o "malicia efectiva", misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la información) o que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión). El estándar de "real malicia" requiere, para la existencia de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan sido expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes públicos e intromisiones leves contra personas privadas.

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien reservó su derecho a formular voto particular; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Amparo directo 25/2010. Eduardo Rey Huchim May. 28 de marzo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

Amparo directo 26/2010. Rubén Lara León. 28 de marzo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.



Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas también reservó su derecho a formular voto concurrente por lo que respecta al apartado XI. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Amparo directo 16/2012. Federico Humberto Ruiz Lomelí. 11 de julio de 2012. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Tesis de jurisprudencia 38/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de marzo de dos mil trece.

Como se observa, el discurso político está ampliamente protegido por nuestra legislación y por nuestro máximo Tribunal, ya que su libre difusión resulta especialmente relevante de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural de la democracia representativa, siendo de vital importancia la actividad de los periodistas como el quejoso y de la sociedad en general, a fin de fomentar la transparencia de las personas que ocupan cargos públicos y sus gestiones, por lo que la libertad de expresión en estos temas se encuentra ampliamente protegida, siendo solamente limitada por excepción, tal como se observa en las siguientes Tesis dictadas igualmente por la Primera Sala del máximo Tribunal:

Época: Décima Época

Registro: 2001370

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

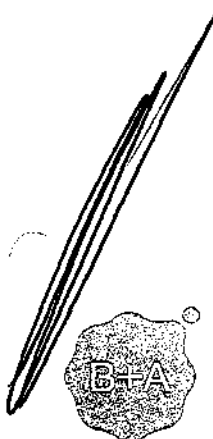
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CLXXIII/2012 (10a.)

Página: 489

LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO DE FIGURA PÚBLICA PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL.



De conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos involucrados en notas periodísticas pueden tener, en términos generales, dos naturalezas distintas: pueden ser personas o figuras públicas o personas privadas sin proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una persona está obligada o no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que están el resto de las personas privadas, así como a precisar el elemento a ser considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta impugnada. Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada la. XXIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.", el acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. En este sentido, existen, al menos, tres especies dentro del género "personas o personajes públicos" o "figuras públicas", siendo este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia comparadas. La primera especie es la de los servidores públicos. La segunda comprende a personas privadas que tengan proyección pública, situación que también resulta aplicable a las personas morales en el entendido de que su derecho al honor sólo incluye la vertiente objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. La proyección pública de una persona privada se debe, entre otros factores, a su incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia económica o relación social, así como a la relación con algún suceso importante para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación constituyen una tercera especie -ad hoc- de personas públicas, tal y como se desprende de la tesis aislada la. XXVIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU CONSIDERACIÓN COMO FIGURAS PÚBLICAS A EFECTOS DEL ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.", emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo

37

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Nota: Las tesis aisladas 1a. XXIII/2011 (10a.) y 1a. XXVIII/2011 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, páginas 2911 y 2914, respectivamente.

Época: Novena Época

Registro: 165759

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

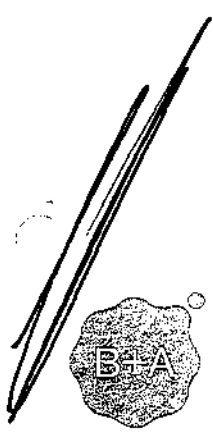
Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCXVII/2009

Página: 287

**LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN.
SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA
POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.**

El discurso político está más directamente relacionado que otros con la dimensión social y con las funciones institucionales de las libertades de expresión e información. Por tanto, proteger su libre difusión resulta especialmente relevante para que estas libertades desempeñen cabalmente sus funciones estratégicas de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural propio de la democracia representativa. Una opinión pública bien informada es un instrumento imprescindible para conocer y juzgar las ideas y acciones de los dirigentes políticos; el control ciudadano sobre las personas que ocupan o han ocupado en el pasado cargos públicos (servidores públicos, cargos electos, miembros de partidos políticos, diplomáticos, particulares que desempeñan funciones públicas o de interés público, etcétera) fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de todos los involucrados en la gestión de los asuntos públicos, lo cual justifica que exista un margen especialmente amplio de protección para la difusión de información y opiniones en el debate político o sobre asuntos de interés público. Como subraya el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos del año 2008, las personas con responsabilidades públicas tienen un umbral



30

distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio colectivo más exigente y porque su posición les da una gran capacidad de reaccionar a la información y las opiniones que se vierten sobre los mismos (Informe 2008, Capítulo III, párr. 39).

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.

En este sentido, resulta evidente que el tercero interesado por haberse desempeñado como Gobernador del estado de Coahuila, y atendiendo a la relevancia pública de la información difundida materia del presente juicio (actividad pública del mismo), el supuesto aplicable al presente caso encuadra claramente en el de "malicia efectiva", por lo que en términos de la Ley Especial de la Materia, concretamente en sus artículos 29, 29, 30 y 33, el derecho de libertad de expresión y derecho a la información no se encuentran restringidos, siendo evidente que el artículo multicitado, por el cúmulo de pruebas y circunstancias mencionados, no encuadra en los requisitos que pide la propia ley para que se de malicia efectiva o real malicia, que son:

- i) Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad
- ii) Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa o no
- iii) Que se hizo con el único propósito de dañar.

La columna multicitada de la cual se duele el tercero interesado, no reúne los elementos anteriores, pero además ahondando una vez más en el grado y nivel de tolerancia que debe revestir el derecho de libertad de expresión respecto al derecho al honor, la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal se ha pronunciado respecto de no poderse determinar cuándo se estaría en el marco de las expresiones y críticas correctas y decentes, donde el Estado no puede privilegiar un determinado criterio de decencia, estética o decoro, puesto que no existen parámetros uniformemente aceptados que los puedan delimitar, por lo que las mismas constituyen limitaciones demasiado vagas de libertad de expresión como para ser constitucionalmente admisibles, favoreciendo incluso en temas de interés público como el que da origen al juicio natural,

el debate desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos, o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, tal como sucedió con el artículo multicitado, de modo que no sólo sean protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes, siendo esto lo que demanda una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la siguiente Jurisprudencia dictada recientemente por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal:

Época: Décima Época
Registro: 2003304
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 32/2013 (10a.)
Página: 540

**LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR.
EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS
CONSTITUCIONALMENTE.**

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe una presunción general de cobertura constitucional de todo discurso expresivo. Cuando las ideas expresadas tienen por objeto exteriorizar un sentir positivo o favorable hacia una persona, resulta inconcuso que no habría una intromisión al derecho al honor de la persona sobre la cual se vierten las ideas u opiniones. Lo mismo puede decirse de aquellas ideas que, si bien críticas, juzguen a las personas mediante la utilización de términos cordiales, decorosos o simplemente bien recibidos por el destinatario. Lo anterior evidencia que no existe un conflicto interno o en abstracto entre los derechos a la libertad de expresión y al honor. Así, el **estándar de constitucionalidad de las opiniones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión es el de relevancia pública, el cual depende del interés general por la materia y por las personas que en ella intervienen**, cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado, pues en caso contrario ni siquiera existiría un conflicto entre derechos



fundamentales, al no observarse una intromisión al derecho al honor. Es necesario matizar que si la noticia inexacta involucra a figuras particulares en cuestiones particulares no tiene aplicación la doctrina de la "real malicia", funcionando en su reemplazo los principios generales sobre responsabilidad civil, lo cual opera de la misma forma cuando se trate de personas con proyección pública pero en aspectos concernientes a su vida privada. Ahora bien, la relación entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, como el honor, se complica cuando la primera se ejerce para criticar a una persona, de forma tal que ésta se sienta agraviada. La complejidad radica en que el Estado no puede privilegiar un determinado criterio de decencia, estética o decoro respecto a las expresiones que podrían ser bien recibidas, ya que no existen parámetros uniformemente aceptados que puedan delimitar el contenido de estas categorías, por lo cual constituyen limitaciones demasiado vagas de la libertad de expresión como para ser constitucionalmente admisibles. De hecho, el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien reservó su derecho a formular voto particular; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Amparo directo 25/2010. Eduardo Rey Huchim May. 28 de marzo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

44

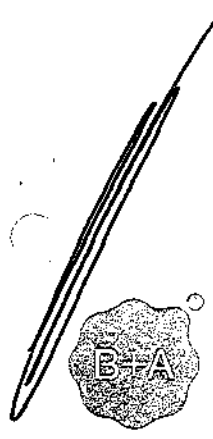
Amparo directo 26/2010. Rubén Lara León. 28 de marzo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas también reservó su derecho a formular voto concurrente por lo que respecta al apartado XI. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Amparo directo 16/2012. Federico Humberto Ruiz Lomelí. 11 de julio de 2012. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Tesis de jurisprudencia 32/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil trece. (énfasis añadido)

Continuando en este sentido, resulta esencial mencionar que el hoy quejoso en términos del artículo 1, 6 y 7 de nuestra Carta Magna, es titular de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, que conforman los pensamientos, ideas y opiniones, mismos que incluyen forzosamente apreciaciones, juicios de valor y la difusión de los hechos considerados noticias. Esta distinción adquiere gran relevancia al momento de determinar la legitimidad en el ejercicio de esos derechos, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza no se prestan a una demostración de exactitud, por lo que casi siempre el mensaje sujeto a escrutinio, consiste en una amalgama de ambos derechos, e incluso la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos. Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y sólo cuando sea imposible hacerlo, habrá de atenderse al elemento preponderante. Pues bien, el artículo "Hay que esperar" redactado por el quejoso, contiene tanto unos como otros, tanto elementos informativos como valorativos. Dicho artículo por sus características



periodísticas, es equiparable a lo que en la profesión periodística se denomina "columna", siendo éste un contenido integral que califica como lo ha hecho recientemente la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, como un lenguaje periodístico personal, un instrumento de comunicación que persigue la defensa de las ideas, la creación de un estado de opinión y la adopción de una postura determinada respecto a un hecho actual y relevante. Se caracteriza por el vínculo que se pretende formar entre el periodista y el lector, por lo que la "columna" responde a la necesidad de conocer al que escribe e indica la preferencia directa del lector por el contacto directo con el individuo. Sin embargo la Corte menciona, que en la "columna" es posible mezclar información y comentarios e inclinarse en la redacción por una u otros, así como emitir el juicio personal del periodista, de modo que combina tanto opiniones como hechos, aunque por su naturaleza suelen ser las opiniones lo predominante.

Por lo anterior, resulta claro que las expresiones contenidas en la columna "Hay que Esperar" redactada por el quejoso, fueron realizadas en cumplimiento a su actividad profesional de periodista, y al amparo de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y libertad de imprenta, consagrados en los artículos 1, 5, 6 y 7 de nuestra Constitución, y dichas expresiones por lo expuesto a lo largo del presente escrito, de ninguna manera pueden considerarse como ofensas al honor del tercero interesado por más pruebas en psicología a que se someta el tercero interesado, toda vez que existe información suficiente que respalda al menos la presunción de veracidad del contenido de la columna multicitada, porque se trata de expresiones y críticas del hoy actor, derivadas de su desempeño como Gobernador del estado de Coahuila y porque no se comprobaron los supuestos para acreditar la malicia efectiva contemplada en la Ley Especial de la Materia. Si esto no fuese así, se estaría privilegiando la inhibición y la autocensura, figuras que no tienen cabida en una sociedad que se jacte de ser tolerante, incluyente y democrática como la nuestra.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la siguiente Tesis dictada recientemente por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal:

Época: Décima Época

Registro: 2008413

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II

Materia(s): Constitucional

B-A

Tesis: 1a. XLI/2015 (10a.)

Página: 1402

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTÁNDAR DE VERACIDAD DEL "SUSTENTO FÁCTICO" DE UNA NOTA PERIODÍSTICA O UN REPORTAJE DONDE CONCURRAN INFORMACIÓN Y OPINIONES.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acogido la distinción entre "hechos" y "opiniones", en el sentido de que el objeto del derecho a la libertad de expresión son los pensamientos, las ideas y opiniones, lo cual incluye, obviamente, apreciaciones y juicios de valor; y el derecho a la información se refiere a la difusión de aquellos hechos considerados noticiables, aclarando que ya que sólo los hechos son susceptibles de prueba, únicamente al derecho a la información le es aplicable la posibilidad de verificar la veracidad de ésta, de manera que la actualización del estándar de la malicia efectiva, en lo que se refiere a la falsedad, únicamente puede tener lugar en la difusión de hechos y no de opiniones, ideas o juicios de valor. Asimismo, esta Primera Sala ha agregado que la distinción, de hecho, suele ser compleja, pues con frecuencia el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos, de manera que cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos y sólo cuando sea imposible hacerlo, habrá de atenderse al elemento preponderante; y que las columnas combinan opiniones y hechos, aunque por su naturaleza "suelen ser las opiniones lo predominante". En ese sentido debe matizarse dicho criterio, pues si fuera así, bastaría reiterar que las "columnas" contienen preponderantemente opiniones, para eximir las en forma absoluta del requisito de veracidad, lo cual sería excesivo, pues si la columna tiene una mezcla de hechos y opiniones, resulta necesario verificar que, en su conjunto, la publicación difundida tenga cierto sustento fáctico. Ello en atención a que en las notas periodísticas o reportajes publicados en los medios de comunicación no se externa una idea abstracta y ajena a todo acontecimiento sino que, por el contrario, las opiniones, ideas o juicios de valor están encaminados a comentar, criticar y valorar los sucesos cotidianos. Entonces, aunque la idea no sea un hecho en sí mismo, si está vinculada con alguna persona o con algún acontecimiento, por lo que desvincularla en forma absoluta del requisito de veracidad puede traer como consecuencia un derecho ilimitado para

B+A

publicar o difundir cualquier texto, en la medida en que se le clasifique como opinión. En efecto, la apreciación subjetiva consistente en determinar si el contenido de un texto tiene preponderancia de "hechos" o de "opiniones", puede determinar por sí sola el resultado del fallo; por tanto, excluir de forma absoluta el límite de la veracidad respecto de notas periodísticas o reportajes que mezclen hechos y opiniones, cuando su distinción no es tan clara, y la apreciación respecto de su preponderancia en el texto es discutible, conlleva a eliminar ese deber mínimo de diligencia que está subsumido en el deber y la responsabilidad del informador. Siendo así, la determinación subjetiva de si una nota tiene "preponderancia" de hechos o de opiniones, no puede ser suficiente para eximir por completo del cumplimiento del requisito de veracidad un texto que tiene una amalgama de ambos conceptos, sino que habrá que determinar si el texto en su conjunto tiene un "sustento fáctico" suficiente; en el entendido de que acorde con el criterio de veracidad aplicable al ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información, un "sustento fáctico" no es equivalente a la prueba en juicio de los hechos en que se basa la nota, sino a un mínimo estándar de diligencia en la investigación y comprobación de hechos objetivos. Lo anterior no tiene por objeto apartarse de la distinción entre opiniones y hechos, ni limitar el derecho a la libertad de expresión, de manera que la manifestación de ideas y opiniones esté sujeta a la demostración con el mismo grado de exactitud que los hechos, sino fijar un parámetro objetivo y efectivo para identificar los casos en los que se abuse de ese derecho.

Amparo directo en revisión 3111/2013. Felipe González González. 14 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.


Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Pues bien, como sus Señorías podrán constatar, la columna del quejoso "Hay que esperar", no contiene señalamiento alguno de hechos o temas referentes a la vida personal del actor, tiene como principal objetivo un juicio de valor crítico al desempeño del mismo cuando fue gobernador de Coahuila y como figura pública, y las opiniones a diferencia de los hechos, no se pueden someter a juicios de verdad o falsedad.⁸

Continuando con el tema de la "veracidad", como hemos mencionado, la columna "Hay que esperar", contiene tanto hechos como opiniones, por lo que los criterios valorativos no pueden estar sujetos a prueba, toda vez que involucran apreciaciones y sentimientos, y los mismos se encuentran dentro de los límites tolerables del derecho fundamental de libertad de expresión y derecho a la información. La veracidad no implica que deba tratarse de información "verdadera", clara e incontrovertiblemente cierta como erróneamente lo exige la Sala responsable so pretexto de que supuestamente no se respetó por parte del quejoso la presunción de inocencia del tercero interesado, al publicar precipitadamente la columna multicitada, pues ello desnaturalizaría el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo que la veracidad encierra es simplemente una exigencia de que la información destinada a influir en la formación de la opinión pública, tenga atrás un razonable ejercicio de investigación y comprobación, encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene suficiente asiento en la realidad. Por su parte, la imparcialidad es una barrera contra la tergiversación abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento no profesional de informaciones cuya difusión podría tener un impacto que la "imparcialidad absoluta" es incompatible con el derecho a obtener información útil y los beneficios de intercambio libre y vigoroso de ideas.

En este mismo sentido, la veracidad es tan importante, que la propia Ley Especial de la Materia en su artículo 25 la contempla claramente como causa de excepción para generar daño moral alguno, tal como se observa en dicho precepto legal:

Artículo 25.- No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y cuando no se utilicen palabras, frases o expresiones insultantes por sí mismas, innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión.

 ⁸ Un estándar similar fue utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Kimel vs Argentina*, que involucraba la condena impuesta a un periodista por haber publicado un libro en el que cuestionaba el comportamiento de un juez. Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párr. 128.

Las imputaciones de hechos o actos que se expresen **con apego a la veracidad, y sean de interés público** tampoco podrán ser motivo de afectación al patrimonio moral. (énfasis añadido)

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la siguiente Tesis dictada por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal:

Época: Novena Época
Registro: 165762
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCXX/2009
Página: 284

**LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN.
MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS
DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.**

Los derechos citados cubren tanto la expresión de opiniones como la emisión de aseveraciones sobre hechos, dos cosas que, desde la perspectiva de su régimen jurídico, no son idénticas. Así, por ejemplo, cuando de opiniones se trata, no tiene sentido hablar de verdad o falsedad, que sí resultan relevantes cuando lo que nos concierne son afirmaciones sobre hechos. La información cuya búsqueda, obtención y amplia difusión está constitucionalmente protegida es la información veraz e imparcial. Estos dos requisitos pueden calificarse de límites o exigencias internas del derecho a la información. La veracidad no implica, sin embargo, que toda información difundida deba ser "verdadera" -esto es, clara e incontrovertiblemente cierta-; operar con un estándar tan difícil de satisfacer desnaturalizaría el ejercicio del derecho. Lo que la mención a la veracidad encierra es más sencillamente una exigencia de que los reportajes, las entrevistas y las notas periodísticas destinadas a influir en la formación de la opinión pública vengan respaldados por un razonable ejercicio de investigación y comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene suficiente asiento en la realidad. El informador debe poder mostrar de algún modo que ha respetado un cierto estándar de diligencia en la



comprobación del estatus de los hechos acerca de los cuales informa, y si no llega a conclusiones indubitadas, la manera de presentar la información debe darle ese mensaje al lector: debe sugerir con la suficiente claridad que existen otros puntos de vista y otras conclusiones posibles sobre los hechos o acontecimientos que se relatan. Todo ello está relacionado con la satisfacción de otro requisito "interno" de la información cuya difusión la Constitución y los tratados protegen al máximo nivel: la imparcialidad. Es la recepción de información de manera imparcial la que maximiza las finalidades por las cuales la libertad de obtenerla, difundirla y recibirla es una libertad prevaleciente en una democracia constitucional. El derecho a obtener información útil y los beneficios del intercambio libre y vigoroso de ideas son ciertamente incompatibles con la idea de imparcialidad absoluta y, hasta cierto punto, se espera que las diferentes perspectivas lleguen a los individuos por la combinación de fuentes de información y opinión a las que están expuestos, aunque cada una de esas fuentes no supere perfectamente el estándar en lo individual. La imparcialidad es, entonces, una barrera contra la tergiversación abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento no profesional de informaciones cuya difusión podría tener un impacto notorio en la vida de las personas involucradas.

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.

Pues bien, de todo lo expuesto, resultan claro 3 aspectos esenciales para acreditar la improcedencia de daño moral del actor, que son:

- i) El tercero interesado por su condición de ex gobernador de Coahuila, y en consecuencia ser figura pública como el mismo lo afirma en su demanda y al momento de absolver posiciones, se encuentra obligado a tolerar un mayor grado de intromisión en su honor, reputación y prestigio.
- ii) No existe elemento alguno en la columna "hay que esperar" multicitada, que evidencie alguna intención del quejoso de dañar, sino únicamente el cuestionar el desempeño del tercero interesado

conforme a su cargo de figura pública, es decir como Gobernador de Coahuila.

iii) Los juicios de valor realizados por el quejoso, no contienen expresiones insultantes ni vejaciones impertinentes, toda vez que la palabra "hedor" utilizada en la columna, se encuentra plenamente protegida por los criterios de la Suprema Corte, al contemplar dentro del marco protector a las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar, pues es en ellas en donde la libertad de expresión resulta más valiosa.

El nombre, reputación y mala fama del tercero interesado ya eran malos y cuestionados con mucha antelación a la publicación del material periodístico multicitado publicado por el quejoso, y eso es un hecho notorio y evidente, aunado a que el artículo 15 de la Ley Especial de la Materia, establece que las opiniones o juicios de valor no pueden ser un límite de la libertad de expresión, ya que constituyen comunicaciones que derivan del pensamiento humano, que sólo pueden debatirse por otra opinión.

A manera de ejemplo de lo anterior, el destacado periodista Manuel Ajenjo, en su artículo denominado "El honor de Moreira", publicado el 25 de julio del 2016 en el periódico "El Economista", entre otras cosas mencionó textualmente lo siguiente:

*"En él el académico del Colegio de México no expresó nada que antes no hayamos formulado casi todos los caricaturistas del país, algunos analistas y bastantes columnistas. (En mi caso, remito a los lectores a mis columnas publicadas en este benemérito periódico: "Moreira y los lavaderos", del 18 de febrero del 2014 y "La esposa de Moreira y "El Mono" del 22 de marzo de este año, año de la devaluación, ese día un dólar ya costaba 17 pesos con 70 centavos)."*⁹

Este es solo un ejemplo de como el nombre y reputación del hoy tercero interesado ya eran malas, con anterioridad a la publicación del material periodístico del cual se duele, siendo evidentemente que existen muchos más.

La sala responsable va más allá de sus facultades legales, al pretender juzgar al quejoso a la luz de una ley vigente y una derogada, y sancionarlo con base en elementos subjetivos sin base o fundamento legal, ya que insisto, la libertad de expresión atendiendo al interés general y a los

B+A

⁹Nota contenida en el ANEXO "1", exhibido con el escrito de contestación de demanda en el juicio natural.

sujetos de la crítica cuando son figuras públicas, no solo puede, sino que debe ser más abierto y tolerado. Ejemplo de ello existen diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Caso Vladimiro Roca Antunez y otros vs Cuba, donde la Corte señala textualmente lo siguiente:

"Al momento de examinar la validez de las restricciones impuestas, se debe tener en cuenta que la libertad de emitir opiniones y difundir informaciones de índole político es absolutamente central al derecho protegido por el artículo IV de la Declaración Americana. La Comisión ha señalado consistentemente que los Estados tienen un campo más limitado para imponer restricciones a la libertad de expresión cuando quiera que se trate de expresiones atinentes al Estado, a asuntos de interés público, a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o candidatos a ocupar cargos públicos, o a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como al discurso y debate político"¹⁰

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado de manera extensa sobre la protección a la Libertad de Información y de Expresión, detallando de manera amplia el discurso que deberá ser especialmente protegido, sin importar que contenga expresiones que choquen, irriten, inquieten a los personajes públicos sobre los cuales se realicen las críticas, incluyendo discursos críticos e incluso ofensivos, donde los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, deberán tener un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública, tal como se observa en los siguientes párrafos, tomados de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, contenida en el Marco jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, y que a la letra dice:

"Tipos de discurso protegidos según su contenido

a. Presunción de cobertura ab initio para todo tipo de expresiones, incluidos los discursos ofensivos, chocantes o perturbadores

30. En principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de

expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. Esta presunción general de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público.

31. De particular importancia es la regla según la cual la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino **también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población**¹¹. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática¹². En este sentido, se ha señalado la especial importancia que tiene proteger la libertad de expresión "en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, **incluyendo aquéllas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayoría**"¹³; y se ha enfatizado que las restricciones a la libertad de expresión **"no deben perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia"**¹⁴. En igual orden de ideas, resulta claro que el deber de no interferir con el derecho de acceso a la información de todo tipo, se extiende a la circulación de información, ideas y expresiones que puedan o no contar con el beneplácito personal de

¹¹ Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 113; Corte I.D.H., Caso de "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 105; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 116; CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

¹² Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 113; Corte I.D.H., Caso de "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 105; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 116; CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

¹³ CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

¹⁴ CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

51

quienes representan la autoridad estatal en un momento dado.¹⁵

b. Discursos especialmente protegidos

32. Si bien todas las formas de expresión están, en principio, protegidas por la libertad consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana, existen ciertos tipos de discurso que **reciben una protección especial**, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. En la jurisprudencia interamericana, tales modos de discurso especialmente protegidos son los tres siguientes: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el **discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos**; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa.

i. Discurso político y sobre asuntos de interés público

33. El funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público. En un sistema democrático y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública. La gestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedad en su conjunto. El control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público¹⁶.

¹⁵ CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 61. c).

¹⁶ Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 57 y 87; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 84, 86 y 87; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.

34. En este mismo sentido, la jurisprudencia interamericana ha definido la libertad de expresión como, "el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en **debates activos, firmes y desafiantes** respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad"¹⁷; ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, **como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población**¹⁸.

35. En consecuencia, **las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica**¹⁹. En una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del debate político o de cuestiones de interés público²⁰.

37. La importancia prevaeciente de la discusión sobre asuntos de interés público conduce, además, a la protección reforzada del derecho de acceso a la

¹⁷ CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 72. c).

¹⁸ Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 88; Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 152; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83.

¹⁹ Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 125; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 101.2.c).

²⁰ Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 155.; CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

información sobre asuntos públicos. Pese a que este tema será explicado en detalle más adelante, resulta relevante recordar que sólo a través del acceso a la información bajo control del Estado que sea de interés público, los ciudadanos pueden cuestionar, indagar y considerar si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas²¹.

38. En forma conexa, la jurisprudencia interamericana ha resaltado la importancia del rol de los medios de comunicación en la información amplia sobre asuntos de interés público que afectan a la sociedad²²; ha explicado en este sentido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho de investigar y difundir por esa vía hechos de interés público²³; y ha explicado que el procesamiento de personas, incluidos periodistas y comunicadores sociales, por el mero hecho de investigar, escribir y publicar información de interés público, viola la libertad de expresión al desestimular el debate público sobre asuntos de interés para la sociedad²⁴ y generar un efecto de autocensura²⁵.

ii. Discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos

39. Las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también **gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana**, por las mismas razones que explican la protección especial del discurso político y sobre asuntos de interés público.

40. Como se mencionó, el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión, así como la participación ciudadana más amplia. Por ello, en el contexto democrático, las expresiones sobre funcionarios públicos o personas que ejercen

²¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 86.

²² Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 57.

²³ Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 157.

²⁴ CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Kimel Vs. Argentina. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 37.

²⁵ CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 64.

54

funciones públicas, así como sobre los candidatos a ejercer cargos públicos, deben gozar de un margen de apertura particularmente reforzado. En este sentido, los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública²⁶. En efecto, debido a su condición—que implica una mayor influencia social y mayor facilidad de acceso a los medios de comunicación éstos tienen más posibilidades de dar explicaciones o responder a los cuestionamientos o las críticas que se les formulen²⁷.

41. Dado que las expresiones e informaciones atinentes a los **funcionarios públicos**, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección²⁸, el Estado debe abstenerse en mayor grado de imponer limitaciones a estas formas de expresión. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las **funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o su honra** frente a las demás personas, y correlativamente, **deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica**²⁹. En este sentido, dado que el derecho a la libertad de expresión habilita al individuo y a la comunidad a participar en **debates activos, firmes y desafiantes** sobre todos los aspectos

²⁶ Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 86-88; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 152 y 155; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 87; Corte I.D.H., Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 115

²⁷ Corte I.D.H., Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 122.

²⁸ Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 86; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 82.

²⁹ Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 86-88; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrs. 83-84; Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 152 y 155; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 87.

55

relativos al funcionamiento de la sociedad, este derecho cubre debates que pueden ser **críticos e incluso ofensivos para los funcionarios públicos**, los candidatos a ocupar cargos públicos o las personas vinculadas a la formación de la política pública³⁰. En términos de la CIDH, "[e]l tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública"³¹. Ello no implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos en cuanto a su honor cuando éste sea objeto de ataques injustificados, pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático³², y a través de mecanismos que no tengan la potencialidad de generar inhibición ni autocensura." (énfasis añadido)

La sala responsable toma como elemento de prueba una resolución dictada por un Tribunal Colegiado, que al día de hoy se encuentra sub-judice, relativo a un juicio de Daño Moral promovido por el mismo tercero interesado vs el periodista [REDACTED], no obstante ser completamente distinta la litis y encontrarse insisto sub-judice, por lo que resulta oportuno señalar parte del contenido de la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el Amparo Directo en revisión [REDACTED] promovido por la Quejosa y Recurrente [REDACTED], que señala lo siguiente:

"los criterios de la primera Sala han establecido que si la columna tiene una mezcla de hechos y opiniones, basta con que el texto en su conjunto, tenga un "sustento fáctico" suficiente y que éste no debe ser equivalente a la prueba en juicio de los hechos en que se basa la nota, sino en un mínimo estándar de diligencia. En contraposición, el tribunal colegiado impuso al titular de la libertad de expresión, la carga máxima de demostrar -con grado de exactitud- lo que narró en ocho renglones, contenidos en un tercio de página, que forman parte de treinta y ocho páginas del prólogo.

³⁰ CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 72. c).

³¹ CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III Apartado B. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 128.

56

Así, es evidente que el órgano de amparo no comparte el lineamiento rector definido por la Suprema Corte consistente en que la valoración del texto que combina hechos y opiniones debe hacerse en su conjunto, sin exigir para su constitucionalidad el sustento probatorio que en el juicio se requiere. Con ello, establece su postulado como una antítesis, puesto que exige una comprobación material minuciosa y pormenorizada de los extremos de la expresión y no de la expresión dentro de la generalidad. Pide palabras específicas, delimitadas y seleccionadas que hablan sobre uno de los tantos sucesos que se refieren dentro del prólogo en el que se contienen diversos juicios de valor respecto de numerosos acontecimientos acaecidos en torno a un reportaje periodístico de relevancia pública e interés social."³³

Más adelante, en la misma resolución, se menciona lo siguiente:

"Las opiniones no son un límite a la libertad de expresión.

De conformidad con el artículo 6° constitucional, la regla general es que se permita la emisión de ideas y por excepción se establecen los límites que son de interpretación estricta; por ello, no son aplicables al caso, mientras no estén expresamente especificados en las mismas leyes.

En la especie, [REDACTED] citó las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, para alegar que las opiniones emitidas por [REDACTED] afectaron su derecho al honor.

Al respecto, el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, establece que las opiniones o juicios de valor no pueden ser un límite de la libertad de expresión, ya que constituyen comunicaciones que derivan del pensamiento humano, que sólo pueden debatirse por otra opinión. De esa forma, no existe la acción que pretende el tercero interesado, pues las opiniones

no constituyen un límite a la libertad de expresión."³⁴

Finalmente, en el sexto considerando, la sentencia de la Corte mencionada, determina lo siguiente:

"SEXTO. EFECTOS. Por lo expuesto, al haber resultado parcialmente fundados los agravios esgrimidos por la recurrente, ésta Primera Sala resuelve que son suficientes para revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que emita una nueva resolución tomando en cuenta los lineamientos fijados por esta Primera Sala, esto es, deberá 1) distinguir y clasificar adecuadamente entre hechos y opiniones las expresiones de la periodista que fueron impugnadas, 2) establecer el estándar aplicable para los hechos y opiniones que se adviertan, conforme a lo establecido en esta ejecutoria; 3) en cuanto a los hechos, en atención a la exceptio veritatis, señalar que la carga de demostrar la falsedad de la información, así como que ésta fue difundida a sabiendas de su falsedad, recaen en el actor en el juicio de origen; y 4) satisfecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda."³⁵

Regresando a lo que esgrime la sala responsable en la sentencia que se combate, en el sentido de que el quejoso debió esperar al desenlace de la detención del tercero interesado en España, para determinar si era culpable o no de los delitos que se le imputaban y por lo cual se encontraba detenido en calidad de probable responsable, que el quejoso se "precipitó" en publicar la columna que da origen al juicio natural, violándose el principio de presunción de inocencia de dicho tercero, siendo completamente desatinado éste criterio, ya que nuestro máximo Tribunal ya ha resuelto en diversos asuntos similares al presente, que por su naturaleza, las expresiones que constituyen interpretaciones, opiniones o conjeturas están exentas de pruebas y análisis por cuanto a su veracidad, por lo que las expresiones expresadas por el Quejoso en el artículo "hay que esperar" multicitado, no carecían de rigor periodístico ni investigación como indebidamente se califican, se fundaron en hechos y circunstancias reales y actuales; representaron el sentir de muchas personas y fueron producto de un razonamiento coherente, lógico, plausible y no de una invención inverosímil, ya que independientemente del caudal

53

de notas e investigaciones ofrecidas al momento de contestar la demanda, que acreditan que la deuda en el periodo en el que el tercero interesado fue gobernador de Coahuila, pasó de 420.0 (Cuatrocientos punto cero) Millones de Pesos a 36,509.6 (Treinta y Seis Mil Quinientos Nueve punto Seis) Millones de Pesos, de que habían y siguen habiendo investigaciones de corrupción, tráfico de drogas, asesinatos, lavado de dinero y otros delitos cometidos en el periodo en que fue gobernador dicho tercero, no se nos debe olvidar que éste se encontraba detenido por la Audiencia nacional Española, siendo investigado por varios de esos delitos, y que 2 años después se reabrió dicha investigación, tal como se acreditó con la **Documental Privada ofrecida como prueba superveniente**, consistente en la hoja 8 del Diario "El País" del jueves 15 de noviembre del 2018, concretamente del artículo denominado **"La justicia española reabre la investigación sobre el expresidente del PRI Moreira"**, exhibida el día miércoles 28 de noviembre de 2018, donde entre otras cosas menciona que dos años después de su archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional SANTIAGO PEDRAZ acordó reabrir la causa que la justicia española inició contra el tercero interesado [REDACTED] por presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, que la llama que encendió la reapertura de la investigación fue el testimonio de dos testigos en San Antonio Texas que implican a Moreira en un supuesto blanqueo con sus empresas. El artículo menciona también que el Juez Pedraz dictó un auto con una comisión rogatoria a San Antonio Texas para interrogar a las 2 personas que acusan a [REDACTED] y otra a México para que investiguen las sociedades de [REDACTED]

Por todo lo anterior, que resulta oportuno citar lo arriba señalado por la propia Suprema Corte, en la resolución antes referida:

"basta con que el texto en su conjunto, tenga un sustento fáctico" suficiente y que éste no debe ser equivalente a la prueba en juicio de los hechos en que se basa la nota, sino en un mínimo estándar de diligencia"

Resulta claro que si el texto del artículo multicitado que da origen a la demanda en el juicio natural, en su conjunto tiene un sustento fáctico suficiente con un mínimo estándar de diligencia en la investigación y corroboración de hechos objetivos, entonces no puede concluirse que hay abuso del derecho de libertad de información o de expresión.

La Sala responsable aplicó indebidamente la figura de malicia efectiva y se examinaron equivocadamente las expresiones bajo el estándar de verdad y falsedad, en razón

B+A

57
de que la actualización de esa figura (falsedad), misma que sólo puede tener lugar en la difusión de hechos, mas no de opiniones, ideas o juicios de valor.

Estos conceptos se regulan en los artículos 14, 15 y 25 de la Ley Especial de la Materia, y éstos no establecen que la veracidad constituya un requisito para que las opiniones, ideas o juicios de valor sean lícitos, aunado a el ordenamiento señala claramente que en ningún momento se considerarán como ofensas al honor, los juicios desfavorables de la crítica profesional, expresados en el ejercicio de un derecho, siempre que el modo de proceder no demuestra un propósito ofensivo.

Finalmente, resulta un hecho notorio que cuando existe pugna entre derechos fundamentales de la mayoría en contra de derechos de terceros, deben prevalecer siempre los primeros, ya que recordemos que no solo está en juego el derecho de libertad de expresión del quejoso, sino también el derecho a la información por parte de la sociedad.

Refuerza lo anterior, el contenido de la siguiente tesis:

No. Registro: 184,669

Tesis aislada

Materia(s): Civil

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Marzo de 2003

Tesis: I.4o.C.57 C

Página: 1709

DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, les impone límites consistentes en que la manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; la libertad de imprenta tiene por límite el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de Imprenta prevé lo que se considera como ataques a la vida privada, y en su fracción I establece que lo es toda manifestación o expresión hecha por la imprenta o que de cualquier otra manera circule en la opinión pública donde se expone a una persona al odio, desprecio o ridículo y que pueda causarle



B-1-A

demérito en su reputación e intereses. Como se advierte, en el supuesto de la fracción I resulta irrelevante que la información o manifestación sea falsa o verdadera. Basta que se exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación. Se basa en el principio de que a toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar honorable, merecedora de respeto. La conculcación de este bien se configura en sentido negativo, cuando el sujeto activo, sin fundamento, daña a una persona en su honor o en la estimación que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio. El honor es un bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de confianza. Si una persona sufre una afectación en la consideración que de ella tienen los demás, se debe entender como una lesión a la estima que los demás le profesan, o sea, al trato con urbanidad y respeto que merece. El límite entre la libertad de expresión y la conducta ilegal del agente sólo puede establecerse mediante la ponderación de los derechos en presencia, para determinar si la restricción que se impone al derecho de información y expresión está o no justificada por la limitación que sufriría el otro derecho a la intimidad. Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión entre ambos derechos, el de la información goza de una posición preferente, y las restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo que su contenido esencial no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, absoluto. Si se le reconoce como garantía de la opinión pública, sólo puede legitimar intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, o sea, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública. Carecerá de protección cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.

61

TERCERO.- La sentencia señalada como acto reclamado, viola los derechos fundamentales consagrados a favor de mi representado en los artículos 1, 6, 7, 14, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 1, 8, 9, 13, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en los artículos 3, 5, 14, 19, 26 y demás relativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los artículos IV y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por violación a los artículos 81 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y del artículo 41 y demás relativos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pues la autoridad responsable condena a mi representado [REDACTED] a pagarle al hoy tercero interesado la absurda cantidad económica de [REDACTED] por concepto de daños punitivos, condena que a todas luces resulta incongruente e ilegal.

En efecto, la autoridad responsable se abstiene de resolver bajo el principio de congruencia, es decir de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado por las partes, pero en especial con lo que marca la ley, toda vez que en términos del artículo 41 de la Ley Especial de la Materia, la sanción económica en caso de resultar procedente la acción de daño moral, en ningún caso deberá exceder de 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, es decir menos de [REDACTED]

[REDACTED] por ello, cualquier otro monto no podría ser determinado por la Sala Responsable de manera discrecional conforme a otra ley que no sea la mencionada, o a través de alguna fórmula para establecer algún otro monto.

Al ser la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la normatividad aplicable a juicios de daño moral que deriven de actos que abusen del derecho de libertad de información y/o expresión, el artículo 41 establece que en caso de resultar procedente la acción de daño moral, en ningún caso la condena deberá exceder de 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y/o la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que al día de hoy es por \$84.49, tal y como aparece en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: <https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/unidad-medida.html>; que para mejor y rápida consulta inserto una captura de pantalla de dicho sitio web donde aparece el monto referido para el año 2019:

62

CDMX / SECCIÓN /
 SAF
 Transparencia
 Atención Ciudadana
 Trámite y Servicios

¿QUÉ ES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) se creó para sustituir el uso del salario mínimo como unidad de medida para determinar multas, pagos y sanciones económicas. Ahora, para que los aumentos al salario mínimo no impacten en el cálculo de estos pagos, se creó esta unidad que los mide de manera independiente.

¿CUÁL ES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PARA EL 2019?

Para 2019 el valor de la unidad de medida es de:

\$84.49
 Diario
\$2,568.50.49
 Mensual
\$30,822.00
 Anual

De dicho precepto legal y forma de condenar el supuesto daño moral generado, la hoy autoridad responsable ha tenido conocimiento desde el año 2017, pues como se desprende de las constancias que obran en autos y las copias certificadas de todo lo actuado que agrego al presente escrito como **ANEXO "1", ANEXO "2" y ANEXO "3"**, a lo largo del año 2017 mi representado [REDACTED] tuvo que promover diverso juicio de Amparo Indirecto al que se le asignó el número [REDACTED] después apersonarse en el Recurso de Revisión [REDACTED] y también promover otro juicio de Amparo Indirecto al que se le asignó el número [REDACTED] ante la justicia federal, por la evidente violación de sus derechos humanos, por la violación directa a los artículos 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y del artículo 41 de la Ley Especial de la Materia, tal como se establece en el siguiente criterio emitido por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal y que resulta totalmente aplicable, conforme al sexto transitorio de la ley de amparo vigente:

Época: Décima Época
 Registro: 2001284
 Instancia: Primera Sala
 Tipo de Tesis: Aislada
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1
 Materia(s): Civil
 Tesis: 1a. CLXX/2012 (10a.)
 Página: 479

DAÑO MORAL. MARCO NORMATIVO APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL.

En el Distrito Federal se prevé la existencia de dos regímenes normativos distintos para regular la responsabilidad

civil por afectaciones al patrimonio moral: si la acción para reclamar la reparación del daño tiene como origen el ejercicio presuntamente abusivo de las libertades de expresión e información, el marco normativo aplicable es el previsto en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal; si, por el contrario, la acción tiene su origen en un hecho o acto jurídico distinto, entonces el marco normativo aplicable es el previsto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Así pues, el primero de los regímenes antes descritos ha derogado al previsto en el Código Civil en materia de afectaciones al patrimonio moral derivadas del ejercicio de las libertades de expresión e información, según se desprende de la redacción del artículo 1o. de la ley antes citada y del hecho consistente en que la ley representa una norma especial -y posterior- respecto del artículo 1916 del Código Civil, en tanto regula una especie del género identificado como responsabilidad por daño moral. Lo anterior se refuerza con la exposición de motivos de la ley, como elemento coadyuvante para reconstruir la voluntad del legislador, según la cual resultaba necesario substituir la figura del daño moral prevista en el Código Civil con una ley especial de naturaleza civil que, por un lado, despenalice los denominados delitos contra el honor y, por otro, que permita un proceso ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de la personalidad lesionados con motivo del ejercicio de los derechos a las libertades de expresión e información.

Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. (énfasis añadido)

En efecto, al revisar las constancias que integran el ANEXO "1", tenemos un primer precedente, que se desprende del juicio de Amparo Indirecto [REDACTED] donde se observa que

B+A

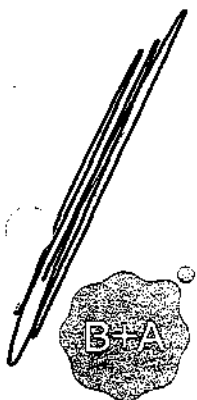
64

en la sentencia de amparo publicada el 26 de julio del 2017 se concedió la protección constitucional al hoy Quejoso [REDACTED] por acreditarse que la hoy responsable Sexta Sala Civil había violentado los derechos fundamentales de mi representado, pues el acto reclamado era incongruente e ilegal y por consecuencia violatorio de lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, al no aplicar la Ley Especial de la Materia en la resolución del recurso de apelación T. [REDACTED] que ordenaba confirmar un acuerdo en primer instancia, que le permitiría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ventilar información financiera de mi representado, a través de un informe solicitado como prueba por el hoy tercero interesado; sobre éste primer precedente, a fojas 83 a 95 de las constancias que integran el **ANEXO "1"**, se encuentra la sentencia de amparo que para mejor y rápida consulta, inserto el texto del párrafo donde se declaran fundados los conceptos de violación de mi representado:

"...Por tanto, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece el monto o límite de la indemnización por daños al patrimonio moral, la cual el juez determinará según lo previsto en el artículo 41 referido (tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, no pudiendo en ningún caso el monto por indemnización exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad).

Consecuentemente, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación en estudio, pues la resolución reclamada es violatoria de lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso..."

El segundo precedente, deriva de las constancias que integran el **ANEXO "2"** que se refieren al Recurso de Revisión [REDACTED], donde se observa que en la resolución publicada el 24 de noviembre del 2017, se declararon ineficaces por



65
inoperantes los agravios del hoy tercero interesado [REDACTED], concediendo nuevamente la razón a mi representado [REDACTED] al confirmar la resolución impugnada; sobre este segundo precedente, a fojas 30 a 64 de las constancias que integran el **ANEXO "2"**, se encuentra la resolución del Recurso de Revisión que para mejor y rápida consulta, reproduzco el párrafo donde se declara la inoperancia de los agravios del tercero interesado, confirmando la sentencia a favor del hoy quejoso:

"... todo lo alegado en torno a la aducida inconstitucionalidad de los citados artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), es inoperante..."

"...ante lo ineficaz de los agravios hechos valer, ha lugar a CONFIRMAR en sus términos la sentencia que se revisa y conceder el amparo para los efectos que se precisaron en el fallo recurrido..."

El tercer y último precedente, se desprende de las constancias que integran el **ANEXO "3"**, que se refieren al juicio de Amparo Indirecto [REDACTED], donde se observa que en la sentencia de amparo publicada el 26 de julio del 2017, se concedió la protección constitucional a mi representado [REDACTED] porque se demostró que las resoluciones del Juez Décimo Quinto de lo Civil habían violentado los derechos fundamentales de mi representado, que sus resoluciones eran ilegales ya que se encontraban *sub judice* a lo que se resolviera definitivamente en el recurso de apelación T. [REDACTED] confirmando nuevamente la ilegalidad de la resolución del recurso de apelación T. [REDACTED] violatoria de la Ley Especial de la Materia; sobre éste último precedente, a fojas 31 a 46 de las constancias que integran el **ANEXO "3"**, se encuentra la sentencia de amparo que para mejor y rápida consulta, reproduzco el párrafo donde se declaran fundados los conceptos de violación de mi representado:

"...si en el juicio de amparo de referencia se concedió la protección federal, declarando que la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca [REDACTED], transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal, entonces la firmeza de esa decisión

continúa sub judice debido al otorgamiento del juicio de amparo..."

La razón de presentar los **ANEXOS "1" y ANEXO "2"**, es para demostrar fehacientemente que la hoy responsable Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México encabezada por el Magistrado FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ, cuando menos desde el año 2017 conocía de la normatividad aplicable y de la sanción económica conforme a derecho en caso de resultar procedente la acción de daño moral en contra de mi mandante, que en ningún caso debería exceder de 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, es decir menos de \$29,571.05 (Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 05/100 M.N.).

Por ello, es evidente que este Magistrado, ha demostrado parcialidad absoluta hacia los intereses del hoy tercero interesado, resolviendo unitariamente como Magistrado Semanero ó colegiadamente como Magistrado Ponente en la Sexta Sala Civil, pues a fojas 173 a 175 de las constancias que integran el **ANEXO "1"** se observa que a pesar de la protección constitucional otorgada a mi representado, **el Magistrado FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ se atrevió a repetir el acto reclamado (ver foja 188 a 208), dictando de forma unitaria una nueva sentencia en el Toca [REDACTED] confirmado el acuerdo recurrido** (descrito en el quinto párrafo del presente concepto de violación) e ignorando la sentencia de amparo 55/2017-IV que **le ordenaba aplicar la Ley Especial de la Materia**, y que si no es por el apercibiendo de fecha 21 de diciembre del 2017 del juzgado federal, consistente en multa y remisión del expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución de sentencia de amparo, que podría culminar con la separación del puesto y consignación (ver fojas 223 a 226), el referido Magistrado hubiera repetido nuevamente su determinación ignorando el fallo protector, dejando de aplicar la Ley Especial de la Materia que como sanción económica en caso de resultar procedente la acción de daño moral, que en ningún caso deberá exceder de 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, es decir menos de \$29,571.05 (Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 05/100 M.N.); tal y como se aprecia en las constancias referidas que integran el **ANEXO "1"**.

Como sus Señorías podrán observar, no se trata solamente de una falta de interpretación o aplicación de la ley por parte del Magistrado Ponente señalado, resulta evidente su parcialidad manifiesta hacia los intereses del hoy tercero interesado, su interés, afinidad y simpatía, a tal grado que estuvo en juego la destitución de su cargo derivado de su comportamiento contumaz, al evadir una instrucción directa de la autoridad federal, por lo que atendiendo a lo anterior y a otro tema no menor que se hará valer más adelante mediante Queja ante el Consejo de la Judicatura, resulta evidente que

éste Magistrado debió excusarse del estudio y tramitación del recurso de apelación que da origen a la sentencia que aquí se combate.

Pues bien, la sanción de pago de los 10 Millones de Pesos por una opinión contenida en la columna multicitada, per se resulta una grave y desproporcionada sanción a mi mandante, ya que independientemente de la no responsabilidad del hoy quejoso de causar daño moral alguno, suponiendo sin conceder que éste lo fuera, resulta evidente que la Sala responsable se alejó de manera clara del "cumplimiento irrestricto" de la ley, no obstante haber recibido indicaciones y apercibimientos de la justicia federal de conducirse en el sentido que ordena la misma, dictando una sentencia que violenta gravemente los derechos fundamentales de mi mandante, no sólo por decretarse conforme a una disposición legal derogada (parte relativa del artículo 1916 y todo el artículo 1916 Bis del Código Civil), sino también por el monto inverosímil de la misma, la cual emerge como pena excesiva, inusitada y trascendental de las prohibidas por el artículo 22 constitucional por tratarse de una sanción que violenta gravemente derechos humanos, ya que la misma a todas luces no resulta proporcional a la supuesta violación materia del juicio natural, es decir al supuesto ilícito que sancione y al bien jurídico supuestamente afectado, alejándose del respeto a los principios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica.

CUARTO.- La sentencia señalada como acto reclamado, viola los derechos fundamentales consagrados a favor de mi mandante en los artículos 1, 6, 7, 14, 16, y 133 Constitucionales, en los artículos 1, 8, 9, 13, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en los artículos 3, 5, 14, 19, 26 y demás relativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los artículos IV y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por violación a los artículos 81, 139, 140 fr. V, 402, 689, 736 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, de los artículos 126, 127, 128, 106 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), toda vez que la sentencia dictada en primera instancia absuelve a mi mandante de las prestaciones reclamadas por el hoy tercero interesado, por lo que de otorgarse el amparo a favor del hoy quejoso, se estaría en el supuesto del último párrafo del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

En ese sentido, tomando en cuenta que el tercero interesado reclamó en la prestación marcada con el inciso c) de su escrito inicial de demanda, el pago de por lo menos



[REDACTED] por 63
concepto de indemnización del supuesto daño moral "extra patrimonial" que supuestamente mi mandante le ocasionó.

De conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, la condena en costas en los juicios civiles procede en dos supuestos: cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. El primer supuesto prevé la condena forzosa y se rige por sus siete fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del juzgador. El numeral en comento otorga al juzgador la facultad de determinar la temeridad o mala fe examinando los casos en que proceda aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación procesal de los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria mala fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones del litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se funda la demanda o la contestación, sino en **ejercitar acciones a sabiendas de ser improcedentes**, oponerse a una acción sin causa justificada con pleno conocimiento de que son injustificadas, y en la interposición de recursos o excepciones frívolos e improcedentes con el solo propósito de entorpecer el curso del procedimiento. En el presente asunto, resulta claro que el actor tenía conocimiento que estaba ejerciendo una acción a sabiendas de ser improcedente, por lo que debió condenársele al pago de gastos y costas desde la primera instancia, es decir que actuó con temeridad y mala fe al promover una demanda que sabía no satisfacía los elementos necesarios para poder prosperar, y al exigir una condena no prevista en la ley especial de la materia, es decir de por lo menos [REDACTED] circunstancia que evidenció la mala fe y el dolo con que se condujo.

Derivado de todo lo antes mencionado, por lo que procede la condenación tanto por el aspecto subjetivo (aspecto discrecional del Juzgador) como del objetivo (supuesto obligatorio para ser condenado por estar contemplado en ley). El criterio subjetivo atribuye al juez la facultad de condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe. El criterio objetivo constriñe al juzgador a condenar en costas a la parte que se sitúe en alguna de las hipótesis previstas por la ley para la condena en costas, y en el caso de los supuestos que conforman el criterio objetivo, la ley menciona de manera expresa y sin lugar a interpretación alguna, que los litigantes que

incurran en los supuestos marcados por la ley, siempre serán condenados, por lo que el actor en el presente asunto, debió haber sido condenado.

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias por Contradicción de Tesis y por reiteración, dictadas recientemente por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal y por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito

Época: Novena Época

Registro: 164606

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Mayo de 2010

Materia(s): Civil

Tesis: 1a./J. 7/2010

Página: 319

COSTAS. SU CONDENA CON BASE EN EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN SUPUESTO OBJETIVO.

El artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuyo texto es equivalente al del artículo 1084 del Código de Comercio, establece una excepción al principio general de que cada parte será responsable de sus propios gastos y costas. Dichos artículos disponen un sistema mixto para la condena en costas, conformado por un criterio subjetivo y otro objetivo. El criterio subjetivo atribuye al juez la facultad de condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe. El criterio objetivo constriñe al juzgador a condenar en costas a la parte que se sitúe en alguna de las hipótesis previstas por la ley para la condena en costas. Como se puede apreciar, el criterio subjetivo queda a la valoración del juez; por el contrario, el criterio objetivo establece en forma específica los casos en los que el juzgador está constreñido a imponer una condena en costas, lo cual se desprende de la frase "siempre serán condenados" que precede a las fracciones que enumeran los casos específicos para la condena en costas. Por su parte, el artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal dispone, en forma categórica, que "El pago de los gastos será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación". Dicha disposición se introdujo en la reforma aprobada en el año de

mil novecientos noventa y seis, con el objeto de desalentar el uso de los recursos legales para evitar o retrasar el cumplimiento de obligaciones. De ahí que establece otro supuesto objetivo para la condena en costas en los juicios civiles, que es ajeno al criterio subjetivo contemplado por el artículo 140 de dicho código procesal que obliga al juez a condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe, y que es ajeno también a los otros supuestos objetivos previstos en las fracciones de dicho artículo 140.

Contradicción de tesis 345/2009. Entre las sustentadas por el Octavo y Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 25 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Tesis de jurisprudencia 7/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos diciembre de dos mil nueve.

Época: Novena Época

Registro: 177044

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXII, Octubre de 2005

Materia(s): Civil

Tesis: I.11o.C. J/4

Página: 2130

COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE PARA DECRETAR SU CONDENA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena en costas en los juicios mercantiles procede en dos supuestos: el primero, es cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la facultad discrecional del juzgador cuando advierta que uno de los litigantes haya actuado con temeridad o mala fe. El primer supuesto prevé la condena forzosa y se rige por las cuatro primeras fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del juzgador. El numeral en comento otorga al juzgador la facultad de determinar la temeridad o mala fe examinando los casos en que proceda aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una

operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación procesal de los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria mala fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones del litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a una acción sin causa justificada con pleno conocimiento de que son injustificadas, en la interposición de recursos o excepciones frívolos e improcedentes con el solo propósito de entorpecer el curso del procedimiento.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 655/2003. Arrendadora Capital, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Capital, S.A. de C.V. 23 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña.

Amparo directo 570/2004. Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey Aetna, S.A.). 7 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva Nava.

Amparo directo 790/2004. Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva Nava.

Amparo directo 55/2005. J. Abraham Escamilla Morales y otra. 18 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretaria: Alicia Avendaño Santos.

Amparo directo 465/2005. Minera La Negra, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretaria: Alicia Avendaño Santos.



Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 288, tesis VI.1o.216 C, de rubro: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. EN DETERMINADOS SUPUESTOS SÍ PUEDE CONDENARSE A SU PAGO ATENDIENDO A LA TEMERIDAD O LA MALA FE DE LAS PARTES." y Séptima Época, Volúmenes 97-102, Séptima Parte, página 34, tesis de rubro: "COSTAS, TEMERIDAD Y MALA FE PARA LA CONDENACIÓN EN. CONCEPTO."

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo ordenado en el artículo 736 del Código Procesal Civil, toda sentencia que absuelva de la demanda de responsabilidad civil, condenará en costas al demandante.

Transcribo dicho artículo para su mejor y rápida consulta:

Artículo 736.- La sentencia que **absuelva** de la demanda de **responsabilidad civil** condenará en costas al demandante, y las impondrá a los demandados cuando en todo o en parte, se acceda a la demanda. (énfasis añadido)

Pues bien, como su propio nombre lo menciona, la Ley de **Responsabilidad Civil** para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal" Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2006, regula precisamente asuntos de responsabilidad civil por supuestos abusos a la libertad de información y de expresión, por lo que en cualquier caso, se entenderá que existe una responsabilidad civil de cualquier asunto generador o supuesto generador de daño moral.

Ante lo anterior, y por tratarse de un asunto de **responsabilidad civil**, y por haber sido absuelto de las prestaciones reclamadas mi mandante, el actor forzosamente debió haber sido condenado al pago de gastos y costas, en estricto apego a lo ordenado por el artículo 736 del Código Procesal Civil comentado, sin embargo si se otorga el amparo y protección de la justicia de la unión a favor de mi representado, se estaría insistir en el supuesto del último párrafo del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que a la letra dice:

Artículo 128. Las costas en Primera Instancia se causarán conforme a las siguientes bases:

(REFORMADO, G.O.D.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

B+A

73
a) Cuando el monto del negocio no exceda del equivalente a tres mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se causará el 10%;

(REFORMADO, G.O.D.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

b) Cuando el monto del negocio exceda del equivalente a tres mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y sea hasta de seis mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se causará el 8%; y

(REFORMADO, G.O.D.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

c) Cuando el monto del negocio exceda del equivalente a seis mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se causará el 6%.

Si el asunto tuviere que resolverse a través de una segunda instancia, las cuotas anteriores se aumentarán en 2%. (énfasis añadido)

La Sentencia impugnada, viola en perjuicio de mi representado el contenido de los artículos 81, 402 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, así como de los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), toda vez que en términos de lo que señala el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), las costas son la sanción impuesta en los términos de la ley a los litigantes que hayan actuado de mala fe, con falsedad o sin derecho, cuyo objeto es el pago de los gastos legales que el juicio implicó a la contraparte, y como ya se acreditó a lo largo de la secuela procesal, el actor actuó de mala fe, sabiendo que su condición de figura pública, sabiendo la condición de mi mandante de periodista, sabiendo que la columna puede contener frases y opiniones personales, sabiendo que el contenido de la columna materia de la litis contenía con una investigación y por lo tanto cumplía con el principio de veracidad, y el actor también sabía que actuó de mala fe al exigir prestaciones no contempladas en la constitución, en tratado o ley alguna ni en la jurisprudencia de la Corte, como lo fue exigir el pago de por lo menos \$ [REDACTED] por lo que en términos de dicho artículo procede la condenación en costas, pero además mi mandante cuenta con el derecho del cobro de las costas establecidas en ley, por haber sido asesorado durante el juicio, por Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, toda vez que el suscrito al haber [REDACTED] acreditado contar con Cédula Profesional número [REDACTED] expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación pública, misma que



me faculta para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, y que la misma fue registrada con anterioridad con el folio número [REDACTED] ante la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por haber sido exhibida en la contestación de demanda y haber comparecido con la misma en diferentes audiencias, cumplió con los requisitos mencionados, establecidos en el artículo 127 de la ley mencionada, por lo que debió haberse condenado a la parte actora al pago de los gastos y costas.

Por último, solicito se proceda al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica, pero privilegiando en todo momento el principio de mayor beneficio, ya que ese fue el contexto de la reforma al precepto 17 de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, donde se adicionó a dicho dispositivo un tercer párrafo, en el que se puntualizó "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.". Por tanto, acorde con esa aspiración social y en estricto acatamiento a los artículos citados, en los juicios o en los procedimientos relativos, todas las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con la única limitante de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la siguiente Tesis dictada recientemente, y que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2016171

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III

Materia(s): Constitucional

Tesis: (IV Región) 2o.13 K (10a.)

Página: 1524

PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO FRENTE A FORMALISMOS PROCEDIMENTALES Y SOLUCIONES DE FONDO DE LOS CONFLICTOS. ÉSTAS DEBEN PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUELLOS, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS.

Durante mucho tiempo fue motivo de crítica para los tribunales de amparo que las sentencias protectoras se concedieran por aspectos formales o procedimentales y no por temas de fondo; lo

75

cual motivó que mediante la expedición de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece), se estableciera en su artículo 189 que los órganos jurisdiccionales de amparo procederían al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica, pero privilegiando en todo momento el principio de mayor beneficio; y fue en ese contexto que por reforma al precepto 17 de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, se adicionó a dicho dispositivo un tercer párrafo, en el que se puntualizó "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.". Por tanto, acorde con esa aspiración social y en estricto acatamiento a los artículos citados, en los juicios o en los procedimientos relativos, todas las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con la única limitante de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

Amparo directo 411/2017 (cuaderno auxiliar 783/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 19 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de febrero de 2018 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SOLICITUD DE PROTECCION AMPLIA, INCLUSO POR CUESTIONES QUE NO HUBIESEN SIDO IMPUGNADAS CON ANTERIORIDAD

Si acaso existiese alguna cuestión que no hubiese sido impugnado previamente, toda vez que en la presente demanda se alega que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, solicito de manera respetuosa que bajo el principio pro-persona mencionado en líneas anteriores, se atiendan

B+A

todas y cada una de las violaciones cometidas en nuestro agravio, y se consideren al momento de dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. **Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.**

SOLICITUD DE SUPLENCIA DE LA QUEJA

Mi representado, se acoge al beneficio de la Suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 BIS Fracción VI, de la Ley de Amparo por tratarse de un asunto de violación grave al derecho fundamental de debido proceso; así como atento al contenido de la siguiente tesis jurisprudencial, emitida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 195239

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo VIII, Noviembre de 1998

Materia(s): Civil, Común

Tesis: III.1o.C. J/20

Página: 485



SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL AMPARO EN MATERIA CIVIL HA DEJADO DE SER DE Estricto DERECHO.

Del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo se infiere la suplencia de la queja deficiente en materia civil cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; disposición que obliga a los tribunales federales a estudiar el asunto en su integridad, ello, además, de acuerdo con la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO." se publicó en la página 341 del Tomo VI, Parte Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación; lo que significa que en la actualidad el amparo en materia civil ha dejado de ser de estricto derecho, pues para que el juzgador de amparo esté en aptitud de advertir si existe o no una violación manifiesta de la ley en perjuicio del peticionario de garantías que lo haya dejado sin defensa, en términos del mencionado artículo, debe, incluso ante la ausencia de conceptos de violación, analizar en su integridad el acto reclamado para luego determinar si es o no violatorio de garantías y, por ende, inconstitucional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 351/96. J.J.J. Inmuebles del Mar, S.A. de C.V. 20 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.

Amparo en revisión 27/97. Héctor Ramiro Suárez Camacho. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.

Amparo en revisión 107/97. Fernando Valdivia de la Serna. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.

Amparo en revisión 844/97. José de Jesús Loza Hernández. 4 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto

15

Gallardo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.

Amparo en revisión 624/98. Banca Cremi, S.A. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.

Notas:

Por ejecutoria de fecha 12 de noviembre de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 68/2008-PS en que participó el presente criterio.

El Tribunal Colegiado de Circuito abandonó el criterio sostenido en esta tesis, según se desprende de la que con el número III.1o.C.174 C, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 3076, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. OPERA SIEMPRE QUE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EXISTA UNA MÍNIMA CAUSA DE PEDIR."

OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA.

Con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, y toda vez que los actos reclamados fueron conocidos por los suscritos mediante el "Boletín Judicial" número "175" de fecha 11 de octubre de 2019, y surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir el 14 de octubre del 2019, esta se encuentra dentro del término previsto para promover la presente demanda de amparo.

COMPETENCIA

Sus Señorías son competentes para conocer del presente Juicio de Garantías, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 fracción V Constitucional, y de los artículos 33 y 34 de la Ley de Amparo.

P R U E B A S

De conformidad con lo ordenado en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ofrezco como pruebas en el presente juicio, las documentales públicas consistentes en las copias certificadas que se exhiben como ANEXOS "1", "2" Y "3", la Instrumental Pública de Actuaciones, y la presuncional legal y humana.

B+A

Por lo anteriormente expuesto;

A USTEDES C. MAGISTRADOS, atentamente solicito se sirvan:

PRIMERO.- Tenerme por presentado con la personalidad que tengo acreditada y como apoderado legal del quejoso, en términos del presente escrito, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, en contra de la Sentencia señalada como acto reclamado.

SEGUNDO.- Admitir la demanda en la vía y forma propuesta, y tener por exhibidas las constancias a que me refiero en el cuerpo de la presente demanda, así como solicitar de la autoridad señalada como responsable, los informes previos y justificados correspondientes.

TERCERO.- Tener por autorizadas a las personas antes señaladas para los efectos precisados.

CUARTO.- Previos los trámites de ley, conceder a mi representado el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitado.

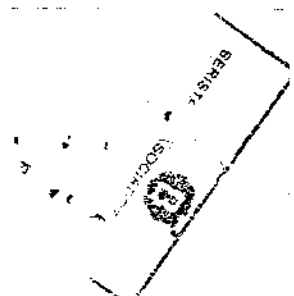
Protesto lo necesario.

Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.



135
11 OCT 19

DIGITALIZADO



EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO FUE PRESENTADA EN LA OFICIALÍA DE PARTES COMUN DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 23:14 HORAS LA RESOLUCIÓN RECURRIDA FUE PUBLICADA EN EL BOLETÍN JUDICIAL NUMERO CIENTO SETENTA Y CINCO DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE HABIENDO SURTIDO SUS EFECTOS LEGALES EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL AL DE SU PUBLICACIÓN, ESTO ES, EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, QUE LOS DÍAS INHÁBILES QUE MEDIARON ENTRE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS FUERON; 19, 20, 26 Y 27 DE OCTUBRE; 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, CERTIFICACIÓN QUE SE HACE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 178 DE LA LEY DE AMPARO EL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-----DOY FE-----

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.



SEXTA SALA CIVIL

LIC. JUAN ULLOA CRUZ.

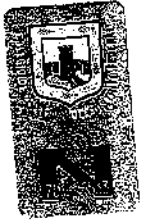
TOCA: 



MARIO RISCHIA VELÁZQUEZ

Notario 80 de la Ciudad de México

N80



LIBRO

-----INSTRUMENTO-----

En la CIUDAD DE MÉXICO, el día catorce de marzo del año dos mil diecisiete, Yo, el Licenciado **MARIO RISCHIA VELÁZQUEZ**, titular de la Notaría **OCHENTA** de la Ciudad de México, hago constar, el **PODER GENERAL** que otorga el señor

[REDACTED], a favor de los licenciados

[REDACTED], en términos de la siguiente:-----CLÁUSULA-----

--- ÚNICA. El señor [REDACTED] por medio de este acto, confiere y otorga a favor de los licenciados

[REDACTED] para que lo ejerzan conjunta o individualmente, judicial y extrajudicialmente, un **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, así como de los artículos correlativos o concordantes en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal. -----

--- De manera enunciativa y no limitativa, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, se mencionan entre otras facultades, las siguientes:-----

--- I. Para iniciar, promover y desistirse de toda clase de acciones, recursos, juicios y procedimientos, incluyendo el juicio de amparo;-----

--- II. Transigir;-----

--- III. Comprometer en árbitros;-----

--- IV. Absolver y articular posiciones;-----

--- V. Recusar;-----

--- VI. Recibir pagos;-----

--- VII. Formular denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellas cuando lo permita la ley, otorgar perdón en su caso, así como para constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público; y-----

--- VIII.- Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la poderdante.-----

----- GENERALES -----

--- El compareciente, por sus generales, manifestó se [REDACTED] originario de [REDACTED] lugar donde nació el día [REDACTED]

[REDACTED] en domicilio en calle [REDACTED]

[REDACTED] y se identifica con credencial para votar con clave de elector [REDACTED]

expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, que en fotocopia obtenida de su original que examiné y tuve a la vista, la agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra, "A".-----

----- YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE:-----

— I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente. —

— II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con el documento a que me remito y he tenido a la vista. —

— III.- Que hice al compareciente las advertencias de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante Notario y de que sus declaraciones se consideran hechas bajo protesta de decir verdad. —

— IV.- Que me aseguré de la identidad del compareciente como consta en generales y que tiene a mi juicio capacidad. —

— V.- Que le fue leído al compareciente este instrumento y le hice saber el derecho que tiene de leerlo personalmente y de que le sea explicado, por lo que lo ilustré claramente acerca de su contenido, valor y consecuencias legales respondiendo a sus cuestionamientos. —

— VI.- Que informé y expliqué al compareciente el contenido de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus alcances, procediendo a darle el aviso de privacidad de los datos proporcionados y que el compareciente, mediante la firma de este instrumento, autoriza de forma expresa al suscrito Notario, para el uso, almacenamiento y divulgación de sus datos personales, con la finalidad de que se presenten los avisos y se cumpla con las obligaciones que conforme a la Ley del Notariado para el Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables, se imponen a los Notarios Públicos, en relación con el acto que por el presente instrumento se otorga. —

— VII.- Que todas las notas complementarias que en su caso sea necesario asentar, se agregarán en documento por separado, al apéndice de este instrumento. —

— VIII.- Que el compareciente manifestó su comprensión plena firmando de conformidad el día de su fecha, en unión del suscrito Notario quien **AUTORIZA DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO**, por no haber impedimento legal para ello. **DOY FE.** —

— FIRMA DEL SEÑOR [REDACTED] — FIRMA DEL NOTARIO. EL SELLO DE AUTORIZAR. —

— INSERCIÓN —

— **ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.** —

— “En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. —

— En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. —

— En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. —

— Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. —

— Los notarios insertarán éste artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.”.

YO, EL LICENCIADO **MARIO RISCHIA VELÁZQUEZ**, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO OCHENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPIDO ESTE **PRIMER**



3

MARIO RISCHIA VELÁZQUEZ

Notario 80 de la Ciudad de México

N80



TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN DEL PROTOCOLO A MI CARGO.- VA EN TRES PÁGINAS, SELLADAS Y RUBRICADAS POR MÍ Y FOTOCOPIA, EN SU CASO, DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN SU APÉNDICE Y QUE POR LEY DEBA REPRODUCIRSE, TAMBIÉN SELLADO Y RUBRICADO POR MÍ.- ESTÁ COTEJADO Y SACADO EN TINTA FIJA.- SE EXPIDE PARA LOS **APODERADOS** LICENCIADOS.

[REDACTED] - CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.

GCO/het.

EXP. 17-80-200.

2. [Handwritten signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CDMX
PRESIDENCIA

RECIBIDO
- 4 NOV 2019

OFICIALÍA DE PARTES COMÚN CIVIL,
CUANTÍA MENOR, ORALIDAD, FAMILIAR
Y SECCIÓN SALAS No. 31

Mesa IV.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia
Civil en la Ciudad de México

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
PRINCIPAL

Mesa: IV

Número Expediente: [REDACTED]

Iniciado el: 27/01/2017

Quejoso: [REDACTED]

Promovido en su nombre: [REDACTED]

Autoridad Responsable: JEFES DE LA JEFATURA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPLENTE DE LA CIUDAD DE
MEXICO - COMISION NACIONAL BANCARIA Y FINANCIERA

Tercero Interesado: [REDACTED]

Acto Reclamado: Actos fuera de juicio [REDACTED]

Artículos Constitucionales Violados: 14 Y 16

Fecha del auto de suspensión:

Fecha de sentencia:

Resolución inicial:

Sentido:

Fecha en que se presentó:

Fecha de emisión:

Expediente constante de:

29/01/18

Lic. Francisco Hernández

Lic. ANGELICA FLORES JORDAN



LEGADO
DEL

IO DE DEMANDA DE AMPARO

OCC 1.1.0.41

Número de registro: 000764/2017

Fecha de recibido: jueves, 26/01/2017

Fecha de turno: jueves, 26/01/2017

Hora de recibido: 20:24 Hrs.

Hora de turno: 20:29 Hrs.

Turnado al juzgado: JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de asunto: NORMAL

Autoridad: SALA CIV.T.S.J.CDMX

Quejoso: [REDACTED]

Tercera interesado: [REDACTED]

Acto reclamado: SENTENCIA 17 ENERO DE 2017

Juzgado de origen: JUEZ 15 CIV.CDMX

cedencia:

MATERIA CIVIL

ma: SI

io AL MÉXICO

Atenta contra la libertad: NO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OFICINA DE CORRESPONDENCIA
DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CDMX

Número de juicio de origen: 56416

Anexos: ***

SISE

CAPTURADO

Ingreso: VENTANILLA

NEUN

Descripción de anexos: ***

Observaciones: JMGB

Remitido por acuerdo: ***

Fecha de cambio de turno: ***

Hora de cambio de turno: ***

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega: _____

Servidor Público que recibe: _____

Firma: _____

Órgano de su adscripción: _____

Fecha: _____ Hora: _____

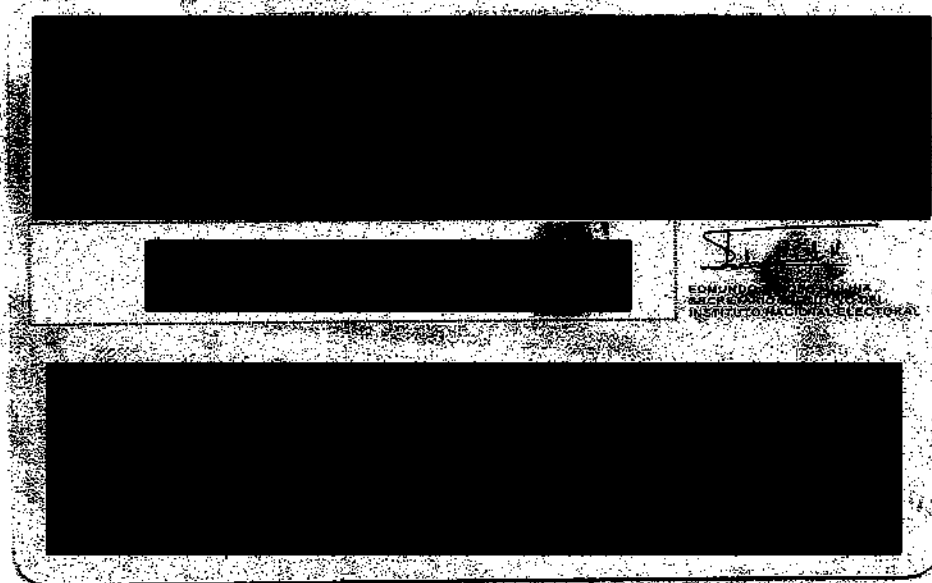
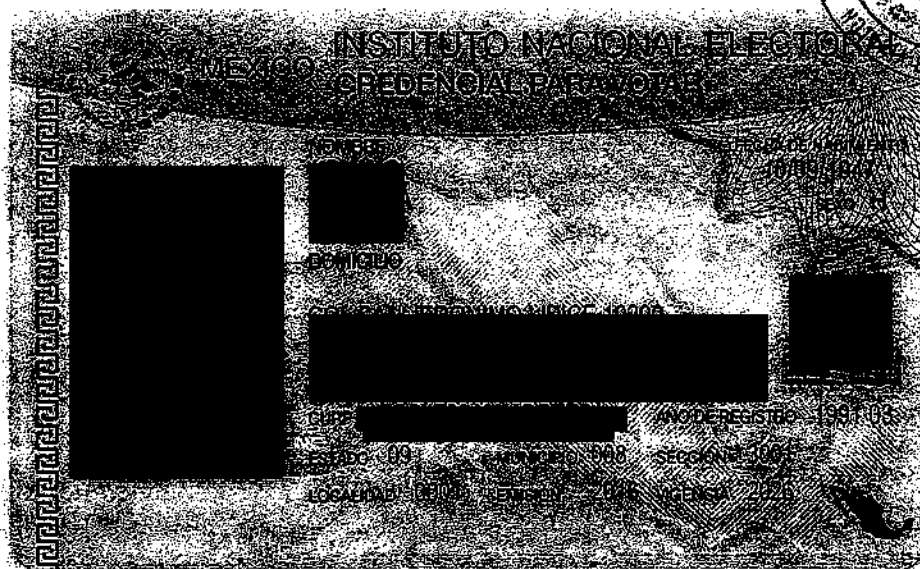
Fecha: _____ Hora: _____

Firma: _____



ENTREGA

RAFAEL ANZURES AVILA
RECEPCIÓN



B+A

abogados

DEPENDENCIA
G N
DE DISTRITO

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

1736

2017 ENE 26 P 8:24

AMPARO INDIRECTO

2017 ENE 27 A 9:00

Jocho Hualde

QUEJOSO:

EN LA CIUDAD DE MEXICO

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

[REDACTED] por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] autorizando en los términos más amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo a los señores [REDACTED] con Cédula Profesional num. [REDACTED], [REDACTED] con Cédula Profesional num. [REDACTED] y número de Registro Único ante el Poder Judicial Federal [REDACTED] de fecha 16 de noviembre de 2005, [REDACTED] con Cédula Profesional número [REDACTED] [REDACTED] con Cédula Profesional número 4582860, así como para recibir indistintamente notificaciones, toda clase de documentos y valores, y hacer uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza para la reproducción de actuaciones judiciales y documentos exhibidos, a los C. [REDACTED]

[REDACTED] ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

10 SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, en los artículos 11, 35, 107, 108, y demás aplicables de la Ley de Amparo, vengo a promover en tiempo y forma **Demanda de Amparo Indirecto** en contra de la sentencia de fecha 17 de enero, de 2017, donde confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, que indebidamente e ilegalmente ordena girar Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que esta dependencia rindiese un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años, sin que haya sido oído ni vencido en juicio, sin que dicha medida constituya prueba en ningún sentido para acreditar daño moral alguno, y por considerar que el mismo resulta violatorio de los Derechos Fundamentales del suscrito.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, proporciono al efecto la siguiente información:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO:

[REDACTED], con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED]

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO:

[REDACTED] con domicilio en la calle de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:

- **LOS C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEXTA SALA CIVIL**, con domicilio en la calle de Río de la Plata número 48 piso 6, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 en esta Ciudad.

- **LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**, como autoridad responsable ejecutora, con domicilio en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur. Piso 10, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.

IV.- ACTO RECLAMADO:

La sentencia de fecha 17 de enero de 2017, que confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, y que indebidamente ordena girar un Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que esta dependencia rindiese informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años, sin que haya sido oído ni vencido en juicio, y sin que dicha medida constituya prueba en ningún sentido para acreditar daño moral alguno, es decir la acción del actor en el juicio natural.

V.- FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO:

El acto reclamado le fue notificado al suscrito mediante "Boletín Judicial" número "8" de fecha 18 de enero de 2017, y surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir el 19 de enero del 2017.

VI.- PRECEPTOS QUE CONTIENEN DERECHOS HUMANOS VIOLADOS:

Los artículos 1, 14, 16 y 133 Constitucionales, así como los artículos 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

VII.- PROTESTA DE DECIR VERDAD:


Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los siguientes hechos, son los antecedentes del acto que causa una violación a los Derechos Humanos de mi representado.

4 4

[REDACTED]

[REDACTED]

EXPEDIENTE: [REDACTED]



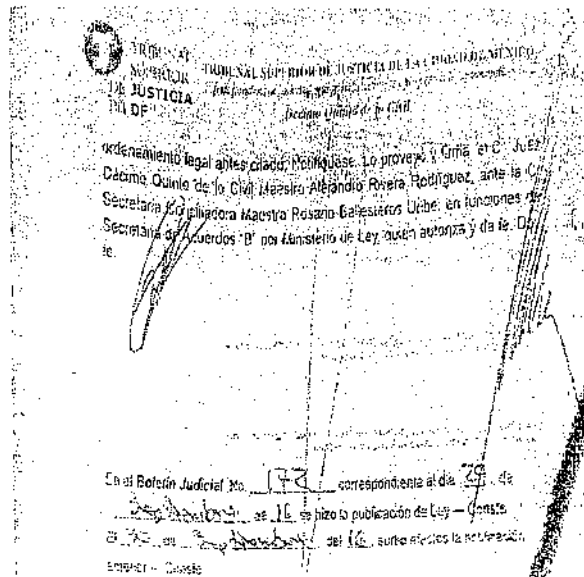
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis

2019年12月15日

⑤





3.- Por lo anterior, con fecha 5 de octubre de 2016, el suscrito interpuso en tiempo y forma, recurso de apelación de tramitación inmediata en ambos efectos, toda vez que dicha medida ordenaba que se ventilase información confidencial del suscrito, sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que dicha medida constituyese medio de prueba en ningún sentido para acreditar el supuesto daño moral del que se duele el hoy Tercero Interesado.

4.- No obstante la evidente violación a los derechos fundamentales del suscrito, con fecha 17 de enero del año en curso, la Sexta Sala Civil (hoy Autoridad Responsable), dentro del Toca [REDACTED] dictó la sentencia señalada como acto reclamado, confirmando de manera por demás displicente e ilegal el auto recurrido, motivo por el cual me veo en la necesidad de acudir ante su Señoría, a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.

SEGUNDO
TERCERA CIVIL
MÉXICO

CONCEPTOS DE VIOLACION

PRIMERO.- La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), al mencionar de manera por demás desafortunada en el Considerando II del Acto Reclamado, que los dos agravios formulados resultan infundados, toda vez que por lo que se refiere a la supuesta violación de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Sala se ve impedida para hacer consideraciones sobre el particular al estar reservado su

análisis y resolución a las autoridades federales. (énfasis añadido).

Pues bien, lo anterior resulta a todas luces falso; Desde hace muchos años, si bien de manera tímida ya se contemplaba y aplicaba por parte de algunos Jueces el Control Difuso de la Constitución contenido en el artículo 133 Constitucional, es a partir de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 y de la publicación de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 293/2011 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los órganos jurisdiccionales comienzan a tener un papel más activo en la protección de derechos fundamentales.

El Pleno de la Corte realizó una clara interpretación del contenido del artículo 1º constitucional reformado en 2011, en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone por "normas de derechos humanos", cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por nuestro país con independencia de la materia de éste, enfocando sus esfuerzos hacia su objetivo principal que es la tutela efectiva de los derechos humanos fundamentales, contempladas en la Constitución o en los Tratados Internacionales celebrados por nuestro país, es decir que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales se han integrado expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, para ampliar el catálogo constitucional de derechos humanos como un "bloque de derechos".

En este sentido, la adopción del principio *pro-persona*, resulta ser un sistema hermenéutico que el juzgador forzosamente deberá usar para emplear el derecho más protector de derechos humanos, sin importar si se encuentra en la Constitución, en los Tratados Internacionales o en las Leyes Locales.

Pues bien, ya sea por interpretación "conforme" a la Constitución o bien por Control de Convencionalidad, el Juzgador deberá aplicar el derecho humano o fundamental más benéfico y protector para el gobernado bajo el principio *Pro-Persona* mencionado, tal como se observa en la jurisprudencia por Contradicción de Tesis 293/2011, dictada recientemente por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, y que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2006224

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)

Página: 202

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.



10

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular el voto concurrente; Lilia María Aguilar Morales, con reservas respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Sergio A. Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a voto concurrente en relación con los límites; Alberto Pérez Dayán, quien se manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial

VICARIO
MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D. DE MEXICO

DECIMO
TO EN MA
CIUDAD DE

2

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUELLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

COMO SEGUNDA
EN MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

Por lo anterior, resulta claro que el sentido del contenido de los artículos 1 y 133 Constitucionales, como de la Jurisprudencia transcrita, es de que **TODAS LAS AUTORIDADES (judiciales o no)**, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal como se observa en el tercer párrafo del artículo Primero y que a la letra dice:

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

En ese sentido, desde el más modesto Juez de Paz, hasta los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución, además de que existe disposición expresa de velar por el contenido y protección de la Constitución por parte de todos los Jueces en el artículo 133 Constitucional (Pacto Comisorio), obligación que la responsable hace a un lado de manera ilegal, omitiendo entrar al fondo del asunto de la violación de los derechos humanos señalados, so pretexto de encontrarse impedida para hacer consideraciones sobre el particular, y dejando en consecuencia al suscrito en completo estado de indefensión.

SEGUNDO. La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 278, 279, 285, 289, 291, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del artículo (41) y demás relativos de la "Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal, ya que la hoy autoridad responsable de manera ilegal confirma el auto impugnado en la apelación que resuelve, omitiendo entrar al fondo del asunto, en plena incongruencia con lo expresado y hecho valer en el recurso.

En efecto, dicha responsable después de mencionar encontrarse impedida para hacer consideraciones de derechos humanos contenidos en artículos de la Constitución, se limita a pretender "fundar y motivar" su resolución, mencionando de manera escueta y simple que el Juez natural fundó el auto impugnado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, que son los artículos que contemplan el mecanismo y los tiempos para el ofrecimiento y recepción de pruebas, pero no son los que funden la admisión de un Oficio a toda luces improcedente, y no obstante lo anterior, la responsable confirma la indebida admisión del oficio multicitado al mencionar solamente que se trata de un juicio tramitado en la vía ordinaria civil, y de que no existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata. Púes bien, por increíble que parezca, con este "argumento" acaba la pretendida "fundamentación y motivación" de la responsable, absteniéndose claramente de resolver bajo el principio de congruencia, es decir de ser

clara, precisa y congruente con el recurso de apelación interpuesto, resolviendo sobre el contenido de todos los agravios hechos valer por el suscrito, ya que si bien es cierto que el juzgador puede valerse de cualquier documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que la prueba no esté prohibida por la ley ni sea contraria a la moral, éste documento se encuentra condicionado por ley a que deba ser idóneo **para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos**, situación que no acontece en el presente caso, ya que el informe solicitado que deberá rendir la Comisión Nacional Bancaria, respecto de las cuentas y movimientos del suscrito en los últimos 3 años, no van a dar como resultado el conocer la verdad sobre los puntos controvertidos; en efecto, el informe que refleje si el suscrito es rico o pobre o lo que sea, en nada va a coadyuvar a la búsqueda de la verdad, ni tampoco acreditará si el hoy tercero interesado sufrió o no de daño moral alguno, ya que el contenido del mismo nada tiene que ver con la litis planteada, y aun así fue ordenado por el Juez natural, y dicha decisión confirmada de manera ilegal por la hoy autoridad responsable.

En ese mismo sentido, si bien de conformidad con el artículo 279 del Código Procesal, el Juzgador podrá decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, debe tener la limitante de que la misma deberá ser conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, debiendo en la práctica de estas diligencias, evitar sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y cuando van todo su igualdad, circunstancia que evidentemente no sucedió con el juez natural al ordenar una "prueba" NO idónea para conocer la verdad, lesionando de paso el derecho del suscrito a la confidencialidad que guarda por ley la información solicitada, por lo que la responsable al confirmar dicha situación a través del acto reclamado, me deja una vez más en estado de indefensión.

Pues bien, el juzgador debió de hacerse valer de pruebas que estén permitidas por la ley y **se refieran a los puntos cuestionados**, de aquellos elementos que **puedan producir convicción en el ánimo del juzgador** acerca de los hechos controvertidos o dudosos, situación que no sucedió ya que es un hecho notorio y de elemental sentido común, deducir que la información (confidencial) de las cuentas del suscrito de los últimos 3 años, no se refiere a los puntos cuestionados en el juicio natural, **ni tampoco pueden producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos**, toda vez que en términos del artículo 41 de la "Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito

Federal" que es la ley especial de la materia del juicio natural, la sanción económica en caso de resultar procedente la acción de daño moral claro está, en ningún caso deberá exceder de [REDACTED]

[REDACTED] por lo que resulta irrelevante saber si existe mucho o poco dinero en las cuentas del suscrito, ya que la sanción en caso de que el suscrito llegase a ser condenado en el juicio natural se encuentra topada, y es un monto que no puede ser determinado de manera discrecional por el juzgador, o que exista una fórmula en donde el monto de mis ingresos o ahorros sea un ingrediente para determinar el monto de la sanción, como se da por ejemplo en la determinación de una pensión alimenticia. Por lo anterior, se ordena un oficio para dar a conocer información confidencial del suscrito, en el desahogo de una "prueba" no idónea para acreditar los extremos de la acción intentada, y ante lo anterior, la responsable de manera ilegal confirma esta situación a través del acto reclamado, sin mayor motivación o fundamentación legal, dejándome una vez más en completo estado de indefensión.

TERCERO.- La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 278, 279, 285, 289, 291, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito a contrario sensu, ya que la responsable confirma la indebida e ilegal admisión y trámite de la "Prueba" documental marcada con el número 12 del escrito de ofrecimiento de pruebas del hoy tercero interesado, consistente en el informe y copia certificada que rinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde diga:

- a) Si existen cuentas bancarias a nombre del suscrito [REDACTED]
- b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre del suscrito, y
- c) Remita al Juzgado natural, copia certificada de los estados de cuenta de las cuentas bancarias a nombre del suscrito, de los últimos 3 años,

Pues bien, la admisión de dicha "prueba", y su posterior confirmación por parte de la responsable, resulta por lo menos infundada e improcedente, toda vez que se trata de **Información Confidencial** del suscrito protegida por ley, sin que se de en el caso en concreto la excepción a que hace referencia el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, que a la letra dice:

Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, **tendrá carácter confidencial**, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (énfasis añadido)

En efecto, el juicio natural es un juicio Ordinario Civil, NO un juicio Ejecutivo donde exista embargo o providencia alguna, ni existe Providencia Precautoria justificada y/o concedida para que se violenten los derechos fundamentales del suscrito, ordenando que se exhiban y ventilen los datos de mis cuentas bancarias en copias certificadas por los últimos 3 años, tal como si ya hubiese sido condenado y nos encontráramos en etapa de ejecución de sentencia. En efecto, dicha admisión y trámite resulta no solo ilegal, sino absurda, ya que dicha información puede constituir cualquier cosa salvo una "prueba", y mucho menos una prueba idónea que sirva para acreditar el supuesto daño

moral que el tercero interesado alega haber sufrido con las publicaciones materia del juicio natural, de allí la ilegalidad del acto reclamado al confirmar la procedencia del oficio. En efecto, el hecho de que el suscrito tenga o no cuentas bancarias, así como los movimientos y saldos de las mismas por los últimos 3 años, resulta irrelevante para demostrar la supuesta afectación por daño moral, que en términos de ley consisten en 3 elementos, siendo el primero demostrar el supuesto daño, el segundo en que dicho daño sea consecuencia de un acto ilícito, y el tercero que exista una relación de causa-efecto entre los 2 primeros, siendo un hecho notorio que con la **información confidencial** de las cuentas bancarias del suscrito, jamás se podrá acreditar lo anterior, por lo que la confirmación de la responsable de la admisión y tramitación de la prueba referida, me deja una vez más en completo estado de indefensión.

CUARTO.- La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 278, 279, 285, 289, 291, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que el mismo además de ser incongruente, carece de fundamentación y motivación, absteniéndose la responsable de cumplir con los principios de exhaustividad, legalidad y congruencia que deben contener toda resolución judicial, toda vez que apoya su decisión de confirmar la admisión y trámite de la "prueba" multiplicada sin que dicha medida o elemento de "prueba" se encuentre contemplado en la Ley especial de la materia, y lo hace además sin fundamento ni motivación alguna, dejando en consecuencia a mi mandante en completo estado de indefensión.

COMO SE VE EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la siguiente Jurisprudencia por Contradicción de Tesis dictada por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, y que a la letra dice:

Novena Época
Registro: 176546
Primera Sala
Jurisprudencia
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Diciembre de 2005
Materia(s): (Común)



Tesis: 1a./J. 139/2005

Pag: 162

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.

Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión,



DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO

5



así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.

Pues bien, con lo anterior la responsable viola los derechos fundamentales del suscrito de legalidad y debido proceso, toda vez que la sentencia señalada como acto reclamado carece completamente de motivación y fundamentación.

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

Por medio del presente juicio de Amparo, solicito la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado ordenado por la autoridad responsable, consistente en la confirmación de la admisión y trámite de un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitándole informe y copia certificada que diga:

DÉCIMO SEGUNDO
OFICIO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

- a) Si existen cuentas bancarias a nombre del suscrito
- b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre del suscrito, y
- c) Remita al Juzgado natural, copia certificada de los estados de cuenta de las cuentas bancarias a nombre del suscrito, de los últimos 3 años,

Respecto de la Autoridad Responsable ejecutora, es decir de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, para el caso de que le haya llegado ya el Oficio arriba mencionado por parte del Juzgado natural, la suspensión se solicita para el efecto de que se ordene a dicha Comisión, de **no proporcionar la información confidencial del suscrito solicitada**, hasta en tanto no se resuelva el presente juicio de Amparo.

[Handwritten signature]



Resulta procedente la suspensión solicitada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 131, 138 y demás aplicables de la Ley de Amparo, en virtud de que con la suspensión solicitada no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social.

OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA.

Con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, y toda vez que el acto reclamado fue conocido por el suscrito mediante el "Boletín Judicial" número "8" de fecha 18 de enero de 2017, y surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir el 19 de enero del 2017, me encuentro dentro del término previsto para promover la presente demanda.

COMPETENCIA.

Su Señoría es competente para conocer del presente Juicio de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII Constitucional, y de los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo.

PRUEBAS

En términos del artículo 119 segundo párrafo de la nueva Ley de Amparo, en adición a las constancias que remita la responsable, ofrezco la Instrumental Pública de Actuaciones y la Presuncional Legal y Humana.

Por lo expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto reclamado que ha quedado determinado en el capítulo correspondiente de la presente demanda.

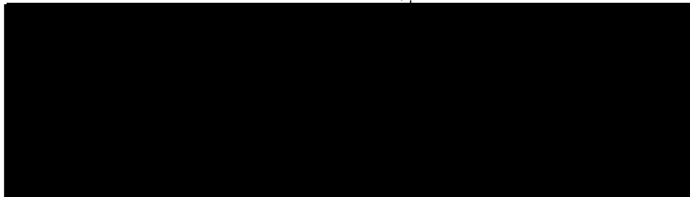
SEGUNDO.- Admitir la demanda en la vía y forma propuesta y solicitar de las autoridades señaladas como responsables, los informes previos y justificados correspondientes.

TERCERO.- Tener por autorizadas a las personas antes señaladas para los efectos precisados.

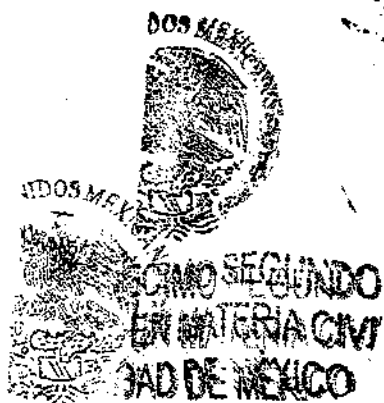
CUARTO.- Ordenar la suspensión provisional del acto reclamado, y en su momento la suspensión definitiva.

QUINTO.- Previos los trámites de ley, conceder al suscrito el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitados.

Protesto lo necesario.



Ciudad de México, a veinticinco del enero de dos mil diecisiete.



DECIM
EN MA
IDAD DE



19

En la Ciudad de México, treinta de enero de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el escrito de demanda registrado con el número de correspondencia 1738. Asimismo, certifica que con el escrito de demanda se exhibieron ocho copias de la misma, sin anexos, la cual quedó registrada en el juicio de amparo relativo al juicio de amparo [REDACTED].
Conste.

Ciudad de México, treinta de enero de dos mil diecisiete.

Vista la demanda de cuenta promovida por [REDACTED] por propio derecho; contra actos de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno con el número [REDACTED].

A efecto de acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que **"Bajo protesta de decir verdad"** y dentro del plazo de **cinco días** contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído; cumpla con lo siguiente:

1.- Indique si es su deseo señalar al **Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México**, como autoridad responsable, y que acto le reclama, toda vez que de su demanda se desprende que dicha autoridad fue quien dictó el auto del que deriva el acto reclamado, y de ser afirmativo deberá exhibir una copia más del escrito de demanda y escrito aclaratorio respectivo, en caso de no hacerlo solo se continuara con las autoridades señaladas en su escrito de su demanda.

COPIA SEGUINDA
DE LA MATERIA C
JUDICIAL DE MÉXICO

2.- A efecto de fijar bien la litis, indique qué acto le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsable en su escrito inicial de demanda.

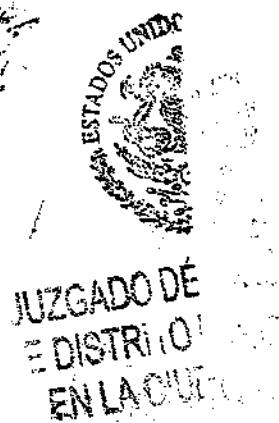
3.- Transcriba o resuma los puntos resolutivos de la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el toca de apelación [REDACTED]

4. Indique el estado procesal que guarda el juicio [REDACTED] y cuál es la última actuación a dicha contienda.

5. Señale para qué efectos solicita la suspensión provisional y definitiva, toda vez que no es claro en el apartado correspondiente.

6. En la inteligencia de que deberá exhibir **seis** copias de su escrito aclaratorio, **dos** para las autoridades responsables, **dos** para la apertura del incidente de suspensión **una** para la tercera interesada y **una** más para dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J.106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del tomo XXII, octubre de 2005, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente:





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional."

Por lo cual, hágase del conocimiento del promovente y autorizados el contenido del artículo 261 de la ley en comento, el cual dispone:

"Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:

Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la

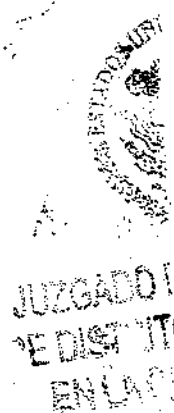
NO SEGUNDO
MATERIA CÍVIL
DE MÉXICO

libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales."

Es aplicable al caso por analogía, la tesis XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871 del Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

"ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, en virtud de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda."

Por otro lado, se apercibe al promovente, que de no desahogar las prevenciones de que se trata en los términos señalados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, ello, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.





21

21

Por otra parte, gírese atento oficio al **Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México**, para que dentro del término de **CUARENTA Y OCHO HORAS** contadas a partir de que sea legalmente notificado de este proveído, informe a este Juzgado Federal lo siguiente:

- Quiénes son las partes, así como sus domicilios señalados por estas en el juicio [REDACTED]
- Cuál es el estado procesal que guarda el juicio ordinario civil [REDACTED]
- Remita copia certificada del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Debiendo remitir a este órgano jurisdiccional copias certificadas legibles de las constancias que acrediten lo requerido; ello con independencia de haberle sido requerido al peticionario del juicio de amparo en líneas precedentes; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una medida de apremio en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo.

En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del quejoso el que se indica en el escrito de cuenta, ubicado en [REDACTED]

Asimismo, téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a [REDACTED]

[REDACTED], por tener inscritos los datos de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Y únicamente para recibir notificaciones, toda clase de documentos y valores, hacer uso de medios electrónicos, a las personas que señala en su escrito.

Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Notifíquese personalmente al quejoso y por medio de oficio al Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Rubén Benítez Hernández**, quien autoriza. Doy fe.

rg

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giró oficio [REDACTED] a la autoridad responsable, notificando el auto que antecede. Conste.



JUZGADO DE
DISTRITO
EN LA CIUDAD



NOTIFICACIÓN PERSONAL

JUICIO DE AMPARO [REDACTED]

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS once HORAS CON cinquenta MINUTOS, DEL DÍA veinti y uno DEL MES DE enero DE DOS MIL DIECISIETE, LA SUSCRITA LICENCIADA TERESA JUÁREZ CASTRO, ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN **PROVEIDO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE**, DICTADO EN LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL **CUADERNO PRINCIPAL** DERIVADO DEL **JUICIO DE AMPARO** REGISTRADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE [REDACTED] DEL INDICE DEL ÓRGANO FEDERAL DE MI ADSCRIPCIÓN; ME CONSTITUYO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA EN EL DOMICILIO UBICADO EN: [REDACTED]

[REDACTED] EN BUSCA DE [REDACTED] Y/O DE SUS AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, A QUIEN LE ATAÑE EL CARÁCTER DE **QUEJOSO** EN EL JUICIO CITADO Y BIEN CERCIORADA DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS PARA LA PRÁCTICA DE LA PRESENTE DILIGENCIA TODA VEZ QUE ELLO SE DESPRENDE DE SENDAS PLACAS OFICIALES COLOCADAS EN LA ESQUINA DE DICHA CALLE POR COINCIDIR LA NUMERACIÓN, LA COLONIA Y DELEGACIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO POR HABERMELO MANIFESTADO QUIEN DIJO LLAMARSE [REDACTED] Y SE IDENTIFICA COMO [REDACTED]

[REDACTED] LA CUAL EN UNA DE SUS CARAS TIENE ADHERIDA UNA FOTOGRAFIA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISIONOMICOS DE SU OSTENDANTE, DOY FE HABER TENIDO A LA VISTA Y DEVUELVO AL INTERESADO POR CONSIDERAR INNECESARIA SU RETENCIÓN, PERSONA ANTE QUIEN ME IDENTIFIQUE PLENAMENTE COMO ACTUARIA JUDICIAL CON UNA CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION QUE ME ACREDITA COMO TAL Y LE REQUERI LA PRESENCIA DE LA BUSCADA, DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTA O DE ALGUNO DE SUS AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, HACIENDO MENCION DE LOS NOMBRES DE TODOS Y CADA UNOS DE ELLOS, A LO QUE MANIFIESTA fungir como autorizado por el POR LO QUE PROCEDO A NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DEL **PROVEIDO DE FECHA INDICADA**, ENTREGÁNDOLE EN ESTE ACTO **COPIA INTEGRAL, AUTORIZADA, SELLADA Y COTEJADA DEL PROVEIDO CITADO**, QUIEN MANIFIESTA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD EL MISMO Y SI FIRMA PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA, EN UNIÓN DE LA SUSCRITA POR ASÍ CONSIDERARLO CONVENIENTE.- CONSTE.- DOY FE.- LA ACTUARIA JUDICIAL LICENCIADA TERESA JUAREZ CASTRO.-



TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
DF

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

23

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO

2126

ASUNTO: INFORME.

2017 FEB -1 P 1:51

AMPARO: [REDACTED]

QUEJOSO: [REDACTED]

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

**JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.**

JUZGADO 15 CIVIL

SECRETARIA "A"

EXP. [REDACTED]

OF. NUM.

En contestación a su oficio con numero [REDACTED] de treinta de enero de dos mil diecisiete y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta y uno de enero del presente año, dictado en el cuaderno de amparo citado al rubro deducido del juicio **ORDINARIO CIVIL**, promovido por [REDACTED] en contra de [REDACTED]

[REDACTED], se le informa a la Autoridad Federal, en tiempo y forma lo siguiente:

1.- Se hace del conocimiento que las partes en el presente juicio son: parte actora [REDACTED] con domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] así como la parte demandada [REDACTED]

[REDACTED] con domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED]

2.- Que el presente asunto se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, toda vez que el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, fue apelado por las partes y resuelto por la Sexta Sala Civil de este Tribunal, confirmando dicho auto.

3.- Se remite copia certificada del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

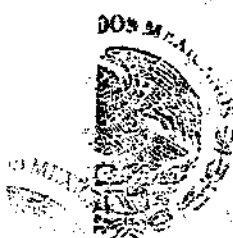
Ciudad de México, a 1 de Febrero de 2017

EL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL



JUZGADO DÉCIMO QUINTO
DE LO CIVIL

MTRO. ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



PRIMO TERCER TRIBUNAL
LEGADO EN INTERVENCIÓN
DEL PRIMER CIRCUITO

JOSE GUINDO
MATERIA CIVIL
EXCO

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ----- Instancia: Décimo Quinto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: B Documento: acuerdo publicado: 2016-09-29
Firmante: JC15J NAS: 5110-0880-7528-4576-275

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ----- Instancia: Décimo Quinto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: B Documento: acuerdo publicado: 2016-09-29
Firmante: JC15SB NAS: 5110-0880-7528-4576-275

Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Dada nueva cuenta con los presentes autos y visto que ambas partes han ofrecido pruebas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: Se señala para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Se admiten todas las pruebas ofrecidas por ambas partes. En preparación de las pruebas confesionales admitidas, a cargo del demandado [REDACTED] y a cargo del actor [REDACTED]

[REDACTED] cíteseles personalmente por lo menos con DOS DÍAS de anticipación al señalado, para que comparezcan a absolver posiciones de manera personal y no por conducto de apoderado legal, apercibidos que en caso de no comparecer sin justa causa, serán declarados confesos de todas y cada una de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. En preparación de las pruebas testimoniales ofrecida por la parte demandada; por lo que corresponde a la marcada con el número 2, de su escrito ofertorio de pruebas, dígamele que dentro del término de TRES DÍAS, deberá reducir a dos el número de sus testigos, apercibido que de no hacerlo, el Suscrito lo hará en su rebeldía; por lo que corresponde a la marcada con el número 3, prevengasele al oferente de la prueba, para que el día y hora señalados presente a sus testigos los CC. [REDACTED]

[REDACTED] apercibido que de no hacerlo, se declarará desierta dicha probanza por falta de interés jurídico del oferente de la prueba. Por lo que respecta a la prueba marcada con el número 12, como lo solicita gírese oficio a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a fin de que rinda el informe con los puntos que indica el oferente de la prueba, así mismo, remita copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarias a nombre del C. [REDACTED], de los últimos tres años. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el actor, y marcadas con los número 14, 15 y 16, respecto a las periciales en materias de PSICOLOGÍA, INFORMÁTICA, y TRABAJO SOCIAL, con fundamento en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles, se da vista a la parte demandada, para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste sobre la pertinencia de tales pruebas, y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictamen, y para que designe perito de su parte debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya propuesto el oferente, así como indicar su cédula profesional o documento que acredite su Calidad de Perito, requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere el primer párrafo de la fracción VI del artículo 347 del mismo

T TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
DEL DF

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía"

Décimo Quinto de lo Civil

ordenamiento legal antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Décimo Quinto de lo Civil Maestro Alejandro Rivera Rodríguez, ante la C.
Secretaria Conciliadora Maestra Rosario Ballesteros Uribe, en funciones de
Secretaria de Acuerdos "B" por Ministerio de Ley, quien autoriza y da fe. Doy
fe.

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin: IF4EABEIAAYFAI08RsACGkQWymFedtheZMJHAD8DHCFqve4cD4mtXU62enReR
96kpL0CjOUaW9lA3IAf3k27K56rV4ATxeSf0m5ab0uz600KsAhVXONH4GK9 =9jdP

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin: IF4EABEIAAYFAI08RsACGkQWymFedtheZOkTgDfRL2pzyDGNb/z7djh0JC8q
WbAFQHzn07KqW715IAJImx6veYcC+GRSaUa7LxMble21Ne6B1kPYqs8xh5P =p3Z8

En el Boletín Judicial No. 172 correspondiente al día 29 de

3 de Septiembre de 16 se hizo la publicación de Ley.— Conste.

El 30 de 3 de Septiembre del 16, surtió efectos la notificación
anterior.— Conste.



DÉCIMO QUINTO
DE LO CIVIL

DÉCIMO SEGUNDO
TO EN MATERIA OF
CIUDAD DE MÉXICO



TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
DEL DF

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía"

Décimo Quinto de lo Civil

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ----- Instancia: Décimo Quinto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaria: B Documento: acuerdo publicado: 2016-11-07

Firmante: JC16SB N.A.S. 5110-1099-2895-2660-934

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- Instancia: Décimo Quinto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaria: B Documento: acuerdo publicado: 2016-11-07

Firmante: JC16SJ N.A.S. 5110-1099-2895-2660-934

Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

Dada nueva cuenta con los presentes autos y toda vez que por proveído de fecha veintisiete de octubre del año en curso, se tuvo al C. [REDACTED], en su carácter de mandatario judicial de la parte demandada [REDACTED] exhibiendo el billete de deposito numero [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha once de octubre del año curso, que ordeno se exhibiera la garantía antes señalada, lo anterior a efecto de admitir el recurso de apelación en AMBOS EFECTOS, y toda vez que se ha cumplido con lo anterior y admitido que fue el recurso en contra del proveído de fecha veintiocho de septiembre del presente año, atento a lo dispuesto por los artículos 42, 688, 689, 691, 692, 694, 700 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se tiene a la apelante formulando agravios, y con los mismos dese vista a su contraria por el término de SEIS DÍAS para que produzca contestación a los mismos, hecho que sea remítanse los autos y documentos a la OFICIALÍA DE PARTES COMÚN PARA SALAS, A EFECTO DE QUE SE LE ASIGNE SALA, para la substanciación y resolución de dicho recurso, quedando debidamente citadas las partes para comparecer ante la Superioridad a deducir sus derechos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Secretaria de Acuerdos "A" en funciones de C. Juez por Ministerio de Ley, Licenciada Hermelinda Moran Resendis, ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" por Ministerio de Ley, Maestra Rosario Ballesteros Uribe, con quien actúa y da fe. Doy Fe.

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAgcsyAACgkCWymFedheZCQAD4Vn6M2pKvFUE7EzmFao0

0FmW12Skpzv+pY(EA)3SmYEOBLFGXN5x8AecpswOAtuA0PCZ0IC81g5JYjV=stDv

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAgcsyAACgkCWymFedheZCQAD4Vn6M2pKvFUE7EzmFao0

pr4veU7P60a0HLPdnA4j0UBF00aHLWlyWxpGk2uLpM4S5SGUaIP8VUjv.FE=stDv

En el Boletín Judicial No. 196 correspondiente al día 7 de

Noviembre de 16 se hizo la publicación de Ley.— Conste.

El 8 de Noviembre del 16, surtió efectos la notificación anterior.— Conste.



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

"2017, HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL"

Sírvase usted mencionar el número de Toca al contestar este oficio

SALA

Secretaría de Acuerdos

SEXTA SALA CIVIL.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

EXP:

TOCA:

OFICIO

Toca Núm.

C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

Of. Núm.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

P R E S E N T E.

En el toca anotado al rubro del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por VALDÉS HUMBERTO.; en contra de [REDACTED]; remito a usted copia certificada de la sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, dictada por esta sala con tanto de seis fojas útiles. Así mismo le remito el expediente principal en 348 fojas útiles, así como los documentos que se describen en:

- 1.- Una copia certificada de título, en una foja.
- 2.- Una copia certificada de Diploma, en una foja.
- 3.- Una copia certificada de documentos de acreditación, en una foja.
- 4.- Una copia certificada de Master, en una foja.
- 5.- Una copia certificada de Master, en una foja.
- 6.- Un Testimonio de Escritura número [REDACTED]
- 7.- Un Testimonio de Escritura número [REDACTED]
- 8.- Un Libro con el título Atrocidades Indígenas.
- 9.- Recorte de periódico de fecha 20 de enero de 2016.
- 10.- Impresión de Internet del periódico El Siglo de Torreón, en tres fojas.
- 11.- Impresión de Internet del periódico Reforma, en tres fojas.
- 12.- Impresión de Internet de Twitter, en una foja.
- 13.- Copia simple de recortes de periódico, en dos fojas.
- 14.- Sobre cerrado que dice contener memoria USB, con dos impresiones de Internet.
- 15.- Sobre cerrado que dice contener memoria USB, con dos impresiones de Internet.
- 16.- Copia simple de escrito, en dos fojas.
- 17.- Una copia de proveído de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

MÉXICO D.F. A 27 ENERO DEL 2017.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

DE LA SEXTA SALA CIVIL.

JUC/JOAN ULLOA CRUZ.

JUC/ema.

apoderado legal, apercibidos que en caso de



PROYECTO NUM. 42

 Ciudad de México a diecisiete de enero
de dos mil diecisiete.

Núm. _____

MAGISTRADO PONENTE

VISTOS los autos del toca [REDACTED] para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis dictado por el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por [REDACTED] en contra de [REDACTED]

RESULTANDO

1.- El auto recurrido a la letra dice:

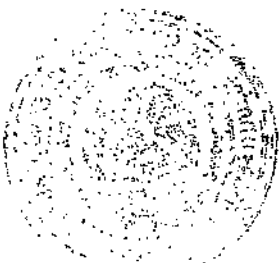
Dada nueva cuenta con los presentes autos y visto que ambas partes han ofrecido pruebas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: Se señala para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Se admiten todas las pruebas ofrecidas por ambas partes. En preparación de las pruebas confesionales admitidas, a cargo del demandado [REDACTED] y a cargo del actor [REDACTED] cíteseles personalmente por lo menos con DOS DIAS de anticipación al señalado, para que comparezcan a absolver posiciones de manera personal y no por conducto de apoderado legal, apercibidos que en caso de no

 DÉCIMO SEGUNDO
TO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO


SALA SALAS

comparecer sin justa causa, serán declarados confesos de todas y cada una de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. En preparación de las pruebas testimoniales ofrecida por la parte demandada; por lo que corresponde a la marcada con el número 2, de su escrito ofertorio de pruebas, dígamele que dentro del término de TRES DÍAS, deberá reducir a dos el número de sus testigos, apercibido que de no hacerlo, el Suscrito lo hará en su rebeldía; por lo que corresponde a la marcada con el número 3, prevéngasele al oferente de la prueba, para que el día y hora señalados presente a sus testigos los CC.

[REDACTED] y [REDACTED] apercibido que de no hacerlo, se declarará desierta dicha probanza por falta de interés jurídico del oferente de la prueba. Por lo que respecta a la prueba marcada con el número 12, como lo solicita gírese oficio a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a fin de que rinda el informe con los puntos que indica el oferente de la prueba, así mismo, remita copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarias a nombre del C. [REDACTED] de los últimos tres años. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el actor, y marcadas con los números 14, 15 y 16, respecto a las periciales en materias de PSICOLOGIA, INFORMÁTICA, y TRABAJO SOCIAL, con fundamento en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles, se da vista a la parte demandada, para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste sobre la pertinencia de tales pruebas, y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su parte debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya propuesto el oferente, así como indicar su cédula profesional o documento que acredite su Calidad de Perito, requisito sin el cual no se tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere el primer





ca Núm. _____

MAGISTRADO PONENTE

párrafo de la fracción VI del artículo 347 del mismo ordenamiento legal antes citado. Notifíquese.”

2.- Inconforme la apelante con lo transcrito interpuso recurso de apelación que le fue admitido en AMBOS EFECTOS y habiéndose tramitado ante esta Sala se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

I.- Que la parte apelante expresó agravios que obran en el toca y aquí se dan por reproducidos.

II.- Los dos agravios expresados por el C. [REDACTED] mandatario del demandado [REDACTED], los cuales se estudian en conjunto por su relación, resultan infundados, toda vez que por lo que se refiere a la supuesta violación de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala se ve impedida para hacer consideraciones sobre el particular al estar reservado su análisis y resolución a las autoridades federales.

Por lo que se refiere a que el auto recurrido, no se encuentra debidamente fundado y motivado, los motivos de inconformidad resultan infundados, toda vez que el auto recurrido, si se encuentra debidamente fundado y motivado de acuerdo con lo dispuesto por los artículos



PRIMO SEGUNTO
EN MATERIA
DE MÉXICO

DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA
DE MÉXICO



298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, en la inteligencia de que si bien es cierto, que en el caso, el recurso de apelación interpuesto, tiene fundamento en lo dispuesto por el primer artículo invocado, toda vez que se argumenta que la prueba consistente en el informe que se ordenó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a la existencia de cuentas a nombre del hoy apelante, las cuales son las cuentas bancarias a su nombre y que en su caso se remitan copias certificadas de sus cuentas bancarias, resulta violatorio a lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, toda vez que el A quo no se fundó en dicho precepto para admitir la prueba antes señalada, toda vez que el presente juicio se tramita en la vía ordinaria civil, y los informes se están solicitando a virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial que conoce del presente juicio, en relación a una persona que tiene el carácter de demandada en el juicio de que se trata, además de que no existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata.

Atento a lo anterior, procede confirmar el auto recurrido.

III.- No encontrándose el presente asunto en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 140 del Código




2017, HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL

de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma el auto recurrido

SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas.

TERCERO.- En cumplimiento al Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de este Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace saber a las partes que una vez concluido el juicio, este Toca se destruirá, por lo que en su caso y de ser procedente deberán recoger los documentos exhibidos en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la notificación de este proveído.

CUARTO.- Notifíquese, con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento del juez de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

A S Í, lo resolvió y firma en forma unitaria el C. Magistrado FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ, integrante de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 38, párrafo Segundo y 43, párrafo penúltimo de la Ley Orgánica de este Tribunal,

pa Núm. _____

MAGISTRADO PONENTE



NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D DE MÉXICO



ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Juan Ulloa
Cruz, que da fe.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Redacted]
VS *[Redacted]*
[Redacted]
TOCA: *[Redacted]*

FJHOC/CC/xsh

"EN EL BOLETÍN JUDICIAL No. 8 CORRESPONDIENTE AL
DIA 18 DE ENERO DE 2017, SE HIZO LA
PUBLICACIÓN DE LEY.- CONSTE.
EL 19 DE ENERO DE 2017, SURTIÓ EFECTOS LA
NOTIFICACIÓN ANTERIOR.- CONSTE."

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEXTA SALA CIVIL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. - - - - -

C E R T I F I C A

QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL CONSTANTE EN SEIS
FOJA(S) UTIL(ES), DEBÍDAMENTE SELLADA(S) Y COTEJADA(S) EN LA
CIUDAD DE MEXICO, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE. - - - - -

DOY FE. - - - - -

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SEXTA SALA CIVIL.



SEXTA SALA CIVIL

LIC. JUAN VILLOA CRUZ.
E.M.A



JUZGADO DÉC
E DISTRITO E
EN LA CIUDA

LA CIUDADANA MAESTRA. CONCILIADORA ROSARIO
BALLESTEROS URIBE, SECRETARIA DE ACUERDOS
"B" POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO DECIMO
QUINTO DE LO CIVIL DE ESTA CAPITAL.

35

35

-----CERTIFICA-----

Que las presentes copias fotostaticas concuerdan fiel y
legalmente en todas y cada una de sus partes que obran en
su original deducido del juicio **ORDINARIO CIVIL**,
promovido por [REDACTED] en
contra de [REDACTED] con número de
expediente [REDACTED] Se expide la presente copias
certificadas constantes de 10 fojas útiles debidamente
selladas, cotejadas y en cumplimiento a lo ordenado por
auto dictado en cuaderno de amparo. En la Ciudad de
México, a primero de febrero de dos mil diecisiete. Doy Fe.-

PRIMERO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D DE MEXICO

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B"
POR MINISTERIO DE LEY.



MAESTRA. ROSARIO BALLESTEROS URIBE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

36

En la Ciudad de México, dos de febrero de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 2126, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, dos de febrero de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual desahoga el requerimiento ordenado en proveído de treinta de enero del año en curso y al efecto remite copia certificada de las constancias y una vez que el promovente desahogue la misma o en su caso transcurra el término para hacerlo, se acordará respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, lo anterior para todos los efectos legales conducentes a que haya lugar.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Rubén Benítez Hernández**, quien autoriza. Doy fe.

NO SEGURO
MATERIA CIVIL
C.D. DE MÉXICO

RG



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA R 7

37

37

119

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
03 FEB 2017 SE NOTIFICA A

promoviente

LA RESOLUCIÓN QUE
ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA. *26*

CON FECHA 07 FEB 2017, SURTIÓ
TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA
RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

NO SE DEBE
MATRICULAR
DE MÉXICO

5 203534 780029



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 10

38

38

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN.

Código

No. Oficio

Autoridad

Zona



JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
ESTADO FEDERAL

RECIBIDO EN FECHA 31 A 9 54

ESTADO
DE LO CIVIL
DE LO CIVIL

SE
DE



ALZADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL 39

TO: [REDACTED]
201 FEB -2 A 9:00

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

216

leche caprina
y caprina
de mono

protesta d

LEG
DE

2.
...atori
...MEXICANOS
...DEL
...ten
...de fe
...llagar
...Banco
...un mi
...anca

AO SER
MATER
DE ME
TO
CA

634

1

40
102
40

3.- En cumplimiento a este numeral, inserto una fotografía fiel de los puntos resolutivos de la Sentencia dictada el 17 de enero del año en curso, en el toca de apelación [REDACTED]



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL"

de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma el auto recurrido

SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas.

TERCERO.- En cumplimiento al Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de este Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace saber a las partes que una vez concluido el juicio, este toca se destruirá, por lo que en su caso y de ser procedente deberán recoger los documentos exhibidos en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la notificación de este proveído.

CUARTO.- Notifíquese, con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento del juez de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido /

A S Í, lo resolvió y firma en forma unitaria el C. Magistrado [REDACTED]

CONTRÓ, integrante de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 38, párrafo Segundo y 43, párrafo penúltimo de la Ley Orgánica de este Tribunal,

4.- Respecto al estado procesal que guarda el juicio [REDACTED] es el de admisión de pruebas, siendo la última actuación a dicha contienda, el auto de fecha 28 de

septiembre de 2016 donde admite las pruebas ofrecidas por las partes, entre las que se encuentra el Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multicitado. Posteriormente ha habido promociones de trámite que no impulsan de manera alguna el procedimiento, dado a que la apelación que da origen a la sentencia de la Sexta Sala arriba mencionada, fue admitido en ambos efectos, es decir con suspensión del procedimiento.

5.- Por lo que respecta a la solicitud de suspensión provisional y Definitiva, se solicitan para los efectos de que el Oficio multicitado no sea girado por el Juez Décimo Quinto de lo Civil a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en caso de que éste ya haya sido enviado y presentado ante dicha Comisión, que ésta dependencia se abstenga de rendir la información solicitada por el Juez mencionado.

6.- Por último agrego al presente escrito, un juego de copias de traslado del escrito inicial de demanda, incluyendo copia del presente escrito para el Juez Décimo Quinto de lo Civil señalado como autoridad responsable, así como seis copias más del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo expuesto y fundado;

ESTADO MEXICANO
JEFATURA DE LA FISCALIA
DE LO CIVIL
DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA
DE JUICIO DE NULIDAD
DE HECHOS
JUDICIAL DE MEXICO

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho, desahogando en tiempo y forma la prevención arriba mencionada ordenada por su Señoría.

SEGUNDO.- Tener por exhibidas las copias de traslado arriba mencionadas.

TERCERO.- Ordenar se admita el presente juicio, en los términos solicitados en mi escrito inicial de demanda.

Protesto lo necesario.

[Redacted signature area]

Ciudad de Mexico, a primero de febrero de dos mil diecisiete.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En la Ciudad de México, tres de febrero de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el escrito registrado con el número de correspondencia 2161, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, tres de febrero de dos mil diecisiete.

Agréguese el escrito aparentemente firmado por el quejoso [REDACTED] por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de treinta de enero del año en curso.

Ahora bien, a efecto de acordar lo procedente respecto al escrito aclaratorio de cuenta, con fundamento en lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, **REQUIÉRASE** al promovente, para que dentro del término de **TRES DÍAS**, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en el local de este juzgado federal con identificación oficial vigente, a ratificar el contenido y firma del escrito aclaratorio presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado federal el **dos de febrero de dos mil diecisiete**, ya que sin tener conocimientos especiales en las materias de grafoscopia y documentoscopia, es evidente que la firma que calza a dicho escrito difiere de la diversa que obra en autos, de ahí que este juzgador no tiene la certeza de la voluntad de la persona que suscribió el escrito de cuenta, por lo que se justifica que ante la presencia judicial ratifique el escrito aclaratorio.

Y de resultar distinta la firma que se llegare a plasmar en la comparecencia ante este juzgado se proveerá lo que en derecho corresponda.

COMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO

Acude en apoyo de lo anterior, la Jurisprudencia, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero-Junio de 1989, Tomo III, página 385, Octava Época, Registro: 207437, la cual establece literalmente lo siguiente:

"FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una *firma* que sea *notoriamente distinta* de la que *ya obra en autos*, debe *mandarse* reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndole al ocurrente de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el *acuerdo* que *corresponda*, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la *firma notoriamente* diferente, no equivale a la falta de *firma*, pues ambas son hipótesis distintas".

Acude en apoyo de lo anterior, la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Tomo IX, página 1391, Novena Época, Registro: 194514, la cual establece literalmente lo siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a

JUZGADO
E DISTRI
EN LA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ratificar una demanda que no suscribió con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió."

Con el apercibimiento que de no desahogar la anterior prevención **se tendrá por no presentado el escrito de cuenta.**

Notifíquese y personalmente al quejoso.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez
Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de
México, ante el Secretario **Rubén Benítez Hernández**, quien
autoriza: **Doy fe.**



DECIMO SEGUNDO
JUEZ EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO



DECIMO SEGUNDO
JUEZ EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO



CONSTANCIA (JUICIO DE AMPARO)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS once HORAS CON cincuenta MINUTOS, DEL DÍA once DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA SUSCRITA LICENCIADA TERESA JUÁREZ CASTRO, ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN **PROVEIDO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE** DICTADO EN LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL **JUICIO DE AMPARO** REGISTRADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE [REDACTED] DEL INDICE DEL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ME CONSTITUYO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA EN EL DOMICILIO UBICADO EN: [REDACTED]

CERCIORADA DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS PARA LA PRÁCTICA DE LA PRESENTE DILIGENCIA TODA VEZ QUE ELLO SE DESPRENDE DE SENDAS PLACAS OFICIALES COLOCADAS EN LA ESQUINA DE DICHA CALLE, POR COINCIDIR LA NUMERACIÓN, LA COLONIA Y DELEGACIÓN POLÍTICA, ASI COMO POR HABERMELO MANIFESTADO QUIEN DIJO LLAMARSE Y SE IDENTIFICA COMO [REDACTED]

[REDACTED] atendida por la Secretaria de Transporte y
Seguridad

LA CUAL EN UNA DE SUS CARAS TIENE ADHERIDA UNA FOTOGRAFIA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISIONOMICOS DE SU OSTENDANTE, DOY FE HABER TENIDO A LA VISTA Y DEVUELVO AL INTERESADO POR CONSIDERAR INNECESARIA SU RETENCIÓN, PERSONA ANTE QUIEN ME IDENTIFIQUE PLENAMENTE COMO ACTUARIA JUDICIAL CON UNA CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION QUE ME ACREDITA COMO TAL Y LE REQUERI LA PRESENCIA DE LA BUSCADA, DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE O DE ALGUNO DE SUS AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, HACIENDO MENCION DE LOS NOMBRES DE TODOS Y CADA UNOS DE ELLOS, A LO QUE MANIFIESTA SER LA PERSONA BUSCADA, POR LO QUE PROCEDO A **NOTIFICARLE PERSONALMENTE** EL CONTENIDO DEL **PROVEIDO DE FECHA INDICADA**, ENTREGÁNDOLE EN ESTE ACTO COPIA INTEGRAL, AUTORIZADA, SELLADA Y COTEJADA DEL **PROVEIDO DE FECHA INDICADA**, QUIEN MANIFIESTA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD EL MISMO Y FIRMA PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA, EN UNIÓN DE LA SUSCRITA POR ASI CONSIDERARLO CONVENIENTE.- CONSTE.- DOY FE.- LA ACTUARIA JUDICIAL LICENCIADA TERESA JUÁREZ CASTRO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

B+A

abogados

2017 FEB 13 PM 6 39

MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MEXICO

AMPARO INDIRECTO

QUEJOSO:

EN LA CIUDAD DE MEXICO

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MEXICO.

[REDACTED] en mi carácter de Mandatario Judicial del Quejoso [REDACTED] personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos del juicio natural, tal como se observa en el auto de fecha 22 de agosto de 2016, dictado por el Juez responsable 15 Civil del cual agrego una copia como **ANEXO "1"**, solicitando al efecto se me tenga reconocida dicha personalidad en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que respecto del requerimiento materia del auto de fecha 3 de febrero del año en curso, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi Mandante hoy Quejoso [REDACTED] se encuentra fuera de nuestro País, en virtud de estar realizando una estancia de investigación en las ciudades de Barcelona y Madrid, en el Reino de España, del día 2 al 18 de febrero del año en curso, a la que fue invitado por el Director del "BARCELONA CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS" (CIDOB), señor Jordi Bacaria, tal como se acredita con la carta de invitación referida, boletos de avión y pases de abordar contenidos en el Instrumento Notarial 37,500 de fecha 13 de febrero del año en curso, tirado ante la fe del Licenciado [REDACTED] Notario Público 80 de la Ciudad de México, mismo que exhibo al presente escrito como **ANEXO "2"**.

Por lo anterior, toda vez que en la propia Ley de Amparo se prevé la ampliación de plazos por causas de fuerza mayor o caso fortuito, y a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales de mi mandante, solicito se amplíe el plazo para que el Quejoso ratifique el escrito aclaratorio presentado el 2 de febrero del año en curso, materia del requerimiento arriba mencionado, a partir del lunes 20 de febrero del año en curso, fecha en que el Quejoso ya estará en nuestro País.

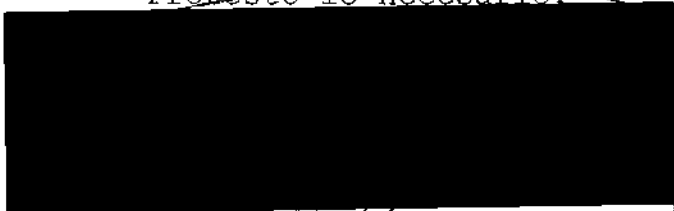
Por lo expuesto y fundado:

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en mi carácter de Mandatario Judicial del Quejoso, exhibiendo el Testimonio mencionado.

SEGUNDO.- Por las razones expuestas y a fin de no vulnerar los derechos fundamentales del Quejoso, ampliar el plazo para ratificar la firma materia del requerimiento arriba mencionado, en los términos precisados.

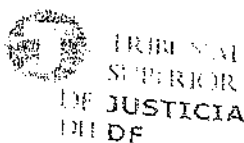
Protesto lo necesario.



Ciudad de México, a trece de febrero de dos mil diecisiete.

RECEBIDO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
10 FEB 17 2017
MATERIA CIVIL
DE MEXICO





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
"Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía"

Décimo Quinto de lo Civil

Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciséis

Téngase al demandado [REDACTED] contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, por propuestas las excepciones y defensas que hace valer y con las mismas dese vista a la actora para que dentro del término de TRES DIAS manifieste lo que a su derecho convenga. Se mandan publicar en el Seguro del Juzgado los documentos que exhibe. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir todo [REDACTED] y se tienen por autorizados a los [REDACTED]

[REDACTED] HERRERA RICOY en términos de lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles quienes deberán encontrarse legalmente autorizados para ejercer la defensa de los demandados o leendos en derecho, debiendo mostrar su poder de procuración en la primer diligencia en que intervengan, en el entendido de que de no cumplir con lo anterior, perderán la facultad a que se refiere el artículo antes mencionado en perjuicio de la promovente que los designa y únicamente tendrán las facultades que se indican en el penúltimo párrafo del artículo en cuestión, asimismo téngase por autorizados a las [REDACTED] para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 112 párrafo séptimo del Código de Procedimientos Civiles, [REDACTED] al estado de los autos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 272-A del Código de Procedimientos Civiles, se cita a comparecer a la Audiencia Previa y de Conciliación y se señala para que comparezca a las ONCE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN CURSO. Notifíquese lo preveyo y firma el C. Juez Maestro Ricardo R. Rodríguez, en la C. Secretaría Conciliadora Maestra Rosario Balasarios Uribe, en funciones de Secretaria de Acuerdos "E" por Ministerio de Ley quien autoriza y da fe. Doy fe

NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D DE MEXICO

14/8
16/8
24 Agosto 16

23



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EXHIBICIÓN

48

Con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, Whilliams Tony González Jiménez, Secretario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México hace constar y **CERTIFICA**: que en esta fecha se realizó el desglose del documento exhibido, mismo que obraba glosado en las fojas cuarenta y ocho a cincuenta y tres. Se hace la presente certificación de conformidad con lo ordenado en proveído de veintinueve de enero del año en curso. Ciudad de México, a trece de febrero de dos mil dieciocho. Doy fe.



El Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en
Materia Civil en la Ciudad de México

WHILLIAMS TONY GONZALEZ JIMENEZ

DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

49

En la Ciudad de México, quince de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el escrito registrado con el número de correspondencia 2858, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, quince de febrero de dos mil diecisiete.

Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por [REDACTED] en su carácter autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso [REDACTED] personalidad acreditada en autos, mediante el cual por causa de fuerza mayor, solicita se amplíe el plazo para que el quejoso ratifique la firma que calza su escrito aclaratorio presentado el dos de febrero de dos mil diecisiete, toda vez que éste, se encuentra fuera del país, en virtud de que está realizando una estancia de investigación, en las Ciudades de Barcelona y Madrid, del dos al dieciocho de febrero de este año; lo que acredita con la carta de invitación, boletos de avión y pases de abordar, contenidos en el primer testimonio notarial treinta y siete mil seiscientos uno, pasado ante la fe del Notario Público 80 de la Ciudad de México, el trece de febrero de dos mil dieciséis, que exhibe como Anexo 2.

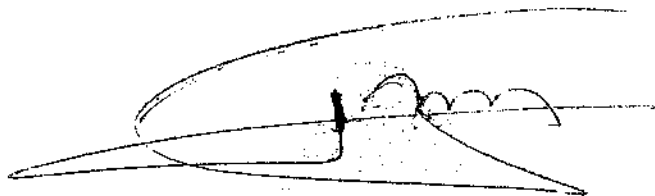
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA
DE MÉXICO

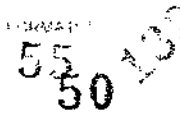
En consecuencia, ante la imposibilidad material del quejoso para presentarse ante este Juzgado a ratificar la firma que calza su escrito aclaratorio en el plazo otorgado inicialmente, se le concede un término de **TRES DÍAS**, el cual comenzará a partir del **veinte del mes y año en curso**, fecha en la que ya se encontrará en este país, según lo manifestado; en el entendido que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de mérito.

5203534780045

Notifíquese, personalmente al quejoso, por conducto de su autorizado [REDACTED]

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza. **Doy fe.**





JUICIO de Amor

PERSONA QUE SE NOTIFICA



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPAROS

P [REDACTED]

En la Ciudad de México, siendo las DOCE HORAS CON
CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL

DIECISIETE, ante la presencia de **Angélica Flores Jáuregui**,

Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en

la Ciudad de México, comparece el quejoso [REDACTED]

quien se identifica con pasaporte número [REDACTED] expedido a su

favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos

Mexicanos, en donde aparece una fotografía que concuerda con los

rasgos fisonómicos de quien comparece, documento que da fe de

haber a la vista y en este acto se le devuelve por no ser necesaria su

retención, dejándose copia simple del mismo. Acto continuo, con

fundamento en el artículo 273 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, el Secretario exhorta a quien comparece a conducirse con

verdad haciéndole saber de las penas a la que se hace acreedor quien

comete el delito de falsedad en declaraciones judiciales. Enseguida,

quien comparece manifiesta bajo protesta de decir verdad que

reconoce como suya la firma plasmada en el escrito recibido en la

Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el **dos de febrero de**

dos mil diecisiete, el cual quedó registrado con el número de

correspondencia **2161**, y ratifica en todas sus partes su contenido y

firma. Al no haber otra diligencia por desahogar se da por terminada la

presente, firmando para constancia los que en ella intervinieron. **Doy**

fe.

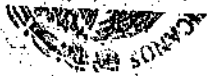
LA SECRETARIA DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANGÉLICA FLORES JÁUREGUI.

EL PROMOVENTE

[REDACTED]

ACATIOS
NO SEGURO
ANTERIOR CIVIL
DE MEXICO



021433617

En caso de que el titular de este pasaporte requiera de asistencia o protección del gobierno mexicano, se recomienda que acuda a la representación diplomática o consular mexicana más cercana.

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR A /
IN CASE OF AN EMERGENCY PLEASE NOTIFY /
EN CAS D'URGENCE PRIERE DE NOTIFIER A

Nombre: _____

Dirección: _____

Entidad Federativa: _____

C.P. _____ Teléfono: _____

DOMICILIO DEL TITULAR / HOLDERS ADDRESS
ADRESSE DU TITULAIRE

Dirección: _____

Entidad Federativa: _____

C.P. _____ Teléfono: _____

ESTE PASAPORTE ES VÁLIDO PARA TODOS LOS PAÍSES
THIS PASSPORT IS VALID FOR ALL COUNTRIES
CE PASSEPORT EST VALABLE POUR TOUTS LES PAYS

525

PASAPORTE



Estados Unidos Mexicanos

Tipo: P Clave del país de expedición: MEX

Apellido(s):

Nombre(s):

Nacionalidad: MEXICANA

Fecha de nacimiento: 12-09-2026

Lugar de nacimiento: BOSTON

Fecha de expedición: 12-09-2026

Ante de: [Signature]

BOSTON

[Redacted area]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 7

53

53

135

En la Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con la comparecencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Agréguese a los autos la comparecencia firmada por el quejoso [REDACTED] a través del cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de tres de febrero del año en curso.

COMITÉ
LEGISLATIVO
DEL

Asimismo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa [REDACTED] mediante el cual desahoga la prevención de treinta de enero del presente año, y al respecto se provee lo siguiente:

SEGUNDA
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

Vista de nueva cuenta la demanda de garantías promovida por [REDACTED] por propio derecho; contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la [REDACTED] con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, **SE ADMITE A TRÁMITE** la demanda; en tal virtud, fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, misma que quedó registrada en el libro de gobierno con el consecutivo [REDACTED] y NEUN [REDACTED]

3
203534
780050

Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión, por haberlo solicitado.

Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las **DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE** para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, **pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación**, que deberán de rendir en el plazo de **quince días**, posteriores al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo.

ESTADOS UNIDOS
JUZGADO
DISTRITO
EN LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 35
31



Hágaseles saber que, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en caso de omitir rendir su informe justificado se presumirán ciertos los actos que se les reclaman, salvo prueba en contrario; además, se harán acreedores a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, tal como está previsto en el precepto 260, fracción II, del mismo ordenamiento, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

RECIBO
LEGISLATIVO
DEL
CINCO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
AD DE INGENIERIA

De igual forma, solicítese a las autoridades responsables para que las constancias con las que pretendan apoyar su informe justificado las remitan en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, atendiendo al principio de expeditéz, celeridad y prontitud en la impartición de justicia que establece el artículo 17 Constitucional, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa en los términos del párrafo que antecede.

De igual manera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que haya ocurrido alguna

causa de improcedencia en el presente juicio, deberán de comunicarla de inmediato a este Órgano Jurisdiccional.

Asimismo, el quejoso ofreció como prueba la instrumental publica de actuaciones y el presuncional legal y humana, con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de la Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas que ofrece la quejosa, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional.

Dese la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado.

Por otra parte, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de ley de la materia, se tiene como tercero interesado a [REDACTED] quien tiene su domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED]; en consecuencia, y para efecto de su emplazamiento, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio indicado y le notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia de la demanda, escrito aclaratorio y la emplace al presente juicio de amparo y la requiera para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las





subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, **sin previo acuerdo**, se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este Juzgado, practique la diligencia encomendada.

Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al domicilio y autorizados, toda vez que mediante auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, se acordó lo conducente.

SEGUNDO
JURISDICCION CIVIL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Finalmente, cabe indicar que las resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, constituyen información pública, lo que implica que las determinaciones que se dicten en este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, **haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales**, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y **sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados**, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva

que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

Notifíquese y personalmente al tercero interesado y por medio de oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público adscrito.

Así lo proveyo y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza. **Doy fe.**

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios [REDACTED] a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. **Conste.**

JUZGADO DÉCIMO
SEGUNDO DE DISTRITO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

6.1 56

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL

23 FEB 2017

SE

NOTIFICA

A

Augusta

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON

24 FEB 2017

FECHA

SURTIÓ

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

SEGUNDO
JEFATURA CIVIL
DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

6257

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: ADMISIÓN.

Código

No Ofici

Autoridad

Zona



AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. 3/Z

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 3/Z

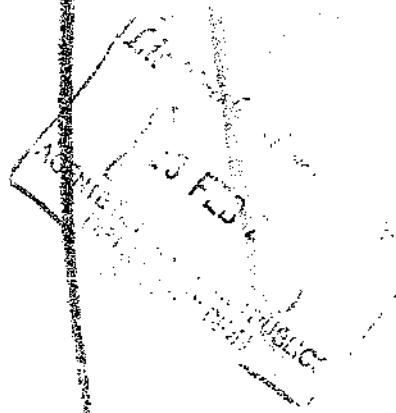
JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

58

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: ADMISIÓN.

Código	No Ofici	Autoridad	Zona
		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.	3/Z
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3/Z
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	3/Z
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3/Z

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

TERIA CIVIL
MÉXICO

2017 FEB 22 AM 10:00
MEXICANUS

SEXTA SALA CIVIL



534780



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2
64
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 59
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: ADMISION.

Código	No Ofici	Autoridad	Zona
		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.	3/Z
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3/Z
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	3/Z
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3/Z

TERCER JUZGADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

PRIMER JUZGADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO





2017 FEB 23 08:56

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACIÓN DE
CUENTAS

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

28 FEB. 2017
DIR. GRAL. DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y REC. MATERIALES
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

C. JUEZ DECIMOSEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. RODRIGO EDUARDO ESCALANTE RAMÍREZ, Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C", en representación de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, con fundamento en los artículos 38, fracción I, y antepenúltimo párrafo, y 53, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigente, y designando como delegados en términos del precepto 9 de la Ley de Amparo a los Licenciados Edgar Manuel Bonilla del Ángel, Karla Patricia Montoya Gutiérrez, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Melissa Fernanda Portillo Valdepeña, Gabriela Sánchez Guzmán, Manuel Erwin Vásquez Rafael, Carla Denise Ramos Domínguez, José Luis Moreno Martínez y Carlo Yabin Hernández Rangel, así como para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los CC. César Manuel Solórzano Millán y José Luis López Tapia, respetuosamente comparezco y expongo:

Que por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se rinde **INFORME JUSTIFICADO** en el juicio de amparo al rubro en cita, solicitado por auto de fecha 22 de febrero de 2017, manifestando lo siguiente:

ACTOS RECLAMADOS.

65

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

4004

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

60

2017 MAR - 17 A 9:00

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Dirección General Contenciosa
Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Oficio No

QUEJOSO:

JUICIO DE AMPARO:
(CUADERNO PRINCIPAL)

ASUNTO: **COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES RINDE INFORME JUSTIFICADO.**

VENCIMIENTO: **17 DE MARZO DE 2017**

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017

NO SON CIERTOS los actos reclamados por la quejosa en su demanda de amparo a la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**.

No obstante lo anterior, me permito informar a su Señoría, que el **Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B"** de esta Comisión, **retransmitió íntegramente**, en términos de la *Ley de Instituciones de Crédito*, a las instituciones financieras correspondientes, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho, el siguiente oficio:

- Número [REDACTED] de fecha 05 de octubre de 2016; emitido por el **C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal**, derivado del Juicio Ordinario Civil [REDACTED] de su índice, mediante el cual solicita información de las cuentas a nombre del quejoso.

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

ÚNICA. PROCEDE SOBRESEER EL JUICIO, RESPECTO DE LOS ACTOS QUE HAN QUEDADO IDENTIFICADOS COMO NO CIERTOS, LO QUE CONLLEVA A QUE EL JUZGADOR NO TENGA MATERIA SOBRE LA CUAL RESOLVER.

Es aplicable al respecto la Tesis de jurisprudencia número 310, visible en la página doscientos nueve, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Sexta Época del tenor literal siguiente:

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."

Asimismo, es de aplicarse el criterio sustentado por nuestro Máximo Tribunal de Amparo, visible a fojas 254 del Tomo número XIII, enero de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Octava Época, que textualmente precisó:

"JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías."
(El énfasis es nuestro).

Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer en el presente juicios de amparo respecto de los actos imputados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que han sido identificados como no ciertos.



Por lo antes expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tener por rendido el informe justificado que se sirvió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los autos del juicio de amparo número [REDACTED], promovido por [REDACTED]

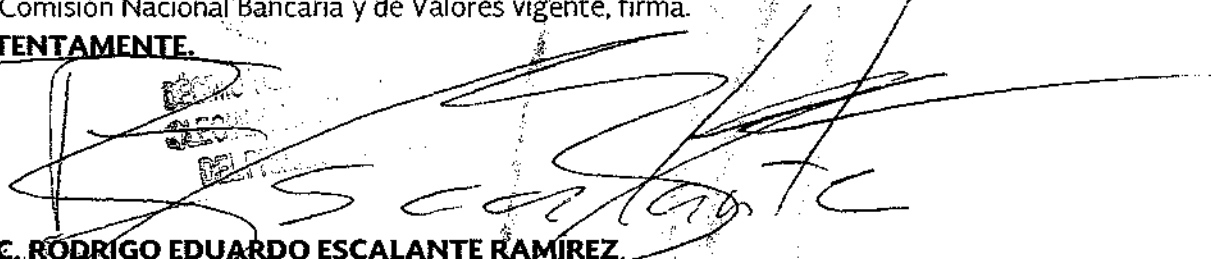
SEGUNDO.- Tener como delegadas y autorizadas a las personas que se citan en el cuerpo del presente ocuro.

TERCERO.- Permitir a los autorizados el uso de medios electrónicos, telefónicos y de cómputo, para tomar fotografías de los autos que integran el expediente.

CUARTO.- Sobreseer el presente juicio constitucional respecto de los actos atribuidos a la autoridad informante.

En representación de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, con fundamento en los artículos 38, fracción I, y antepenúltimo párrafo, y 53, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigente, firma.

ATENTAMENTE.


LIC. RODRIGO EDUARDO ESCALANTE RAMÍREZ

Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C."

MBVR/INH

RECEBIDO
SEGUNDO
JALISCO CIVIL
DE MEXICO
A LOS SEIS
DE ABRIL
DE 2010



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 157

67

12

En la Ciudad de México, dos de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 4004, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, dos de marzo de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General adjunto Jurídico de Procedimientos C., en representación de la Comisión Bancaria y de Valores, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, para los efectos legales a que haya lugar.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas que designa y como su domicilio el que señala en su oficio.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma Francisco Peñaloza Heras, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria Angélica Flores Jáuregui, quien autoriza. Doy fe.

32035347800098



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 12

68

63

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 03 MAR 2017 SE NOTIFICA A

los señores

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO
DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. LA
ACTUARIA.

CON

06 MAR 2017

FECHA
SURTIO

CON TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD
CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE
AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA



SECRETARÍA DE JUSTICIA
DISTRITO FEDERAL
DEL PRIMER ORDEN



SEGUNDO SECCION
TERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO

5 203534 780098



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

FORMA 1
69

64

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: ADMISIÓN.

Código	No Ofici	Autoridad	Zona
		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.	3/Z
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3/Z
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	3/Z
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3/Z

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA

SE
NO SE
NO SE
MATERIA DE
DE

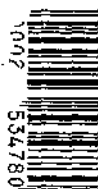


OFICIAJÍA DE PARTES
Sin anexo(s)

ID003096 24/02/2017 13:19



201700085607





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL EDUARDO
MOLINA NO. 2, COL. DEL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO
CARRANZA, DISTRITO FEDERAL.

CITATORIO.

TERCERAS INTERESADAS:

DOMICILIO:

Para la práctica de una diligencia Judicial de carácter personal, deberá usted acudir al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, ubicado en Eduardo Molina Número 2, entre Sidar y Rovirosa, Colonia del Parque, delegación Venustiano Carranza, en el acceso 8, nivel plaza; con identificación oficial, dentro del término de **dos días hábiles**, contados a partir del día de hoy, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por la lista el auto dictado con fecha **veintidos de febrero de dos mil diecisiete**, emitido en los autos del **juicio de amparo número P** [REDACTED] formado con motivo de la demanda promovida por [REDACTED]; contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dejo el presente citatorio, en virtud de no haber encontrado

la parte buscada [REDACTED]; cerciorado de que me encuentro en el domicilio de la búsqueda por así habérmelo manifestado la persona que me llamarse [REDACTED] quien dijo que [REDACTED]

y por los siguientes medios:
así como por el dictado de la persona que me atiende [REDACTED]

y requerida de su presencia me informa quien me atiende que la búsqueda no se encuentra en ese momento por que [REDACTED] pero que ahí se reciben notificaciones [REDACTED]

[REDACTED]; lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27, inciso b) de la Ley de Amparo; la persona con la que atiendo la presente diligencia es [REDACTED] hoy a las [REDACTED] del día veintisiete de febrero de dos mil diecisiete

EL ACTUARIO JUDICIAL

Lic. Cristian Eduardo Ramos Serrano.

SEGUNDO DE
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

SEPT-11 - TRAMITE DE EXPEDIENTES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUICIO DE AMPARO

En la ciudad de México, a las trece horas del día veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el suscrito **Cristian Eduardo Ramos Serrano**, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de amparo [REDACTED] me constituí legalmente en el domicilio siguiente: [REDACTED]

[REDACTED] me; en busca y habiendo corroborado que es el domicilio señalado en autos, por las sendas placas oficiales colocadas en la esquina de dicha calle, la numeración del inmueble en que se actúa y por el dicho de la persona que me atiende, dijo llamarse [REDACTED] no se identifica pero su media filiación es [REDACTED] complexión [REDACTED] tez [REDACTED]

[REDACTED] además tiene laborar en el lugar, conocer a la parte buscada, pero en este momento no se encuentran pero más tarde llegara; y cerciorado de que ahí puede ser notificado la parte buscada, por así manifestarlo textualmente que en ese lugar se recibe toda clase de notificaciones a nombre de la parte buscada, persona ante la cual me identifique plenamente como Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México mediante la credencial que me acredita como tal, y no habiendo encontrado a la parte en mención. Luego, a la persona de referencia le dejé citatorio para que la parte buscada, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso B de la Ley de Amparo vigente, la persona buscada y/o sus autorizados para oír notificaciones (con identificación oficial vigente) acuda al órgano jurisdiccional de mi adscripción a notificarse, apercibida que en caso de no presentarse dentro del término de dos días hábiles siguientes, se le notificara por lista dicho proveído, persona que recibe de conformidad dicho citatorio y SI firma la copia para constancia legal. **Doy fe. Cristian Eduardo Ramos Serrano**, Actuario judicial.

JUZGADO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



67

JUICIO DE AMPARO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En la ciudad de México, el dos de marzo del dos mil diecisiete, atento a lo manifestado en la razón anterior, y no habiéndose presentado la **Parte Tercero Interesado** se procede a notificar por medio de lista el proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el que se admitió la demanda de amparo, y se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. Doy Fe. **Cristian Eduardo Ramos Serrano**, Actuario Judicial.

El tres de marzo de dos mil diecisiete, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refieren las razones que anteceden conforme a lo dispuesto en el artículo 31 fracción II de la Ley de Amparo vigente, Conste. Doy fe. **Cristian Eduardo Ramos Serrano**, Actuario Judicial.



COMOTER
LEGAD
DEL

DECIMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



NOVENO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

Sírvase usted mencionar el número de Toca
al contestar este oficio.

68

4509

2017 MAR 7 P 2:22

Asunto: Se rinde informe Justificado

Se remite toca

Amparo Número.- [REDACTED]

TOCA NÚMERO: [REDACTED]

EN LA CIUDAD DE MÉXICO
C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

SALA

Secretaría de Acuerdos

Toca Núm. _____

Of. Núm. [REDACTED]

En cumplimiento a lo solicitado en su oficio número [REDACTED], de fecha veintidós de febrero del año en curso, recibido en esta sala el día veintitrés de febrero citado, en relación al amparo anotado al rubro promovido por [REDACTED] contra actos de esta sala, en vía de informe justificado, manifiesto a usted que:

SI ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, en virtud de que efectivamente esta sala dictó la resolución en el toca a que se refiere el quejoso, así como la aclaración de la misma, y en acatamiento al artículo 114 de la nueva Ley de Amparo se expone lo siguiente: Es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por el demandado [REDACTED] por su propio derecho, en atención a que la resolución de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada por esta Alzada en el toca 2174/16, cumplió con los requisitos señalados en los artículos 81 y 402 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 14 y 16 Constitucionales. En efecto, el A quo en el auto recurrido admitió la prueba ofrecida por la actora con el número 12 de solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que rinda el informe con los puntos que indica el oferente de la prueba, así como que remita copia certificada de los estados de cuenta bancarias a nombre de [REDACTED] de los tres últimos años, considerando esta Alzada que el A quo debidamente admitió la prueba ofrecida toda vez que el presente juicio se tramita en la vía ordinaria civil, y los informes se están solicitando en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial que conoce del presente juicio en relación a una persona que tiene el carácter de demandada, aunado a que no existe precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata, razón por la cual, se procedió a confirmar el auto recurrido.

Con el objeto de acreditar la legalidad del acto reclamado se remite el toca respectivo en el cual obra el mismo en 22 fojas útiles del juicio ORDINARIO CIVIL seguido por [REDACTED] en contra de

[REDACTED] del expediente número [REDACTED] para los efectos legales a que haya lugar, ignorando esta sala de que existan causas de improcedencia del mismo asimismo, hago de su conocimiento la imposibilidad de remitir copia certificada de todo lo actuado y de los documentos base de la acción en el presente asunto, porque tales constancias obran ante el Juzgador Natural Décimo Quinto Civil, quien también es autoridad responsable en el presente juicio de amparo.

Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MARZO DEL 2017.
EL C. MAGISTRADO INTEGRANTE DE LA SEXTA SALA
CIVIL.

MAG. FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ.





En la Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia **4509**, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el **Magistrado integrante de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que dentro del término de ocho días manifiesten lo que a su derecho convenga.

Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable el toca [REDACTED] consistente en veintidós fojas, las cuales se tomarán en consideración en la audiencia constitucional.



DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
D.F. DE MEXICO

Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias que remite la Sala responsable, fórmese por separado un legajo marcado como **tomo I**, el cual queda a disposición de las partes para su consulta.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza. Doy fe.

RG

5 203534 780104



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

70

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL

09 MAR 2017

SE NOTIFICA A

los señores

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON

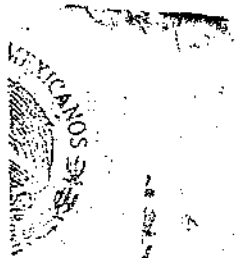
10 MAR 2017

FECHA
SURTIO

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA



SEGUNDO
ACTUARÍA SEGUNDA
EN MÉXICO, D.F.
MÉXICO



TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
DF.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MATERIA CIVIL

4713

2017 MAR -9 P 2:47

dos legajos artíf

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

AMPARO NÚMERO: [REDACTED]

QUEJOSO: [REDACTED]

**JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.**

JUZGADO 15
CIVIL

SECRETARIA
"B"

EXP.

OF. NUM.

En contestación a su oficio número [REDACTED] y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veintisiete de febrero del presente año, dictado en el cuaderno de amparo citado al rubro, deducido del juicio **ORDIANRIO CIVIL**, promovido por [REDACTED] en contra de [REDACTED]

[REDACTED] con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se rinde **INFORME JUSTIFICADO** sobre la demanda respecto del procedimiento de remate al tenor de los siguientes razonamientos: Son ciertos los actos reclamados, sin embargo el presente juicio de garantías debe declararse improcedente, ya que el presente proceso cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

JUZGADO
SEGUNDO
MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO
SEGUNDO
MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Ciudad de México, a 3 de Marzo de 2017.

EL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

MTRO. ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ



JUZGADO DÉCIMO QUINTO
DE LO CIVIL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 2

72

En la Ciudad de México, diez de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 4713, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, diez de marzo de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que dentro del término de ocho días manifiesten lo que a su derecho convenga.

Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable las copias certificadas del juicio ordinario civil [REDACTED] así como los documentos base de acción, las cuales se tomarán en consideración en la audiencia constitucional.

Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias que remite la Sala responsable, fórmense por separados dos legajos marcados como tomos II y III, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, que autoriza. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

73

73

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
13 MAR 2017 SE NOTIFICA A
las partes

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON FECHA 14 MAR 2017
SURTÍÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

ECIMO TERCER TRIBUNAL
LEGISLATIVO EN CIUDAD DE MÉXICO
DEL PRIMER CIRCUITO

SEGUNDO
Tribunal Civil
México

B+A

abogados

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

4755

2017 MAR 10 P 10:53

AMPARO INDIRECTO:

QUEJOSO:

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MEXICO

En mi carácter de Mandatario Judicial del Quejoso [REDACTED] personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, vengo en tiempo y forma a desahogar la vista ordenada por su Señoría mediante auto de fecha 2 de marzo del año en curso, respecto del Informe Justificado rendido por el Director General adjunto Jurídico de Procedimientos "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, manifestando al efecto lo siguiente:

En primer lugar resulta un hecho notorio que el informe mencionado, resulta incongruente e impreciso, ya que si bien manifiesta que no son ciertos los actos reclamados por el Quejoso, el mismo se abstiene de señalar, identificar o precisar en su caso que hechos no son ciertos y en su caso el porqué, elementos esenciales para que su Señoría pueda pronunciarse si hubo violación o no de derechos fundamentales protegidos por la Constitución; en segundo lugar, dicho informe es contradictorio al mencionar en el párrafo segundo de su segunda foja, que dicha entidad comenzó con la ejecución del pedimento del Juez natural (responsable ordenadora), al retransmitir íntegramente la solicitud de la información confidencial del hoy Quejoso (materia principal del presente juicio de amparo) a las instituciones financieras correspondientes, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho, tal como se observa en dicho párrafo, del cual agrego una fotografía fiel:

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

NO SON CIERTOS los actos reclamados por la quejosa en su demanda de amparo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

No obstante lo anterior, me permito informar a su Señoría, que el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de esta Comisión, retransmitió íntegramente, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, a las instituciones financieras correspondientes, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho, el siguiente oficio:

- Número [REDACTED] de fecha 05 de octubre de 2016; emitido por el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, derivado del Juicio Ordinario Civil [REDACTED] e su índice, mediante el cual solicita información de las cuentas a nombre del quejoso.

Pues bien, toda vez que dicha responsable ejecutora retransmitió la solicitud a todas las instituciones financieras correspondientes, y con el fin de que dichas instituciones NO proporcionen la información confidencial del Quejoso y quede el presente juicio sin materia, solicito se ordene de manera urgente a dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el apercibimiento de ley más efectivo que en derecho proceda, que esta a su vez ordene a dichas Instituciones Financieras que se abstengan de enviar la información confidencial requerida por dicho juez, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.

Por lo expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en mi carácter de Mandatario Judicial del Quejoso, desahogando en tiempo y forma la vista arriba mencionada.

SEGUNDO.- Ordenar de manera urgente a la responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que de manera urgente y con el apercibimiento de ley más efectivo, ordene a las Instituciones Financieras que se abstengan de enviar la información confidencial requerida por el juez natural.

Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil diecisiete.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En la Ciudad de México, trece de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria **CERTIFICA**: Que la promoción registrada con el número de correspondencia **4755**, se recibió a las diez horas con cincuenta y tres minutos am y no así pm como lo registró el reloj checador, asimismo, da cuenta al Juez con el oficio de referencia, relativo al juicio de amparo [REDACTED] **Conste.**

Ciudad de México, trece de marzo de dos mil diecisiete.

Agregúese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por [REDACTED] en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso [REDACTED] mediante el cual desahoga la vista realizada en auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, y al afecto realiza diversas manifestaciones, en vía de alegatos; en consecuencia, con fundamento en el ordinal 124 de la ley de la materia, tómense en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente.

CIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En otra parte, en atención a lo que solicita de que se le gire oficio a la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, a fin de que esta le ordene a dichas instituciones financieras se abstengan de enviar información confidencial requerida por dicho juzgado, dígasele que no ha lugar de acordar lo solicitado toda vez que esto ya se proveyó al momento de dictar la suspensión definitiva.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, que autoriza. **Doy fe.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMULARIO

82

77

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 14 MAR 2017 SE NOTIFICA A

las partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA

CON FECHA

15 MAR 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.



LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA



DÉCIMO SEGUNDO
O EN MATERIA CIVIL

SECRETARÍA DE JUSTICIA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE JUSTICIA
CIUDAD DE MÉXICO

5 205534 780128



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

83 10
78

En la Ciudad de México, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria **CERTIFICA**: Que en esta fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedidos a las partes en auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable **Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México**; asimismo, hace constar que la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo en que se actúa, se encuentra señalada para el día de hoy. **Conste.**

En la misma fecha da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos; relativo al juicio de amparo [REDACTED] **Conste.**

Ciudad de México, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en esta fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días a las partes concedidos en auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable **Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México**; en consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas esenciales que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las **NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE**, para que tenga verificativo la misma.

Notifiquese por medio de oficio a las autoridades responsables.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza. **Doy fe.**

3 200534 700100

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los
oficios [REDACTED] a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede.
Conste.



JUZGADO DÉCIMO
DE DISTRITO EN M...
EN LA CIUDAD D...

JUZGADO D...
DE DISTRITO
EN LA CIUDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

84
79

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 29 MAR 2017 SE NOTIFICA A

la que sea, Agente del
ministerio público adscrita,
tercera interesada

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE
LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
29 DE LA LEY DE AMPARO DOY FE. LA ACTUARIA.

CON

30 MAR 2017

FECHA

SURTIÓ

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.



LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOMENTO
LEGISLACIÓN
DEL PODER JUDICIAL

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
MÉXICO

IMP. SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos

2017 MAR 29 AN 80

TERCER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

SEXTA SALA CIVIL

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: DIFERIMIENTO.

Código	No Oficio	Autoridad	Zona
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR SIZ JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE SIZ VALORES.	
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUD SIZ DE MÉXICO.	

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
LEGISLADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.



DÉCIMO SEGUNDO
JUZGADO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO





ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

86

81

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: DIFERIMIENTO.

Código	No Oficio	Autoridad	Zona
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR SIZ JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE SIZ VALORES.	
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUD SIZ DE MÉXICO.	

ESCRIBANO

LEGADO EN

DEL PRIMER

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA

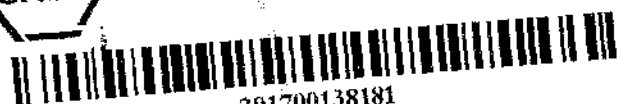
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALÍA DE PARTES
Sin anexo(s)

ID001749

30/03/2017 12:40



201700138181





ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

82

30

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO: [REDACTED]

PROMOVIDO POR: [REDACTED]

ASUNTO: DIFERIMIENTO.

Código	No. Oficio	Autoridad	Zona
[REDACTED]	[REDACTED]	SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR SIZ JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
[REDACTED]	[REDACTED]	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE SIZ VALORES.	
[REDACTED]	[REDACTED]	JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUD SIZ DE MÉXICO.	



ANTECEDENTE: EXP. [REDACTED]

ANTECEDENTE: TOCA. [REDACTED]

DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO





JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

Audiencia Constitucional

83

Amparo indirecto

En la Ciudad de México, a las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, hora y fecha señalados en auto de veintiocho de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien actúa asistido del Secretario **Víctor Aguirre Montoya** que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED] por derecho propio, contra actos de la **Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, sin la asistencia de las partes.

Acto seguido, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con la demanda de amparo, auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, que ordenó prevenir la demanda de garantías, escrito aclaratorio del quejoso; proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de emplazamiento a las autoridades responsables, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado [REDACTED] (fojas 70 a 72); informes justificados de la **Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores** (fojas 65 a 66, 73 y 76) al que acompañó, la primera de las mencionadas el toca [REDACTED] y el segundo de los citados dos legajos de copias certificadas relativos al



JUEZ DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

JUEZ DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

juicio de origen, así como acuerdo de veintiocho de marzo de año que transcurre, que difirió la audiencia constitucional.

Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar y por reproducidos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como las constancias remitidas para apoyar la constitucionalidad de sus actos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo que será tomado en consideración al momento de dictar la resolución en el presente juicio.

A continuación, **se abre el periodo probatorio** y la Secretaria hace constar que las autoridades responsables remitieron las documentales que han quedado detallada

Por su parte, la quejosa ofreció como pruebas las constancias que rindieran las responsables en su informe justificado, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

Se hace constar que el tercero interesado fue omiso en aportar medios de convicción.

El Juez acuerda: Acorde a lo dispuesto en el artículo 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las autoridades responsable y por el quejoso. Por perdido el derecho del tercero interesado para aportar elementos de prueba.



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

849

Acto continuo, en la etapa de alegatos, se hace constar que el quejoso los formuló en escrito acordado en auto de trece de marzo de dos mil diecisiete (fojas 79 a 81) y que las demás partes omitieron hacerlo.

Amparo indirecto



En consecuencia, **el Juez acuerda:** Se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza el quejoso y por perdido el derecho del resto de las partes para formular alegatos.

Al no existir pedimento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito, ni diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. Doy fe.

Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México

Francisco Peñaloza Heras.

Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

Víctor Aguirre Montoya.

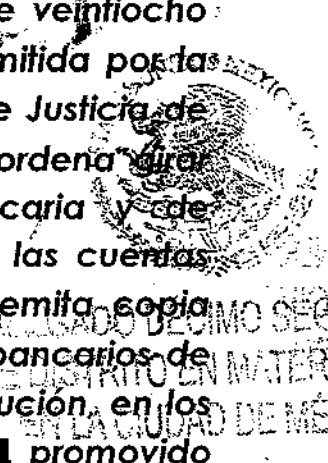
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED] [REDACTED] por derecho propio, contra actos de la Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y enviado al día siguiente, por razón de turno a este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED], por derecho propio, promovió amparo indirecto contra actos de la Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hizo consistir en:

La sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación [REDACTED] la cual confirma el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual se ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin que informe cuáles son las cuentas bancarias a nombre del quejoso, y remita copia certificada de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres años, así como su ejecución, en los autos del juicio ordinario civil [REDACTED] promovido por [REDACTED] en contra de [REDACTED]



Del Juez Décimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reclama la ejecución de dicha sentencia.

Actos que el peticionario de amparo consideró violatorios en su perjuicio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

90

85

**Amparo
indirecto**



SEGUNDO. En proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, previo desahogo de una prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió a las autoridades responsables su informe con justificación; se emplazó al tercero interesado; finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo y 54 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto, promovido en contra de actos derivados de un juicio ordinario civil, tramitado ante un juzgado del orden civil con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional y en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.



**DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO**

SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS.

Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados.

De la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama:

La sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación [REDACTED] la cual confirma el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ordinario civil [REDACTED] promovido por [REDACTED] en contra de [REDACTED]

Del Juez Décimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reclama:

La ejecución de dicha sentencia.

TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.

Son ciertos los actos atribuidos a la **Sexta Sala Civil y Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, pues así lo reconocieron expresamente al rendir sus informes justificados; lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo al mismo, actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio con fundamento en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

No obstante la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto combatido, pero aceptó que el Director General



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

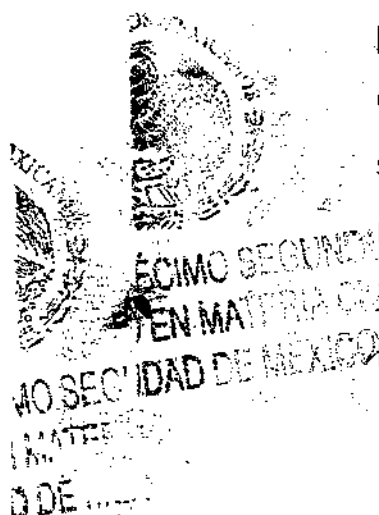
9163
86

**Amparo
indirecto**



Adjunto de Atención a Autoridades "B" de esa Comisión, retransmitió íntegramente, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, el oficio en que el Juez Décimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitó información de las cuentas bancarias del quejoso; por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye a esta autoridad, al no actualizarse causal de improcedencia alguna, prevista en el artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En virtud que no se actualiza ninguna causal de improcedencia, propuesta por las partes, ni este juzgador advierte de oficio que se surta alguna de ellas, se procede a examinar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos, en obvio de repeticiones innecesarias y por no exigir la ley su transcripción, de conformidad con la jurisprudencia número VI.2o.J/129, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599 del Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.**"



QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS.

TOMO II.

1. [Redacción] en la vía ordinaria civil demandó de [Redacción] diversas prestaciones, entre ellas, el pago por lo menos de una

indemnización a razón de [REDACTED]

[REDACTED] por concepto de reparación del daño moral ocasionado por las publicaciones periodísticas realizadas en los periódicos denominados como "REFORMA" y "SIGLO DE TORREÓN" (fojas 1 a 24).

Para ello, se narraron once puntos de antecedentes y se ofrecieron las pruebas que se estimaron procedentes.

2. La demanda fue admitida en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 25 y 26), en que el Juez Décimo Quinto de lo Civil de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó las medidas que estimó conducentes, para lo cual ordenó emplazar al demandado.

3. Por escrito presentado en el juzgado de origen el diecinueve de agosto de dicha anualidad, la parte demandada dio contestación a la mencionada demanda en que opuso las excepciones y defensa que estimó convenientes y ofreció las pruebas respectivas (fojas 53 a 169).

4. En auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el juez natural tuvo por contestada la referida demanda, con la cual dio vista a la parte actora y fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia previa y de conciliación (foja 170).

5. El uno de septiembre de dos mil dieciséis, fecha para que se llevara a cabo la aludida audiencia, el juez de origen abrió a prueba el mencionado juicio (foja 196).



3 JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

92

187

Amparo indirecto

6. En escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 218 a 238), remitido al día siguiente al juzgado natural, la parte actora, a través de su representante, ofreció entre otras, la siguiente prueba:

"...12. La Documental, consistente en el informe y copia certificada que se sirva rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al tenor de los siguientes puntos:

a) Dirá si existen cuentas bancarias a nombre de [REDACTED]

b) Informe cuáles son las cuentas bancarias a nombre de [REDACTED]

c) Informe los saldos que han tenido las cuentas a nombre de [REDACTED]

d) Remita a este H. Juzgado copia certificada de los estados de cuenta de las cuentas bancaras a nombre de [REDACTED] de los últimos 3 años.

[...]

Con esta prueba se acreditarán todas y cada una de la manifestaciones vertidas por esta parte y que se encuentran contenidas en los hechos de la demanda inicial de este juicio, los cuales deben tenerse aquí íntegramente reproducidos en obvio de repeticiones y por economía procesal, **estribando la necesidad de esta probanza para acreditar la capacidad económica del demandado y en razón de ello la condena que debe imponérsele por su Señoría.**

[...]

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la demanda inicial de este juicio, especialmente con el hecho 31 de la demanda inicial."

7. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 296 y 297), el juez natural proveyó lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la actora y respecto a la señalada en el párrafo que antecede, acordó lo siguiente:

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

"Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.- - - Dada nueva cuenta con los presentes autos y visto que ambas partes han ofrecido pruebas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos:- - - [...] - - - Por lo que respecta a la prueba marcada con el número **12**, como lo solicita gírese oficio a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a fin de que rinda el informe con los putos que indica el oferente de la prueba, asimismo, remita copia certificada de los estados de cuenta bancarias a nombre del [REDACTED] de los últimos tres años...."

8. En desacuerdo con la anterior determinación, el demandado, por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación en su contra (fojas 299 a 304).

9. Del aludido medio de impugnación, por cuestión de turno, correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por interpuesto y admitido en ambos efectos, registrado con el toca [REDACTED] para lo cual se fijó como garantía la cantidad de [REDACTED], (foja 305), la cual fue exhibida oportunamente.

10. En resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la sala revisora determinó **confirmar** el auto apelado (fojas 378 a 383).

La anterior resolución constituye el acto reclamado en este juicio.



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

88

Amparo indirecto

Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se trae como hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, este juzgador admitió a trámite la demanda de amparo promovida por [REDACTED], por derecho propio, contra actos del Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, registrada con el expediente [REDACTED] consistentes en los siguientes:

IV.- ACTOS RECLAMADOS:

1) La sentencia de fecha 3 de marzo del año [REDACTED] resuelve el Recursos de Revocación interpuestos al auto de fecha 3 de febrero del año en curso, [REDACTED] responsable, que declara improcedente el recurso y firme el auto recurrido, mismo que ordenaba de [REDACTED] la entrega del Billeto de Depósito [REDACTED] expedido por el BANCO DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS (BANSEFI) por la [REDACTED] la parte actora (hoy tercero interesado).

2) La sentencia de fecha 3 de marzo del año [REDACTED] resuelve el Recurso de Revocación interpuestos al auto de fecha 7 de febrero del año en curso, [REDACTED] responsable, que declara improcedente el recurso y firme el auto recurrido, mismo que de marzo [REDACTED] fundar en precepto alguno su decisión, ante [REDACTED] el proceso del juicio natural, admitiendo [REDACTED] entre otras cosas, no obstante que la sentencia de enero de 2017 que confirma el auto de septiembre de 2016 dictada por la Sexta Sala [REDACTED] la cual declara improcedente la apelación [REDACTED] procedimiento se encuentra Sub Judice.

SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

Realizadas las anteriores precisiones, se procede a estudiar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, los cuales se precisan de la manera siguiente:

PRIMER concepto de violación, el solicitante del amparo aduce que la sentencia reclamada es violatoria a

SEGUNDO
TERIA CIVIL
CINCO SE
EN MATERIA CIVIL
AD DE MEX

5 203534 78017

sus derechos humanos debido a que la autoridad incumple con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución omitiendo entrar al fondo del asunto, so *pretexto* de encontrarse impedida para hacer consideraciones sobre el particular, por estimar que el análisis y resolución de dicho tema está reservado a las autoridades federales, con lo cual se soslayó el principio *pro persona*.

SEGUNDO motivo de queja, se aduce que la Sala responsable vulneró lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), por confirmar de manera ilegal el auto impugnado, sin que hubiere entrado al fondo del asunto, en plena incongruencia con lo expresado en el recurso de apelación.

Además, que se funda indebidamente el acto reclamado en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, pues los informes sobre las cuentas bancarias del quejoso, no se tratan de un medio idóneo para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, ya que no van a acreditar si el actor, hoy tercero interesado, sufrió daño moral, pues su capacidad económica no tiene que ver con la *litis* planteada, por lo que al haber ordenado su desahogo, se lesiona el derecho a la confidencialidad.

Que la autoridad sentenciadora se abstuvo de resolver bajo el principio de congruencia, es decir, de ser



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo indirecto



Juicio de amparo

89

clara, precisa y congruente con el recurso de apelación interpuesto, sin que se hubiere pronunciado sobre el contenido de todos los agravios hechos valer por el quejoso.

Que el juez natural ordenó el desahogó de una prueba no idónea.

Que en términos del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal, aplicable al presente asunto, la sanción económica en caso de resultar procedente la acción de daño moral, en ningún caso deberá exceder de 350 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por lo que resulta irrelevante saber si existe mucho o poco dinero en las cuentas del quejoso, ya que la sanción se encuentra topada, y es un monto que no puede ser determinado de manera discrecional por el juzgador, con base en sus ingresos.

NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

TERCER concepto de violación, el quejoso argumenta que la resolución reclamada es violatoria a sus derechos humanos, ya que los informes de sus cuentas bancarias, se trata de información confidencial protegida por la ley, sin que se esté a un caso de excepción a que hace referencia el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, en virtud de que no existe un embargo o providencia precautoria que ordene que sean exhibidos esos datos, por lo que al haber ordenado su desahogo se le deja en estado de indefensión.

CUARTO argumento de queja, se afirma que la Sala responsable apoya su decisión de confirmar la

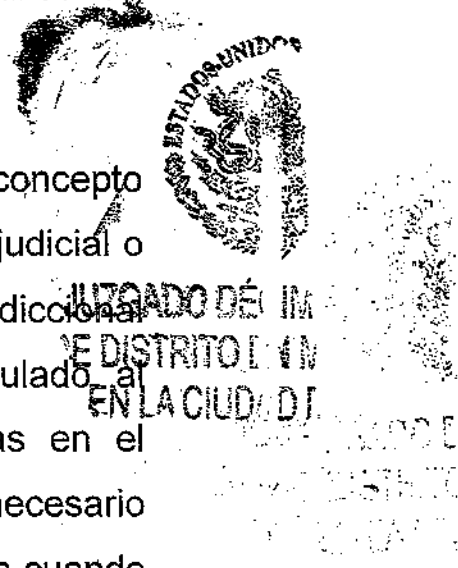
320353478017

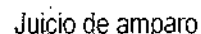
admisión de la prueba, sin que se encuentre contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal, por lo que su decisión carece de fundamentación y motivación.

En apoyo a sus consideraciones, el quejoso invoca el criterio de rubro: *"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE"*.

Son **sustancialmente fundados** los motivos de disenso, sintetizados en párrafos arriba.

En principio, es menester señalar que el concepto natural de *litis* se traduce en pleito, controversia judicial o actuación en juicio, que trasladado al ámbito jurisdiccional debe entenderse como el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se estima necesario apuntar, que es con la contestación a la demanda cuando la *litis* o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juzgador, situación similar acontece cuando se trata de la interposición de cualquier medio de impugnación, supuesto en el cual, la *litis* se constituye con los agravios expresados en el recurso respectivo, lo cual no puede ser desconocido por el órgano revisor.





JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

[REDACTED]

En términos generales, integrada la *litis* las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial.

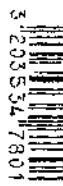
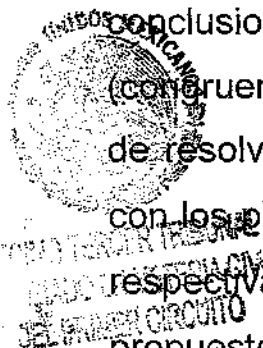
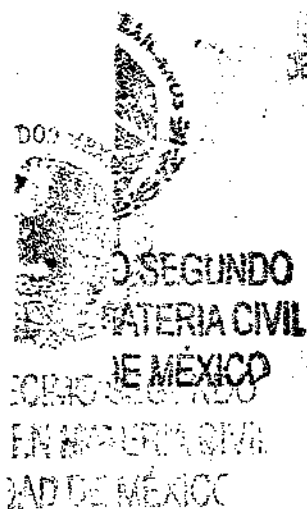
De manera que, el órgano resolutor al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no puede ocuparse en su fallo de puntos o cuestiones no comprendidas en la *litis*.

Es así que, el principio de congruencia consiste en que las resoluciones correspondientes no contengan conclusiones y afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna) e impone a los juzgadores el deber de resolver la *litis* (conflicto) tal y como quedó integrada con los planteamientos expuestos en la demanda y en su respectiva contestación, así como con los agravios propuestos (congruencia externa).

El artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece lo siguiente:

“Artículo 81. Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”

Del anterior precepto legal, se obtiene, en lo que interesa, que las determinaciones que emita la autoridad



jurisdiccional deben de ser, claras, precisas y congruentes con las constancias de autos.

De ahí que, las sentencias que se dicten en el recurso de apelación también deberán satisfacer el principio procesal de congruencia interna y externa, porque la facultad del órgano de apelación de resolver el recurso que las partes interpongan implica, sin duda alguna, examinar los agravios que expongan, sin emitir en el fallo consideraciones contradictorias.

Es patente que la *litis* en esa instancia no puede ser modificada por las partes después de que ha sido fijada con el escrito de agravios y la sentencia apelada, lo que revela la obligación de la autoridad revisora para ceñir su actuación a lo argumentado en vía de agravios.

En esa tesitura, la sala resolutora atendiendo al principio de congruencia externa debe resolver lo conducente respecto de la resolución recurrida, análisis sin el cual no puede decirse que se cumplió con el principio de congruencia, por lo que debe ocuparse de los planteamientos que formula la disconforme relativos al fallo apelado.

Con el objeto de verificar si en el caso, la sala responsable violó el principio de congruencia externa, es conveniente señalar que el quejoso, en el recurso de apelación, esgrimió toralmente los agravios, que se sintetizan a continuación:

A). Que se violan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24



SECRETARÍA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

01

Amparo indirecto



y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) –principio *pro persona*–, en relación con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, interpretado a contrario sensu, al admitirse ilegalmente la prueba marcada con el numeral doce, señalada en el escrito de ofrecimiento de pruebas de la actora.

B). Que se contraviene la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), porque además de ser incongruente carece de fundamentación y motivación, con lo cual se dejó en completo estado de indefensión a la parte apelante.

En el fallo reclamado, que resolvió el recurso de apelación, la sala responsable determinó esencialmente lo siguiente:



PRIMERO SEGUNDO
SEGUNDO EN MATERIA CIVIL
MATERIA CIVIL DE MÉXICO
DE MÉXICO

- Estudió conjuntamente los dos agravios propuesto por la parte apelante, los cuales declaró infundados.
- Para lo cual, determinó por lo que respecta a la supuesta violación a los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la resolutora se encontraba impedida para hacer consideraciones sobre el particular, al estar reservado su análisis y resolución a las autoridades federales.
- Así como, señaló que el auto recurrido se encontraba debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles para la

5 2035347801

Ciudad de México, pues el recurso de apelación interpuesto por el demandado, tenía fundamento en el primer artículo invocado (sic), porque se argumentó que la prueba consistente en el informe que se ordenó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a la existencia de cuentas a nombre del hoy apelante, las cuales están a su nombre y se remitan copias certificadas de tales cuentas, lo cual resultaba violatorio del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito.

- Además, precisó que el *a quo* no se fundó en dicho precepto legal (sic) para admitir la prueba señalada con antelación, siendo que el juicio de origen se tramitó en la vía ordinaria civil y los informes se están solicitando en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial que conoce del presente juicio, en relación a una persona que tiene el carácter de demandada en el juicio de que se trata, además, que no existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata, razón por la que se confirmó el auto apelado.

La confrontación de los razonamientos que sostienen el acto reclamado, con los anteriores argumentos esgrimidos por el quejoso, resulta claro que la Sala responsable en contravención a lo establecido en el invocado artículo 81, no abordó totalmente el examen de los planteamientos propuestos en el recurso de apelación.

En efecto, la Sala civil soslayó pronunciarse en sus términos respecto de la cuestión efectivamente planteada



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo indirecto



en el recurso de apelación, pues en lugar de resolver lo conducente en relación con la violación a los derechos fundamentales del quejoso, contenidos en el derecho doméstico y en la convención extranjera a que alude, determinó que se encontraba impedida para pronunciarse sobre el tema propuesto, aludiendo a que era cuestión propia de las facultades de las autoridades federales, que se traduce en una atribución reservada exclusivamente a temas propias de constitucionalidad, mas no de control de convencionalidad.

Es así, que la cuestión omitida por la autoridad responsable debía ser abordada desde la óptica del principio *pro persona*, que surge con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, que modificó, entre otros, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguiente:

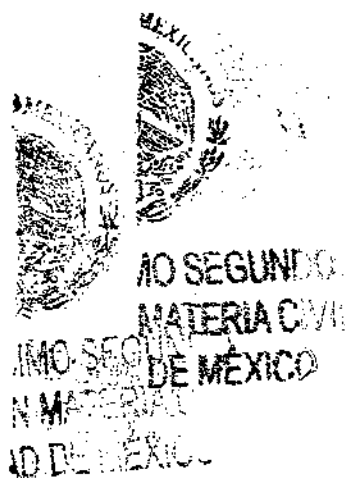
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las



5 203534 78011

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En dicho precepto legal se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad.

Con base en ese precepto, **cualquier juez nacional**, está facultado para emitir pronunciamiento en respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro persona*.

Por tanto, en el sistema jurídico mexicano actual, los **jueces nacionales**, tanto **federales** como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las **demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución**



Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Amparo indirecto

Con los anteriores razonamientos queda demostrado que la Sala sentenciadora tenía la obligación legal de pronunciarse respecto de la cuestión propuesta por el quejoso relativa al respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales y no limitarse a señalar que se encontraba impedida para hacerlo, pues evidentemente es un tema que debe ser resuelto por cualquier órgano jurisdiccional del país.

Asimismo, está evidenciado que no existió pronunciamiento alguno, en relación con que se vulneró la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en la Ciudad de México.

En efecto, la Sala civil se limitó a estudiar conjuntamente los agravios propuestos por el apelante, determinando su imposibilidad legal para pronunciarse respecto de temas, que estimó reservados a las autoridades federales y declaró legal lo determinado en el auto recurrido, por no existir prohibición para la admisión de la prueba en comento, sin que se hubiere pronunciado respecto a la cuestión precisada en párrafos arriba, siendo que se encuentra obligada a dar respuesta fundada al argumento en comento, contenidos en el pliego de agravios de dicho medio de impugnación.

Cabe destacar, que los artículos 39 y 41 contenidos en el capítulo V de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
JEFATURA DE LA FISCALÍA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMER JUICIO DE AMPARO
RECIBIDO
23 DE ABRIL DE 2003
MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), disponen:

“Artículo 39. La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral.”

“Artículo 41. En los casos en que no se pudiese resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo.”

Los citados preceptos contemplan distintas medidas para reparar el daño causado por el ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, que consisten en la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado o en su defecto, a través de una indemnización.

El propio artículo 41 establece una serie de criterios que deberán ser tomados en cuenta al momento de fijar la indemnización, los cuales permiten precisamente graduar la responsabilidad de la persona en función de las circunstancias concretas en las que se realizó la expresión. Esos criterios incluyen “la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso.”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

Amparo indirecto

En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 41 establece la posibilidad de *atenuar* la medida reparatoria al permitir al juez *"disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo"* en los casos en que los sujetos afectados por las expresiones sean servidores públicos. Y por otro lado, el artículo 43 hace posible *agravar* el monto de la reparación en casos de reincidencia durante el plazo de un año, al dar la posibilidad al juez de *"imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización."*

Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que *"en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas."* Mientras que el propio artículo 41 estipula que *"en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."*

Por tanto, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece el monto o límite de la indemnización por daños al patrimonio moral, la cual el juez determinará según lo previsto en el artículo 41 referido (tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, no pudiendo en ningún caso el monto por indemnización exceder de



DÉCIMO SEGUNDA
O EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

3 203534 780173

trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad).

Consecuentemente, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación en estudio, pues la resolución reclamada es violatoria de lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos siguientes:

- La sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca [REDACTED]
- En su lugar emita otra, en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la *litis* planteada en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, propuesto a su potestad esencialmente, por lo que hace, por una parte, a los planteamientos referentes a que se vulneraron los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), relativos al principio *pro persona*, y por otra, a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo
indirecto**

Al haberse declarado fundados los conceptos de violación en estudio, dirigidos a demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, este Juzgado de Distrito ya no entra al estudio de los demás conceptos de violación planteados por el quejoso, al resultar innecesario su análisis.¹

La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de esta primera, tiene que resolverse igualmente por lo que toca a las ejecutoras.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

ÚNICO. La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a [REDACTED] por derecho propio, contra actos de la **Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos de la última parte considerativa de este fallo.

NOTIFÍQUESE personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

¹ Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia, de la Séptima Época, Tercera Sala, del Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 107, página: 85, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS"...

DOS MEXICO EXILANDS
CINCO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
AD DE MEXICO

Así lo resolvió y firma, **Francisco Peñaloza Heras**,
Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de México, hasta hoy veinticinco de julio de dos
mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado
ante el Secretario Víctor Aguirre Montoya. **Doy fe.**

En esta fecha giraron los oficios [REDACTED] a las autoridades
responsables, notificando la sentencia que antecede. **Conste.**

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del 26 de Julio, se
notifica a las partes la resolución que antecede por medio de lista de acuerdos, hecha
en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. **Doy fe.**
El 27 de Julio de 2017, surtió efectos legales la notificación que
refiere la razón que antecede, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la
Ley de Amparo. **Doy fe.** El (a) Actuario (a) Judicial.

L. A. Alola Nancy Diaz N. C.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Constancia de captura de Sentencia en el
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

Órgano jurisdiccional:

**Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de México**

Tipo de Asunto:

Amparo indirecto

No. expediente único
nacional:

No. expediente:

Materia:

Civil

Quejoso

Autoridad responsable

**SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y OTROS**

Tema:

Juez:

Francisco Peñaloza Heras

Sentido de la resolución
o sentencia:

Ampara

Fecha de la resolución o
sentencia:

25/07/2017

Fecha y hora de ingreso de
resolución o sentencia al
sistema:

26/07/2017 06:08:00 p.m.

EL SUSCRITO VICTOR AGUIRRE MONTOYA SECRETARIO DE JUZGADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA SE PROCEDIÓ
A CAPTURAR EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, LA SENTENCIA DE FECHA 25/07/2017
DICTADA POR FRANCISCO PEÑALOZA HERAS TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVA QUE RIGE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

DÉCIMO SEGUNDO
JUZGADO
DE MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

FIRMA

Cerrar

Imprimir



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

102

97

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA:	veinticinco de julio de dos mil diecisiete
EXPEDIENTE:	PRINCIPAL
NÚMERO:	[REDACTED]
PROMOVIDO POR:	[REDACTED]
ASUNTO:	SENTENCIA DEFINITIVA



Código	No. Ofici	Autoridad	Zon
[REDACTED]	[REDACTED]	AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCR S/Z (MINISTERIO PÚBLICO)	
[REDACTED]	[REDACTED]	SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR S/Z DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	
[REDACTED]	[REDACTED]	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y VALORES (AUTORIDAD RESPONSABLE)	
[REDACTED]	[REDACTED]	JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	
[REDACTED]	[REDACTED]	EXPEDIENTE: EXP [REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	TOCA [REDACTED]	

[Handwritten signature]



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

103

98

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: veinticinco de julio de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SENTENCIA DEFINITIVA

Código

No Ofici

Autoridad

Zon



AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCR S/Z (MINISTERIO PÚBLICO)

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y VALORES (AUTORIDAD RESPONSABLE)

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE: EXP TOCA

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALÍA DE PARTES

Sin anexo(s)

ID003079

28/07/2017 11:45



201700340955



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

99

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SIDAR Y ROVIROSA ESQUINA EDUARDO MOLINA, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.
ACCESO OCHO - NIVEL PLAZA

NOTIFICACIÓN PERSONAL

JUICIO de Amparo
CUADERNO Principal
EXPEDIENTE [REDACTED]

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS quince HORAS
CON treinta y cinco MINUTOS DEL DÍA
dieciocho DE julio DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE, EL SUSCRITO LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO
RAMOS SERRANO, ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO
DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MEXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN Proveído
DE Veracruz DE julio DE DOS MIL
DIECISIETE, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO EN EL
ÍNDICE DEL JUZGADO DE MI ADSCRIPCIÓN
COMO [REDACTED], ME CONSTITUI EN LEGAL Y DEBIDA
FORMA [REDACTED] DOMICILIO [REDACTED] EN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BUSCA DE LA
PARTE [REDACTED]

Y, BIEN CERCIORADO DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS
PARA LA PRÁCTICA DE LA PRESENTE DILIGENCIA, TODA VEZ QUE ELLO
SE DESPRENDE DE SENDAS PLACAS OFICIALES COLOCADAS EN LA
ESQUINA DE DICHA CALLE, COMO POR COINCIDIR LA NUMERACIÓN
EXTERIOR treinta y cinco
ASÍ COMO POR EL DICHO DE LA PERSONA QUE ME ATIENDE, QUIEN
DIJO LLAMARSE [REDACTED]

QUIEN SE IDENTIFICÓ CON
cedula profesional [REDACTED]

EXPEDIDO A SU FAVOR POR
Secretaría de Educación Pública

DOCUMENTO DEL CUAL EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL DA FE DE
HABER TENIDO A LA VISTA, EN UNA DE SUS CARAS TIENE ADHERIDA
UNA FOTOGRAFÍA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS
DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, DICHO
DOCUMENTO SE DEVUELVE A SU INTERESADO EN ESTE ACTO POR
CONSIDERAR innecesaria SU RETENCIÓN, QUIEN
MANIFESTÓ estar autorizado para dar y recibir
notificación de la parte [REDACTED]

PERSONA ANTE QUIEN ME IDENTIFIQUÉ COMO ACTUARIO JUDICIAL
ADSCRITO AL JUZGADO FEDERAL MENCIONADO CON LA CREDENCIAL
EXPEDIDA A MI FAVOR POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
PROCEDIENDO A NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL (LA)
Secretaría DE QUE SE TRATA, ENTREGÁNDOLE EN ESTE

ACTO COPIA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SELLADA Y COTEJADA DE
Antena de voluntario de julio de dos mil
diecisiete

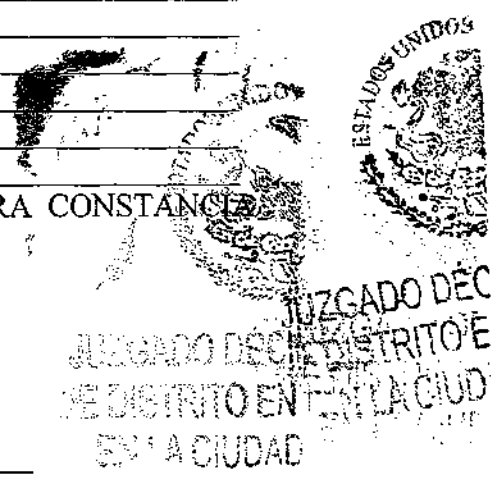
Y No FIRMA DE CONFORMIDAD LA PRESENTE PARA CONSTANCIA
LEGAL. DOY FE.-

EL ACTUARIO JUDICIAL

LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO

FIRMA

*El suscrito, hace constar que la persona
que me atende y me da firma
por no creer lo necesario.
Conste doy fe.*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

2017 JUL 31 15:09:09

105 100

SEXTA SALA CIVIL

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: veinticinco de julio de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SENTENCIA DEFINITIVA

Código

No. Oficio

Autoridad

Zona



AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCR SIZ
(MINISTERIO PÚBLICO)

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR SIZ
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y SIZ
VALORES (AUTORIDAD RESPONSABLE)

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE SIZ
CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

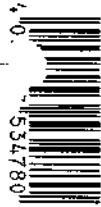
ANTECEDENTE: EXP

TOCA

DISTrito SEGUNDO DE DISTRITO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: veinticinco de julio de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SENTENCIA DEFINITIVA

Código

No Ofici

Autoridad

Zon

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCR SIZ (MINISTERIO PÚBLICO)

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y VALORES (AUTORIDAD RESPONSABLE)

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE: EXP

TOCA



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL DE SAN LÁZARO
SIDAR Y ROVIROSA ESQUINA EDUARDO MOLINA
COLONIA DEL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
CÓDIGO POSTAL 15960, CIUDAD DE MÉXICO.
ACCESO 8 NIVEL PLAZA

CITATORIO.

TERCERO INTERESADO: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

Para la práctica de una diligencia Judicial de carácter personal, deberá usted acudir al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del en la Ciudad de México, ubicado en **Eduardo Molina Número 2, entre Sidar y Rovirosa, Colonia del Parque, delegación Venustiano Carranza, en el acceso 8, nivel plaza; con identificación oficial, dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día de hoy, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por lista la sentencia de 25 de JULIO de 2017 emitida en el juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED]**

Dejo el presente citatorio, en virtud de no haber encontrado a la persona buscada; cerciorado de que me encuentro en el domicilio de la buscada por así habérmelo manifestado la persona que me atiende, quien dijo llamarse [REDACTED], que (se identifica con o no se identifica y poner la descripción de la persona) copia certificada cédula profesional [REDACTED] y por los siguientes medios (medios de cercioramiento del inmueble): inmueble edificado en planta baja y once pisos fachada en marmel blanco, el número exterior se apruega del lado izquierdo, los pisos superiores en cristal y acero. Edificio administrado por inmobiliaria Conher, S.A. de C.V.; y requerida de su presencia me informa quien me atiende que la buscada no se encuentra en ese momento por ser despacho de sus abogados pero que ahí (vive, labora o se recibe toda clase de notificaciones relacionadas con la misma); lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27, inciso b) de la Ley de Amparo; la persona con la que atiendo la presente al firma de recibo [REDACTED] a las catorce horas treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

EL ACTUARIO JUDICIAL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO

Lic. Axel Hernández Díaz



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

103

CITATORIO

103

CUADERNO PRINCIPAL
NÚMERO [REDACTED]

En la **Ciudad de México**, siendo las **catorce horas del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete**, el que suscribe **Licenciado Axel Hernández Díaz, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, en cumplimiento a lo ordenado en **sentencia de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, turnado para su diligencia hasta el día de hoy**; emitida dentro del **juicio de amparo número** [REDACTED], me constituí en legal y debida forma en el domicilio ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] en busca de la parte

[REDACTED] cerciorado de ser el domicilio señalado en autos para la práctica de la presente diligencia, toda vez que ello se desprende de sendas placas oficiales colocadas en la esquina de dicha calle, como por coincidir, **el número, calle, colonia, código postal y Delegación Política**, así como por el dicho de la persona que me atiende; ante quien me identifiqué con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, con número de empleado **56630**, que me acredita como actuario judicial y le requiero la presencia de la persona buscada y/o de quien legalmente le represente, manifestando no encontrarse en ese momento, pero ser ese el domicilio donde puede ser notificada al ser **despacho de sus abogados**, en virtud de habérmelo manifestado quien dice llamarse [REDACTED] quien se identifica [REDACTED]

[REDACTED] por su conducto le dejo citatorio para que, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo cuya expedición fue publicada el día dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, la persona buscada y/o quien legalmente la represente con identificación oficial vigente **acuda al órgano jurisdiccional de mi adscripción a notificarse, apercibiéndole que en caso de no hacerlo dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de la presente diligencia, se le notificara por lista la sentencia citada**, persona que recibe de conformidad el citatorio y **SI** firma la copia del mismo para que obre como constancia legal.- **Doy Fe.**

El Actuario Judicial

Axel Hernández Díaz



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

109

104

En tres de agosto de dos mil diecisiete, atento a lo manifestado en la razón anterior, se procede a notificar por medio de lista la sentencia de veinticinco de julio de dos mil diecisiete; a la parte **TERCERA INTERESADA** [REDACTED] en términos del artículo 27 fracción I inciso b de la ley de amparo cuya expedición fue publicada el día dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.- Conste.- Doy Fe.- El Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Licenciado Cristian Eduardo Ramos Serrano.

En cuatro de agosto de dos mil diecisiete, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refieren las razones que anteceden conforme a lo dispuesto en el artículo 31 fracción I de la Ley de Amparo cuya expedición fue publicada el día dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.- Conste.- Doy Fe.- El Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Licenciado Cristian Eduardo Ramos Serrano.



JECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



JECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO

10/10/17

31/10/17

15482

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO INDIRECTO [REDACTED]

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

[REDACTED] en
representación de [REDACTED] personalidad que solicito me sea
reconocida en términos del instrumento notarial que adjunto exhibo como anexo 1, al
presente escrito, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en la calle de [REDACTED]

[REDACTED], autorizando para que en mi nombre y
representación las oigan y reciban en términos de lo que disponen los artículos 12 y 24 de la
Ley de Amparo a los licenciados en Derecho [REDACTED]

[REDACTED]
encuentran debidamente inscritas en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito autorizando únicamente para oír y recibir
notificaciones, imponerse de los autos, tomar fotografías y recibir toda clase de documentos
a [REDACTED], indistintamente respetuosamente
expongo

Dentro del término a que se refiere el artículo 86 de la
Ley de Amparo, vengo a interponer **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia
de fecha 16 de mayo del 2017, dictada en el juicio de garantías señalada al rubro, misma
que fuera notificada a la quejosa mediante lista de fecha 3 de agosto del 2017, surtiendo
sus efectos el 4 de agosto del año en curso, por que dicha resolución causa a mi
representado los siguientes:

AGRAVIOS

I.- PRIMER AGRAVIO.

Parte de la resolución que lo causa lo constituyen toda
la sentencia recurrida, por cuanto hace conceder al quejoso el Amparo y Protección de la
Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados de la H. Sexta Sala del Tribunal
Superior de Justicia de esta Ciudad.

Preceptos legales violados, no aplicados o aplicados indebidamente: lo son los artículos 73, 74, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, 222 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con las tesis jurisprudenciales que se invocan en este ocurso.

Concepto de agravio:

La sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo 55/2017-IV de fecha 16 de mayo del 2017, ya que es ilegal, toda vez que resulta incongruente, tal y como se expone a continuación:

Como se advierte los argumentos expuestos por el A Quo en la sentencia impugnada en los que sostiene que la autoridad responsable debió entrar al estudio de los agravios que se hicieron valer por el quejoso en contra del auto de 28 de septiembre del 2016, que ordena se gire oficio al Comisión Nacional Bancaria de Valores a fin de que informe sobre las cuentas bancarias del quejoso, a pesar de que no invoco violaciones procesales, toda vez que la sentencias incluyendo las de apelación deben satisfacer el principio procesal de congruencia interna y externa ya que las facultades del órgano de apelación deben resolver el recurso que las partes interpongan.

La sentencia dictada por la dictada por la Sexta Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca de apelación [REDACTED] declara que es improcedente el recurso de apelación hecho valer por el hoy quejoso en contra del auto de 28 de septiembre del 2016 dictado por el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en virtud de que básicamente argumenta violaciones a derechos humanos así como a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada y al Honor y la Propia Imagen (hoy Ciudad de México), sin alegar violaciones procesales en contra del dictado del auto de 208 de septiembre del 2016 por el Juez Natural.

DÉCIMO SEGUNDO
O EN MATERIA CIVIL
IDAD DE MÉXICO

En este sentido es importante desatacar que los argumentos planteados por el hoy quejoso ante la Sala responsable no alegaban violaciones al procedimiento, sino violaciones a supuestos derechos humanos, por lo que la Sala Responsable acertadamente decidió no entrar a los agravios formulados por el quejoso, pues ello conllevaría a que en la apelación no se alegaran violaciones procesales, sino violaciones constitucionales como lo pretende la hoy quejosa.

En este sentido, la Sala responsable no entro al estudio de las supuestas violaciones a derechos humanos, pues el hoy quejoso, no argumento violaciones procesales, razón por la cual su resolución estuvo apoyada en derecho contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida.

No debe perderse de vista que el juicio constitucional tiene por objeto el análisis de sentencias en las que no se cumplieron las formalidades del procedimiento en que hayan transgrediendo preceptos constitucionales.

En el caso que nos ocupa el acto reclamando resulta fundado en derecho por parte de la autoridad responsable, pues no tenía obligación de entrar al estudio de los agravios que no tienen a combatir la resolución apelada.

Tomando en consideración que el hoy quejoso, no alega violaciones procesales, sino violación a los derechos humanos, la Sala responsable no contemplo determinar sobre dichas alegaciones, pues incluso en el caso de que existirán serían inoperantes para modificar el auto atacado, ya que en ninguna parte de los agravios se expone la razón procesal por la cual la prueba documental consistente en el informe que debe rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no debió admitirse.

Sin embargo el A quo no lo determina de esa forma apoyándose en el principio de congruencia, de que la Sala debió entrar al estudio de los agravios, pero pasa inadvertido que el quejoso no expuso agravios ante la Sala Responsable en toca de apelación [REDACTED] que combatieran o hicieran ver el indebido ofrecimiento del informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a pesar de ello haya sido admitido por el Juez natural.

El ofrecimiento de dicha documental cumple con los requisitos del artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles sin embargo el quejoso se limitó a alegar que la admisión de esa probanza viola sus derechos humanos, luego entonces la Sala Responsable actuó de manera acertada al señalar que no era dable entrar al estudio de los agravios se limitaban señalar violaciones a los Derechos Humanos del Quejoso, pero el A quo pretende atribuir esta obligación a la Sala Responsable.

En esa tesitura, es evidente que la sentencia que resuelve un recurso de apelación debe concretarse a analizar si el auto impugnado contraviene disposiciones legales que rige el procedimiento, pero no ha determinar si hubo violaciones a los derechos humanos, pues dichas atribuciones le corresponderían al a quo con motivo de que se hubieran alterado las formalidades del procedimiento en la aplicación del Derecho.

Es lógico el argumento de la Sala Responsable de dejar de abstenerse de entrar al estudio de los agravios, pues incluso si lo hubiera hecho hubiera confirmado el auto apelado al no señalarle las disposiciones legales que se dejaron de aplicar o que fueron aplicadas inexactamente.

La sentencia que se combate en ninguno de sus considerandos explica porque a pesar de que el quejoso no ataco procesalmente el auto recurrido, deben valorarse unos agravios inoperantes.

De lo contrario se estaría permitiendo que en el recurso de apelación se introdujeran cuestiones ajenas a los agravios que fueron motivo de apelación, pues el apelante hoy quejoso nunca manifestó a la Sala responsable la razón procesal para no admitir la prueba documental consistente en el informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por todo lo anteriormente expuesto, es obvio que en el caso concreto la sentencia recurrida es incongruente e ilegal llegando al extremo de interpretar indebidamente los conceptos de violación que hace el quejoso, lo que hace que su resolución sea del todo incongruente y por ende ilegal, pues pretende que la Sala resuelva sobre un auto impugnado en el que no se atacaron violaciones al procedimiento, sino situaciones ajenas como es la violación a los derechos humanos.

En tal virtud al resultar evidente que la sentencia impugnada es incongruente y por ende ilegal, debe dictarse otra en su lugar en la que se declaren infundados todos y cada uno de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, especialmente los consistentes en que la Sala Responsable debe resolver sobre cuestiones ajenas a su esfera jurídica como los es atender supuestas violaciones a Derechos Humanos.

Es importante señalar que el quejoso en los agravios que expuso ante Autoridad responsable se limitó al argumentar violaciones a los derechos humanos mas no al procedimiento, sin atacar el razonamiento del Juez natural, razón por la cual resulta erróneo el criterio del Juez A quo en sentido de que tuvo que pronunciarse sobre la supuesta violación a los derechos humanos.

Por otra parte, el A quo pasa inadvertido que el quejoso nunca expuso la razón de porque el auto apelado trascendería en fondo del asunto, por lo que la Sala responsable si tenía la facultad de analizar o no los agravios, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria que más adelante se cita.

Época: Décima Época

Registro: 2010466

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1

Materia(s): Civil

Tesis: 1a./J. 39/2015 (10a.)

Página: 669

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL SON INOPERANTES CUANDO EL RECURRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA.

El artículo 1339, párrafo último, del Código de Comercio, prevé que tratándose del recurso de apelación, los agravios que en su caso deban expresarse contra resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, se expresarán en la forma y en los términos previstos en el diverso numeral 1344 del ordenamiento indicado. Por su parte, el párrafo tercero de este último precepto establece que tratándose de la parte vencida o de aquella que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación preventiva, deberá señalar en los agravios contra la sentencia que resolvió el juicio, de qué forma trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal impugnada. Por ello, si el recurrente omite cumplir con dicha carga procesal, el tribunal de apelación no podrá subsanar esta omisión y pronunciarse sobre la trascendencia que pudiera tener el resarcimiento de dicha violación, pues ello implicaría efectuar un análisis oficioso a favor de una de las partes, violándose con ello el principio dispositivo del proceso mercantil así como los principios de justicia imparcial y equidad procesal. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, al actualizarse un obstáculo procesal que impide al tribunal de alzada analizar si las violaciones procesales impugnadas podrían o no trascender al fondo del asunto, los agravios que en su caso se hubieren hecho valer en el recurso de apelación preventiva deben declararse inoperantes, al no ser jurídicamente posible analizar su eficacia y, con ello, determinar si procede o no revocar la sentencia definitiva y ordenar la reposición del procedimiento.



DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
DE MATERIA CIVIL
DE MATERIA CIVIL

Contradicción de tesis 217/2014. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de abril de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Leño de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 282/2013, con las tesis aisladas I.6o.C.8 C (10a.) y I.6o.C.9 C (10a.), de títulos y subtítulos: "APELACIÓN PREVENTIVA. LA EXIGENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1344, TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN EL SENTIDO DE QUE EL APELANTE

DEBERÁ EXPRESAR EN LOS AGRAVIOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL JUICIO, DE QUÉ MANERA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL A SUBSANAR, AFECTA EL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." y "APELACIÓN PREVENTIVA. SI EL APELANTE NO EXPUSO DE QUÉ MANERA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL A SUBSANAR, ELI O NO PUEDE TENER EL ALCANCE DE QUE SE DEJEN DE EXAMINAR LOS AGRAVIOS RESPECTIVOS (ARTÍCULO 1344, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, páginas 1616 y 1617, números de registro digital 2005837 y 2005838, respectivamente.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 2/2011, que dio origen a la tesis VI.1o.C.148 C (9a.), de rubro "APELACIÓN PREVENTIVA. LA OMISIÓN DE EXPRESAR EN LOS AGRAVIOS LA MANERA EN QUE TRASCIENDE AL FONDO DEL ASUNTO LA VIOLACIÓN ADUCIDA, LLEVA A DECLARARLOS INATENDIBLES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1344 DEL CÓDIGO DE COMERCIO", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1072, número de registro digital 160255.

El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo 565/2013, sostuvo que la exigencia prevista en el artículo 1344, contraviene el principio de tutela judicial efectiva en la medida en que coarta el derecho a acceder a un recurso judicial rápido, sencillo y eficaz, pues el hecho de obligar al recurrente a emitir un juicio de valor, específicamente relacionado con la trascendencia de la violación procesal en el fallo definitivo se traduce en una formalidad excesiva y, por ende, en un obstáculo que impide el libre acceso a la jurisdicción de segunda instancia, que incluso puede convertirse en una verdadera trampa procesal en la que irremisiblemente caerá el recurrente, quien, ante ese exceso de formalidades, fácilmente puede dejar de cumplir con alguno de los requisitos que desproporcionadamente estableció el legislador.

Tesis de jurisprudencia 39/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de mayo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Como sus Señorías pueden advertir los agravios del quejoso hechos valer ante la Autoridad responsable no atacan violaciones procesales ni mucho menos que con dicha resolución se trascienda en el fallo que se llegue a dictar, por

lo tanto, debió negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en base a los argumentos vertidos en el cuerpo del presente ocurso.

En tal virtud, la sentencia que constituye el acto reclamado se apega a lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, pues es congruente al no entrar el estudio de cuestiones no son objeto de la litis.

El tal virtud es procedente el recurso de revisión que se hace valer.

SEGUNDO AGRAVIO

Parte de la resolución que lo causa: Toda la sentencia recurrida, por cuanto hace conceder al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados de la H. Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad,

Preceptos legales violados, no aplicados o aplicados indebidamente, son los artículos 73, 74, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, 222 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con las tesis jurisprudenciales que se invocan en este ocurso.

Concepto de agravio

DÉCIMO SEGUNDO
O EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO
O EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

La sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo de fecha 10 de mayo de 2017, ya que es ilegal, toda vez que resulta incongruente, como se expone a continuación:

En el caso que nos ocupa la sentencia impugnada resulta ser ilegal toda vez que en la citada resolución el Juez A Quo sostiene que también debe contemplarse lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin que se ataquen violaciones procesales en el auto de 20 de septiembre del 2016 dictado por el Juez Natural.

Respecto al monto de la indemnización que se reclama en las prestaciones de la demanda inicial se hace notar el monto de -Trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que dicho "límite máximo" transgrede las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1 133 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal y como se demostrará con la amplitud debida en el capítulo de "Hechos" de la presente demanda

En tal virtud debe atenderse a lo siguiente:

El argumento del A quo prejuzga sobre la cantidad a que debe ser condenado el hoy tercero interesado y que por ende es irrelevante el informe que rinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como sus Señorías podrán percatarse no se combate la admisión de la prueba sino situaciones ajenas.

Ciertamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia, criterios relativos a la naturaleza y alcances de la -Obligación de Reparar- y dentro de éstos el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlo, atendiendo al daño causado.

Así, el concepto relativo a una "justa indemnización" o "indemnización integral" implica el restablecimiento de la situación anterior y de no ser esto posible, establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar.

La reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido.

Las "reparaciones" como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos.

En el documento denominado "Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones" aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el diecinueve de febrero de dos mil ocho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la reparación adecuada del daño sufrido debe concretizarse mediante medidas individuales tendientes a restituir e indemnizar.

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas también ha emitido principios y directrices que determinan los alcances del derecho a obtener reparaciones; en esencia, dichos principios establecen que la obligación que tienen los Estados de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos dentro de su Estado, tal es el caso de la relativa a proporcionar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido en las formas de restitución e indemnización.

Los Estados, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material al regularlo.

Por lo anterior, podemos afirmar válidamente que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que el "límite máximo de indemnización" previsto por dicha norma jurídica implica una restricción injustificada a los derechos constitucionales, por lo que la resolución que dicte su Señoría no debe limitarse al tope a que se refiere la disposición legal antes señalada.

El referido "tope" es inconstitucional, porque la existencia de límites a las indemnizaciones debidas a los perjudicados por daños morales causados; restringe injustificadamente el derecho a una reparación "justa e integral" ya que si bien es cierto que la voluntad del legislador fue la de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, no menos cierto es que axiológicamente, el derecho a las medidas compensatorias en los casos que justamente le ameritan, tiene mayor valor que la pretendida voluntad estatal de "limitar" el monto de las reparaciones.

En efecto, la fijación del tope máximo de -Trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den, ni resulta necesaria para evitarlos, ya que las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas.

El tope máximo previsto por el precepto legal examinado es una medida legislativa no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir; además, contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño.

Consecuentemente, al momento de establecer en definitiva el monto de la indemnización que deberá cubrir el quejoso, a favor del suscrito, el Juez natural deberá omitir atender al límite máximo previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, ya que de lo contrario se verían vulnerados los derechos de mi representado a recibir una justa indemnización.

El artículo 63.1 del Pacto de San Jose señala que cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo que si ello fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, en razón de lo anterior resulta inconstitucionales los artículos 31, 39 y 41 de la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida

privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, toda vez que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la convención americana sobre derechos humanos y también el artículo 1 constitucional, toda vez que el tope máximo previsto por dicha legislación permite limitaciones irracionales al derecho de ser indemnizado de manera integral.

En mérito al razonamiento antes vertido el hecho de limitar la indemnización a lo previsto en la Ley la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene en inconstitucional

Considerar un tope máximo implicaría resarcir cierto tipo de derechos pero se pasarían por alto otro tipo de afectaciones como el sufrimiento, ansiedad o menoscabo de la dignidad. Por lo que debe considerarse una justa indemnización basada en las particularidades del caso y en los principios de equidad.

En ese sentido debe atenderse a que mi representado es una figura pública que lo distingue de las demás personas sujetos a la reparación del daño moral, por lo que la sanción que se imponga al hoy quejoso no solo debe ser condenatoria en el sentido de la publicación de la sentencia y de la retractación de los comentarios hechos en su contra, sino debe atender a una reparación económica pero a esta no debe aplicarse el tope máximo que prevé el artículo 41 de la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, sino a una justa indemnización basa en las particularidades del presente caso.

UNIDOS MEXICANOS
PRIMER SECCION
DECIMO SEGUNDO
RITO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO

Sirve de apoyo y fundamento legal a mis anteriores conclusiones lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la figura de -topes o montos máximos- relativos a indemnizaciones por daño moral:

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución Federal prevé un derecho sustantivo a ser indemnizado por los daños generados por la actividad administrativa irregular del Estado (A.R. 903/2008). Las autoridades estatales, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material al regularlo y de

desplegar sus potestades públicas con el objetivo de garantizarlo. Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece las reglas conforme a las cuales deben calcularse los montos de las indemnizaciones que el Estado debe pagar cuando genera daños a los particulares, y en su fracción II señala dos reglas respecto al daño moral: 1) la autoridad administrativa o jurisdiccional debe calcular la indemnización conforme a los criterios establecidos en el Código Civil Federal, tomando en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante y 2) dicha indemnización no debe exceder del equivalente a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal por cada reclamante afectado. De acuerdo con los criterios con que esta Corte evalúa si existe una restricción injustificada a los derechos constitucionales, se concluye que el referido tope es inconstitucional porque, aunque sea una medida que puede relacionarse con la consecución de un objetivo admisible constitucionalmente, no es instrumentalmente adecuada para alcanzarlo. La existencia de límites a las indemnizaciones a los perjudicados por daños morales causados por el Estado es un objetivo sin duda cubierto por el artículo 113 constitucional, que precisa que los particulares tienen derecho a las mismas conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. La voluntad de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, subrayada en la exposición de motivos de la Ley, alude igualmente a la legítima voluntad de que las medidas compensatorias se apliquen a los casos que justamente lo ameritan. Sin embargo, la fijación del tope máximo no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den ni resulta necesaria para evitarlos. Las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas. El tope máximo previsto por el precepto legal examinado es una medida no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir que en algunos casos puede ocasionar limitaciones irrazonables al derecho a ser indemnizado. Además, el mismo contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño, ya que el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dispone que el cumplimiento de indemnizaciones ordenadas por estos órganos se rige por lo establecido en el Capítulo II de la misma, sección en la que se encuentra el artículo 14.



MINISTERIO DE JUSTICIA
Y FERIA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Y FERIA
DE MEXICO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Y FERIA
DE MEXICO

Amparo en revisión 75/2009. Blanca Delia Renteria Torres y otra. 18 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria Francisca María Pou Giménez. Época: Novena Época. Registro: 16630. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a. CLIV/2009. Página: 454

El A quo señala que la Sala responsable debe entrar al estudio de agravios sobre derechos humanos, pero prejuzga sobre la cantidad a que debe en todo caso el quejoso.

A USTED C. JUEZ y A USTEDES C.C. MAGISTRADOS, atentamente pido se sirvan:

PRIMERO. - Tener a mi representado en tiempo y conforme a Derecho, interponiendo el presente recurso de revisión.

SEGUNDO. - Admitir a trámite el presente recurso de revisión.

TERCERO. - En su oportunidad revocar la sentencia recurrida y dictar otra en los términos solicitados en éste o curso.

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
AD L






R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

117

Con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, Whilliams Tony González Jiménez, Secretario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México hace constar y **CERTIFICA**: que en esta fecha se realizó el desglose del documento exhibido, mismo que obraba glosado en una mica plástica en la foja 121 Bis. Se hace la presente certificación de conformidad con lo ordenado en proveído de veintinueve de enero del año en curso. Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil dieciocho. Doy fe.

**El Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en
Materia Civil en la Ciudad de México**


JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
WHILLIAMS TONY GONZALEZ JIMENEZ
MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

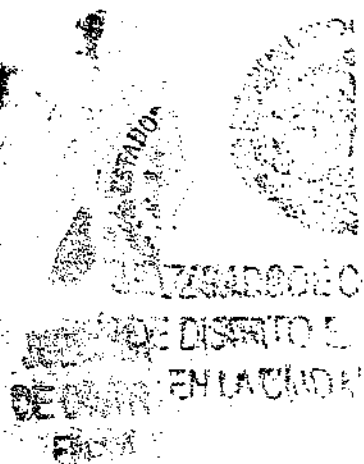
recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.

Asimismo, se dejan a disposición del tercero interesado las copias relativas al escrito de expresión de agravios, para que comparezcan por sí mismo o por conducto de sus autorizados a recogerlas.

Apoya a lo anterior, por analogía la tesis de Jurisprudencia 116/2004, en Materia Común, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 306, Tomo XX, de Septiembre 2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es:

"REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO.-

El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el Superior del Tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. Así como el original del propio escrito





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

123

119

de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.

Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público adscrito.



MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DÉCIMO SEGUNDO
DE MÉXICO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Jefe del Departamento de Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Víctor Aguirre Montoya**, quien autoriza. Doy fe.

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios a las autoridades correspondientes, notificando el auto que antecede. Conste.



EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE
HORAS DEL 23 ABO 2017 SE
NOTIFICA A

las demas partes

LA RESOLUCIÓN QUE
ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS
FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE
AMPARO. DOY FE. *[Firma]*

CON

24 AGO 2017

FECHA

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. RUTH ROCHA HERNÁNDEZ.

FOR MEXICANOS
LOS MEXICANOS
CIVIL EN
EN EL SEGUNDO
AD DE EN MATERIA CIVIL
AD DE MEXICO

1153 H. F. ELLIOTT



Política de los Estados Unidos Mexicanos

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO: [REDACTED]

PROMOVIDO POR: [REDACTED]

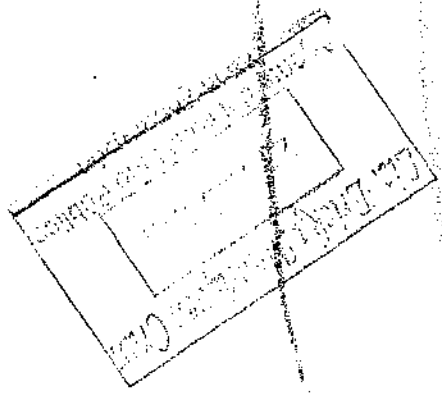
ASUNTO: RECURSO DE REVISION.

Código	No Oficio	Autoridad	Zona
[REDACTED]	[REDACTED]	AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO	S/Z
[REDACTED]	[REDACTED]	ADSCRITO.	
[REDACTED]	[REDACTED]	SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	S/Z
[REDACTED]	[REDACTED]	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	S/Z
[REDACTED]	[REDACTED]	JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	S/Z

MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO
MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

ANTECEDENTE: EXP. [REDACTED]

ANTECEDENTE: TOCA. [REDACTED]





126

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 122

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: RECURSO DE REVISION.

Código	No Oficio	Autoridad	Zona
--------	-----------	-----------	------

		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO S/Z ADSCRITO.	
--	--	--	--

		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
--	--	--	--

		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z VALORES.	
--	--	---	--

		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z CIUDAD DE MÉXICO.	
--	--	---	--

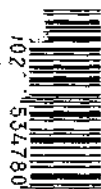
ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL
27 AGO 73 MIO 44
SEXTA SALA CIVIL

MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

SEGUNDO
TERIA CIVIL
MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: RECURSO DE REVISION.

Código

No Oficio

Autoridad

Zona

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO S/Z
ADSCRITO.

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z
VALORES.

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

JUZGADO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

JUZGADO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



OFICIALÍA DE PARTES
Con anexo(s)

ID001749 24/08/2017 15:01



201700383761





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

128

124

10

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

1 C.S.

FECHA: VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN.

Código

No Oficio

Autoridad

Zona



AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO S/Z
ADSCRITO.

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z
VALORES.

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
CIUDAD DE MÉXICO MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

107 534780





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

129

125

En la Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos, relativo al juicio de amparo [REDACTED]. Conste.

Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a la jurisprudencia 2ª/J.116/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 306 y 307, del tomo XX, correspondiente a septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice:

"REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO."

Remítase el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, toda vez que hasta este momento se encuentra debidamente integrado, ya que obran en él las constancias de notificación a las partes de la resolución recurrida y del auto por el que se tuvo por interpuesta la revisión.

3 203534 780

Notifíquese y cúmplase.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras, Juez
Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de México**, ante el secretario **Víctor Aguirre
Montoya**, que autoriza y da fe. **Doy fe.**

RG

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] se giró el
oficio [REDACTED] a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. Conste





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

130

125

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
30 AGO 2017

SE NOTIFICA A

las partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE

CON

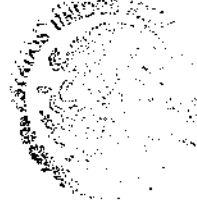
31 AGO 2017

FECHA
SURTIO

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. RUTH RÓCHA HERNÁNDEZ.



COMO
LEGADO
DEL PRIMER CIRCUITO



COMO SEGUNDO
N MATERIA CIVIL
DE MEXICO
COMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
AD DE MEXICO

CUADERNO DE ANTECEDENTES
FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO
DE REVISION.



Admisión

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia
Civil en la Ciudad de México

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
PRINCIPAL

Mesa.- IV

Número Expediente.-

Iniciado el

Quejoso:

Premiére en su nombre:

Autoridad Responsable: SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO - COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Tercero Interesado:

Acto Reclamado: Actos fuera de juicio LA SENTENCIA DE 17/01/2017, EN EL EXP

Artículos Constitucionales Violados: 14 Y 16

Fecha del auto de suspensión: 22/02/2017 Fecha de sentencia: 25/07/2017

Resolución: Inicial: 22/02/2017

Sentido: Admisión

Fecha en que se remiten los autos al Tercero Interesado

ARCHIVO

Fecha de Emisión:

Número: 53/2017

Expediente constante de

folios

anexos Legajos Núm.

Juez

Secretario

Por el Jefe de Sala

Por el Jefe de Sala



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

128

En la Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a la jurisprudencia 2ª/J.116/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 306 y 307, del tomo XX, correspondiente a septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice:



DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

"REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VENTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO."

Remítase el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, toda vez que hasta este momento se encuentra debidamente integrado, ya que obran en él las constancias de notificación a las partes de la resolución recurrida y del auto por el que se tuvo por interpuesta la revisión.

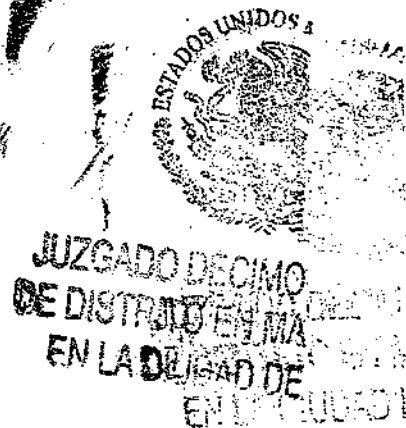
3 203534 780

Notifíquese y cúmplase.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras, Juez
Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de Mexico, ante el secretario Víctor Aguirre
Montoya, que autoriza y da fe. Doy fe.**

RG

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giró el
oficio [REDACTED] a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. Conste





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA II

13.
129

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
30 AGO 2017 SE NOTIFICA A

las partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

CON

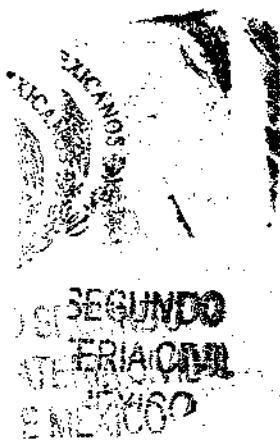
31 AGO 2017

FECHA
SURTIO

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. RUTH ROCHA HERNÁNDEZ.





13 130

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRÁMITE

JUICIO DE AMPARO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS
ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL
DIA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO
ANTE LA PRESENCIA DE VÍCTOR AGUIRRE MONTOYA, SECRETARIO DEL
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, COMPARECE

PERSONA AUTORIZADA POR EL QUEJOSO

QUIEN SE IDENTIFICA CON

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA

CON NÚMERO DE FOLIO [REDACTED] EXPEDIDA POR

EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN DONDE

APARECE UNA FOTOGRAFIA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS
FISIONÓMICOS DE QUIEN COMPARECE, DOCUMENTOS QUE SE DA FE DE
TENER A LA VISTA Y PREVIO COTEJO EN ESTE ACTO SE LE DEVUELVE POR
NO SER NECESARIA SU RETENCIÓN, DEJANDO COPIA SIMPLE EN AUTOS.

ACTO CONTINUO, SE LE HACE ENTREGA DE

COPIAS DE TRASLADO RELATIVAS AL
ESCRITO DE RECURSO DE REVISIÓN, INTER-
PUESTO POR EL TERCERO INTERESADO,

LAS CUALES RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN. PREVIA COPIA
CERTIFICADA QUE SE AGREGA A AUTOS PAR DEBIDA CONSTANCIA LEGAL.

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE

VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,

Y AL NO HABER OTRA DILIGENCIA POR DESAHOGAR SE DA POR TERMINADA
LA PRESENTE, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON. DOY FE.


EL SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO




VÍCTOR AGUIRRE MONTOYA


COMPARECIENTE



SEGUNDO JUZGADO
MATERIA CIVIL
MÉXICO


131-8
131


 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  EDAD  SEXO 


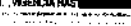
DOMICILIO 


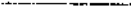
FOLIO  AÑO DE REGISTRO 



CLAVE DE ELECTOR 

CURP 

ESTADO  MUNICIPIO 

LOCALIDAD  SECCIÓN 

EMISIÓN  VENCIMIENTO 


 



DECIMO TERCER DIA DE
AGOSTO DEL PRIMER PERIODO





SEGUNDA MATERIA CIVIL
DE MEXICO

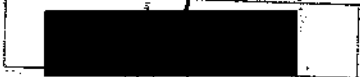


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
CORTES O EMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
DENTRO DE 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDUARDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



SECCIONES REGISTRADAS LOCALIDADES Y EXTENSIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

132
131

Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

SECCIÓN DE AMPAROS.

J. A. [REDACTED]

OF. - [REDACTED]

CIUDAD DE MÉXICO, VEINTINUEVE DE AGOSTO 2017.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de agosto del presente año, remito a usted el original del juicio de amparo y original y copia del escrito de agravios, firmado por [REDACTED] en su carácter de representante del tercero interesado [REDACTED] mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el **veinticinco de julio de dos mil diecisiete**, relativa al juicio de amparo indirecto [REDACTED] para lo que tenga a bien determinar en relación con el medio de impugnación citado.

Solicitándole que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva **acusar recibo**.

ANEXOS	
CONTENIDO	
1.-ORIGINAL DEL EXPEDIENTE [REDACTED]	
2.-ORIGINAL DEL ESCRITO DE AGRAVIOS Y COPIA.	
3. 3 TOMOS.	

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

RESPECTUOSAMENTE

FRANCISCO PEÑALOZA HERAS



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de recibido: martes, 29/08/2017

Fecha de turno: martes, 29/08/2017

Turnado al :DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

No. de registro: [REDACTED]

Hora de recibido: 20:30 Hrs.

Hora de turno: 21:26 Hrs.

133

131

Número de folio: 17483

Quejoso: [REDACTED]

Autoridad de 2a. instancia: 6A. SALA TRIB. SUP. JUST. DEL D.F.

Procedente del: JUZGADO

Número de amparo: [REDACTED]

Recurrente: TERCERO INTERESADO

Resolución: SENTENCIA

Fecha de resolución: martes, 17/01/2017

El juez resolvió: AMPARO 16/05/2017

Número: 12

Tipo de expediente: PRINCIPAL

Toca: ***

Numero de oficio [REDACTED]

No. Juicio de primera instancia [REDACTED]

Autoridad de primera instancia: JUEZ 15° DE LO CIVIL DEL D.F.

Tercero interesado [REDACTED]

Original: 1

Anexos: ***

Descripción de anexos: 1 CDO 3 LEGAJOS JAPE/JAPE

Observaciones: ***

Incompetencia o Desechamiento: ***

Fecha de cambio de turno: ***

Copias de original: 1

Copias de anexos: ***

Hora de cambio de turno: ***

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Servidor Público que entregó:

Firma

Fecha

Hora

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que recibe:

Órgano de su adscripción:

Fecha:

Hora:

Firma:

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN
EL PRIMER CIRCUITO

MEXICANOS
PRIMO SEGUNDO
N MATERIA CIVIL
D DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUICADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

134

"2017 - Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 16310
2017 SET - I P 2: 29

5393/2017 JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (ANT. A1)

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

5394/2017 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN (MINISTERIO PÚBLICO)

En los autos del expediente R.C. [REDACTED] promovido por
[REDACTED] el presidente de este
Tribunal Colegiado dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

Vista la boleta de turno [REDACTED] y los anexos de cuenta, con
fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el Libro
de Control correspondiente con el número RC. [REDACTED]

Agréguese a sus autos el oficio [REDACTED] del Juez Décimo
Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, juicio de
amparo indirecto [REDACTED] (obra por separado), tres legajos (obran por
separado), original y copia del escrito de recurso de revisión y de expresión
de agravios que hace valer [REDACTED] por conducto de
su apoderado [REDACTED] en contra de la
sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, engrosada el
veinticinco de julio citado año, dictada en el juicio de amparo [REDACTED]
Acúsese recibo.

Se reconoce la personería del promovente en términos del artículo
11 de la Ley de Amparo por tenerla acreditada en el juicio de amparo
[REDACTED] a foja 122.

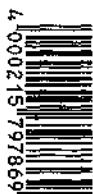
La sentencia impugnada se notificó a la parte recurrente, por lista, el
tres de agosto de dos mil diecisiete, esa notificación surtió efectos el cuatro
siguiente; el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de
Amparo, transcurrió del siete al dieciocho de agosto de la citada anualidad,
y se excluyen los días doce y trece de agosto del año en curso, por inhábiles,
en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación.

Como el medio de impugnación de que se trata, fue presentado el
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
81 fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A
TRÁMITE.

Dese la intervención que corresponda al Ministerio Público de la
Federación adscrito, la cual se limita a la notificación de la admisión de este
recurso. En la inteligencia que la falta de formulación de pedimento del
citado representante social, no impide que este expediente sea listado para
su resolución.

En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2ª/J.34/2009 de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el
siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. LA LEY DE LA MATERIA PREVÉ LA
POSIBILIDAD DE RESOLVER EL INDICADO RECURSO, SIN NECESIDAD DE



OTORGAR, EN ESA INSTANCIA, UN PLAZO AL MINISTERIO PÚBLICO PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS Y FORMULAR PEDIMENTO."

Una vez que transcurra el plazo de cinco días, que prevé el artículo 82 de la Ley de Amparo para la interposición de la revisión adhesiva, tórnese el presente recurso de revisión al Magistrado correspondiente para la elaboración de proyecto de sentencia, esto último, con fundamento en el precepto 92 de la Ley de la Materia.

Se tiene por señalado el domicilio que el promovente indica para oír y recibir notificaciones de su parte, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados [REDACTED] e [REDACTED] por haber registrado sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, con los número de registro 84796 y 128784 respectivamente. Por lo que hace a la profesionista [REDACTED] solamente se le tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo hasta en tanto acredite contar con dicho registro, asimismo se autoriza a las últimas personas en los términos referidos del citado numeral 24.

Se autoriza la utilización de dispositivos electrónicos, para los fines solicitados por el promovente.

Finalmente, en su oportunidad procesal, cúmplase con la obligación que disponen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTIFÍQUESE, y por medio de oficio al Juzgado Federal recurrido y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, adjuntándole a este último comunicado copia del recurso de revisión.

Así lo acordó la Magistrada María Concepción Alonso Flores, Presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con el Secretario José Manuel González Jiménez, queda fe.

Lo que comunico para los efectos legales procedentes.

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

EL ACTUARIO JUDICIAL

JUZGADO DÉCIMO
TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

[Firma manuscrita]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

135

135

En la Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 16310, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el **Actuario Judicial del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito**, mediante el cual acusa recibo del diverso [REDACTED] en que se remitió el original del juicio de amparo [REDACTED] tres legajos, original y copia del escrito del recurso de revisión y de expresión de agravios que hace valer [REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] en contra de la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, vengrosada el veinticinco de julio de dos mil diecisiete; e informa que se admitió a trámite el citado recurso de revisión, el cual quedó registrado bajo el número [REDACTED] en la circunstancia de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez **Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, ante el secretario **Axel Hernández Díaz**, quien autoriza. Doy fe.

rg

5 203534 780



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

136141

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 05 SEP 2017 SE NOTIFICA A

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. *uo*

CON FECHA 06 SEP 2017,
SURTÍÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA (O) JUDICIAL

Lic. María Nancy Díaz Nava.



SEGUNDO
ATERIA CIVIL
EN MATERIA CIVIL
MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

14000
137

"EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN
SAN LÁZARO"

2017 NOV 24 A 10:32

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

21029

SIDAR Y ROVIROSA, ESQUINA EDUARDO MOEINA
ACCESO NUMERO 10, 2º NIVEL
COL. DEL PARQUE
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960.

CIUDAD DE MÉXICO

Resolución en
exp. 55/2017-16
tres legajos

Of. No. 1698.

JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL DE
ESTE PRIMER CIRCUITO.

R.C. [REDACTED]
QUEJOSO: [REDACTED]
RECURRENTE: [REDACTED]

EXP. [REDACTED]

Con fundamento en el artículo 29 fracción I, de la Ley
de Amparo, y en vía de notificación, remito testimonio de la
ejecutoria dictada el **quince de noviembre de dos mil diecisiete**,
pronunciada por el Pleno del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión citado en
la parte superior, constante de **sesenta y ocho** fojas útiles.

SEGUNDO
TERCER
DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
4D DE MÉ

Asimismo le devuelvo el expediente número [REDACTED]
constante de ciento treinta fojas; **tres** legajos en quinientas
treinta y dos, veintidós y cuatrocientas veintisiete fojas
respectivamente

Suplicándole el acuse de recibo correspondiente.

Ciudad de México, a 23 de noviembre del año 2017.



EL SECRETARIO DE ACUERDOS

[Firma]

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

148

REVISIÓN CIVIL: R.C. [REDACTED]

138

QUEJOSO: [REDACTED]

RECURRENTE: [REDACTED]

MAGISTRADO PONENTE:

LIC. ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ.

SECRETARIA:

EVA BIBIANA MARTINEZ TRUJILLO.

Ciudad de México. Resolución del Décimo
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, correspondiente a la sesión del día quince de
noviembre de dos mil diecisiete.

V I S T O S; para resolver, los autos del
recurso de revisión R.C. [REDACTED] interpuesto por
[REDACTED] por conducto de su
apoderado [REDACTED] contra la
sentencia dictada por el Juez Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el
dieciséis de mayo de dos mil diecisiete -terminada de
engrosar el veinticinco de julio siguiente- en el juicio de
amparo indirecto [REDACTED]; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED] solicitó la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los que hizo consistir en: "La sentencia de 17 de enero de 2017 que confirma el auto de 28 de septiembre de 2016, y que indebida e ilegalmente ordena girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que esta dependencia rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años, sin que haya sido oído ni vencido en juicio y sin que dicha medida constituya prueba en ningún sentido para acreditar daño moral, es decir la acción en el juicio natural."



JUZGADO DECI
DISTRITO EN
LA CIUDA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3

R.O.

FORMA B-1

140
139

SEGUNDO.- Por razón de turno correspondió

conocer de esa demanda al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de treinta de enero de dos mil diecisiete la registró con el número [REDACTED] y previno al promovente a efecto de que:

- 1.-** Indique si es su deseo señalar al **Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México**, como autoridad responsable y qué acto le reclama... - -
- 2.-** ...indíqueme qué acto le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables... - -
- 3.-** Transcriba o resuma los resolutivos de la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete en el toca de apelación [REDACTED]. - -
- 4.-** Indique el estado procesal que guarda el juicio [REDACTED] y cuál es la última actuación a dicha contienda. - -
- 5.-** Señale para qué efectos solicita la suspensión provisional y definitiva...

TERCERO.- Por escrito presentado el primero de febrero de dos mil diecisiete el promovente desahogó ese requerimiento en los siguientes términos:

"1.- Sí es mi deseo señalar como autoridad responsable al JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO... - - 2.- Los actos que se reclaman de cada una de las autoridades responsables son: - - DE LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la sentencia de 17 de enero de 2017, que confirma el auto de 28 de septiembre de 2016 y que indebida e ilegalmente ordena girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que esta dependencia rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años. - - DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, en su calidad de ejecutora, la expedición del oficio donde esta dependencia rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años. - - DEL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la orden y expedición del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contenida en el auto de 28 de septiembre de 2016, que ordena a esta



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

5

R.C. [REDACTED]

FORMA B-1

140

140

dependencia que rinda un informe con copia certificada

de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los

últimos tres años. - - 3.- En cumplimiento a este numeral,

inserto una fotografía fiel de los puntos resolutivos de la

sentencia dictada el 17 de enero del año en curso en el

toca de apelación [REDACTED] - - "... - - PRIMERO.- Se

confirma el auto recurrido. - - SEGUNDO.- No se hace

especial condena en costas. - - ..." - - 4.- Respecto al

estado procesal que guarda el juicio [REDACTED] es el de

admisión de pruebas, siendo la última actuación el auto

de 28 de septiembre de 2016, donde admite las pruebas

ofrecidas por las partes, entre las que se encuentra el

oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

multicitado. Posteriormente han habido promociones de

tramite que no impulsan el procedimiento, dado que la

apelación que da origen a la sentencia de la Sexta Sala

arriba mencionada, fue admitida en ambos efectos, es

decir con suspensión del procedimiento.- - 5.- Por lo que

respecta a la solicitud de suspensión provisional y

definitiva, se solicitan para los efectos de que el oficio

multicitado no sea girado por el Juez Décimo Quinto de lo

Civil a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en

caso de que éste ya haya sido enviado y presentado ante dicha comisión; que esta dependencia se abstenga de rendir la información solicitada por el juez mencionado."

CUARTO.- En proveído de veintidós de febrero de este año el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de esta ciudad, **admitió** la demanda y señaló día y hora para la audiencia constitucional.

QUINTO.- Audiencia que se celebró el dieciséis de mayo siguiente y se dictó sentencia, cuyo punto resolutivo es del siguiente tenor:

"**ÚNICO.** La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a [REDACTED] por derecho propio, contra actos de la **Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos de la última parte considerativa de este fallo. - - **NOTIFÍQUESE.**"

SEXTO.- Inconforme con esa determinación [REDACTED] interpuso recurso de revisión. Tóco conocer de él a este tribunal, quien lo **admitió** el



P. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Auto en el que se otorgó el plazo de cinco días contenido en el artículo 82 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso adhesivo. Lo que no sucedió.

La sentencia contra la que se interpuso la revisión se notificó por lista de tres de agosto de dos mil diecisiete, surtiendo efectos al día siguiente, por lo que el término de diez días para su interposición transcurrió del siete al dieciocho de agosto de este año, descontando los días doce y trece del mismo mes y año por ser inhábiles, y como el recurso se presentó el dieciocho de agosto de este año, está interpuesto en tiempo.

CIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
AD DE MÉXICO
intervino.

El Agente del Ministerio Público Federal no intervino.

Conforme al auto de doce de septiembre de este año, el dieciocho siguiente se turnaron los autos al magistrado [REDACTED] para formular proyecto de sentencia; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este tribunal es competente para resolver el presente recurso de revisión conforme los artículos 107, fracción VIII, último párrafo de la Constitución; 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por interponerse contra una sentencia dictada por un juez de Distrito perteneciente a este primer circuito.

SEGUNDO.- La sentencia recurrida se apoyó en las siguientes consideraciones:

Antecedentes → **"QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. -- TOMO II. -- 1.** [REDACTED] en la vía ordinaria civil, demandó de [REDACTED] diversas prestaciones, entre ellas, el pago por lo menos de una indemnización a razón de \$ [REDACTED] [REDACTED] moneda nacional) por concepto de reparación del daño moral ocasionado por

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
EN LA CIUDAD DE MEXICO



142 142

las publicaciones periodísticas realizadas en los

periódicos denominados como "REFORMA" y "SIGLO DE

TORREÓN" (fojas 1 a 24). - - Para ello, se narraron once

puntos de antecedentes y se ofrecieron las pruebas que

se estimaron procedentes. - - 2. La demanda fue admitida

en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis (fojas

25 y 26) en el que el Juez Décimo Quinto de lo Civil del

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

dictó las medidas que estimó conducentes, para lo cual

ordenó emplazar al demandado. - - 3. Por escrito

presentado en el juzgado de origen el diecinueve de

agosto de dicha anualidad, la parte demandada dio

contestación oponiendo las excepciones y defensas que

estimó convenientes y ofreció las pruebas respectivas

(fojas 53 a 169). - - 4. En auto de veintidós de agosto de

dos mil dieciséis el juez natural tuvo por contestada la

demanda, con la cual dio vista a la parte actora y fijó

fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia

previa y de conciliación (foja 170). - - 5. El uno de

septiembre de dos mil dieciséis, fecha para que se llevara

a cabo la aludida audiencia, el juez de origen abrió a

prueba el mencionado juicio (foja 196). - - 6. En escrito

presentado el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 218 a 238) remitido al día siguiente al juzgado natural, la parte actora a través de su representante, ofreció entre otras, la siguiente prueba: - -

"...12. La documental consistente en el informe y copia certificada que se sirva rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al tenor de los siguientes puntos: -

- a) Dirá si existen cuentas bancarias a nombre de [REDACTED]

[REDACTED] - - b) Informe cuáles son las cuentas bancarias a nombre de [REDACTED] - - c)

Informe los saldos que han tenido las cuentas a nombre de [REDACTED] - - d) Remita a este H.

juzgado copia certificada de los estados de las cuentas bancarias a nombre de [REDACTED] de los

últimos 3 años. - - [...] - - Con esta prueba se acreditarán

todas las manifestaciones vertidas por esta parte y que

se encuentran contenidas en los hechos de la demanda

inicial de este juicio, los cuales deben tenerse aquí

íntegramente reproducidos en obvio de repeticiones y por

economía procesal, estribando la necesidad de esta

probanza para acreditar la capacidad económica del

demandado y en razón de ello la condena que debe



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

11

R.C.

FORMA B-1

143

143

imponérsele por su señoría. - - [...] - - Esta prueba se

relaciona con todos los hechos, especialmente con el 31

de la demanda inicial." - - 7. En auto de veintiocho de

septiembre de dos mil dieciséis (fojas 296 y 297) el juez

natural proveyó lo conducente respecto de las pruebas

ofrecidas por el actor y respecto a la señalada en el

párrafo que antecede acordó lo siguiente: - - "Ciudad de

México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. -

- ...se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los

siguientes términos: - - [...] - - Por lo que respecta a la

marcada con el número 12, como lo solicita gírese oficio a

la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a fin de

que rinda el informe con los puntos que indica el oferente

de la prueba, asimismo, remita copia certificada de los

estados de cuentas bancarias a nombre del C. [REDACTED]

[REDACTED] de los últimos tres años..." - - 8. En

desacuerdo con la anterior determinación el demandado,

por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso

de apelación en su contra (fojas 299 a 304). - - 9. Del

aludido medio de impugnación, por cuestión de turno,

correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Tribunal

Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien por

auto de once de octubre de dos mil dieciséis lo tuvo por interpuesto y admitido en ambos efectos, registrándolo con el toca [REDACTED], para lo cual se fijó como garantía la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] (foja 305), la cual fue exhibida oportunamente. - - 10. En resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la sala revisora determinó **confirmar** el auto apelado (fojas 378 a 383). - - **La anterior resolución constituye el acto reclamado en este juicio.** - - Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se trae como hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete este juzgador admitió a trámite la demanda de amparo promovida por [REDACTED] contra actos del **Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México**, registrada con el expediente [REDACTED] consistentes en los siguientes: - - -



144

IV.- ACTOS RECLAMADOS:

144

1) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recursos de Revocación interpuesto en contra del auto de fecha 3 de febrero del año en curso, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso y declara firme el auto recurrido, mismo que ordenaba de manera ilegal la entrega del Billeto de Depósito [REDACTED] de fecha 24 de octubre de 2016, expedido por el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS (BANSEFI) por la cantidad de [REDACTED] a la parte actora (hoy tercero interesado).

2) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recurso de Revocación interpuestos en contra del auto de fecha 7 de febrero del año en curso, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso y declara firme el auto recurrido, mismo que de manera ilegal y sin fundar en precepto alguno su decisión, determinaba reanudar el proceso del juicio natural, admitiendo diversas pruebas entre otras cosas, no obstante que la sentencia de fecha 17 de enero de 2017 que confirma el auto de fecha 23 de septiembre de 2016, dictada por la Sexta Sala Civil mediante

la cual, declara improcedente la apelación que suspendió el procedimiento se encuentra Sub Iudice.

SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. - -

- - PRIMER concepto de violación, el solicitante del amparo aduce que la sentencia reclamada es violatoria a sus derechos humanos debido a que la autoridad incumple con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución, omitiendo entrar al fondo del asunto, so pretexto de encontrarse impedida para hacer consideraciones sobre el particular, por estimar que el análisis y resolución de dicho tema está reservado a las autoridades federales, con lo cual se soslayó el principio

PRIMER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
MATERIA CIVIL
JEFATURA DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

pro persona. - - **SEGUNDO** motivo de queja, se aduce que la sala responsable vulneró lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución, en relación con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), por confirmar de manera ilegal el auto impugnado, sin que hubiere entrado al fondo del asunto, en plena incongruencia con lo expresado en el recurso de apelación. - - Además, que se funda indebidamente el acto reclamado en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, pues los informes sobre las cuentas bancarias del quejoso no son medio idóneo para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, ya que no van a acreditar si el actor, hoy tercero interesado, sufrió daño moral, pues su capacidad económica no tiene que ver con la *litis* planteada, por lo que al haber ordenado su desahogo se lesiona el derecho a la confidencialidad. - - Que la autoridad sentenciadora se abstuvo de resolver bajo el principio de congruencia, es decir, de ser clara, precisa y congruente con el recurso de apelación interpuesto, sin que se hubiere pronunciado sobre el



PO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

15

R.C

FORMA B-1

14

contenido de todos los agravios hechos valer por ~~41~~ 45

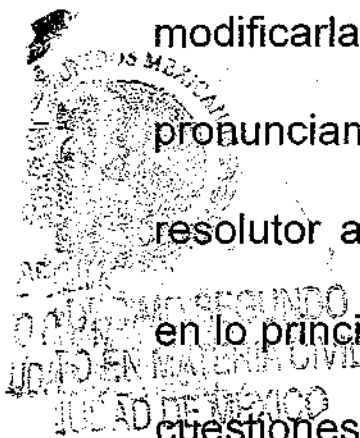
quejoso. - - Que el juez natural ordenó el desahogó de una prueba no idónea. - - Que en términos del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, aplicable al presente asunto, la sanción económica en caso de resultar procedente la acción de daño moral, en ningún caso deberá exceder de 350 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por lo que resulta irrelevante saber si existe mucho o poco dinero en las cuentas del quejoso, ya que la sanción se encuentra topada, y es un monto que no puede ser determinado de manera discrecional por el juzgador, con base en sus ingresos. SEGUNDO EN MATERIA CIVIL, en el TERCER concepto de violación, el quejoso argumenta que la resolución reclamada es violatoria a sus derechos humanos, ya que los informes de sus cuentas bancarias, se trata de información confidencial protegida por la ley, sin que se esté en un caso de excepción a que hace referencia el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, en virtud de que no existe un embargo o providencia precautoria que ordene

que sean exhibidos esos datos, por lo que al haber ordenado su desahogo se le deja en estado de indefensión. - - CUARTO argumento de queja, se afirma que la sala responsable apoya su decisión de confirmar la admisión de la prueba, sin que se encuentre contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, por lo que su decisión carece de fundamentación y motivación. - - En apoyo a sus consideraciones, el quejoso invoca el criterio de rubro: *"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE"*. - - Son **sustancialmente fundados** los motivos de disenso, sintetizados en párrafos arriba.

En principio, es menester señalar que el concepto natural de *litis* se traduce en pleito, controversia judicial o actuación en juicio, que trasladado al ámbito jurisdiccional debe entenderse como el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se



estima necesario apuntar que es con la contestación a la demanda cuando la *litis* o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juzgador, situación similar acontece cuando se trata de la interposición de cualquier medio de impugnación, supuesto en el cual la *litis* se constituye con los agravios expresados en el recurso respectivo, lo cual no puede ser desconocido por el órgano revisor. - - En términos generales, integrada la *litis* las partes no pueden modificarla y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. - - De manera que, el órgano resolutor al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no puede ocuparse en su fallo de puntos o cuestiones no comprendidas en la *litis*. - - Es así que el principio de congruencia consiste en que las resoluciones correspondientes no contengan conclusiones y afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna) e impone a los juzgadores el deber de resolver la *litis* (conflicto) tal y como quedó integrada con los planteamientos expuestos en la demanda y en su



respectiva contestación, así como con los agravios propuestos (congruencia externa). - - El artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece: - - *"Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos."* - - Del anterior precepto se obtiene, en lo que interesa, que las determinaciones que emita la autoridad jurisdiccional deben de ser, claras, precisas y



P. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

congruentes con las constancias de autos. - - De ahí que, las sentencias que se dicten en el recurso de apelación también deberán satisfacer el principio procesal de congruencia interna y externa, porque la facultad del órgano de apelación de resolver el recurso que las partes interpongan implica, sin duda alguna, examinar los agravios que expongan, sin emitir en el fallo consideraciones contradictorias. - - Es patente que la *litis* en esa instancia no puede ser modificada por las partes después de que ha sido fijada con el escrito de agravios y la sentencia apelada, lo que revela la obligación de la autoridad revisora para ceñir su actuación a lo argumentado en vía de agravios. - - En esa tesitura, la sala resolutora atendiendo al principio de congruencia externa debe resolver lo conducente respecto de la resolución recurrida, análisis sin el cual no puede decirse que se cumplió con el principio de congruencia, por lo que debe ocuparse de los planteamientos que formula la disconforme relativos al fallo apelado. - - Con el objeto de verificar si en el caso la sala responsable violó el principio de congruencia externa, es conveniente señalar que el quejoso, en el recurso de apelación, esgrimió totalmente

NO SEGUROS
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

los agravios que se sintetizan a continuación: - - A). Que se violan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) –principio *pro persona*-, en relación con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, interpretado a contrario sensu, al admitirse ilegalmente la prueba marcada con el numeral doce, señalada en el escrito de ofrecimiento de pruebas de la actora. - - B). Que se contraviene la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) porque además de ser incongruente carece de fundamentación y motivación, con lo cual se dejó en completo estado de indefensión a la parte apelante. - - En el fallo reclamado que resolvió el recurso de apelación, la sala responsable determinó esencialmente: - - Estudió conjuntamente los dos agravios, los cuales declaró infundados. - - Para lo cual determinó, por lo que respecta a la supuesta violación a los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución, que la resolutora se encontraba



P. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

impedida para hacer consideraciones sobre el particular, al estar reservado su análisis y resolución a las autoridades federales. - - Así como que el auto recurrido se encontraba debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues el recurso de apelación interpuesto por el demandado, tenía fundamento en el primer artículo invocado, porque se argumentó que la prueba consistente en el informe que se ordenó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a la existencia de cuentas a nombre del hoy apelante, y se remitan copias certificadas de tales cuentas, lo cual resultaba violatorio del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito. - - Además, precisó que el *a quo* no se fundó en dicho precepto para admitir la prueba señalada con antelación, siendo que el juicio de origen se tramitó en la vía ordinaria civil y los informes se están solicitando en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial que conoce del presente juicio, en relación a una persona que tiene el carácter de demandada en el juicio de que se trata, además que no

existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata, razón por la que se confirmó el auto apelado. - - La confrontación de los razonamientos que sostienen el acto reclamado con los anteriores argumentos esgrimidos por el quejoso, resulta claro que la sala responsable en contravención a lo establecido en el invocado artículo 81, no abordó totalmente el examen de los planteamientos propuestos en el recurso de apelación. - - En efecto, la sala civil soslayó pronunciarse en sus términos respecto de la cuestión efectivamente planteada en el recurso de apelación, pues en lugar de resolver lo conducente en relación con la violación a los derechos fundamentales del quejoso, contenidos en el derecho doméstico y en la convención extranjera a que alude, determinó que se encontraba impedida para pronunciarse sobre el tema propuesto, aludiendo a que era cuestión propia de las facultades de las autoridades federales, que se traduce en una atribución reservada exclusivamente a temas propios de constitucionalidad, mas no de control de convencionalidad. - - Es así, que la cuestión omitida por la autoridad responsable debía ser abordada desde la óptica del principio *pro persona*, que



Poder Judicial de la Federación

surge con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que modificó, entre otros, el artículo 1° de la Constitución para establecer: - - (se transcribe) - - En dicho precepto legal se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. - - Con base en ese precepto, **cualquier juez nacional** está facultado para emitir pronunciamiento respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro persona*. - - Por tanto, en el sistema jurídico mexicano actual, los **jueces nacionales**, tanto **federales** como del **orden común**, están facultados para emitir pronunciamiento respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías directas de control previstas en la norma fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas

generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. - - Con los anteriores razonamientos queda demostrado que la sala sentenciadora tenía la obligación legal de pronunciarse respecto de la cuestión propuesta por el quejoso relativa a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales y no limitarse a señalar que se encontraba impedida para hacerlo, pues evidentemente es un tema que debe ser resuelto por cualquier órgano jurisdiccional del país. - - Asimismo, está evidenciado que no existió pronunciamiento alguno en relación con que se vulneró la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la Ciudad de México. - - En efecto, la



P. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sala civil se limitó a estudiar conjuntamente los agravios propuestos por el apelante, determinando su imposibilidad legal para pronunciarse respecto de temas que estimó reservados a las autoridades federales y declaró legal lo determinado en el auto recurrido, por no existir prohibición para la admisión de la prueba en comento, sin que se hubiere pronunciado respecto a la cuestión precisada en párrafos arriba, siendo que se encuentra obligada a dar respuesta fundada al argumento en comento, contenidos en el pliego de agravios de dicho medio de impugnación. - - Cabe destacar que los artículos 39 y 41 contenidos en el capítulo V de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), disponen: - - **"Artículo 39.** *La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral.*" - - **"Artículo 41.** *En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se*

fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. - - En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo." JUEZ LOS
DEPARTAMENTO EN
REPARAR
libertad de expresión, que consisten en la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado o, en su defecto, a través de una indemnización. - - El propio artículo 41 establece una serie de criterios que deberán ser tomados en cuenta al momento de fijar la indemnización, los cuales permiten precisamente graduar



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

151

la responsabilidad de la persona en función de las ¹⁵¹ circunstancias concretas en las que se realizó la expresión. Esos criterios incluyen *"la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso."* - - En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 41 establece la posibilidad de *atenuar* la medida reparatoria al permitir al juez *"disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo"* en los casos en que los sujetos afectados por las expresiones sean servidores públicos. Y por otro lado, el artículo 43 hace posible *agravar* el monto de la reparación en casos de reincidencia durante el plazo de un año, al dar la posibilidad al juez de *"imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización."* - - Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que *"en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas."* Mientras que el propio artículo 41 estipula que *"en ningún caso el*

monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." - - Por tanto, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece el monto o límite de la indemnización por daños al patrimonio moral, la cual el juez determinará según lo previsto en el artículo 41 referido (tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, no pudiendo en ningún caso el monto por indemnización exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad). - - Consecuentemente, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación en estudio, pues la resolución reclamada es violatoria de lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo procedente es otorgar el amparo... para los efectos siguientes: - - La sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil



SE
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

diecisiete dictada en el toca [REDACTED] - - En su lugar

emita otra, en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la *litis* planteada en el recurso de apelación... esencialmente, por lo que hace, por una parte, a los planteamientos referentes a que se vulneraron los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), relativos al principio *pro persona*, y por otra, a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). - - Al haberse declarado fundados los conceptos de violación dirigidos a demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, este juzgado de distrito ya no entra al estudio de los demás conceptos de violación al resultar innecesario su análisis.¹ - - La concesión del amparo se

¹ Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia, de la Séptima Época, Tercera Sala, del Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 107, página: 85, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS"...

hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de esta primera, tiene que resolverse igualmente por lo que toca a las ejecutoras."

TERCERO.- El recurrente expresó los siguientes agravios:

"1.- PRIMER AGRAVIO. - - Parte de la resolución que lo causa lo constituye toda la sentencia recurrida, por cuanto hace conceder al quejoso el amparo contra los actos reclamados de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. - - Preceptos legales violados, no aplicados o aplicados indebidamente lo son los artículos 73, 74, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, 222 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con las tesis jurisprudenciales que se invocan en este ocurso. - - Concepto de agravio: - - La sentencia definitiva dictada



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

en el juicio de amparo [REDACTED] de 16 de mayo del 2017, ya que es ilegal, toda vez que resulta incongruente, tal y como se expone a continuación: - - Como se advierte los argumentos expuestos por el a quo en la sentencia impugnada en los que sostiene que la autoridad responsable debió entrar al estudio de los agravios que se hicieron valer por el quejoso contra el auto de 28 de septiembre del 2016, que ordena se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a fin de que informe sobre las cuentas bancarias del quejoso, a pesar de que no invocó violaciones procesales, toda vez que la sentencias incluyendo las de apelación deben satisfacer el principio procesal de congruencia interna y externa ya que las facultades del órgano de apelación deben ser las mismas que las que corresponden al órgano de primera instancia. - - La sentencia dictada por la Sexta Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca [REDACTED] señala que es improcedente el recurso de apelación hecho valer por el hoy quejoso contra el auto de 28 de septiembre del 2016 dictado por el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en virtud de que básicamente argumenta violaciones a derechos humanos

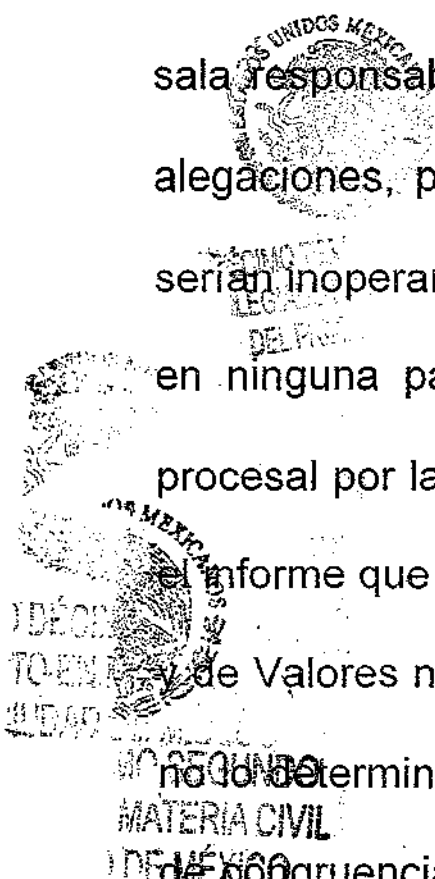
JÉCIMO QUINTO
EN MATERIA CIVIL
DADRESOLVEDO

así como a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen (hoy Ciudad de México), sin alegar violaciones procesales en contra del dictado del auto de 28 de septiembre del 2016 por el juez natural. - - En este sentido es importante desatacar que los argumentos planteados por el hoy quejoso ante la sala responsable no alegaban violaciones al procedimiento, sino violaciones a supuestos derechos humanos, por lo que la sala responsable acertadamente decidió no entrar a los agravios formulados por el quejoso, pues ello conllevaría a que en la apelación no se alegaran violaciones procesales sino violaciones constitucionales, como lo pretende la hoy quejosa. - - En este sentido, la sala responsable no entró al estudio de las supuestas violaciones a derechos humanos, pues el hoy quejoso, no argumentó violaciones procesales, razón por la cual su resolución estuvo apoyada en derecho, contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida. - - No debe perderse de vista que el juicio constitucional tiene por objeto el análisis de sentencias en las que no se cumplieron las formalidades del procedimiento en que se



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

154
hayan transgredido preceptos constitucionales. - - En el
caso el acto reclamando resulta fundado en derecho por
parte de la autoridad responsable, pues no tenía
obligación de entrar al estudio de los agravios que no
tienden a combatir la resolución apelada. - - Tomando en
consideración que el hoy quejoso no alegó violaciones
procesales sino violación a los derechos humanos, la
sala responsable no contempló determinar sobre dichas
alegaciones, pues incluso en el caso de que existieran
serían inoperantes para modificar el auto atacado, ya que
en ninguna parte de los agravios se expone la razón
procesal por la cual la prueba documental consistente en
el informe que debe rendir la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores no debió admitirse. - - Sin embargo el a quo
no lo determina de esa forma apoyándose en el principio
de congruencia, de que la sala debió entrar al estudio de
los agravios, pero pasa inadvertido que el quejoso no
expresó agravios ante la sala responsable en el toca
[REDACTED] que combatieran o hicieran ver el indebido
ofrecimiento del informe a cargo de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y a pesar de ello haya sido
admitida por el juez natural. - - El ofrecimiento de dicha



documental cumple con los requisitos del artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles sin embargo el quejoso se limitó alegar que la admisión de esa probanza viola sus derechos humanos, luego entonces la sala responsable actuó de manera acertada al señalar que no era dable entrar al estudio de los agravios; se limitaban a señalar violaciones a los derechos humanos del quejoso, pero el a quo, pretende atribuir esta obligación a la sala responsable. - - En esa tesitura, es evidente que la sentencia que resuelve un recurso de apelación debe concretarse a analizar si el auto impugnado contraviene disposiciones legales que rigen el procedimiento, pero no a determinar si hubo violaciones a los derechos humanos pues dichas atribuciones le corresponderían al a quo con motivo de que se hubieran alterado las formalidades del procedimiento en la aplicación del derecho. - - Es lógico el argumento de la sala responsable de dejar de abstenerse de entrar al estudio de los agravios, pues incluso si lo hubiera hecho hubiera confirmado el auto apelado al no señalarle las disposiciones legales que se dejaron de aplicar o que fueron aplicadas inexactamente.

- - La sentencia que se combate en ninguno de sus



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

considerandos explica por qué a pesar de que el quejoso no atacó procesalmente el auto recurrido, deben valorarse unos agravios inoperantes. - - De lo contrario se estaría permitiendo que en el recurso de apelación se introdujeran cuestiones ajenas a los agravios que fueron motivo de apelación, pues el apelante hoy quejoso nunca manifestó a la sala responsable la razón procesal para no admitir la prueba documental consistente en el informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. - -

Por todo lo anteriormente expuesto, es obvio que en el caso la sentencia recurrida es incongruente e ilegal

llegando al extremo de interpretar indebidamente los conceptos de violación que hace el quejoso, lo que hace

que su resolución sea del todo incongruente y por ende ilegal, pues pretende que la sala resuelva sobre un auto

impugnado en el que no se atacaron violaciones al procedimiento sino situaciones ajenas como es la violación a los derechos humanos. - - En tal virtud al resultar evidente que la sentencia impugnada es incongruente y por ende ilegal, debe dictarse otra en su lugar en la que se declaren infundados todos los conceptos de violación, especialmente los consistentes

en que la sala responsable debe resolver sobre cuestiones ajenas a su esfera jurídica como los es atender supuestas violaciones a derechos humanos. - -

Es importante señalar que el quejoso en los agravios que expuso ante la autoridad responsable se limitó a argumentar violaciones a los derechos humanos mas no al procedimiento, sin atacar el razonamiento del juez natural, razón por la cual resulta erróneo el criterio del juez a quo en el sentido de que tuvo que pronunciarse sobre la supuesta violación a los derechos humanos. - -

Por otra parte, el a quo pasa inadvertido que el quejoso nunca expuso la razón de por qué el auto apelado trascendería en el fondo del asunto, por lo que la sala responsable sí tenía la facultad de analizar o no los agravios, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria... - - **"AGRAVIOS EN LA**

APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECORRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA.- El artículo 1339, párrafo último, del Código de Comercio, prevé que



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

tratándose del recurso de apelación, los agravios que en su caso deban expresarse contra resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, se expresarán en la forma y en los términos previstos en el diverso numeral 1344 del ordenamiento indicado. Por su parte, el párrafo tercero de este último precepto establece que tratándose de la parte vencida o de aquella que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación preventiva, deberá señalar en los agravios contra la sentencia que resolvió el juicio, de qué forma trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal impugnada. Por ello, si el recurrente omite cumplir con dicha carga procesal, el tribunal de apelación no podrá subsanar esta omisión y pronunciarse sobre la trascendencia que pudiera tener el resarcimiento de dicha violación, pues ello implicaría efectuar un análisis oficioso a favor de una de las partes, violándose con ello el principio dispositivo del proceso mercantil, así como los principios de justicia imparcial y equidad procesal. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, al actualizarse un obstáculo

procesal que impide al tribunal de alzada analizar si las violaciones procesales impugnadas podrían o no trascender al fondo del asunto, los agravios que en su caso se hubieren hecho valer en el recurso de apelación preventiva deben declararse inoperantes, al no ser jurídicamente posible analizar su eficacia y, con ello, determinar si procede o no revocar la sentencia definitiva y ordenar la reposición del procedimiento.” (cita fuente y precedentes) - - Como sus señorías pueden advertir los agravios del quejoso hechos valer ante la autoridad responsable no atacan violaciones procesales ni mucho menos que con dicha resolución se trascienda en el fallo que se llegue a dictar, por lo tanto, debió negarse el amparo en base a los argumentos vertidos en el cuerpo del presente ocurso. - - En tal virtud, la sentencia que constituye el acto reclamado se apega a lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, pues es congruente al no entrar el estudio de cuestiones no son objeto de la litis. - - El tal virtud es procedente el recurso de revisión que se hace valer. - - **SEGUNDO AGRAVIO** - - ... - - En el caso que nos ocupa la sentencia impugnada resulta ser ilegal toda vez que en la citada



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

33

15716

resolución el juez a quo sostiene que también debe contemplarse lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin que se ataquen violaciones procesales en el auto de 20 de septiembre del 2016 dictado por el juez natural. - - Respecto al monto de la indemnización que se reclama en las prestaciones de la demanda inicial se hace notar el monto de -trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que dicho "límite máximo" transgrede las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución; tal y como se demostrará con la amplitud debida en el capítulo de "Hechos" de la presente demanda. - - En tal virtud debe atenderse a lo siguiente: -

- El argumento del a quo prejuzga sobre la cantidad a que debe ser condenado el hoy tercero interesado y que por ende es irrelevante el informe que rinda la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores, como sus señorías podrán percatarse no se combate la admisión de la prueba sino situaciones ajenas. - - Ciertamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia, criterios relativos a la naturaleza y alcances de la -Obligación de Reparar- y dentro de éstos el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlo, atendiendo al daño causado. -

- Así, el concepto relativo a una "justa indemnización" o "indemnización integral" implica el restablecimiento de la situación anterior y de no ser esto posible, establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar. - - La reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido.

- Las "reparaciones" como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los



R. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

daños respectivos. - - En el documento denominado "Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones" aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el diecinueve de febrero de dos mil ocho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la reparación adecuada del daño sufrido debe concretizarse mediante medidas individuales tendentes a restituir e indemnizar. - - Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas también ha emitido principios y directrices que determinan los alcances del derecho a obtener reparaciones; en esencia, dichos principios establecen que la obligación que tienen los estados de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos dentro de su estado, tal es el caso de la relativa a proporcionar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, en las formas de restitución e indemnización. - - Los estados, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material al regularlo. - - Por lo anterior, podemos afirmar válidamente

que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que el "límite máximo de indemnización" previsto por dicha norma jurídica; implica una restricción injustificada a los derechos constitucionales, por lo que la resolución que dicte su señoría no debe limitarse al tope a que se refiere la disposición legal antes señalada. - - El referido "tope" es inconstitucional, porque la existencia de límites a las indemnizaciones debidas a los perjudicados por daños morales causados; restringe injustificadamente el derecho a una reparación "justa e integral" ya que si bien la voluntad del legislador fue la de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, no menos cierto es que axiológicamente, el derecho a las medidas compensatorias en los casos que justamente lo ameritan, tiene mayor valor que la pretendida voluntad estatal de "limitar" el monto de las reparaciones. - - En efecto, la fijación del tope máximo de -trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- no constituye una medida adecuada



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se

den ni resulta necesaria para evitarlos, ya que las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora a ofrecer suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas. - - El tope máximo previsto por el precepto examinado es una medida legislativa no suficientemente ajustada a los fines

que pretende conseguir; además contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano y podría plantear problemas para cumplir con

CINCO SEGUNDO

MATERIA CIVIL

D E M É X I C O

lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño. - - Consecuentemente, al momento de establecer en definitiva el monto de la indemnización que deberá cubrir el quejoso, a favor del suscrito; el juez natural deberá omitir atender al límite máximo previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la

Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, ya que de lo contrario se verían vulnerados los derechos de mi representado a recibir una justa indemnización. - - El artículo 63.1 del Pacto de San José señala que cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la corte dispondrá que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo que si ello fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, en razón de lo anterior resultan inconstitucionales los artículos 31, 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil Para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, toda vez que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y también el artículo 1 constitucional, toda vez que el tope máximo previsto por dicha legislación permite limitaciones irracionales al derecho de ser indemnizado de manera integral. - - En



R. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

mérito al razonamiento vertido el hecho de limitar la indemnización a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene en inconstitucional. - - Considerar un tope máximo implicaría resarcir cierto tipo de derechos pero se pasarían por alto otro tipo de afectaciones como el sufrimiento, ansiedad o menoscabo de la dignidad, por lo que debe considerarse una justa indemnización basada en las particularidades del caso y en los principios de equidad. - - En ese sentido debe atenderse a que mi representado es una figura pública que lo distingue de las demás personas sujetos a la reparación del daño moral, por lo que la sanción que se imponga al hoy quejoso no solo debe ser condenatoria en el sentido de la publicación de la sentencia y de la retractación de los comentarios hechos en su contra, sino debe atender a una reparación económica pero a ésta no debe aplicarse el tope máximo que prevé el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, sino a una justa indemnización

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA

basada en las particularidades del presente caso. - -

Sirve de apoyo... lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la figura de -topes o montos máximos- relativos a indemnizaciones por daño moral: - - **"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.-** La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución Federal prevé un derecho sustantivo a **ser indemnizado por los daños generados por la actividad administrativa irregular del Estado** [REDACTED] Las autoridades estatales, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material al regularlo y de desplegar sus potestades públicas con el objetivo de garantizarlo. Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece las reglas conforme a las cuales deben



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

161

calcularse los montos de las indemnizaciones que el Estado debe pagar cuando genera daños a los particulares, y en su fracción II señala dos reglas respecto al daño moral: 1) la autoridad administrativa o jurisdiccional debe calcular la indemnización conforme a los criterios establecidos en el Código Civil Federal, tomando en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante y 2) dicha indemnización no debe exceder del equivalente a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal por cada reclamante afectado. De acuerdo con los criterios con que esta Corte evalúa si existe una restricción injustificada a los derechos constitucionales, se concluye que el referido tope es inconstitucional porque, aunque sea una medida que puede relacionarse con la consecución de un objetivo admisible constitucionalmente, no es instrumentalmente adecuada para alcanzarlo. La existencia de límites a las indemnizaciones a los perjudicados por daños morales causados por el Estado es un objetivo sin duda cubierto por el artículo 113 constitucional, que precisa que los particulares tienen derecho a las mismas conforme a las

bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. La voluntad de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, subrayada en la exposición de motivos de la Ley, alude igualmente a la legítima voluntad de que las medidas compensatorias se apliquen a los casos que justamente lo ameritan. Sin embargo, la fijación del tope máximo no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den ni resulta necesaria para evitarlos. Las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas. El tope máximo previsto por el precepto legal examinado es una medida no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir que en algunos casos puede ocasionar limitaciones irrazonables al derecho a ser indemnizado. Además, el mismo contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano y podría



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

162

plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño, ya que el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dispone que el cumplimiento de indemnizaciones ordenadas por estos órganos se rige por lo establecido en el Capítulo II de la misma, sección en la que se encuentra el artículo 14." (cita fuente y precedente) - - El a quo señala que la responsable debe entrar al estudio de agravios sobre derechos humanos, pero prejuzga sobre la cantidad a que debe en todo caso el quejoso."

CUARTO.- En primer lugar se abordará el estudio del segundo de los agravio que se someten a consideración de este órgano colegiado, en razón de que en él se plantea la **inconstitucionalidad** de los artículos 31, 39 y 41 de la **Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal** (hoy Ciudad de México).

En él se alega que la sentencia recurrida es ilegal, pues el juez Federal sostiene que debe contemplarse el tope de indemnización establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), prejuzgando sobre la cantidad a que debe ser condenado su contrario por tal concepto y así concluye, que por ello es irrelevante que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rinda el informe de mérito. Que ese numeral es **inconstitucional** en razón de que el "límite máximo" ahí establecido transgrede las garantías y derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución, al implicar una restricción injustificada a sus derechos constitucionales. Continúa señalando el inconforme, que ese límite a las indemnizaciones por daño moral restringe el derecho a una reparación "justa e integral" cuando ese derecho tiene mayor valor que la pretendida voluntad estatal de "limitar" el monto de las reparaciones y que además, contraviene las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

163

Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño, ya que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y también el artículo 1 constitucional. Y concluye afirmando: "...al momento de establecer en definitiva el monto de la indemnización que deberá cubrir el quejoso, a favor del suscrito; el juez natural deberá omitir atender al límite máximo previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal..."

PRIMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D.F. DE MEXICO

Todo lo cual es **inoperante** pues los planteamientos inherentes a la inconstitucionalidad de una norma invocada por el juez Federal en apoyo a su toma de decisión, no constituye materia de estudio en el recurso de revisión planteado contra esa sentencia de amparo biinstancial.

En efecto, conforme lo establecido en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución y 81 y 93 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión –en amparo indirecto- tiene como fin asegurar el buen desempeño del Juez de Distrito como órgano de control constitucional; por lo que a través de ese recurso no puede ser analizado lo alegado en torno a la inconstitucionalidad de una norma del orden común que rige el acto reclamado y cuya inobservancia, por parte de la autoridad responsable, haya sido el motivo por el que se otorgó la protección de la Justicia de la Unión.

Ello en razón de que este recurso no es un control de constitucionalidad sobre decisiones de otro órgano que sí realiza esa función y además, porque la actividad del juez Federal no es respecto a la impugnación constitucional sino a los actos de la autoridad señalada como responsable, por lo que la invocación de leyes ordinarias en la sentencia de amparo no genera un acto de aplicación en la esfera de las parte en el juicio de amparo, pues el juez de Distrito no es una extensión del poder ordinario; esto es, la referencia de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

normas del orden común en el fallo constitucional solamente se traduce en el argumento que sirve como fundamento para dar soporte a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por cuestiones de legalidad. Lo que no implica la sustitución del órgano de control constitucional a la actividad propia de las autoridades responsables para incidir en la esfera de los gobernados con la aplicación de las disposiciones que rigen el ejercicio de su poder.

Luego, todo lo alegado en torno a la aducida inconstitucionalidad de los citados artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), es **inoperante**.

Sirve de apoyo a lo antes expresado el contenido de la jurisprudencia –por contradicción de tesis- sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número P./J. 48/2009, visible en la página treinta y ocho del Tomo XXX del mes de julio de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

"INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO.- El recurso de revisión en amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 y 91 de la Ley de Amparo, se limita a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional del Juez de Distrito, como órgano de control de la constitucionalidad, lo cual impide analizar en dicho medio de defensa el planteamiento de inconstitucionalidad de la norma del orden común u ordinaria que rige el acto reclamado, y cuya inobservancia por parte de la autoridad responsable haya sido el argumento en que tiene sustento la concesión del amparo; además, el citado recurso no



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

es un control de constitucionalidad sobre decisiones de otro órgano que realiza una función de tal naturaleza, aunado a que la actividad del Juez de Distrito no es la materia de impugnación constitucional sino los actos de la autoridad señalada como responsable. Así la invocación de leyes ordinarias (federales o locales) en el fallo de amparo no genera un acto de aplicación de éstas en la esfera de los particulares que son parte en el juicio de amparo, ya que atendiendo a la premisa de que el órgano de control constitucional no es una extensión del poder ordinario, cuya actuación es precisamente la que da origen al juicio de amparo, la referencia de normas del orden común en el fallo constitucional solamente se traduce en el argumento que puede dar soporte a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado por cuestiones de legalidad, esto es, por no haber ajustado el ejercicio del poder público a los cánones normativos que le dan sustancia y legitimidad, en cumplimiento a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, lo que no implica la sustitución del órgano de control

DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
DAD DE MEXICO

constitucional a la actividad propia de las autoridades responsables para incidir en la esfera de los particulares, con la aplicación de las disposiciones que rigen el ejercicio de su poder público."

En el primer agravio se aduce que equívocamente el juez de Distrito concluyó que la ad quem debió entrar al estudio de los agravios a pesar de que en ellos no se invocaron violaciones procesales; que fue correcto que la sala responsable no los estudiara pues en ellos se plantearon violaciones a derechos humanos y a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen esto es, violaciones constitucionales y el juicio de amparo tiene por objeto el análisis de sentencias en las que no se cumplieron las formalidades del procedimiento, por lo que —dice— la ad quem no tenía obligación de entrar al estudio de los agravios en los que no se alegaron violaciones procesales sino violación a derechos humanos y que además, no se señaló la razón por la que el informe que rindiera la Comisión Nacional



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Bancaria y de Valores no debió admitirse, limitándose a alegar que su admisión viola sus derechos humanos. Insiste en que la sentencia de alzada debe concretarse a analizar si el auto impugnado contraviene disposiciones legales que rigen el procedimiento, pero no a determinar si hubo violaciones a los derechos humanos. Que con su proceder el juez Federal está obligando a la sala responsable a resolver sobre cuestiones ajenas a su esfera jurídica ignorando que nunca se expuso por qué el auto apelado transcendía al fondo del asunto. Citando en su apoyo el criterio de rubro: **"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECORRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA."** Y finalmente indica el recurrente que la sentencia que se combate en ninguno de sus considerandos explica por qué a pesar de que el quejoso no atacó procesalmente el auto recurrido, deben valorarse los agravios.

Lo que resulta en una parte **infundado** y en otra **inoperante**.

Infundado pues del análisis de la sentencia que se revisa se advierte que en su desarrollo el juez de Distrito expresó las razones, motivos y fundamentos, que lo llevaron a afirmar que la sala responsable sí se encontraba obligada a proceder al estudio de los agravios sometidos a su consideración. Y tan es así, que al efecto, después de explicar cómo se integra la litis, en qué consiste la congruencia de las sentencias –tanto interna como externa- transcribió el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; concluyó

A) que de la confrontación que se hace de lo alegado en agravios (sintetizándolos) con los razonamientos vertidos por la ad quem en torno a ellos, era de afirmar que en violación al mencionado precepto, la sala responsable no había examinado en su totalidad los agravios y en específico lo atinente a la violación a los derechos fundamentales del quejoso contenidos en el derecho doméstico y en la Convención Americana sobre



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Derechos Humanos, y en la inobservancia de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México);

B) Que la ad quem había justificado esa falta de estudio bajo el argumento de que eran cuestiones propias de las autoridades federales por ser temas de constitucionalidad y no de convencionalidad, cuando lo correcto era que debía haberlas analizado desde la óptica del principio "*pro persona*", que surge con la reforma de junio de dos mil once al artículo 1º constitucional en el que se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deben ejercer el control de constitucionalidad;

C) Que con base en ese precepto todos los jueces está facultado para pronunciarse respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable (principio *pro persona*) y que por ello era de señalar que en el actual sistema jurídico mexicano los

jueces federales y comunes están facultados para pronunciarse respecto a esos temas, con la limitante de que cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías de control previstas en la Constitución, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues esa encomienda es para los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales; y así concluye:

D) Que la ad quem tenía la obligación de pronunciarse respecto a esa cuestión relativa a los derechos humanos ya que es un tema que debe ser resuelto por cualquier órgano jurisdiccional del país.

Con lo cual se demuestra que contrario a lo afirmado por el inconforme, al emitir la sentencia recurrida el juez Federal sí expresó las razones y fundamentos que lo llevaron a afirmar que la alzada debía abordar el estudio de esos agravios. Deviniendo así lo **infundado** del disenso en análisis.

#...



En tanto que su **inoperancia** radica en el hecho de que, como puede advertirse de la comparación que se hace de los sintetizados razonamientos que sustentan la sentencia en estudio frente a los agravios que se plantean en esta instancia revisora, con éstos no se controvierte el fundamento toral de aquélla y que consiste en que conforme a las últimas reformas al artículo primero constitucional, todos los órganos jurisdiccionales, del orden común y federal, tienen la obligación de pronunciarse respecto a los planteamientos que se les formulen en torno a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano sea parte, adoptando la interpretación más favorable para el gobernado (principio "pro persona").

En efecto, el recurrente simplemente refiere que fue incorrecto lo decidido por el juez de Distrito en razón de que en los agravios planteados a la sala responsable sólo se aducían violaciones a Derechos Humanos y a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la

Propia Imagen, que son violaciones constitucionales cuyo estudio está reservado a los jueces federales; que el juez de Distrito está obligando a la sala a resolver cuestiones ajenas a su esfera jurídica sin que ni siquiera se hubiera dicho de qué forma trascendían al resultado del fallo y que además, no se señalaron las razones por las que no debía admitirse el informe en cuestión. Olvidándose de mencionar si era correcto o no el alcance que se otorgaba a la función jurisdiccional, conforme a la última reforma al artículo primero constitucional.


Omisión impugnativa en que incurre el inconforme, que obliga a este tribunal colegiado a dejar intocados los razonamientos que sustentan el acto recurrido para que sigan rigiendo, bajo sus propios fundamentos de derecho, el sentido del fallo en revisión.

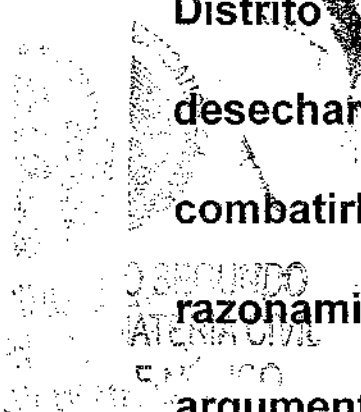
Deviniendo así la aludida inoperancia de este disenso.

#...

17169
251

Sustenta lo dicho la jurisprudencia I.6°.C.J/6, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página treinta y tres del Tomo cincuenta y cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, misma que se comparte y dice:


"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. Si en la resolución recurrida el Juez de Distrito sostiene diversas consideraciones para desechar la demanda y el recurrente lejos de combatirlas, se concreta a señalar una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador en que apoyó su fallo, es evidente que los agravios resultan inoperantes."


SEGUNDO
MATERIA CIVIL
EXCMO. CO.

Así como la jurisprudencia identificada con el número treinta y seis, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

publicada en la página veintitrés del Tomo VI, Octava Época del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que es de observancia obligatoria en términos de lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, y que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

Ya que no nos encontramos en presencia de ningún caso donde deba suplirse la queja deficiente, pues en los juicios de amparo en materia civil, como es la sentencia recurrida, impera el principio de estricto derecho cuando no se advierte un motivo legal que autorice suplencia en términos de lo dispuesto al efecto por las fracciones I, II y VI del artículo 79, de la Ley de

Amparo

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los agravios hechos valer, ha lugar a **CONFIRMAR** en sus términos la sentencia que se revisa y conceder el amparo para los efectos que se precisaron en el fallo recurrido.

Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en lo establecido en los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIII, de la Constitución General de la República; 73, 74, 77, 84 y 92 de la Ley de Amparo; 35 y 37 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se;

RESUELVE:

PRIMERO.- Se confirma la resolución sujeta a revisión.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a **FRANCISCO GUEZADA** contra los actos que reclamó de la **Sexta Sala, del Juez Décimo Quinto**, ambas autoridades de lo Civil y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**. Consistentes, respecto de la primera, en la **sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete** en el toca **de la segunda en expedición del** **oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

67

R.C.

FORMA D-1

17
253

Valores ordenando rindiera informe, con copia certificada, de los estados de cuenta bancarios del señor [REDACTED] por los últimos tres años y de la señalada Comisión, en el cumplimiento de la solicitud de expedición del mencionado informe. Concesión que se otorga para los efectos precisados por el juez Federal.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución; devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió, y en su oportunidad archívese como asunto concluido.

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, los magistrados que integran el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, licenciados, María Concepción Alonso Flores (presidenta), Arturo Ramírez Sánchez (ponente) y Daniel Horacio Escudero Contreras.

Firman, todos los mencionados ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 188 de la Ley de Amparo y

41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en que se realizó el engrose de esta resolución. DOY FE. ---

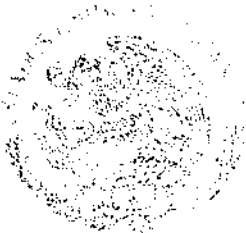
El suscrito licenciado **JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ**, Secretario de este Tribunal, **C E R T I F I C A**: Que la presente es copia fiel y exacta de su original relativa al [REDACTED] interpuesto por [REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] contra la sentencia dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 55/2017-IV, que se expide en sesenta y ocho páginas, para enviarse a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales. Doy fe.

JUEZ DÉCIMO
SEGUNDO DE
DISTRITO EN
MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS


LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.


DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA CIVIL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CÍRCULO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMATO

172

En la Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 21029, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste. *l*

Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto [REDACTED] tres legajos y testimonio de la resolución dictada en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión R.C. [REDACTED] de su índice interpuesto por el tercero interesado [REDACTED] en su carácter de representante [REDACTED], en contra de la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el veinticinco de julio de dos mil diecisiete; cuyos puntos resolutive son:

PRIMERO. Se confirma la resolución sujeta a revisión.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A [REDACTED] contra los actos que reclamo de la Sexta Sala, del Juez Décimo Quinto, ambas autoridades de lo Civil y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consistentes, respecto de la primera, en la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete en el toca [REDACTED] de la segunda en expedición del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

10 SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

5 20353478

ordenando rindiera informe, con copia certificada, de los estados de cuenta bancarios del señor [REDACTED] [REDACTED] por los últimos tres años y de la señalada comisión, en el cumplimiento de la solicitud de expedición del mencionado informe. Concesión que se otorga para los efectos precisados por el Juez Federal."

Acúsese recibo de estilo solicitado por la autoridad oficiante.

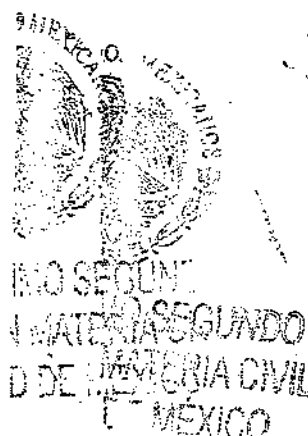
Hágase lo anterior del conocimiento de las partes; realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguese únicamente las constancias que en original obren en el cuaderno de antecedentes.

En este orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 195 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de **TRES DÍAS**, informen el cumplimiento que estén dando a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto, las constancias necesarias con pleno valor probatorio que acredite fehacientemente tal extremo, apercibidos que en caso de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización

[REDACTED]
[REDACTED] lo anterior, tomando como valor la unidad de medida y actualización de \$80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, como está previsto en el precepto 237, fracción I, del mismo ordenamiento, en relación con el numeral único, en



concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciéndole de su conocimiento que en caso de no manifestar nada al respecto dentro del plazo señalado, con apoyo en el ordinal 193 de la ley reglamentaria se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.



Por otra parte, devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias que adjuntaron a sus informes justificados; al no ser necesaria su retención, solicitándoles el acuse de recibo respectivo, en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización de [REDACTED]

[REDACTED] lo anterior, tomando como valor la unidad de medida y actualización de \$80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, tal como está previsto en el precepto 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de

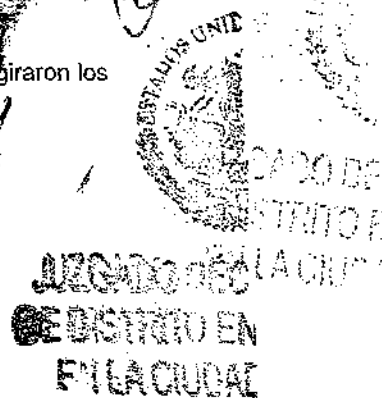
dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notifíquese por medio de oficios a las autoridades responsables, así como al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Axel Hernández Díaz**, quien autoriza. **Doy fe.**

x8

Razón: En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios a las autoridades correspondientes, notificando el auto que antecede. **Conste.**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 17

17

17.03

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
28 NOV 2017

SE NOTIFICA A

las partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE

CON FECHA

29 NOV 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A
QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD
CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE

EL ACTUARIO JUDICIAL

LIC. CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

21375
20- NOV 29 P 1:00

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Sirvase usted mencionar el número de Toca al contestar este oficio

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERALAsunto: El que se indica
Toca Número: [REDACTED]
Amparo Número: [REDACTED]

SALA

Secretaría de Acuerdos

Toca Núm. [REDACTED]

Of. Núm. [REDACTED]

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha veintiocho de noviembre del presente año dictado en el cuaderno de amparo anotado al rubro promovido por [REDACTED] y en atención a su oficio número [REDACTED], de fecha veintisiete de noviembre del año en curso, recibido en esta sala el día veintiocho de noviembre del corriente año, se hace de su conocimiento que esta Sala dictó el siguiente proveído:

"Toca 2174/2016."

Ciudad de México, a veintiocho de noviembre dos mil diecisiete.-----
A su cuaderno de amparo el oficio de cuenta número [REDACTED] y toca [REDACTED] que remite el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por enterada esta Sala [REDACTED] mediante resolución dictada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el R.C. [REDACTED], se confirmó la sentencia dictada por el oficante que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal [REDACTED] y pide informe sobre su cumplimiento.
Con fundamento en el artículo 192 de la vigente Ley de Amparo, ya que la ejecución consiste en el dictado de una nueva resolución, como lo indica la Autoridad Federal, se deja insubsistente la sentencia de DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, dictada por esta Sala en el toca [REDACTED] constitutiva del acto reclamado en el juicio de amparo, y en su lugar se dictará otra atendiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de referencia. Túrnense nuevamente los autos al C. Magistrado Ponente que corresponda, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria referida. Infórmese lo anterior a la Autoridad Federal que otorgó el amparo, así como al juzgado de primera instancia con copia certificada del presente proveído, acúsele el recibo de estilo.- NOTIFIQUESE.- Así lo acordó la Sexta Sala y firma el C. Magistrado Semanero FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ, ante el Secretario de Acuerdos JUAN ULLOA CRUZ que autoriza y da

MO SEGUNDO

MATERIA CIVIL

DE MÉXICO

MATERIA CIVIL

DE MÉXICO

Asimismo, le acuso recibo el oficio de cuenta número [REDACTED] y toca [REDACTED] para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
MÉXICO, D.F., A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEXTA SALA CIVIL.



ims.

LIC. JUAN ULLOA CRUZ

SEXTA SALA CIVIL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 7

176

En la Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 21375, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso [REDACTED], en el que se remitió el toca [REDACTED] asimismo, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma Francisco Peñaloza Heras, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario Emmanuel Castellanos Rosas, quien autoriza. Doy fe.

18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUEZ DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
01 DIC 2017 SE NOTIFICA A

partes

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

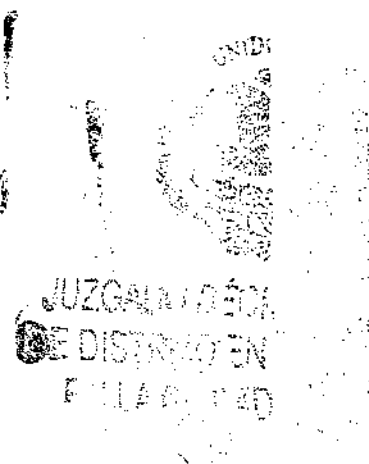
CON FECHA

02 DIC 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

EL ACTUARIO JUDICIAL


LIC. CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO





PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

177

130

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA-SE REQUIERE
CUMPLIMIENTO-ACUSE.

Código No. Oficio

Autoridad

Zona

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR S/Z
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES S/Z

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN S/Z
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. ANT.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

2017 NOV 28 10:10 AM

SEXTA SALA CIVIL





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA-SE REQUIERE
CUMPLIMIENTO-ACUSE.

Código No Oficio

Autoridad

Zon

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR S/Z
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES S/Z

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN S/Z
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. ANT.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.



OFICIA LIA DE PARTES

Sin anexo(s)

ID003042

29/11/2017 13:17



201700538261





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NUMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA-SE REQUIERE
CUMPLIMIENTO-ACUSE.

Código

No Oficio

Autoridad

Zon

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR S/Z
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

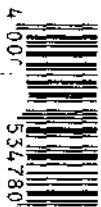
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES S/Z

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN S/Z
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. ANT.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

180

262

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA-SE REQUIERE
CUMPLIMIENTO-ACUSE.



Autoridad Zon
SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR S/Z
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES S/Z

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN S/Z
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. ANT.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO





21577

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

77- DIC - 7 2 12 34

ASUNTO: SE REMITE ACUSE DE RECIBO.

Francisco Castillo
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.
PRESENTE:

JUZGADO 16 CIVIL

SECRETARIA "A"

EXP. NUM.

OFICIO NUM.

4001

VS.

ORDINARIO CIVIL

En contestación a su **OFICIO NUMERO** [REDACTED] de fecha **VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE**, recibido en este H. Juzgado el **VEINTINUEVE DE LOS CORRIENTES**, relacionado con el Juicio de Amparo número [REDACTED] promovido por [REDACTED] me permito remitir copia certificada del auto de fecha **TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE**, que hace las veces de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar.

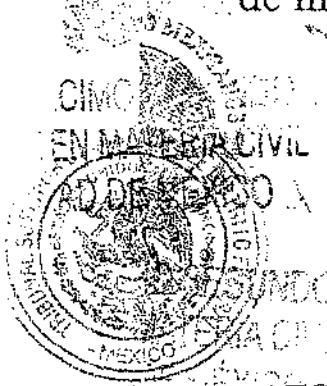
Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

Ciudad de México, a 1 de Diciembre del 2017.

EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL.

Francisco Castillo
LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ



JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF inicio ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] (amparo) Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-12-01 Firmante: JC16SA NAS: 5110-3410-6508-6744-5587
-- Firma electrónica SICOR/TSJDF inicio ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] (amparo) Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-12-01 Firmante: JC16J NAS: 5110-3410-6508-6744-553

EXP. NUM. [REDACTED]

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A" DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA, HACE CONSTAR: QUE A LAS DOCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, SE RECIBIÓ EN LA OFICIALIA DE PARTES DE ESTE JUZGADO DÉCIMO SEXTO CIVIL, EL OFICIO NUMERO [REDACTED] DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, ACOMPAÑADO DE DOS LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS CONSTANTES EN: (532) Y (427) FOJAS UTILES DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO [REDACTED] PROMOVIDO POR [REDACTED] ANTE EL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.- CONSTE.- DOY FE.- En la Ciudad de México, a treinta de Noviembre del dos mil diecisiete.



En la Ciudad de México, a treinta de Noviembre del dos mil diecisiete..

- Se tiene por hecha la certificación que antecede, para que surta todos sus efectos legales a que haya lugar; y remítase copia certificada del presente auto que hace las veces de acuse de recibo.-- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos "A", Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA, que autoriza y da fe.- Doy fe.

[Handwritten signature]



JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAlogZIAACgkQWymFedheZPthwDwmpcDsuBRRIetnKhuEs+VWg C+yIP3EAMnd1wu1INYIA/1+bRQoVpG8g/RpTGMX9BysPJFmd+g/8ickXy6Re9NE =cCVP

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAlogZIAACgkQWymFedheZPthwDwmpcDsuBRRIetnKhuEs+VWg 62ee5DQ@5P51ShyDRIUBA/HigZLI7/U/LK4a9q6OJZMEI9CqLnmMp1FGqjOSx =qcB2

En el Boletín Judicial No. 206 correspondiente al día 1 de Diciembre de 2017 se hizo la publicación de Ley.— Conste.
El 4 de Diciembre del 2017, surtió efectos la notificación anterior.— Conste.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A", DEL
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL,
LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA-----

-----CERTIFICA:-----

Que las presentes copias fotostáticas
concuerdan fiel y legalmente con las
constancias que se tuvieron a la vista,
relacionadas con el juicio **ORDINARIO CIVIL**
promovido por [REDACTED] en
contra de [REDACTED]

Expediente número [REDACTED] En cumplimiento
a lo ordenado por auto de fecha TREINTA DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE dictado en
el cuaderno de AMPARO NUMERO [REDACTED]
promovido por [REDACTED]

ante el JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, se expide la presente copia
certificada constante en: (una) foja útil
debidamente sellada, foliada, rubricada y
firmada.- CONSTE.- DOY FE. Es dada en la
Ciudad de México, al PRIMER DIA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.



SEGUNDO
JUZGADO DE LO CIVIL
MATERIA CIVIL
MEXICO

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".

[Handwritten signature]

LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.



JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL



JUZG. 16 CIVIL

Secretaría "A"

EXP.No. [REDACTED]
(ANTECEDENTE
[REDACTED])

OFICIO No. 3982

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO

AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

21578

2017 DIC - 1 P 13:35

[Handwritten signature]
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

REF: Se da cumplimiento al oficio [REDACTED]

De fecha : 27-nov-2017

AMPARO DIRECTO.- [REDACTED]

QUEJOSO: S [REDACTED]

**JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
P R E S E N T E .**

En contestación a su oficio [REDACTED] de fecha veintisiete de noviembre del año en curso y recibido en el Juzgado Décimo Quinto de lo Civil el veintiocho de los corrientes y en este Juzgado a mi cargo el veintinueve de los corrientes, al respecto me permito manifestarle lo siguiente: Que tal y como se desprende del Fallo de Garantías, quien debe cumplimentarlo directamente como Autoridad ordenadora lo es LA. H. SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; por su parte el Suscrito como Autoridad ejecutora, acatara en todos sus términos lo que resuelva el Superior jerárquico, en términos a la Copia Certificada que se anexa al presente, lo que hago de su conocimiento, par los efectos legales a que haya lugar.

RECIBIDO
LEGADO
DEL PRIMER CIRCUITO

Sin otro particular de momento le reitero mis más distinguidas

consideraciones.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Ciudad de México a 1 de diciembre del 2017
EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL.

[Handwritten signature]
LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ.



JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

DÉCIMO SEGUNDO
DE MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO
FCG/lgc.

JUICIO: ORD. CIVIL
DAÑO MORAL

VS.



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 185
AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 18c
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

-- Firma electrónica SICORTSJDJF Inicio: ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: 265/2017 Secretario A Documentos: acuerdo público: 2017-12-01
Firmante: JC163 HAS: 5110-3410-0377-0077-079

-- Firma electrónica SICORTSJDJF Inicio: ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: 265/2017 Secretario A Documentos: acuerdo público: 2017-12-01
Firmante: JC163A HAS: 5110-3410-0377-0077-079

EXP. [REDACTED] (antecedente [REDACTED])

AMPARO: [REDACTED]

Ciudad de México, a treinta de noviembre del dos mil diecisiete.

Dada nueva cuenta en los presentes autos, Y tomando en consideración que la **JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARO Y PROTEGIÓ A LA QUEJOSO** [REDACTED] contra actos de la H. SEXTA SALA CIVIL [REDACTED] ordenadora, y el Titular del Juzgado Décimo Quinto de lo Civil como Autoridad ejecutora, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y debido a la **EXCUSA actualmente continua conociendo el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de este del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, y tomando en consideración de que la Sala antes indicada deberá directamente cumplimentar al Fallo de Garantías de mérito; por ser autoridad ordenadora del acto impugnado, por su parte el suscrito por ser **Autoridad ejecutora acatara** en todos sus términos lo resuelto por el superior jerárquico; Además este Juzgador se abstendrá de ejecutar el Acto reclamado emitido por la autoridad responsable ordenadora H. SEXTA SALA CIVIL materia de amparo.- Hágase del conocimiento a la Autoridad Federal, que el suscrito ha dado cumplimiento al Fallo de Garantías, para lo cual anéxese copia certificada del presente proveído; para los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFIQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL LICENCIADO FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da fe.-DOY FE.

-- Firma electrónica SICORTSJDJF Inicio: ----- IF4E8L1AA7H40gUhsACgkQWmFedhoZMabjCJvGvum7vI8Y7y0N1z2M7gVv
04qUMTTRKHQKXJC0U6AI8p0ESvuyQ1kTmIy8V2vGfAIxbk78-8E7m13Vt-2U1H

-- Firma electrónica SICORTSJDJF Inicio: ----- IF4FAB1IAV7E3uqQedACgkQWmFedhoZMabjCJvGvum7vI8Y7y0N1z2M7gVv
YldgV7g9F6ATyWw45AMUz128Uq+8gP0gouubpSym53A4V337-0061-0061-0061-0061



TSJ

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

185186

286

En el Boletín Judicial No. 206 correspondiente al día 1 de Diciembre de 2012 se hizo la publicación de Ley.— Conste.

El 4 de Diciembre de 2012 surtió efectos la notificación anterior.— Conste.



DÉCIMO SEXTO
LO CIVIL



DÉCIMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LIC. CARLOS EMILIO
CARMONA DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE
ESTA CAPITAL. -----

-----CERTIFICA-----

QUE LAS DOS COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE ANTECEDEN
CONCUERDAN FIEL Y LEGALMENTE CON SU ORIGINAL QUE
OBRAN EN EL EXP. [REDACTED] PROMOVIDO POR [REDACTED]
[REDACTED] EN CONTRA DE [REDACTED]
[REDACTED] DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, DEBIDAMENTE
COTEJADA, SELLADA, FIRMADA Y LA QUE SE EXPIDE EN
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS.-DADA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO AL PRIMER DIA DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -----



EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

SECRETARÍA
DE ACUERDOS
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA



AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

21608

2017 DIC -1 P 2 20

SEXTA SALA CIVIL

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

AMPARO:

TOCA

OF-2327

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en el Toca [REDACTED]
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por [REDACTED]
[REDACTED] en contra de [REDACTED] remito a Usted
las copias certificadas en 20 FOJAS ÚTILES, en cumplimiento a su ejecutoria
de fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, para los efectos legales a
que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.

SUPRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
MÉXICO D.F., A 01 DE DICIEMBRE DE 2017.
EL C. PRESIDENTE MAGISTRADO DE LA SEXTA
SALA CIVIL

DR. FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ.

FJHO/xsh



19. 1
188
270

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

PROYECTO NUM. 53

Ciudad de México, a treinta de noviembre
de dos mil diecisiete.

V I S T O S, los autos del toca [REDACTED] para
dictar nueva sentencia en cumplimiento de la ejecutoria
emitida el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, por
el C. Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de México, en los autos del juicio de
amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED]
[REDACTED] por su propio derecho, contra el acto que
reclama de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, que se hizo consistir en
la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil
diecisiete, al resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada en contra del auto de fecha
veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado
por el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de
México, en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
promovido por [REDACTED] en
contra de [REDACTED];

RESULTANDO:

1.- Que con fecha veintiocho de septiembre del dos
mil dieciséis, el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil de
esta Ciudad, dictó auto que a la letra dice:

"Dada nueva cuenta con los presentes autos y visto que
ambas partes han ofrecido pruebas, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA²
DEL DISTRITO FEDERAL¹⁸⁹

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

Procedimientos Civiles, se procedé a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: Se señala para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Se admiten todas las pruebas ofrecidas por ambas partes. En preparación de las pruebas confesionales admitidas, a cargo del demandado [REDACTED] y a cargo del actor [REDACTED]

[REDACTED] cíteseles personalmente por lo menos con DOS DÍAS de anticipación al señalado, para que comparezcan a absolver posiciones de manera personal y no por conducto de apoderado legal, apercibidos que en caso de no comparecer sin justa causa, serán declarados confesos de todas y cada una de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. En preparación de las pruebas testimoniales ofrecida por la parte demandada; por lo que corresponde a la marcada con el número 2, de su escrito ofertorio de pruebas, dígamele que dentro del término de TRES DÍAS, deberá reducir a dos el número de sus testigos, apercibido que de no hacerlo, el Suscrito lo hará en su rebeldía; por lo que corresponde a la marcada con el número 3, prevéngasele al oferente de la prueba, para que el día y hora señalados presente a sus testigos los CC. [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] apercibido que de no hacerlo, se declarará desierta dicha probanza por falta de interés jurídico del oferente de la prueba. Por lo que respecta a la prueba marcada con el número 12, como lo solicita gírese oficio a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a fin de que rinda el informe con los puntos que indica el oferente de la prueba, así mismo, remita copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarias a nombre del C. [REDACTED]

[REDACTED], de los últimos tres años. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el actor, y marcadas con los números 14, 15 y 16, respecto a las periciales en materias de PSICOLOGIA, INFORMÁTICA, y TRABAJO SOCIAL, con fundamento en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles, se da vista a la

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 190
DEL DISTRITO FEDERAL

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

parte demandada, para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste sobre la pertinencia de tales pruebas, y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su parte debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya propuesto el oferente, así como indicar su cédula profesional o documento que acredite su Calidad de Perito, requisito sin el cual no se tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere el primer párrafo de la fracción VI del artículo 347 del mismo ordenamiento legal antes citado. Notifíquese."

2.- Con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra del auto de veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis, citado en el resultando que antecede, y previa substanciación del recurso, la Sala dictó resolución el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, concluyendo, con los siguientes puntos resolutivos:

- - -"PRIMERO.- Se confirma el auto recurrido
SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas.
TERCERO.- En cumplimiento al Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de este Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace saber a las partes que una vez concluido el juicio, este Toca se destruirá, por lo que en su caso y de ser procedente deberán recoger los documentos exhibidos en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la notificación de este proveído. CUARTO.- Notifíquese, con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento del juez de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido."

O SEGUNDO
INTERIA CIVIL
DE MEXICO



"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

3. Inconforme con dicha resolución, [REDACTED]

[REDACTED] por su propio derecho, promovió juicio de garantías, lo que originó que el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, emitiera ejecutoria el veinticinco de julio del dos mil diecisiete, en el cuaderno de amparo [REDACTED] concluyendo con el siguiente punto resolutivo:

- - - "ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a [REDACTED] contra los actos que reclama de la Sexta Sala Civil y del Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de la última parte considerativa de este fallo."

4.- Por auto dictado el veintiocho de noviembre del año en curso, se ordenó pasaran los autos al Magistrado en turno para que dictara nueva resolución, la que se pronuncia de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- En cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el cuaderno de amparo [REDACTED] que en su parte conducente señala:

- - - "CUARTO argumento de queja, se afirma que la Sala responsable apoya su decisión de confirmar la admisión de la prueba, sin que se encuentre contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal, por lo que su decisión carece de

DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO



fundamentación y motivación. -----

- - - En apoyo a sus consideraciones, el quejoso invoca el criterio de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE" - - -

- - - Son sustancialmente fundados los motivos de disenso, sintetizados en párrafos arriba. -----

- - - En principio, es menester señalar que el concepto natural de litis se traduce en pleito, controversia judicial o actuación en el juicio, que trasladado al ámbito jurisdiccional debe entenderse como el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se estima necesario apuntar, que es cuando la contestación a la demanda o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juzgador; situación similar acontece cuando se trata de la interposición de cualquier medio de impugnación, supuesto en el cual, la litis se constituye con los agravios expresados en el recurso respectivo, lo cual no puede ser desconocido por el órgano revisor. -----

- - - En términos generales, integrada la litis las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. -----

- - - De manera que el órgano resolutor al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no puede ocuparse de su fallo de puntos o cuestiones no comprendidas en la litis. -----

- - - Es así que, el principio de congruencia consiste en que las resoluciones correspondientes no contengan conclusiones o afirmaciones que se contradigan entre si (congruencia interna) e impone a los juzgadores el deber de resolver la litis (conflicto) tal y como quedo integrada con los planteamientos expuestos en la demanda y en su respectiva contestación, así como con los agravios propuestos (congruencia externa). -----

RECEIVED
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FALLO
MEXICO
1924
10 DE ABRIL DE 1924
VISTO EN LA SALA CIVIL
DE MAYO 1924



"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

- - - El artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México establece lo siguiente: - - - - -

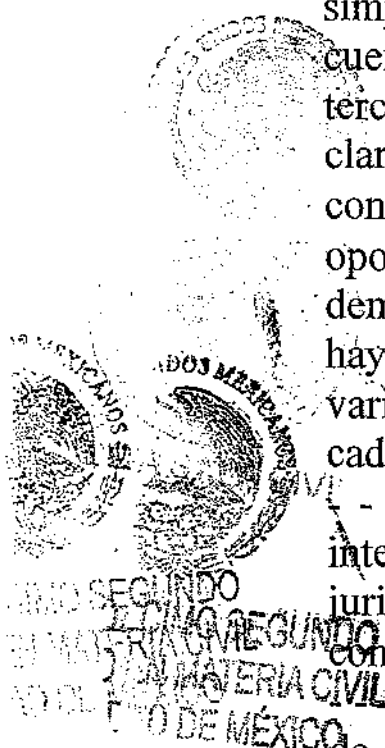
- - - **Artículo 81.-** Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." - - - - -

- - - Del anterior precepto legal, se obtiene, en lo que interesa, que las determinaciones que emita la autoridad jurisdiccional deben de ser, claras, precisas y congruentes con las constancias de autos. - - - - -

De ahí que, las sentencias que se dicten en el recurso de apelación también deberán satisfacer el principio de congruencia interna y externa, porque la facultad del órgano de apelación de resolver el recurso que las partes interpongan implica, sin duda alguna, examinar los agravios que expongan, sin emitir en el fallo consideraciones contradictorias. - - - - -

- - - Es patente que la litis en esa instancia no puede ser modificada por las partes después de que ha sido fijada con el escrito de agravios y la sentencia apelada, lo que revela la obligación de la autoridad revisora para ceñir su actuación a lo argumentado en vía de agravios. - - - - -

- - - En esa tesitura, la sala resolutora atendiendo al principio de congruencia externa debe resolver lo conducente respecto de la resolución recurrida, análisis sin el cual no puede decirse que se cumplió con el principio de congruencia, por lo que debe de ocuparse de los planteamientos que formula la disconforme relativos



- - - Con el objeto de verificar si en el caso, las sala responsable violó el principio de congruencia externa, es conveniente señalar que el quejoso, en el recurso de apelación, esgrimió toralmente los agravios, que se sintetizan a continuación: - - - - -

- - - A) Que se violan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José) –principio pro persona-, en relación con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, interpretado a contrario sensu, al admitirse ilegalmente la prueba marcada con el número doce, señalada en el escrito de ofrecimiento de pruebas de la actora. / - - - - -

- - - B) Que se contraviene la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por que además de ser incongruente carece de fundamentación y motivación, con lo cual se dejó en completo estado de indefensión a la parte apelante. - - -

- - - En el fallo reclamado, que resolvió el recurso de apelación, la sala responsable determinó esencialmente lo siguiente: - - -

- Estudio conjuntamente los dos agravios propuestos por la parte demandada, los cuales declaró infundados. - - - - -
- Para lo cual, determinó por lo que respecta a la supuesta violación a los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la resolutora se encontraba impedida para hacer consideraciones sobre el particular, al estar reservado su análisis y resolución a las autoridades federales. - - - - -
- Así como, señaló que el auto recurrido se encontraba debidamente fundado y motivada, de conformidad con lo dispuesto 298 y 299



"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

del Código de Procedimientos Civiles para Ciudad de México, pues el recurso de apelación interpuesto por el demandado, tenía fundamento en el primer artículo invocado (sic), por que se argumento que la prueba consistente en el informe que se ordeno solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a la existencia de cuentas a nombre del hoy apelante, las cuales están a su nombre y remitan la copias certificadas de tales cuentas, lo cual resultaba violatorio del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. -----

➤ Además preciso que el a quo no se fundó en dicho precepto legal (sic) para admitir la prueba señalada con antelación, siendo que el juicio de origen de tramitó en la vía ordinaria civil y los informes se están solicitando en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial que conoce del presente juicio, en relación a una persona que tiene el carácter de demandada en el juicio de que se trata, además, que no existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata, razón por la que confirmó el auto apelado. -----



La confrontación de los razonamientos que sostiene el acto reclamado, con los anteriores argumentos esgrimidos por el quejoso, resulta claro que la Sala responsable en contravención a lo establecido en el invocado artículo 81, no abordó totalmente el examen de los planteamientos propuestos en el recurso de apelación. - - - En efecto, la Sala civil soslayó pronunciarse en sus términos respecto de la cuestión efectivamente planteada en el recurso de apelación, pues en lugar de resolver lo conducente en relación con la violación a los derechos fundamentales del quejoso, contenidos en el derecho doméstico y en la convención extranjera a que alude, determinó que se encontraba impedida para pronunciarse sobre el tema propuesto, aludiendo a que era cuestión



propia de las facultades de las autoridades federales, que se traduce en una atribución reservada exclusivamente a temas propias de constitucionalidad, mas no de control de convencionalidad. - - - - -

- - - Es así, que la cuestión omitida por la autoridad responsable debía ser abordada desde la óptica del principio pro persona, que surge con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, que modificó, entre otros, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguientes: - - - -

- - - Artículo 1°. [...] - - - - -

- - - En dicho precepto legal se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. - - - - -

- - - Con base en ese precepto, **cualquier juez nacional**, está facultado para emitir pronunciamiento en respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. - - - - -

- - - Por tanto, en el sistema jurídico mexicano actual, los **jueces nacionales**, tanto **federales** como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las **demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.** - - - - -





- - - Con los anteriores razonamientos queda demostrado que la Sala sentenciadora tenía la obligación legal de pronunciarse respecto de la cuestión propuesta por el quejoso relativa al respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales y no limitarse a señalar que se encontraba impedida para hacerlo, pues evidentemente es un tema que debe ser resuelto por cualquier órgano jurisdiccional del país. - - -

- - - Asimismo, está evidenciado que no existió pronunciamiento alguno, en relación con que se vulneró la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en la Ciudad de México. - - -

- - - En efecto, la Sala Civil se limitó a estudiar conjuntamente los agravios propuestos por el apelante, determinando su imposibilidad legal para pronunciarse respecto de temas, que estimó reservados a las autoridades federales y declaró legal lo determinado en el auto recurrido, por no existir prohibición para la admisión de la prueba en comento, sin que se hubiere pronunciado respecto a la cuestión precisada en párrafos arriba, siendo que se encuentra obligada a dar respuesta fundada al argumento en comento, contenidos en el pliego de agravios de dicho medio de impugnación. - - -

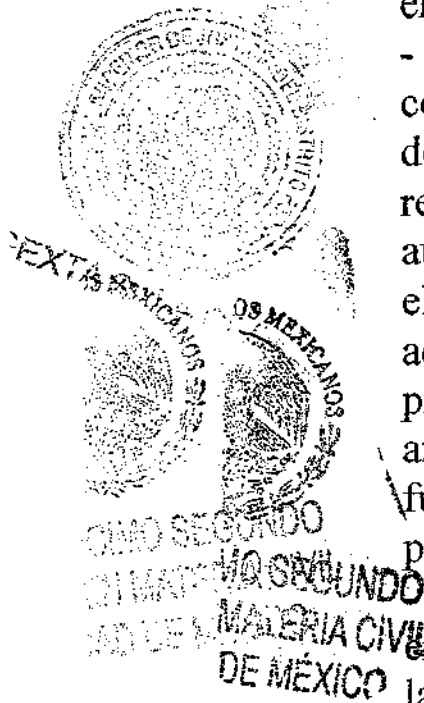
- - - Cabe destacar, que los artículos 39 y 41 contenidos en el capítulo V de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), disponen: - - -

- - - Artículo 39. [....] - - -

- - - Artículo 41. [....] - - -

- - - Los citados preceptos contemplan distintas medidas para reparar el daño causado por el ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, que consisten en la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado o, en su defecto a través de una indemnización. - - -

- - - El propio artículo 41 establece una serie de criterios que deberán ser tomados cuenta al momento de fijar la indemnización, los cuales permiten precisamente graduar la responsabilidad de la persona en función de las





*"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"*

circunstancias concretas en las que se realizó la expresión. Esos criterios incluyen "la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso." -----

- - - En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 41, establece la posibilidad de atenuar la medida reparatoria al permitir al juez disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo” en los casos en que los sujetos afectados por las expresiones sean servidores públicos. Y por otro lado, el artículo 43 hace posible agravar el monto de la reparación del caso de reincidencia durante el plazo de un año, al dar la posibilidad al juez de “imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización.” - - - - -

- - - Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que "en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas. "Mientras que el propio artículo 41 estipula que "en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." - - -

- -- Por tanto la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Visa Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece el monto o limite de la indemnización por daños al patrimonio moral, la cual el juez determinará según lo previsto en el artículo 41 referido (tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, no pudiendo en ningún caso el monto por indemnización exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad). - - - - -

- - - Consecuentemente, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación en estudio, pues la resolución reclamada es violatoria de lo establecido en los artículos



"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

14 y 16 Constitucionales en relación con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos siguientes. -----

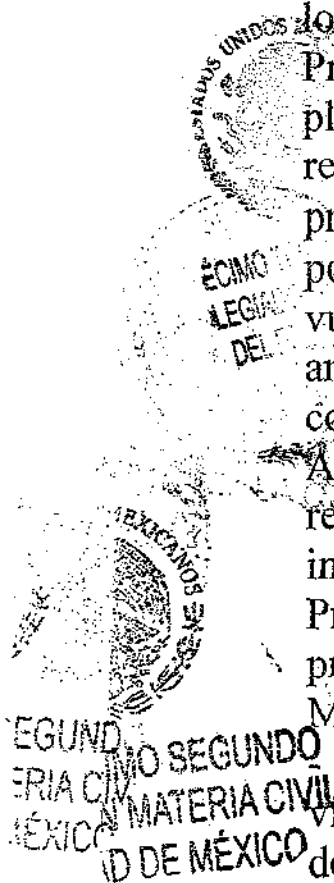
--- La sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca [REDACTED] -----

--- En su lugar emita otra en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la litis planteada en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, propuesto a su potestad, esencialmente por lo que hace, por una parte a los planteamientos referentes a que se vulneren los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1,14,16,y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3,8,9,11,24 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto San José) , relativos al principio pro persona y por otra , a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). -----

--- Al haberse declarado fundados los conceptos de violación en estudio dirigidos a demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, este Juzgado de Distrito ya no entra al estudio de los demás conceptos de violación planteados por el quejoso, al resultar innecesario su análisis." -----

--- La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque, debido a su naturaleza respecto de esta primera, tiene que resolverse igualmente por lo que toca a las ejecutoras. -----

II.- En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Matera Civil en la Ciudad de México, esta Sala deja sin





"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

efectos la sentencia dictada el [REDACTED] y se aboca de acuerdo con los lineamientos señalados en la ejecutoria de que se trata a emitir otra sentencia, en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plena jurisdicción resuelva la Litis planteada en el recurso de apelación interpuesta por el demandado, el cual se hace en los siguientes términos:

Los dos agravios expresados por el demandado, se estudian en conjunto por su relación, y por lo que hace a los planteamientos referentes a que se vulneran los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José relativo al principio *pro persona*, y por otra, a que se infringió la ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

En primer lugar, debe señalarse que el señor, [REDACTED] en su carácter de mandatario judicial del señor [REDACTED] en el primer agravio expresado, en el escrito de cinco de octubre de dos mil dieciséis, señaló textualmente que: "El auto impugnado, viola en perjuicio del suscrito los derechos



DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CADA UNO DE LOS



fundamentales consagrados a mi favor, en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito a contrario sensu, ya que el A quo, indebida e ilegalmente admite y ordena dar trámite a la "Prueba" documental marcada con el número 12 del escrito de ofrecimiento de pruebas de mi contraria, consistente en informe y copia certificada que rinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo CNBV, donde diga: a) Si existen cuentas bancarias a nombre de mi mandante [REDACTED] b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre de mi mandante [REDACTED] y c), Remita a éste juzgado copia certificada de los estado de cuenta de las cuentas bancarias a nombre de mi mandante [REDACTED] de los últimos tres años"



A continuación el hoy apelante señaló que la admisión de dicha prueba, resultaba infundada e improcedente, toda vez que se trata de información confidencial del suscrito protegida por ley, sin que exista la excepción a que hace referencia el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, señalando

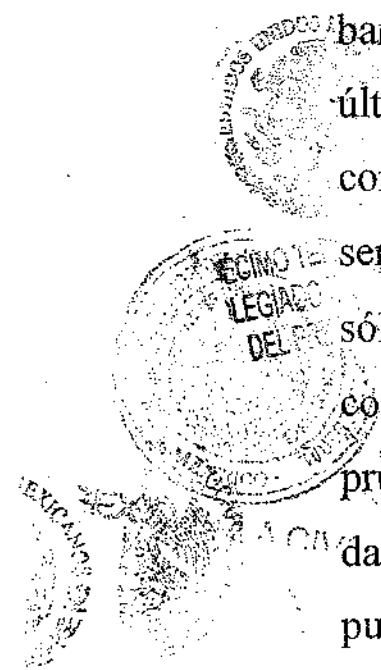


*"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"*

después de transcribir dicho precepto, que en el caso concreto el presente juicio es ordinario civil no un juicio ejecutivo donde existe embargo o providencia alguna, ni existe providencia precautoria justificada y/o concedida para que se violenten sus derechos fundamentales, ordenando se exhiban y ventilen los datos de las cuentas bancarias de mi mandante en copias certificadas por los últimos tres años, tal como si el mismo hubiese sido condenado y nos encontráramos en la ejecución de sentencia y que por dicha admisión y trámite resulta no sólo ilegal sino absurda, ya que dicha información puede constituir cualquier cosa, pero jamás constituir una prueba, y mucho menos idónea para justificar el supuesto daño moral, que su contraria alega haber sufrido con las publicaciones materia del presente juicio.

Sobre el particular debe señalarse que dicho agravio resulta insuficiente, toda vez que el hoy apelante no señala en forma alguna porque se violan en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 3, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).

Por lo que se refiere a la supuesta violación de los artículos 81, 402 y 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles, así como del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, por qué considera que el A quo indebida e ilegalmente admitió la



SEGUNDO
TERIA CIVIL
MEXICO



prueba en los términos precisados con anterioridad, dicho motivo de agravio resulta infundado, toda vez que el mencionado precepto legal, si bien establece que la información y documentación relativa a las operaciones y servicios, a que se refiere el artículo 46 de la propia ley en cita, tendrá carácter confidencial y que en ningún caso podrán dar noticia o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción "XV" del citado artículo 46, sino precisando que dicha información si puede proporcionarse, al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitante, comisario, comitente, o mandante, a sus representantes legales, o a quienes tenga otorgado el poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Por otra parte, como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, dicho precepto establece que "las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio, en el que el titular o, en su caso, el fideicomitante, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante, o mandatario sea parte o acusado."

En el presente caso, el A quo, actuó correctamente al admitir la prueba cuya admisión fue recurrida, toda vez que la misma se ofreció en el apartado doce del



escrito de ofrecimiento de pruebas con el propósito de que el Juez del conocimiento pudiera conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, dado que en el caso de que procediera la condena solicitada por la contraparte, el Juez tiene que tener conocimiento de las posibilidades económicas del demandado hoy apelante, para establecer el monto de la condena, dado que las prestaciones reclamadas se refieren al posible daño moral causado y no a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho de la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen en la Ciudad de México, siendo muy importante precisar que no existe ningún agravio relativo a la violación de la ley antes señalada, así como que la jurisdicción de la Sala se la conceden los agravios, razón por la cual esta Sala no podía de oficio estudiar si procedía o no la aplicación de la misma

DE NOVENO SEGUNDO
EN MATERIA
DAD DE MEXICO

Por lo que se refiere a que el presente juicio es ordinario civil, no un juicio ejecutivo donde exista embargo o providencia alguna, y que en el presente juicio, no existe providencia precautoria justificada y/o concedida para que se violenten los derechos fundamentales de su mandante ordenando se exhiban y ventilen los datos de las cuentas bancarias en copias certificadas por los últimos tres años, tal como si el mismo se hubiese condenado y se encontrara en ejecución de sentencia, debe señalarse, que si bien en cierto que el juicio no es ejecutivo mercantil, eso no



impide que el Juez admita una prueba que estima necesaria para buscar la verdad de los hechos controvertidos y tener base para dictar una sentencia conforme a derecho, en la inteligencia de que por "providencia" debe entenderse, la resolución judicial sobre cuestiones de trámite o peticiones sencillas efectuadas por el juzgador durante el procedimiento del juicio.

En la inteligencia de que el precepto 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito no se refiere específicamente a providencia precautoria, a embargo o algún sinónimo parecido, y mucho menos a que necesaria y forzosamente exista una condena en contra del demandado.

Atento a lo anterior, resulta inexacto que la admisión de dicha prueba sea ilegal o absurda, ya que tiene el propósito de obtener la información necesaria para que en caso necesario, dictar la condena solicitada y por lo tanto, resulta inexacto igualmente que el auto recurrido sea incongruente dado que existe conformidad entre lo perdido y lo resuelto.

Por lo que se refiere a que el auto recurrido no se encuentra debidamente fundado ni motivado, el agravio resulta igualmente infundado, toda vez que el A quo, apoyó su resolución respecto a la admisión de las pruebas, en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, considerando

NO SEGUNDO SEGUNDO
MATERIA MATERIA CIVIL
DE MEXICO MEXICO



20
938

obviamente que las mismas no eran contrarias a la moral o al derecho y que tenía relación directa con los hechos controvertidos.

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, resulta inexacto que se hayan violado en perjuicio del recurrente los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso y por lo tanto los artículos constitucionales invocados y los derechos humanos de debido proceso.

III.- Siendo infundados, infundado e insuficiente, los agravios expresados por el demandado, procede confirmar el auto recurrido, sin hacer especial condena en costas, por no encontrarse el presente asunto en lo establecido en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.- Se deja insubsistente la sentencia dictada por esta Sala el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el toca en que se actúa.

SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido.

TERCERO.- No se hace especial condena en costas.

CUARTO.- Notifíquese. Con testimonio de esta resolución comuníquese al C. Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el

EXCMO. SEÑOR JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO



20

207
211

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

cumplimiento dictado en el cuaderno de amparo
[REDACTED] y en su oportunidad archívese el toca como
asunto concluido.

A S I, lo resolvió y firma en forma unitaria el C.
Magistrado FRANCISCO JOSE HUBER OLEA
CONTRÓ, integrante de la Sexta Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, en términos de
lo dispuesto por los artículos 38, párrafo Segundo y 43,
párrafo final de la Ley Orgánica de este Tribunal, ante el
C. Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

MEXICANOS
SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

VS

TOCA:

FJHOC/CC/xsh

"EN EL BOLETÍN JUDICIAL No. 206 CORRESPONDIENTE AL DIA
Primero de Diciembre DE 2017 SE HIZO LA PUBLICACIÓN
DE LEY.- CONSTE.

EL 4 DE Diciembre DE 2017, SURTIÓ EFECTOS LA
NOTIFICACIÓN ANTERIOR.- CONSTE."

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

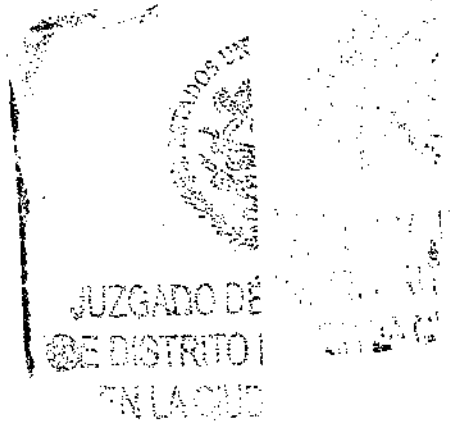
CERTIFICA

QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL EN VEINTE -FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA PRIMERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE- DOY FE.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JUAN ULLOA CRUZ

SEXTA SALA CIVIL





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

290
211
208

En la Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con los oficios registrados con los números de correspondencia **21578, 21577 y 21608**, relativos al juicio de amparo [REDACTED] **Conste.**

Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

Ténganse por recibo los oficios registrados con números de correspondencia **215577 y 21578**, signados por el **Juez Décimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, mediante el cual con el primero de los mencionados acusa recibo del oficio [REDACTED] en el que se remitió dos legajos de constancias que integran el juicio [REDACTED] y con el segundo manifiesta que se adhiere al cumplimiento que de la **Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, circunstancia de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Por otro lado, se tiene por recibido el oficio registrado con el número **21608**, signado por el **Presidente Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, el juez manifiesta que se adhiere al cumplimiento que de la Sexta Sala responsable, en consecuencia; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que dentro del término de **tres días**, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten

3
203534780

lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave 2ª./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, con el epígrafe y texto siguiente:

"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA) .- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el



JUZGADO DE
DE DISTRITO E
EN LA CIUDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

21209

apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

Notifiquese personalmente a las partes.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Emmanuel Castellanos Rosas**, quien autoriza. **Doy fe.**



DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del 05 DIC 2017, se notifica a las partes la resolución que antecede por medio de lista de acuerdos fijada en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

El 06 DIC 2017, surtió efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (a) Actuario (a) Judicial.

Lic. María Nancy Díaz Nava.



JUZGADO DEC
DE DISTRITO EI
EN LA CIUDA

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
MATERIA CIVIL

21732

2017 DIC -5 A 9:00

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONGELAMIENTO DE
CUENTAS

210 210

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Dirección General Contenciosa

Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C"

Oficio No.

QUEJOSO:

JUICIO DE AMPARO:
(CUADERNO PRINCIPAL)

ASUNTO: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES ATIENDE REQUERIMIENTO.

VENCIMIENTO: 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2017

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DISPACHADO

C. JUEZ DECIMOSEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. MANUEL ERWIN VASQUEZ RAFAEL, Delegado de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, respetuosamente comparezco y
expongo:

Que en atención a su oficio [REDACTED] que contiene acuerdo de fecha 27 de noviembre de
2017 por medio del cual requiere a esta autoridad para el efecto dar cumplimiento a la ejecutoria
de amparo, le comunico lo siguiente:

Se informa a su Señoría que esta Autoridad se encuentra material y jurídicamente imposibilidad
para atender el requerimiento que nos ocupa, toda vez que en la sede de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores no fue localizado oficio de la autoridad responsable ordenadora del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual ordene resuelva la litis planteada en
el recurso de amparo interpuesto por el quejoso en el juicio de origen.

Por lo antes señalado, en el supuesto de que en los autos del expediente seguido ante ese Juzgado
de Distrito obre el oficio mediante el cual la autoridad ordenadora del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, haya dado cumplimiento a la sentencia, pido-se sirva remitir copia
certificada del mismo, a fin de poder retransmitir a las correspondientes instituciones financieras
el oficio de mérito.



Derivado de lo anterior, se solicita a su Señoría tener por desahogado en tiempo y forma el requerimiento hecho y dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

Por lo antes expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tener por desahogado el requerimiento que se sirvió solicitar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los autos del juicio de amparo número [REDACTED] promovido por [REDACTED]

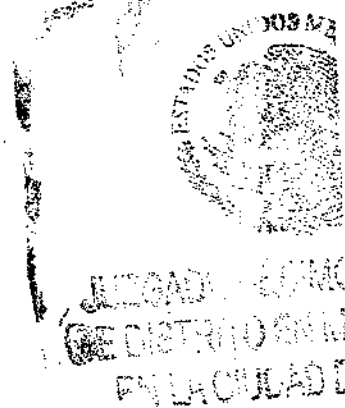
SEGUNDO.- Dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

Delegado de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, firma.

ATENTAMENTE.

LIC. MANUEL ERWIN VÁSQUEZ RAFAEL.

MEVR/JNH





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 112

214

293

211

En la Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 21732, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta en que el Delegada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, manifiesta la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que no localizó en sus archivos oficio por el cual la autoridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordene resolver la litis planteada en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, ahora bien tal y como lo solicita la autoridad oficiante, remítasele copia autorizada de la sentencia que emitió la sala responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, para que este en aptitud dar cumplimiento a la misma, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

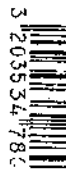
SEGUNDO
MATERIA CIVIL
MÉXICO

Notifíquese por medio de oficio a la autoridad oficiante.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Emmanuel Castellanos Rosas**, quien autoriza. Doy fe.

rd

Razón: En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios a las autoridades correspondientes, notificando el auto que antecede. Conste.



EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
07 DIC 2017 SE NOTIFICA A

Demás partes

____ LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA
DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA
LEY DE AMPARO. DOY FE

CON

08 DIC 2017

FECHA
SURTÍÓ

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY
FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL



LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

RECORDED
DE DISTRITO
EN LA CIUDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

212

21:

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SIDAR Y ROVIROSA ESQUINA EDUARDO MOLINA, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA,
ACCESO OCHO - NIVEL PLAZA

NOTIFICACIÓN PERSONAL

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS diez HORAS CON cinco de dieciséis MINUTOS DEL

DEL DOS MIL DIECISIETE, EL SUSCRITO LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO, ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN

proveyo de fe de cotejo de dieciséis de dos mil dieciséis
DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO EN EL ÍNDICE DEL JUZGADO DE la parte de Amparo ADSCRIPCIÓN COMO

la parte de Amparo ME CONSTITUI EN LEGAL Y DEBIDA FORMA EN EL DOMICILIO UBICADO EN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BUSCA DE

la parte de Amparo

Y, BIEN CERCIORADO DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS PARA LA PRÁCTICA DE LA PRESENTE DILIGENCIA, TODA VEZ QUE ELLO SE DESPRENDE DE SENDAS PLACAS OFICIALES COLOCADAS EN LA ESQUINA DE DICHA CALLE, COMO POR COINCIDIR LA NUMERACIÓN EXTERIOR, ASÍ COMO POR EL DICHO DE LA PERSONA LLAMARSE

QUIEN de la pretensión CON

EXPEDIDO A SU FAVOR POR

DOCUMENTO DEL CUAL EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL DA FE DE HABER TENIDO A LA VISTA, EN UNA DE SUS CARAS TIENE ADHERIDA UNA FOTOGRAFÍA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, DICHO DOCUMENTO SE DEVUELVE A SU INTERESADO EN ESTE ACTO POR CONSIDERAR INNECESARIA SU RETENCIÓN, QUIEN

MANIFESTÓ estar autorizado para recibir y recibir
notificaciónes de la parte de Amparo

PERSONA ANTE QUIEN ME IDENTIFICO COMO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO FEDERAL MENCIONADO CON LA CREDENCIAL EXPEDIDA A MI FAVOR POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PROCEDIENDO A NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL PROVEÍDO DEL QUE SE TRATA, ENTREGÁNDOLE EN ESTE ACTO COPIA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SELLADA Y COTEJADA DE proveyo de fe de cotejo de dieciséis DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL QUE

Y LE CORRO TRASLADO CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO Y SI
FIRMA DE CONFORMIDAD LA PRESENTE PARA CONSTANCIA LEGAL DOY FE
EL ACTUARIO JUDICIAL

LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO

JUZGADO DE
DE DISTRITO
EN LA CIUD

FIRMA

El Jefe de Actuario Judicial hace constar que la
persona que me atienda se obliga a firmar
para el efecto necesario por lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

RAZÓN ACTUARIAL

FORMA B-1

21105
213

CUADERNO PRINCIPAL
NÚMERO [REDACTED]

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Suscrito Licenciado Axel Hernández Díaz, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de diciembre del año en curso; dictado dentro de los autos del Juicio de Amparo, registrado en el índice del Juzgado de mi adscripción con el número [REDACTED] al constituirme en el domicilio ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] en busca de la parte TERCERA INTERESADA [REDACTED]

[REDACTED] inmueble edificado en planta baja y diez pisos, puerta de acceso en cristal y aluminio, me constituyo en el lóby del lugar y soy atendido por una persona ante quien me identifico con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, con número de empleado 56630, que me acredita como actuario judicial, le indico el motivo de mi presencia en el lugar, a quien le pregunto su nombre y le solicito se identifique, a lo que se niega, por lo que describo su media filiación sexo masculino, complexión robusta, cabello corto negro con alopecia, tez morena, ojos color café claros, aproximadamente de sesenta y cuatro años de edad, de un metro setenta y tres centímetros de estatura, sin cicatrices aparentes,

quien me indica que se comunico al piso diez y en un momento me atiende, posteriormente soy atendido por una persona ante quien me identifico con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, con número de empleado 56630, que me acredita como actuario judicial, le indico el motivo de mi presencia en el lugar, a quien le pregunto su nombre y le solicito se identifique, a lo que se niega, por lo que describo su media filiación sexo femenino, complexión regular, cabello largo color castaño oscuro, tez morena, ojos color café claros, aproximadamente de treinta y nueve años de edad, de un metro sesenta y cinco centímetros de estatura, sin cicatrices aparentes,

quien me indica que no hay nadie que me pueda atender, que fije aviso en la puerta, a quien le preciso que la información que me indica la tengo que verificar y que me necesito constituir en el interior antes coitado, a fin de verificar la información proporcionada, quien me niega el acceso al edificio, y se retira del lugar saliendo del edificio, por lo que ante la imposibilidad de continuar con la presente diligencia, me retire del lugar, lo que procedo a hacer del conocimiento del Titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. Conste.- Doy Fe.-

El Actuario Judicial

Licenciado Axel Hernández Díaz

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



214
217, 226

En la Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede, relativo al juicio de amparo [REDACTED].

IV. Conste.

Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil diecisiete.

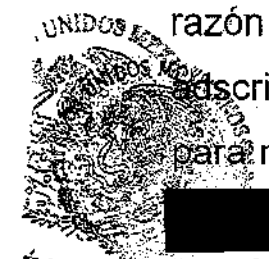
Se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la razón que antecede, suscrita por el Actuario Judicial de la descripción, donde hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado [REDACTED].

[REDACTED] el auto de cuatro de diciembre del año en curso, por los motivos que aduce.

En esas circunstancias, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase por lista que se publica en los estrados de este órgano de control jurisdiccional, la notificación del citado auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio.

Apoya a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, abril de dos mil ocho, visible en la página 238, cuyo rubro y texto son:

“NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente,



ECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



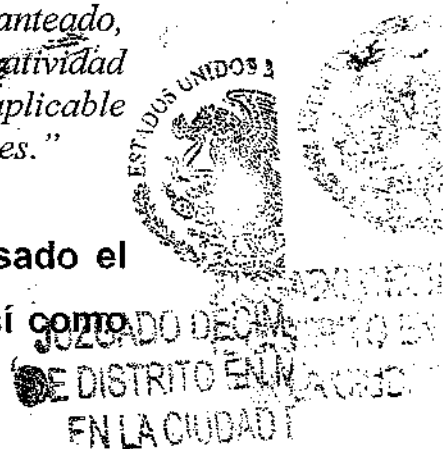
ECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles."

Notifíquese por medio de lista al tercero interesado el auto de cuatro de diciembre del presente año, así como el presente proveído.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Emmanuel Castellanos Rosas**, quien autoriza. Doy fe.

RG





21c 215

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL

11 DIC 2017

SE NOTIFICA A

partes y se notifica además
a tercero el auto de caducación.

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE

12 DIC 2017

CON FECHA

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A
QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD
CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL

LIC. MARIA NANCY DÍAZ NAVA.



ECIMOTERMINO
LEGADO EN
DEL PRIMER JUICIO



10 SEGUNDO
MATERIA 10 SEGUNDO
DE MATERIA CIVIL
MÉXICO

B+A

abogados

OFICINA DE CORRESPONDENCIA
C O H U N

67 889

219

216

AMPARO INDIRECTO:

2017 DIC -8 PM 8:59

QUEJOSO:

Rafael Amador

Técnico en Edición Administrativa

DIC 11 A 9

22141

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

EN LA CIUDAD DE MEXICO

[REDACTED] en mi carácter de Mandatario Judicial del Quejoso [REDACTED] personalidad que tengo debidamente acreditada, ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, vengo en tiempo y forma a desahogar la vista ordenada por su Señoría mediante auto de fecha 4 de diciembre del año en curso, respecto del oficio 21608 de la hoy responsable Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, manifestando al efecto la inconformidad de mi mandante con la resolución mediante la cual dicha responsable manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por esta H. Autoridad, toda vez que como se observa en la misma, se ratifica el auto recurrido y en consecuencia se repite el acto reclamado.

Así mismo, tomando en cuenta el estado que guardan los presentes autos, solicito se ordene a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se abstenga de ordenar a las Instituciones financieras que proporcionen la información confidencial del Quejoso al Juez de primera instancia, hasta en tanto no se resuelva en definitiva y se encuentre firme el presente juicio de amparo.

SEGUNDO. Por lo expuesto;

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado con la personalidad que tengo acreditada, desahogando en tiempo y forma la vista arriba mencionada, en los términos precisados.

SEGUNDO.- Ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se abstenga de ordenar a las Instituciones Financieras la entrega de la información confidencial del Quejoso, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio.

Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil diecisiete.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

220

209

21

**Amparo
indirecto**

En la Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia **22141**, relativo al juicio de amparo [REDACTED] **Conste.**

En la Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil diecisiete.

Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por [REDACTED] autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, por medio del cual, desahoga la vista ordenada en proveído de cuatro de diciembre del año en curso, y realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria, en atención a su contenido, resérvese de acordar lo conducente, hasta en tanto fenezca el plazo concedido a la parte tercera interesada, para que se imponga del contenido del oficio que remitió la autoridad responsable en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

SEGUNDO

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SEPTIMA

OCATA

NOVENA

DIECIMA

UNDICESIMA

DUODECIMA

DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

Notifíquese.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Emmanuel Castellanos Rosas**, quien autoriza. **Doy fe.**

SACS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo indirecto



EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
13 DIC 2017 SE NOTIFICA A

perles

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

[Signature]

CON FECHA

14 DIC 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL

[Signature]

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.



3 SEABUNCO
7 DE NAOY
1 DE NAOY

NOV 2017

SEGUNDO
TERIA CIVIL
MEXICO

22426

2017 DIC 14 A 9:00

EN LA CIUDAD DE MÉXICO



CIF
5/6

68942

222
219

07 DIC 13 7:16

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

COMI

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA.

Dirección General Contenciosa.

Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C".

INFORMACIÓN DE
CUENTAS.

Oficio No.

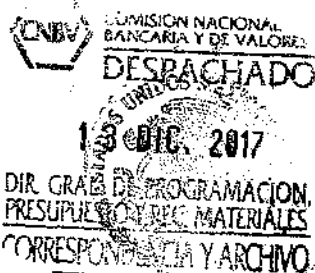
QUEJOSO:

JUICIO DE AMPARO:

CUADERNO PRINCIPAL.

ASUNTO: **COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES ATIENDE REQUERIMIENTO.**

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017.



C. JUEZ DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

LIC. MANUEL E. VÁSQUEZ RAFAEL en mi carácter de delegado de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, respetuosamente comparezco y expongo:

En atención al acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2017, me permito informar a su Señoría que los efectos de la sentencia de fecha 25 de julio de 2017 y confirmada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito son los siguientes:

- La Sexta Sala Civil del tribunal de Justicia de la Ciudad de México deje sin efectos la resolución de fecha [REDACTED]
- El Juez Decimoquinto de lo Civil en la Ciudad de México expida oficio mediante el cual solicita rinda informe, con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del señor [REDACTED]
- Esta Comisión de cumplimiento al acuerdo emitido por el Juez Decimoquinto de lo Civil en la Ciudad de México.



En este sentido, se informa que esta Comisión se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para informar el cumplimiento a la sentencia, toda vez que mediante acuerdo que se atiende Su Señoría remitió copia certificada de la sentencia dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por el cual se deje sin efectos la resolución de fecha [REDACTED] y no así el oficio mediante el cual el Juez Decimoquinto de lo Civil en la Ciudad de México del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México expida oficio mediante el cual solicite rinda informe, con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del señor S [REDACTED]

En este sentido, se informa que para que esta autoridad se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada rindiendo informe con copia certificada de los estados de cuenta del quejoso, es preciso contar con el Registro Federal de Contribuyente, tal como se hizo del conocimiento al Juez Decimoquinto de lo Civil en la Ciudad de México del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mediante oficio número [REDACTED] por el cual el Director General Adjunta de Atención a Autoridades "B" de esta Comisión, dio contestación al oficio número [REDACTED] Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes.

Por lo antes expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito:

PRIMERO. - Tener a la suscrita con el carácter que ostento, desahogando en tiempo y forma el requerimiento que nos ocupa en el juicio de amparo número [REDACTED] promovido por [REDACTED]

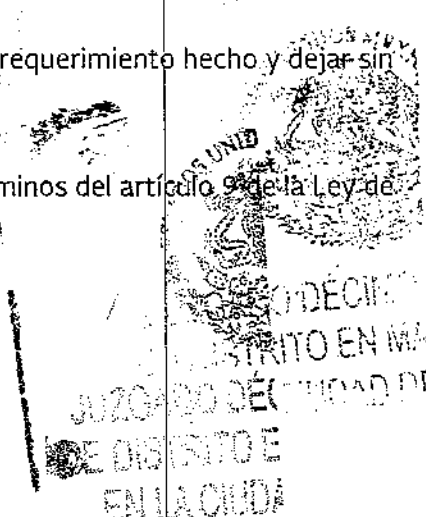
SEGUNDO. - Se solicita tener por desahogado en tiempo y forma el requerimiento hecho y dejar sin efectos el apercibimiento decretado.

Delegado de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos del artículo 94 de la Ley de Amparo vigente, firma.

ATENTAMENTE.


LIC. MANUEL E. VÁSQUEZ RAFAEL

CYHR





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 223

220

En la Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 22426, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta en que el Delegado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria, en atención a su contenido, resérvese de acordar lo conducente, hasta en tanto fenezca el plazo concedido a la parte tercera interesada, para que se imponga del contenido del oficio que remitió la autoridad responsable en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

Notifíquese.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
MÉXICO
JIMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D DE MÉXICO

Lo proveyó y firma Francisco Peñaloza Heras, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria Angelica Flores Jáuregui, quien autoriza. Doy fe.

rg

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL

SE NOTIFICA A

18 DIC 2017
DOY FE


LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

CON FECHA

19 DIC 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A
QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD
CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL



LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

JUZGADO EN
DE DISTRICTO
E



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CENTRAL 107

224

221

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE REMITEN COPIA

Código

No Oficio

Autoridad

Zon



201700554153 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z
VALORES.



OFICIALÍA DE PARTES

Con anexo(s)

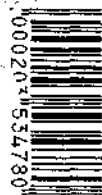
ID003095

08/12/2017 12:53



201700554153

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 17

225

222

En la Ciudad de México, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, la Secretaria **CERTIFICA:** que el término de tres días concedido a las partes en proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho convinieran respecto el cumplimiento dado por las autoridades responsables, ha transcurrido en su totalidad; para la parte quejosa [REDACTED], del seis al ocho del presente mes y año en curso, toda vez que se le notificó personalmente el cinco de diciembre de este año, surtiendo sus efectos el seis siguiente; y para la parte tercero interesado [REDACTED] transcurrió del **trece al quince del mes y año que transcurre**, toda vez que se le notificó el once de diciembre de dos mil diecisiete, surtiendo sus efectos el doce siguiente. **Doy fe.**

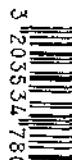
En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos, relativo al juicio de amparo [REDACTED] **Conste.**

Ciudad de México, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.



Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que por oficio presentado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, firmado por el **Presidente Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México** informó el cumplimiento dado al fallo protector remitiendo copia certificada de la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dándose vista mediante acuerdo de **cuatro de diciembre de dos mil diecisiete**, a las partes, para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre la observancia dada a la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cita.

Para lo cual, se toma en cuenta que el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional la cual fue terminada de engrosar el veinticinco de julio del presente año,



en la que se concedió el amparo y protección a la parte quejosa [REDACTED] misma que fue confirmada por el **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito**, mediante ejecutoria de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la revisión [REDACTED]

La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes:

- *“La sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca [REDACTED]”*

- *En su lugar emita otra, en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la litis planteada en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, propuesto a su potestad, esencialmente, por lo que hace, por una parte, a los planteamientos referentes a que se vulneraron los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), relativos al principio pro persona, y por otra, a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).*

Al haberse declarado fundados los conceptos de violación en estudio, dirigidos a demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, este Juzgado de Distrito ya no entra al estudio de los demás





conceptos de violación planteados por el quejoso, al resultar innecesario su análisis.¹

La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de esta primera, tiene que resolverse igualmente por lo que toca a las ejecutoras."

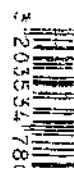
En auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 211), se tuvo al Juez Décimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informando que se adhería al cumplimiento que diera la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (fojas 187 y 188).

Mediante oficio registrado con el número de folio 21608, el Presidente Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que en resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la diversa de diecisiete de enero del presente año, y en su lugar dictó otra en la que confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

De lo anterior, se colige que la sala responsable incumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que:

1.- La Sala responsable dictó una nueva resolución el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, sin que analizará los planteamientos referentes a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida

¹ Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia, de la Séptima Época, Tercera Sala, del Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 107, página: 85, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS"...



Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), específicamente el artículo 41, el cual dispone:

"Artículo 41. En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, **en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal**, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo."

En la ejecutoria se dijo en cuanto a dicho precepto:

"Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que "en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas." Mientras que el propio artículo 41 estipula que **"en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."**



JUZGADO DÉCIMO
DE DISTRITO EN
LA CIUDAD



En consecuencia, debe declararse por **NO CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, **requiérase a la autoridad responsable, Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, para que en el término de **TRES DÍAS**, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dicte una nueva sentencia en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en la que **deberá tomar en cuenta tal y como se indicó dentro de la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en ningún caso el monto por indemnización exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad y con plenitud de jurisdicción resuelva el recurso de apelación sometido a su potestad.**

Apercibida que en caso de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a [REDACTED]

[REDACTED], lo anterior, tomando como valor la unidad de medida y actualización de [REDACTED] ([REDACTED])

[REDACTED] publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, como está previsto en el precepto 237, fracción I, del mismo ordenamiento, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

123, y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciéndole de su conocimiento que en caso de no manifestar nada al respecto dentro del plazo señalado, con apoyo en el ordinal 193 de la ley reglamentaria se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Ahora bien, toda vez que en autos de doce y quince de los cursantes, se reservó de acordar lo conducente respecto del escrito del quejoso y del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta en tanto, feneciera el término concedido al tercero interesado, y como dicho plazo ya aconteció, se levanta la reserva, y en atención a su contenido del escrito y oficio de las partes, dígame que se estén a lo acordado en párrafos anteriores.

Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.

Lo proveyó y firma Emmanuel Castellanos Rosas, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial, según consta en el oficio número CCJ/ST/6333/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria Angélica Flores Jauregui, quien autoriza. Doy fe.

RG

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] se giraron los oficios a las autoridades correspondientes, notificando el auto que antecede. Conste



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 167

228

225

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 22 DIC 2017 SE NOTIFICA A

Remigio pavez

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE
LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

CON

26 DIC 2017

FECHA

SURTIÓ

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

2035532780



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

17

229
226

2018 DFE - 8 AG 2 10

330



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEXTA SALA CIVIL

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE REQUIERE CUMPLIMIENTO.

Código	No Oficio	Autoridad	Zon
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL	S/Z
		SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE	
		MÉXICO.	
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y	S/Z
		VALORES.	
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z	
		CIUDAD DE MÉXICO.	

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



534780



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

230 18
227/157

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

8-1-18
4.00

FECHA: VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE REQUIERE CUMPLIMIENTO

Código	No Oficio	Autoridad	Zon
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	S/Z
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y VALORES.	S/Z
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	S/Z

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

231

228

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE REQUIERE CUMPLIMIENTO.

Código	No Oficio	Autoridad	Zon
		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	S/Z
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y VALORES.	S/Z
		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	S/Z

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALÍA DE PARTES

Sin anexo(s)

ID003095

09/01/2018 12:51



201800013944





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

2018 ENE 12 A 9 00

643
c/m legajo
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

OF. 43

SEXTA SALA CIVIL
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
AMPARO: [REDACTED]
TOCA: [REDACTED]

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MEXICO.
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en el Toca [REDACTED]
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por [REDACTED]
[REDACTED] en contra de [REDACTED] remito a Usted
la copia certificada del toca antes mencionado en VEINTICINCO FOJAS
ÚTILES, de la sentencia dictada en cumplimiento a su ejecutoria de fecha
veinticinco de julio y auto de veintisiete de diciembre del dos mil diecisiete, para
los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ENERO DE 2018.
EL C. MAGISTRADO DE LA SEXTA SALA CIVIL

DR. FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ.

SEXTA SALA CIVIL



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

PROYECTO NUM. 4

Ciudad de México, a diez de enero
de dos mil dieciocho.

VISTOS, los autos del toca [REDACTED] para dictar nueva sentencia en cumplimiento de la ejecutoria emitida el veinticinco de julio de dos mil diecisiete y auto de veintiuno de diciembre del mismo año, por el C. Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED] [REDACTED] por su propio derecho, contra el acto que reclama de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se hizo consistir en la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil diecisiete, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por [REDACTED] en contra de [REDACTED];

RESULTANDO:

1.- Que con fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis, el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil de esta Ciudad, dictó auto que a la letra dice:

"Dada nueva cuenta con los presentes autos y visto que ambas partes han ofrecido pruebas, con fundamento en



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

234

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: Se señala para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Se admiten todas las pruebas ofrecidas por ambas partes. En preparación de las pruebas confesionales admitidas, a cargo del demandado [REDACTED] y a cargo del actor [REDACTED] cíteseles personalmente por lo menos con DOS DÍAS de anticipación al señalado, para que comparezcan a absolver posiciones de manera personal y no por conducto de apoderado legal, apercibidos que en caso de no comparecer sin justa causa, serán declarados confesos de todas y cada una de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. En preparación de las pruebas testimoniales ofrecida por la parte demandada; por lo que corresponde a la marcada con el número 2, de su escrito ofertorio de pruebas, dígasele que dentro del término de TRES DÍAS, deberá reducir a dos el número de sus testigos, apercibido que de no hacerlo, el Suscrito lo hará en su rebeldía; por lo que corresponde a la marcada con el número 3, prevéngasele al oferente de la prueba, para que el día y hora señalados presente a sus testigos los CC. [REDACTED] y [REDACTED] apercibido que de no hacerlo, se declarará desierta dicha probanza por falta de interés jurídico del oferente de la prueba. Por lo que respecta a la prueba marcada con el número 12, como lo solicita gírese oficio a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a fin de que rinda el informe con los puntos que indica el oferente de la prueba, así mismo, remita copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarias a nombre del C. [REDACTED], de los últimos tres años. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el actor, y marcadas con los números 14, 15 y 16, respecto a las periciales en materias de PSICOLOGIA, INFORMÁTICA, y TRABAJO SOCIAL, con fundamento en el artículo 348

RECORDED
INDEXED
NOV 20 1994
SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



del Código de Procedimientos Civiles, se da vista a la parte demandada, para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste sobre la pertinencia de tales pruebas, y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su parte debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya propuesto el oferente, así como indicar su cédula profesional o documento que acredite su Calidad de Perito, requisito sin el cual no se tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere el primer párrafo de la fracción VI del artículo 347 del mismo ordenamiento legal antes citado. Notifíquese."

2.- Con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra del auto de veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis, citado en el resultando que antecede, y previa substanciación del recurso, la Sala dictó resolución el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, concluyendo, con los siguientes puntos resolutivos:

- - -"PRIMERO.- Se confirma el auto recurrido
- SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas.
- TERCERO.- En cumplimiento al Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de este Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace saber a las partes que una vez concluido el juicio, este Toca se destruirá, por lo que en su caso y de ser procedente deberán recoger los documentos exhibidos en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la notificación de este proveído. CUARTO.- Notifíquese, con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento del juez de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CINCO
LEGADO
DEL P
SEGUNDO
O SEGUNDO CIERA CIVIL
JATERIA CIVIL MEXICO
JE MEXICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

3. Inconforme con dicha resolución, [REDACTED]

[REDACTED] por su propio derecho, promovió juicio de garantías, lo que originó que el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, emitiera ejecutoria el veinticinco de julio del dos mil diecisiete, en el cuaderno de amparo [REDACTED] concluyendo con el siguiente punto resolutivo:

- - - "ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a [REDACTED], contra los actos que reclama de la Sexta Sala Civil y del Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de la última parte considerativa de este fallo."

4.- Por auto dictado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el amparo número [REDACTED], declaró no cumplida la sentencia de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo.

Por auto dictado el ocho de enero del año en curso, se ordenó pasaran los autos al Magistrado en turno para que dictara nueva resolución, la que se pronuncia de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- En cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

Materia Civil en la Ciudad de México, en el cuaderno de
amparo [REDACTED] que en su parte conducente señala:

- - - " CUARTO argumento de queja, se afirma que la Sala responsable apoya su decisión de confirmar la admisión de la prueba, sin que se encuentre contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal, por lo que su decisión carece de fundamentación y motivación. - - - - -

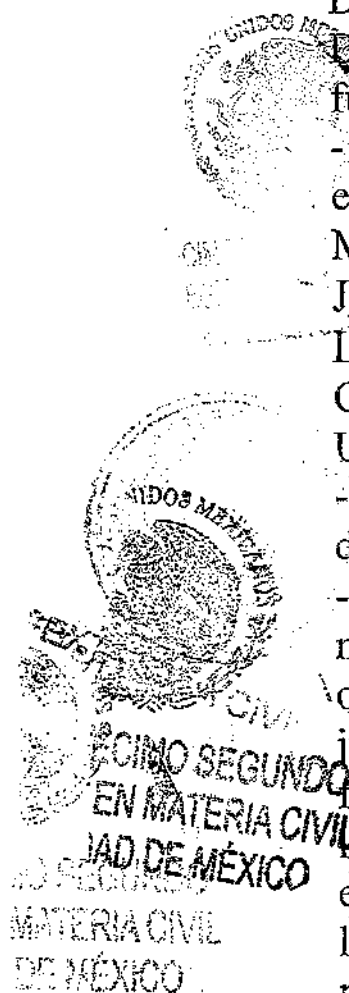
- - - -En apoyo a sus consideraciones, el quejoso invoca el criterio de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE" - - - -

- - - Son sustancialmente fundados los motivos de disenso, sintetizados en párrafos arriba. - - - - -

- - - En principio, es menester señalar que el concepto natural de litis se traduce en pleito, controversia judicial o actuación en el juicio, que trasladado al ámbito jurisdiccional debe entenderse como el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se estima necesario apuntar, que es cuando la contestación a la demanda o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juzgador; situación similar acontece cuando se trata de la interposición de cualquier medio de impugnación, supuesto en el cual, la litis se constituye con los agravios expresados en el recurso respectivo, lo cual no puede ser desconocido por el órgano revisor. - - - - -

- - - En términos generales, integrada la litis las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. - - - - -

- - - De manera que el órgano resolutor al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no puede ocuparse de su fallo de puntos o cuestiones no





comprendidas en la litis. - - - - -

- - - Es así que, el principio de congruencia consiste en que las resoluciones correspondientes no contengan conclusiones o afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna) e impone a los juzgadores el deber de resolver la litis (conflicto) tal y como quedó integrada con los planteamientos expuestos en la demanda y en su respectiva contestación, así como con los agravios propuestos (congruencia externa). - - - - -

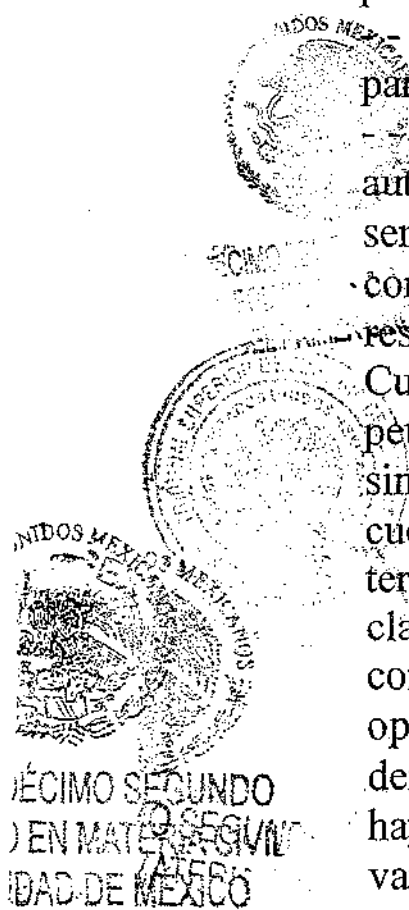
- El artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México establece lo siguiente: - - - - -

--- **"Artículo 81.-** Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." - - - - -

- - - Del anterior precepto legal, se obtiene, en lo que interesa, que las determinaciones que emita la autoridad jurisdiccional deben de ser, claras, precisas y congruentes con las constancias de autos. - - - - -

- - - De ahí que, las sentencias que se dicten en el recurso de apelación también deberán satisfacer el principio de congruencia interna y externa, porque la facultad del órgano de apelación de resolver el recurso que las partes interpongan implica, sin duda alguna, examinar los agravios que expongan, sin emitir en el fallo consideraciones contradictorias. - - - - -

- - - Es patente que la litis en esa instancia no puede ser modificada por las partes después de que ha sido fijada





"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

con el escrito de agravios y la sentencia apelada, lo que revela la obligación de la autoridad revisora para ceñir su actuación a lo argumentado en vía de agravios. - - - - -

- - - En esa tesitura, la sala resolutora atendiendo al principio de congruencia externa debe resolver lo conducente respecto de la resolución recurrida, análisis sin el cual no puede decirse que se cumplió con el principio de congruencia, por lo que debe de ocuparse de los planteamientos que formula la disconforme relativos al fallo apelado. - - - - -

- - Con el objeto de verificar si en el caso, las sala responsable violó el principio de congruencia externa, es conveniente señalar que el quejoso, en el recurso de apelación, esgrimió toralmente los agravios, que se sintetizan a continuación: - - - - -

- - - A) Que se violan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José) -principio pro persona-, en relación con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, interpretado a contrario sensu, al admitirse ilegalmente la prueba marcada con el número doce, señalada en el escrito de ofrecimiento de pruebas de la actora. - - - - -

- - - B) Que se contraviene la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por que además de ser incongruente carece de fundamentación y motivación, con lo cual se dejó en completo estado de indefensión a la parte apelante. - - - - -

- - - En el fallo reclamado, que resolvió el recurso de apelación, la sala responsable determinó esencialmente lo siguiente: - - - - -

- Estudio conjuntamente los dos agravios propuestos por la parte demandada, los cuales declaró infundados. - - - - -
- Para lo cual, determinó por lo que respecta a la supuesta violación a los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ECONOMIA
LEYES
EXCATE
SEGUNDO
INTER
RECURSO
CIVIL
MEXICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

240

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

Estados Unidos Mexicanos que la resolutora se encontraba impedida para hacer consideraciones sobre el particular, al estar reservado su análisis y resolución a las autoridades federales. -----

- Así como, señaló que el auto recurrido se encontraba debidamente fundado y motivada, de conformidad con lo dispuesto 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles para Ciudad de México, pues el recurso de apelación interpuesto por el demandado, tenía fundamento en el primer artículo invocado (sic), por que se argumento que la prueba consistente en el informe que se ordeno solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a la existencia de cuentas a nombre del hoy apelante, las cuales están a su nombre y remitan la copias certificadas de tales cuentas, lo cual resultaba violatorio del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. -----
- Además preciso que el a quo no se fundó en dicho precepto legal (sic) para admitir la prueba señalada con antelación, siendo que el juicio de origen de tramitó en la vía ordinaria civil y los informes se están solicitando en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial que conoce del presente juicio, en relación a una persona que tiene el carácter de demandada en el juicio de que se trata, además, que no existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata, razón por la que confirmó el auto apelado. -----

La confrontación de los razonamientos que sostiene el acto reclamado, con los anteriores argumentos esgrimidos por el quejoso, resulta claro que la Sala responsable en contravención a lo establecido en el invocado artículo 81, no abordó totalmente el examen de los planteamientos propuestos en el recurso de apelación.





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

- - - En efecto, la Sala civil soslayó pronunciarse en sus términos respecto de la cuestión efectivamente planteada en el recurso de apelación, pues en lugar de resolver lo conducente en relación con la violación a los derechos fundamentales del quejoso, contenidos en el derecho doméstico y en la convención extranjera a que alude, determinó que se encontraba impedida para pronunciarse sobre el tema propuesto, aludiendo a que era cuestión propia de las facultades de las autoridades federales, que se traduce en una atribución reservada exclusivamente a temas propias de constitucionalidad, mas no de control de convencionalidad. - - - - -

- - - Es así, que la cuestión omitida por la autoridad responsable debía ser abordada desde la óptica del principio pro persona, que surge con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, que modificó, entre otros, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguientes: - - - - -

- - - Artículo 1°. [...] - - - - -

- - - En dicho precepto legal se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. - - - - -

COMO SEGUNDO

EN MATERIA CIVIL

DE MEXICO

DE MEXICO

DE MEXICO

- - - Con base en ese precepto, **cualquier juez nacional**, está facultado para emitir pronunciamiento en respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. - - - - -

- - - Por tanto, en el sistema jurídico mexicano actual, los **jueces nacionales**, tanto **federales** como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. -----

- - - Con los anteriores razonamientos queda demostrado que la Sala sentenciadora tenía la obligación legal de pronunciarse respecto de la cuestión propuesta por el quejoso relativa al respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales y no limitarse a señalar que se encontraba impedida para hacerlo, pues evidentemente es un tema que debe ser resuelto por cualquier órgano jurisdiccional del país. - - - - -

- - - Asimismo, está evidenciado que no existió pronunciamiento alguno, en relacion con que se vulneró la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en la Ciudad de México. - - - - -

- - - En efecto, la Sala Civil se limitó a estudiar conjuntamente los agravios propuestos por el apelante, determinando su imposibilidad legal para pronunciarse respecto de temas, que estimó reservados a las autoridades federales y declaró legal lo determinado en el auto recurrido, por no existir prohibición para la admisión de la prueba en comento, sin que se hubiere pronunciado respecto a la cuestión precisada en párrafos arriba, siendo que se encuentra obligada a dar respuesta fundada al argumento en comento, contenidos en el pliego de agravios de dicho medio de impugnación. - - -

- - - Cabe destacar, que los artículos 39 y 41 contenidos en el capítulo V de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), disponen: - - - - -

--- Artículo 39. [....] -----

--- Artículo 41. [....] ---

- - - Los citados preceptos contemplan distintas medidas



UNO SEGUNDA
MATERIA O
DE MEXICO
CIVIL
EXICO



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

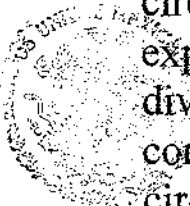
para reparar el daño causado por el ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, que consisten en la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado o, en su defecto a través de una indemnización. - - - - -

- - - El propio artículo 41 establece una serie de criterios que deberán ser tomados cuenta al momento de fijar la indemnización, los cuales permiten precisamente graduar la responsabilidad de la persona en función de las circunstancias concretas en las que se realizó la expresión. Esos criterios incluyen "la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso." - - - - -

- - - En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 41, establece la posibilidad de atenuar la medida reparatoria al permitir al juez disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo" en los casos en que los sujetos afectados por las expresiones sean servidores públicos. Y por otro lado, el artículo 43 hace posible agravar el monto de la reparación del caso de reincidencia durante el plazo de un año, al dar la posibilidad al juez de "imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización." - - - - -

- - - Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que "en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas. "Mientras que el propio artículo 41 estipula que "en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." - - - - -

- - - Por tanto la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Visa Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece el monto o límite de la indemnización por daños al patrimonio moral, la cual el juez determinará según lo previsto en el artículo 41 referido (tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el



SECRETARÍA DE JUSTICIA
LEGISLACIÓN
DEL PRIMER PUNTO



SEGUNDO
MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, no pudiendo en ningún caso el monto por indemnización exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad). - - - - -

- - - Consecuentemente, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación en estudio, pues la resolución reclamada es violatoria de lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales en relación con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos siguientes. - - - - -

La sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca [REDACTED] - - - - -

- - - En su lugar emita otra en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la litis planteada en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, propuesto a su potestad, esencialmente por lo que hace, por una parte a los planteamientos referentes a que se vulneren los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1,14,16,y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3,8,9,11,24 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto San José) , relativos al principio pro persona y por otra , a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). - - - - -

- - - Al haberse declarado fundados los conceptos de violación en estudio dirigidos a demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, este Juzgado de Distrito ya no entra al estudio de los demás conceptos de violación planteados por el quejoso, al resultar innecesario su análisis." - - - - -

- - - La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México a la Comisión Nacional



DECIMO TERCE
LEGIADO EN
DEL PRIMER



SEGUNDO
INTERVATORIA CIVIL
DE MEXICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

Bancaria y de Valores porque, debido a su naturaleza respecto de esta primera, tiene que resolverse igualmente por lo que toca a las ejecutoras. -----

Por auto de veintiuno de enero del año en curso, dictado por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el cuaderno de amparo [REDACTED] que en su parte conducente señala:

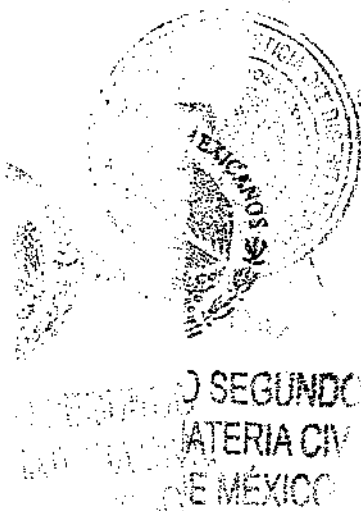
--- " De lo anterior, se colige que la sala responsable incumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que: ---
--- 1.- La Sala responsable dictó una nueva resolución el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, sin que analizara los planteamientos referentes a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), específicamente el artículo -----

"Artículo 41.- En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo."

--- En la ejecutoria se dijo en cuanto a dicho precepto: ---

--- "Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que "en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas." Mientras que el





14243
246
315

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

propio artículo 41 estipula que "en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal." - - - -

- - - En consecuencia, debe declararse por NO CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dicte una nueva sentencia en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en la que deberá tomar en cuenta tal y como se indicó dentro de la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en ningún caso el monto por indemnización exceder (sic) de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad y con plenitud de jurisdicción resuelva el recurso de apelación sometido a su potestad. - - - -

- - - Apercibida que en caso de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro de término concedido, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización **equivalente a**

(**[REDACTED]**), lo anterior, tomando como valor la unidad de medida y actualización de (**[REDACTED]** 04/100 moneda nacional), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, como está previsto en el precepto 237, fracción I, del mismo ordenamiento, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de



SEC. 100

DE MÉXICO



dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **haciéndole de su conocimiento que en caso de no manifestar nada al respecto dentro del plazo señalado, con apoyo en el ordinal 193 de la ley reglamentaria se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.** -----

--- Ahora bien, toda vez que en autos de doce y quince de los cursantes, se reservó de acordar lo conducente respecto del escrito del quejoso y del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta en tanto, feneciera el término concedido al tercero interesado, y como dicho plazo ya aconteció, se levanta la reserva, y en atención a su contenido del escrito y oficio de las partes, dígame que se estén a lo acordado en párrafos anteriores. -----

II.- En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, esta Sala deja sin efectos la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, y se aboca de acuerdo con los lineamientos señalados en la ejecutoria de que se trata a emitir otra sentencia, en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plena jurisdicción resuelva la Litis planteada en el recurso de apelación interpuesta por el demandado, el cual se hace en los siguientes términos:

MO SEGURO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

RECURSO DE APELACION
MATERIA CIVIL
DE MEXICO



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

Los dos agravios expresados por el demandado, se estudian en conjunto por su relación, y por lo que hace a los planteamientos referentes a que se vulneran los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José relativo al principio *pro persona*, y por otra, a que se infringió la ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

En primer lugar, debe señalarse que el señor, [REDACTED], en su carácter de mandatario judicial del señor [REDACTED] en el primer agravio expresado, en el escrito de cinco de octubre de dos mil dieciséis, señaló textualmente que: *"El auto impugnado, viola en perjuicio del suscrito los derechos fundamentales consagrados a mi favor, en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito a contrario sensu, ya que el A quo, indebida e*

RECEIVED
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FALLO
10 SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

308

ilegalmente admite y ordena dar trámite a la "Prueba" documental marcada con el número 12 del escrito de ofrecimiento de pruebas de mi contraria, consistente en el informe y copia certificada que rinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo CNBV, donde diga: a) Si existen cuentas bancarias a nombre de mi mandante [REDACTED] b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre de mi mandante [REDACTED] y c), Remita a éste juzgado copia certificada de los estado de cuenta de las cuentas bancarias a nombre de mi mandante [REDACTED] de los últimos tres años"

A continuación el hoy apelante señaló que la admisión de dicha prueba, resultaba infundada e improcedente, toda vez que se trata de información confidencial del suscrito protegida por ley, sin que exista la excepción a que hace referencia el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, señalando después de transcribir dicho precepto, que en el caso concreto el presente juicio es ordinario civil no un juicio ejecutivo donde existe embargo o providencia alguna, ni existe providencia precautoria justificada y/o concedida para que se violenten sus derechos fundamentales, ordenando se exhiban y ventilen los datos de las cuentas bancarias de mi mandante en copias certificadas por los últimos tres años, tal como si el mismo hubiese sido condenado y nos encontráramos en la ejecución de



SEGUNDO
JURADO CIVIL
MEXICO

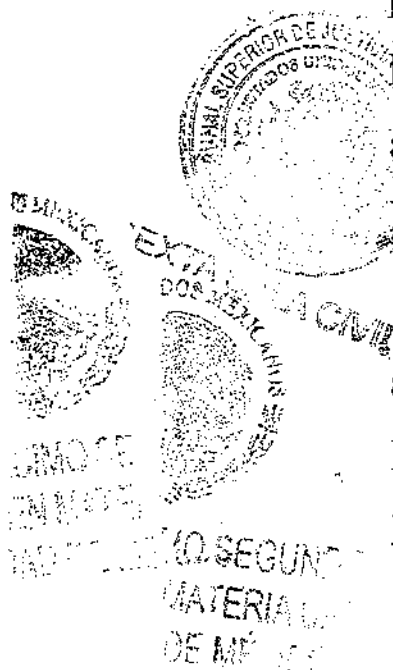


"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

sentencia y que por dicha admisión y trámite resulta no sólo ilegal sino absurda, ya que dicha información puede constituir cualquier cosa, pero jamás constituir una prueba, y mucho menos idónea para justificar el supuesto daño moral, que su contraria alega haber sufrido con las publicaciones materia del presente juicio.

Sobre el particular debe señalarse que dicho agravio resulta insuficiente, toda vez que el hoy apelante no señala en forma alguna porque se violan en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 3, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).

Por lo que se refiere a la supuesta violación de los artículos 81, 402 y 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles, así como del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, por qué considera que el A quo indebida e ilegalmente admitió la prueba en los términos precisados con anterioridad, dicho motivo de agravio resulta infundado, toda vez que el mencionado precepto legal, si bien establece que la información y documentación relativa a las operaciones y servicios, a que se refiere el artículo 46 de la propia ley en cita, tendrá carácter confidencial y que en ningún caso podrán dar noticia o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción "XV" del citado artículo 46, sino precisando





"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

que dicha información si puede proporcionarse, al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitante, comisario, comitente, o mandante, a sus representantes legales, o a quienes tenga otorgado el poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Por otra parte, como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, dicho precepto establece que "las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio, en el que el titular o, en su caso, el fideicomitante, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante, o mandatario sea parte o acusado."

Por lo que se refiere a que el presente juicio es ordinario civil, no un juicio ejecutivo donde exista embargo o providencia alguna, y que en el presente juicio, no existe providencia precautoria justificada y/o concedida para que se violenten los derechos fundamentales de su mandante ordenando se exhiban y ventilen los datos de las cuentas bancarias en copias certificadas por los últimos tres años, tal como si el mismo se hubiese condenado y se encontrara en ejecución de sentencia, debe señalarse, que si bien en cierto que el juicio no es ejecutivo mercantil, eso no impide que el Juez admita una prueba que estima

SEGUNDO
TERMINAL
MEXICO



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

necesaria para buscar la verdad de los hechos controvertidos y tener base para dictar una sentencia conforme a derecho, en la inteligencia de que por "providencia" debe entenderse, la resolución judicial sobre cuestiones de trámite o peticiones sencillas efectuadas por el juzgador durante el procedimiento del juicio.

En la inteligencia de que el precepto 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito no se refiere específicamente a providencia precautoria, a embargo o algún sinónimo parecido, y mucho menos a que necesaria y forzosamente exista una condena en contra del demandado.

En consecuencia de lo anterior, es que no se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito.

Sin embargo, por lo que hace a que se infringió la ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, específicamente el artículo 41, se estima fundado, toda vez que de conformidad con lo considerado por la autoridad federal, el artículo 41 de la ley en cita dispone:

"Artículo 41.- En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo."

En esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. El artículo 40, de la ley en cita, establece que *"en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas."* Mientras que el propio artículo 41 estipula que *"en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal."*

Atento a lo anterior, y dado que si bien, en principio el juzgador puede valerse de cualquier documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que la prueba no esté prohibida por la ley ni sea contraria a la moral, y que la prueba **debe ser idónea** para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. Situación que no acontece en el presente caso, toda vez que el informe solicitado por la



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

actora, relativo al informe que rindiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de las cuentas y movimientos del demandado en los últimos tres años, no tiene como resultado el conocer la verdad sobre la materia de la litis, dado que en caso de dictar la condena solicitada por el actor, **de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en ningún caso el monto por indemnización podrá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad.**

Atento a lo anterior, la admisión de dicha prueba resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles, que prevé que en ningún caso el juez admitirá pruebas notoriamente inverosímiles, y en el presente caso, el informe multicitado, no tiende a acreditar los hechos controvertidos, de conformidad con lo considerado con anterioridad, por lo que procede modificar el auto recurrido para quedar en los términos del tercer resolutivo del presente fallo.

III.- Siendo parcialmente fundados los agravios expresados por el demandado, procede modificar el auto recurrido, sin hacer especial condena en costas, por no



"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

encontrarse el presente asunto en lo establecido en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles.

Por lo expuesto y fundado se resuelve.

PRIMERO.- Se deja insubsistente la sentencia dictada por esta Sala el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el toca en que se actúa.

SEGUNDO.- Ha procedido el recurso de apelación hecho valer por la parte demandada.

TERCERO.- Se modifica el auto recurrido para quedar como sigue: "Dada nueva cuenta con los presentes autos y visto que ambas partes han ofrecido pruebas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: Se señala para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Se admiten todas las pruebas ofrecidas por ambas partes, a excepción de la marcada con el número 12, consistente en la petición de que se gire oficio a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, para que informe que cuentas se encuentran a nombre del C. [REDACTED], y remita copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarias de dicha persona de los últimos tres años, toda vez que con el mismo se trata de acreditar hechos notoriamente inverosímiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en ningún caso el monto por indemnización podrá

03 MEXICANOS
MATERIA CIVIL
DE MEXICO
PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2017
SEGUNDO



exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad. En preparación de las pruebas confesionales admitidas, a cargo del demandado [REDACTED], y a cargo del actor [REDACTED],

cíteseles personalmente por lo menos con DOS DÍAS de anticipación al señalado, para que comparezcan a absolver posiciones de manera personal y no por conducto de apoderado legal, apercibidos que en caso de no comparecer sin justa causa, serán declarados confesos de todas y cada una de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. En preparación de las pruebas testimoniales ofrecida por la parte demandada; por lo que corresponde a la marcada con el número 2, de su escrito ofertorio de pruebas, dígamele que dentro del término de TRES DÍAS, deberá reducir a dos el número de sus testigos, apercibido que de no hacerlo, el Suscrito lo hará en su rebeldía; por lo que corresponde a la marcada con el número 3, prevengasele al oferente de la prueba, para que el día y hora señalados presente a sus testigos los CC. [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED], apercibido que de no hacerlo, se declarará desierta dicha probanza por falta de interés jurídico del oferente de la prueba. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el actor, y marcadas con los números 14, 15 y 16, respecto a las periciales en materias de PSICOLOGIA, INFORMÁTICA, y TRABAJO SOCIAL, con fundamento en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles, se da vista a la parte demandada, para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste sobre la pertinencia de tales pruebas, y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su parte debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya propuesto el oferente, así como indicar su cédula profesional o documento que acredite su Calidad de Perito, requisito sin el cual no se tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere el primer párrafo de la fracción VI del

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
BOB
PRIMERO SEGUNDO
V MATERIA CIVIL
O DE MÉXICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

"El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en Juicios Orales"

257
336

artículo 347 del mismo ordenamiento legal antes citado. Notifíquese."

CUARTO.- No se hace especial condena en costas.

QUINTO.- Notifíquese. Con testimonio de esta resolución comuníquese al C. Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cumplimiento dictado en el cuaderno de amparo [REDACTED] y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

A S I, lo resolvió y firma en forma unitaria el C. Magistrado FRANCISCO JOSE HUBER OLEA CONTRÓ, integrante de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 38, párrafo Segundo y 43, párrafo final de la Ley Orgánica de este Tribunal, ante el C. Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRIMER SEGURO
MATERIA CIVIL
SEGUNDO DE MÉXICO
ATP...
DE MÉXICO

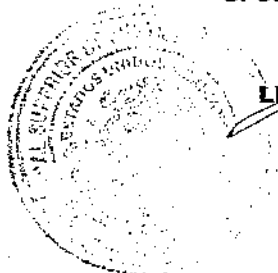
"EN EL BOLETÍN JUDICIAL No. 04 CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE 2018, SE HIZO LA PUBLICACIÓN DE LEY.- CONSTE.
EL 12 DE ENERO DE 2018, SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN ANTERIOR.- CONSTE."

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

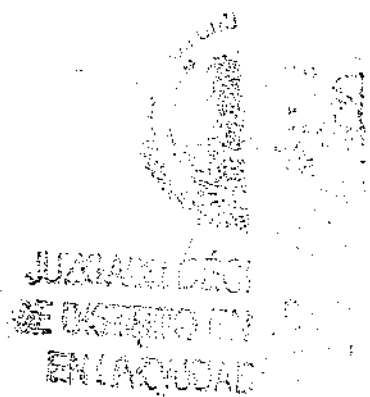
CERTIFICA

QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL EN VEINTICINCO -FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA ONCE DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO- DOY FE.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS



LIC. JUAN ULLOA CRUZ





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

337

255²⁵⁸

En la Ciudad de México, quince de enero de dos mil dieciocho, la Secretaria da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 643, relativo al juicio de amparo [REDACTED]. Conste.

Ciudad de México, quince de enero de dos mil dieciocho.

Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de la resolución de diez de enero de dos mil dieciocho.

DECIMO
LEG.
DEL

Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a las partes, con el contenido del oficio y anexo de cuenta para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído se imponga del contenido de la misma, apercibidos que en caso de ser omisa, este juzgado procederá a resolver de oficio el cumplimiento al fallo protector, con los elementos que obran en autos.

Notifíquese personalmente a las partes.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria Angélica Flores Jáuregui, quien autoriza. Doy fe.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO



En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del 16 ENE 2018, se
notifica a las partes la resolución que surge por medio de lista de acuerdos fijada
en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

El 17 ENE 2018, surtió efectos legales la notificación a que se
refiere la razón que antecede, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la
Ley de Amparo. Doy fe. El (a) Actuario (a) Judicial.

Lic. María Nancy Díaz Nava.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE PRIMERA CATEGORIA
DE PRIMERA CATEGORIA
EN LA CIUDAD



2018 ENE 17 14 7:00

DE LA JEFATURA DE INSTITUTO
DE ADMINISTRACIÓN
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONGELAMIENTO DE
CUENTAS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES.

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA.

Dirección General Contenciosa.

Dirección General Adjunta Jurídica de
Procedimientos "C".

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Oficio No

QUEJOSO:

JUICIO DE AMPARO:

CUADERNO PRINCIPAL.

ASUNTO: **COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y
DE VALORES ATIENDE REQUERIMIENTO.**

Ciudad de México, a 12 de enero de 2018.

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

12 ENE. 2018

DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y REC. MATERIALES
CORRESPONDENCIA

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. GABRIELA SÁNCHEZ GUZMAN, promoviendo como delegada de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, comparezco y expongo:

En cumplimiento al acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2017, me permito informar a su Señoría que esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para atender el requerimiento que nos ocupa, toda vez que no fue localizado oficio de la autoridad responsable ordenadora, mediante el cual informe el cumplimiento de la ejecutoria de mérito que por esta vía se atiende.

Por lo antes señalado, en el supuesto de que en los autos del expediente seguido ante ese Juzgado de Distrito sobre el oficio mediante el cual la autoridad ordenadora, haya dado cumplimiento a la sentencia, pido se sirva remitir copia certificada del mismo, a fin de retransmitirlo a las correspondientes instituciones financieras.

Por lo antes expuesto se solicita a su Señoría tener por desahogado en tiempo y forma el requerimiento formulado y dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

Por lo antes expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito:

PRIMERO. - Tener a la suscrita con el carácter que ostento, desahogando en tiempo y forma el requerimiento que nos ocupa en el juicio de amparo número [REDACTED] promovido por [REDACTED]

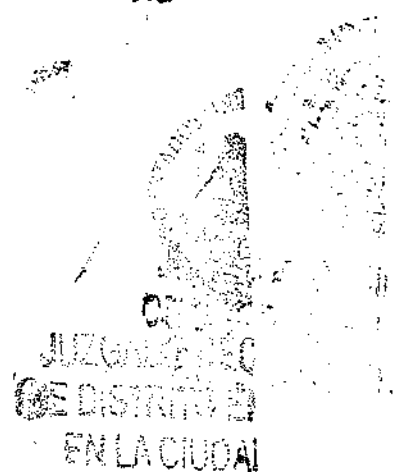
SEGUNDO. - Dejar sin efecto el apercibimiento decretado.

ATENTAMENTE

La Delegada de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos del Artículo 9 de la Ley de Amparo.

LIC. GABRIELA SANCHEZ GUZMAN

EGL





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

257

26

333

En la Ciudad de México, dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 763, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, dieciséis de enero de dos mil dieciocho.

Tengase por recibido el oficio de cuenta en que la Delegada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, manifiesta la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que no localizó en sus archivos oficio por el cual la autoridad responsable ordenadora, le informe el cumplimiento de la ejecutoria, ahora bien tal y como lo solicita la autoridad oficiante, remítasele copia autorizada de la sentencia que emitió la sala responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, para que este en aptitud dar cumplimiento a la misma, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Notifíquese por medio de oficio a la autoridad oficiante.

Lo proveyó y firma Francisco Peñaloza Heras, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario Axel Hernández Díaz, quien autoriza. Doy fe

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giró oficio 747 a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. Conste.



EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 17 ENE 2018 SE NOTIFICA A
Demas panto

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. 

CON FECHA 18 ENE 2018,
SURTIO TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL



LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.





PO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

261

340

**EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL EDUARDO
MOLINA NO. 2, COL. DEL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO
CARRANZA, DISTRITO FEDERAL.**

CITATORIO

AVIS O

TERCERAS INTERESADAS:

DOMICILIO:

Para la práctica de una diligencia Judicial de carácter personal, deberá usted acudir al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, ubicado en Eduardo Molina Número 2, entre Sidar y Roviroa, Colonia del Parque, delegación Venustiano Carranza, en el acceso 8, nivel plaza; con identificación oficial, dentro del término de **dos días hábiles**, contados a partir del día de hoy, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por la lista el auto dictado con fecha **quince de enero de dos mil dieciocho**, emitido en los autos del **juicio de amparo número** [redacted] **formado con motivo de la demanda promovida por** [redacted] **contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.** Dejo el presente citatorio, en virtud de no haber encontrado



JUZGADO DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
DISTRITO FEDERAL

no he podido hacer audio a la llamada [redacted]; cerciorado de que me encuentro en el domicilio [redacted] de la búsqueda por así habérmelo manifestado la persona que me atiende, quien dijo llamarse [redacted] que se ubica en la esquina en la que se depende el nombre de la [redacted] y por los siguientes medios: [redacted] calle, colonia, delegación y código postal, cuando de que el número [redacted] e intente comunicarme con el día presente, número con planta baja y cinco pisos, fecha de cristall, puerta de acceso de cristall

y requerida de su presencia me informa quien me atiende que la búsqueda no se encuentra en ese momento por [redacted] pero [redacted] que [redacted] ahí

[redacted] lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27, inciso [redacted] de la Ley de Amparo; la persona con la que atiende la presente hoy a las [redacted] del día [redacted] trece horas con cuarenta y siete minutos de dos mil dieciocho.

EL ACTUARIO JUDICIAL

Lic. José Nahúm Barrios García

no he podido
no vale [redacted]
y le agregado [redacted]

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DISTRITO FEDERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

259

FORMA B-1

262

311

AVISO JUDICIAL

CUADERNO PRINCIPAL
NÚMERO [REDACTED]

En la **Ciudad de México**, siendo las **trece horas con cuarenta y siete minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho**, el que suscribe **Licenciado José Nahúm Barrios García, Actuario Judicial** adscrito al **Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, en cumplimiento a lo ordenado en **auto de quince de enero de dos mil dieciocho**, emitido dentro del **juicio de amparo número** [REDACTED] me constituí en legal y debida forma en el domicilio ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] en busca de la parte **TERCERA INTERESADA** [REDACTED] **por propio derecho**; cerciorado de ser el domicilio señalado en autos para la práctica de la presente diligencia, toda vez que ello se desprende de sendas placas oficiales colocadas en la esquina de dicha calle, como por coincidir, **el número, calle, colonia, código postal y Delegación Política**, por lo que me constituí en el inmueble citado y lo describo en el aviso anexo, me constituí en el lugar toco la puerta sin que nadie atiende mi llamado, me constituí en el lobby del lugar y soy atendido por una persona ante quien me identifico con el nombramiento de Actuario judicial del juzgado antes mencionado, otorgado por el Titular del órgano jurisdiccional en mención y con la credencia para votar con clave de elector [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual obra una fotografía del suscrito, nombre completo y firma, con lo cual me acredita como actuario judicial, le indico el motivo de mi presencia, a quien le pregunto su nombre y le solicito se identifique, a lo que se niega, **por lo que describo su media filiación sexo masculino, complexión delgada, cabello corto color negro, tez morena, ojos color café oscuros, aproximadamente de cincuenta años de edad, de un metro setenta centímetros de estatura, sin cicatrices aparentes**, me indica que los autorizados del buscado ocupan el interior antes mencionado, no estar y no tener un horario establecido, por lo que dado las medidas de cercioramiento descritas, me constituí en el piso diez, toco la puerta sin que nadie atiende mi llamado, procedo a fijar aviso en la puerta del inmueble citado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso c de la Ley de Amparo cuya expedición fue publicada el día dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, para que la persona buscada y/o quien legalmente la represente con identificación oficial vigente **acuda al órgano jurisdiccional de mi adscripción a notificarse, apercibiéndole que en caso de no hacerlo dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de la presente diligencia, se le notificara por lista dicho proveído.- Doy Fe.**

El Actuario Judicial

José Nahúm Barrios García.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En diecinueve de enero de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón anterior, se procede a notificar por medio de lista el proveído de quince de enero de dos mil dieciocho; en términos del artículo 27 fracción I inciso c) de la Ley de Amparo.- Conste.- Doy Fe.- El Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Licenciado José Nahúm Barrios García.

En veintidós de enero de dos mil dieciocho, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refieren las razones que anteceden conforme a lo dispuesto en el artículo 31 fracción I de la Ley de Amparo.- Conste.- Doy Fe.- El Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Licenciado Jose Nahum Barrios Garcia.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL EDUARDO
MOLINA NO. 2, COL. DEL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO
CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

CITATORIO

QUEJOSO: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

Para la práctica de una diligencia Judicial de carácter personal, deberá usted acudir al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, ubicado en Eduardo Molina Número 2, entre Sidar y Rovirosa, Colonia del Parque, delegación Venustiano Carranza, en el acceso 8, nivel plaza; con identificación oficial, dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día de hoy, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por la lista el auto dictado con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, emitido en los autos del juicio de amparo número P-[REDACTED] formado con motivo de la demanda promovida por [REDACTED] por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dejo el presente citatorio, en virtud de no haber encontrado a [REDACTED] en la búsqueda

[REDACTED]; cerciorado de que me encuentro en el domicilio de la búsqueda por así habérmelo manifestado la persona que me atiende, quien dijo llamarse [REDACTED], que

[REDACTED] y por los siguientes medios:

la librería y comunicaciones en la [REDACTED]

y requerida de su presencia me informa quien me atiende que la búsqueda no se encuentra en ese momento por haber salido

pero que ahí [REDACTED]

[REDACTED]; lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27, inciso b) de la Ley de Amparo; la persona con la que atiendo la presente diligencia hoy a las [REDACTED] del día [REDACTED] de dos mil dieciocho.

EL ACTUARIO JUDICIAL

[REDACTED]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL
E. MOLINA NÚMERO DOS, COL. DEL PARQUE, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, ACCESO
OCHO NIVEL PLAZA
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO
JUEZ LICENCIADO FRANCISCO PEÑALOZA HERAS

CITATORIO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA SUSCRITA LICENCIADA TERESA JUÁREZ CASTRO, ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO DICTADO EN LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO REGISTRADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE [REDACTED] DEL INDICE DEL JUZGADO DE MI ADSCRIPCION ME CONSTITUYO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA EN EL DOMICILIO UBICADO EN: A [REDACTED]

[REDACTED] EN BUSCA DEL QUEJOSO.- [REDACTED] (POR DERECHO PROPIO) Y CERCIORADA DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS PARA LA PRACTICA DE LA PRESENTE DILIGENCIA, TODA VEZ QUE ELLO SE DESPRENDE DE SÉNDAS PLACAS OFICIALES COLOCADAS EN LA ESQUINA DE DICHA CALLE, POR COINCIDIR LA NUMERACION, LA COLONIA Y LA DELEGACION POLÍTICA, ASI COMO POR EL DICHO DE LA PERSONA QUE ME ATIENDE, ANTE QUIEN ME IDENTIFICO COMO ACTUARIA JUDICIAL Y LE REQUIERO LA PRESENCIA DE LA BUSCADA Y/O DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTA, MANIFESTANDO NO ENCONTRARSE NINGUNO DE LOS REQUERIDOS, PERO SER ESE EL DOMICILIO DONDE LA BUSCADA PUEDE SER NOTIFICADA EN VIRTUD DE HABÉRMELO MANIFESTADO QUIEN DIJO LLAMARSE Y SE IDENTIFICA COMO [REDACTED] CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERO DE [REDACTED] EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN SU FAVOR, CUYA FOTOGRAFIA CONCUERDA FIELMENTE CON SUS RASGOS FISONOMICOS. QUIEN REFIERE LABORAR EN EL LUGAR, CONOCER A LA BUSCADA Y SER ESE SU DOMICILIO PROCESAL SIN QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTREN SUS AUTORIZADOS PROCESALES POR LO QUE POR SU CONDUCTO LE DEJO CITATORIO PARA QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I) B DE LA LEY DE AMPARO, LA PERSONA BUSCADA Y/O SUS AUTORIZADOS PARA OIR NOTIFICACIONES (CON IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE) ACUDAN AL ORGANO JURISDICCIONAL DE MI ADSCRIPCION A NOTIFICARSE MEDIANTE COMPARECENCIA APERCIBIDA QUE EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES, SE LE NOTIFICARA POR LISTA DICHO PROVEIDO. ASIMISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO LAS COPIAS DE TRASLADO CORRESPONDIENTES QUEDARÁN A SU DISPOSICIÓN EN LA MESA DE TRAMITE CORRESPONDIENTE, PERSONA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD EL CITATORIO Y SI FIRMA LA COPIA DEL MISMO PARA QUE OBRÉ COMO CONSTANCIA LEGAL.- DOY FE.- LA ACTUARIA JUDICIAL LICENCIADA TERESA JUÁREZ CASTRO.-

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO



PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL
E. MOLINA NÚMERO DOS, COL. DEL PARQUE. VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, ACCESO
OCHO NIVEL PLAZA
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO
JUEZ LICENCIADO FRANCISCO PEÑALOZA HERAS

FORMA B-1

315

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EN DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO ATENTO A LO MANIFESTADO EN LA
RAZON ANTERIOR, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE FECHA
INDICADA AL QUEJOSO.- [REDACTED] (POR DERECHO
PROPIO) EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE
AMPARO.- CONSTE.- DOY FE.- LA ACTUARIA JUDICIAL LICENCIADA TERESA JUAREZ
CASTRO.-

EN VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SURTIÓ TODOS SUS EFECTOS
LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIEREN LAS RAZONES QUE ANTECEDEN
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION I DE LA LEY DE AMPARO.-
CONSTE.- DOY FE.- LA ACTUARIA JUDICIAL LICENCIADA TERESA JUAREZ CASTRO.-



LEGADO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

SEGUNDO
TERCER
MATERIA CIVIL
MEXICO

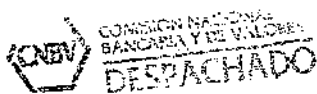


1473

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MATERIA CIVIL
2018 ENE 24 A 9:00

267
264

INFORMACIÓN DE
CUENTAS.



23 ENE. 2018

DIR. GRAL. DE REGISTRO Y VALORES
PRESUPUESTO Y GASTOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES



DECIMO TERCER TRIBUNAL

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. GABRIELA SÁNCHEZ GUZMÁN, delegada de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, designada con tal carácter con oficio número [REDACTED] respetuosamente comparecemos y exponemos:

Que en cumplimiento al acuerdo de fecha 16 de enero de 2018, mediante el cual requiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe el cumplimiento a la sentencia, informo que esta autoridad toma conocimiento de lo resuelto por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través del proveído de fecha 10 de enero del año en curso.

Precisando a su Señoría que, si bien en la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B" de esta Comisión se recibió el oficio número 2768, mediante el cual el Juzgado Décimo Quinto de la Ciudad de México solicitó información de las cuentas bancarias del quejoso, sin embargo, con oficio número [REDACTED] de fecha 26 de octubre de 2016, dicha área informó a la autoridad judicial la imposibilidad de acceder a su petición, en virtud que resultaba necesario que indicara el Registro Federal de Contribuyentes del quejoso, a fin de evitar homonimia y con ello preservar el secreto financiero tutelado en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para acreditar dicha situación se adjunta al presente copia certificada de los oficios citados en el presente párrafo.



En razón de lo anterior, esta autoridad no ha proporcionado información alguna de las cuentas bancarias del quejoso al Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, aunado a que a la fecha no se ha recibido ninguna otra petición de dicha autoridad en ese sentido.

Con lo que se atiende el requerimiento de mérito, solicitando a su Señoría se tenga a esta autoridad cumpliendo con la sentencia en los términos en que fue concedida.

Por lo antes expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito:

PRIMERO. - Tener a la suscrita con el carácter que ostento, desahogando en tiempo y forma el requerimiento que nos ocupa.

SEGUNDO. - Dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

Delegada de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.

ATENTAMENTE.

LIC. GABRIELA SÁNCHEZ GUZMÁN

JLLT

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PRESENTE

JUZGADO
15° CIVIL
SECRETARIA
"B"
EXPEDIENTE
OFICIO
NUMERO

2768

En cumplimiento a lo ordenado por el auto de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por [REDACTED] en contra de [REDACTED], giro a Usted el presente para que de no haber inconveniente legal alguno, se sirva informar lo siguiente: a) Dirá si existen cuentas bancarias a nombre de [REDACTED] b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre de [REDACTED] c) Informe los saldos que ha tenido las cuentas a nombre de [REDACTED] d) F[REDACTED] ta copia certificada de los estados de cuenta de las cuentas bancarias a nombre de [REDACTED] de los últimos 3 años, esto por estar ofrecido como prueba en el presente juicio.

Reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración.

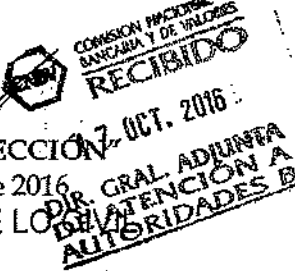
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016
EL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

MTRO. ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ



17/10/2016 09:55

OFICIAL DE PARTES
Sin antes de 2016000095



2016

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Dirección General de Atención a
Dirección General Adjunta de Atención a



CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE OCTUBRE DE 2016

OFICIO
EXP. -

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Juzgado Décimo Quinto de lo Civil
Secretaría B
Niños Héroes No. 132, 8° Piso, Torre Sur,
Col. Doctores, Deleg. Cuauhtémoc

VS

ORDINARIO CIVIL
EXP. -

At.n. MTRO. ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ
JUEZ

Nos referimos a su oficio 2768 derivado del expediente en el que solicita diversa información.

Sobre el particular, con fundamento en los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos permitimos comunicarle no poder acceder a su amable solicitud, toda vez que a fin de realizar debidamente las gestiones correspondientes, resulta necesario indique el Registro Federal de Contribuyentes de lo anterior resulta necesario a efecto de evitar homonimia y con ello preservar el secreto financiero tutelado en el Artículo 142 de la referida Ley.

Atento a lo anterior, damos por atendida su amable solicitud, reiterándole las seguridades de nuestra consideración distinguida.

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

Atentamente

MTRO. HUMBERTO RIOS RUIZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

26 octubre 2016

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

WLCV/GGM

Insurgentes Sur 1971, Torre Sur piso 10, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Tel.: 5255 1454 6000 www.cnbv.gob.mx

En la Ciudad de México, a los **VEINTITRES** días del mes de **ENERO** de dos mil dieciocho, el que suscribe **MTRO. HUMBERTO RIOS RUIZ**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce - **CERTIFICA QUE**- el presente documento consta de **DOS FOJA(S) ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con los documentos originales que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista-----



JUZGADO DECI
DE DISTRITO EN
EN LA CIUDAD



En la Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia 1473, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

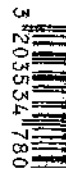
Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

Téngase por recibido el oficio de cuenta en que la Delegada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio del cual informa que si bien en la Dirección General Adjunta de atención a autoridades "B", de esa comisión, se recibió el oficio 2768, en el que el juez de origen, solicitó información de la cuentas bancarias del quejoso, el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dicha área manifestó la imposibilidad de acceder a su petición en virtud de que resultaba necesario que indicara el Registro de Contribuyentes del promovente, circunstancia que acredita con copia certificada de dichas constancias; asimismo, hace del conocimiento que no ha proporcionado información alguna de las cuentas bancarias del quejoso al juzgado natural, circunstancia de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma Francisco Peñaloza Heras, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario Axel Hernández Díaz, quien autoriza. Doy fe

rg



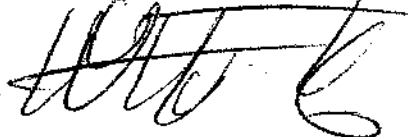
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
26 ENE 2018 SE NOTIFICA A

pavles

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

CON FECHA 29 ENE 2018
SURTÍÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL



LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

JUZGADO DÉC
DE DISTRITO E
EN LA CIUDA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Con Anexo

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE REMITE COPIA CERTIFICADA

Código de Oficio

Autoridad

Zona

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS VALORES.

DECIMO TERCERO
LEJADO ER
DEL PRE



OFICIALÍA DE PARTES

Con anexo(3)

ID003042 17/01/2018 13:40



201800026188

DECIMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D DE MEXICO



JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MEXICO



B+A

abogados

OFICINA DE CORRESPONDENCIA

C O E U N

2018 ENE 24 PM 5:27

DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

QUEJOSO: [REDACTED]

JUICIO: AMPARO INDIRECTO

EXPEDIENTE: [REDACTED] CIUDAD DE MÉXICO

CUADERNO PRINCIPAL

5177

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

[REDACTED] en mi carácter de autorizado del quejoso en términos del Artículo 12 de la ley de amparo, personalidad que tengo debidamente reconocida en el juicio de amparo al rubro citado; ante Usted C. Juez de Distrito, con el debido respeto comparezco y expongo:

I.- Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar la vista otorgada a mi mandante, mediante proveído de fecha 15 de enero del año en curso, respecto del **ANEXO** (copia certificada de la resolución de fecha 10 de enero del año en curso) y el **OFICIO** signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por medio del cual, manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de Amparo, en ese sentido la parte quejosa expresa su conformidad con la nueva resolución emitida por la Autoridad Responsable.

AD DE M. Una vez que esta H. Autoridad Federal DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, respetuosamente solicito a su Señoría que ordene a la responsable ejecutora Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que a la brevedad posible y con el apercibimiento de ley más efectivo que en derecho proceda, **esta ordene a todas las instituciones financieras adscritas a ella que se abstengan de enviar la información confidencial que en su momento requirió el juez natural, pues esta probanza no se admitió en la nueva resolución emitida por la sala responsable, por los motivos referidos en la misma.**

Por lo antes expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Se tenga por reconocida la personalidad que ostento, realizando las manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente escrito.

SEGUNDO.- Tener por expresada la conformidad de la parte quejosa con la nueva resolución emitida por la sala responsable.

TERCERO.- Una vez que esta H. Autoridad Federal DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, se ordene a la responsable ejecutora Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que esta ordene a todas las instituciones financieras adscritas a ella que se abstengan de enviar la información confidencial que en su momento requirió el juez natural, pues esta probanza no se admitió en la nueva resolución emitida por la sala responsable por los motivos referidos en la misma.

Protesto lo necesario.

99 MR

Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

DIMOS SEGUNDO

MATERIA CIB

D. DE MEXICO

DIMO SEGUNDO

N MATERIA CIB

D. DE MEXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

274 271

353

En la Ciudad de México, veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al Juez con el escrito registrado con el número de correspondencia 1567, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste

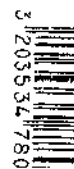
Ciudad de México, veintiséis de enero de dos mil dieciocho.

Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por [REDACTED] autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, por medio del cual, desahoga la vista ordenada en proveído de quince de los cursantes, y realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria, en atención a su contenido, resérvese de acordar lo conducente, hasta en tanto fenezca el plazo concedido para que se emita el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Axel Hernández Díaz**, quien autoriza. Doy fe

rg



EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
29 ENE 2018 SE NOTIFICA A

DOVKS

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

30 ENE 2018

CON FECHA
SURTIO TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A
QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD
CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL



LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.



JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

1652
2018 ENE 26 A 9:00

5469
272
QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO INDIRECTO
PRINCIPAL

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Rafael Arizores Ávila
Técnico en Eneles Administrativas

[REDACTED] en representación de
[REDACTED] con la personalidad que tengo debidamente acreditada en
autos, respetuosamente expongo:

Dentro del término concedido por su Señoría en auto dictado el 15 de enero de 2018, vengo a desahogar la vista ordenada, relativo al cumplimiento que se dio a la sentencia dictada el 10 de enero de 2018, en los términos que se describen.

De la lectura de la temeraria sentencia dictada se acredita la ilegalidad de la misma al haber prejuzgado respecto al cumplimiento de la ejecutoria emitida el 25 de julio de 2017 y auto de 21 de diciembre del mismo año, lo cual se afirma porque ilegalmente invocó el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, limitando los daños ocasionados a mi representado a la ínfima cantidad de 350 días de salario mínimo general vigente en esta ciudad.

Lo anterior niega el derecho a mi representado para exigir una justa indemnización.

La Suprema Corte ya se ha pronunciado en otras ocasiones acerca de la definición de los distintos tipos de figuras públicas, todas las cuales deben tolerar una mayor intromisión de sus derechos de la personalidad en colisión con el derecho a la libertad de expresión.

Contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por su Señoría, el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, ha sido declarado inconstitucional por ser contrario al régimen de reparaciones de fuente convencional expresado en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La sentencia que por ilegal se reclama el exceso de su cumplimiento, violentando los derechos de mi representado, operó a favor del quejoso, la suplencia de la queja, ya que tal como se aprecia en el escrito de expresión de agravios presentado por el apelante, este no emitió agravio alguno relativo a la violación de la ley antes descrita, por lo cual la responsable de oficio está impedida para estudiar conceptos que el propio apelante no invocó.

Así las cosas, no existe razón justificativa para que se imponga el monto a que se refiere el artículo inconstitucional descrito, pues esta limitante supone una vulneración del derecho humano a una reparación integral.

Por lo expuesto, la responsable deberá dictar una nueva sentencia, debiendo abstenerse de privilegiar al quejoso, pronunciándose únicamente respecto a lo pedido y evitando manifestar SU PUNTO DE VISTA ANTES DE DICTAR SENTENCIA, lo cual hizo al invocar el artículo 41 de la ley multicitada, siendo esto una causal de excusa establecida por el Código procesal civil.

Por lo expuesto y fundado,

A USTED, C. JUEZ, atentamente pido, se sirva:

PRIMERO.- Tener por desahogada la vista ordenada en autos.

SEGUNDO.- Se acredita el exceso en su cumplimiento.

TERCERO.- Se le ordene dictar una nueva resolución apegada a derecho.



COMO TERCERA INSTANCIA
LEGADO EN LA ENCLAVE
DEL PRIMER JUICIO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 2

27274

330

En la Ciudad de México, veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el Secretario **CERTIFICA**: que el término de tres días concedido a las partes en proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho convinieran respecto el cumplimiento dado por las autoridades responsables, ha trascurrido en su totalidad; para la parte quejosa [REDACTED] y tercero interesado [REDACTED] del veintitrés al veinticinco del presente mes y año en curso, toda vez que se les notificó por medio de lista el diecinueve de enero de este año, surtiendo sus efectos el veinte siguiente. **Doy fe**

En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos y con el escrito registrado con el número de [REDACTED] correspondencia 1652, relativo al juicio de amparo [REDACTED] asimismo, hace constar que si existen documentos certificados agregados en autos y si se tramitó incidente de suspensión en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
JEFATURA DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA
DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA
DEL PRIMER CIRCUITO

Ciudad de México, veintinueve de enero de dos mil dieciocho.



DECIMO SEPTIMO
EN AMPLIACION
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que por oficio presentado el doce de enero de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, firmado por el **Presidente Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México** informó el cumplimiento dado al fallo protector remitiendo copia certificada de la resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, dándose vista mediante acuerdo de **quince de enero de dos mil dieciocho**, a las partes, para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre la observancia dada a la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cita.

3 203534 781

Para lo cual, se toma en cuenta que el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional la cual fue terminada de engrosar el veinticinco de julio del presente año, en la que se concedió el amparo y protección a la parte quejosa [REDACTED] misma que fue confirmada por el **Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito**, mediante ejecutoria de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el tomo R.C. [REDACTED]

La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes:

- *"La sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el tomo 21741/016.*

- *En su lugar emita otra, en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la litis planteada en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, propuesto a su potestad, esencialmente, por lo que hace, por una parte, a los planteamientos referentes a que se vulneraron los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), relativos al principio pro persona, y por otra, a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).*

Al haberse declarado fundados los conceptos de violación en estudio, dirigidos a demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, este Juzgado de Distrito ya no entra al estudio de los



demás conceptos de violación planteados por el quejoso, al resultar innecesario su análisis.¹

357

La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de esta primera, tiene que resolverse igualmente por lo que toca a las ejecutoras."

En auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 211), se tuvo al Juez Décimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informando que se adhería al cumplimiento que diera la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (fojas 187 y 188).

Mediante oficio registrado con el número de folio 21608, el Presidente Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que en resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la diversa de diecisiete de enero del año pasado, y en su lugar dictó otra en la que confirmo el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Por lo que en auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, al considerar que la sala responsable incumplió con la ejecutoria toda vez que:

¹ Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia, de la Séptima Época, Tercera Sala, del Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 107, página: 85, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS"...

1.- La Sala responsable dictó una nueva resolución el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, sin que analizará los planteamientos referentes a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), específicamente el artículo 41, el cual dispone:

"Artículo 41. En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, **en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal**, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta y cinco por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo."

En la ejecutoria se dijo en cuanto a dicho precepto:

"Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que "en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas." Mientras que el propio artículo 41 estipula que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

275

276

357

"en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."

En oficio registrado con el número de folio 232, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que en resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, dejó sin efectos la diversa de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, y en su lugar dictó otra en la que modificó el auto de veintiocho de enero de dos mil diecisiete, en el que admitió las pruebas, con excepción de la consistente en la petición de que se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe que cuentas bancarias se encuentran a nombre del aquí quejosa, señalando audiencia para su desahogo.



NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D E M É X I C O

Con lo anterior, está demostrado el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto.

Lo anterior sin perjuicio del recurso de inconformidad que en término del artículo 201 de la citada ley aplicable en materia de cumplimiento procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo.

NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D E M É X I C O

Es aplicable a lo anterior la tesis 2a. CXIV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Octubre de 1997, visible a página 414, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

"EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y

107. Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

Asimismo, toda vez que el referido numeral dispone que la ejecutoria que se declare cumplida en su totalidad deberá ordenarse el archivo del expediente, y considerando además que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que por una parte sobreseyó y por la otra la justicia de la unión amparó y protegió a las quejas; por tanto, **una vez que transcurran cinco años, procédase a su depuración**, en cumplimiento al punto y acuerdo antes mencionados.

De igual forma, atento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

280

359
277

1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se hace constar que el presente expediente **NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL** y, por tanto, **ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN**, según lo previsto en los puntos Segundo, fracciones VI y XV; y Vigésimo Primero fracción IV; luego, una vez que transcurra el plazo de tres, tramítense su transferencia y depuración, respectivamente, de conformidad con los diversos puntos Décimo fracción I, Décimo Primero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, fracción IV de dicho ordenamiento.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SEGUNDO
JERARQUÍA CIVIL
MÉXICO
SEGUNDO
JERARQUÍA CIVIL
MÉXICO

Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y **glósese el original del incidente de suspensión** que obra por separado, **dicho cuaderno incidental es susceptible de depuración**, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, **y respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción**, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude al Capítulo Quinto, en el artículo vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, y digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.

Respecto del billete de depósito número [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] ([REDACTED] 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito,

3 203534 780

Institución de Banca de Desarrollo, a fin de que siga surtiendo efectos la **suspensión definitiva** dictada el **uno de marzo de dos mil diecisiete**; se da vista a las partes con fundamento en lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con el numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Ahora bien, toda vez que en auto de **veintiséis de enero del presente año**, se reservó de acordar lo conducente respecto del escrito del quejoso, hasta en tanto, feneciera el término concedido, y como dicho plazo ya aconteció, se levanta la reserva, y en atención a su contenido del escrito, se tienen por hechas las manifestaciones de conformidad que realiza respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, respecto a su solicitud de que se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dígasele que no ha lugar a acordar su petición de conformidad al no haber sido materia de la ejecutoria.

Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por [REDACTED] en su carácter de apoderado legal del tercero interesado [REDACTED], mediante el cual desahoga la vista que se le dio en auto de quince de los cursantes, y al afecto realiza diversas manifestaciones de inconformidad en vía de alegatos respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables, ahora bien, en atención a su solicitud, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad su

JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE GUAYMAS
COAHUILA DE ZARAGOZA
21/01/2017
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE GUAYMAS
COAHUILA DE ZARAGOZA
21/01/2017
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE GUAYMAS
COAHUILA DE ZARAGOZA
21/01/2017



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

281 360 278

solicitud toda vez que al realizar el cumplimiento este órgano jurisdiccional, no advierte exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora.

Remítase el expediente de que se trata como concluido, al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo, en la remesa de **quince de febrero del año en curso.**

Finalmente, en virtud de que en el presente expediente obran glosados **documentos certificados**, con apoyo en lo establecido en el Punto Vigésimo, fracción III último párrafo, del multicitado Acuerdo, requérase al quejoso y tercero interesado, para dentro del término de **noventa días**, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibido que, de no hacerlo, dichos documentos en su caso podrán ser destruidos.

Notifíquese por medio de oficio a las autoridades responsables.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Axel Hernández Díaz**, quien autoriza. Doy fe

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] se giraron los oficios 1448, 1449 y 1450 a las autoridades correspondientes, notificando el auto que antecede. Conste

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL

30 ENE 2018

SE NOTIFICA A

Demás partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE
LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE

CON

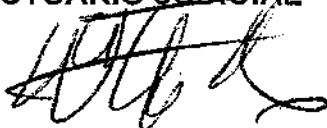
31 ENE 2018

FECHA

SURTIÓ

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL

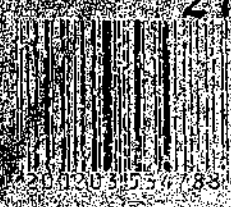


LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

JUZGADO DECIM
DE DISTRITO EN
EN LA CIUDAD

[REDACTED]

282 279



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de Mexico

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INCIDENTAL

Mes: [REDACTED] Numero Expediente: [REDACTED]

Interpuesto el: [REDACTED]

Procedido por: [REDACTED]

CONTRIBUYENTE: SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMISION NACIONAL BANCARIA DE VALORES SUPLENTE DE MODALIDAD DE COMERCIO BANCARIO

Articulos Constitucionales Violados: 14 y 16

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

ARCHIVO

Fecha de Remision: [REDACTED] Numero [REDACTED]
Expediente constante de [REDACTED] cuadernos [REDACTED] Anexos Legajos Num [REDACTED]

Juez

Secretario

Juez Lic. Francisco Peñafoza Heras

Lic. ANGELICA FLORES JAUREGUI



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

283 362
1 280

En la Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con la comparecencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Agréguese a los autos la comparecencia firmada por el quejoso [REDACTED] a través del cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de tres de febrero del año en curso.

Asimismo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa [REDACTED] mediante el cual desahoga la prevención de treinta de enero del presente año, y al respecto se provee lo siguiente:

Vista de nueva cuenta la demanda de garantías promovida por [REDACTED] por propio derecho; contra actos de la Sexta Sala y Juez Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, **SE ADMITE A TRÁMITE** la demanda; en tal virtud, fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, misma que quedó registrada en el libro de gobierno con el consecutivo [REDACTED]

3 203534 780050

Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión, por haberlo solicitado.

Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las **DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE** para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, **pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación**, que deberán de rendir en el plazo de **quince días**, posteriores al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo.

JUZGADO DE
E DISTRITO
EN LA CIUDAD



JUZGADO DE PRIMERA
DE DISTRITO EN M
EN LA CIUDAD D



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

284

333

2

281

Hágaseles saber que, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en caso de omitir rendir su informe justificado se presumirán ciertos los actos que se les reclaman, salvo prueba en contrario; además, se harán acreedores a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, tal como está previsto en el precepto 260, fracción II, del mismo ordenamiento, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, solicítase a las autoridades responsables para que las constancias con las que pretendan apoyar su informe justificado, las remitan en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, atendiendo al principio de expeditéz, celeridad y prontitud en la impartición de justicia que establece el artículo 17 Constitucional, **con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa en los términos del párrafo que antecede.**

De igual manera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que haya ocurrido alguna

PRIMER SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

3 203532 780050

15

.)

ORGANIZADO DÉC
E DISTRITO EN
EN LA CIUDA

Seal of the State of Tennessee

efecto de la decisión judicial de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, **sin previo acuerdo**, se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este Juzgado, practique la diligencia encomendada.

Se que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al domicilio y autorizados, toda vez que mediante auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, se acordó lo conducente.

VO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
MÉXICO

Finalmente, cabe indicar que las resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, constituyen información pública, lo que implica que las determinaciones que se dicten en este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, **haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales**, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y **sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados**, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva

que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

Notifíquese y personalmente al tercero interesado y por medio de oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público adscrito.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo.Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza. **Doy fe.**

18

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios 3162, 3163, 3164 y 3165 a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. **Conste.**

JUZGADO DÉCIMO
DE DISTRITO EN
EN LA CIUDAD DE



JUZGADO DÉCIMO
DE DISTRITO EN M.
EN LA CIUDAD DE

AMPARO INDIRECTO

QUEJOSO: [REDACTED]

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

[REDACTED] por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en [REDACTED]

terminos mas amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo a los señores Licenciados [REDACTED] con Cédula Profesional núm. [REDACTED] con Cédula Profesional núm. [REDACTED] y número de Registro Único ante el Poder Judicial Federal [REDACTED] de fecha 16 de noviembre de 2005, [REDACTED] con Cédula Profesional número [REDACTED] con Cédula Profesional número [REDACTED] así como para recibir indistintamente notificaciones, toda clase de documentos y valores, y hacer uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza para la reproducción de actuaciones judiciales y documentos exhibidos, a los C. [REDACTED] ante usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, en los artículos 11, 35, 107, 108, y demás aplicables de la Ley de Amparo, vengo a promover en tiempo y forma **Demanda de Amparo Indirecto** en contra de la sentencia de fecha 17 de enero de 2017, donde confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, que indebidamente e ilegalmente ordena girar Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que esta dependencia rindiese un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años, sin que haya sido oído ni vencido en juicio, sin que dicha medida constituya prueba en ningún sentido para acreditar daño moral alguno, y por considerar que el mismo resulta violatorio de los Derechos Fundamentales del suscrito.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, proporciono al efecto la siguiente información:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO:

[REDACTED]

avenida
, C.P.

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO:

[REDACTED] con domicilio en la calle de
[REDACTED]
[REDACTED]

III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:

- LOS C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEXTA SALA CIVIL, con domicilio en la calle de Río de la Plata número 48 piso 6, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 en esta Ciudad.

- LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, como autoridad responsable ejecutora, con domicilio en Insurgentes Sur 1971, Torre Sur Piso 10, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.

O SEGUNDO ACTO RECLAMADO:

La sentencia de fecha 17 de enero de 2017, que confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, y que indebidamente ordena girar un Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que esta dependencia rindiese un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años, sin que haya sido oído ni vencido en juicio, y sin que dicha medida constituya prueba en ningún sentido para acreditar daño moral alguno, es decir la acción del actor en el juicio natural.

V.- FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO:

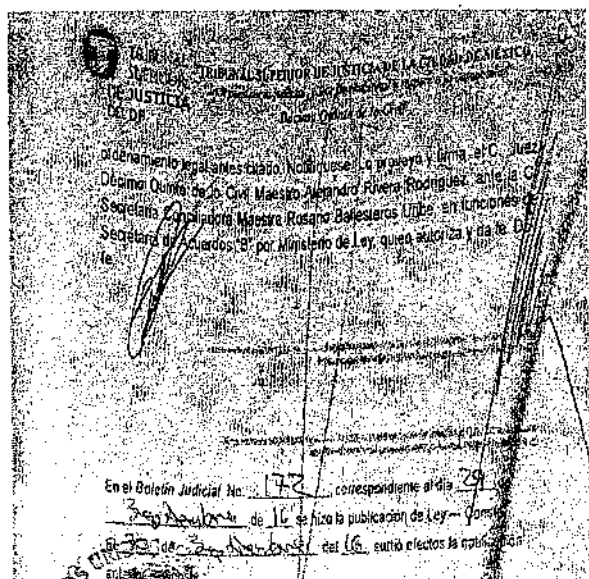
El acto reclamado le fue notificado al suscrito mediante "Boletín Judicial" número "8" de fecha 18 de enero de 2017, y surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir el 19 de enero del 2017.

VI.- PRECEPTOS QUE CONTIENEN DERECHOS HUMANOS VIOLADOS:

Los artículos 1, 14, 16 y 133 Constitucionales, así como los artículos 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

VII.- PROTESTA DE DECIR VERDAD:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los siguientes hechos, son los antecedentes del acto que causa una violación a los Derechos Humanos de mi representado.



3. Por lo anterior, con fecha 5 de octubre de 2016, el suscrito interpuso en tiempo y forma, recurso de apelación de tramitación inmediata en ambos efectos, toda vez que dicha medida ordenaba que se ventilase información confidencial del suscrito, sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que dicha medida constituyese medio de prueba en ningún sentido para acreditar el supuesto daño moral del que se duele el hoy **INTERESADO**.
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

4.- No obstante la evidente violación a los derechos fundamentales del suscrito, con fecha 17 de enero del año en curso, la Sexta Sala Civil (hoy Autoridad Responsable), dentro del Toca [REDACTED] dictó la sentencia señalada como acto reclamado, confirmando de manera por demás displicente e ilegal el auto recurrido, motivo por el cual me veo en la necesidad de acudir ante su Señoría, a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.

CONCEPTOS DE VIOLACION

PRIMERO.- La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), al mencionar de manera por demás desafortunada en el Considerando II del Acto Reclamado, que los dos agravios formulados resultan infundados, toda vez que por lo que se refiere a la supuesta violación de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Sala se ve **impedida** para hacer consideraciones sobre el particular al **estar reservado su**

análisis y resolución a las autoridades federales. (énfasis añadido).

Pues bien, lo anterior resulta a todas luces falso; Desde hace muchos años, si bien de manera tímida ya se contemplaba y aplicaba por parte de algunos Jueces el Control Difuso de la Constitución contenido en el artículo 133 Constitucional, es a partir de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 y de la publicación de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 293/2011 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los órganos jurisdiccionales comienzan a tener un papel más activo en la protección de derechos fundamentales.

El Pleno de la Corte realizó una clara interpretación del contenido del artículo 1º constitucional reformado en 2011, en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone por "normas de derechos humanos", cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por nuestro país con independencia de la materia de éste, enfocando sus esfuerzos hacia su objetivo principal que es la tutela efectiva de los derechos humanos o fundamentales, contempladas en la Constitución o en los Tratados Internacionales celebrados por nuestro país, es decir que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, se han integrado expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, para ampliar el catálogo constitucional de derechos humanos como un "bloque de derechos".

En este sentido, la adopción del principio pro-persona, resulta ser un sistema hermenéutico que el juzgador necesariamente deberá usar, para emplear el derecho más protector de derechos humanos, sin importar si se encuentra en la Constitución, en los Tratados Internacionales o en las Leyes Locales.

Pues bien, ya sea por interpretación "conforme" a la Constitución o bien por Control de Convencionalidad, el Juzgador deberá aplicar el derecho humano o fundamental más benéfico y protector para el gobernado bajo el principio Pro-Persona mencionado, tal como se observa en la jurisprudencia por Contradicción de Tesis 293/2011, dictada recientemente por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, y que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2006224

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)

Página: 202

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular el voto concurrente; Luis María Aguilar Morales, con reservas respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Sergio A. Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a voto concurrente en relación con los límites; Alberto Pérez Dayán, quien se manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XI.10.A.T.47 K y XI.10.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
MEXICO

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
MATERIA CIVIL
MEXICO

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.



PRIMO SEGUNDO
N MATERIA CIVIL
D DE MÉXICO

EQUINO
ERIA CA
MÉXICO

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Por lo anterior, resulta claro que el sentido del contenido de los artículos 1 y 133 Constitucionales, como de la Jurisprudencia transcrita, es de que **TODAS LAS AUTORIDADES (judiciales o no)**, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal como se observa en el tercer párrafo del artículo Primero y que a la letra dice:

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

En ese sentido, desde el más modesto Juez de Paz, hasta los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la obligación de **promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos** contenidos en la Constitución, además de que existe disposición expresa de velar por el contenido y protección de la Constitución por parte de todos los Jueces en el artículo 133 Constitucional (Pacto Comisorio), obligación que la responsable hace a un lado de manera ilegal, omitiendo entrar al fondo del asunto de la violación de los derechos humanos señalados, so pretexto de encontrarse impedida para hacer consideraciones sobre el particular, y dejando en consecuencia al suscrito en completo estado de indefensión.

SEGUNDO.- La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 278, 279, 285, 289, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del artículo 41 y demás relativos de la "Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal, ya que la hoy autoridad responsable de manera ilegal confirma el auto impugnado en la apelación que resuelve, omitiendo entrar al fondo del asunto, en plena incongruencia con lo expresado y hecho valer en el recurso.

En efecto, dicha responsable después de mencionar encontrarse impedida para hacer consideraciones de derechos humanos contenidos en artículos de la Constitución, se limita a pretender "fundar y motivar" su resolución, mencionando de manera escueta y simple que el Juez natural fundó el auto impugnado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, que son los artículos que contemplan el mecanismo y los tiempos para el ofrecimiento y recepción de pruebas, pero no son los que funden la admisión de un Oficio a toda luces improcedente, y no obstante lo anterior, la responsable confirma la indebida admisión del oficio multicitado al mencionar solamente que se trata de un juicio tramitado en la vía ordinaria civil, y de que no existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata. Púes bien, por increíble que parezca, con este "argumento" acaba la pretendida "fundamentación y motivación" de la responsable, absteniéndose claramente de resolver bajo el principio de congruencia, es decir de ser

clara, precisa y congruente con el recurso de apelación interpuesto, resolviendo sobre el contenido de todos los agravios hechos valer por el suscrito, ya que si bien es cierto que el juzgador puede valerse de cualquier documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que la prueba no esté prohibida por la ley ni sea contraria a la moral, éste documento se encuentra condicionado por ley a que deba ser idóneo **para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos**, situación que no acontece en el presente caso, ya que el informe solicitado que deberá rendir la Comisión Nacional Bancaria, respecto de las cuentas y movimientos del suscrito en los últimos 3 años, no van a dar como resultado el conocer la verdad sobre los puntos controvertidos; en efecto, el informe que refleje si el suscrito es rico o pobre o lo que sea, en nada va a coadyuvar a la búsqueda de la verdad, ni tampoco acreditará si el hoy tercero interesado sufrió o no de daño moral alguno, ya que el contenido del mismo nada tiene que ver con la tesis planteada, y aun así fue ordenado por el Juez natural, y dicha decisión confirmada de manera ilegal por la hoy autoridad responsable.

SEGUNDA
INTERIOR
DE MÉXICO

En ese mismo sentido, si bien de conformidad con el artículo 279 del Código Procesal, el Juzgador podrá decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, esta tendrá la limitante de que la misma deberá **ser conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados**, debiendo en la práctica de estas diligencias, obrar **sin lesionar el derecho de las partes**, oyéndolas y procurando en todo su igualdad, circunstancia que evidentemente no sucedió con el juez natural al ordenar una "prueba" NO idónea para conocer la verdad, lesionando de paso el derecho del suscrito a la confidencialidad que guarda por ley la información solicitada, por lo que la responsable al confirmar dicha situación a través del acto reclamado, me deja una vez más en estado de indefensión.

Pues bien, el juzgador debió de hacerse valer de pruebas que estén permitidas por la ley y **se refieran a los puntos cuestionados**, de aquellos elementos que **puedan producir convicción en el ánimo del juzgador** acerca de los hechos controvertidos o dudosos, situación que no sucedió ya que es un hecho notorio y de elemental sentido común, deducir que la información (confidencial) de las cuentas del suscrito de los últimos 3 años, no se refiere a los puntos cuestionados en el juicio natural, ni **tampoco pueden producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos**, toda vez que en términos del artículo 41 de la "Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito

Federal" que es la ley especial de la materia del juicio natural, la sanción económica en caso de resultar procedente la acción de daño moral claro está, en ningún caso deberá exceder de [REDACTED] días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, es decir [REDACTED] [REDACTED]), por lo que resulta irrelevante saber si existe mucho o poco dinero en las cuentas del suscrito, ya que la sanción en caso de que el suscrito llegase a ser condenado en el juicio natural se encuentra topada, y es un monto que **no puede ser determinado de manera discrecional por el juzgador**, o que exista una fórmula en donde el monto de mis ingresos o ahorros sea un ingrediente para determinar el monto de la sanción, como se da por ejemplo en la determinación de una pensión alimenticia. Por lo anterior, se ordena un oficio para dar a conocer información confidencial del suscrito, en el desahogo de una "prueba" no idónea para acreditar los extremos de la acción intentada, y ante lo anterior, la responsable de manera ilegal confirma esta situación a través del acto reclamado, sin mayor motivación o fundamentación legal, dejándome una vez más en completo estado de indefensión.

CO SEGUNDA
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

CO SEGUNDA
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

TERCERO.- La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 278, 279, 285, 289, 291, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito a contrario sensu, ya que la responsable confirma la indebida e ilegal admisión y trámite de la "Prueba" documental marcada con el número 12 del escrito de ofrecimiento de pruebas del hoy tercero interesado, consistente en el informe y copia certificada que rinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde diga:

- a) Si existen cuentas bancarias a nombre del suscrito [REDACTED]
- b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre del suscrito, y
- c) Remita al Juzgado natural, copia certificada de los estados de cuenta de las cuentas bancarias a nombre del suscrito, de los últimos 3 años,

Pues bien, la admisión de dicha "prueba", y su posterior confirmación por parte de la responsable, resulta por lo menos infundada e improcedente, toda vez que se trata de **Información Confidencial** del suscrito protegida por ley, sin que se de en el caso en concreto la excepción a que hace referencia el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, que a la letra dice:

Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, **tendrá carácter confidencial**, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

SEGUNDA
TERIA CIVIL
MÉXICO

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (énfasis añadido)

SEGUNDA
TERIA CIVIL
MÉXICO

En efecto, el juicio natural es un juicio Ordinario Civil, NO un juicio Ejecutivo donde exista embargo o providencia alguna, ni existe Providencia Precautoria justificada y/o concedida para que se violenten los derechos fundamentales del suscrito, ordenando que se exhiban y ventilen los datos de mis cuentas bancarias en copias certificadas por los últimos 3 años, tal como si ya hubiese sido condenado y nos encontráramos en etapa de ejecución de sentencia. En efecto, dicha admisión y trámite resulta no solo ilegal, sino absurda, ya que dicha información puede constituir cualquier cosa salvo una "prueba", y mucho menos una prueba idónea que sirva para acreditar el supuesto daño

moral que el tercero interesado alega haber sufrido con las publicaciones materia del juicio natural, de allí la ilegalidad del acto reclamado al confirmar la procedencia del oficio. En efecto, insisto en que el hecho de que el suscrito tenga o no cuentas bancarias, así como los movimientos y saldos de las mismas por los últimos 3 años, resulta irrelevante para demostrar la supuesta afectación por daño moral, que en términos de ley consisten en 3 elementos, siendo el primero demostrar el supuesto daño, el segundo en que dicho daño sea consecuencia de un acto ilícito, y el tercero que exista una relación de causa-efecto entre los 2 primeros, siendo un hecho notorio que con la **información confidencial** de las cuentas bancarias del suscrito, jamás se podrá acreditar lo anterior, por lo que la confirmación de la responsable de la admisión y tramitación de la prueba referida, me deja una vez más en completo estado de indefensión.



DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MANDADO

SEGUNDA
TERCERA
MEXICO

CUARTO.- La Sentencia señalada como acto reclamado, resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los artículos 81, 278, 279, 285, 289, 291, 402, 536 a contrario sensu del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que el mismo además de ser incongruente, carece de fundamentación y motivación, absteniéndose la responsable de cumplir con los principios de exhaustividad, legalidad y congruencia que deben contener toda resolución judicial, toda vez que apoya su decisión de confirmar la admisión y trámite de la "prueba" multiplicada sin que dicha medida o elemento de "prueba" se encuentre contemplado en la Ley especial de la materia, y lo hace además sin fundamento ni motivación alguna, dejando en consecuencia a mi mandante en completo estado de indefensión.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la siguiente Jurisprudencia por Contradicción de Tesis dictada por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, y que a la letra dice:

Novena Época
Registro: 176546
Primera Sala
Jurisprudencia
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Diciembre de 2005
Materia(s): (Común)

Tesis: 1a./J. 139/2005

Pag: 162

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.

Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión,

MO SEGUNDO
MATERIA C
D DE MEXICO

MO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
D DE MEXICO

así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villégas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.

Pues bien, con lo anterior la responsable viola los derechos fundamentales del suscrito de legalidad y debido proceso toda vez que la sentencia señalada como acto reclamado carece completamente de motivación y fundamentación.

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

Por medio del presente juicio de Amparo, solicito la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado ordenado por la autoridad responsable, consistente en la confirmación de la admisión y trámite de un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitándole informe y copia certificada que diga:

- a) Si existen cuentas bancarias a nombre del suscrito
- b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre del suscrito, y
- c) Remita al Juzgado natural, copia certificada de los estados de cuenta de las cuentas bancarias a nombre del suscrito, de los últimos 3 años,

Respecto de la Autoridad Responsable ejecutora, es decir de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, para el caso de que le haya llegado ya el Oficio arriba mencionado por parte del Juzgado natural, la suspensión se solicita para el efecto de que se ordene a dicha Comisión, de **no proporcionar la información confidencial del suscrito solicitada**, hasta en tanto no se resuelva el presente juicio de Amparo.

Resulta procedente la suspensión solicitada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 131, 138 y demás aplicables de la Ley de Amparo, en virtud de que con la suspensión solicitada no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social.

OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA.

Con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, y toda vez que el acto reclamado fue conocido por el suscrito mediante el "Boletín Judicial" número "8" de fecha 18 de enero de 2017, y surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir el 19 de enero del 2017, me encuentro dentro del término previsto para promover la presente demanda.

COMPETENCIA.

Su Señoría es competente para conocer del presente Juicio de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII Constitucional, y de los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo.

PRUEBAS

En términos del artículo 119, segundo párrafo de la nueva Ley de Amparo, en adición a las constancias que remita la responsable, ofrezco la Instrumental Pública de Actuaciones y la Presuncional Legal y Humana.

Por lo expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto reclamado que ha quedado determinado en el capítulo correspondiente de la presente demanda.

SEGUNDO.- Admitir la demanda en la vía y forma propuesta y solicitar de las autoridades señaladas como responsables, los informes previos y justificados correspondientes.

TERCERO.- Tener por autorizadas a las personas antes señaladas para los efectos precisados.

CUARTO.- Ordenar la suspensión provisional del acto reclamado, y en su momento la suspensión definitiva.

QUINTO.- Previos los trámites de ley, conceder al suscrito el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitados.

Protesto lo necesario.

Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil diecisiete



RECIBO
LEGITIMO
DE

IO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

IO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

AMPARO INDIRECTO: [REDACTED]

QUEJOSO: [REDACTED]

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

[REDACTED] por mi propio derecho, ante Usted C. Juez de Distrito con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar la prevención ordenada por su Señoría mediante proveído de fecha 30 de enero del año en curso, manifestando "Bajo protesta de decir verdad" lo siguiente:

1.- Si es mi deseo señalar como Autoridad Responsable al C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio conocido en esta ciudad.

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
EN MÉXICO

2.- Los actos que se reclaman de cada una de las autoridades señaladas como responsables son:

- DE LOS C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la sentencia de fecha 17 de enero de 2017, que confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, y que indebidamente e ilegalmente ordena girar un Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que esta dependencia rindiese un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años.

- DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, en su calidad de autoridad responsable ejecutora, la expedición del oficio donde esta dependencia rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años.

- DEL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la orden y expedición del Oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contenida en el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, que ordena a esta dependencia que rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años.

3.- En cumplimiento a este numeral, inserto una fotografía fiel de los puntos resolutive de la Sentencia dictada el 17 de enero del año en curso, en el toca de apelación [REDACTED]



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

"2017, HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL"

de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma el auto recurrido

SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas.

TERCERO.- En cumplimiento al Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de este Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace saber a las partes que una vez concluido el juicio, este Toca se destruirá, por lo que en su caso y de ser procedente deberán recoger los documentos exhibidos en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la notificación de este proveído.

CUARTO.- Notifíquese, con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento del juez de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

A S Í, lo resolvió y firma en forma unitaria el C. Magistrado FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ, integrante de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 38, párrafo Segundo y 43, párrafo penúltimo de la Ley Orgánica de este Tribunal,

4.- Respecto al estado procesal que guarda el juicio [REDACTED] es el de admisión de pruebas, siendo la última actuación a dicha contienda, el auto de fecha 28 de

septiembre de 2016 donde admite las pruebas ofrecidas por las partes, entre las que se encuentra el Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multicitado. Posteriormente ha habido promociones de trámite que no impulsan de manera alguna el procedimiento, dado a que la apelación que da origen a la sentencia de la Sexta Sala arriba mencionada, fue admitido en ambos efectos, es decir con suspensión del procedimiento.

5.- Por lo que respecta a la solicitud de suspensión provisional y Definitiva, se solicitan para los efectos de que el Oficio multicitado no sea girado por el Juez Décimo Quinto de lo Civil a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en caso de que éste ya haya sido enviado y presentado ante dicha Comisión, que ésta dependencia se abstenga de rendir la información solicitada por el Juez mencionado.

6.- Por último agrego al presente escrito, un juego de copias de traslado del escrito inicial de demanda, incluyendo copia del presente escrito para el Juez Décimo Quinto de lo Civil señalado como autoridad responsable, así como seis copias más del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo expuesto y fundado:

10 SEGUNDA MATERIA CIVIL DE MEXICO
A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho, desahogando en tiempo y forma la prevención arriba mencionada ordenada por su Señoría.

SEGUNDO.- Tener por exhibidas las copias de traslado arriba mencionadas.

TERCERO.- Ordenar se admita el presente juicio, en los términos solicitados en mi escrito inicial de demanda.

Protesto lo necesario.

Ciudad de México, a primero de febrero de dos mil diecisiete.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 24 005

300

303

En la Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaría da cuenta al Juez con el auto admisorio, copia de la demanda y escrito aclaratorio, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Visto lo de cuenta, se provee: en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de esta misma fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo [REDACTED] promovido por Sergio Aguayo Quezada, por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se apertura por separado y duplicado el presente incidente de suspensión.

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus **informes previos**, que deberán rendir por duplicado dentro del término de **cuarenta y ocho horas, por separado del informe justificado que, en su caso, formule en el cuaderno principal**, enviándoles al efecto copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio **requiriéndoles que en los mismos precise si son o no ciertos cada uno de los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.**

Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir sus informes previos en los términos antes señalados, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, tal como está



CIMO SEGUNDO
MATERIA C



MO SEGUNDO
MATERIA C
DE MÉXICO

3 203534 780067

previsto en el precepto 260, fracción I, del mismo ordenamiento en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las **NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE**, para que tenga verificativo la audiencia incidental.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la peticionaria de amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de la celeridad procesal.

JUZGADO DE
DE DISTRITO
EN LA

JUZGADO DE
DE DISTRITO
EN LA CIUDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

300

304 336

En lo particular, la parte quejosa señaló como actos reclamados la sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación [REDACTED] la cual confirma el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe cuales son las cuentas bancarias a nombre del quejoso, y remite copia certificada de los estados de cuenta bancario de los últimos tres años, así como su ejecución.

Por lo que, en la presente suspensión se atenderá exclusivamente respecto a los efectos solicitados por la parte agraviada, sin atender a cuestiones que no fueron solicitadas, ello en cumplimiento a la jurisprudencia 111/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de siete de noviembre de dos mil tres, del texto y rubro siguientes:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos."

SEGUNDO
TERIA CIVIL
MÉXICO

SEGUNDO
ATERIA CIVIL
DE MÉXICO

3203534
80067

Así como la tesis I. 4o. A. J/8, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y uno, página ciento treinta, Octava Época, que dispone:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE. En atención a la naturaleza jurídica de la suspensión definitiva que el Juez de Distrito otorga al quejoso, respecto de los actos reclamados atribuibles a las autoridades responsables, éstas, así como cualesquiera autoridad, están obligadas a respetarla, sin que estén facultadas para dejar insubsistente dicha medida cautelar mientras se encuentre vigente y corresponde al Juez de Distrito precisar su alcance, pues considerar lo contrario, a título de que se trata de actos nuevos, se prestaría a dejar en manos de la propias autoridades determinados efectos y alcances de la suspensión definitiva, lo que equivaldría a delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal y no a dichas autoridades, con lo que se desnaturalizan los efectos de la suspensión en el juicio de amparo."

En ese entendido, es conveniente establecer que para efectos de la suspensión, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y sería que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.

El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre

ESTADO DE
EDIFICACION
EN LA CIUDAD

JU. GADO DECI
DEL DISTRITO EN
LA CIUDAD



TER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

301

FORMA B-2

331

305

que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.

Ahora bien, de conformidad con las reformas al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mismas que entraron en vigor ciento veinte días posteriores a su publicación, los actos reclamados son susceptibles de suspenderse, cuando la naturaleza del acto lo permita, una vez realizado un análisis en el que se pondera la apariencia del buen derecho y el interés social.

a) Que la solicite el quejoso; y,

b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, **SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL** solicitada por el quejoso para el efecto de que no se gire oficio a la **Comisión Nacional Bancaria y Valores**, para que rinda su informe de los estado de cuentas bancarias de los últimos tres años, en caso de haberse girado oficio, la citada autoridad se abstenga de proporcionar la información confidencial solicitada, por el **Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México**, en el juicio ordinario civil [REDACTED] promovido por [REDACTED] [REDACTED], en contra del aquí quejoso, hasta en tanto,

las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva que se dicte en la presente incidencia.

Lo anterior es así, dado que el quejoso acredita de manera indiciaria su interés suspensorial al ser parte demandada en el juicio de origen.

En el entendido que **se deja plenitud de jurisdicción al juez de origen**, para dictar aquellas medidas tendientes para la ejecución de sus resoluciones, ya que el procedimiento es de orden público y no puede suspenderse.

Dicha medida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtir si el quejoso no exhibe dentro del término de **cinco días**, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo una garantía mediante cualquiera de las formas por la cantidad de [REDACTED]

La anterior cantidad se fija de manera discrecional tomando en consideración a la naturaleza del juicio de origen; por el periodo de tres meses que es el tiempo probable en que se resolverá en definitiva este incidente de suspensión, suma que esta autoridad de amparo decreta de conformidad con la facultad discrecional, que al efecto le confiere el artículo 132 de la ley de la materia.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 55/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

306

306

306

"GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL."

La cantidad mencionada, tiene por objeto garantizar los posibles daños y perjuicios que con esta medida pudiera ocasionarles al tercero interesado, en caso de negarse o sobreseerse el amparo a la parte quejosa.

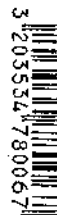
Por otra parte, se requiere al quejoso, para que al momento de exhibir la garantía que se solicita; y de optarse por certificado de depósitos con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en su artículo 883 ordena:

Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos.

En el certificado de depósitos se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior."

Es decir, de manera expresa en el certificado o por escrito deberá autorizar al referido fondo solicite y reciba de la institución crediticia la información que le permita el control de dicho deposito; en el entendido, de que la omisión de dicha expresión se interpretará en sentido afirmativo.

MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



Apercibido que de incumplir con las obligaciones impuestas como requisitos de efectividad, **dejará de surtir efectos la medida cautelar obsequiada y quedarán expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado.**

Por otra parte, se ordena notificar personalmente la presente resolución al tercero interesado [REDACTED]

[REDACTED] quien tiene su domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] en esta Ciudad de México; en consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en el domicilio indicado y le notifique el presente proveído y le requiera para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo **así, sin previo acuerdo**, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional.

JUZGADO DÉCIMO
E DISTRITO EN
LA CIUDAD DE MEXICO

JUZGADO DÉCIMO
E DISTRITO EN
LA CIUDAD DE MEXICO

En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del quejoso el que se indica en el escrito de cuenta, ubicado en [REDACTED]

Asimismo, téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a [REDACTED]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

339
FORMA 32

305

307

28

[REDACTED]

por tener inscritos los datos de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Y únicamente para recibir notificaciones, toda clase de documentos y valores, hacer uso de medios electrónicos, a las personas que señala en su escrito.

Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Notifíquese personalmente al tercero interesado y por oficio a la autoridad responsable, así como a la Agente del Ministerio Público de la adscripción.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza. **Doy fe.**

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios 3172, 3173, 3174 y 3175 a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. **Conste.**

3
203534780067



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 300
2308

310

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE
HORAS DEL 23 FEB 2017 SE
NOTIFICA [REDACTED] A

LA RESOLUCIÓN QUE
ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS
FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE
AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON

FECHA

24 FEB 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE
ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

311

30

331

FORMA B-2

309

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Código

No. Ofi

Autoridad

Zona

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO S/Z
ADSCRITO.

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z
VALORES.

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL DE MÉXICO

3 FEB 23 1917
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

F. FORMA 13-2

32520

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

2017 FEB 23 AM 11:29

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO. SEXTA SALA CIVIL

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Códigos MET No Ofic

Autoridad

Zona

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO S/Z
ADSCRITO.

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z
VALORES

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

SEGUNDA
MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



393

32
311

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Código

No Ofic

Autoridad

Zona

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO S/Z
ADSCRITO.

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

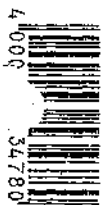
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z
VALORES.

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA

SEGUNDA
ERIA CI
MÉXICO



SEGUNDO
ATERIA CIVIL
DE MÉXICO

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

3692

2017 FEB 24 A 10:08

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE
JUICIOS DE AMPARO.

312

INTERVENCIÓN MINISTERIAL

JUICIO DE AMPARO:

QUEJOSA:

AUTORIDAD RESPONSABLE: SEXTA SALA CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

ACTO RECLAMADO: SENTENCIA DE 17 DE ENERO
DE 2017

INCIDENTE DE SUSPENSION.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2017.

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

La que suscribe, agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el C. Procurador General de la República para intervenir en el presente asunto, conforme al artículo 107 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5ª fracción IV de la Ley de Amparo, 3º y 4º fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ante Usted C. Juez comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y como lo prescribe el artículo 144 de la Ley de Amparo, formulo Intervención Ministerial, en audiencia incidental del juicio de amparo al rubro citado, solicitado por [REDACTED], por propio derecho, y a efecto de que sea glosado en autos y sea tomado en consideración al momento de emitir la resolución que en derecho proceda, exteriorizando previamente los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la parte quejosa promovió demanda de garantías, contra actos de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitando el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados en la presente demanda de garantías.



2.- Por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, éste Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías registrándola con el número [REDACTED] ordenó formar y tramitar por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados solicitando la rendición de los informes previos a las autoridades responsables.

FIJACIÓN DE LA LITIS

Los actos reclamados por el impetrante de garantías en esencia consisten en:

"... sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación [REDACTED] la cual confirma el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis..."

CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO

En relación a la existencia de los actos reclamados señalados con anterioridad, deberán presumirse ciertos para el sólo efecto de la suspensión, en términos de lo dispuesto por primer párrafo del Artículo 142 de la Ley de Amparo, en virtud de que a la fecha de elaboración de la presente intervención aún no obraban en autos los informes previos de las autoridades señaladas como responsables.

INTERVENCION MINISTERIAL.

I.- Esta Representación Social de la Federación estima que deberá de concederse la suspensión definitiva en relación a las consecuencias del acto reclamado, y toda vez que en el presente asunto se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; toda vez que, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones del orden público y si son de difícil reparación los daños y perjuicios que se podrían ocasionar al quejoso.

Ahora bien, el impetrante de amparo acredita de manera indiciaria su interés suspensorial, en virtud de que es parte demandada en el juicio de origen

Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada, cuyos datos de identificación, rubro y texto señalan:

Época: Octava Época
Registro: 220917

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo IX, Enero de 1992
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 262

"SUSPENSION PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar".

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Juez, Atentamente solicito:

PRIMERO.- Se tenga a esta Representación Social de la Federación, por presentada con el escrito de mérito, formulando en tiempo y forma legales, intervención ministerial en el **CUADERNO INCIDENTAL**.

SEGUNDO.- Conceder la suspensión definitiva.

TERCERO.- En su oportunidad emita su acuerdo favorable, a efecto de otorgar a la suscrita, copia de la resolución que se emita en el presente incidente de suspensión, ello con fundamento en lo preceptuado por el Artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, en atención a que así lo establece el artículo 2° de la Ley de Amparo.

ATENTAMENTE

LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE

LA FEDERACIÓN

LIC. ERICKA MANRIQUEZ CRUZ.



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

JUZGADO DECIMO SEGUNDO

MATERIA CIVIL

3748

2017 FEB 24 P 1:46

ASUNTO: INFORME PREVIO

AMPARO NÚMERO:

QUEJOSO:

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

JUZGADO 15 CIVIL

SECRETARIA "B"

EXP.

OF. NÚM.

En contestación a su oficio número 3175/2017 y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veintidós de febrero del presente año, dictado en el cuaderno de amparo citado al rubro, deducido del juicio ORDIANRIO CIVIL, promovido por [REDACTED] en contra de [REDACTED] de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, se rinde INFORME PREVIO en los siguientes términos: ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Ciudad de México, a 24 de Febrero de 2017.

EL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

MTRO. ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL



3750

2017 FEB 24 P 2:22

EN LA CIUDAD DE MÉXICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

36315

Asunto: Se ~~rinde informe~~ ^{Sírvase usted mencionar el número de Toca} ~~previo~~
por duplicado.

Amparo Número: [REDACTED]

TOCA NÚMERO [REDACTED]

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

SALA

Secretaría de Acuerdos

Toca Núm. _____

Of. Núm. 434

En atención a lo solicitado en su oficio número [REDACTED] de fecha veintidós de febrero del año en curso, recibido en esta sala el día veintitrés de febrero citado, en relación con el amparo anotado al rubro, promovido por [REDACTED], contra actos de esta sala, en vía de informe previo se rinde en los siguientes términos:

SI ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, en virtud de que, efectivamente esta sala dictó la resolución a que se refiere el quejoso, misma que fue publicada en el boletín judicial número OCHO, del día DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, habiendo surtido sus efectos legales el día hábil siguiente de su publicación, es decir, el DIECINUEVE DE ENERO CITADO. Respecto al cumplimiento de la suspensión, corresponde al C. Juez del conocimiento el acatamiento de la misma, toda vez que esta sala no tiene el carácter de ejecutora, quedando enterada de la suspensión concedida.

Sin más por el momento, reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DEL 2017.
EL C. PRESIDENTE DE LA SEXTA SALA CIVIL.

MAG. FRANCISCO JOSÉ HUBER OLEA CONTRÓ.

Jgch



333

316

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En la Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaría da cuenta al Juez con los oficios registrados con los números de correspondencia 3692, 3748 y 3750, relativos al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo

██████████ Conste.

318

Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete.

Agréguese el oficio de cuenta signado por la **Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita**; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 144 de Ley de Amparo, se tienen por formuladas sus manifestaciones a manera de alegatos; sin perjuicio de su relación en la celebración de la audiencia incidental.

Como lo solicita una vez que se dicte la resolución interlocutoria respectiva, comuníquesele vía oficio.

NO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

Por otra parte, ténganse por recibidos los oficios signados por el **Presidente de la Sexta Sala y el Juez Décimo Quinto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México**, mediante los cuales rinden sus respectivos informes previos; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, relaciónense los mismos en la audiencia incidental.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, que autoriza y da fe. **Doy fe.**

RG

3 203354 780074



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

333
317

33

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
28 FEB 2017 SE NOTIFICA A

317

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON

01 MAR 2017

FECHA
SURTIO

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA



SEGUNDA
MATERIA C
O SEGUNDA
MATERIA C
DE MÉXICO

5 203534 780072



39 1/2 318

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

TER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

anexo

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

320

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Código

Autoridad

Zona

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO S/Z
ADSCRITO

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE S/Z
VALORES.

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.



10 SEG DO
MATERI IVIL
DE MEXICO

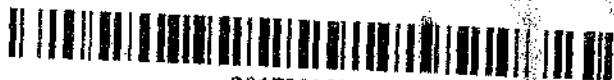


OFICIALÍA DE PARTES

Con anexo(s)

ID003096

24/02/2017 13:19



201700085605



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Dirección General Contenciosa

Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C" 321

Oficio No. [REDACTED]

QUEJOSO: [REDACTED]

JUICIO DE AMPARO: [REDACTED]
(CUADERNO INCIDENTAL)

ASUNTO: **COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES RINDE INFORME PREVIO.**

VENCIMIENTO: **01 DE MARZO DE 2017**

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017

INFORMACIÓN DE
CUENTAS

C. JUEZ DECIMOSEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. RODRIGO EDUARDO ESCALANTE RAMÍREZ, Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C", en representación de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, con fundamento en los artículos 38, fracción I, y antepenúltimo párrafo, y 53, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigente, y designando como delegados en términos del precepto 9 de la Ley de Amparo a los Licenciados Edgar Manuel Bonilla del Ángel, Karla Patricia Montoya Gutiérrez, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Melissa Fernanda Portillo Valdepeña, Gabriela Sánchez Guzmán, Manuel Erwin Vásquez Rafael, Carla Denise Ramos Domínguez, José Luis Moreno Martínez y Carlo Yabín Hernández Rangel, así como para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los CC. César Manuel Solórzano Millán y José Luis López Tapia, respetuosamente comparezco y expongo:

Que por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se rinde **INFORME PREVIO** en el juicio de amparo al rubro en cita, solicitado por auto de fecha 22 de febrero de 2017, manifestando lo siguiente:

ACTOS RECLAMADOS.

NO SON CIERTOS los actos reclamados por la quejosa en su demanda de amparo a la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**.

No obstante lo anterior, me permito informar a su Señoría, que el **Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B"** de esta Comisión, **retransmitió íntegramente**, en términos de la *Ley de Instituciones de Crédito*, a las instituciones financieras correspondientes, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho, el siguiente oficio:



- Número **2768** de fecha 05 de octubre de 2016; emitido por el **C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal**, derivado del Juicio Ordinario [REDACTED] de su índice, mediante el cual solicita información de las cuentas a nombre del quejoso.

IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN

ÚNICA.- Derivado de no ser ciertos los actos que se imputan a la responsable, consideramos que debe negarse la suspensión definitiva solicitada, ya que no existe materia sobre la cual pueda concederse. Es aplicable la Jurisprudencia Número 1128, de la Quinta Época, de la primera Sala, visible a la página 777 del Tomo VI, parte HO, del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dice:

"INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen las pruebas contra lo que en el se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario"

Por lo antes expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tener por rendido el informe previo por duplicado que se sirvió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

SEGUNDO.- Tener como delegadas y autorizadas a las personas que se citan en el cuerpo del presente curso.

TERCERO.- Permitir a los autorizados el uso de medios electrónicos, telefónicos y de cómputo, para tomar fotografías de los autos que integran el expediente.

CUARTO.- Negar a la quejosa la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos atribuidos a la autoridad informante.

En representación de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, con fundamento en los artículos 38, fracción I, y antepenúltimo párrafo, y 53, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigente, firma.

ATENTAMENTE.

LIC. RODRIGO EDUARDO ESCALANTE RAMÍREZ

Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C".

MEVR/JNH

JUZGADO DE
DE DISTRITO
PAZ CIUDA
DE DISTRITO
EN LA PLAZA



R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

402
32040
322

AUDIENCIA INCIDENTAL.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL
JUICIO DE AMPARO [REDACTED]

En la Ciudad de México, a las **nueve horas con quince minutos del primero de marzo de dos mil diecisiete**, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia incidental, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED] por propio derecho; contra actos de la **Sexta Sala y Juez Décimo Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, estando en audiencia pública el Juez **Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Francisco Peñaloza Heras**, asistido por la **Secretaria Angélica Flores Jáuregui**, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo **144** de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes ni persona alguna que las represente.

Acto seguido, la Secretaria hace relación de los autos y da cuenta con la apertura del incidente de suspensión efectuada mediante auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el cual se admitió a trámite la demanda, copia fotostática simple de la demanda de amparo, y del escrito aclaratorio proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el que se proveyó lo relativo a la suspensión provisional de los actos reclamados; las constancias de notificación de dicho proveído a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público adscrita, informes previos rendidos por las responsables; asimismo,



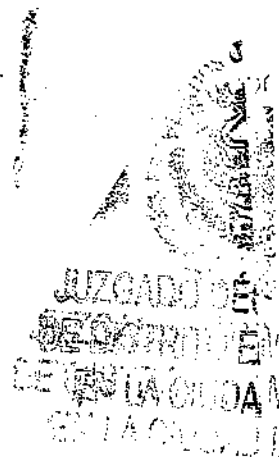
UNIDOS MEXICANOS
CASA SEGUNDO
MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

hace constar que a la fecha no obra constancia de notificación del tercero interesado [REDACTED]

Asimismo, da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia **4005**, signado por el **Director General Jurídico de Procedimientos "C"**, en representación de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, mediante el cual rinde su informe previo.

Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 144 de la ley de la materia, por rendidos y reproducidos en todas y cada una de sus partes los informes previos, relaciónese en la presente audiencia incidental y téngase por recibidos el oficio signado por el **Director General Jurídico de Procedimientos "C"**, en representación de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, mediante el cual rinde su informe previo, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, relaciónese el mismo en presente audiencia incidental.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que designa y como su domicilio el que señala en su oficio.





PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

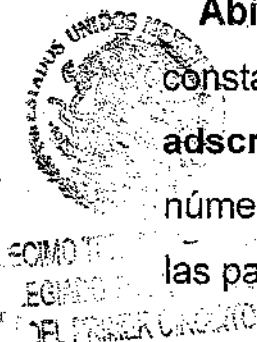
SECRETARÍA

321

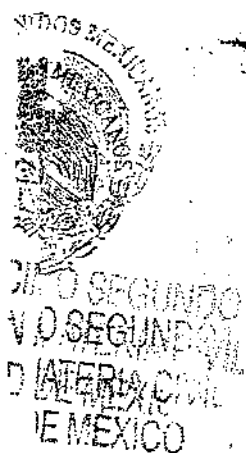
Abierto el período de pruebas: la Secretaría hace constar que la quejosa las aportó.

322

Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que ofreció el quejoso, consistente la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.



Abierto el período de alegatos: la Secretaría hace constar que la **Agente del Ministerio Público adscrita**, los formuló mediante escrito registrado con el número de intervención [REDACTED] sin que ninguna de las partes los formulara.



Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en lo establecido en el ordinal 144 de la Ley de Amparo en vigor, se tienen por formulados los alegatos de la **Agente del Ministerio Público adscrita**, y por perdido el derecho a las partes, para formularlos con posterioridad, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia incidental en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponda; y,

VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED] por propio derecho; contra actos de la **Sexta Sala, Juez Décimo**

5 203554 780081

Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y,

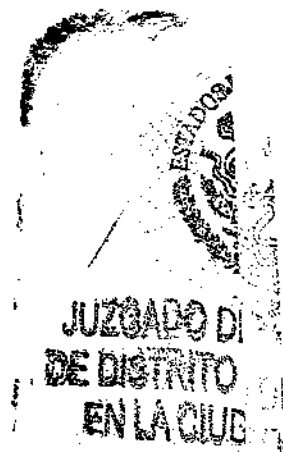
RESULTANDO:

PRIMERO. INICIO DE LA SUSPENSIÓN.

Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, turnado a este órgano jurisdiccional [REDACTED] solicitó la suspensión del acto reclamado.

SEGUNDO. TRÁMITE.

En auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número [REDACTED] se ordenó formar por duplicado el cuaderno incidental en que se actúa, en el que se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado, requiriéndose a las autoridades responsables sus informes previos; finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo en términos del acta que antecede; y,



CONSIDERANDO:

PRIMERO. COMPETENCIA.

Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en



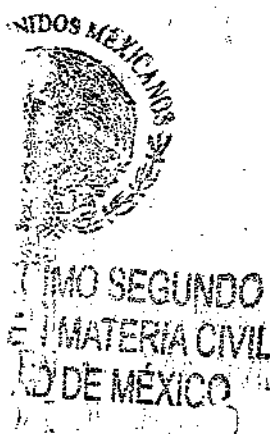
E JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

104
42322
324
términos de los artículos 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 125 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido por quien es parte en el procedimiento de origen tramitado ante autoridades con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional.

SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la ley de la materia, se precisa que el quejoso reclama:

La sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación [REDACTED] la cual confirma el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe cuales son las cuentas bancarias a nombre del quejoso, y remita copia certificada de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres años, así como su ejecución.



TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestaron la Sexta Sala y el Juez

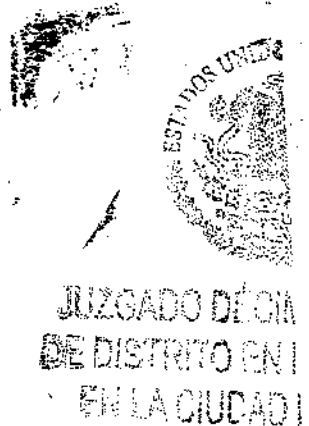
Décimo Quinto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes previos.

Por su parte, el Director General Jurídico de Procedimientos "C", en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negó el acto que se le atribuye no obstante, se le tiene por cierto toda vez que esta sólo tiene el carácter de ejecutora.

CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA.

Por lo que, en la presente suspensión se atenderá exclusivamente respecto a los efectos solicitados por la parte agraviada, sin atender a cuestiones que no fueron solicitadas, ello en cumplimiento a la jurisprudencia [REDACTED] aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de siete de noviembre de dos mil tres, del texto y rubro siguientes:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o





existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos."

Así como la tesis I. 4o. A. J/8, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y uno, página ciento treinta, Octava Época, que dispone:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE. En atención a la naturaleza jurídica de la suspensión definitiva que el Juez de Distrito otorga al quejoso, respecto de los actos reclamados atribuibles a las autoridades responsables, éstas, así como cualesquiera autoridad, están obligadas a respetarla, sin que estén facultadas para dejar insubsistente dicha medida cautelar mientras se encuentre vigente y corresponde al Juez de Distrito precisar su alcance, pues considerar lo contrario, a título de que se trata de actos nuevos, se prestaría a dejar en manos de la propias autoridades determinados efectos y alcances de la suspensión definitiva, lo que equivaldría a delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal y no a dichas autoridades, con lo que se desnaturalizan los efectos de la suspensión en el juicio de amparo."

En ese entendido, es conveniente establecer que para efectos de la suspensión, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.

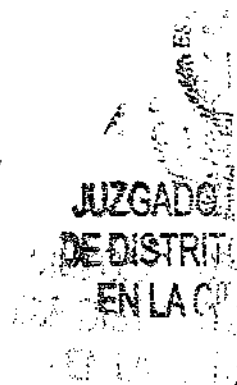
El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.

Ahora bien, de conformidad con las reformas al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mismas que entraron en vigor ciento veinte días posteriores a su publicación, los actos reclamados son susceptibles de suspenderse, cuando la naturaleza del acto lo permita, una vez realizado un análisis en el que se pondera la apariencia del buen derecho y el interés social.

a) Que la solicite el quejoso; y,

b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, **SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA**, solicitada por el quejoso para el efecto de que no se gire oficio a la **Comisión Nacional Bancaria y Valores**, para que





JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 1-11

106
324

rinda su informe de los estados de cuentas bancarias de los últimos tres años, en caso de haberse girado oficio, la citada autoridad se abstenga de proporcionar la información confidencial solicitada por el **Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México**, en el juicio ordinario civil [REDACTED] promovido por [REDACTED] en contra del aquí quejoso, hasta en tanto, las autoridades responsables tengan conocimiento de la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión y cause ejecutoria.

Lo anterior es así, dado que el quejoso acredita de manera indiciaria su interés suspensorial al ser parte demandada en el juicio de origen.

En el entendido que se deja plenitud de jurisdicción al juez de origen, para dictar aquellas medidas tendientes para la ejecución de sus resoluciones, ya que el procedimiento es de orden público y no puede suspenderse.

Dicha medida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtir si el quejoso no exhibe dentro del término de **cinco días**, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo una garantía mediante cualquiera de las formas por la cantidad de [REDACTED] ([REDACTED]).

La anterior cantidad se fija de manera discrecional tomando en consideración a la naturaleza del juicio de

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CINCO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO
J. DE MÉXICO

3
20353478008-1

origen; por el periodo de seis meses que es el tiempo probable en que se resolverá en definitiva el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, suma que esta autoridad de amparo decreta de conformidad con la facultad discrecional, que al efecto le confiere el artículo 132 de la ley de la materia.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 55/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:

"GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL."

La cantidad mencionada, tiene por objeto garantizar los posibles daños y perjuicios que con esta medida pudiera ocasionarles al tercero interesado, en caso de negarse o sobreseerse el amparo al quejoso.

Por otra parte, se requiere al quejoso, para que al momento de exhibir la garantía que se solicita; y de optarse por certificado de depósito, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en su artículo 883 ordena:

"Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia

JUZGADO DÉCIMO
DE DISTRITO EN
EN LA CIUDAD



F JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. 325

En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior." 327

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 125, 128 y 144, de la Ley de Amparo, se:

RESUELVE:

UNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.

Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público adscrita.

Así lo resolvió y firma, **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, que da fe.- Doy fe.

En esta fecha giraron los oficios 3663, 3664, 3665 y 3666 a la autoridad responsable, notificando la sentencia que antecede. Conste.



R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

326

EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL 02 MAR 2017, SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE.- LA ACTUARIA. *VB*

CON

03 MAR 2017

FECHA

SURTIÓ

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO.--

DOY FE.



[Signature]
LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA

SEGUNDO
JURADO CIVIL
MEXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL EDUARDO
MOLINA NO. 2, COL. DEL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO
CARRANZA, DISTRITO FEDERAL.

CITATORIO.

TERCERAS INTERESADAS: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

En la práctica de una diligencia Judicial de carácter personal, deberá presentarse al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, ubicado en Eduardo Molina Número 2, entre Sidar y Rovirosa, Colonia del Parque, delegación Venustiano Carranza, en el acceso 8, nivel plaza; con identificación oficial, dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día de hoy, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por la lista el auto dictado con fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, emitido en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número P [REDACTED] formado con motivo de la demanda promovida por [REDACTED]

contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Quinto, ambos Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dejo el presente citatorio, en virtud de no haber encontrado a

la parte buscada

[REDACTED] cerciorado de que me encuentro en el domicilio de la búsqueda por así habérmelo manifestado la persona que me [REDACTED] quien dijo llamarse [REDACTED] que [REDACTED]

y por los siguientes medios:
así como por el dicho de la persona que se atiende

y requerida de su presencia me informa quien me atiende que la búsqueda no se encuentra en ese momento por

que se ha pero que ahí

se reciban notificaciones

conformidad a lo dispuesto por el Art. 27, inciso b) de la Ley de Amparo; la persona con la que atiendo *del juzgado, Sr. Jorge* hoy a las *trece horas con dos minutos* del día *veintisiete de febrero* de dos mil diecisiete.

EL ACTUARIO JUDICIAL

Lic. Cristian Eduardo Ramos Serrano.

LOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO SEGUNDO
JUZGADO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO
JAL DE MÉXICO



INCIDENTE DE SUSPENSIÓN

En la ciudad de México, a las **trece horas con dos minutos** del día **veintisiete de febrero de dos mil diecisiete**, el suscrito **Cristian Eduardo Ramos Serrano**, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el incidente de suspensión [REDACTED] me constituí legalmente en el domicilio siguiente: [REDACTED]

[REDACTED] en busca de la Parte Tercero Interesado [REDACTED] y habiendo corroborado que es el domicilio señalado en autos, por las sendas placas oficiales colocadas en la esquina de dicha calle, la numeración del inmueble en que se actúa y por el dicho de la persona que me atiende, dijo llamarse Gerbacio Jiménez, no se identifica pero su media filiación es [REDACTED] compleción [REDACTED]

[REDACTED] de aproximadamente [REDACTED] años quien además refiere laborar en el lugar, conocer a la parte buscada, pero en este momento no se encuentran pero más tarde llegara; y cerciorado de que ahí puede ser notificado la parte buscada, por así manifestarlo textualmente que en ese lugar se recibe toda clase de notificaciones a nombre de la parte buscada, persona ante la cual me identifiqué plenamente como Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México mediante la credencial que me acredita como tal, y no habiendo encontrado a la parte en mención. Luego de la persona de referencia le dejé citatorio para que la parte buscada, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso B de la Ley de Amparo vigente, la persona buscada y/o sus autorizados para oír notificaciones (con identificación oficial vigente) acuda al órgano jurisdiccional de mi adscripción a notificarse, apercibida que en caso de no presentarse dentro del término de dos días hábiles siguientes, se le notificara por lista dicho proveído persona que recibe de conformidad dicho citatorio y SI firma la copia para constancia legal. Doy fe. Cristian Eduardo Ramos Serrano, Actuario judicial.



JUZGADO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

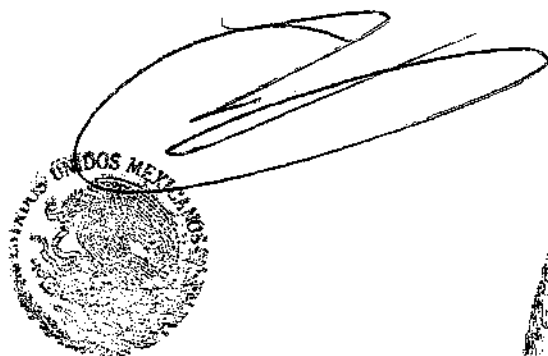


INCIDENTE DE SUSPENSIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En la ciudad de México, el dos de marzo del dos mil diecisiete, atento a lo manifestado en la razón anterior, y no habiéndose presentado la Parte Tercero Interesado [REDACTED] se procede a notificar por medio de lista, el proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el que se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados. Conste. Doy Fe. Cristian Eduardo Ramos Serrano, Actuario Judicial.

El tres de marzo de dos mil diecisiete, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refieren las razones que anteceden conforme a lo dispuesto en el artículo 31 fracción II de la Ley de Amparo vigente, Conste. Doy fe. Cristian Eduardo Ramos Serrano, Actuario Judicial.



COMO TERCER INTERESADO
ECIADO EN TERCER GRADO
DEL PRIMER GRADO



DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

50

330

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN





FECHA: UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE:

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SUSPENSIÓN DEFINITIVA.

Código	No. Oficio	Autoridad	Zona
 4 201700 366328		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO PÚBLICO)	(MINISTERIO S/Z
 4 201700 366427		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	S/Z
 4 201700 366526		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (AUTORIDAD RESPONSABLE)	S/Z
 4 201700 366625		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	S/Z

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA

JOSE SEGUN
VIAJERIA
DE
SEGUNDO
ERIA CIVIL
MEXICO





AGUATE

Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 331

Política de los Estados Unidos Mexicanos

TER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: [REDACTED]

NÚMERO: [REDACTED]

PROMOVIDO POR: [REDACTED]

ASUNTO: SUSPENSIÓN DEFINITIVA.

Código UNICAF	Ofici	Autoridad	Zona
4 201700 366625	[REDACTED]	AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO PÚBLICO)	(MINISTERIO S/Z
4 201700 366625	[REDACTED]	SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	
4 201700 366625	[REDACTED]	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (AUTORIDAD S/Z RESPONSABLE)	
4 201700 366625	[REDACTED]	JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S/Z (AUTORIDAD RESPONSABLE)	

ANTECEDENTE: EXP. [REDACTED]

ANTECEDENTE: TOCA. [REDACTED]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDOS MEXICANOS
SEXTA SALA CIVIL
DÉCIMO SEGUNDO
JUZGADO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 10-2

52

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 332"

Política de los Estados Unidos Mexicanos

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

33

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE:

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SUSPENSIÓN DEFINITIVA

Código	No. Ofici	Autoridad	Zona
4 201700 366328		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO (PÚBLICO)	(MINISTERIO S/Z)
4 201700 366427		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA S/Z CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	
4 201700 366526		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (AUTORIDAD S/Z RESPONSABLE)	
4 201700 366625		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S/Z (AUTORIDAD RESPONSABLE)	

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALÍA DE PARTES

Cdn anexo(s)

ID003042

02/03/2017 12:46



201700094484





DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 333

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN





FECHA: UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE:

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SUSPENSIÓN DEFINITIVA.

Código	No. Ofici	Autoridad	Zona
 4 201700 366328		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO (PÚBLICO)	(MINISTERIO S/Z
 4 201700 366427		SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA S/Z CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	
 4 201700 366526		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (AUTORIDAD S/Z RESPONSABLE)	
 4 201700 366625		JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S/Z (AUTORIDAD RESPONSABLE)	

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

TRIBUNAL DE JUSTICIA
DISTRITO

17 MAR - 2



2017 MAR 13 PM 5:31

13234
QUEJOSO: [REDACTED]

AMPARO INDIRECTO: [REDACTED]

R 14 A 9:00

DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL

CUADERNO INCIDENTAL

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FR LA [REDACTED]

*en billete de depósitos
Nº - 002954*

330

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

[REDACTED] por mi propio derecho;
personalidad debidamente reconocida y acreditada ante esta
Instancia Federal, ante Usted C. Juez con el debido
respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito estando en debidos
tiempo y forma, dentro del término de cinco días otorgados
al suscrito; vengo a dar cumplimiento a lo ordenado por
esta Instancia Federal mediante Audiencia INCIDENTAL de
fecha primero de marzo del año en curso; **EXHIBIENDO EN
ESTE ACTO LA GARANTIA REQUERIDA, MEDIANTE BILLETE DE
DEPOSITO NÚMERO [REDACTED]**, expedido por la
Institución Financiera BANSEFI, Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros S. N. C., por la cantidad de
[REDACTED] que tiene por
objeto garantizar los posibles daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse al tercero interesado con la
suspensión definitiva otorgada; lo anterior para todos los
efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto;

A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:

UNICO.- Tenerme por presentado en términos del presente
escrito, exhibiendo en tiempo y forma la garantía requerida
por esta Instancia Federal, para los efectos precisados en
el cuerpo del presente escrito.

Protesto lo necesario.

Ciudad de Mexico a diez de marzo de dos mil diecisiete.



Billete de Depósito

N

33

Importe con letra o con protectora	Importe
Nombre del Depositante	México, D.F.
	Fecha:
	Oficina
	Número:
A disposición de:	Clave

Por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo

Firma

Orden de Pago

Páguese a:

quien(es) firma(n) en seguida, para fines de identificación, la cantidad que ampara este billete de depósito

Firma del(de los) beneficiario(s) ante la autoridad

el a de de

Categoría

Categoría

Firma

Firma

Nombre completo

Nombre completo

Recibo

Recibí(mos) del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, la cantidad que ampara este documento

a de de

DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
JAD DE MEXICO

Firma del beneficiario al recibir el importe

Orden de Transferencia *

El presente billete de depósito se transfiere a:

el a de de

Categoría

Categoría

Firma

Firma

Nombre completo

Nombre completo

* La orden de transferencia sólo podrá dictarse a favor de otra autoridad

Condiciones de Pago

I.- La expedición del presente Billete de Depósito, faculta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, a proporcionar información a la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y a esta última a solicitar y recibir información respecto de su expedición y pago para el control del mismo, cuando se constituya a disposición del Poder Judicial de la Federación.

II.- Este billete sólo será pagado por orden de la autoridad a cuya disposición se haya expedido o de aquélla a quien se transfiera. Toda orden de pago y de transferencia se dictarán en los lugares correspondientes del propio billete.

III.- Cualquier enmienda o adición a la orden de pago carecerá de validez si no es salvada con nueva firma de la autoridad que la dicte.

IV.- La autoridad que dicte la orden de pago y el(los) beneficiario(s) de ésta, deberán acreditar, a satisfacción del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, su carácter, personalidad e identidad.

V.- Para fines de identificación, el(los) beneficiario(s) de la orden de pago deberá(n) firmar en presencia de la autoridad que la dicte, en el lugar destinado al efecto. La autoridad que entregue este billete sin el requisito anterior, será responsable del cobro indebido que se haga por tal motivo. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, podrá negarse a pagar el importe del billete, si le es presentado sin satisfacerse el requisito mencionado.

VI.- Este documento no es negociable ni podrá cobrarse a través de cámara de compensación. Sin embargo, la cobranza del mismo puede encomendarse a una institución bancaria, en los términos del artículo 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

VII.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cantidad amparada por este billete será cubierta en la misma plaza en que se constituyó el depósito, por la institución autorizada al efecto.

VIII.- El importe de este billete no causa intereses, rendimientos o contraprestación alguna a favor del depositante o su beneficiario.

IX.- El pago de la cantidad que ampara este billete de depósito, se hará contra la entrega del mismo.

X.- La compra de este billete implica la aceptación de estas condiciones.

JUDICIAL
DE DISTRICTO
ENLAC



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En la Ciudad de México, quince de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el escrito registrado con el número de correspondencia 4932, relativo al incidente de suspensión juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, quince de marzo de dos mil diecisiete.

Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso [REDACTED] mediante el cual exhibe el billete de depósito [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] ([REDACTED]) expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a fin de que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva dictada el uno de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la garantía y se ordena comunicar a las autoridades responsables.

Remítase el billete de referencia a la caja de valores de este Juzgado Federal, con el registro [REDACTED] para su guarda y custodia; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese por medio de oficio a las autoridades responsables.

Así lo proveyo y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza: Doy fe.

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios 4825, 4826 y 4827 a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. Conste.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 12

5. 337

33

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
16 MAR 2017 SE NOTIFICA A

LA RESOLUCIÓN
QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. LA
ACTUARIA

CON FECHA

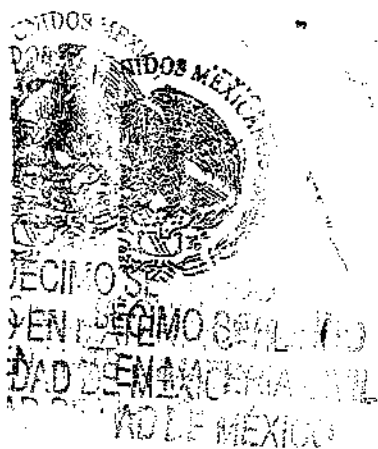
17 MAR 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

SECRETARÍA DE JUSTICIA
LEGISLACIÓN
DEL PRIMER CIRCUITO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

120 338
341

CIUDAD DE MÉXICO, QUINCE DEL MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE, SE HACE ENTREGA AL LICENCIADO EMMANUEL
CASTELLANOS ROSAS, ENCARGADO DE LA CAJA DE SEGURIDAD
DE ESTE JUZGADO, EL BILLETE DE DEPÓSITO [REDACTED] EXPEDIDO
POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS
FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, POR LA
CANTIDAD DE [REDACTED]
[REDACTED], DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN [REDACTED]
[REDACTED] PROMOVIDO POR [REDACTED] DOCUMENTO
QUE QUEDA REGISTRADO [REDACTED] EL NUMERO [REDACTED] - CONSTE.

ECIMO TERCER REGIONAL Entrega
LEGADO EN MATERIA
DEL PRIMER CIRCUITO

Angélica Flores Lauregui.

Recibi

Lic. Emmanuel Castellanos Rosas.

ECIMO TERCER REGIONAL
LEGADO EN MATERIA
DEL PRIMER CIRCUITO
MEXICO

5 203534780155

B+A

abogados

DECIMO SEGUNDO
DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

5042

2017 MAR 15 A 9:12

EN LA CIUDAD DE MEXICO

AMPARO INDIRECTO:

QUEJOSO:

INCIDENTE DE SUSPENSIONC. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MEXICO.

[REDACTED] en mi carácter de Mandatario Judicial del Quejoso [REDACTED] personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que tal como consta en autos, el Informe Justificado rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, menciona en el párrafo segundo de su segunda foja, que dicha entidad comenzó con la ejecución del pedimento del Juez natural (responsable ordenadora), al retransmitir íntegramente la solicitud de la información confidencial del hoy Quejoso (materia principal del presente juicio de amparo) a las instituciones financieras correspondientes, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho, tal como se observa en dicho párrafo, del cual agregó una fotografía fiel:

FOLIO

A CIVIL

CO.

SHCP

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

NO SON CIERTOS los actos reclamados por la quejosa en su demanda de amparo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

No obstante lo anterior, me permito informar a su Señoría, que el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de esta Comisión, **retransmitió íntegramente**, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, a las instituciones financieras correspondientes, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho, el siguiente oficio:

- Número [REDACTED] de fecha 05 de octubre de 2016: emitido por el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, derivado del Juicio Ordinario Civil [REDACTED] de su índice, mediante el cual solicita información de las cuentas a nombre del quejoso.

Pues bien, toda vez que dicha responsable ejecutora retransmitió la solicitud a todas las instituciones financieras correspondientes, y con el fin de que dichas instituciones NO proporcionen la información confidencial del Quejoso en alcance a la Suspensión Definitiva concedida en el Incidente en que se actúa, y que no quede el juicio principal

sin materia, solicito se ordene de manera urgente a dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el apercibimiento de ley más efectivo que en derecho proceda, que esta a su vez ordene a dichas Instituciones Financieras que no son autoridades responsables, que se abstengan de enviar la información confidencial requerida por dicho juez, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.

Por lo expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

UNICO ORDENAR se gire Oficio a la responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenándole que de manera urgente con el apercibimiento de ley más efectivo, ordene a vez a las Instituciones Financieras que se abstengan de enviar la información confidencial requerida por el juez natural.

Protesto lo necesario.

Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil diecisiete.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

61

341

341

403

En la Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el escrito registrado con el número de correspondencia **5042**, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por [REDACTED] en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso [REDACTED] en atención a su contenido, gírese atento oficio a la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, para que a su vez informe a las instituciones financieras, de que se abstengan de enviar la información confidencial requerida por el juzgado de origen, sobre las cuentas bancarias de [REDACTED] toda vez que se advierte que esta ya retransmitió a dichas instituciones la solicitud del juez, hasta en tanto tenga conocimiento de la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión y esta cause ejecutoria, en acatamiento a la suspensión definitiva, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización [REDACTED]



10 SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

[REDACTED] lo anterior, tomando como valor la unidad de medida y actualización de [REDACTED] (moneda nacional), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, como está previsto en el precepto 237, fracción I, del mismo ordenamiento, en relación con el numeral único, en

3 205534 789142

concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notifíquese por medio de oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, que autoriza y da fe. **Doy fe.**

18

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número y se giraron los oficios a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. **Conste.**

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 1-2

34
62 342

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL 17 MAR 2017

SE NOTIFICA A

los pcvts

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA

CON

FECHA

22 MAR 2017

SURTIÓ

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

33

GUARDADO
CIVIL
MÉXICO

3 203534 780142



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE SOLICITA A LA COMISION

Código	No Oficio	Autoridad	Zon
		COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	S/Z



OFICIALÍA DE PARTES
Sin anexo(s)

ID003042 17/03/2017 10:58



201700119327

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO





ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: EXHIBE GARANTÍA.

Código No Oficio

Autoridad

Zona

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR SIZ
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. SIZ

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUD SIZ
DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

2017 MAR 16 3:11 PM

SEXTA SALA CIVIL

RECEBIDO
EN SECCIÓN
DE ATERIXCO
DE MÉXICO



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO





ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

6345

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: EXHIBE GARANTIA.



DECIMO TERCERO
JUZGADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO

No Oficio

Autoridad

Zona

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR SIZ
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. SIZ

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD SIZ
DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.



OFICIAJÍA DE PARTES

Sin anexo(s)

ID003096

16/03/2017 10:32



201700117194



JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.





5552

JUEZ DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

66/346
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

2017 MAR 24 A 9:00

anexo

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

Dirección General Contenciosa

Dirección General Adjunta Jurídica de
Procedimientos "C"

Oficio No.

2017 MAR 23 P 6:46

OFICINA DE CONTENCIOSA
N
O
U
U
N

Congelamiento de Cuentas.

QUEJOSO:

JUICIO DE AMPARO:

(CUADERNO INCIDENTAL)

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

23 MAR 2017

DIR. GRAL. DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y REC. MATERIALES
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

ASUNTO: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y
DE VALORES ATIENDE REQUERIMIENTO.

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.

Anexo oficios
de
retransmisión
/ oficio 2768

C. JUEZ DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EL C. MANUEL ERWIN VASQUEZ RAFAEL, delegado de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, respetuosamente comparezco y
digo:

En atención al oficio de fecha 16 de marzo de 2017, me permito remitir copia certificada de los
oficios números [redacted] mediante los cuales el
Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" retransmitió -en términos de la Ley de
Instituciones de Crédito- a las correspondientes instituciones financieras el acuerdo que por esta
se otorga a efecto de que las instituciones financieras den cumplimiento conforme a derecho.

Asimismo se adjunta al presente copia certificada de los oficios [redacted]
[redacted] mediante los cuales el Director General Adjunto de Atención a Autoridades
"B" retransmitió -en términos de la Ley de Instituciones de Crédito- a las correspondientes
instituciones financieras el acuerdo de fecha 1 de marzo de 2017 por el cual se concedió la
suspensión definitiva a la quejosa. En ese sentido igualmente se anexa copia certificada de las
respuestas de las instituciones financieras American Express Bank (México), S.A., Banco Nacional
de México, S.A., HSBC México, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A. y BBVA Bancomer, S.A. a los
citados oficios, así como la bitácora mediante la cual se aprecia que las instituciones financieras
restantes manifestaron que "NO EXISTE INFORMACIÓN".



Finalmente se adjunta copia certificada del oficio 2768 del Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, así como del oficio número [REDACTED] mediante el cual el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" comunicó a la citada autoridad ordenadora no poder acceder a su solicitud ya que resulta necesario que indicara el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa a efecto de evitar homonimia y preservar el secreto financiero tutelado en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Con lo que se atiende el requerimiento de su Señoría.

Por lo antes expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito:

PRIMERO. - Tener al suscrito con el carácter que ostento, desahogando en tiempo y forma el requerimiento ordenado por sus Señoría.

SEGUNDO. - Dejar sin efectos el apercibimiento decretado en Acuerdo de esa misma fecha en el juicio de amparo número [REDACTED] promovido por [REDACTED]

Como delegado de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, firma.

ATENTAMENTE.

LIC. MANUEL ERWIN VASQUEZ RAFAEL.

CMSM

JUZGADO DE
DE DIST. DE DIST.
EN LA SIENDE



**TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
DF**

"Independencia judicial, valor institucional
autonomía"



**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PRESENTE**

**JUZGADO
15° CIVIL
SECRETARIA
"B"
EXPEDIENTE**

**OFICIO
NUMERO**

2768

30848

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en los autos
del juicio **ORDINARIO CIVIL**, seguido por [REDACTED]
[REDACTED] en contra de [REDACTED]

[REDACTED] giro a Usted el presente para que de no haber
inconveniente legal alguno, se sirva informar lo siguiente: a) Dirá
si existen cuentas bancarias a nombre de [REDACTED]
[REDACTED] b) Informe cuales son las cuentas bancarias a nombre
de [REDACTED] c) Informe los saldos que ha tenido
las cuentas a nombre de [REDACTED] d) Remita
copia certificada de los estados de cuenta de las cuentas bancarias
a nombre de [REDACTED] de los últimos 3 años, esto
para estar ofrecido como prueba en el presente juicio.

Reitero a Usted mi más atenta y distinguida
consideración.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016

EL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO

RECIBIDO
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

17.10.2016

DIR. GRAL. ADJUNTA

DE ATENCIÓN A

AUTORIDADES B

MTRO. ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ

OFICIA DE PARTES
17/10/2016 09:55
Sin anexos



**SEGUNDO
JURISDICCION CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO**



**JUZGADO DÉCIMO QUINTO
DE LO CIVIL**

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Dirección General de Atención al Cliente
Dirección General Adjunta de Atención al Cliente



CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE OCTUBRE DE 2016

OFICIO
EXP. -



LEGISLACIÓN
DEL

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Juzgado de lo Civil Quinto de lo Civil
Secretaría
Niños Héroes No. 132, 8° Piso, Torre Sur,
Col. Doctores, Deleg. Cuauhtémoc

SEGUNDO
TERIA CIVIL
MÉXICO

[REDACTED] VS
[REDACTED]
ORDINARIO CIVIL
EXP. [REDACTED]

At'n. MTRO. ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ
JUEZ

Nos referimos a su oficio 2768 derivado del expediente [REDACTED] en el que solicita diversa información.

Sobre el particular, con fundamento en los Artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos permitimos comunicarle no poder acceder a su amable solicitud, toda vez que a fin de realizar debidamente las gestiones correspondientes, resulta necesario indique el Registro Federal de Contribuyentes de [REDACTED] lo anterior resulta necesario a efecto de evitar homonimia y con ello preservar el Secreto Financiero tutelado en el Artículo 142 de la referida Ley.

Atento a lo anterior, damos por atendida su amable solicitud, reiterándole las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

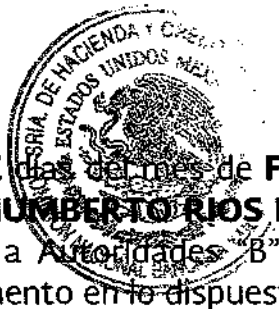
MTRO. HUMBERTO RIOS RUIZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

CNBV COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

26 octubre 2016

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

[Signature]
VLVC/GGM



En la Ciudad de México a los **VEINTISIETE** días del mes de **FEBRERO** de dos mil diecisiete, el que suscribe **MAESTRO HUMBERTO RIOS RUIZ**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **DOS FOJAS ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con las que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista-----



ELABORADO POR
GESTIÓN DE
TEL. 011

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
16 DE SEPTIEMBRE, NO. 73, PLANTA BAJA
CENTRO
06000 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Año 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. JOSE ANTONIO FLORES PALOMARES
Subdirector Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio [REDACTED] de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI/113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BBVA BANCOMER, S.A.
Av. Universidad No. 1200,
Col. Xoco,
03339 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 19061 Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Lic. Denise Ganelón Pérez
Subdirector Jurídico de Asuntos Administrativos

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio [REDACTED] de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

SCOTIABANK INVEREAT S.A.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 1 Piso 2

Col. Lomas de Chapultepec

11009 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Juan Carlos Villaseñor González
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, en su derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGÍTIMA, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta los efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

HSBC MEXICO, S.A.

Paseo de la Reforma No. 243, 3er. Piso,

Col. Cuauhtémoc,

06500 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Mary Incarnation De Silva
Director de Operaciones

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO**
Av. Prol. Paseo de la Reforma No. 500, Módulo 206,
2do. Nivel,
Col. Lomas de Santa Fe,
01219 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información

At'n: **LIC. ROBERTO HERNANDEZ GARCIA**
Director Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Av. Prolongación Reforma No. 1230

Col. Cruz Manca Santa Fe

05300 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. HECTOR MARTIN AVILA FLORES
Director General Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

134
352

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA
Y ARMADA, S.N.C.**

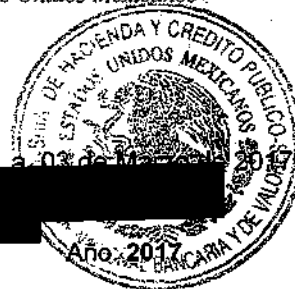
Av. Industria Militar No. 1055, Tercer piso
Col. Lomas de Sotelo,
11200 Ciudad De Mexico.

Ciudad de México a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: C.Tte. Cor. Intdte. D.E.M. Mario Gerardo García Urbiña
Director de Planeación Estratégica y Financiera

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, en el marco del derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le otorga a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiendo que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INTERACCIONES, S.A.
Paseo de la Reforma No. 383, 15vo. Piso,
Col. Cuauhtémoc,
06500 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información

At'n: **C.P. José González Huerta**
Director Corporativo de Contraloría Interna

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha **01 de Marzo de 2017**, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTR. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INBURSA, S.A.
Insurgentes Sur No. 3500,
Col. Peña Pobre,
14060 Ciudad de MéxicoCiudad de México, a 03 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 15061

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Sergio Sosa Perez
Subdirector de Auditoría

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, con apego a derecho.

Asimismo, se advierte que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA y VERDADERA, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.

Ave. Pedro Ramírez Vázquez 200-12

Valle Oriente

66269 San Pedro Garza García N.L.

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. JOSE MANUEL RIVERO SANTOS
Director General.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**CNBV**COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCA AFIRME, S. A.

Av. Juárez Sur No. 800, Esq. con Padre Mier

Col. Centro,

64000 Monterrey, N.L.

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

**ASUNTO:** Se requiere información.**A/rn: LIC. PABLO J. CHAPA VILLARREAL**
Director General.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCA MIFEL, S.A.

Presidente Masarik No. 214, 2° piso

Col. Polanco Chapultepec (Plaza Magna),

11560 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Claudia Mayorga Luna
Subdirector Jurídico Corporativo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión, en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INVEX, S.A.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 46,

Torre Esmeralda I, Piso 7, Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año 2017



ASUNTO: Se requiere información.

A/r: MAURICIO RAMÓN CHAIDEZ GARCÍA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradezco que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndose que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO DEL BAJIO, S.A.
Manuel J. Clouthier No. 508
Col. Jardines del Campestre
37128 León, Gto.

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 19061 Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Ing. Guillermo González Grycuk
Director de Cumplimiento Normativo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

Prol. Paseo de la Reforma No. 1015, Piso 23
Desarrollo Santa Fe
01376 Ciudad de México

Ciudad de México, 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **LIC. JUAN SEGUNDO PUIG
DIRECTOR GENERAL**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**; en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A.

Paseo de la Reforma No. 250, Piso 11, Torre Niza

Juárez

06600 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

A/n: **ABRAHAM QUEVEDO CORONA**
DIRECTOR DE OPERACIONES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea, en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO J.P. MORGAN, S.A.
Prol. Paseo de las Palmas No. 405 Piso 16
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017

**ASUNTO:** Se requiere información.**At'n: Sr. Eduardo Cepeda Fernández**
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTR. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

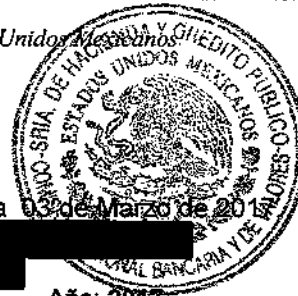
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.
Av. Paseo de la Reforma No. 115, piso 19,
Lomas de Chapultepec I sección
11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 19061 Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Maria del Rocio Vilchis Mora**
Directora de Operaciones

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HABILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANSI, S.A.

Av. Terranova No. 325,

Fracc. Terranova, Sector Hidalgo,

44660 Guadalajara, Jal.

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año 2017

**ASUNTO:** Se requiere información.**At'n: RAFAEL OLVERA ESCALONA**
Director General.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que, en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.

Av. Patriotismo No.635, piso 2

Cd. de los Deportes

03710 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **JOSE RAMON BORDES ABASCAL**
VICEPRESIDENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto, sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO VE POR MAS, S.A.

Paseo de la Reforma No.365

Col. Cuauhtémoc

06500 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n:

LIC. JAIME RUIZ SACRISTAN
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradecerá que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, e en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le confiere a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS
FINANCIEROS, S.N.C.**

Río Magdalena No. 115,

Col. Tizapan San Angel,

01090 Ciudad de México

Ciudad de México, 03 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Araceli Penelope Solis Díaz
Gerente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

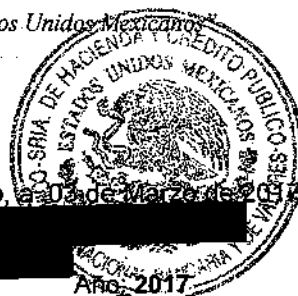
NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"BANCO MONEX, S.A.
Paseo de la Reforma No. 289, Piso 14
Col. Juárez
06600 Ciudad de MéxicoCiudad de México, a 03 de Marzo de 2017.
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 19061

ASUNTO: Se requiere información.

RECIBIDO
LEGISLACIÓN
DEL TRIBUNALA/n: LIC. MOISES TIKTIN NICKIN
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DÍAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO AZTECA, S.A.

Insurgentes Sur No. 3579 Piso 6 Torre II

Col. La Joya

14090 Ciudad de México

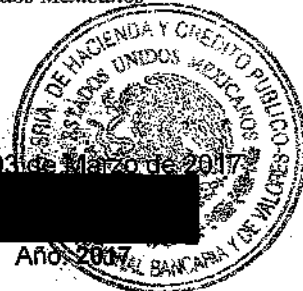
Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: ÁNGEL JUAN QUEZADA GASCA
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto, sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

361
443
13

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades,
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

DEUTSCHE BANK MEXICO S.A.
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40, piso 17
Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México

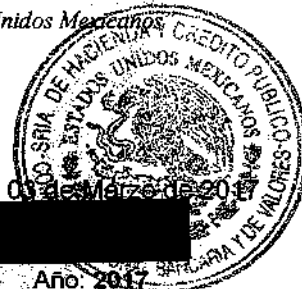
Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n:

PAOLA PIOTTI ACOSTA
Directora de Legal y Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones II y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO MULTIVA, S.A.

Cerrada de Tecamachalco No. 45, 5to. piso

Reforma Social,

11650 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Lic. Carlos Ignacio Soto Manzo
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

CONSUBANCO, S.A.

Avenida Santa Fe No. 481, piso 16,

Colonia Cruz Manca,

05349 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Lic. Gabriela Hernández Morgan
Directo Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradecerá que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esta Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndose que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

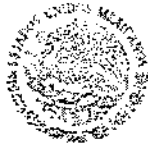
03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO ACTINVER, S.A.

Guillermo Gonzalez Camarena No. 1200, 5to. piso,
Centro Cd. Santa Fe,
01210 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Pabel Estudillo Herrera
Director Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión, sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017.

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE
BOULEVARD AVILA CAMACHO NO. 32, PISO 12
EDIFICIO TORRE ESMERAL
LOMAS DE CHAPULTEPEC
11000 CIUDAD DE MÉXICO

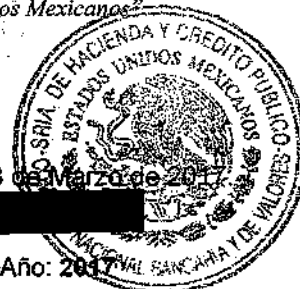
Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Lic. Rosa María Bracamontes Gómez
Abogado Consultivo Adscrito a la Contraloría

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que, en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

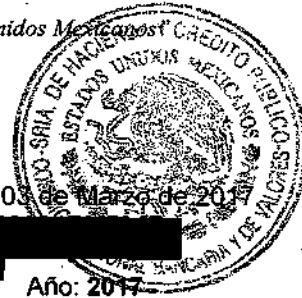
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.
PASEO DE LA REFORMA No. 115,
LOMAS DE CHAPULTEPEC,
11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 19061 Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Mónica Raquel Cervantes Filoteo**
Representante legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO COMPARTAMOS S.A.**INSURGENTES SUR NO. 1458****ACTIPAN****03230 Ciudad de México**

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n:

C. EDGARDO GUARNEROS MARTINEZ**SUBDIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO Y NORMATIVO**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le comunicó a esta Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

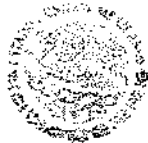
03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

UBS BANK MEXICO, S.A.

Campos Eliseos No. 345, Piso 19,

Polanco,

11560 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: [REDACTED] Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Lic. Úrsula Ramírez Ponce
CONTRALOR NORMATIVO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A.
AV. INSURGENTES SUR No. 1235,
EXTREMADURA INSURGENTES,
03740 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **MARÍA DEL CARMEN ARENAS MENDOZA**
DIRECTORA DE FINANZAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE; o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DÍAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

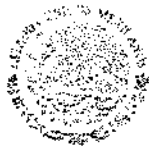
MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BARCLAYS BANK MEXICO, S.A.

REFORMA NO. 505, PISO 41

CUAUHTEMOC,

06500 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Josué Martínez Galicia
Director de Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión, sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

448

18

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO AHORRO FAMSA, S.A.
AVE. PINO SUAREZ No. 1202 NORTE, 3er PISO "A",
CENTRO
64000 MONTERREY, N.L.

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017

**ASUNTO:** Se requiere información.
A/n: Jesus Guadalupe Elizondo Elizondo
Gerente de Contabilidad

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndola que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B
NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCOPPEL, S.A.

Av. Insurgentes Sur No. 553, Piso 6,

Col. Escandón,

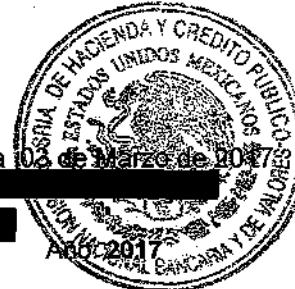
11800 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

A/r: José Armando Ongay Miramontes
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión Sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**CNBV**COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

CIBANCO, S.A.

Paseo de las Palmas No. 215

Col. Lomas de Chapultepec,

11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 15061

Año: 2017

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **LIC. MARIO ALBERTO MACIEL CASTRO**

Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradecerá que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

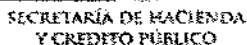
Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES


 BANCO NACIONAL DE MEXICO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Banca Nacional de México
 Año: 2017

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO**
Lago Zurich No.245, piso 10,
Ampliación Granada,
11529 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017
 Oficio No. [REDACTED]
 Exp. [REDACTED]
 Folio: 19061 Año: 2017

At'n: LIC. JOSE RUBEN DE LA MORA BERENGUER
DIRECTOR GENERAL

al respecto, sea en
manera.

el día hábil siguiente
esta Comisión sitúa
Alvaro Obregón
Comisión de Responsa-
bilidad establecida

Alvaro Obregón
Corresponsable
establecida

Alvaro Obregón
Corresponsable
establecida

Alvaro Obregón
Corresponsable
establecida

[Handwritten signature]

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

450367

20

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

VOLKSWAGEN BANK, S.A.
Autopista México-Puebla Km. 116
San Lorenzo Almecatla
72700 Cuautlancingo, Puebla

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017

**ASUNTO:** Se requiere información.**At'n: LIC. ALBERTO HERNANDO MAXIMILIANO MILLÁN NÚÑEZ**
Gerente de Jurídico, Normatividad y Comunicación

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y ESCRITA, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO BASE, S.A.

Av. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez No. 200-4

Piso 7

Colonia Valle Oriente

66269 San Pedro Garza García N.L.

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

A/n: C.P Edgar Iván Contreras Blanco
Contralor Normativo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANKAOL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE

Av. Santa Fe, No. 495, piso 22

Cruz Manca

05349 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

A/n: Carlos Ignacio Olguín Martínez
Director de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que, en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO FORJADORES, S.A.

Boulevard Manuel Avila Camacho

Reforma Social

11650 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: José de Jesús Herrera Rosas
Director de Administración y Finanzas

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

369
370

152

22

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.

RÍO ELBA NO. 20, PISO 3

CUAUHTÉMOC

06500 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Eduardo Ramírez Lua**
Oficial de Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, en el que **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, con base a derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esta Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

FUNDACION DONDE BANCO, S.A.

Alejandro Dumas No. 50

Polanco

11560 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

A/n: Klaus Boker Trauwitz
Miembro del Consejo de Administración

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

**DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

370

371

453

37

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO BANCREA, S.A.
AV. RÍO DE LA PLATA ORIENTE NO. 102, PISO 2
DEL VALLE
66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



Año: 2017

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **BENITO TORRES HERNÁNDEZ**
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradece que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO PAGATODO, S.A.
BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 66
PISO 2 CENTRO COMERCIAL LOMAS PLAZA
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN.
11000 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Alejandro Ramos Larios
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 04 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto, sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

371

372

154

24

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

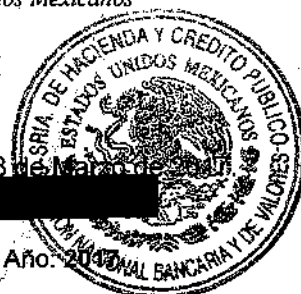
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO SABADELL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. NO. 193,
PISO 15
GRANADA
11520 CIUDAD DE MÉXICO**

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio. 19067 Año. 2017



ASUNTO: Se requiere información.

A/rn: **JOSE OSCAR ALVARADO SAINZ
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONTROL
INTERNO**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

**MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"**



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO FINTEGRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

BOSQUE DE ALISOS NÚM 45 B, PISO 4

BOSQUES DE LAS LOMAS

05120 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 03 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061



ASUNTO: Se requiere información.

**At'n: JOSE LUIS MARTINEZ OREJAS
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIONES Y
FINANZAS**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto, sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

**DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

372
373

135

25

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**
Paseo De La Reforma Torre B Piso 18
Juárez
06600 Ciudad de México

Ciudad de México, a 03 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 19061

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Yaogang Chen**
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 3665/2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



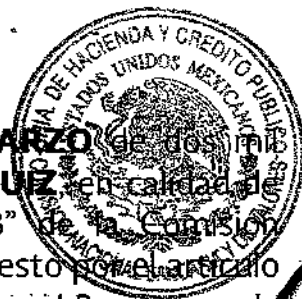
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

03/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

En la Ciudad de México a los **TRES** días del mes de **MARZO** de dos mil diecisiete, el que suscribe **MAESTRO HUMBERTO RIOS RUIZ** en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **VEINTICINCO FOJAS ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con las que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

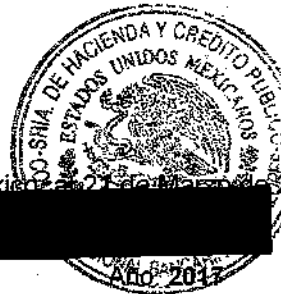
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
16 DE SEPTIEMBRE NO. 73, PLANTA BAJA
CENTRO
06000 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. JOSE ANTONIO FLORES PALOMARES
Subdirector JurídicoECOM
LEGADO
DEL PRIMER OFICIO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, con lo que se agradece.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esta Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BBVA BANCOMER, S.A.
Av. Universidad No. 1200,
Col. Xoco,
03339 Ciudad de México

Ciudad de México

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Lic. Denise Ganelón Pérez**
Subdirector Jurídico de Asuntos Administrativos

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

374

157

375

2

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 1 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec
11009 Ciudad de México

Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Juan Carlos Villaseñor González
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos, la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

HSBC MEXICO, S.A.

Paseo de la Reforma No. 243, 3er. Piso,
Col. Cuauhtémoc,
06500 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Mary Incarnation De Silva
Director de Operaciones

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión, en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO**

Av. Prol. Paseo de la Reforma No. 500, Módulo 206,
2do. Nivel,
Col. Lomas de Santa Fe,
01219 Ciudad de México

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año 2017

ASUNTO: Se requiere información.

A/rn: **LIC. ROBERTO HERNANDEZ GARCIA**
Director Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de Institución Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, en la forma siguiente:

Asimismo, se le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esta Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Av. Prolongación Reforma No. 1230
Col. Cruz Manca Santa Fe,
05300 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017.
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. HECTOR MARTIN AVILA FLORES
Director General Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

376
377
4

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA
Y ARMADA, S.N.C.**

Av. Industria Militar No. 1055, Tercer piso
Col. Lomas de Sotelo,
11200 Ciudad De Mexico

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: [REDACTED]



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: C.Tte. Cor. Intdte. D.E.M. Mario Gerardo García Urbiña
Director de Planeación Estratégica y Financiera

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

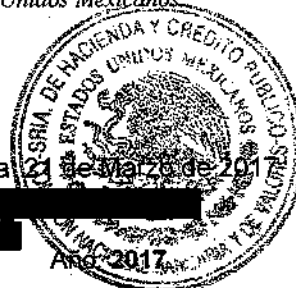
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INTERACCIONES, S.A.
Paseo de la Reforma No. 383, 15vo. Piso,
Col. Cuauhtémoc,
06500 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: C.P. José González Huerta
Director Corporativo de Contraloría Interna

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

377

378

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INBURSA, S.A.
Insurgentes Sur No. 3580
Col. Peña Pobre,
14060 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Sergio Sosa Perez**
Subdirector de Auditoría

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, con el debido derecho.

Asimismo, se agradecerá que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.

Ave. Pedro Ramírez Vázquez 200-12

Valle Oriente

66269 San Pedro Garza García N.L.

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. JOSE MANUEL RIVERO SANTOS
Director General.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

378

379

401

6

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCA AFIRME, S. A.

Av. Juárez Sur No. 800 Esq. con Padre Mier
Col. Centro,
64000 Monterrey, N.L.

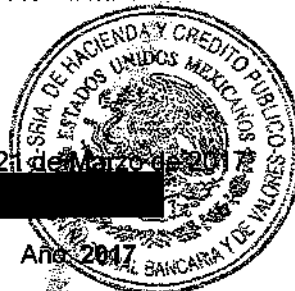
Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. PABLO J. CHAPA VILLARREAL
Director General.

COMO TERCER TRIBUNAL
LEGISLADO EN LA CIRCUNSTANCIA
DEL PRIMER CIRCUITO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCA MIFEL, S.A.

Presidente Masarik No. 214, 2° piso

Col. Polanco Chapultepec (Plaza Magna),

11560 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Claudia Mayorga Luna**
Subdirector Jurídico Corporativo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INVEX, S.A.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40,

Torre Esmeralda I, Piso 7, Lomas de Chapultepec

11000 Ciudad de México

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017

ASUNTO: Se requiere información.**At'n: MAURICIO RAMÓN CHAIDEZ GARCÍA**
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, así como a derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le da a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibido que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO DEL BAJIO, S.A.

Manuel J. Clouthier No. 508

Col. Jardines del Campestre

37128 León, Gto.

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Ing. Guillermo González Grycuk
Director de Cumplimiento Normativo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

163 380

8

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICOCOMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**INVESTIA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

Prol. Paseo de la Reforma No. 1615, Piso 23

Desarrollo Santa Fe

01376 Ciudad de México

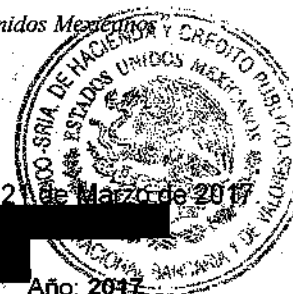
Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017

**ASUNTO:** Se requiere información.**At'n: LIC. JUAN SEGUNDO PUIG
DIRECTOR GENERAL**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A.
Paseo de la Reforma No. 250, Piso 11, Torre Niza
Juárez
06600 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: ABRAHAM QUEVEDO CORONA
DIRECTOR DE OPERACIONES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO J.P. MORGAN, S.A.
Prol. Paseo de las Palmas No. 405 Piso 16
Col. Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de MéxicoCiudad de México, a 21 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Sr. Eduardo Cepeda Fernández
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, en el ámbito de su competencia.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA y LEGÍBIL o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta su efecto la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.
Av. Paseo de la Reforma No. 115, piso 19,
Lomas de Chapultepec I sección.
11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Maria del Rocio Vilchis Mora
Directora de Operaciones

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto, sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

LC5 382

10

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANSI, S.A.

Av. Terranova No. 325,

Fracc. Terranova, Sector Hidalgo,

44660 Guadalajara, Jal.

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

**ASUNTO:** Se requiere información.**At'n: RAFAEL OLVERA ESCALONA**
Director General.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

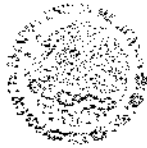
MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.

Av. Patriotismo No.635, piso 2

Cd. de los Deportes

03710 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **JOSE RAMON BORDES ABASCAL**
VICEPRESIDENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017 de fecha 15 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

400

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO VE POR MAS, S.A.

Paseo de la Reforma No. 365

Col. Cuauhtémoc

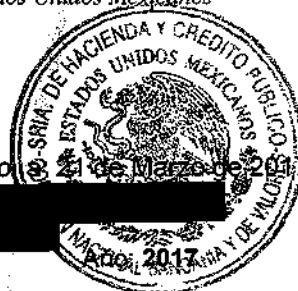
06500 Ciudad de México

Ciudad de México

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **LIC. JAIME RUIZ SACRISTAN**
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS
FINANCIEROS, S.N.C.**

Río Magdalena No. 115,

Col. Tizapan San Angel,

01090 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Araceli Penelope Solis Diaz
Gerente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO MONEX, S.A.

Paseo de la Reforma No. 284, Piso 14

Col. Juárez

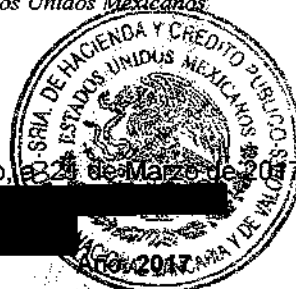
06600 Ciudad de México

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n:

LIC. MOISES TIKTIN NICKIN
Director General

RECIBIDO
LEGADO
DEL PRIMER

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO AZTECA, S.A.
Insurgentes Sur No. 3579 Piso 6 Torre II
Col. La Joya
14090 Ciudad de México

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: ÁNGEL JUAN QUEZADA GASCA
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"

CNBV COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.

Blvd. Manuel Avila Camacho No.40, piso 17

Lomas de Chapultepec

11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: PAOLA PIOTTI ACOSTA
Directora de Legal y Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a la Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO MULTIVA, S.A.

Cerrada de Tecamachalco No. 45, 5to. piso

Reforma Social,

11650 Ciudad de México

Ciudad de México

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio [REDACTED]



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Lic. Carlos Ignacio Soto Manzo
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

385

14

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

CONSUBANCO, S.A.

Avenida Santa Fe No. 481, piso 16,

Colonia Cruz Manca,

05349 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Lic. Gabriela Hernández Morgan
Directo Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
AJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO ACTINVER, S.A.

Guillermo Gonzalez Cámara No. 1200, 5to. piso,

Centro Cd. Santa Fe,

01210 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Pabel Estudillo Herrera
Director Jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE
BOULEVARD AVILA CAMACHO NO. 32, PISO 12
EDIFICIO TORRE ESMERAL
LOMAS DE CHAPULTEPEC
11000 CIUDAD DE MÉXICO**

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204 Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

**At'n: Lic. Rosa María Bracamontes Gómez
Abogado Consultivo Adscrito a la Contraloría**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, de acuerdo a derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

CIMO SEGUNDO
Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABLES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

**MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"**



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

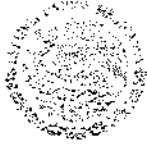
21/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

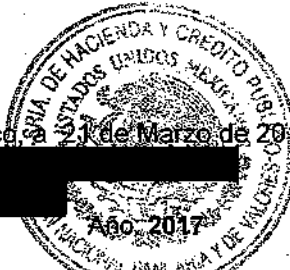
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.
PASEO DE LA REFORMA No.115,
LOMAS DE CHAPULTEPEC,
11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Mónica Raquel Cervantes Filoteo
Representante legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO COMPARTAMOS, S.A.

INSURGENTES SUR NO. 1458

ACTIPAN

03230 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: C. EDGARDO GUARNEROS MARTINEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO Y NORMATIVO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, se agradecerá que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

UBS BANK MEXICO, S.A.

Campos Eliseos No. 345, Piso 19,

Polanco,

11560 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

A/rn: Lic. Úrsula Ramírez Ponce
CONTRALOR NORMATIVO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

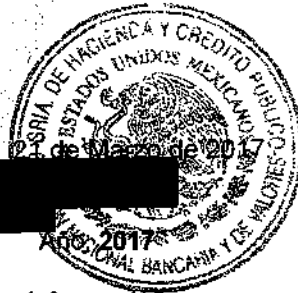
388

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A.
AV. INSURGENTES SUR No. 1235,
EXTREMADURA INSURGENTES,
03740 CIUDAD DE MÉXICOCiudad de México, a 21 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **MARÍA DEL CARMÉN ARENAS MENDOZA**
DIRECTORA DE FINANZAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esta Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BARCLAYS BANK MEXICO, S.A.

REFORMA NO. 505, PISO 41

CUAUHTEMOC,

06500 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Josué Martínez Galicia
Director de Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017 de fecha 15 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"**BANCO AHORRO FAMSA, S.A.**
AVE. PINO SUAREZ No. 4202 NORTE, 3er PISO "A",
CENTRO
64000 MONTERREY, N.L.

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

**ASUNTO:** Se requiere información**At'n: Jesus Guadalupe Elizondo Elizondo**
Gerente de Contabilidad

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTR. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCOPPEL, S.A.

Av. Insurgentes Sur No. 553, Piso 6,

Col. Escandón,

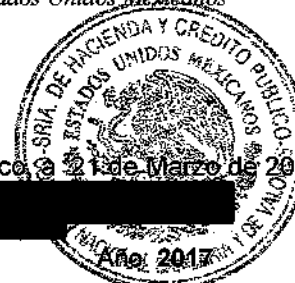
11800 Ciudad de México

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: José Armando Ongay Miramontes
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

CIBANCO, S.A.
Paseo de las Palmas No. 215
Col. Lomas de Chapultepec,
11000 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. MARIO ALBERTO MACIEL CASTRO
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y VISIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le indica a esta Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO**
Lago Zurich No.245, piso 10,
Ampliación Granada,
11529 Ciudad de México

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **LIC. JOSE RUBEN DE LA MORA BERENGUER**
DIRECTOR GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

VOLKSWAGEN BANK, S.A.

Autopista México-Puebla Km. 116

San Lorenzo Almecatla

72700 Cuautlancingo, Puebla

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: LIC. ALBERTO HERNANDO MAXIMILIANO MILLÁN NÚÑEZ
Gerente de Jurídico, Normatividad y Comunicación

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO BASE, S.A.
Av. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez No. 200-4
Piso 7
Colonia Valle Oriente
66269 San Pedro Garza García N.L.

Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017
Oficio No. [REDACTED]
Exp. [REDACTED]
Folio: 24204 AÑO 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **C.P Edgar Iván Contreras Blanco**
Contralor Normativo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

292

215

21

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANKAOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE

Av. Santa Fe, No. 495, piso 22

Cruz Manca

05349 Ciudad de México

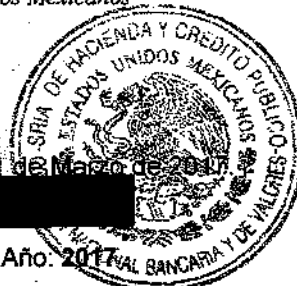
Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Carlos Ignacio Olgún Martínez
Director de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibido que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO FORJADORES, S.A.

Boulevard Manuel Avila Camacho

Reforma Social

11650 Ciudad de México

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: José de Jesús Herrera Rosas
Director de Administración y Finanzas

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

393

1110

22

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.
RÍO ELBA NO. 20, PISO 3
CUAUHTÉMOC
06500 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Eduardo Ramírez Lua
Oficial de Cumplimiento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le da a esa Institución de Crédito, un plazo de DOS DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES BNOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

FUNDACION DONDE BANCO, S.A.

Alejandro Dumas No. 50

Polanco

11560 Ciudad de México

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Klaus Boker Trauwitz
Miembro del Consejo de Administración

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión, situadas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."***VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO BANCREA, S. DE CV
AV. RÍO DE LA PLATA ORIENTE NO. 102, PISO 2
DEL VALLE
66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. 24204

Exp.

Folio: 24204

Año: 2017

**ASUNTO:** Se requiere información.At'n: **BENITO TORRES HERNÁNDEZ**
OFICIAL DE CUMPLIMIENTORECIBIDO
LEGISLACIÓN
DEL PODER JUDICIAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo conforme a derecho.

Asimismo, se agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGÍBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibido que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RÍOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**NOTA:** En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

BANCO PAGATODO, S.A.
BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 66
PISO 2 CENTRO COMERCIAL LOMAS PLAZA
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN.
11000 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 21 de Marzo de 2017.

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017

ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Alejandro Ramos Larios
Representante Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio **5017/2017**, de fecha **16 de Marzo de 2017**, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. NO. 193,
PISO 15
GRANADA
11520 CIUDAD DE MÉXICO**

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017

**ASUNTO:** Se requiere información.

**At'n: JOSE OSCAR ALVARADO SAINZ
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONTROL
INTERNO**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que, en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

**MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"**

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sirvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**BANCO FINTERRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

**BOSQUE DE ALISOS NÚM 45 B, PISO 4
BOSQUES DE LAS LOMAS**

05120 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

**A/n: JOSE LUIS MARTINEZ OREJAS
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIONES Y
FINANZAS**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por **EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto, sea en forma **COMPLETA Y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

**MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"**



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

**DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B**

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



CNBV

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**
Paseo De La Reforma Torre B Piso 18
Juárez
06600 Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: Yaogang Chen
Director General

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, en forma a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ATENCION A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B"

**MIZUHO BANK MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE
PASEO DE LA REFORMA
JUÁREZ
06600 CIUDAD DE MEXICO**

Ciudad de México, a 21 de Marzo de 2017

Oficio No. [REDACTED]

Exp. [REDACTED]

Folio: 24204

Año: 2017



ASUNTO: Se requiere información.

At'n: **Adrián Chacón Juárez**
Director Ejecutivo de Legal y Compliance

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 5017/2017, de fecha 16 de Marzo de 2017, emitido por el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA Y LEGIBLE, y en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **DOS DIAS HÁBILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibido que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 110 fracción XI, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

MTRO. HUMBERTO RIOS RUÍZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "B"

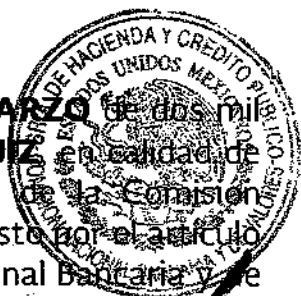
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

21/03/2017

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES B

NOTA: En su contestación sírvase citar número de oficio y expediente.
RCFF.

En la Ciudad de México a los **VEINTIUN** días del mes de **MARZO** de dos mil diecisiete, el que suscribe **MAESTRO HUMBERTO RIOS RUIZ** en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **VEINTISEIS FOJAS ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con las que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista-----



JUZGADO DÉCIMO
DISTRITO EN M
EN LA CIUDAD D

334 100

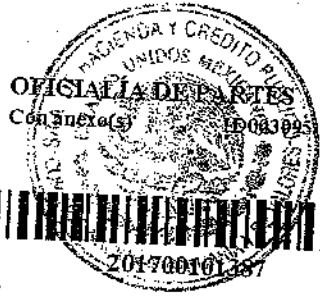
401



Bank

Lunes 06 de marzo de 2017.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades B



07/03/2017 14:21

Atención [Redacted]

Asunto:	Oficio:	[Redacted]
	Expediente:	[Redacted]
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Tipo de respuesta:	Negativa
Tipo de asunto:	Información

Observaciones

En atención al oficio señalado al rubro, nos permitimos hacer de su conocimiento que con los datos proporcionados por la autoridad no se localizó la información solicitada, por lo que en caso de que la autoridad requirente cuente con mayores elementos de soporte para su localización, estaremos a la espera de los mismos en un nuevo requerimiento.

[Redacted]

[Redacted]

SMM



Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
COE Atención a Autoridades CDMX
16 de Septiembre No. 71-3er. Piso
Col.-Centro, C.P. 06000,

Martes, 07 de marzo de 2017

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades B



OFICIALÍA DE PARTES
Sin anexo(s)



201700103107

Atención Humberto Ríos Ruiz

	Asunto:	Oficio:
		[Redacted]
	Expediente:	[Redacted]
	Folio:	19061
	Autoridad solicitante:	PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Observaciones

Se toma nota del incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo número [Redacted] promovido por [Redacted] y de lo resuelto en fecha 01 de marzo de 2017 en el que se le concede la suspensión definitiva al [Redacted] [Redacted], quedando en espera de sus atentas instrucciones.

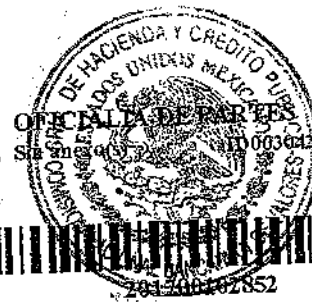
La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado por la Autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad, con fundamento en los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Int



Martes, 07 de Marzo 2017.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos
eventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a
Autoridades B



08/03/2017 13:00



Atención [REDACTED]

	Asunto:	[REDACTED]
	Oficio:	[REDACTED]
	Expediente:	[REDACTED]
	Folio:	[REDACTED]
	Autoridad solicitante:	Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

Observaciones

En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 147 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, se toma nota de lo manifestado en el oficio 3665/2017 adjunto al oficio que se contesta.

Asimismo, en caso de requerir alguna información de esta Institución de Crédito, se solicita a su Señoría instrucciones expresas y claras a efecto de que en su momento se rinda el informe respectivo.

LIC. [REDACTED]

Abogado Externo.
HSBC MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC.

484 403
400
400

BANORTE

lartes, 07 de marzo de 2017.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades B

Atención



Sin anexos 07/03/2017 16:00



201700101998

Asunto:	Oficio:
	Expediente:
	Folio:
	Autoridad solicitante: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Observaciones:

En atención al oficio señalado al rubro se informa a esa H. Comisión que esta Institución se da por enterada del acuerdo que emite el Juzgado de Distrito conocedor del presente juicio de garantías, promovido por la quejosa quedando en espera de que la autoridad nos notifique que la parte quejosa ya garantizó ante la autoridad exactora, a fin de que surta sus efectos la suspensión concedida.

EN MATERIA C
DAD DE MÉXICO

GERENTE/ANALISTA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

485404
401



Miércoles, 08 de marzo de 2017

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Sección General Adjunta de Atención a Autoridades B



08/03/2017 15:05



Atención Humberto Ríos Ruiz

Asunto:	Oficio:	
	Expediente:	
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Observaciones

Esta Entidad Financiera procede a informar lo siguiente:

ÚNICO. Se procede a tomar atenta nota de la suspensión definitiva otorgada en el juicio de amparo [REDACTED] IV, para el efecto de que la Autoridad se abstenga de proporcionar información confidencial, y rendir información de los estados de cuentas bancarias respecto al quejoso [REDACTED] Haciendo de su conocimiento que las cuentas a nombre de la persona antes detallada, se encuentran libres de afectación.

SEGUNDO.

El presente informe se rinde en términos de lo estipulado por el artículo 5, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los artículos 46, 97, 117 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 2, fracción V, inciso a), artículo 9, fracción I de las "Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta" y artículo 2, fracción V, inciso a), 4, fracción II, inciso a), 6 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión, siendo el uso y divulgación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, su absoluta responsabilidad.



BBVA. BANCOMER, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

En la Ciudad de México a los **VEINTIUN** días del mes de **MARZO** de dos mil diecisiete, el que suscribe **MAESTRO HUMBERTO RIOS RUIZ**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **CINCO FOJAS ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con las que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista

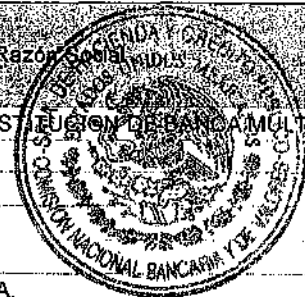


ALCADADO DÉCIM
DESTRITO LIA
EN LA CIUDAD DE

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Consulta Control de Expedientes en Recepción Respuestas SIT

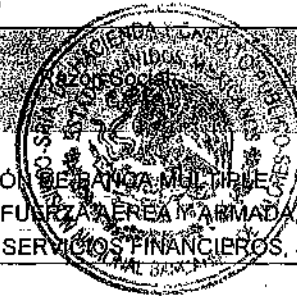
Folio Enlace	Año	Sector Financiero	Descripción Sector financiero	Razón Social
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO INTERACCIONES, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO INBURSA, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCA MIFEL, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO INVEX, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO DEL BAJO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANSI, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO J.P. MORGAN, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	CIBANCO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCA AFIRME, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO AZTECA, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO VE POR MAS, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO MONEX, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	INVESTABANK, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANKAOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BARCLAYS BANK MEXICO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO COMPARTAMOS, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BS BANK MEXICO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTERCAM GRUPO FINAN
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO AHORRO FAMSA, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO PAGATODO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO MULTIVA, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCOPPEL, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	CONSUBANCO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO ACTINVER, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BC CAPITAL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	VOLKSWAGEN BANK, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO FORJADORES, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	FUNDACION DONDE BANCO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO BANAREA, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	BANCO FIDELITY, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA-MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Consulta Control de Expedientes en Recepción Respuestas SITI

	Folio Enlace	Año	Sector Financiero	Descripción Sector financiero	Id Moral	Razón Social
41		2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANCO BASE, S.A.
42		2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
43		2017		BANCA DE DESARROLLO		BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA MARMADA, S.N.C.
44		2017		BANCA DE DESARROLLO		BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.



COMO TERCERO
ENCUENTRO EN EL
DEL PRIMER EJECUTIVO



COMO SEGUNDO
N MATERIA CIVIL
D DE MÉXICO

407
404

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Consulta Control de Expedientes en Recepción Respuestas SITI

	Número de Oficio	Número Control Interno	Fecha Envío	Folio Envío	Información
1	214-2/SJ-4262448/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-08 16:53:15.310	0	
2	214-2/SJ-4262448/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-08 18:13:32.910	0	
3	214-2/SJ-4262451/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 15:49:16.920	0	
4	214-2/SJ-4262452/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 08:37:23.070	0	
5	214-2/SJ-4262455/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 17:47:45.130	0	
6	214-2/SJ-4262453/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 13:39:26.690	0	
7	214-2/SJ-4262456/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 13:46:35.967	0	
8	214-2/SJ-4262457/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 12:32:55.670	0	
9	214-2/SJ-4262462/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 17:07:18.673	0	
10	214-2/SJ-4262460/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 15:50:11.017	0	
11	214-2/SJ-4262480/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-10 20:01:23.160	0	
12	214-2/SJ-4262454/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 18:09:22.720	0	
13	214-2/SJ-4262467/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 17:56:45.153	0	
14	214-2/SJ-4262464/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 12:06:04.657	0	
15	214-2/SJ-4262466/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 18:03:07.387	0	
16	214-2/SJ-4262461/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 16:31:23.600	0	
17	214-2/SJ-4262458/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 18:17:48.040	0	
18	214-2/SJ-4262459/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 19:19:08.517	0	
19	214-2/SJ-4262468/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 12:06:46.680	0	
20	214-2/SJ-4262473/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 11:58:46.943	0	
21	214-2/SJ-4262484/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-03 18:28:31.200	0	
22	214-2/SJ-4262477/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 18:33:37.290	0	
23	214-2/SJ-4262476/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-04 11:48:32.357	0	
24	214-2/SJ-4262474/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 19:34:34.580	0	
25	214-2/SJ-4262475/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 12:54:42.607	0	
26	214-2/SJ-4262481/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 16:43:50.017	0	
27	214-2/SJ-4262478/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 11:29:09.437	0	
28	214-2/SJ-4262489/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 09:56:34.973	0	
29	214-2/SJ-4262469/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 17:25:45.957	0	
30	214-2/SJ-4262479/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 15:07:05.773	0	
31	214-2/SJ-4262470/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 10:04:29.880	0	
32	214-2/SJ-4262471/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 12:36:01.860	0	
33	214-2/SJ-4262472/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 19:43:26.287	0	
34	214-2/SJ-4262482/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 15:06:25.152	0	
35	214-2/SJ-4262485/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 12:26:16.643	0	
36	214-2/SJ-4262486/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 19:18:44.390	0	
37	214-2/SJ-4262487/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 18:36:46.670	0	
38	214-2/SJ-4262488/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 13:45:24.730	0	
39	214-2/SJ-4262491/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 18:10:04.710	0	
40	214-2/SJ-4262492/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 10:59:13.673	0	



FUNDO
RIA CIVIL

133 405

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Consulta Control de Expedientes en Recepción Respuestas SIT

	Numero de Oficio	Numero Control Interno	Fecha Envio	Folio Envio	Información
41	214-2/SJ-4262483/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-06 15:45:20.390	0	
42	214-2/SJ-4262490/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 16:48:54.530	0	
43	214-2/SJ-4262450/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-07 11:43:42.180	0	
44	214-2/SJ-4262465/2017	J-6543/17 RFF	2017-03-08 18:06:54.027	0	

GUNDO
RIA CIVIL
EXICO

En la Ciudad de México a los **VEINTIUN** días del mes de **MARZO** de dos mil diecisiete, el que suscribe **MAESTRO HUMBERTO RIOS RUIZ**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B3" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **CUATRO FOJAS ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con las que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista-----



ALZADO DE
DE DISTRITO
EN LA CIUDAD

410
014

107 207

607 409

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Consulta Control de Expedientes en Recepción Respuestas SITI



Folio/Enlace	Año	Sector Financiero	Descripción Sector financiero	Id. Moral	Razón Social
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANCA MIFEL, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANCO DEL BAJIO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANSI, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANKAOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		CONSUBANCO, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		VOLKSWAGEN BANK, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANCO FORJADORES, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		BANCO BANCREA, S.A.
	2017		INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE		INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA


CIMO SEGUNDO
N MATERIA CIVIL
D DE MEXICO

En la Ciudad de México a los **VEINTIUN** días del mes de **MARZO** de dos mil diecisiete, el que suscribe **MAESTRO HUMBERTO RIOS RUIZ**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **DOS FOJAS ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con las que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista-----



JUZGADO DÉCIMO S
DE DISTRITO EN MATI
EN LA CIUDAD DE M

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Consulta Control de Expedientes en Recepción Respuestas SIT

	Número de Oficio	Número Control Interno	Fecha Envío	Folio Envío	Información
1	214-2/SJ-4294376/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 12:26:22.483	0	
2	214-2/SJ-4294374/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 13:13:22.930	0	
3	214-2/SJ-4294378/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 11:18:01.443	0	
4	214-2/SJ-4294383/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 09:29:46.993	0	
5	214-2/SJ-4294382/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 12:36:46.170	0	
6	214-2/SJ-4294405/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 10:37:20.070	0	
7	214-2/SJ-4294391/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 13:22:39.547	0	
8	214-2/SJ-4294403/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 11:18:37.277	0	
9	214-2/SJ-4294406/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 11:35:24.117	0	
10	214-2/SJ-4294409/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-21 12:11:11.240	0	
11	214-2/SJ-4294413/2017	J-8035/17 RFF	2017-03-17 18:01:59.860	0	

En la Ciudad de México a los **VEINTIUN** días del mes de **MARZO** de dos mil diecisiete, el que suscribe **MAESTRO HUMBERTO RIOS RUIZ**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **DOS FOJAS ÚTILES**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con las que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista-----



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

411
~~408~~
~~412~~
351

En la Ciudad de México, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia **5552**, relativo al incidente de suspensión derivado juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

Tengase por recibido el oficio de cuenta signado por el delegado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en auto de dieciséis de marzo del presente año, y al afecto remite copia certificada de los oficios [REDACTED] al [REDACTED] [REDACTED] mediante los cuales el Director General adjunto de atención a Autoridades "B" retransmitió, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, a las correspondientes instituciones financieras la resolución de uno de marzo del año que transcorre que concedió la suspensión definitiva; asimismo, anexa copia certificada de las respuestas dadas por estas, así como la bitácora mediante la cual se aprecia que las instituciones financieras manifestaron que "no existe información"; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretada en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Notifiquese.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Angélica Flores Jáuregui**, quien autoriza. Doy fe.

3 203634 780159



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA P-2

412

409

35

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
28 MAR 2017 SE NOTIFICA A

las partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON

29 MAR 2017

FECHA
SURTIO

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY
FE

LA ACTUARÍA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

DECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO

3 203534 780 159



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: INCIDENTE

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: EXHIBE GARANTIA

Código

No. Oficio

Autoridad

Zona



UNIDOS MEX

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR S/Z
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. S/Z



JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUD S/Z
DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE: EXP.

ANTECEDENTE: TOCA.

CIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
AD DE MÉXICO





TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

414
~~411~~
415
356
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO: [REDACTED]

PROMOVIDO POR: [REDACTED]

ASUNTO: CUMPLIMIENTO.

Código No. Oficio

Autoridad

Zon

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SIZ
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y SIZ
VALORES.

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA SIZ
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP [REDACTED]

TOCA [REDACTED]

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL
1900 ENERO 27
SEGUNDO
MATERIA CIVIL
MÉXICO
SEXTA SALA CIVIL



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO





TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: CUMPLIMIENTO.

Código No Oficio

Autoridad

Zon

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SIZ
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y SIZ
VALORES.

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA SIZ
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP

TOCA

MO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
D DE MÉXICO

OFICIALÍA DE PARTES
Sin anexo(s)

ID003042

30/01/2018 13:50



201800042743



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: CUMPLIMIENTO.

CÓDIGO No Oficio

Autoridad

Zon

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL S/Z
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y S/Z
VALORES.

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z
CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTE: EXP

TOCA

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



B+A

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CIF 5C

2018 FEB -6 21 5:50

DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

7621
QUEJOSO: [REDACTED]
JUICIO: AMPARO INDIRECTO
EXPEDIENTE: [REDACTED]

07 417
2337
2018 FEB -7 A 9:00
356
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

[REDACTED], por mi propio derecho, personalidad que tengo debidamente reconocida y acreditada en los autos del expediente al rubro citado, ante Usted C. Juez de Distrito con el debido respeto, comparezco y expongo:

QUEJOSO

DEL

Que por medio del presente escrito, estando en debidos tiempo y forma, vengo a desahogar la vista otorgada al suscrito mediante proveído de fecha veintinueve de enero del año en curso; respecto del auto que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en ese sentido, vengo a solicitar respetuosamente a esta H. Instancia que de no existir inconveniente legal alguno, se ordene la devolución de la garantía exhibida mediante escrito fecha 13 de marzo de 2017, por el suscrito mediante billete de depósito número [REDACTED] expedido por la institución financiera BANSEFI, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C, por la cantidad de [REDACTED] por conducto y de manera indistinta a los CC. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] previa razón que por su recibo obre en autos.

Dicha devolución resulta procedente en virtud de que aun y cuando le fue concedida la protección federal al suscrito (y como quedó demostrado en autos) **NO se causó perjuicio alguno a la parte tercero interesada**, además de que el auto arriba citado ordenó que el expediente fuera archivado como un asunto totalmente concluido sin relevancia documental y susceptible de depuración. Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Se tenga por reconocida la personalidad que sustenta realizando las manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente escrito.

SEGUNDO.- Ordenar la devolución de la garantía exhibida por el suscrito, misma que es referida en el cuerpo del presente

419 416

500
071
220
35c

escrito, por conducto y de manera indistinta de las personas mencionadas para tales efectos.

Protesto lo necesario.



Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil dieciocho.

SEGUNDA OFICINA
DEL FOLIO 100



SEGUNDA
OFICINA CIVIL

SEGUNDA
OFICINA CIVIL
FOLIO 100

420
0747
QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO INDIRECTO [REDACTED]

PRINCIPAL

QUINTO DEGRADO (SEGUNDO)

TERCERA CIVIL

2412

2015 FEB -7 P 1:2353

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

[REDACTED], en mi calidad de
apoderada de [REDACTED] mismo que acredito con el poder notarial
que corre agregado en autos, respetuosamente, expongo:

Vengo a solicitar, a costa de mi representado
copia certificada por duplicado y separado del poder notarial mediante el cual se
acredita la personalidad con la que me ostento.

PRIMO TERCER CIRCUITO
LEGADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

Por lo expuesto,

A USTED, C. JUEZ, atentamente pido, se sirva:

PRIMERO.- Tener a la suscrita acreditando la
personalidad con la que me ostento.

SEGUNDO.- Solicitando las copias certificadas
descritas.

Protesto lo necesario

DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

421

418

422

381

En la Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al Juez con los escritos registrados con los números de correspondencia 2337 y 2412, relativos al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso [REDACTED] mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED]

expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que constituye la garantía que le fuera señalada para que surtiera efectos la suspensión definitiva del acto reclamado; atento a lo anterior, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, póngase a disposición del promovente en el local de este Juzgado Federal el billete de depósito de referencia, por conducto de cualquiera de las personas que indica, previa comparecencia y endoso que se realice del mismo, con el apercibimiento que de no recoger dicho billete en el término de dos años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se remitirá a la Tesorería de la Federación, lo anterior con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, 75 Sexta Parte, materia Administrativa, Común, que dice:

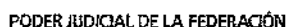
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIANZA PARA LA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO. PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL. Conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en efectivo o en valores, prescribirán a favor del erario federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente se pueda exigir su devolución. En las condiciones anteriores, es obvio que si un quejoso solicita la devolución de la fianza que exhibió para que surta efectos la suspensión provisional después de haber transcurrido los dos años a que se refiere el invocado artículo 43 de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, no procede su devolución, en virtud de haber transcurrido el término de prescripción a favor del erario federal y por ende debe remitirse el billete de depósito o la garantía constituida a la Tesorería General de la Federación, para que ingrese dicha cantidad al erario federal."

Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por [REDACTED] en su carácter de apoderada del tercero interesado [REDACTED] personalidad que acredita con copia certificada del instrumento notarial, en atención a su solicitud, sin que haya lugar de expedirle copia certificada de dicho poder notarial, en virtud este fue puesto a disposición en auto de veintinueve de enero del presente año para dentro del término de **noventa días**, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlo.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Carlos René Hernández Maza**, quien autoriza. Doy fe.

RG



FORMA B.

422

17



36

09 FEB 2018

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

CON FECHA

12 FEB 2018

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

22-58900-1
 MEXICO
 1

3 205534 780



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

423 420
FORMA 1
424
031
COMPARECENCIA

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del **trece de febrero de dos mil dieciocho**, ante el licenciado **Whilliams Tony González Jiménez**, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, comparece [REDACTED]

[REDACTED] autorizado del quejoso [REDACTED] quien se identifica con la credencial de elector [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, que contiene una fotografía cuyos rasgos concuerdan fielmente con los de la compareciente, de la cual se anexa copia fotostática para debida constancia, manifestando que su presencia en este juzgado es en cumplimiento al proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio de amparo [REDACTED] en que se autorizó la devolución de las documentales exhibidas, las cuales obran en las fojas 48 a 53. Acto seguido, se le hace la entrega del documento indicado, el que recibe de conformidad.

Asimismo, el compareciente manifiesta que igualmente es su intención recoger el billete de depósito [REDACTED] expedido por el banco del ahorro nacional y servicios financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] mismo que se exhibió para garantizar la suspensión definitiva decretada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo [REDACTED], lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en proveído de **ocho de febrero de dos mil dieciocho**, se procede a cerrar la presente acta de comparecencia,

RECIBIDO
RIA
O SEGUNDO
EXICO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO



firmando al calce para su debida constancia los que en
ella intervinieron. Doy fe.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

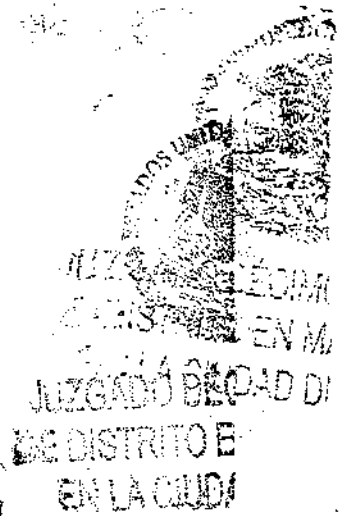
COMPARECIENTE



SECRETARIO DEL JUZGADO

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MEXICO


WILLIAMS TONY GONZALEZ JIMENEZ



424
08
425
36



DÉCIMO TERCER TRIMESTRE
DELEGADO EN MATERIA DE
DEL PRIMER CENSO

Formulario de datos personales con campos para:

- Nombre
- Apellido
- Sexo
- Edad
- Fecha de nacimiento
- Fecha de expedición
- Fecha de caducidad
- Fecha de renovación
- Fecha de emisión
- Fecha de cancelación
- Fecha de suspensión
- Fecha de reinstatación
- Fecha de revalidación
- Fecha de actualización
- Fecha de modificación
- Fecha de eliminación
- Fecha de restauración
- Fecha de recuperación
- Fecha de reintegración
- Fecha de readmisión
- Fecha de readaptación
- Fecha de readjustación
- Fecha de readecuación
- Fecha de readjustamiento
- Fecha de readaptación
- Fecha de readjustación
- Fecha de readecuación
- Fecha de readjustamiento

Formulario de datos personales con campos para:

- Nombre
- Apellido
- Sexo
- Edad
- Fecha de nacimiento
- Fecha de expedición
- Fecha de caducidad
- Fecha de renovación
- Fecha de emisión
- Fecha de cancelación
- Fecha de suspensión
- Fecha de reinstatación
- Fecha de revalidación
- Fecha de actualización
- Fecha de modificación
- Fecha de eliminación
- Fecha de restauración
- Fecha de recuperación
- Fecha de reintegración
- Fecha de readmisión
- Fecha de readaptación
- Fecha de readjustación
- Fecha de readecuación
- Fecha de readjustamiento
- Fecha de readaptación
- Fecha de readjustación
- Fecha de readecuación
- Fecha de readjustamiento

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INTERIORES
MEXICO
NÚMERO
DE MEXICO



Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Billete de Depósito

N

Importe con letra o con protectora

Importe

Nombre del Depositante

México, D.F.

Fecha: 13/03/2017

Oficina
Número: 2912

A disposición de:

Clave

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

337

Por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo

Firma

Orden de Pago

Páguese a:

quienes) firma(n) en seguida, para fines de identificación,
la cantidad que ampara este billete de depósito

Firma del(de los) beneficiario(s) ante la autoridad

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a 13 de FEBRERO de 2018

el JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. el EL SECRETARIO DEL JUZGADO.

Firma

Firma

FRANCISCO PERALTA HERAS
Nombre completo

EMMANUEL CASTELLANOS ROSAS
Nombre completo

Recibí(mos) del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, la cantidad que ampara este documento
a de de

Firma del beneficiario al recibir el importe

Orden de Transferencia

El presente billete de depósito se transfiere a:

el a de de
Categoría
Firma
Nombre completo

el a de de
Categoría
Firma
Nombre completo

* La orden de transferencia sólo podrá dictarse a favor de otra autoridad

Condiciones de Pago

I.- La expedición del presente Billete de Depósito, faculta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, a proporcionar información a la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y a esta última a solicitar y recibir información respecto de su expedición y pago para el control del mismo, cuando se constituya a disposición del Poder Judicial de la Federación.

II.- Este billete sólo será pagado por orden de la autoridad a cuya disposición se haya expedido o de aquélla a quien se transfiera. Toda orden de pago y de transferencia se dictarán en los lugares correspondientes del propio billete.

III.- Cualquier enmienda o adición a la orden de pago carecerá de validez si no es salvada con nueva firma de la autoridad que la dicte.

IV.- La autoridad que dicte la orden de pago y el(los) beneficiario(s) de ésta, deberán acreditar, a satisfacción del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, su carácter, personalidad e identidad.

V.- Para fines de identificación, el(los) beneficiario(s) de la orden de pago deberá(n) firmar en presencia de la autoridad que la dicte, en el lugar destinado al efecto. La autoridad que entregue este billete sin el requisito anterior, será responsable del cobro indebido que se haga por tal motivo. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, podrá negarse a pagar el importe del billete, si le es presentado sin satisfacerse el requisito mencionado.

VI.- Este documento no es negociable ni podrá cobrarse a través de cámara de compensación. Sin embargo, la cobranza del mismo puede encomendarse a una institución bancaria, en los términos del artículo 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

VII.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cantidad amparada por este billete será cubierta en la misma plaza en que se constituyó el depósito, por la institución autorizada al efecto.

VIII.- El importe de este billete no causa intereses, rendimientos o contraprestación alguna a favor del depositante o su beneficiario.

IX.- El pago de la cantidad que ampara este billete de depósito, se hará contra la entrega del mismo.

X.- La compra de este billete implica la aceptación de estas condiciones.

JUZGADO
DE DISTRICTO
EN LA CIUDAD DE MEXICO

426

423

427

083

536

FORMA B 2

368



ICIAL DE LA FEDERACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE, SE HACE ENTREGA AL LICENCIADO EMMANUEL
CASTELLANOS ROSAS, ENCARGADO DE LA CAJA DE SEGURIDAD
DE ESTE JUZGADO, EL BILLETE DE DEPÓSITO [REDACTED] EXPEDIDO
POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS
FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, POR LA
CANTIDAD DE [REDACTED]

[REDACTED] DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN [REDACTED]
[REDACTED] PROMOVIDO POR [REDACTED] DOCUMENTO
QUE QUEDA REGISTRADO CON EL NÚMERO [REDACTED] - CONSTE.

Entrega

Angélica Flores Jáuregui.

Recibí

Lic. Emmanuel Castellanos Rosas.



SEMPRE EN MATERIA DE
JUDICIAL DE MÉXICO



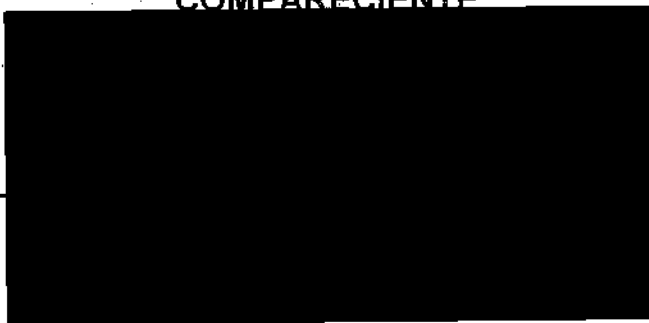
COMPARECENCIA

PC JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante el licenciado Whilliams Tony González Jiménez, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, comparece [REDACTED] autorizada del tercero interesado [REDACTED] quien se identifica con copia certificada de la cédula profesional [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Pública, que contiene una fotografía cuyos rasgos concuerdan fielmente con los de la compareciente, de la cual se anexa copia fotostática para debida constancia, manifestando que su presencia en este juzgado es en cumplimiento al proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio de amparo [REDACTED] en que se autorizó la devolución de las documentales exhibidas, las cuales obran en las fojas 48 a 53. Acto seguido, se le hace la entrega del documento indicado, el que recibe de conformidad.

Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, previa su lectura, se ratifica y se firma al calce por los que en ella intervinieron. Doy fe.

COMPARECIENTE



SECRETARIO DEL JUZGADO



WHILLIAMS TONY GONZALEZ JIMENEZ

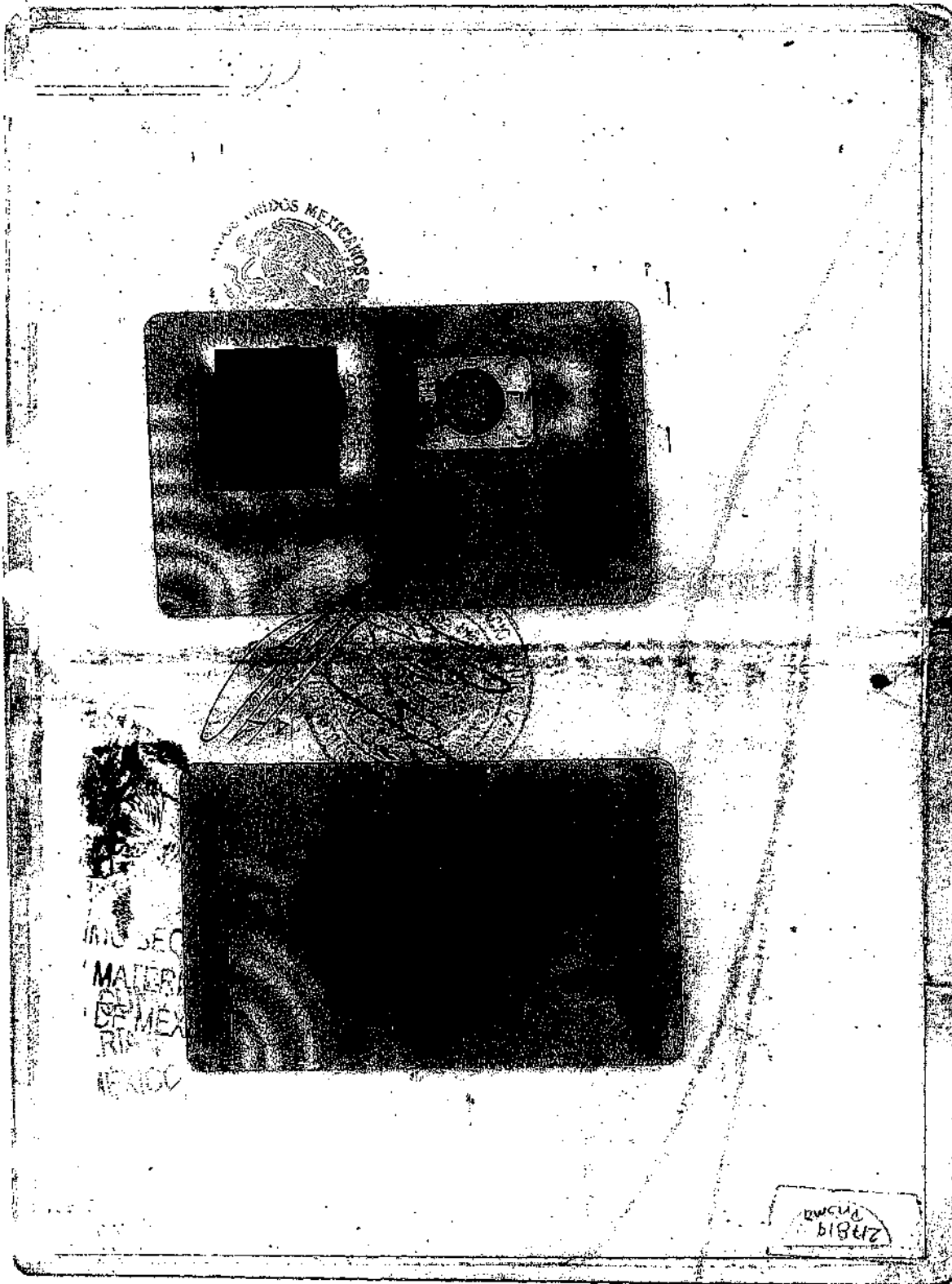
JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MEXICO

428

~~425~~

~~429~~

5.0



José Ignacio Sentfies Laborde, titular de la Notaría ciento cuatro del Distrito Federal,
CERTIFICO: que el presente documento, en copia fotostática, debidamente protegido por
kinegrama, consta de una hoja escrita únicamente por anverso, que cotejé con su original,
que tuve a la vista y a que me remito y concuerda fielmente, el cual a decir de la solicitante
del cotejo, Li [REDACTED] consiste en la cédula profesional [REDACTED]
para ejercer profesionalmente en el nivel de Licenciatura en Derecho, emitida el 25 de
septiembre de 2008, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, a favor de la propia solicitante del cotejo, sin calificar sobre su autenticidad,
validez o licitud, por lo que la presente certificación se realiza en términos del artículo 160
de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, copia del cual agrego para identidad al
apéndice con la letra A del instrumento [REDACTED] del Libro de Registro de Cotejos a mi cargo.
El 6 de marzo de 2012. Doy fe.


JUZGADO DE
DE DISTRICTO EN
LA CIUDAD



B+A

abogados

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

3629

2018 FEB 26 A 10:31

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

QUEJOSO: [REDACTED]

JUICIO: AMPARO INDIRECTO

EXPEDIENTE: [REDACTED]

CUADERNO PRINCIPALC. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

[REDACTED] en mi carácter de autorizado del Quejoso, en los términos del Artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que tengo debidamente reconocida en el Juicio de Amparo al rubro citado; ante Usted C. Juez de Distrito, con el debido respeto comparezco y expongo:

COMO TERCER TRIBUNAL
LEGADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

I.- Que toda vez que ha fenecido el término de QUINCE DÍAS que otorga la Ley de Amparo a la partes, para interponer el RECURSO DE INCONFORMIDAD previsto en el artículo 201 de la legislación citada, solicito se certifique el plazo que se tuvo para dichos efectos y se declare por precluido el derecho que tuvo el Tercero Interésado [REDACTED] para interponer dicho recurso en tiempo y forma, que salvo error de nuestra parte, transcurrió del jueves 01 de febrero al jueves 22 de febrero del año en curso.

II.- Por otra parte, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, vengo a solicitar a esta H. Instancia Federal se declare que la Sentencia de Amparo de fecha 26 de julio de 2017, causó ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto y fundado:

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Se tenga por reconocida la personalidad que ostento, realizando las manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente escrito.

SEGUNDO.- Tener por precluido el derecho del Tercero, Interesado para interponer el recurso arriba mencionado; previa certificación del plazo que tuvo para hacerlo.

TERCERO.- Se declare que la sentencia dictada en este juicio de amparo HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar.



Ciudad de México, a veintiseis de febrero del dos mil dieciocho.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA
SECRETARIA DE JUSTICIA
Y FOLIO 100



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

431

FORMATI-2

45428

5-2

En la Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al Juez con el escrito registrado con el número de correspondencia 3629, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste [REDACTED]

En la Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

Agréguese el escrito signado por [REDACTED] en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso [REDACTED] en atención a su contenido, dígaselo que no ha lugar a acordar favorable su petición respecto a declarar ejecutoriada la sentencia dictada el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, toda vez que en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se acordó lo conducente respecto a la misma; lo anterior, ya que las resoluciones dictadas por tribunales colegiados de circuito causan ejecutoria por ministerio de ley.

Ahora bien, respecto a su petición de declarar por concluido el derecho de las partes para interponer recurso de inconformidad, infórmese al ocurrente que el suscrito juzgador, no puede pronunciarse sobre la procedencia de un recurso, toda vez que la autoridad idónea para resolver sobre dicho medio de impugnación son los tribunales colegiados de circuito, por ser este órgano federal únicamente receptor de los recursos sin que tenga la posibilidad de determinar su procedencia o no.

Es aplicable a lo anterior la tesis 2a. CXIV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Noveña Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Octubre de 1997, visible a página 414, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

"EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El

34203534780

artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

Notifíquese.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el secretario **Axel Hernández Díaz**, quien autoriza.

Doy fe.

GSO

ESTADOS
JUEGA
XEDIS
FNI



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

432 FORMAR 2

420
433

37-5-3

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
28 FEB 2018 SE NOTIFICA A

pavdes

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

CON FECHA

01 MAR 2018

SURTIO TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIO JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.



DECIMO SEGUNDO
RITO EN MATERIA
CIUDAD DE MEXICO

SUI

SUI

B+A

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL.

19131

2019 OCT 18 P 2:21

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

QUEJOSO:

JUICIO: AMPARO INDIRECTO

EXPEDIENTE:

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA
DE TODO LO ACTUADO

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

[REDACTED] en mi carácter de Mandatario
judicial del quejoso [REDACTED] personalidad que
tengo debidamente reconocida y acreditada en los autos del
juicio al rubro citado, ante Usted C. Juez de Distrito con el
debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar
respetuosamente que se ordene expedir a mi costa DOS JUEGOS de
copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente
procedimiento; previo pago de derechos correspondiente y razón
asentada que por su recibo obre en autos.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL.
CIUDAD DE MÉXICO

Autorizando de manera indistinta a los C. [REDACTED]

[REDACTED] para que por su conducto les sean entregadas las
copias certificadas solicitadas.

Por lo anteriormente expuesto;

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamente pido se sirvan:

UNICO.- Se ordene expedir a costa de mi representada las
copias certificadas referidas en el cuerpo del presente
escrito, por conducto y de manera indistinta de las personas
mencionadas para tales efectos.

Ciudad de México a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

437 435 FORMA B-2
JUICIO DE AMPARO 55/2017-IV

En la Ciudad de México, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el secretario da cuenta al juez, con el escrito registrado con el número de correspondencia 19131. Conste.

Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve.

Agréguese el ocurso signado por [REDACTED] autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso [REDACTED] y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expedase a su costa copia certificada por duplicado de las constancias que indica, previa toma de razón que por su recibo asiente en el expediente, y como autorizado para recogerlas a las personas que menciona.

Notifíquese.

Lo proveyo y firma Ricardo Mercado Oaxaca, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el secretario Rubén Benítez Hernández, quien autoriza.
Doy fe.

Oficial admivo: RGV	Secretaria particular	Analista SISE	Actuario
Secretario: RBH			

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
22 OCT 2019 SE NOTIFICA A

las partes

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE
AMPARO. DOY FE.

23 OCT 2019

CON FECHA
SURTIO TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

EL ACTUARIO JUDICIAL

LIC. JOSÉ NAHUM BARRIOS GARCÍA



JUZGADO DÉCI
DE DISTRITO EN
EN LA CIUDAD

5-10

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, **RUBÉN BENÍTEZ HERNÁNDEZ, C E R T I F I C A:** QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN CONSTANTES DE CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO (434) FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS, RUBRICADAS, FOLIADAS Y COTEJADAS, QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN AGREGADAS EN EL JUICIO DE AMPARO [REDACTED] PROMOVIDO POR [REDACTED] POR PROPIO DERECHO; CONTRA ACTOS DE LA SEXTA SALA Y JUEZ DÉCIMO QUINTO, AMBOS CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO EL VEINTIUNO DEL MES Y AÑO EN



DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
LEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

EL SECRETARIO

RUBÉN BENÍTEZ HERNÁNDEZ

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA

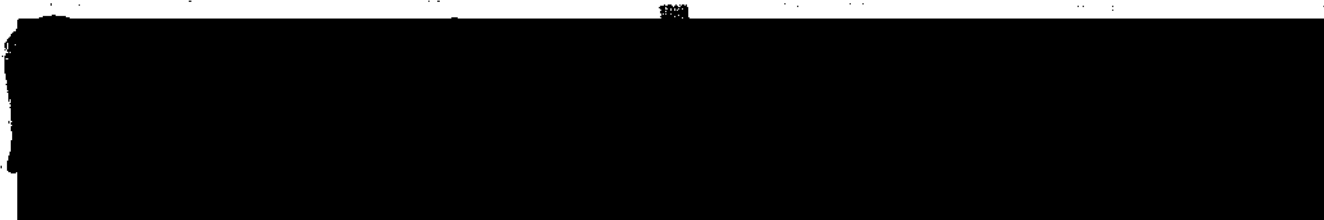
RECIBIDO
-4 NOV 2019

OFICIA DE PARTES COMÚN CIVIL,
QUANTIA MENOR, ORALIDAD, FAMILIAR
Y SECCIÓN SALAS No. 31

510

SIAI TEXTO





Principal

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito

AMPARO EN REVISIÓN

REVISIÓN SENTENCIA PRINCIPAL

Número de expediente.-

Número de Origen.-

Control de O.C.C.-

Fecha Ingreso

Materia.- Civil

Origen:

Proceso:

Autoridad Responsable: SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ; COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ; JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Tercero Interesado:

Acto Reclamado: Sentencia, resolución definitiva o laudo

Autoridad que remite el expediente materia de juicio: JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Resolución Inicial:

Sentido:

Turno:

Magistrado:

Fecha Ejecutoria:

Sentido:

Fecha Archivo:

Magistrados:

Secretario.

Mgdo. Pdte. María Concepción Alonso Flores

Mgdo. Daniel Horacio Escudero Contreras

Mgdo. Arturo Ramírez Sánchez



DECIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

Sujeto de depuración

17 JUL 2017

PRIMER CIRCULO
MATERIA CIVIL

10 fojas

TURNOS DE AMPARO ~~EXCEPCIÓN~~

OCC 1.1.0.56

Fecha de recibido: martes, 29/08/2017

No. de registro: [REDACTED]

Hora de recibido: 20:30 Hrs.

Fecha de turno: martes, 29/08/2017

Hora de turno: 21:26 Hrs.

Turnado al: DECIMO TERCERO, TERCEROS COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Número de folio: 17483

Quejoso: [REDACTED]

Autoridad de 2a. instancia: 6A. SALA TRIB. SUP. JUST. DEL D.F.

Procedente del: JUZGADO

Número de amparo: [REDACTED]

Recurrente: TERCERO INTERESADO

Resolución: SENTENCIA

Fecha de resolución: martes, 17/01/2017

El juez resolvió: AMPARA 16/05/2017

Número: 12

Tipo de expediente: PRINCIPAL

Toca: ***

Numero de oficio: 15451

No. Juicio de primera instancia: [REDACTED] 2016

Autoridad de primera instancia: [REDACTED] 15° DE LO CIVIL DEL D.F.

Tercero interesado: [REDACTED]

Original: 1

Anexos: ***

Descripción de anexos: CDO 3 CESAJOS JAPE/JAPE

Observaciones: ***

Incompetencia o Desechamiento: ***

Fecha de cambio de turno: ***

Copias de original: 1

Copias de anexos: ***

Hora de cambio de turno: ***

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega: _____

Servidor Público que recibe: _____

Firma: _____

Órgano de su adscripción: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Fecha: _____ Hora: _____ Firma: _____

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN
DE LOS PERSONALES COLEGIADOS EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

000 02



RC-



Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

017483

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

OFICINA DE CORRESPONDENCIA
C O M U N

AGO 29 8 30 PM 2017

SECCIÓN DE AMPAROS.

J. A. [REDACTED]

OF. [REDACTED]

CIUDAD DE MÉXICO, VEINTINUEVE DE AGOSTO 2017.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de agosto del presente año, remito a usted el original del juicio de amparo y original y copia del escrito de agravios, firmado por [REDACTED], en su carácter de representante del tercero interesado [REDACTED] mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, relativa al juicio de amparo indirecto [REDACTED] para lo que tenga a bien determinar en relación con el medio de impugnación citado.

Solicitándole que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar recibo.

ANEXOS	
CONTENIDO	
1.-ORIGINAL DEL EXPEDIENTE [REDACTED]	
2.-ORIGINAL DEL ESCRITO DE AGRAVIOS Y COPIA.	
3. 3 TOMOS.	

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

RESPECTUOSAMENTE.

FRANCISCO PEÑALOZA HERAS.



JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

- escrito original de agravios en 12-19w.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL

DIGITALIZADO

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO INDIRECTO [REDACTED]

15482

2017 AGO 21 A 9:00

*C/echo copias
en anexos*
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

[REDACTED] en
representación de [REDACTED], personalidad que solicito me sea
reconocida en términos del instrumento notarial que adjunto exhibo como anexo 1, al
presente escrito, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en la calle de [REDACTED]
[REDACTED] en esta Ciudad de México, autorizando para que en mi nombre y
representación las oigan y reciban en los términos de lo que disponen los artículos 12 y 24 de la
Ley de Amparo a los licenciados en Derecho [REDACTED] con cédula profesional
número [REDACTED] [REDACTED] con cédula profesional número [REDACTED]
Ivette Silvia Salas Coquet, con cédula profesional número [REDACTED] mismas que se
encuentran debidamente inscritas en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito autorizando únicamente para oír y recibir
notificaciones, imponerse de los autos, tomar fotografías y recibir toda clase de documentos
a [REDACTED] indistintamente respetuosamente
expongo:

Dentro del término a que se refiere el artículo 86 de la
Ley de Amparo, vengo a interponer **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia
de fecha 16 de mayo del 2017, dictada en el juicio de garantías señalada al rubro, misma
que fuera notificada a la quejosa mediante lista de fecha 3 de agosto del 2017, surtiendo
sus efectos el 4 de agosto del año en curso, por que dicha resolución causa a mí
representado los siguientes:

AGRAVIOS

I.- PRIMER AGRAVIO.

Parte de la resolución que lo causa lo constituye toda
la sentencia recurrida, por cuanto hace conceder al quejoso el Amparo y Protección de la
Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados de la H. Sexta Sala del Tribunal
Superior de Justicia de esta Ciudad.

Preceptos legales violados, no aplicados o aplicados indebidamente: lo son los artículos 73, 74, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con las tesis jurisprudenciales que se invocan en este recurso.

Concepto de agravio

recurso de 25. Julio. 17

La sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo de fecha 16 de mayo del 2017, ya que es ilegal, toda vez que resulta incongruente, tal y como se expone a continuación:

Como se advierte los argumentos expuestos por el A Quo en la sentencia impugnada en los que sostiene que la autoridad responsable debió entrar al estudio de los agravios que se hicieron valer por el quejoso en contra del auto de 28 de septiembre del 2016, que ordena se gire oficio al Comisión Nacional Bancaria de Valores a fin de que informe sobre las cuentas bancarias del quejoso, a pesar de que no invoco violaciones procesales, toda vez que la sentencias incluyendo las de apelación deben satisfacer el principio procesal de congruencia interna y externa ya que las facultades del organo de apelación deben resolver el recurso que las partes interpongan.

La sentencia dictada ~~por la dictada~~ por la Sexta Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca de apelación ~~de~~ señala que es improcedente el recurso de apelación hecho valer por el hoy quejoso en contra del auto de 28 de septiembre del 2016 dictado por el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en virtud de que básicamente argumenta violaciones a derechos humanos así como a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen (hoy Ciudad de México), sin alegar violaciones procesales en contra del dictado del auto de 208 de septiembre del 2016 por el Juez Natural.

En este sentido es importante desatacar que los argumentos planteados por el hoy quejoso ante la Sala responsable no alegaban violaciones al procedimiento, sino violaciones a supuestos derechos humanos, por lo que la Sala Responsable acertadamente decidió no entrar a los agravios formulados por el quejoso, pues ello conllevaría a que en la apelación no se alegaran violaciones procesales, sino violaciones constitucionales como lo pretende la hoy quejosa.

En este sentido, la Sala responsable no entró al estudio de las supuestas violaciones a derechos humanos, pues el hoy quejoso, no argumento violaciones procesales, razón por la cual su resolución estuvo apoyada en derecho, contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida.

524 47

No debe perderse de vista que el juicio constitucional tiene por objeto el análisis de sentencias en las que no se cumplieron las formalidades del procedimiento en que hayan transgrediendo preceptos constitucionales.

En el caso que nos ocupa el acto reclamando resulta fundado en derecho por parte de la autoridad responsable, pues no tenía obligación de entrar al estudio de los agravios que no tienen a combatir la resolución apelada.

Tomando en consideración que el hoy quejoso, no alega violaciones procesales, sino violación a los derechos humanos, la Sala responsable no contemplo determinar sobre dichas alegaciones, pues incluso en el caso de que existirán serian inoperantes para modificar el auto atacado, ya que en ninguna parte de los agravios se expone la razón procesal por la cual la prueba documental consistente en el informe que debe rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no debió admitirse.

Sin embargo el A quo no lo determina de esa forma apoyándose en el principio de congruencia, de que la Sala debió entrar al estudio de los agravios, pero pasa inadvertido que el quejoso no expuso agravios ante la Sala Responsable en toca de apelación [REDACTED] que combatieran o hicieran ver el indebido ofrecimiento del informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a pesar de ello haya sido admitida por el Juez natural.

El ofrecimiento de dicha documental cumple con los requisitos del artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles sin embargo el quejoso se limitó alegar que la admisión de esa probanza viola sus derechos humanos, luego entonces la Sala Responsable actuó de manera acertada al señalar que no era dable entrar al estudio de los agravios se limitaban señalar violaciones a los Derechos Humanos del Quejoso, pero el A quo, pretende atribuir esta obligación a la Sala Responsable.

En esa tesitura, es evidente que la sentencia que resuelve un recurso de apelación debe concretarse a analizar si el auto impugnado contraviene disposiciones legales que rigen el procedimiento, pero no ha determinar su hubo violación a los derechos humanos pues dichas atribuciones le corresponderían al a quo por motivo de que se hubieran alterado las formalidades del procedimiento en la aplicación del Derecho.

Es lógico el argumento de la Sala Responsable de dejar de abstenerse de entrar al estudio de los agravios, pues incluso si lo hubiera hecho hubiera confirmado el auto apelado al no señalarle las disposiciones legales que se dejaron de aplicar o que fueron aplicadas inexactamente.

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO
MEXICANO

505

La sentencia que se combate en ninguno de sus considerandos explica porque a pesar de que el quejoso no atacó procesalmente el auto recurrido, deben valorarse unos agravios inoperantes.

De lo contrario se estaría permitiendo que en el recurso de apelación se introdujeran cuestiones ajenas a los agravios que fueron motivo de apelación, pues el apelante hoy quejoso nunca manifestó a la Sala responsable la razón procesal para no admitir la prueba documental consistente en el informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por todo lo anteriormente expuesto, es obvio que en el caso concreto la sentencia recurrida es incongruente e ilegal llegando al extremo de interpretar indebidamente los conceptos de violación que hace el quejoso, lo que hace que su resolución sea del todo incongruente y por ende ilegal, pues pretende que la Sala resuelva sobre un auto impugnado en el que no se atacaron violaciones al procedimiento, sino situaciones ajenas como es la violación a los derechos humanos.

En tal virtud al resultar evidente que la sentencia impugnada es incongruente y por ende ilegal, debe dictarse otra en su lugar en la que se declaren infundados todos y cada uno de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, especialmente los consistentes en que la Sala Responsable debe resolver sobre cuestiones que no pertenecen a la esfera jurídica como lo es declarar supuestas violaciones a Derechos Humanos.

Es importante señalar que el quejoso en los agravios que expuso ante Autoridad responsable se limitó al argumentar violaciones a los derechos humanos mas no al procedimiento, sin atacar el razonamiento del Juez natural, razón por la cual resulta erróneo el criterio del Juez A quo en sentido de que tuvo que pronunciarse sobre la supuesta violación a los derechos humanos.

Por otra parte, el A quo pasa inadvertido que el quejoso nunca expuso la razón de porqué el auto apelado, trascendería en fondo del asunto, por lo que la Sala responsable sí tenía la facultad de analizar o no los agravios, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria que más adelante se cita.

Época: Décima Época

Registro: 2010466

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I

Materia(s): Civil

Tesis: 1a./J. 39/2015 (10a.)

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECURRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA.

El artículo 1339, párrafo último, del Código de Comercio, prevé que tratándose del recurso de apelación, los agravios que en su caso deban expresarse contra la sentencia definitiva, se expresarán en la forma y en los términos previstos en el diverso numeral 1344 del ordenamiento indicado. Por su parte, el párrafo tercero de este último precepto establece que tratándose de la parte vencida o de aquella que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación preventiva, deberá señalar en los agravios contra la sentencia que resolvió el juicio, **de qué forma trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal impugnada.** Por ello, si el recurrente omite cumplir con dicha carga procesal, el tribunal de apelación no podrá subsanar esta omisión y pronunciarse sobre la trascendencia que pudiera tener el resarcimiento de dicha violación, pues ello implicaría efectuar un análisis oficioso a favor de una de las partes, violándose con ello el principio dispositivo del proceso mercantil, así como los principios de justicia imparcial y equidad procesal. **De ahí que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, al actualizarse un obstáculo procesal que impide al tribunal de alzada analizar si las violaciones procesales impugnadas podrían o no trascender al fondo del asunto, los agravios que en su caso se hubieren hecho valer en el recurso de apelación preventiva deben declararse inoperantes,** al no ser jurídicamente posible analizar su eficacia y, con ello, determinar si procede o no revocar la sentencia definitiva y ordenar la reposición del procedimiento.

Contradicción de tesis 217/2014. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de abril de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 282/2013, con las tesis aisladas I.6o.C.8 C (10a.) y I.6o.C.9 C (10a.), de títulos y subtítulos: "APELACIÓN PREVENTIVA. LA EXIGENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1344, TERCER PÁRRAFO, DEL

REPOSICIÓN
PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO
CIRCUITO
S. 157

DER. CIV.
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

DEBERÁ EXPRESAR EN LOS AGRAVIOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL JUICIO, DE QUÉ MANERA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL A SUBSANAR, AFECTA EL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." y "APELACIÓN PREVENTIVA. SI EL APELANTE NO EXPUSO DE QUÉ MANERA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL A SUBSANAR, ELLO NO PUEDE TENER EL ALCANCE DE QUE SE DEJEN DE EXAMINAR LOS AGRAVIOS RESPECTIVOS (ARTÍCULO 1344, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, páginas 1616 y 1617, números de registro digital 2005837 y 2005838, respectivamente.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 2/2011, que dio origen a la tesis VI.1o.C.148 C (9a.), de rubro: "APELACIÓN PREVENTIVA. LA OMISIÓN DE EXPRESAR EN LOS AGRAVIOS LA MANERA EN QUE TRASCIENDE AL FONDO DEL ASUNTO LA VIOLACIÓN ADUCIDA, LLEVA A DECLARARLOS INATENDIBLES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1344 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1072, número de registro digital 160255.

El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo 565/2013, sostuvo que la exigencia prevista en el artículo 1344, contraviene el principio de tutela judicial efectiva en la medida en que coarta el derecho a acceder a un recurso judicial rápido, sencillo y eficaz, pues el hecho de obligar al recurrente a emitir un juicio de valor, específicamente relacionado con la trascendencia de la violación procesal en el fallo definitivo, se traduce en una formalidad excesiva y, por ende, en un obstáculo que impide el libre acceso a la jurisdicción de segunda instancia, que incluso, puede convertirse en una verdadera trampa procesal en la que irremisiblemente caerá el recurrente, quien, ante ese exceso de formalidades, fácilmente puede dejar de cumplir con alguno de los requisitos que desproporcionadamente estableció el legislador.

Tesis de jurisprudencia 39/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de mayo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

lo tanto, debió negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en base a los argumentos vertidos en el cuerpo del presente ocurso.

En tal virtud, la sentencia que constituye el acto reclamado se apega a lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, pues es congruente al no entrar el estudio de cuestiones no son objeto de la litis,

El tal virtud es procedente el recurso de revisión que se hace valer.

SEGUNDO AGRAVIO

Parte de la resolución que lo causa: Toda la sentencia recurrida, por cuanto hace conceder al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados de la H. Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad,

Preceptos legales violados, no aplicados o aplicados indebidamente: lo son los artículos 73, 74, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, 222 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con las tesis jurisprudenciales que se invocan en este ocurso.

Concepto de agravio:

La sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo 85/2017-IV de fecha 16 de mayo de 2017, ya que es ilegal, toda vez que resulta incongruente, tal y como se expone a continuación

En el caso que nos ocupa la sentencia impugnada resulta ser ilegal toda vez que en la citada resolución el Juez A Quo sostiene que también debe contemplarse lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin que se ataquen violaciones procesales en el auto de 20 de septiembre del 2016 dictado por el Juez Natural.

Respecto al monto de la indemnización que se reclama en las prestaciones de la demanda inicial se hace notar el monto de -Trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que dicho "límite máximo" transgrede las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1 133 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal y como se demostrará con la amplitud debida en el capítulo de "Hechos" de la presente demanda

500

10

En tal virtud debe atenderse a lo siguiente:

El argumento del A quo prejuzga sobre la cantidad a que debe ser condenado el hoy tercero interesado y que por ende es irrelevante el informe que rinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como sus Señorías podrán percatarse no se combate la admisión de la prueba sino situaciones ajenas.

Ciertamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia, criterios relativos a la naturaleza y alcances de la -Obligación de Reparar- y dentro de éstos el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlo, atendiendo al daño causado.

El concepto relativo a una "justa indemnización" o "indemnización integral" implica el restablecimiento de la situación anterior y de no ser esto posible, establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar.

La reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido.

Las "reparaciones" como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos.

En el documento denominado "Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones" aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el diecinueve de febrero de dos mil ocho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la reparación adecuada del daño sufrido debe concretizarse mediante medidas individuales tendientes a restituir e indemnizar.

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas también ha emitido principios y directrices que determinan los alcances del derecho a obtener reparaciones; en esencia, dichos principios establecen que la obligación que tienen los Estados de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos dentro de su Estado, tal es el caso de la relativa a proporcionar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, en las formas de restitución e indemnización.

Los Estados, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material

532

Por lo anterior, podemos afirmar válidamente que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que el "límite máximo de indemnización" previsto por dicha norma jurídica; implica una restricción injustificada a los derechos constitucionales, por lo que la resolución que dicte su Señoría no debe limitarse al tope a que se refiere la disposición legal antes señalada.

El referido "tope" es inconstitucional, porque la existencia de límites a las indemnizaciones debidas a los perjudicados por daños morales causados; restringe injustificadamente el derecho a una reparación "justa e integral" ya que si bien es cierto que la voluntad del legislador fue la de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, no menos cierto es que axiológicamente, el derecho a las medidas compensatorias en los casos que justamente lo ameritan, tiene mayor valor que la pretendida voluntad estatal de "limitar" el monto de las reparaciones.

En efecto, la fijación del tope máximo de -Trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den, ni resulta necesaria para evitarlos, ya que las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas.

El tope máximo previsto por el precepto legal examinado es una medida legislativa no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir; además contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño.

Consecuentemente, al momento de establecer en definitiva el monto de la indemnización que deberá cubrir el quejoso, a favor del suscrito; el Juez natural deberá omitir atender al límite máximo previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, ya que de lo contrario se verían vulnerados los derechos de mi representado a recibir una justa indemnización.

El artículo 63.1 del Pacto de San Jose señala que cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo que si ello fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, en razón de lo anterior resulta inconstitucionales los

privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, toda vez que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la convención americana sobre derechos humanos y también el artículo 1 constitucional, toda vez que el tope máximo previsto por dicha legislación permite limitaciones irracionales al derecho de ser indemnizado de manera integral.

En mérito al razonamiento antes vertido el hecho de limitar la indemnización a lo previsto en ~~la Ley~~ la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, ~~la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen~~ la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene en inconstitucional.

Considerar un tope máximo implicaría resarcir cierto tipo de derechos pero se pasarían por alto otro tipo de afectaciones como el sufrimiento, ansiedad o menoscabo de la dignidad, por lo que ~~debe considerarse una justa indemnización basada en las particularidades del caso y en los principios de equidad.~~

En ese sentido debe atenderse a que mi representado es una figura pública que lo distingue de las demás personas sujetos a la reparación del daño moral, por lo que la sanción que se imponga al hoy quejoso no solo debe ser condenatoria en el sentido de la publicación de la sentencia y de la retractación de los comentarios hechos en su contra, sino debe atender a una reparación económica pero a esta no debe aplicarse el tope máximo que prevé el artículo 41 de la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, sino a una justa indemnización basa en las particularidades del presente caso.

Sirve de apoyo y fundamento legal a mis anteriores afirmaciones, lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la figura ~~de tope o montos máximos- relativos a indemnizaciones por daño moral:~~

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución Federal prevé un derecho sustantivo a ser indemnizado por los daños generados por la actividad administrativa irregular del Estado (A.R. 903/2008). Las autoridades estatales, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitrario y desproporcionadamente su

532
13

desplegar sus potestades públicas con el objetivo de garantizarlo. Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece las reglas conforme a las cuales deben calcularse los montos de las indemnizaciones que el Estado debe pagar cuando genera daños a los particulares, y en su fracción II señala dos reglas respecto al daño moral: 1) la autoridad administrativa o jurisdiccional debe calcular la indemnización conforme a los criterios establecidos en el Código Civil Federal, tomando en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante y 2) dicha indemnización no debe exceder del equivalente a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal por cada reclamante afectado. De acuerdo con los criterios con que esta Corte evalúa si existe una restricción injustificada a los derechos constitucionales, se concluye que el referido tope es inconstitucional porque, aunque sea una medida que puede relacionarse con la consecución de un objetivo admisible constitucionalmente, no es instrumentalmente adecuada para alcanzarlo. La existencia de límites a las indemnizaciones a los perjudicados por daños morales causados por el Estado es un objetivo sin duda cubierto por el artículo 113 constitucional, que precisa que los particulares tienen derecho a las mismas conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. La voluntad de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, subrayada en la exposición de motivos de la Ley, alude igualmente a la legítima voluntad de que las medidas compensatorias se apliquen a los casos que justamente lo ameritan. Sin embargo, la fijación del tope máximo no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den ni resulta necesaria para evitarlos. Las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas. El tope máximo previsto por el precepto legal examinado es una medida no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir que en algunos casos puede ocasionar limitaciones irrazonables al derecho a ser indemnizado. Además, el mismo contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño, ya que el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dispone que el cumplimiento de indemnizaciones ordenadas por estos órganos se rige por lo establecido en el Capítulo II de la misma, sección en la que se encuentra el



DER. TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO



DER. TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

533

Amparo en revisión 75/2009. Blanca Delia Rentería Torres y otra. 18 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Francisca María Pina Olménez. Época: Novena Época. Registro: 1111. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a. CLIV/2009. Página: 454

El A quo señala que la Sala responsable debe

entrar al estudio de agravios sobre derechos humanos, pero prejuzga sobre la cantidad a que debe en todo caso el quejoso.

AUSTED C. JUEZ y A USTEDES C.C. MAGISTRADOS, atentamente pido se sirvan:

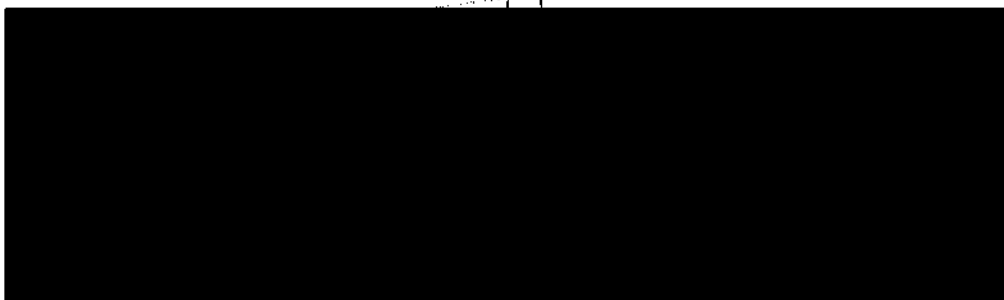
PRIMERO. Tener a mi representado en tiempo y conforme a Derecho, interponiendo el presente recurso de revisión.

SEGUNDO. - Admitir a trámite el presente recurso de

TERCERO. - En su oportunidad revocar la sentencia recurrida y dictar otra en los términos solicitados en éste o curso.

TRIBUNAL
TERIA CIVIL
RCUITO

revisión.



53



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

5149.

En treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, **José Manuel González Jiménez**, Secretario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta a la Magistrada Presidenta con: la boleta de turno [REDACTED] de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, oficio [REDACTED] del **Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, juicio de amparo indirecto [REDACTED] (obra por separado), tres legajos (obran por separado), original y copia del escrito de recurso de revisión y de expresión de agravios que hace valer [REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] - Conste.

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

Vista la boleta de turno [REDACTED] y los anexos de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el Libro de Control correspondiente con el número RC.- [REDACTED]

Agréguese a sus autos el oficio [REDACTED] del **Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, juicio de amparo indirecto [REDACTED] (obra por separado), tres legajos (obran por separado), original y copia del escrito de recurso de revisión y de expresión de agravios que hace valer [REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] en contra de la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, engrosada el



PRIMER TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO



32157978600

veinticinco de julio citado año, dictada en el juicio de amparo [REDACTED] - Acúsese recibo.

Se reconoce la personería del promovente en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo por tenerla acreditada en el juicio de amparo [REDACTED] a foja 122.

La sentencia impugnada se notificó a la parte recurrente, por lista, el **tres de agosto de dos mil diecisiete**, esa notificación surtió efectos el **cuatro** siguiente; el plazo de **diez días** a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del **siete** al **dieciocho de agosto** de la citada anualidad, y se excluyen los días **doce y trece de agosto** del año en curso, por inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Como el medio de impugnación de que se trata, fue presentado el **dieciocho de agosto de dos mil diecisiete**, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, **SE ADMITE A TRÁMITE.**

Dese la intervención que corresponda al Ministerio Público de la Federación ~~adscrito~~, la cual se limita a la notificación de la admisión de este recurso. En la inteligencia que la falta de formulación de pedimento del citado representante social, no impide que este expediente sea listado para su resolución.

En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2ª/J.34/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. LA LEY DE LA MATERIA PREVE LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL INDICADO RECURSO, SIN NECESIDAD DE OTORGAR, EN ESA





INSTANCIA, UN PLAZO AL MINISTERIO PÚBLICO PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS Y FORMULAR PEDIMENTO."

535

P. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Una vez que transcurra el plazo de cinco días, que prevé el artículo 22 de la Ley de Amparo para la interposición de la revisión adhesiva, tórrese el presente recurso de revisión al Magistrado correspondiente para la elaboración de proyecto de sentencia, esto último, con fundamento en el precepto 92 de la Ley de la Materia.

Se tiene por señalado el domicilio que el promovente indica para oír y recibir notificaciones de su parte, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados

[REDACTED] por haber registrado sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, con los número de registro [REDACTED] respectivamente. Por lo que hace a la profesionista

[REDACTED] solamente se le tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo hasta en tanto acredite contar con dicho registro, asimismo se autoriza a las últimas personas en los términos referidos del citado numeral 24.

Se autoriza la utilización de dispositivos electrónicos, para los fines solicitados por el promovente.

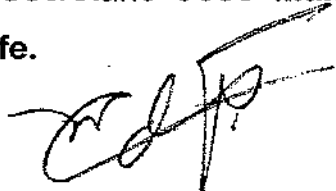
Finalmente, en su oportunidad procesal, cúmplase con la obligación que disponen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura



Federal, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTIFÍQUESE, y por medio de oficio al Juzgado Federal recurrido y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, adjuntándole a este último comunicado copia del recurso de revisión.

Así lo acordó la Magistrada **María Concepción Alonso Flores**, Presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con el Secretario **José Manuel González Jiménez**, que da fe.



En treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se giraron los oficios 5393 y 5394 correspondientes.- Conste.
RC. [Redacted]
JMGJ/gmo.



DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DIGITIZADO

FORMA 87

530
009 13

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

R. [Redacted]

En uno de septiembre de dos mil diecisiete siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo vigente, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal. Doy fe.

EL ACTUARIO JUDICIAL

LIC. RICARDO OJEDA SOLANO.

EX. TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
R. TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CORRESPONDE AL PROVEÍDO QUE ANTECEDE. CONSTE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

000 19

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LAS
RESPONSABLES DEL AUTO O RESOLUCIÓN DE
FECHA: treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

DICTADO EN EL EXPEDIENTE: R.C. [REDACTED]

INTERPUESTO POR: [REDACTED]
V. [REDACTED]

[REDACTED] JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
(ANT. A.I. [REDACTED])

[REDACTED] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA FEDERACIÓN (MINISTERIO PÚBLICO)

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

2017 SET - 1 P. 2. 20

RECIBO DEL JUEZ SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL



4 000215 797809



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

000 20

**DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.**

**CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LAS
RESPONSABLES DEL AUTO O RESOLUCIÓN DE
FECHA: treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.**

DICTADO EN EL EXPEDIENTE: R.C. [REDACTED]

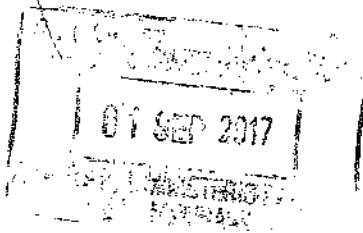
INTERPUESTO POR: [REDACTED]

**[REDACTED] JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
(ANT. A.I. [REDACTED])**

**[REDACTED] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA FEDERACIÓN (MINISTERIO PÚBLICO)**



4 000215 797869



B+A

abogados

00041

SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL

05385

SEP 8 4 43 PM 2017

c/ firma
6 copias del
min me escrito

4/5/13 Los LL
almo 6/1/17

QUEJOSO:

AMPARO EN REVISION:

MEXICANOS
TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

CC. MAGISTRADOS DEL DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Que 1050

[redacted] por mi propio derecho, señalando
como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en

[redacted] en esta Ciudad, autorizando en

los términos más amplios del artículo 12 de la Ley de
Amparo a los señores Licenciados [redacted] con

Cédula Profesional núm. [redacted] con

Cédula Profesional núm. [redacted] y número de Registro Único

ante el Poder Judicial Federal [redacted] de fecha 16 de

noviembre de 2005, [redacted] con Cédula

Profesional número [redacted] con

Cédula Profesional número [redacted] así como para recibir

indistintamente notificaciones, toda clase de documentos y

valores, y hacer uso de medios electrónicos, ópticos o de

cualquier naturaleza para la reproducción de actuaciones

judiciales y documentos exhibición, a los C. [redacted]

[redacted] con el debido [redacted]
comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, vengo a solicitar
se declare Improcedente el Recurso de Revisión interpuesto
por el Tercero Interesado [redacted] en
contra de la Sentencia del Amparo Indirecto [redacted] de
fecha DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, PUBLICADA EL
VEINTISEIS DE JULIO DE ESTE MISMO AÑO, dictada por el Juez
Décimo Segundo de Distrito en materia Civil de la Ciudad de
México, contestando al efecto los siguientes:

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

21

AGRAVIOS

PRIMERO.- Resulta a todas luces improcedente el presente agravio, ya que además de que el Juez Décimo Segundo de Distrito en materia civil de manera atinada, evidenció la falta de congruencia de la Sala responsable al evadir su responsabilidad de analizar y pronunciarse sobre violación de derechos humanos, aplicando el principio *pro-persona* contenido en el artículo 1 de nuestra Constitución y en diversos tratados Internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las violaciones al debido proceso son violaciones de derechos humanos tal como se encuentra claramente contemplado en los artículos 1, 14, 16 Y 17 de nuestra Carta Magna.

El pretender señalar por parte del recurrente, que el criterio de la Sala responsable de no entrar al estudio de la apelación por "carecer" ésta Sala de facultades para resolver derechos humanos so pretexto de estar reservada esta materia al ámbito familiar era adecuado, resulta a todas luces incorrecto, ya que el texto del artículo 1 Constitucional es claro y no deja lugar a interpretación alguna que "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad"; pues bien, el derecho humano de debido proceso y legalidad contenidos en el artículo 14 Constitucional, goza evidentemente también de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a que hace referencia el artículo 1, de allí la importancia de salvaguardar los derechos adjetivos (procesales) en esa misma jerarquía de protección como derecho fundamental.

SEGUNDO.- El presente agravio resulta igualmente improcedente, por dos cuestiones fundamentales a saber:



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
ER CIRCUITO



TRIBUNAL
ERIA CIVIL
CIRCUITO

72

1) El juicio natural al que deriva el amparo de revisión que se contesta, se encuentra en primera instancia, y por lo tanto el suscrito no ha sido oído ni vencido en juicio, por lo que la prueba consistente en un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que detalle información privada de todas mis cuentas bancarias y sus movimientos durante los últimos 3 años, no es idónea para acreditar daño moral alguno, y

2) El monto de la sanción se encuentra regulado y topado por la ley especial de la materia en el juicio principal, es decir la "Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal", tal como lo sustentó de manera adecuada y detallada el Juez 12 de Distrito en la Sentencia que se combate, sin que se haya resuelto la inconstitucionalidad y/o inaplicación de dicha ley para el presente caso.

Pues bien, por lo antes mencionado, solicito a sus Señorías declaren improcedente el Recurso de Revisión que se contesta, confirmando la Sentencia que resuelve el Amparo arriba mencionado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo expuesto y fundado,

A USTEDES CC. MAGISTRADOS, atentamente solicito se sirvan:

PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho, contestando los improcedentes agravios del Recurso interpuesto por el Tercero Interesado.

SEGUNDO.- Tener por autorizadas a las personas antes señaladas para los efectos precisados.

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

3

TERCERO.- En su oportunidad, dictar resolución confirmando la Sentencia Impugnada.

Protesto lo necesario.

[REDACTED]

Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete.



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

5385

En doce de septiembre de dos mil diecisiete, José Manuel González Jiménez, secretario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, **CERTIFICO:** que el término de cinco días que se concedió a las partes diversas a la recurrente para promover revisión adhesiva, decretado en auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el recurso de revisión R.C. [REDACTED] transcurre del cinco al once de septiembre del año en curso, sin contar los días nueve y diez del presente mes y año, por inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- **DOY FE.**

El Secretario

José Manuel González Jiménez.

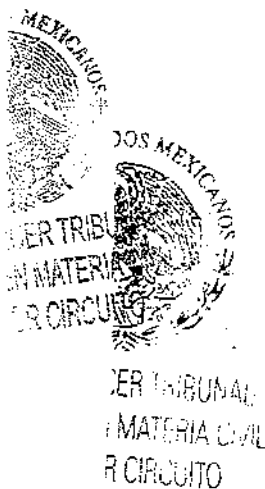
En doce de septiembre de dos mil diecisiete, José Manuel González Jiménez, secretario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta a la magistrada presidenta con la certificación de cuenta y con el escrito del quejoso [REDACTED] **Conste.**

Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil diecisiete.

Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Con fundamento en lo previsto por el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación de cuenta para los efectos legales a que haya lugar.

Por tanto, a sus autos el escrito del quejoso [REDACTED] con el que formula diversas manifestaciones.



3 215797 860028

Se tienen por hechas las manifestaciones del ocurrente en defensa de los derechos de su representada, en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo.

Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que el promovente indica para oír y recibir notificaciones de su parte, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados [REDACTED]

[REDACTED] por haber registrado sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, con los números de registro [REDACTED]

[REDACTED] respectivamente. Por lo que hace a las últimas personas, solamente se les tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo.

Se autoriza la utilización de dispositivos electrónicos, para los fines solicitados por el promovente.

Con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; cúmplase en sus términos el auto de presidencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y tórnese este expediente al Magistrado Arturo Ramírez Sánchez, integrante de este Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que formule el proyecto de resolución; en el entendido que este proveído tiene efectos de citación para sentencia, acorde al artículo 92 de la Ley de Amparo.

En cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que el plazo para formular el proyecto de resolución, debe iniciar a partir de que el expediente se encuentre



PRIMO TERC
COLEGADO EN
DEL PRIME



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

544
FORMA B-2

00026

debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de este proveído y surtan efecto las mismas.

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordó la Magistrada **Maria Concepción Alonso Flores**, presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien firma con el Secretario **José Manuel González Jiménez** que da fe.

JMGJ/gmo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

En trece de septiembre de dos mil diecisiete siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo vigente, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal. Doy fe.

EL ACTUARIO JUDICIAL

LIC. RICARDO OJEDA SOLANO.

LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CORRESPONDE AL PROVEÍDO QUE ANTECEDE. CONSTE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

546 000 23

FORMA 5.1

27

En dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete,
Liliana López Apodaca, Actuaria Judicial adscrita al
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito en cumplimiento al acuerdo de
doce de septiembre de dos mil diecisiete,
se turna el presente expediente al Magistrado
ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ titular de la ponencia
"B" de este órgano colegiado, el cual consta de
27 fojas útiles - Conste -

Liliana
27

PRIMER CIRCUITO

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

000 29
FORMA B-1
547

R.C. [REDACTED]
QUEJOSO: [REDACTED]
RECURRENTE: [REDACTED]

El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario de Acuerdos, hace constar que el presente asunto fue listado en esta misma fecha, para ser sesionado el quince del mismo mes y año en mención y siguientes.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.

El quince de noviembre de dos mil diecisiete, el presente asunto fue resuelto por unanimidad de votos, en el sentido de confirmar la resolución sujeta a revisión y conceder el amparo para efectos. Conste.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.

TRIBUNAL
INTERIOR CIVIL
CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

060 30
FORMA-39
29

548

REVISIÓN CIVIL: R.C. [REDACTED]

QUEJOSO: [REDACTED]

RECURRENTE: [REDACTED]

MAGISTRADO PONENTE:
LIC. ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ.

SECRETARIA:
EVA BIBIANA MARTINEZ TRUJILLO.

Ciudad de México. Resolución del Décimo
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, correspondiente a la sesión del día quince de
noviembre de dos mil diecisiete.

V I S T O S; para resolver, los autos del
recurso de revisión R.C. [REDACTED] interpuesto por
[REDACTED] por conducto de su
apoderado Eduardo Gonzalo Coriche Varela, contra la
sentencia dictada por el Juez Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el
dieciséis de mayo de dos mil diecisiete -terminada de
engrosar el veinticinco de julio siguiente- en el juicio de
amparo indirecto [REDACTED]

OS M.
TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO
SECRETARIA
CIVIL
CIRCUITO

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED] solicitó la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los que hizo consistir en: "La sentencia de 17 de enero de 2017 que confirma el auto de 28 de septiembre de 2016, y que indebida e ilegalmente ordena girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que esta dependencia rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años, sin que haya sido oído ni vencido en juicio y sin que dicha medida constituya prueba en ningún sentido para acreditar daño moral, es decir la acción en el juicio natural."



"1.- Sí es mi deseo señalar como autoridad responsable al JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO... -- 2.- Los actos que se reclaman de cada una de las autoridades responsables son: -- DE LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la sentencia de 17 de enero de 2017, que confirma el auto de 28 de septiembre de 2016 y que ~~indolentemente~~ e ilegalmente ~~emitió~~ girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que esta dependencia rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años. -- DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, en su calidad de ejecutora, la expedición del oficio donde esta dependencia rinda un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años. -- DEL C. JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la orden y expedición del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contenida en el auto de 28 de septiembre de 2016, que ordena a esta





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

5

R.C. [REDACTED]

FORMA A-55

550

dependencia que rinda un informe con copia certificada 000 32

de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años. - - 3.- En cumplimiento a este numeral,

inserto una fotografía fiel de los puntos resolutive de la sentencia dictada el 17 de enero del año en curso en el toca de apelación [REDACTED] - - "... - - PRIMERO.- Se

confirma el auto recurrido. - - SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas. - - ... - - 4.- Respecto al

estado procesal que guarda el juicio [REDACTED] es el de admisión de pruebas, siendo la última actuación el auto de 28 de septiembre de 2016, donde admite las pruebas

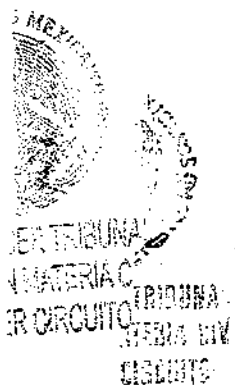
ofrecidas por las partes, entre las que se encuentra el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multicitado. Posteriormente han habido promociones de

trámite que no impulsan el procedimiento, dado que la apelación que da origen a la sentencia de la Sexta Sala arriba mencionada, fue admitida en ambos efectos, es

decir con suspensión del procedimiento. - - 5.- Por lo que

respecta a la solicitud de suspensión provisional y definitiva, se solicitan para los efectos de que el oficio multicitado no sea girado por el Juez Décimo Quinto de lo

Civil a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en



caso de que éste ya haya sido enviado y presentado ante dicha comisión, que esta dependencia se abstenga de rendir la información solicitada por el juez mencionado."

CUARTO.- En proveído de veintidós de febrero de este año el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de esta ciudad, admitió la demanda y señaló día y hora para la audiencia constitucional.

QUINTO.- Audiencia que se celebró el dieciséis de mayo siguiente y se dictó sentencia, cuyo punto resolutivo es del siguiente tenor:

"**ÚNICO.** La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a [REDACTED] por derecho propio, contra actos de la **Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, en términos de la última parte considerativa de este fallo. - - **NOTIFÍQUESE.**"

SEXTO.- Inconforme con esa determinación [REDACTED] interpuso recurso de revisión. Tocó conocer de él a este tribunal, quien lo **admitió** el





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

7

R.C.

537
FORMA 100

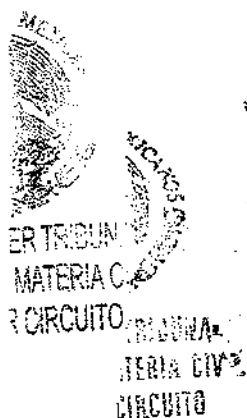
009 33

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Auto en el que se otorgó el plazo de cinco días contenido en el artículo 82 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso adhesivo. Lo que no sucedió.

La sentencia contra la que se interpuso la revisión se notificó por lista de tres de agosto de dos mil diecisiete, surtiendo efectos al día siguiente, por lo que el término de diez días para su interposición transcurrió del siete al dieciocho de agosto de este año, descontando los días doce y trece del mismo mes y año por ser inhábiles, y como el recurso se presentó el dieciocho de agosto de este año, está interpuesto en tiempo.

El Agente del Ministerio Público Federal no intervino.

Conforme al auto de doce de septiembre de este año, el dieciocho siguiente se turnaron los autos al magistrado **Arturo Ramírez Sánchez**, para formular proyecto de sentencia y,



CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este tribunal es competente para resolver el presente recurso de revisión conforme los artículos 107, fracción VIII, último párrafo de la Constitución; 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por interponerse contra una sentencia dictada por un juez de Distrito perteneciente a este primer circuito.



SEGUNDO.- La sentencia recurrida se apoyó en las siguientes consideraciones:

“QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. -- TOMO II. -- 1. [REDACTED]

en la vía ordinaria civil, demandó de Sergio Aguayo Quezada diversas prestaciones, entre ellas, el pago por lo menos de una indemnización a razón de [REDACTED]

[REDACTED] por concepto de reparación del daño moral ocasionado por



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

9

R.C.

FORMA

34

las publicaciones periodísticas realizadas en los

periódicos denominados como "REFORMA" y "SIGLO DE

TORREÓN" (fojas 1 a 24). - - Para ello, se narraron once

puntos de antecedentes y se ofrecieron las pruebas que

se estimaron procedentes. - - 2. La demanda fue admitida

en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis (fojas

25 y 26) en el que el Juez Décimo Quinto de lo Civil del

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

dictó las medidas que estimó conducentes, para lo cual

ordenó emplazar al demandado. - - 3. Por escrito

presentado en el juzgado de origen el diecinueve de

agosto de dicha anualidad, la parte demandada dio

contestación oponiendo las excepciones y defensas que

estimó convenientes y ofreció las pruebas respectivas

(fojas 53 a 169). - - 4. En auto de veintidós de agosto de

dos mil dieciséis el juez natural tuvo por contestada la

demanda, con la cual dio vista a la parte actora y fijó

fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia

previa y de conciliación (foja 170). - - 5. El uno de

septiembre de dos mil dieciséis, fecha para que se llevara

a cabo la aludida audiencia, el juez de origen abrió a

prueba el mencionado juicio (foja 196). - - 6. En escrito

EXICANOS
R. TRIBUNAL
MATERIA CIV.
9 CIRCUITO

presentado el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 218 a 238) remitido al día siguiente al juzgado natural, la parte actora a través de su representante, ofreció entre otras, la siguiente prueba: - -

"...12. La documental consistente en el informe y copia certificada que se sirva rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al tenor de los siguientes puntos: - -

- a) Dirá si existen cuentas bancarias a nombre de Sergio Aguayo Quezada. - - b) Informe cuáles son las cuentas bancarias a nombre de [REDACTED] - - c)

Indique los saldos que han tenido las cuentas a nombre de [REDACTED] - - d) Remita a este H.

juzgado copia certificada de los estados de las cuentas bancarias a nombre de [REDACTED] de los

últimos 3 años. - - [...] - - Con esta prueba se acreditarán

todas las manifestaciones vertidas por esta parte y que

se encuentran contenidas en los hechos de la demanda

inicial de este juicio, los cuales deben tenerse aquí

íntegramente reproducidos en obvio de repeticiones y por

economía procesal, estribando la necesidad de esta

probanza para acreditar la capacidad económica del

demandado y en razón de ello la condena que debe





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

11

R.C.

FORMA A-55/20

533

imponérsele por su señoría. - - [...] - - Esta prueba se 000 35

relaciona con todos los hechos, especialmente con el 31 de la demanda inicial." - - 7. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 296 y 297) el juez natural proveyó lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por el actor y respecto a la señalada en el párrafo que antecede acordó lo siguiente: - - "Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. - - ...se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: - - [...] - - Por lo que respecta a la marcada con el número 12, como lo solicita gírese oficio a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a fin de que rinda el informe con los puntos que indica el oferente de la prueba, asimismo, remita copia certificada de los estados de cuentas bancarias a nombre del C. [REDACTED]

[REDACTED] de los últimos tres años..." - - 8. En desacuerdo con la anterior determinación el demandado, por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación en su contra (fojas 299 a 304). - - 9. Del aludido medio de impugnación, por cuestión de turno, correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien por

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

auto de once de octubre de dos mil dieciséis lo tuvo por interpuesto y admitido en ambos efectos, registrándolo con el toca [REDACTED] para lo cual se fijó como garantía la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] (foja 305), la cual fue exhibida oportunamente. - - 10. En resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la sala revisora determinó **confirmar** el auto apelado (fojas 378 a 383). - - **La anterior resolución constituye el acto reclamado en este juicio.** - - Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se trae como hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete este juzgador admitió a trámite la demanda de amparo promovida por [REDACTED]

contra actos del **Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México**, registrada con el expediente **2017/2017-II**, consistentes en lo siguiente: - - -



PRIMO DEL
 TERCER JUEZ
 EN MEXICO
 DEL PRIMER



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

13

R.C.

FORMAA-560

000 36

IV.- ACTOS RECLAMADOS:

1) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recursos de Revocación interpuesto en contra del auto de fecha 3 de febrero del año en curso, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso y declara firme el auto recurrido, mismo que ordenaba de manera ilegal la entrega del Billere de Depósito [REDACTED] de fecha 24 de octubre de 2016, expedido por el [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] a la parte actora (hoy tercero interesado).

2) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recurso de Revocación interpuestos en contra del auto de fecha 7 de febrero del año en curso, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso y declara firme el auto recurrido, mismo que de manera ilegal y sin fundar en precepto alguno su decisión, determinaba reanudar el proceso del juicio natural, admitiendo diversas pruebas entre otras cosas, no obstante que la sentencia de fecha 17 de enero de 2017 que confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, dictada por la Sexta Sala Civil mediante

la cual declara improcedente la apelación que suspendió el procedimiento se encuentra Sub Jure.

SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. - -

... - - PRIMER concepto de violación, el solicitante del amparo aduce que la sentencia reclamada es violatoria a sus derechos humanos debido a que la autoridad incumple con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución, omitiendo entrar al fondo del asunto, so pretexto de encontrarse impedida para hacer consideraciones sobre el particular, por estimar que el análisis y resolución de dicho tema está reservado a las autoridades federales, con lo cual se soslayó el principio

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TRIBUNAL
RIACIVIL
UITO



TRIBUNAL
ATERIA CIV
CIRCUITO

pro persona. - - **SEGUNDO** motivo de queja, se aduce que la sala responsable vulneró lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución, en relación con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), por confirmar de manera ilegal el auto impugnado, sin que hubiere entrado al fondo del asunto, en plena incongruencia con lo expresado en el recurso de apelación. - - Además, que se funda indebidamente el acto reclamado en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, pues los informes sobre las cuentas bancarias del quejoso no son medio idóneo para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, ya que no van a acreditar si el actor, hoy tercero interesado, sufrió daño moral, pues su capacidad económica no tiene que ver con la *litis* planteada, por lo que al haber ordenado su desahogo se lesiona el derecho a la confidencialidad. - - Que la autoridad sentenciadora se abstuvo de resolver bajo el principio de congruencia, es decir, de ser clara, precisa y congruente con el recurso de apelación interpuesto, sin que se hubiere pronunciado sobre el





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

15

R.C.

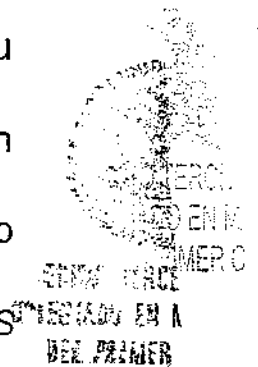
FORMA A-50

000 37

contenido de todos los agravios hechos valer por el quejoso. - - Que el juez natural ordenó el desahogo de una prueba no idónea. - - Que en términos del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, aplicable al presente asunto, la sanción económica en caso de resultar procedente la acción de daño moral, en ningún caso deberá exceder de 350 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por lo que resulta irrelevante saber si existe mucho o poco dinero en las cuentas del quejoso, ya que la sanción se encuentra topada, y es un monto que no puede ser determinado de manera discrecional por el juzgador, con base en sus ingresos. - - **TERCER** concepto de violación, el quejoso argumenta que la resolución reclamada es violatoria a sus derechos humanos, ya que los informes de sus cuentas bancarias, se trata de información confidencial protegida por la ley, sin que se esté en un caso de excepción a que hace referencia el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, en virtud de que no existe un embargo o providencia precautoria que ordene



que sean exhibidos esos datos, por lo que al haber ordenado su desahogo se le deja en estado de indefensión. - - CUARTO argumento de queja, se afirma que la sala responsable apoya su decisión de confirmar la admisión de la prueba, sin que se encuentre contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, por lo que su decisión carece de fundamentación y motivación. - - En apoyo a sus consideraciones, el quejoso invoca el criterio de rubro: *"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE"*. - - Son **sustancialmente fundados** los motivos de disenso, sintetizados en párrafos arriba. - - En principio, es menester señalar que el concepto natural de *litis* se traduce en pleito, controversia judicial o actuación en juicio, que trasladado al ámbito jurisdiccional debe entenderse como el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

17

R.C.

FORMA 550

estima necesario apuntar que es con la contestación a la 000 33

demanda cuando la *litis* o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juzgador, situación similar acontece cuando se trata de la interposición de cualquier medio de impugnación, supuesto en el cual la *litis* se constituye con los agravios expresados en el recurso respectivo, lo cual no puede ser desconocido por el órgano revisor. - - En términos generales, integrada la *litis* las partes no pueden modificarla y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. - - De manera que, el órgano resolutor al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no puede emitir en su fallo de puntos o cuestiones no comprendidas en la *litis*. - - Es así que el principio de congruencia consiste en que las resoluciones correspondientes no contengan conclusiones y afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna) e impone a los juzgadores el deber de resolver la *litis* (conflicto) tal y como quedó integrada con los planteamientos expuestos en la demanda y en su

TRIBUNAL
PRIMARIO
CIVIL

TRIBUNAL
PRIMARIO
CIVIL

respectiva contestación, así como con los agravios propuestos (congruencia externa). - - El artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece: - - *"Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos."* - - Del anterior precepto se obtiene, en lo que interesa, que las determinaciones que emita la autoridad jurisdiccional deben de ser, claras, precisas y





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

19

R.C. [REDACTED]

FORMA [REDACTED]

557

congruentes con las constancias de autos. - - De ahí que, 000 39

las sentencias que se dicten en el recurso de apelación también deberán satisfacer el principio procesal de congruencia interna y externa, porque la facultad del órgano de apelación de resolver el recurso que las partes interpongan implica, sin duda alguna, examinar los agravios que expongan, sin emitir en el fallo consideraciones contrarias a lo que se alega. - - Es patente que la sentencia

en esa instancia no puede ser modificada por las partes después de que ha sido fijada con el escrito de agravios y la sentencia apelada, lo que revela la obligación de la autoridad revisora para ceñir su actuación a lo argumentado en vía de agravios. - - En esa tesitura, la sala resolutora atendiendo al principio de congruencia externa debe resolver lo conducente respecto de la resolución recurrida, análisis sin el cual no puede decirse que se cumplió con el principio de congruencia, por lo que debe ocuparse de los planteamientos que formula la disconforme relativos al fallo apelado. - - Con el objeto de verificar si en el caso la sala responsable violó el principio de congruencia externa, es conveniente señalar que el quejoso, en el recurso de apelación, esgrimió totalmente



TRIBUNAL
TERCERA C
CIRCUITO



TRIBUNAL
TERCERA C
CIRCUITO

los agravios que se sintetizan a continuación: - - A). Que se violan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) –principio *pro persona*–, en relación con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito, interpretado a contrario sensu, al admitirse ilegalmente la prueba marcada con el numeral doce, señalada en el escrito de ofrecimiento de pruebas de la actora. - - B). Que se contraviene la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) porque además de ser incongruente carece de fundamentación y motivación, con lo cual se dejó en completo estado de indefensión a la parte apelante. - - En el fallo reclamado que resolvió el recurso de apelación, la sala responsable determinó esencialmente: - - Estudió conjuntamente los dos agravios, los cuales declaró infundados. - - Para lo cual determinó, por lo que respecta a la supuesta violación a los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución, que la resolutora se encontraba





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

21

R.C.

FORMA A-99

553

000 40

impedida para hacer consideraciones sobre el particular, al estar reservado su análisis y resolución a las autoridades federales. - - Así como que el auto recurrido se encontraba debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues el recurso de apelación interpuesto por el demandado, tenía fundamento en el primer artículo invocado, porque se argumentó que la prueba consistente en el informe que se ordenó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a la existencia de cuentas a nombre del hoy apelante, y se remitan copias certificadas de tales cuentas, lo cual resultaba violatorio del artículo 142 de la Ley General de Instituciones de Crédito. - - Además, precisó que el *a quo* no se fundó en dicho precepto para admitir la prueba señalada con antelación, siendo que el juicio de origen se tramitó en la vía ordinaria civil y los informes se están solicitando en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial que conoce del presente juicio, en relación a una persona que tiene el carácter de demandada en el juicio de que se trata, además que no

TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
RECURSO
MATERIA CIVIL
RECURSO

existe ningún precepto que prohíba la admisión de la prueba de que se trata, razón por la que se confirmó el auto apelado. - - La confrontación de los razonamientos que sostienen el acto reclamado con los anteriores argumentos esgrimidos por el quejoso, resulta claro que la sala responsable en contravención a lo establecido en el invocado artículo 81, no abordó totalmente el examen de los planteamientos propuestos en el recurso de apelación. - - En efecto, la sala civil soslayó pronunciarse en sus términos respecto de la cuestión efectivamente planteada en el recurso de apelación, pues en lugar de resolver lo conducente en relación con la violación a los derechos fundamentales del quejoso, contenidos en el derecho doméstico y en la convención extranjera a que alude, determinó que se encontraba impedida para pronunciarse sobre el tema propuesto, aludiendo a que era cuestión propia de las facultades de las autoridades federales, que se traduce en una atribución reservada exclusivamente a temas propios de constitucionalidad, mas no de control de convencionalidad. - - Es así, que la cuestión omitida por la autoridad responsable debía ser abordada desde la óptica del principio *pro persona*, que





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

23

R.C.

FORMAA-59

000 41

surge con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que modificó, entre otros, el artículo 1° de la Constitución para establecer: - - (se trascribe) - En dicho precepto legal se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. - - Con base en ese precepto, **cualquier juez nacional** está facultado para emitir pronunciamiento respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro persona*. - - Por tanto, en el sistema jurídico mexicano actual, los **jueces nacionales**, tanto **federales** como del **orden común**, están facultados para emitir pronunciamiento respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías directas de control previstas en la norma fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas



ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
NACIONAL
DE LEGACION
DE LA UNION
DE REPUBLICAS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

25

R.C.

FORMA A-65

000 42

sala civil se limitó a estudiar conjuntamente los agravios propuestos por el apelante, determinando su imposibilidad legal para pronunciarse respecto de temas que estimó reservados a las autoridades federales y declaró legal lo determinado en el auto recurrido, por no existir prohibición para la admisión de la prueba en comento, sin que se hubiere pronunciado respecto a la cuestión precisada en párrafos arriba, siendo que se encuentra obligada a dar respuesta fundada al argumento en comento, contenidos en el pliego de agravios de dicho medio de impugnación. - - Cabe destacar que los artículos 39 y 41 contenidos en el capítulo V de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), disponen: - - **"Artículo 39.** *La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral.*" - - **"Artículo 41.** *En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se*

OS MEXICANOS
CER TRIBUNAL
N MATERIA CIVIL
ER CIRCUITO
N CIRCUITO

fixará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. - - En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo." - - Los citados preceptos contemplan distintas medidas para reparar el daño causado por el ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, que consisten en la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado o, en su defecto, a través de una indemnización. - - El propio artículo 41 establece una serie de criterios que deberán ser tomados en cuenta al momento de fijar la indemnización, los cuales permiten precisamente graduar





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

11

R.C. [REDACTED]

FORMA A-111

561

000 43

la responsabilidad de la persona en función de las circunstancias concretas en las que se realizó la expresión. Esos criterios incluyen *"la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso."* - - En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 41 establece la posibilidad de atenuar la medida reparatoria al permitir al juez "disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo" en los casos en que los sujetos afectados por las expresiones sean servidores públicos. Y por otro lado, el artículo 43 hace posible agravar el monto de la reparación en casos de reincidencia durante el plazo de un año, al dar la posibilidad al juez de "imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización." - - Finalmente, en esta ley se establecen algunas prohibiciones, a fin de que las sanciones no se consideren desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que "en ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas." Mientras que el propio artículo 41 estipula que "en ningún caso el

OS MEXICANOS
CERTRIFICADO
EN MATERIA
CIRCUITO
BATEA CIV
CIRCUITO

monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." - - Por tanto, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece el monto o límite de la indemnización por daños al patrimonio moral, la cual el juez determinará según lo previsto en el artículo 41 referido (tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, no pudiendo en ningún caso el monto por indemnización exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad). - - Consecuentemente, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación en estudio, pues la resolución reclamada es violatoria de lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo procedente es otorgar el amparo... para los efectos siguientes: - - La sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil

INSTITUTO VOTACIONAL
DECISION
COLEGIAL
SECCION DEL P
CATEGORIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

29

R.C. [REDACTED]

FORMA-A-5

000 44

diecisiete dictada en el tomo [REDACTED] - - En su lugar emita otra, en la que ~~de conformidad~~ con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la *litis* planteada en el recurso de apelación... esencialmente, por lo que hace, por una parte, a los planteamientos referentes a que se vulneraron los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 3, 8, 9, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), relativos al principio *pro persona*, y por otra, a que se infringió la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). - - Al haberse declarado fundados los conceptos de violación dirigidos a demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, este juzgado de distrito ya no entra al estudio de los demás conceptos de violación al resultar innecesario su análisis.¹ - - La concesión del amparo se

¹ Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia, de la Séptima Época, Tercera Sala, del Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 107, página: 85, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS"...

hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de esta primera, tiene que resolverse igualmente por lo que toca a las ejecutoras."

TERCERO.- El recurrente expresó los siguientes agravios:

"1.- PRIMER AGRAVIO. - - Parte de la resolución que lo causa lo constituye toda la sentencia recurrida, por cuanto hace conceder al quejoso el amparo contra los actos reclamados de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. - - Preceptos legales violados, no aplicados o aplicados indebidamente lo son los artículos 73, 74, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, 222 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con las tesis jurisprudenciales que se invocan en este ocurso. - - Concepto de agravio: - - La sentencia definitiva dictada



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

31

R.C. [REDACTED]

FORMA [REDACTED]

33

000 45

en el juicio de amparo [REDACTED] de 16 de mayo del 2017,

ya que es ilegal, toda vez que resulta incongruente, tal y como se expone a continuación: - - Como se advierte los argumentos expuestos por el a quo en la sentencia impugnada en los que sostiene que la autoridad responsable debió entrar al estudio de los agravios que se hicieron valer por el quejoso contra el auto de 28 de septiembre del 2016, que ordena se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a fin de que informe sobre las cuentas bancarias del quejoso, a pesar de que no invocó violaciones procesales, toda vez que la sentencias incluyendo las de apelación deben satisfacer el principio procesal de congruencia interna y externa ya que las facultades del órgano de apelación deben resolver el recurso que las partes interpongan. - - La sentencia dictada por la Sexta Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca 2174/2016, señala que es improcedente el recurso de apelación hecho valer por el hoy quejoso contra el auto de 28 de septiembre del 2016 dictado por el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en virtud de que básicamente argumenta violaciones a derechos humanos



TRIBUNAL
CIVIL
CIRCUITO

así como a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen (hoy Ciudad de México), sin alegar violaciones procesales en contra del dictado del auto de 28 de septiembre del 2016 por el juez natural. - - En este sentido es importante desatacar que los argumentos planteados por el hoy quejoso ante la sala responsable no alegaban violaciones al procedimiento, sino violaciones a supuestos derechos humanos, por lo que la sala responsable acertadamente decidió no entrar a los agravios formulados por el quejoso, pues ello conllevaría a que en la apelación no se alegaran violaciones procesales sino violaciones constitucionales como lo pretende la hoy quejosa. - - En este sentido, la sala responsable no entró al estudio de las supuestas violaciones a derechos humanos, pues el hoy quejoso, no argumentó violaciones procesales, razón por la cual su resolución estuvo apoyada en derecho, contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida. - - No debe perderse de vista que el juicio constitucional tiene por objeto el análisis de sentencias en las que no se cumplieron las formalidades del procedimiento en que se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

33

R.C. [REDACTED]

FORMA [REDACTED]

584

000 46

hayan transgredido preceptos constitucionales. - - En el caso el acto reclamando resulta fundado en derecho por parte de la autoridad responsable, pues no tenía obligación de entrar al estudio de los agravios que no tienden a combatir la resolución apelada. - - Tomando en consideración que el hoy quejoso no alegó violaciones procesales sino violación a los derechos humanos, la sala responsable no contempló determinar sobre dichas alegaciones, pues incluso en el caso de que existieran serían inoperantes para modificar el auto atacado, ya que en ninguna parte de los agravios se expone la razón procesal por la cual la prueba documental consistente en el informe que debe rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no debió admitirse. - - Sin embargo el a quo no lo determina de esa forma apoyándose en el principio de congruencia, de que la sala debió entrar al estudio de los agravios, pero pasa inadvertido que el quejoso no expresó agravios ante la sala responsable en el toca 2174/2016 que combatieran o hicieran ver el indebido ofrecimiento del informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a pesar de ello haya sido admitida por el juez natural. - - El ofrecimiento de dicha



documental cumple con los requisitos del artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles sin embargo el quejoso se limitó alegar que la admisión de esa probanza viola sus derechos humanos, luego entonces la sala responsable actuó de manera acertada al señalar que no era dable entrar al estudio de los agravios; se limitaban a señalar violaciones a los derechos humanos del quejoso, pero el a quo, pretende atribuir esta obligación a la sala responsable. - - En esa tesitura, es evidente que la sentencia que resuelve un recurso de apelación debe concretarse a analizar si el auto impugnado contraviene disposiciones legales que rigen el procedimiento, pero no a determinar si hubo violaciones a los derechos humanos pues dichas atribuciones le corresponderían al a quo con motivo de que se hubieran alterado las formalidades del procedimiento en la aplicación del derecho. - - Es lógico el argumento de la sala responsable de dejar de abstenerse de entrar al estudio de los agravios, pues incluso si lo hubiera hecho hubiera confirmado el auto apelado al no señalarle las disposiciones legales que se dejaron de aplicar o que fueron aplicadas inexactamente. - - La sentencia que se combate en ninguno de sus



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

35

R.C.

FORMA 505

000 47

considerandos explica por qué a pesar de que el quejoso no atacó procesalmente el auto recurrido, deben valorarse unos agravios inoperantes. - - De lo contrario se estaría permitiendo que en el recurso de apelación se introdujeran cuestiones ajenas a los agravios que fueron motivo de apelación, pues el apelante hoy quejoso nunca manifestó a la sala responsable la razón procesal para no admitir la prueba documental consistente en el informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. - - Por todo lo anteriormente expuesto, es obvio que en el caso la sentencia recurrida es incongruente e ilegal llegando al extremo de interpretar indebidamente los conceptos de violación que hace el quejoso, lo que hace que su resolución sea del todo incongruente y por ende ilegal, pues pretende que la sala resuelva sobre un auto impugnado en el que no se atacaron violaciones al procedimiento sino cuestiones ajenas como la violación a los derechos humanos. - - En tal virtud al resultar evidente que la sentencia impugnada es incongruente y por ende ilegal, debe dictarse otra en su lugar en la que se declaren infundados todos los conceptos de violación, especialmente los consistentes



en que la sala responsable debe resolver sobre cuestiones ajenas a su esfera jurídica como los es atender supuestas violaciones a derechos humanos. - -

Es importante señalar que el quejoso en los agravios que expuso ante la autoridad responsable se limitó a argumentar violaciones a los derechos humanos mas no al procedimiento, sin atacar el razonamiento del juez natural, razón por la cual resulta erróneo el criterio del juez a quo en el sentido de que tuvo que pronunciarse sobre la supuesta violación a los derechos humanos. - -

Por otra parte, el a quo pasa inadvertido que el quejoso nunca expuso la razón de por qué el auto apelado trascendería en el fondo del asunto, por lo que la sala responsable sí tenía la facultad de analizar o no los agravios, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria... - -

"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECURRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA.- El artículo 1339, párrafo último, del Código de Comercio, prevé que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

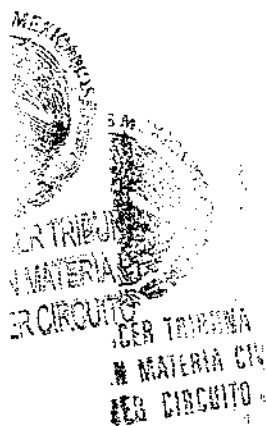
37

R.C. [REDACTED]

588
FORMA-A-55

000 43

tratándose del recurso de apelación, los agravios que en su caso deban expresarse contra resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, se expresarán en la forma y en los términos previstos en el diverso numeral 1344 del ordenamiento indicado. Por su parte, el párrafo tercero de este último precepto establece que tratándose de la parte vencida o de aquella que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación preventiva, deberá señalar en los agravios contra la sentencia que resolvió el juicio, de qué forma trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal impugnada. Por ello, si el recurrente omite cumplir con dicha carga procesal, el tribunal de apelación no podrá subsanar esta omisión y pronunciarse sobre la trascendencia que pudiera tener el resarcimiento de dicha violación, pues ello implicaría efectuar un análisis oficioso a favor de una de las partes, violándose con ello el principio dispositivo del proceso mercantil, así como los principios de justicia imparcial y equidad procesal. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, al actualizarse un obstáculo



procesal que impide al tribunal de alzada analizar si las violaciones procesales impugnadas podrían o no trascender al fondo del asunto, los agravios que en su caso se hubieren hecho valer en el recurso de apelación preventiva deben declararse inoperantes, al no ser jurídicamente posible analizar su eficacia y, con ello, determinar si procede o no revocar la sentencia definitiva y ordenar la reposición del procedimiento.” (cita fuente y precedentes) - - Como sus señorías pueden advertir los agravios del quejoso hechos valer ante la autoridad responsable no atacan violaciones procesales ni mucho menos que con dicha resolución se trascienda en el fallo que se llegue a dictar, por lo tanto, debió negarse el amparo en base a los argumentos vertidos en el cuerpo del presente recurso. - En tal virtud, la sentencia que constituye el acto reclamado se apega a lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, pues es congruente al no entrar el estudio de cuestiones no son objeto de la litis. - - El tal virtud es procedente el recurso de revisión que se hace valer. - - **SEGUNDO AGRAVIO** - - ... - - En el caso que nos ocupa la sentencia impugnada resulta ser ilegal toda vez que en la citada



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

39

R.C. [REDACTED]

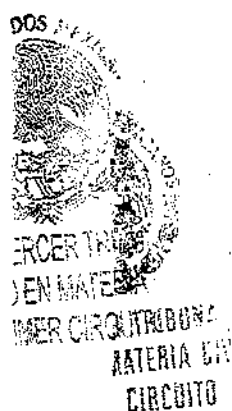
FORMA A-55

567

000 49

resolución el juez a quo sostiene que también debe contemplarse lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin que se ataquen violaciones procesales en el auto de 20 de septiembre del 2016 dictado por el juez natural. - - Respecto al monto de la indemnización que se reclama en las prestaciones de la demanda inicial se hace notar el monto de -trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, ~~instituta~~ a todas luces **inconstitucional**, puesto que dicho "límite máximo" transgrede las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución; tal y como se demostrará con la amplitud debida en el capítulo de "Hechos" de la presente demanda. - - En tal virtud debe atenderse a lo siguiente: -

- El argumento del a quo prejuzga sobre la cantidad a que debe ser condenado el hoy tercero interesado y que por ende es irrelevante el informe que rinda la Comisión



Nacional Bancaria y de Valores, como sus señorías podrán percatarse no se combate la admisión de la prueba sino situaciones ajenas. - - Ciertamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia, criterios relativos a la naturaleza y alcances de la -Obligación de Reparar- y dentro de éstos el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlo, atendiendo al daño causado. -

- Así, el concepto relativo a una "justa indemnización" o "indemnización integral" implica el restablecimiento de la situación anterior y de no ser esto posible, establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar. - - La reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido. -

- Las "reparaciones" como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

41

R.C.

FORMA A-55

000 50

daños respectivos. - - En el documento denominado

"Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones" aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el diecinueve de febrero de dos mil ocho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la reparación adecuada del daño sufrido debe concretizarse mediante medidas individuales tendentes a restituir e indemnizar. - - Por su parte, la Asamblea

General de la Organización de las Naciones Unidas también ha emitido principios y directrices que determinan los alcances del derecho a obtener reparaciones; en esencia, dichos principios establecen que la obligación que tienen los estados de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos dentro de su estado, tal es el caso de la relativa a proporcionar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, en las formas de restitución e indemnización. - - Los estados, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material al regularlo. - - Por lo anterior, podemos afirmar válidamente



EXTERIOR
MATERIA
COMUNITARIA



TERCER T.º
EN MATERIA
DE CIRCUITO

que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que el "límite máximo de indemnización" previsto por dicha norma jurídica, implica una restricción injustificada a los derechos constitucionales, por lo que la resolución que dicte su señoría no debe limitarse al tope a que se refiere la disposición legal antes señalada. - - El referido "tope" es inconstitucional, porque la existencia de límites a las indemnizaciones debidas a los perjudicados por daños morales causados; restringe injustificadamente el derecho a una reparación "justa e integral" ya que si bien la voluntad del legislador fue la de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, no menos cierto es que axiológicamente, el derecho a las medidas compensatorias en los casos que justamente lo ameritan, tiene mayor valor que la pretendida voluntad estatal de "limitar" el monto de las reparaciones. - - En efecto, la fijación del tope máximo de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- no constituye una medida adecuada



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

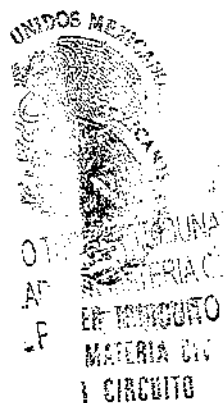
FORMA A-55

43

R.C.

000 51

porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den ni resulta necesaria para evitarlos, ya que las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora a ofrecer suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas. - - El tope máximo previsto por el precepto examinado es una medida legislativa no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir; además contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño. - - Consecuentemente, al momento de establecer en definitiva el monto de la indemnización que deberá cubrir el quejoso, a favor del suscrito, el juez natural deberá omitir atender al límite máximo previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la



Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, ya que de lo contrario se verían vulnerados los derechos de mi representado a recibir una justa indemnización. - - El artículo 63.1 del Pacto de San José señala que cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la corte dispondrá que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo que si ello fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, en razón de lo anterior resultan inconstitucionales los artículos 31, 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil Para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, toda vez que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y también el artículo 1 constitucional, toda vez que el tope máximo previsto por dicha legislación permite limitaciones irracionales al derecho de ser indemnizado de manera integral. - - En

SECCIÓN
DE
DEFENSA
PÚBLICA
F



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

45

R.C.

FORMA A-5

570
000 52

mérito al razonamiento vertido el hecho de limitar la indemnización a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene en inconstitucional. - -

Considerar un tope máximo implicaría resarcir cierto tipo de derechos pero se pasarían por alto otro tipo de afectaciones como el sufrimiento, ansiedad o menoscabo de la dignidad, por lo que debe considerarse una justa indemnización basada en las particularidades del caso y

en los principios de equidad. - En ese sentido debe atenderse a que mi representado es una figura pública que lo distingue de las demás personas sujetos a la reparación del daño moral, por lo que la sanción que se imponga al hoy quejoso no solo debe ser condenatoria en el sentido de la publicación de la sentencia y de la retractación de los comentarios hechos en su contra, sino debe atender a una reparación económica pero a ésta no debe aplicarse el tope máximo que prevé el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, sino a una justa indemnización

VICARIO

SECRETARÍA DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE JUSTICIA
MATERIA CIVIL
2º CIRCUITO

basada en las particularidades del presente caso. - -
Sirve de apoyo... lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la figura de -topes o montos máximos- relativos a indemnizaciones por daño moral: - - **"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.-** La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución Federal prevé un derecho sustantivo a **ser indemnizado por los daños generados por la actividad administrativa irregular del Estado** (A.R. 903/2008). Las autoridades estatales, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material al regularlo y de desplegar sus potestades públicas con el objetivo de garantizarlo. Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece las reglas conforme a las cuales deben



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

000 53

calcularse los montos de las indemnizaciones que el

Estado debe pagar cuando genera daños a los particulares, y en su fracción II señala dos reglas respecto al daño moral: 1) la autoridad administrativa o jurisdiccional debe calcular la indemnización conforme a los criterios establecidos en el Código Civil Federal, tomando en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante y 2) dicha indemnización no debe exceder del equivalente a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal por cada reclamante afectado. De acuerdo con los criterios con que esta Corte evalúa si existe una restricción injustificada a los derechos constitucionales, se concluye que el referido tope es inconstitucional porque, aunque sea una medida que puede relacionarse con la consecución de un objetivo admisible constitucionalmente, no es instrumentalmente adecuada para alcanzarlo. La existencia de límites a las indemnizaciones a los perjudicados por daños morales causados por el Estado es un objetivo sin duda cubierto por el artículo 113 constitucional, que precisa que los particulares tienen derecho a las mismas conforme a las

MEXICANA
TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO MATERIA CIVIL
B. CIRCUITO

bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. La voluntad de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, subrayada en la exposición de motivos de la Ley, alude igualmente a la legítima voluntad de que las medidas compensatorias se apliquen a los casos que justamente lo ameritan. Sin embargo, la fijación del tope máximo no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den ni resulta necesaria para evitarlos. Las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas. El tope máximo previsto por el precepto legal examinado es una medida no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir que en algunos casos puede ocasionar limitaciones irrazonables al derecho a ser indemnizado. Además, el mismo contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano y podría



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

49

R.C. [REDACTED]

FORMA A-55

000 54

plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño, ya que el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dispone que el cumplimiento de indemnizaciones ordenadas por estos órganos se rige por lo establecido en el Capítulo II de la misma, sección en la que se encuentra el artículo 14." (cita fuente y precedente) - - El a quo señala que la responsable debe entrar al estudio de agravios sobre derechos humanos, pero prejuzga sobre la cantidad a que debe en todo caso el quejoso."

CUARTO.- En primer lugar se abordará el estudio del segundo de los agravio que se someten a consideración de este órgano colegiado, en razón de que en él se plantea la **inconstitucionalidad** de los artículos 31, 39 y 41 de la **Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal** (hoy Ciudad de México).

En él se alega que la sentencia recurrida es ilegal, pues el juez Federal sostiene que debe contemplarse el tope de indemnización establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), prejuzgando sobre la cantidad a que debe ser condenado su contrario por tal concepto y así concluye, que por ello es irrelevante que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rinda el informe de mérito. Que ese numeral es **inconstitucional** en razón de que el "límite máximo" ahí establecido transgrede las garantías y derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución, al implicar una restricción injustificada a sus derechos constitucionales. Continúa señalando el inconforme, que ese límite a las indemnizaciones por daño moral restringe el derecho a una reparación "justa e integral" cuando ese derecho tiene mayor valor que la pretendida voluntad estatal de "limitar" el monto de las reparaciones y que además, contraviene las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 100
1994



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

N1

R.C.

FORMA

000 55

Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño, ya que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y también el artículo 1 constitucional. Y concluye afirmando: "...al momento de establecer en definitiva el monto de la indemnización que deberá cubrir el quejoso, a favor del suscrito; el juez natural deberá omitir atender al límite máximo previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal..."

Todo lo cual es **inoperante** pues los planteamientos inherentes a la inconstitucionalidad de una norma invocada por el juez Federal en apoyo a su toma de decisión, no constituye materia de estudio en el recurso de revisión planteado contra esa sentencia de amparo biinstancial.

#...

En efecto, conforme lo establecido en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución y 81 y 93 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión —en amparo indirecto— tiene como fin asegurar el buen desempeño del Juez de Distrito como órgano de control constitucional; por lo que a través de ese recurso no puede ser analizado lo alegado en torno a la inconstitucionalidad de una norma del orden común que rige el acto reclamado y cuya inobservancia, por parte de la autoridad responsable, haya sido el motivo por el que se otorgó la protección de la Justicia de la Unión.

Ello en razón de que este recurso no es un control de constitucionalidad sobre decisiones de otro órgano que sí realiza esa función y además, porque la actividad del juez Federal no es respecto a la impugnación constitucional sino a los actos de la autoridad señalada como responsable, por lo que la invocación de leyes ordinarias en la sentencia de amparo no genera un acto de aplicación en la esfera de las partes en el juicio de amparo, pues el juez de Distrito no es una extensión del poder ordinario; esto es, la referencia de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

53

R.C. 000/2017-10

FORMAA-55

000 56

normas del orden común en el fallo constitucional solamente se traduce en el argumento que sirve como fundamento para dar soporte a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por cuestiones de legalidad. Lo que no implica la sustitución del órgano de control constitucional a la actividad propia de las autoridades responsables para incidir en la esfera de los gobernados con la aplicación de las disposiciones que rigen el ejercicio de su poder.

ER TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
R CIRCUITO

RECIBO
EN MATERIA CIVIL
VER CIRCUITO

Luego, todo lo alegado en torno a la aducida inconstitucionalidad de los citados artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), es **inoperante**.

Sirve de apoyo a lo antes expresado el contenido de la jurisprudencia –por contradicción de tesis- sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número P./J. 48/2009, visible en la página treinta y ocho del Tomo XXX del mes de julio de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

"INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO.- El recurso de revisión en amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 y 91 de la Ley de Amparo, se limita a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional del Juez de Distrito, como órgano de control de la constitucionalidad, lo cual impide analizar en dicho medio de defensa el planteamiento de inconstitucionalidad de la norma del orden común u ordinaria que rige el acto reclamado, y cuya inobservancia por parte de la autoridad responsable haya sido el argumento en que tiene sustento la concesión del amparo; además, el citado recurso no





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

55

R.C.

FORMAA-55

000 57

es un control de constitucionalidad sobre decisiones de otro órgano que realiza una función de tal naturaleza, aunado a que la actividad del Juez de Distrito no es la materia de impugnación constitucional sino los actos de la autoridad señalada como responsable. Así la invocación de leyes ordinarias (federales o locales) en el fallo de amparo no genera un acto de aplicación de éstas en la esfera de los particulares que son parte en el juicio de amparo, ya que atendiendo a la premisa de que el órgano de control constitucional no es una extensión del poder ordinario, cuya actuación es precisamente la que da origen al juicio de amparo, la referencia de normas del orden común en el fallo constitucional solamente se traduce en el argumento que puede dar soporte a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado por cuestiones de legalidad, esto es, por no haber ajustado el ejercicio del poder público a los cánones normativos que le dan sustancia y legitimidad, en cumplimiento a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, lo que no implica la sustitución del órgano de control



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

SECRETARÍA DE JUSTICIA
JEFES DE LOS TRIBUNALES
JEFES DE LOS CIRCUITOS

constitucional a la actividad propia de las autoridades responsables para incidir en la esfera de los particulares, con la aplicación de las disposiciones que rigen el ejercicio de su poder público.”

En el primer agravio se aduce que equívocamente el juez de Distrito concluyó que la ad quem debió entrar al estudio de los agravios a pesar de que en ellos no se invocaron violaciones procesales; que fue correcto que la sala responsable no los estudiara pues en ellos se plantearon violaciones a derechos humanos y a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen esto es, violaciones constitucionales y el juicio de amparo tiene por objeto el análisis de sentencias en las que no se cumplieron las formalidades del procedimiento, por lo que —dice— la ad quem no tenía obligación de entrar al estudio de los agravios en los que no se alegaron violaciones procesales sino violación a derechos humanos y que además, no se señaló la razón por la que el informe que rindiera la Comisión Nacional



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

57

R.C

1474646 2.

000 51

Bancaria y de Valores no debió admitirse, limitándose a alegar que su admisión viola sus derechos humanos. Insiste en que la sentencia de alzada debe concretarse a analizar si el auto impugnado contraviene disposiciones legales que rigen el procedimiento, pero no a determinar si hubo violaciones a los derechos humanos. Que con su proceder el juez Federal está obligando a la sala responsable a resolver sobre cuestiones ajenas a su esfera jurídica ignorando que nunca se expuso por qué el auto apelado transcendía al fondo del asunto. Citando en su apoyo el criterio de rubro: **"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECORRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA."** Y finalmente indica el recurrente que la sentencia que se combate en ninguno de sus considerandos explica por qué a pesar de que el quejoso no atacó procesalmente el auto recurrido, deben valorarse los agravios.

#...

Lo que resulta en una parte **infundado** y en otra **inoperante**.

Infundado pues del análisis de la sentencia que se revisa se advierte que en su desarrollo el juez de Distrito expresó las razones, motivos y fundamentos, que lo llevaron a afirmar que la sala responsable sí se encontraba obligada a proceder al estudio de los agravios sometidos a su consideración. Y tan es así, que al efecto, después de explicar cómo se integra la litis, en qué constata la congruencia de las sentencias —tanto interna como externa— transcribió el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; concluyó:

A) que de la confrontación que se hace de lo alegado en agravios (sintetizándolos) con los razonamientos vertidos por la ad quem en torno a ellos, era de afirmar que en violación al mencionado precepto, la sala responsable no había examinado en su totalidad los agravios y en específico lo atinente a la violación a los derechos fundamentales del quejoso contenidos en el derecho doméstico y en la Convención Americana sobre



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

59

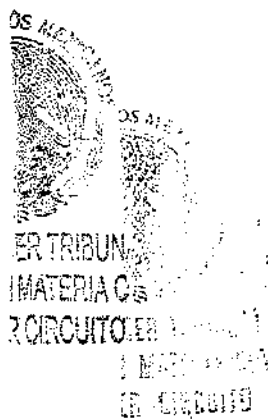
R.C. [REDACTED]

FORMA A-55

Derechos Humanos, y en la inobservancia de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México);

B) Que la ad quem había justificado esa falta de estudio bajo el argumento de que eran cuestiones propias de las autoridades federales por ser temas de constitucionalidad y no de convencionalidad, cuando lo correcto era que debía haberlas analizado desde la óptica del principio "*pro persona*", que surge con la reforma de junio de dos mil once al artículo 1º constitucional en el que se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deben ejercer el control de constitucionalidad.

C) Que aun cuando en ese precepto todos los jueces está facultado para pronunciarse respecto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable (principio *pro persona*) y que por ello era de señalar que en el actual sistema jurídico mexicano los



jueces federales y comunes están facultados para pronunciarse respecto a esos temas, con la limitante de que cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías de control previstas en la Constitución, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues esa encomienda es para los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales; y así concluye:

D) Que la ad quem tenía la obligación de pronunciarse respecto a esa cuestión relativa a los derechos humanos ya que es un tema que debe ser resuelto por cualquier órgano jurisdiccional del país.

Con lo cual se demuestra que contrario a lo afirmado por el inconforme, al emitir la sentencia recurrida el juez Federal sí expresó las razones y fundamentos que lo llevaron a afirmar que la alzada debía abordar el estudio de esos agravios. Deviniendo así lo **infundado** del disenso en análisis.

#...



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

61

R.C.

FORMA A-65

000 60

En tanto que su **inoperancia** radica en el hecho de que, como puede advertirse de la comparación que se hace de los sintetizados razonamientos que sustentan la sentencia en estudio frente a los agravios que se plantean en esta instancia revisora, con éstos no se controvierte el fundamento toral de aquélla y que consiste en que conforme a las últimas reformas al artículo primero constitucional, todos los órganos jurisdiccionales, del orden común y federal, tienen la obligación de pronunciarse respecto a los planteamientos que se les formulen en torno a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano sea parte, adoptando la interpretación más favorable para el gobernado (principio "pro persona").

En efecto, el recurrente simplemente refiere que fue incorrecto lo decidido por el juez de Distrito en razón de que en los agravios planteados a la sala responsable sólo se aducían violaciones a Derechos Humanos y a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

5 MAY 1965
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

Propia Imagen, que son violaciones constitucionales cuyo estudio está reservado a los jueces federales; que el juez de Distrito está obligando a la sala a resolver cuestiones ajenas a su esfera jurídica sin que ni siquiera se hubiera dicho de qué forma trascendían al resultado del fallo y que además, no se señalaron las razones por las que no debía admitirse el informe en cuestión. Olvidándose de mencionar si era correcto o no el alcance que se otorgaba a la función jurisdiccional, conforme a la última reforma al artículo primero constitucional.

Omisión impugnativa en que incurre el inconforme, que obliga a este tribunal colegiado a dejar intocados los razonamientos que sustentan el auto impugnado, para que alignando, bajo sus propios fundamentos de derecho, el sentido del fallo en revisión.

Deviniendo así la aludida inoperancia de este disenso.

#...



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

63

R.C.

FORMA A-65

000 61

Sustenta lo dicho la jurisprudencia I.6°.C.J/6, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página treinta y tres del Tomo cincuenta y cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, misma que se comparte y dice:

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. Si en la resolución recurrida el Juez de Distrito sostiene diversas consideraciones para desechar la demanda y el recurrente lejos de combatirlas, se concreta a señalar una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador en que apoyó su fallo, es evidente que los agravios resultan inoperantes.”

Así como la jurisprudencia identificada con el número treinta y seis, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

publicada en la página veintitrés del Tomo VI, Octava Época del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que es de observancia obligatoria en términos de lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, y que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

65

R.C.2

FORMAA-55

530

los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TERCER TRIBUNAL
DE EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

TRIBUNAL
DE EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

Ya que no nos encontramos en presencia de ningún caso donde deba suplirse la queja deficiente, pues en los juicios de amparo en materia civil, como es la sentencia recurrida, impera el principio de estricto derecho cuando no se advierte un motivo legal que autorice suplencia en términos de lo dispuesto al efecto por las fracciones I, II y VI del artículo 79, de la Ley de Amparo.

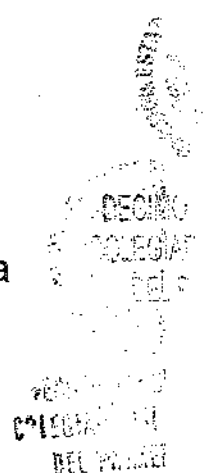
En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los agravios hechos valer, ha lugar a **CONFIRMAR** en sus términos la sentencia que se revisa y conceder el amparo para los efectos que se precisaron en el fallo recurrido.

Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en lo establecido en los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIII, de la Constitución General de la República; 73, 74, 77, 84 y 92 de la Ley de Amparo; 35 y 37 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se;

RESUELVE:

PRIMERO.- Se **confirma** la resolución sujeta a revisión.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a [REDACTED] contra los actos que reclamó de la **Sexta Sala**, del **Juez Décimo Quinto**, ambas autoridades de lo Civil y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**. Consistentes, respecto de la primera, en la **sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete** en el toca [REDACTED] de la segunda en **expedición del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

67

R.C. [REDACTED]

FORMA A-55/ [REDACTED]

63

Valores ordenando rindiera informe, con copia certificada, de los estados de cuenta bancarios del señor [REDACTED] por los últimos tres años y de la señalada Comisión, en el cumplimiento de la solicitud de expedición del mencionado informe. Concesión que se otorga para los efectos precisados por el juez Federal.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución; devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió, y en su oportunidad archívese como asunto concluido.

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, los magistrados que integran el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, licenciados, María Concepción Alonso Flores (presidenta), Arturo Ramírez Sánchez (ponente) y Daniel Horacio Escudero Contreras.

Firman, todos los mencionados ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 188 de la Ley de Amparo y

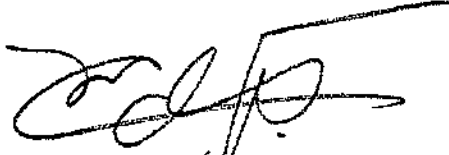


TRIBUNAL
MATERIA C.
DECIMO

11 DE JUNIO DE 1963
MATERIA C.
DECIMO

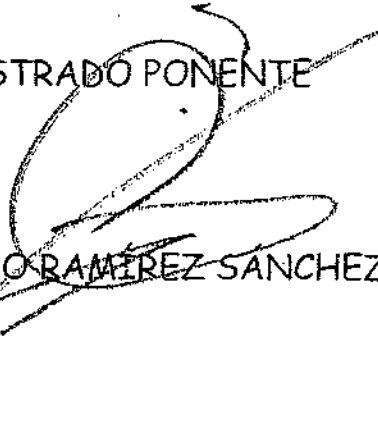
41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en que se realizó el engrose de esta resolución. DOY FE.

MAGISTRADA PRESIDENTA



LIC. MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES.

MAGISTRADO PONENTE



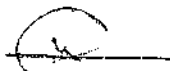
LIC. ARTURO RAMÍREZ SANCHEZ.

MAGISTRADO



LIC. DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS



LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.

Esta última hoja corresponde al R.C. [REDACTED] sesionado el día quince de noviembre de dos mil diecisiete. Conste.
ARS/BMT/gmm.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
COLEGIO DE ABOGADOS
DEL PUEBLO



528
FORMA B-1

000 64

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

POE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R/ [REDACTED]

En veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se notifica la resolución que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal.
Doy fe.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. YADIRA FLORES BAUTISTA.



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN QUE
ANTECEDE. CONSTE.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Constancia de captura de Sentencia en el
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

Órgano jurisdiccional:

Tipo de Asunto:

No. expediente único
nacional:

No. expediente:

Materia:

Quejoso

Recurrente

Autoridad responsable

Tercero
perjudicado/interesado

Tema:

Magistrado:

Sentido de la resolución o
sentencia:

Fecha de la resolución o
sentencia:

Fecha y hora de ingreso de
resolución o sentencia al
sistema:

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Amparo en revisión

Civil

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y OTROS

Son inoperantes los agravios que no combaten los fundamentos del
acto reclamado.

Ampara, Confirma

15/11/2017

24/11/2017 02:22:07 p.m.

LA SUSCRITA EVA BIBIANA MARTÍNEZ TRUJILLO SECRETARIA DE TRIBUNAL HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA SE
PROCEDIÓ A CAPTURAR EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, LA SENTENCIA DE FECHA
15/11/2017 DICTADA POR DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EN
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA QUE RIGE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

FIRMA

Cerrar

Imprimir



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 334

RECEBIDO

RECEBIDO

300 86

30-NOV-2017

"EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN
SAN LÁZARO"

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

SIDAR Y ROVIROSA, ESQUINA EDUARDO MOLINA

ACCESO NUMERO 10, 2º NIVEL

COL. DEL PARQUE

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960.

Of. No. 1698.

JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL DE
ESTE PRIMER CIRCUITO.

R.C. [REDACTED]

QUEJOSO: [REDACTED]

RECURRENTE: [REDACTED]

EXP. [REDACTED]

OS AL...
DER TRIBUNA
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

Con fundamento en el artículo 29 fracción I, de la Ley de Amparo, y en vía de notificación, remito testimonio de la ejecutoria dictada el quince de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciada por el Pleno del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión citado en la parte superior, constante de sesenta y ocho fojas útiles.

Asimismo le devuelvo el expediente número [REDACTED] constante de ciento treinta fojas; tres legajos en quinientas treinta y dos, veintidós y cuatrocientas veintisiete fojas respectivamente

Suplicándole el acuse de recibo correspondiente.

Ciudad de México, a 23 de noviembre del año 2017.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

900 87

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO: [REDACTED] DIGITALIZADO

06728

PROMOVIDO POR: [REDACTED]

ASUNTO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA-SE REQUIERE
CUMPLIMIENTO-ACUSE.

Código	No. Oficio	Autoridad	Zona
[REDACTED]	[REDACTED]	SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR S/Z DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
[REDACTED]	[REDACTED]	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES S/Z	
[REDACTED]	[REDACTED]	JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA S/Z CIUDAD DE MÉXICO.	
[REDACTED]	[REDACTED]	DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN S/Z MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. ANT.	

ANTECEDENTE: EXP. [REDACTED]

ANTECEDENTE: TOCA. [REDACTED]

EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, EL DÍA DE HOY
SE DICTÓ UN AUTO QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto [REDACTED] tres legajos y
testimonio de la resolución dictada en sesión de quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictada en el recurso de revisión R.C. [REDACTED] de su índice
interpuesto por el tercero interesado [REDACTED] en su carácter de
representante [REDACTED] en contra de la sentencia dictada
el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el veinticinco
de julio de dos mil diecisiete; cuyos puntos resolutive son:



"PRIMERO. Se confirma la resolución sujeta a revisión.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A [REDACTED] contra los actos que reclamo de la Sexta Sala, del Juez Décimo Quinto, ambas autoridades de lo Civil y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consistentes, respecto de la primera, en la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete en el tomo [REDACTED] 6; de la segunda en expedición del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenando rindiera informe, con copia certificada, de los estados de cuenta bancarios del señor [REDACTED] por los últimos tres años y de la señalada comisión, en el cumplimiento de la solicitud de expedición del mencionado informe. Concesión que se otorga para los efectos precisados por el Juez Federal."

Acútese recibo de estilo solicitado por la autoridad oficiante.

Hágase lo anterior del conocimiento de las partes; realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguese únicamente las constancias que en original obren en el cuaderno de antecedentes.

En este orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 195 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de **TRES DÍAS**, informen el cumplimiento que estén dando a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto, las constancias necesarias con pleno valor probatorio que acredite fehacientemente tal extremo, apercibidos que en caso de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a [REDACTED] nacional), lo anterior, tomando como valor la unidad de medida y actualización de \$80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, como está previsto en el precepto 237, fracción I, del mismo ordenamiento, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciéndole de su conocimiento que en caso de no manifestar nada al respecto dentro del plazo señalado, con apoyo en el ordinal 193 de la ley reglamentaria se remitirá el expediente al Tribunal



586
FORMA 12

Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

000 60

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por otra parte, devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias que adjuntaron a sus informes justificados; al no ser necesaria su retención, solicitándoles el acuse de recibo respectivo, en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibiéndolos que de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a \$2,000.00.

[REDACTED] lo anterior, tomando como valor la unidad de medida y actualización de [REDACTED] publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, tal como está previsto en el precepto 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notifíquese por medio de oficios a las autoridades responsables, así como al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Axel Hernández Díaz**, quien autoriza. **Doy fe.**

ATENTAMENTE
SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

AXEL HERNÁNDEZ DÍAZ

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 587

6728

En veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, **José Manuel González Jiménez**, Secretario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta a la Magistrada Presidenta con el oficio [REDACTED] del Secretario del **Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.- Conste.**

000 69

Ciudad de México, a **veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.**

Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguense a sus autos, para sus efectos, el oficio **20368/2017**, del Secretario del **Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, en el que se inserta el proveído de **veintisiete de noviembre** del año en curso, del que se obtiene el acuse de recibo del oficio **1698** de este índice.

Con fundamento en el artículo **214** de la Ley de Amparo, **archívese** como asunto concluido, al no haber actos pendientes que cumplimentar en este recurso de revisión.

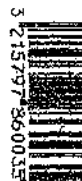
Háganse las anotaciones de estilo en el Libro de Control correspondiente.

En cumplimiento al Considerando **Décimo Cuarto**, Capítulo **Quinto**, del Acuerdo General Conjunto número **2/2009**, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente **no reviste el carácter de archivo de relevancia documental o valor jurídico**, por lo que en términos



RECORRIDO EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL

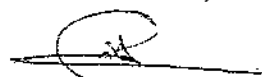
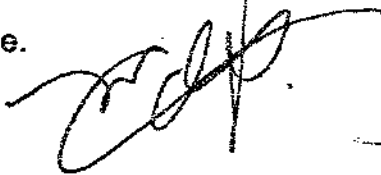


del punto Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se determina que es **susceptible de depuración**, porque este órgano colegiado, confirmó y concedió el amparo solicitado por el quejoso.

En su oportunidad, hágase constar las fojas integrantes de este expediente.

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordó la Magistrada **María Concepción Alonso Flores**, Presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con el Secretario **José Manuel González Jiménez**, que da fe.



DECIMO
COLEGIADO
DEL P.
F. J. G. J.
J. M. G. J.

RC.-
JMG:jmo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

FORMA 530

000 70



En treinta de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo las que no hayan ordenado realizar en forma personal. Doy fe.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. YADIRA FLORES BAUTISTA.



DECIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN QUE
ANTECEDE. CONSTE.

En 05/12/2017 encontrándose debidamente integrados los autos
conforme a lo ordenado en auto de
fecha 29/11/2017 se archiva el presente asunto.

Lic. José Manuel González Jiménez
Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito

En 05/12/2017 el licenciado José
Manuel González Jiménez, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hace constar que el expediente
se encuentra integrado de 29 fojas útiles.



B+A

abogados

TERCER TRIBUNAL
CIVIL EN
MATERIA DE CIRCUITO

005963

538
000 71

1919 OCT 18 P 2-1

DEL PRIMER CIRCUITO
E. EL JUEZ DE CIRCUITO

RECURRENTE:

VALDÉS

JUICIO: RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE:

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA
DE TODO LO ACTUADO

C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL DECIMO TERCERO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

en mi carácter de Mandatario
judicial del Quejoso [REDACTED] personalidad que
tengo debidamente reconocida y acreditada en los autos del
juicio al rubro citado, ante Usted C. Juez de Distrito con el
debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar
respetuosamente que se ordene expedir a mi costa DOS JUEGOS de
copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente
procedimiento; previo pago de derechos correspondiente y razón
asentada que por su recibo obre en autos.

Autorizando de manera indistinta a los C. [REDACTED]
[REDACTED] para que por su conducto les sean entregadas las
copias certificadas solicitadas.

Por lo anteriormente expuesto;

A USTED C. MAGISTRADOS DE CIRCUITO, atentamente pido se sirvan:

UNICO.- Se ordene expedir a costa de mi representada las
copias certificadas referidas en el cuerpo del presente
escrito, por conducto y de manera indistinta de las personas
mencionadas para tales efectos.

Ciudad de México a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

500
FORMA B-2

5963

000 72

En veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, José Manuel González Jiménez, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta al Magistrado Presidente con el escrito de [REDACTED] por conducto de su autorizado en términos amplios [REDACTED].
Conste.

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve.


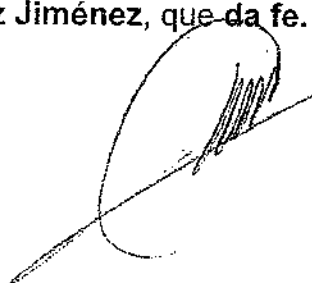
Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguese a sus autos, para sus efectos, el escrito de [REDACTED] por conducto de su autorizado en términos amplios [REDACTED].

Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse a su costa, las copias que solicita, y previa certificación correspondiente, entréguese las mismas firmando la razón que por su recibo obre en autos a las personas que señala para recogerlas.

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordó el Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras, Presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con el Secretario de Acuerdos José Manuel González Jiménez, que da fe.



R.C. [REDACTED]
JMG:ggpm

3 215797 850

En 22 OCT 2019, siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal. Doy fe.

EL ACTUARIO JUDICIAL.

[Firma]

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE octubre DE DOS MIL diecinueve
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CERTIFICA:
QUE LAS PRESENTES COPIAS SON FIEL REPRODUCCIÓN DE LAS
CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE [REDACTED] LAS
CUALES SE CERTIFICAN EN CUMPLIMIENTO A [REDACTED] AUTO
DE 21 DE octubre DE DOS MIL diecinueve, CONSTANTES DE
32 FOJAS ÚTILES. DOY FE.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ

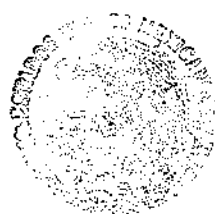


DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CDMX
PRESIDENCIA

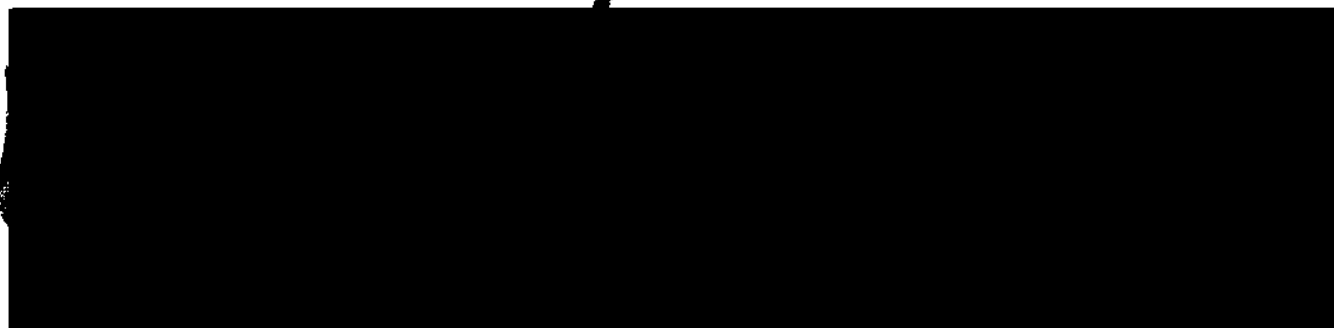
RECIBIDO
-4 NOV 2019
REGISTRO

OFICIAÍA DE PARTES COMÚN CIVIL,
CUANTÍA MENOR, ORALIDAD, FAMILIAR
Y SECCIÓN SALAS No. 31



SECRETARÍA DE
GOBIERNO
CERTIFICADO

COPIA CERTIFICADA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

NÚMERO DE [REDACTED]

NOMBRE DEL QUEJOSO:

[REDACTED]

REPRESENTANDO POR DERECHO PROPIO

DOMICILIO DEL QUEJOSO: CIUDAD (x) LISTA () EXHORTO ()

TERCERO INTERESADO: SI (X) NO ()

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EXPEDIENTE DE ORIGEN Y NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO:

ORDINARIO CIVIL 596/2016.

PRECEDENTES EN ESTE ÓRGANO Y SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:

NO

PRECEDENTES EN DIFERENTES ÓRGANOS: ACTOS RECLAMADOS:

NO

PROTESTA: SI (X) NO ()

ANTECEDENTES: SI (X) NO () INSUFICIENTES

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: SI (X) NO ()

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: SI () NO ()

ART(S) 14 y 16

FECHA DE CONOCIMIENTO O NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: SIETE DE
MARZO DE 2017

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA: RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO
CONSISTENTE EN EL AUTO DE SIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE
ACTUALIZA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN
CON EL NUMERAL 107 FRACCIÓN V DE LA LEY DE AMPARO.

SUSPENSIÓN: SI () NO (X)

PRUEBAS: SI (X) NO () N° DE CUADERNOS AUXILIARES ()

SOLICITÓ COPIAS DE LA SUSPENSIÓN: SI () NO (X)

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO:

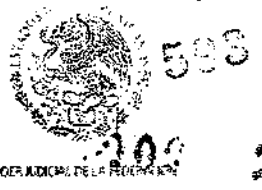
LIC. MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN.



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Número de registro: [REDACTED]
 Fecha de recibido: miércoles, 29/03/2017
 Fecha de turno: miércoles, 29/03/2017

Hora de recibido: 22:16 Hrs.
 Hora de turno: 22:19 Hrs.



Turnado al juzgado: JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de asunto: NORMAL

Autoridad: JUEZ 15 CIV.CDMX

Quejoso: [REDACTED]

Tercero interesado: [REDACTED]

Acto reclamado: SENTENCIA 3 MARZO DEL 2017

Juzgado de origen: JUEZ 15 CIV.CDMX

Procedencia: ***

Copias: 8

Firma: SI

Folio Art. 41: ***

Atenta contra la libertad: NO

Número de juicio de origen: 596/16.

Anexos: ***

Ingreso: VENTANILLA

SISE

CAPTURADO

Descripción de anexos: ***

Observaciones: RAA

Remitido por acuerdo: ***

Fecha de cambio de turno: ***

Hora de cambio de turno: [REDACTED]

Relacionado por OCC (Rafael con Demanda de amparo [REDACTED])

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega: _____

Servidor Público que recibe: _____

Firma: _____

Órgano de su adscripción: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Firma: _____



ENTREGA

2017/03/29
 10:11 AM
 DEL PODER JUDICIAL

106/17-11-26 DESECHN

JOSÉ OMAR LÓPEZ HERNÁNDEZ
 RECEPCIÓN



JGADO DE
DE DISTRITO
EN LA CIUD

2.500005

00:11 t106 / 50 / t1

00:11 t102-h-92

JGADO DE
DISTRITO
EN LA CIUD

B+A

AMPARO INDIRECTO JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN

QUEJOSO:

2017 MAR 29 P 17

2017 MAR 30 A 9:00

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Amparo -

EN LA CIUDAD DE MEXICO

[REDACTED] por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Colonia [REDACTED] Delegación [REDACTED] en [REDACTED], autorizando en los términos más amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo a los señores Licenciados [REDACTED]

[REDACTED] y número de Registro Único ante el Poder Judicial Federal [REDACTED] de fecha 16 de noviembre de 2005, [REDACTED] con Cédula Profesional número [REDACTED] [REDACTED] con Cédula Profesional número [REDACTED] como para recibir indistintamente notificaciones, toda clase de documentos y valores, y hacer uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza para la reproducción de actuaciones judiciales y documentos exhibidos, a los C. [REDACTED]

[REDACTED] ante usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, en los artículos 11, 35, 107, 108, y demás aplicables de la Ley de Amparo, vengo a promover en tiempo y forma Demanda de Amparo Indirecto en contra de las Sentencias Interlocutorias de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelven los Recursos de Revocación interpuestos en contra de los autos de fechas 3 y 7 de febrero del año en curso, dictados por la hoy autoridad responsable Juez Décimo Quinto de lo Civil de la ciudad de México, declarando improcedentes dichos recursos y declarando firmes los autos impugnados, donde el primero de ellos de manera ilegal ordena que se entregue el Billeto de Depósito [REDACTED] de fecha 24 de octubre de 2016, expedido por el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS (BANSEFI) por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] a la parte actora (hoy tercero interesado), y el segundo auto ordena poner a disposición el Billeto de Depósito número V839889 por conducto de persona autorizada, mismo que fue exhibido para garantizar los posibles daños y perjuicios que se diesen con la suspensión del procedimiento, derivado de la admisión en ambos efectos de diverso recurso de apelación interpuesto por el suscrito, no obstante que la sentencia de

535
4
4
fecha 17 de enero de 2017 que confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, dictada por la Sexta Sala Civil se encontraba Sub Iudice.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, proporciono al efecto la siguiente información:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO:

■ [REDACTED], con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED]

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO:

[REDACTED] con domicilio en la calle de [REDACTED]
[REDACTED]

III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

60100 JUEZ DECIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, con domicilio conocido en esta ciudad. *Set 10*
Cyano es el
de exco

IV.- ACTOS RECLAMADOS:

1) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recursos de Revocación interpuesto en contra del auto de fecha **3 de febrero del año en curso**, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso y declara firme el auto recurrido, mismo que ordenaba de manera ilegal la entrega del Billeto de Deposito [REDACTED] de fecha 24 de octubre de 2016, expedido por el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS (BANSEFI) [REDACTED]

la parte actora (hoy tercero interesado).

2) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recurso de Revocación interpuestos en contra del auto de fecha **7 de febrero del año en curso**, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso y declara firme el auto recurrido, mismo que de manera ilegal y sin fundar en precepto alguno su decisión, determinaba reanudar el proceso del juicio natural, admitiendo diversas pruebas entre otras cosas, no obstante que la sentencia de fecha 17 de enero de 2017 que confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, dictada por la Sexta Sala Civil mediante

la cual declara improcedente la apelación que suspendió ⁵²⁰ procedimiento se encuentra *Sub Iudice*. 5

V.- FECHA DE NOTIFICACION DE LOS ACTOS RECLAMADOS: 20 5

Las Sentencias señaladas como actos reclamados, le fueron notificadas al suscrito mediante Boletín Judicial número "40" de fecha 6 de marzo de 2017, y surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir el día 7 de marzo del año en curso, solicitando que para efecto del correcto cómputo del plazo para la presentación de la presente demanda de Amparo, se tome en cuenta que mediante **Acuerdo 36-37/2016** decretado por el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, el lunes 20 de marzo fue decretado inhábil.

VI.- PRECEPTOS QUE CONTIENEN DERECHOS HUMANOS VIOLADOS:

Los artículos 1, 14, 16 y 133 Constitucionales, así como los artículos 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

VII.- PROTESTA DE DECIR VERDAD:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los siguientes hechos, son los antecedentes del acto que causa una violación a los Derechos Humanos de mi representado.

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
MEXICO

H E C H O S

1.- El 28 de junio de 2016, el hoy Tercero Interesado presentó una demanda de daño moral en contra del suscrito, por la publicación de una columna y de un tweet, la cual fue turnada al Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de esta ciudad (hoy autoridad responsable), bajo el siguiente rubro:

[REDACTED]

VS

[REDACTED]

JUICIO: ORDINARIO CIVIL

EXPEDIENTE: [REDACTED]

SECRETARIA: "B"

2.- Una vez que las partes ofrecieron las pruebas de su parte, la hoy autoridad responsable dictó el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, ordenando de manera por demás ilegal que se girase un Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores, a fin de que esta dependencia rindiese un informe con copia certificada de los estados de cuenta bancarios del suscrito de los últimos tres años, sin que haya sido oído ni vencido en juicio, y no obstante que dicha medida no constituye prueba en ningún sentido para acreditar daño moral alguno.

3.- Por lo anterior, con fecha 5 de octubre de 2016, el suscrito interpuso en tiempo y forma, recurso de apelación de tramitación inmediata en ambos efectos, toda vez que dicha medida ordenaba que se ventilase información confidencial del suscrito **sin haber sido oído ni vencido en juicio, y sin que dicha medida constituyese medio de prueba** en ningún sentido para acreditar el supuesto daño moral del que se duele el hoy Tercero Interesado, por lo que el Juez responsable admitió a trámite el recurso en ambos efectos con suspensión del procedimiento, ordenando se exhibiera una garantía por

para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar con dicha suspensión al Tercero Interesado.

4.- Con fecha 17 de enero del año en curso, la Sexta Sala Civil dentro del Toca [REDACTED] dictó sentencia confirmando el auto recurrido, y no obstante que la resolución de la Sexta Sala Civil antes mencionada aún no se encontraba firme, la hoy autoridad responsable de manera por demás ilegal, mediante auto de fecha 3 de febrero del año en curso, ordenó la entrega del Billeto de Depósito arriba mencionado al tercero interesado, violentando de manera flagrante los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso del suscrito, motivo por el cual interpuse en tiempo y forma Recurso de Revocación, mismo que fue resuelto mediante la Sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, señalada como primer acto reclamado.

5.- No obstante que la resolución de la Sexta Sala Civil dictada dentro del Toca [REDACTED] mencionada en el hecho anterior, se encontraba Sub-Iudice, con fecha 7 de febrero del año en curso, la hoy responsable dictó un auto reanudando de manera ilegal el procedimiento del juicio natural, motivo por el cual interpuso en tiempo y forma Recurso de Revocación, mismo que fue resuelto mediante la Sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, señalada como segundo acto reclamado.

CONCEPTOS DE VIOLACION

PRIMERO.- La primer resolución señalada como como acto reclamado (sentencia que resuelve recurso vs auto de fecha 3 de febrero de 2017), resulta violatoria de los derechos

598
7
7

fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), toda vez que el Juez responsable al resolver el Recurso de Revocación interpuesto, argumenta que en la Suspensión Definitiva otorgada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en materia Civil en el Amparo [REDACTED], solamente se dio para efecto de que no se girase oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que esta proporcionara la información de cuentas de los últimos 3 años del suscrito, dejándosele plenitud de jurisdicción para dictar aquellas medidas tendientes para la ejecución de sus resoluciones, ya que el procedimiento es de orden público y no puede suspenderse; pues bien, en efecto, la responsable contaba con plenitud de jurisdicción, pero eso NO significa que pudiese actuar al margen de la ley, ya que la resolución de la Sexta Sala Civil de ninguna manera era la última instancia para decidir sobre la legalidad o no de la materia del recurso, y que al día de hoy se encuentra combatida.

En efecto, el Juez responsable ordenó de manera ilegal la entrega de un Billeto de Depósito sin esperar a que la Sentencia que confirma el auto apelado se encuentre firme, por lo que ordena propiamente una sanción al ordenar la entrega de una garantía de manera anticipada, violentando así los derechos fundamentales del suscrito al no respetarse los plazos establecidos en ley para la impugnación de las resoluciones, por lo que resulta evidente que el Juez responsable **debió esperar** a que la sentencia de la Sexta Sala Civil **quedase firme** para poder ordenar la entrega del Billeto de Depósito mencionado, situación que pasó de lado sin importarle las consecuencias legales que ello implica, confirmando su ilegal decisión en la sentencia que resuelve el Recurso de Revocación señalada como primer acto reclamado, violando en consecuencia los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso del suscrito, al confirmar la aplicación de una sanción al suscrito de manera anticipada e ilegal. Tan consciente está el Juez responsable de la ilegal y anticipada decisión de entregar el Billeto de Depósito, que en el considerando único de la sentencia señalada como primer acto reclamado (ver foja 489 segundo párrafo), habla de que en el caso de concederse algún amparo, será entonces y como efecto restitutorio que ordenará la devolución del importe correspondiente, y que en caso de haberse cobrado el billete, requerirá el importe mediante la misma forma de exhibición.

De lo anterior, se desprende claramente la ilegal y anticipada decisión del Juez responsable de entregar el Billeto de Depósito, y la ilegalidad de la sentencia señalada como primer acto reclamado.

580
8
8

SEGUNDO.- La segunda resolución señalada como como acto reclamado (sentencia que resuelve recurso vs auto de fecha 7 de febrero de 2017), resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados a favor del suscrito, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 8, 9, 11, 25 y demás relativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de los artículos 81, 340, 402 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles así como el contenido de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por violación a los Derechos Humanos de legalidad, debido proceso, seguridad y certeza jurídica, exhaustividad, congruencia, garantía de audiencia y acceso a una justicia pronta, expedita y materializada consagrados a favor de mi mandante en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales, ya que el Juez responsable al resolver el Recurso de Revocación interpuesto, de manera ilegal determina confirmar el auto que decretó reanudar el proceso en que se actúa, admitiendo diversas pruebas entre otras cosas, sin tomar en cuenta que la sentencia de fecha 17 de enero de 2017 que confirma el auto de fecha 28 de septiembre de 2016, dictada por la Sexta Sala Civil se encuentra Sub Iudice, por lo que al hacerlo se deja una vez más al suscrito en completo estado de indefensión.

OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA.

RECIBO SEGUNDO
J. EN-NA
USAR DE
EJECUTIVO

Con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, y toda vez que los actos reclamados fueron conocidos por el suscrito mediante el "Boletín Judicial" número "40" de fecha 6 de marzo de 2017, y surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir el 7 de marzo del 2017, debiendo tomarse en cuenta que mediante **Acuerdo 36-37/2016** decretado por el Tribunal Superior de Justicia y por el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, el lunes 20 de marzo fue decretado inhábil, por lo que me encuentro dentro del término previsto para promover la presente demanda.

COMPETENCIA.

Su Señoría es competente para conocer del presente Juicio de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII Constitucional, y de los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo.

PRUEBAS

En términos del artículo 119 segundo párrafo de la nueva Ley de Amparo, en adición a las constancias que remita la

responsable, ofrezco la Instrumental Pública de Actuaciones y la Presuncional Legal y Humana.

Por lo expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos reclamados que han quedado determinados en el capítulo correspondiente de la presente demanda.

SEGUNDO.- Admitir la demanda en la vía y forma propuesta y solicitar de las autoridades señaladas como responsables, los informes previos y justificados correspondientes.

TERCERO.- Tener por autorizadas a las personas antes señaladas para los efectos precisados.

CUARTO.- Previa la autorización de la autoridad competente, para que el suscrito pueda comparecer en juicio y solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.

QUINTO.- Previa la autorización de la autoridad competente, para que el suscrito pueda comparecer en juicio y solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.

Protesto lo necesario.

Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

63-
10

MÓDULO DE CONSULTA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO

Paterno: [REDACTED]
Materno: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED]
Entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE
Emisora: EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL

10

Acción	Estatus	Número de Cédula	Fecha de expedición	Nivel	Materia
Consultar / Ver Acuse	REVISADA SEP-DGP	[REDACTED]	20/05/2005	LICENCIATURA	DERECHO

[REDACTED]

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA
J. A. G. CIVIL
MEXICO

MÓDULO DE CONSULTA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO

Paterno: [REDACTED]
Materno: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED]

Entidad **DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE**
Emisora: **EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL**

Acción	Estatus	Número de Cédula	Fecha de expedición	Nivel	Materia
Consultar / Ver Acuse	REVISADA SEP-DGP	[REDACTED]	29/06/1988	LICENCIATURA	DERECHO

[REDACTED]

MEXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
Cédula Profesional

612

MÓDULO DE CONSULTA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO

Paterno: [REDACTED]
Materno: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED]

Entidad **DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE**
Emisora: **EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL**

12

Acción	Estatus	Número de Cédula	Fecha de expedición	Nivel	Materia
Consultar / Ver Acuse	REVISADA SEP-DGP	[REDACTED]	30/06/1999	LICENCIATURA	DERECHO

[REDACTED]

MOCTEZUMA
INSTITUCIÓN
DE MÉXICO



TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

6-13

En la Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; el Secretario da cuenta al Juez con el escrito inicial de demanda con ocho copias sin anexos registrado con el número de correspondencia 5911, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste. 13

[Firma]

En la Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.

Vista la demanda promovida por [REDACTED] por derecho propio, contra actos de la Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número [REDACTED] y NEUN [REDACTED] y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, **SE ADMITE A TRÁMITE** la demanda.

Se requiere al promovente para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la presente notificación, manifieste si solicita la suspensión del acto reclamado, en virtud de que únicamente en los puntos petitorios señaló que se solicitaran los informes previos y justificados, en caso de ser así señale para qué efectos la solicita.

Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las **ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE**, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

Con fundamento en los artículos 116 y 117 de las Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberán de rendir en el plazo de quince días, posterior al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido

MO
N MIMO SEGUNDO
AD MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

3 206907 2500 13

extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo.

De igual forma, solicítese a la autoridad responsable para que las constancias con las que pretenda apoyar su informe justificado, las remita en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, atendiendo al principio de expeditéz, celeridad y prontitud en la impartición de justicia que establece el artículo 17 Constitucional.

De igual manera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, deberán de comunicarla de inmediato a este Órgano Jurisdiccional.

Dese la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado.

Por otra parte, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de ley de la materia, se tiene como tercero interesado a

JUZGADO
DE DIST.
ENUZZO 201
DE DIST.
E/L 201



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

con domicilio ubicado en [REDACTED]

[REDACTED]

en consecuencia, y para efecto de su emplazamiento, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en el domicilio indicado y le notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia de la demanda, y lo emplace al presente juicio de amparo y lo requiera para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, **sin previo acuerdo**, se hará por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional.

Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio del promovente el ubicado en Avenida [REDACTED]

esta [REDACTED] y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a [REDACTED]

[REDACTED] toda vez que tienen registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, documentos y valores a las diversas personas que designa.

Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la ley de la materia.

Finalmente, cabe indicar que las resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, constituyen información pública, lo que

PRIMO SEGUNDO
N MATERIA CIV
D DE MEXICO

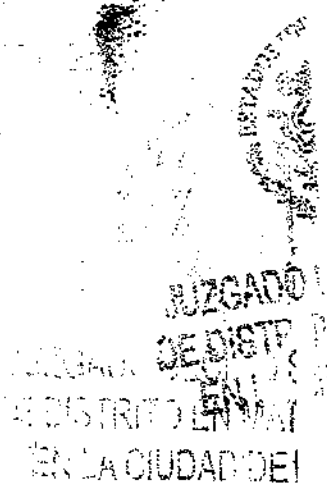
implica que las determinaciones que se dicten en este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

Notifíquese personalmente al quejoso y tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Manuel Hernández Padrón**, que autoriza. Doy fe.

EPV

El Secretario en esta fecha se giraron los oficios 5883 y 5884, Doy Fe.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 52

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL
1990 c/s

030 15

17 ABR -3 A 9:44 15

JUZGADO
DECIMOQUINTO
DE LO CIVIL

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: ADMITE A TRÁMITE

DECIMO TERCER TRIBUNAL
LEGISLADO EN MATERIA CIVIL
DEL Poder Judicial

Código CIRCUITO No Ofici

Autoridad

2



4 201700 588324



4 201700 588423

JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

S

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO (MINISTERIO
PÚBLICO)

S

ANTECEDENTE: EXP

EN CIVIL
MEXICO



07253



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 02

16

20 16

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO: [REDACTED]

PROMOVIDO POR: [REDACTED]

ASUNTO: ADMITE A TRÁMITE

Código

No Ofici

Autoridad

2



4 201700 588324



JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

5

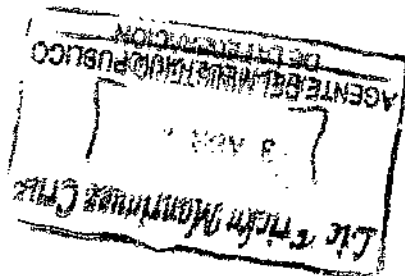


4 201700 588423

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO (MINISTERIO PÚBLICO)

5

ANTECEDENTE: EXP [REDACTED]



07253



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 617

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SIDAR Y ROVIROSA ESQUINA EDUARDO MOLINA, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.
ACCESO OCHO - NIVEL PLAZA

17

NOTIFICACIÓN PERSONAL

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS once HORAS CON veinte MINUTOS DEL veinte DE ABRIL

DEL DOS MIL DIECISIETE, EL SUSCRITO LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO, ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN

proveyo de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete
DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO EN EL ÍNDICE DEL JUZGADO DE MI ADSCRIPCIÓN COMO proveyo de Amparo ME CONSTITUI EN LEGAL Y DEBIDA FORMA EN EL DOMICILIO ALCICADO EN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN A BUSCA DE la parte quejosa

Y, BIEN CERCIORADO DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS PARA LA PRÁCTICA DE LA PRESENTE DILIGENCIA, TODA VEZ QUE ELLO SE DESPRENDE DE SENDAS PLACAS OFICIALES COLOCADAS EN LA ESQUINA DE DICHA CALLE, COMO POR COINCIDIR LA NUMERACIÓN EXTERIOR Montagano ASÍ COMO POR EL DICHO DE LA PERSONA QUE ME ATIENDE QUIEN DIJO LLAMARSE

Cecilia profesional SE IDENTIFICA CON

EXPEDIDO A SU FAVOR POR

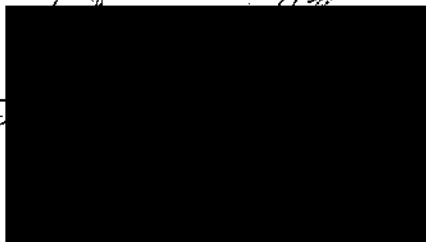
DOCUMENTO DEL CUAL EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL DA FE DE HABER TENIDO A LA VISTA, EN UNA DE SUS CARAS TIENE ADHERIDA UNA FOTOGRAFÍA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, DICHO DOCUMENTO SE DEVUELVE A SU INTERESADO EN ESTE ACTO POR CONSIDERAR INNECESARIA SU RETENCIÓN, QUIEN MANIFESTO estar satisfecho ya de paragar y recibir notificaciones de la parte quejosa

PERSONA ANTE QUIEN ME IDENTIFIQUE COMO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO FEDERAL MENCIONADO CON LA CREDENCIAL EXPEDIDA A MI FAVOR POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PROCEDIENDO A NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL PROVEÍDO DE QUE SE TRATA, ENTREGÁNDOLE EN ESTE ACTO COPIA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SELLADA Y COTEJADA DE proveyo de fecha quince de marzo DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL QUE

Y LE CORRO TRASLADO CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO Y 51
FIRMA DE CONFORMIDAD LA PRESENTE PARA CONSTANCIA LEGAL. DOY FE.-
EL ACTUARIO JUDICIAL

LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO

FIRMA





F. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

636.18

PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL DE SAN LÁZARO
SIDAR Y ROVIROSA ESQUINA EDUARDO MOLINA
COLONIA DEL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
CÓDIGO POSTAL 15960, CIUDAD DE MÉXICO.
ACCESO 8 NIVEL PLAZA

18

CITATORIO

TERCERO INTERESADO: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

Para la práctica de una diligencia Judicial de carácter personal, deberá usted acudir al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ubicado en [REDACTED], de [REDACTED] plaza; con identificación oficial, dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día de hoy, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por lista el proveído de 31 de marzo de dos mil diecisiete dictado en el juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED]

Dejo el presente citatorio, en virtud de no haber encontrado a al tercero interesado buscado; cerciorado de que me encuentro en el domicilio de la búsqueda por así habérmelo manifestado la persona que me atiende, quien dijo llamarse [REDACTED] —, que (se identifica con o no se identifica y poner la descripción de la persona) con el cargo de asistente, persona de aproximadamente y por los siguientes medios (medios de cercioramiento del inmueble): por la calle, número exterior, nivel, colonia, Delegación y Código Postal, entre [REDACTED]

[REDACTED] y requerida de su presencia me informa quien me atiende que la búsqueda no se encuentra en ese momento por que es domicilio procesal pero que ahí (vive, labora o se recibe toda clase de notificaciones relacionadas con la misma); lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27, inciso b) de la Ley de Amparo; la persona con la que atiendo la presente diligencia hoy a las doce horas del día tres de abril de dos mil diecisiete.

EL ACTUARIO JUDICIAL

[REDACTED]



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DISTRITO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



CITATORIO

Juicio de Amparo
Núm. [REDACTED]

En la Ciudad de México, siendo las **doce horas del tres de abril de dos mil diecisiete**, la suscrita licenciada Ruth Rocha Hernández, actuaria judicial adscrita al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil la Ciudad de México, en cumplimiento a lo ordenado en el **auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete**, dictado en el Juicio de Amparo número [REDACTED] me constituí en legal y debida forma en el domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] en esta Ciudad de México, en busca del Tercero Interesado: [REDACTED] cerciorada del domicilio buscado por sendas placas oficiales que se encuentran colocadas en la esquina de dicha calle, y demás signos inequívocos que identifican el inmueble en que se actúa, así como por el dicho de la persona que me atiende quien dice laborar en dicho nivel con el cargo de asistente y llamarse [REDACTED] quien no se identifica, por lo que la suscrita procede a describir la media filiación de dicha persona que es la siguiente de aproximadamente [REDACTED]

[REDACTED] ante quien me identifiqué con credencial expedida a mi favor por el cargo de Actuaría Judicial adscrita al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, enseguida, le requerí la presencia de la persona buscada o de sus autorizados, a lo que manifestó que la persona buscada no se encuentra, pero que en ese domicilio se reciben las notificaciones a nombre del buscado, en consecuencia, **con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b de la ley de amparo publicada el día dos de abril de dos mil trece, en el diario oficial de la federación, le dejo citatorio para que la persona buscada y/o sus autorizados, para oír notificaciones, acudan al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, ubicado en Eduardo Molina número dos, entre Sidar y Rovirosa, Colonia Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, en el acceso 8, nivel plaza, con identificación oficial dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día de hoy, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por lista, el auto referido con antelación, quien recibió de conformidad dicho citatorio, quien firma la copia del mismo para constancia legal.- CONSTE.- DOY FE.**

La Actuaría Judicial.

Licenciada Ruth Rocha Hernández



En seis de abril de dos mil diecisiete, atento a lo manifestado en la razón anterior, se procede a notificar por medio de lista a la Tercero Interesado: [REDACTED] por su propio derecho, el auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por el que se admite la demanda y se señalaron las **ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE**, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; se solicita a las autoridades responsables sus informes con justificación, Se le requiere para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, sin previo acuerdo, se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del Artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo. Conste. Doy Fe. La Actuaría Judicial Licenciada Ruth Rocha Hernández.



DECIMO TERCER TRIBUNAL
DELEGADO DE DEFENSA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

En siete de abril de dos mil diecisiete, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refieren las razones que anteceden conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 fracción I de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación. Conste. Doy Fe. La Actuaría Judicial Licenciada Ruth Rocha Hernández.



SEGUNDA
INTERVAL
E MEXICO

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL

6660

2017 ABR 10 P 12:30

EN LA CIUDAD DE MEXICO

AMPARO INDIRECTO:

QUEJOSO:

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MEXICO.

[REDACTED] por mi propio derecho, ante
Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar
en tiempo y forma el requerimiento ordenado por su Señoría
mediante auto de fecha 31 de marzo del año en curso,
manifestando que toda vez que los actos reclamados lo
constituyen 2 sentencias que resuelven diversos recursos
de revocación, manifiesto que **no es mi voluntad solicitar**
la suspensión de los mismos.

Por lo expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito se sirva:

UNICO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho,
desahogando el requerimiento mencionado en el sentido de
no solicitar la suspensión de los actos reclamados.

Protesto lo necesario.

Ciudad de Mexico, a siete de abril de dos mil
diecisiete.



TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

6-10
22

En la Ciudad de México, a once de abril de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el escrito 22 registrado con el número de correspondencia 6660, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

En la Ciudad de México, a once de abril de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el escrito signado por [REDACTED] por derecho propio, mediante cual desahoga la vista que se le dio el treinta y uno de marzo del año en curso, el cual manifiesta que no es su voluntad solicitar la suspensión del acto reclamado, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Secretario **Manuel Hernández Padrón**, quien autoriza. Doy fe.

APV



R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

614

23

23

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
17 ABR 2017 SE NOTIFICA A

los señores

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON FECHA 18 ABR 2017
SURTÍÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

ÉCONOMÍA
EN MAN...

...



OK Abril 4
Indecoma
Anexo



615

24

SELECCIÓN DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Angelina Monica Mendez Torres
Técnico en Eficiencia Administrativa

2017 ABR 24 PM 4 25

ASUNTO: SE RINDE INFORME JUSTIFICADO.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

24

21232

JUZGADO 16 CIVIL

SECRETARIA "A"

EXP. NUM. [REDACTED]

OFICIO NUM. 1426

[REDACTED]

VS

[REDACTED]

ORDINARIO CIVIL

En contestación a su oficio número 5883/2017 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el día TRES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, relacionado con el juicio de AMPARO INDIRECTO [REDACTED] promovido por [REDACTED]; por vía de informe justificado, me permito manifestar que se consideran constitucionales los actos reclamados del suscrito, en virtud de que SON CIERTOS y en apoyo en este informe le remito Copia Certificada TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO PRINCIPAL, ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS COMO BASE DE LA ACCIÓN, LO MAS LEGIBLE POSIBLE. En cuanto a la procedencia o improcedencia del juicio o la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, manifiesto que el suscrito no puede hacer pronunciamiento alguno al respecto, en virtud de que con las copias certificadas que se remitirán, se constata las actuaciones que se tuvieron a la vista para emitir el acto reclamado, será esa Autoridad Federal la ilegalidad o legalidad del mismo. Por otro lado, el suscrito no tiene conocimiento de que en el procedimiento existan o no causas notorias de sobreseimiento que señala el artículo 64 de la ley de amparo, y en su caso será esta Autoridad Federal, la que determine lo conducente. Aclarando que el suscrito es quien conoce actualmente del juicio de donde emanan los actos reclamados en virtud de que el juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México se excuso de seguir conociendo del mismo para los efectos legales a que haya lugar y con lo que doy total cumplimiento a lo solicitado por esta Autoridad Federal.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
Ciudad de Mexico, 24 de Abril del 2017
EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DISTRITO CIVIL



JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

7410

c/ una copia
dos anexos

2017 ABR 25 A 9:00

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL



"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

ASUNTO: SE RINDE INFORME JUSTIFICADO.

**JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.**

PRESENTE:

JUZGADO 16 CIVIL

SECRETARIA "A"

EXP. NUM. [REDACTED]

OFICIO NUM. 1926

VS

ORDINARIO CIVIL

En contestación a su oficio número 5883/2017 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el día **TRES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO**, relacionado con el juicio de **AMPARO INDIRECTO** promovido por [REDACTED] por vía de informe justificado, me permito manifestar que se consideran constitucionales los actos reclamados del suscrito, en virtud de que **SON CIERTOS**, y en apoyo en este informe le remito Copia Certificada **TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO PRINCIPAL, ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS COMO BASE DE LA ACCIÓN, LO MAS LEGIBLE POSIBLE**. En cuanto a la procedencia o improcedencia del juicio o la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, manifiesto que el suscrito no puede hacer pronunciamiento alguno al respecto, en virtud de que con las copias certificadas que se remitirán, se constata las actuaciones que se tuvieron a la vista para emitir el acto reclamado, será esa Autoridad Federal la ilegalidad o legalidad del mismo. Por otro lado, el suscrito no tiene conocimiento de que en el procedimiento existan o no causas notorias de sobreseimiento que señala el artículo 64 de la ley de amparo, y en su caso será esta Autoridad Federal, la que determine lo conducente. Aclarando que el suscrito es quien conoce actualmente del juicio de donde emanan los actos reclamados en virtud de que el juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México se excuso de seguir conociendo del mismo para los efectos legales a que haya lugar y con lo que doy total cumplimiento a lo solicitado por esta Autoridad Federal.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
Ciudad de Mexico, 24 de Abril del 2017
EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL.

LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ.



**JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL**



TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

616

26

En la Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el Secretario **CERTIFICA:** Para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional, asimismo, da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de correspondencia **7410**, relativo al juicio de amparo [REDACTED] **Conste.**

26

Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el **Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México**, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que dentro del término de ocho días manifiesten lo que a su derecho convenga.


Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable las documentales que indica en su informe justificado, las cuales se tomarán en consideración en la audiencia constitucional.

Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias que remite el **Juez de origen**, fórmense por separados dos legajos marcados como **tomos I y II** los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta.


Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las **ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE**, para que tenga verificativo.

Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.

3 206907 250037

Así lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez
Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de
México, ante el Secretario **Manuel Hernández Padrón**, quien
autoriza. **Doy fe.** 

18

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número  y se giró el oficio 7497 a
la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. **Consta.**

615
27

TR. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL

27 ABR 2017 SE NOTIFICA A
Quejoso tercero interesado y
agente del ministerio público
adscrita

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS
FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE. LA ACTUARIA.

CON FECHA

28 ABR 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA

BOCA DE CALLE
ESTADO DE GUERRERO
CALLE DE CALLE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMATO 2
625

28

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: veintiséis de abril de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: DIFIERE AUDIENCIA

Código	No Ofici	Autoridad	Zon
4201700749725		JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA S/Z CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)	

ANTECEDENTE: EXP

EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, EL DÍA DE HOY SE
DICTÓ UN AUTO QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

2017 APR 27 AM 9:48

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL

TRAMITACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA
DISTRITO FEDERAL



07263



TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

620

29

En la Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste. [Firma]

29

En la Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil diecisiete.

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 7410, el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, aclaró que éste conocía actualmente del juicio de donde emanan los actos reclamados, en virtud de que el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, se excusó de seguir conociendo, de lo que se toma conocimiento, procédase hacer el cambio del nombre de la autoridad responsable en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), así como el cambio de caratula, y se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO



DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
CIRCUITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
D. F.

Notifíquese.

Así lo proveyo y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el secretario **Manuel Hernández Padrón**, quien autoriza. Doy fe.

[Firma]

EPV



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

631
30

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 09 MAY 2017 SE NOTIFICA A 30
las partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. LA ACTUARIA.

CON

10 MAY 2017

FECHA
SURTIO

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA



ECIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
DAD DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

603

31

AMPARO INDIRECTO

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

31

En la Ciudad de México, a las once horas del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED] por derecho propio, contra actos del Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, en audiencia pública, Francisco Peñaloza Heras, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del Secretario Carlos René Hernández Maza, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la asistencia de las partes.

Acto seguido el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan el escrito de demanda de amparo (fojas 3 a la 9); auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual se admitió a trámite, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable (foja 15), el emplazamiento del tercero interesado [REDACTED] se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable (foja 24), asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia respectiva.

Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales procedentes y por rendido el informe justificado, en términos del numeral 117 de la ley de la materia.

Abierto el periodo de pruebas. El Secretario hace constar que la quejosa las ofreció en su escrito inicial de



DÉCIMO SEGUNDO
JUEZ DE DISTRICTO EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

3
206907250

demanda identificado con el número 5911, y el tercero interesado no ejerció ese derecho y el juez responsable remitió copia certificada [REDACTED]

Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo agréguese las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que se tomarán en cuenta para dictar la resolución de que se trata, y por ofrecidas y desahogadas las pruebas que ofreció la parte quejosa, y por perdido el derecho del tercero interesado para ofrecer pruebas con posterioridad, con apoyo en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

Abierto el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no los formularon.

Acto seguido el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos con posterioridad.

Se cierra este periodo y se da por concluida la audiencia, firmando los que en ella intervinieron.

**El Titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito
en Materia Civil en la Ciudad de México.**

Juez Francisco Peñaloza Heras.

El Secretario del juzgado.

Carlos René Hernández Maza.



Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de 32
amparo [REDACTED] y,

RESULTANDO

Primero. DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México¹, turnado a este órgano de control constitucional al día hábil siguiente, Sergio Aguayo Quezada, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que les atribuye al Juez Décimo Quinto de lo Civil de esta Entidad Federativa.²

Segundo. PRERROGATIVAS. El quejoso estimó conculcados sus derechos humanos contenidos en los artículos

¹ Cabe señalar que con motivo de la reforma constitucional en materia política, publicada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango de Entidad Federativa al Distrito Federal, con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política y administrativa; asimismo, se le asignó el nombre de Ciudad de México y en términos del artículo transitorio décimo cuarto de dicha publicación, todas las referencias que la Constitución Federal y demás ordenamientos jurídicos hacen al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México; en consecuencia, es dable sustentar que las autoridades señaladas como responsables también cambiaron su denominación en la forma indicada.

Por esa razón, todo lo referido al Distrito Federal, se considerará dirigido a la Ciudad de México.

Para mayor claridad se transcriben los numerales invocados:

"ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo disposición en contrario conforme a lo establecido en los artículos transitorios siguientes."

"ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México."

² Cabe destacar que el quejoso en su escrito de demanda señaló como autoridad responsable al Juez Décimo Quinto de lo Civil de esta Entidad Federativa, sin embargo por oficio 1426 de veinticuatro de abril del año en curso, signado por el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, informó que es éste quien conoce del juicio de origen [REDACTED] y no el que refirió el impetrante, por lo que, a ésta última autoridad es la que se tiene con el carácter de responsable para los efectos del juicio constitucional.

1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.³

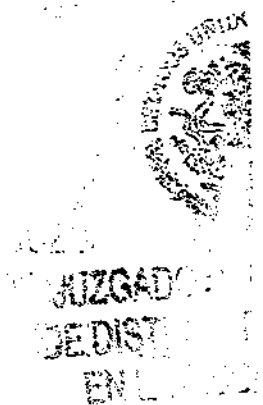
Tercero. SUBSTANCIACIÓN. Este Juzgado Federal conoció del asunto el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, ordenó su registró con el número asentado al rubro superior; y lo admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; mandó realizar el emplazamiento del tercero interesado Humberto Moreira Valdés; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, quien no formuló pedimento; finalmente, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y;

CONSIDERANDO:

Primero. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, está facultado para conocer del juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Convención Americana; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General **28/2016**⁴, que reforma, adiciona y deroga el similar **3/2013** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, por tratarse de una demanda promovida contra actos de una autoridad judicial de la circunscripción territorial donde ejerce su jurisdicción.

³ Foja 9 del cuaderno de amparo.

⁴ Es conveniente señalar que dicho acuerdo fue reformado por el diverso 36/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.





Segundo. JURISPRUDENCIA. Con apoyo en el artículo 6°

transitorio de la legislación de la materia, se podrá aplicar aquella conforme a la ley relativa abrogada, en lo que no se oponga al ordenamiento legal vigente.⁵

33

Tercero. OPORTUNIDAD. De acuerdo con los dispositivos 17, 18, 19 y 22⁶ de la normatividad en comento, la demanda se presentó dentro del término de quince días, toda vez que las resoluciones impugnadas se hicieron del conocimiento del quejoso a través de boletín judicial publicado el lunes seis de marzo de dos mil diecisiete, notificación que surtió efectos el martes siete siguiente, por lo tanto, el cómputo para la promoción del presente juicio transcurrió del miércoles ocho al jueves treinta del mismo mes y año, sin contar los días intermedios once, doce, dieciocho y diecinueve por ser sábados y domingos, es decir, inhábiles de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.⁷

⁵ "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley."

⁶ "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...]"

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."

"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."

"Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento."

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva."

⁷ "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley."

Tampoco es de tomarse en cuenta el día veinte y veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, debido a que fueron inhábiles por corresponder al tercer lunes del mes indicado, en concordancia con el artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.⁸

Luego, si el escrito de demanda se recibió el veintinueve de marzo de la anualidad en curso, es inconcuso que se presentó en tiempo.

Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose

⁸ "Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

- I. El 1o. de enero;
- II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
- III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
- IV. El 1o. de mayo;
- V. El 16 de septiembre;
- VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
- VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
- VIII. El 25 de diciembre, y
- IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral".



TERCER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

625

34

AMPARO DIRECTO

de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.⁹

34

Cuarto. ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la normatividad de la materia,¹⁰ que precisa las bases que toda sentencia de amparo debe contener, entre ellas la fijación clara y precisa del acto reclamado, en principio debe transcribirse lo que se cuestiona.



[...] **Autoridades responsables:**

⁹ Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, visible en la página 1931, del Tomo XXXI, del mes de Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

¹⁰ "Artículo 74. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;

V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobreseer el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.

El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.

- Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México.

IV. ACTOS RECLAMADOS.

- 1) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recurso de revocación interpuesto en contra del auto de tres de febrero del año en curso, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso de revocación y declara firme el auto recurrido, mismo que ordenaba de manera ilegal la entrega del Billeto de Depósito "V 839889" de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, expedido por el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS (BANSEFI) por la cantidad de

[REDACTED]
[REDACTED] a la parte actora (hoy tercero interesado).

- 2) La sentencia de fecha 3 de marzo del año en curso, que resuelve el Recurso de Revocación interpuesto en contra del auto de fecha siete de febrero del año en curso, dictada por la responsable, que declara improcedente el recurso de revocación y declara firme el auto recurrido, mismo que de manera ilegal y sin fundar en precepto alguno su decisión, determinaba reanudar el proceso del juicio natural, admitiendo diversas pruebas entre otras cosas, no obstante que la sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, que confirma el auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sexta Sala Civil mediante la cual





declara improcedente la apelación que suspendió el procedimiento se encuentra sub judice.[...]

35

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos para la citada fijación que el juzgador de amparo debe observar, como son:

- 1) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos, con un criterio amplio y no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido.
- 2) Prescindir de los calificativos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados.

Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."¹¹

Con base en esas premisas, el acto reclamado se determina de la siguiente manera:

A.- Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México.

¹¹ Jurisprudencia P./J. 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

1.- La resolución de tres de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de tres de febrero del año en curso, que ordenó poner a disposición el billete de depósito [REDACTED] de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, expedido por el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS (BANSEFI) por la cantidad de [REDACTED] a favor de la parte actora aquí tercero interesado.

2.- La determinación de tres de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero del año en curso, a través del cual se ordenó reanudar el proceso del juicio natural y se admitieron diversos elementos de convicción.

Apoya lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente:

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo

JUZGADO
DE DISTRICTO
EN LA CIUDAD DE MEXICO



que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.¹²

36

Quinto. EXISTENCIA. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuyó al rendir su informe justificado, por lo tanto, se tiene como plenamente probado.

Es aplicable la Jurisprudencia bajo la voz y texto siguientes:

"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."¹³

Máxime que su aceptación se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2º.¹⁴

¹² Tesis aislada P. VI/2004, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

¹³ Jurisprudencia 305, visible en la página 206, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1995, Quinta Época.

¹⁴ **"Artículo 129.-** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes."

"Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo."

"Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro

Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."¹⁵

Sexto. ANTECEDENTES.

1.- Por escrito de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, [REDACTED] demandó en la vía ordinaria civil de [REDACTED] diversas prestaciones, el conocimiento del asunto correspondió al Juez Décimo Quinto Civil de la Ciudad de México, quien ordenó su registro con el número de expediente [REDACTED] lo admitió a trámite y ordenó el llamamiento a juicio del demandado.¹⁶

2.- Durante el curso del procedimiento natural por escritos de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, ambas partes ofrecieron los elementos de convicción que a su derecho convinieron entre otras el actor [REDACTED] [REDACTED] ofreció el informe que en su caso debía rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación con las

Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal."

"Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley."

¹⁵ Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época.

¹⁶ Fojas de la 1 a la 27 del tomo I de pruebas.



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

633 37

cuentas bancarias de [REDACTED] y los saldos que tuviera en las mismas.¹⁷

37

3.- Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el juez del conocimiento proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y entre otras la que se ha hecho referencia para lo cual ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rindiera la información sobre las cuenta del demandado.¹⁸

4.- Inconforme con la admisión de ese elemento de prueba el demandado interpuso recurso de apelación inmediata en **ambos efectos**, el cual por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por interpuesto y se fijó como garantía la cantidad de [REDACTED] ([REDACTED]) que debía exhibir el apelante para que surtiera efectos ese medio de impugnación en los términos solicitados.¹⁹

5.- El cuatro de noviembre del año próximo pasado se tuvo al demandado exhibiendo el billete de depósito V [REDACTED] por el monto de la garantía que se le fijó para que surtiera efectos la apelación en ambos efectos, por lo que, se ordenaron remitir las constancias relativas para la sustanciación de ese medio de impugnación.²⁰

6.- Del recurso de apelación conoció la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, quien ordenó su registro con el toca [REDACTED] órgano jurisdiccional que el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, resolvió confirmar el auto de veintiocho de septiembre del año en cita.²¹

¹⁷ Ibid. Fojas de la 222 a la 248 y de la 250 a la 300.

¹⁸ Ibid. Fojas 303 y 304.

¹⁹ Ibid. Fojas 308 a la 311 y 312.

²⁰ Ibid. Foja 365.

²¹ Ibid. Fojas 392 a 396.



3 206907 2500

7.- Cabe destacar que en contra de esa determinación el demandado [REDACTED] promovió amparo indirecto del cual conoce este órgano jurisdiccional bajo el número de expediente [REDACTED] el cual se cita como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.²²

8.- Por escrito de tres de febrero de dos mil diecisiete, el accionante [REDACTED] al haberse confirmado a través del recurso de apelación el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, solicitó se pusiera su disposición el billete de depósito [REDACTED] que exhibió su contraparte por la cantidad [REDACTED] [REDACTED] para que surtiera efectos la suspensión en ambos efectos.²³

9.- El tres de febrero de la anualidad en curso, el juez de origen ordenó poner a disposición de la parte actora el billete de referencia.²⁴

10.- En desacuerdo con esa determinación el siete de febrero de dos mil diecisiete, el demandado interpuso recurso de revocación que fue resuelto por el juez primigenio el tres de marzo siguiente, en el sentido de **confirmar** el auto impugnado.²⁵

(primer acto reclamado)

11.- El siete de febrero de la anualidad en curso, el juez de origen con base en el estado procesal de autos, en virtud de que se encontraba suspendido el procedimiento por el recurso de apelación que se promovió en ambos efectos

²² Ibid. Fojas 425 a 441.

²³ Ibid. Foja 410.

²⁴ Ibid. Foja 411.

²⁵ Ibid. 420 a 423 y 544 a 548.



SENER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

623 38

AMPARO DIRECTO

contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, y como este ya se había resuelto, **reanudo** el mismo y proveyó en relación a la admisión de diversas pruebas que se habían dejado pendientes.²⁶

12.- inconforme con esa decisión el once de febrero de dos mil diecisiete, el demandado interpuso recurso de revocación, mismo que resolvió el juez de origen el tres de marzo posterior, y **confirmó** el auto impugnado.

(segundo acto reclamado)

Séptimo. IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, el órgano jurisdiccional está constreñido a su estudio oficioso al tenor de lo previsto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo.

Tienen aplicación la tesis de título y contenido siguientes:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.²⁷

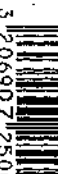
Así como el criterio de rubro y texto que establece:

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aún de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías.²⁸

²⁶ Ibid. Fojas 418 y 419.

²⁷ Tesis número 814, visible en la página 553, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época.

²⁸ Tesis visible en la página 201 del tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época.



En ese sentido, este juzgador advierte que en relación con el acto reclamado identificado con el número "2" precisado en el considerando cuarto de esta sentencia; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esta última disposición aplicada en sentido contrario, pues la resolución aquí controvertida no produce ni tiene relación con consecuencias de imposible reparación, por los razonamientos que enseguida se exponen.

En efecto, el citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando ello resulte de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley en consulta.

Al respecto, la segunda disposición invocada — numeral 107, fracción V, de la legislación apuntada— prevé que el procedimiento constitucional en la vía indirecta, contra actos de tribunales judiciales emitidos dentro de un juicio, solamente es procedente si se generan consecuencias de imposible reparación.

Sobre los actos cuyos efectos tienen esa característica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera.

Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis cuyo rubro y texto se transcribe:





682 39

SER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO

"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.²⁹

Así, los actos que revisten la característica en estudio deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente adjetivo o procesal, además de afectar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.

Bajo las premisas anteriores, el acto reclamado materia de estudio en este apartado es la resolución de tres de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de siete de febrero de ulterior, a través del cual el juez de origen reanudó el procedimiento del juicio de origen

²⁹ Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9.

que estaba suspendido debido al recurso de apelación que en ambos efectos promovió el demandado Sergio Aguayo Quezada, en contra del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, que admitió a trámite la prueba ofrecida por el accionista relativa al informe que en su momento debía rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de sus cuentas bancarias,³⁰ por lo tanto, la decisión de continuar con la secuela procesal y proveer sobre la admisión de diversos elementos de convicción ofrecidos por las partes, sólo tiene efectos procesales y no sustantivos, lo cual en su caso podrá ser materia de impugnación a través del juicio de amparo directo que en su momento se promueva en contra la sentencia que decida el fondo de las pretensiones de las partes.

De lo hasta aquí expuesto, se extrae que el proveído de siete de febrero de dos mil dieciséis, que fue confirmado por resolución de tres de marzo posterior, a través del recurso de revocación de tres de marzo de la anualidad en curso, carece de efectos de imposible reparación, por el contrario son una consecuencia directa de la continuación del procedimiento del contradictorio de origen.

Por consiguiente, la resolución de tres de marzo de dos mil diecisiete, que confirmó el auto de siete de febrero ulterior, es eminentemente procesal, al no afectar alguna prerrogativa de índole sustantiva del quejoso.

En relatadas circunstancias, la causa de improcedencia analizada quedó demostrada, de ahí que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo,³¹ procede sobreseer en el presente juicio, sin que sea factible el estudio del **segundo**

³⁰ Ibid. Fojas 418 y 419.

³¹ "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

[...]

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."



631 40

AMPARO DIRECTO

concepto de violación, aducido por el quejoso en relación con el acto identificado con el número "2" del cuarto considerando, sin que tal decisión le produzca algún agravio, ya que la improcedencia del juicio es una cuestión de estudio preferente.

Al no actualizarse diversa causa de improcedencia, se procede al análisis de fondo del asunto, respecto del acto reclamado identificado con el arábigo "1" precisado en el considerando cuarto de esta sentencia.

Octavo. PARÁMETROS DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de ahí que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Noveno. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la solicitante de amparo, respecto del acto que aquí se analiza, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad.

Sobre el particular se invocan las jurisprudencias bajo la voz y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."³²

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma."³³

Décimo. ESTUDIO. Los conceptos de violación son esencialmente **fundados** como se verá.

En su primer concepto de violación relacionado con el acto reclamado identificado con el número "1" en el considerando

³² Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 830, del Tomo XXXI mayo de 2010.

³³ Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599 del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B.2

632 41

AMPARO DIRECTO

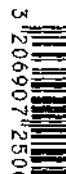
cuarto de esta sentencia el quejoso aduce que la determinación de tres de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de tres de febrero de la anualidad en curso, es violatoria de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), toda vez que el juez responsable señaló que la suspensión otorgada por este órgano de control constitucional en el diverso juicio de amparo sólo se concedió para el efecto de que no se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que proporcionara información de las cuentas de los últimos tres años del quejoso, además de que se dejó plenitud de jurisdicción para dictar las medidas tendientes para la ejecución de sus resoluciones, en virtud de que el procedimiento es de orden público y no puede suspenderse.

La circunstancia de que la sala responsable tuviera plenitud de jurisdicción, no quiere decir que esté por encima de la ley, dado que su resolución es la última instancia para decidir sobre la legalidad o no de la materia del recurso.

El juez de origen ordenó de manera ilegal la entrega del billete de depósito de forma anticipada sin esperar a que la sentencia de la sala responsable que confirmó el auto apelado se encuentre firme, por lo tanto, con esa decisión viola sus derechos fundamentales al no respetar los plazos establecidos en la ley para la impugnación de las resoluciones.

El juez debió esperar a que la resolución del tribunal de alzada quedara firme para ordenar la entrega del billete de depósito, sin embargo, pasó por alto esa circunstancia al confirmar la resolución de tres de marzo de dos mil diecisiete.

El juzgador estuvo consciente de la ilegal decisión anticipada de ordenar la entrega del billete de depósito, dado que



5 206907 2500

al dictar la resolución que constituye el acto reclamado precisó que en caso de concederse algún amparo, entonces el efecto restitutorio sería ordenar la devolución del importe correspondiente y para el caso de haberse cobrado el billete se podría requerir el importe mediante la misma forma de su exhibición.

Los anteriores motivos de inconformidad, como ya se dijo son sustancialmente **fundados**.

En efecto, le asiste la razón al quejoso al sostener que no es procedente poner a disposición del tercero interesado el billete de depósito [REDACTED] que exhibió por la cantidad \$225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), para la admisión del recurso de apelación en ambos efectos en contra del de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, que fue resuelto por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, quien ordenó su registro con el toca [REDACTED] el diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

Así es, el numeral 696 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece lo siguiente:

*"[...] **Artículo 696.** De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación.*

Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE JUSTICIA
DISTRITO FEDERAL
EN LA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

633 42

AMPARO DIRECTO

La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior al equivalente a siete mil quinientos pesos, dicho monto se actualizará en los términos que establece el artículo 62. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo de tramitación inmediata.

En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a siete mil quinientos pesos, monto que se actualizará en la forma indicada en el párrafo anterior, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá a la sala la queja planteada junto con su informe justificado en el término de cinco días para que se resuelva dentro de igual término.

Declarada fundada la queja que interponga el apelante, la sala ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el juez dentro del término de seis días.

Al declararse infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida a favor de la contraparte. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten recurso.

También la parte apelada podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante.

Las quejas que se interpongan, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado a la sala en el término de cinco días, y éste resolverá en igual plazo.

Si el tribunal confirmare la resolución apelada, hará efectiva la garantía fijada por el juez o por el tribunal a favor de la contraparte.[...]

De una recta interpretación de los artículos de referencia se desprende que cuando se interpone un recurso de apelación y las partes solicitan que su admisión se realice en ambos efectos el solicitante deberá exhibir garantía bastante para que surta efectos la suspensión de la ejecución del acto reclamado, de manera que si ese medio de defensa se confirma por el tribunal revisor,

entonces este hará efectiva la garantía a favor de la contraparte del recurrente.

En ese sentido, se considera que el acto reclamado en este sumario constitucional está vinculado con el recurso de apelación que se interpuso la parte demandada en ambos efectos en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el juez del conocimiento por admitir a trámite la prueba relativa al informe que rindiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rindiera la información sobre las cuenta del demandado, y para tal efecto se exhibió como garantía la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] y si ese medio de impugnación se resolvió el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca [REDACTED] órgano jurisdiccional que resolvió confirmar la resolución recurrida, es inconcuso que ante esa decisión en términos del artículo 696, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se debe hacer efectiva sin mayor trámite la garantía fijada a favor de la contraparte del apelante, es decir, al aquí tercero interesado.

Sin embargo, en la especie quien resuelve considera que por el momento no resulta procedente poner a disposición del tercero interesado el billete de depósito [REDACTED] que exhibió por la cantidad [REDACTED] [REDACTED] cuestionado.

Lo anterior, en virtud que de las circunstancias que imperan en relación con el acto reclamado y su vinculación con el diverso juicio de amparo [REDACTED] del estadístico de este órgano jurisdiccional promovido también por el aquí quejoso [REDACTED] [REDACTED] por derecho propio, contra actos de la Sexta Sala Civil, Juez Décimo Quinto Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

AMPARO DIRECTO

y de Valores, que se cita como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que en este se concedió la protección constitucional para el efecto de que sala responsable deje sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca [REDACTED] y emita otra en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción resuelva la *litis* planteada en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, propuesto a su potestad.

Como puede verse debido a la otorgamiento de la protección constitucional en el citado juicio de amparo para dejar insubsistente la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca [REDACTED] el tribunal de alzada vuelve a reasumir jurisdicción hasta la emisión de una nueva sentencia, por lo tanto, la materia del recurso de apelación que se interpuso en ambos efectos por el aquí quejoso vuelve a quedar subsistente y por ello, ya no puede considerarse que la resolución de referencia este confirmada; por ende, resulta improcedente poner a disposición del tercero interesado el billete de depósito cuestionado.

Se sostiene de ese modo, pues se itera que si en el juicio de amparo de referencia se concedió la protección federal, declarando que la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca [REDACTED] transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal, entonces la firmeza de esa decisión continúa sub judice debido al otorgamiento del juicio de amparo.

Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia de rubro y texto siguiente:

"COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, **es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal.** Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación.³⁴

[ENFASIS ANADIDO]

Por lo tanto, esa resolución de segunda instancia, no causa estado sino hasta que su tramitación concluye por la resolución que recae en el juicio de amparo correspondiente, y mientras esto no ocurre, la jurisdicción de segunda instancia continúa sub júdice,

³⁴ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 174116, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 60.



SR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

6354

AMPARO DIRECTO

por lo tanto, aun no puede hacerse **efectiva la garantía que se fijó para que surta efectos el recurso de apelación en ambos** ⁴⁴ **que se promovió contra el proveído** de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el juez del conocimiento por admitir a trámite la prueba relativa al informe que rindiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rindiera la información sobre las cuenta del demandado, y para tal efecto se exhibió como garantía la cantidad de [REDACTED]



COMO TERCER TRIBUNAL
LEGADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

De ahí que, por el momento no resulte oportuno poner a disposición del tercero interesado el billete cuestionado.

Bajo esas premisas, no obsta a la determinación anterior la circunstancia de que en el juicio de amparo que se resuelve no se haya solicitado la suspensión del acto reclamado para que las cosas se mantuvieran en lugar que tenían, es decir, para que no se pusiera a disposición del tercero interesado el billete de depósito hasta que se resolviera en definitiva esta instancia constitucional, ya que de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, los efectos del juicio de amparo son restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; por lo tanto, si en el caso ya se hubiera entregado el billete cuestionado, entonces, las autoridades que acontecieron en el conocimiento del asunto deberán dictar las diligencias necesarias para restablecer las cosas al estado que tenían y de continuar en poder del juez de origen la garantía exhibida no la ponga a disposición del quejoso de ser procedente hasta que se resuelva en definitiva lo conducente.

En las narradas circunstancias, al haber resultado fundados los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante; se **concede** el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos que se precisan en el considerando subsecuente.

3 206907 2506

Décimo Primero. Efectos. Para restituir al quejoso [REDACTED] en el pleno goce del derecho humano violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México.

1.- Dejará insubsistente el auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, dictar otro en el que determine que por el momento no puede ponerse a disposición del tercero interesado el billete de depósito [REDACTED] por la cantidad [REDACTED] hasta en tanto se resuelva por sentencia firme el recurso de apelación en ambos efectos relativo al toca de apelación [REDACTED] del índice de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se promovió en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

2.- En el entendido, de que ya se haya entregado dicho documento realice las diligencias necesarias para que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo de mérito, como sería ordenar la devolución del importe correspondiente y para el caso de que el billete se haya cobrado deberá requerir su importe mediante la misma forma de exhibición.

Por lo expuesto y fundado además con apego en los artículos 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por [REDACTED] por derecho propio, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero y, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente resolución.



TER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

636 45

AMPARO DIRECTO

SEGUNDO. La Justicia de la unión ampara y protege a

[REDACTED] por derecho propio, en contra del
acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el
resultando primero en primer término, por las razones expuestas
en el considerando **décimo** de la presente resolución.

Notifíquese personalmente al quejoso, por medio de lista al
tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable.

Así lo resolvió y firma el Juez **Francisco Peñaloza Heras**,
titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en
la Ciudad de México, ante la secretaria **Estela Piza Vázquez**,
hasta el día de hoy **veinticinco de julio de dos mil diecisiete**,
fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, que da fe.-
Doy fe.

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giró el
oficio 13781 a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. Conste

SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MÉXICO

3 206907 2500



TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 15-2

637 46

637

46

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
26 JUL 2017 SE NOTIFICA A

demás partes

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. *no*

CON FECHA 27 JUL 2017,
SURTÍÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

SSUNY

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA
MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SIDAR Y ROVIROSA ESQUINA EDUARDO MOLINA, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.
ACCESO OCHO - NIVEL PLAZA

NOTIFICACIÓN PERSONAL

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ocho y treinta HORAS CON veintiseis MINUTOS DEL veintiseis de julio

DEL DOS MIL DIECISIETE, EL SUSCRITO LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO, ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN

proveyendo a sentencia veintiseis de julio de dos mil diecisiete DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO EN EL ÍNDICE DEL JUZGADO

ADSCRIPCIÓN COMO Procurador de Amparo ME CONSTITUI EN LEGAL Y DEBIDA FORMA EN MI DOMICILIO UBICADO EN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BUSCA DE

Y, BIEN CERCIORADO DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS PARA LA PRÁCTICA DE LA PRESENTE DILIGENCIA, TODA VEZ QUE ELLO SE DESPRENDE DE SENDAS PLACAS OFICIALES COLOCADAS EN LA ESQUINA DE DICHA CALLE, COMO POR COINCIDIR LA NUMERACIÓN EXTERIOR de la calle ASÍ COMO POR EL DICHO DE LA PERSONA que me dio la dirección QUIEN DIJO LLAMARSE

IDENTIFICA CON

Credencial para votar

EXPEDIDO A SU FAVOR POR Instituto Nacional Electoral

DOCUMENTO DEL CUAL EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL DA FE DE HABER TENIDO A LA VISTA, EN UNA DE SUS CARAS TIENE ADHERIDA UNA FOTOGRAFÍA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA. DICHO DOCUMENTO SE DEVUELVE A SU INTERESADO EN ESTE ACTO POR CONSIDERAR INNECESARIA SU

RETENCIÓN, QUIEN MANIFIESTO estar autorizado para dar y recibir notificaciones

PERSONA ANTE QUIEN ME IDENTIFIQUE COMO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO FEDERAL MENCIONADO CON LA CREDENCIAL EXPEDIDA A MI FAVOR POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PROCEDIENDO A NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL PROVEÍDO DE QUE SE TRATA, ENTREGÁNDOLE EN ESTE ACTO COPIA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SELLADA Y COTEJADA DE sentencia con agravio veintiseis de julio DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL QUE

Y LE CORRO TRASLADO CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO Y S
FIRMA DE CONFORMIDAD LA PRESENTE PARA CONSTANCIA LEGAL. DOY FE-
EL ACTUARIO JUDICIAL

LICENCIADO CRISTIAN EDUARDO RAMOS SERRANO

JUZGADO
DE DISTRITO
EN LA CI
E D E
EN LA CI



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Constancia de captura de Sentencia en el
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

630 48
48

Órgano jurisdiccional:

**Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de México**

Tipo de Asunto:

Amparo indirecto

No. expediente único
nacional:

20690725

No. expediente:

Materia:

Civil

Quejoso

Autoridad responsable

JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Tema:

**SE SOBRESEE POR AUTO QUE NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y POR EL
DIVERSO AMPARA Y PROTEGE AL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN
LA SENTENCIA.**

Juez:

Francisco Peñaloza Heras

Sentido de la resolución
o sentencia:

Ampara, Sobresee en el juicio

Fecha de la resolución o
sentencia:

25/07/2017

Fecha y hora de ingreso de
resolución o sentencia al
sistema:

25/07/2017 05:08:20 p.m.

LA SUSCRITA ESTELA PIZA VÁZQUEZ SECRETARIA DE JUZGADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA SE PROCEDIÓ A
CAPTURAR EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, LA SENTENCIA DE FECHA 25/07/2017 DICTADA
POR FRANCISCO PEÑALOZA HERAS TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA
QUE RIGE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

FIRMA

Cerrar

Imprimir



640 49

49

4/6/17

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ACUSE

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: veinticinco de julio de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SENTENCIA

13781/2017 JUEZ DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE:

EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ UN AUTO QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

ENCUENTRO
EN MATERIA CIVIL
JULIO DE 2017



707253



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

50

642

En la Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil ⁵⁰diecisiete, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con el estado procesal que guardan los presentes autos, relativo al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

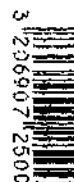
En la Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil diecisiete.

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio 13781/2017, se notificó la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, al Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México; sin embargo, por diverso 1426, el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, hizo del conocimiento que el primero de los mencionados se excusó para seguir conociendo del juicio ordinario civil, y que él conocía actualmente de dicho juicio, por lo tanto, se ordena notificar la sentencia en mención a este último, para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese, por oficio al Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México.

Así lo proveyó y firma, Rubén Benítez Hernández, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de once de julio de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial, según consta en el oficio número CCJ/ST/3594/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria Estela Piza Vázquez, que autoriza y da fe. Doy fe.

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giró el oficio 14317 a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. Conste.





TERCER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

642

51

51

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 08 AGO 2017 SE NOTIFICA A

demás partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE.

CON

09 AGO 2017

FECHA
SURTIO

TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE
REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.



DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
ACUERDO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
ACUERDO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO
CIUDAD DE MÉXICO



643

52

52

En la Ciudad de México, a catorce de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, **Estela Piza Vázquez, CERTIFICA:** Que después de hacer una búsqueda exhaustiva en el libro de correspondencia que se lleva en este Juzgado, se advierte que no se encontró recurso alguno de la parte interesada; de igual manera, que el plazo de diez días que otorga el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, transcurrió para el quejoso y el tercero interesado del veintiocho de julio al diez de agosto del año en curso, toda vez que se le notificó personalmente al primero y por lista al segundo el veintiséis de julio, surtiendo sus efectos el veintisiete siguiente. **DOY FE.**

Asimismo, en la misma fecha, la Secretaria **CERTIFICA:** que **no obran documentos originales** exhibidos por las partes, de igual manera da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con el estado procesal que guardan los presentes autos, relativo al juicio de amparo

Conste

En la Ciudad de México, a catorce de agosto de dos mil diecisiete.

COMUNICADO
EN MATERIA CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO

Vista la certificación que antecede y como ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la cual se **sobreseyó y se concedió el amparo y Protección de la Justicia de la Unión**, al quejoso [REDACTED] en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al ordinal 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia **ha causado ejecutoria.**

En este orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 195 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de **TRES DÍAS**, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto, las constancias necesarias con pleno valor probatorio que acrediten fehacientemente tal extremo, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral único, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **haciéndole de su conocimiento que en caso de no manifestar algo al respecto dentro del plazo señalado, con apoyo en el ordinal 193 de la ley reglamentaria se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite correspondiente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.**

Asimismo, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en el presente asunto al **Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México**, adjuntó **dos legajos** de copias certificadas a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a dicha





- 6453

autoridad las mismas, al no ser necesaria su retención, solicitándole el acuse de recibo respectivo, a la brevedad posible. 53

Notifíquese y por medio de oficio a la autoridad responsable.

Lo proveyó y firma **Rubén Benítez Hernández, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, Encargado del Despacho, conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de **once de julio de dos mil diecisiete**, por la **Comisión de Carrera Judicial**, según consta en el oficio número **CCJ/ST/3594/2017**, suscrito por el **Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal**, ante la Secretaria Estela Piza Vázquez, quien autoriza. Doy fe.

A 20

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giró el oficio 14636 a la autoridad correspondiente, notificando el auto que antecede. Conste.



R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

645

54

54

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
15 AGO 2017 SE NOTIFICA A

Jerris pantes

LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE AMPARO. DOY FE. *ap*

CON FECHA

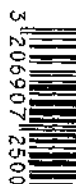
16 AGO 2017

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL

LIC. MARÍA NANCY DÍAZ NAVA.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO



3 206907 2500



640 55

55

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: siete de agosto de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: SE NOTIFICA AUTO Y SENTENCIA

14317/2017 JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE:

EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ UN AUTO QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE LA FEDERACIÓN
DISTRITO FEDERAL
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
7017 AGD





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ACUSE

6/10 51

56

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: catorce de agosto de dos mil diecisiete

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO: [REDACTED]

PROMOVIDO POR: JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: EJECUTORIA SE REQUIERE CUMPLIMIENTO

14636/2017 JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ANTECEDENTE: [REDACTED]

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TRAMITACIÓN DEL JUZGADO DE LO CIVIL

2017 AGO 15 AN 9:40

JUZGADO DE LO CIVIL

2 legos de c/cert.



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO





15421



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO

DE DISTRITO
MATERIA CIVIL

AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ASUNTO: SE REMITE ACUSE DE RECIBO.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

P R E S E N T E:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO 16 CIVIL

SECRETARIA "A"

EXP.NUM. [REDACTED]

OFICIO NUM. 2802

VS

OFICIO NUM. 2802
OFICIO CIVIL

En contestación a su **OFICIO** número
14636/2017 de fecha **CATORCE DE AGOSTO DEL**
DOS MIL DIECISIETE, recibido en este H. Juzgado el
QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,

relacionado con el Juicio de Amparo número

[REDACTED] promovido por [REDACTED]

[REDACTED] me permito remitir copia certificada del
auto de fecha **DIECISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL**
DIECISIETE, que hace las veces de acuse de recibo,
para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.



JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

Ciudad de México, a 17 de Agosto del 2017.

EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL.

LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

6150

58

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ——— Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Bis (amparo) Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-08-17 Firmante: JC16SA NAS: 5110-2783-8547-9066-642

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ——— Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Bis (amparo) Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-08-17 Firmante: JC16J NAS: 5110-2783-8547-9066-642

EXP. NUM [REDACTED]

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA, HACE CONSTAR: QUE A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, SE RECIBIÓ EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL OFICIO NUMERO 14636/2017 DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, ACOMPAÑADO DE DOS LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS CONSTANTES EN: (624) Y (625) FOJAS UTILES, QUE REMITE EL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, RELACIONADA CON EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [REDACTED] PROMOVIDO POR [REDACTED] PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.- DOY FE.- En la Ciudad de México, a dieciséis de Agosto del dos mil diecisiete.



En la Ciudad de México, a dieciséis de Agosto del dos mil diecisiete.

Se tiene por hecha la certificación que antecede, para que surta todos sus efectos legales a que haya lugar. Y remítase de inmediato la copia certificada de la certificación que antecede y del proveído que hace las veces de acuse de recibo.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza y da fe.- Doy fe

[Handwritten signature]



- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ——— JF4EABEIAAYFAImUjQSAQgkQWymPcdIneZNTTWEAsqWQdPQsRT1995K79 OmimB21qsXyY42uDucQBAJmJYmSIFSLnksYvUzBkZQmWESdJmWVU2U-99K

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ——— JF4EABEIAAYFAImUjRkACgkQWymFadIneZPAnWd+KnhXB5uldygGCdl7BDKo1g8q xcYSEKJWxOR6lwsjWtsMY3Pxe1GgTL7TzH6JawMQ8KDrnWt+KdlwKk7midXZJl=KQTV

En el Boletín Judicial No. 141 correspondiente al día 17 de

Agosto de 2017 se hizo la publicación de Ley.— Conste

El 18 de Agosto del 2017 surtió efectos la notificación anterior.— Conste.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A"
LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA DEL
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL. --- ---

-----CERTIFICA:-----

Que la presente copia fotostática concuerda fiel y legalmente con LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, mismos que se tuvieron a la vista, relacionada con el juicio: **ORDINARIO CIVIL** promovido por:

en contra de

Expediente numero

DENTRO DEL CUADERNO DE

AMPARO a.- [REDACTED] se expide la presente copia certificada, constante en: (1) foja útil, debidamente sellada, foliada y rubricada. **CONSTE.- DOY FE.** Es dada en la Ciudad de México, a los **DIECISIETE** días del mes de **AGOSTO** del dos mil **DIECISIETE.** -----

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A"

LIC. CARLOS EMILIO CARMONA:



15422

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL



D.F. (T.S. de J.) Juzgs.-3
**TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA**
Al contestar este oficio, sírvase mencionar
el número y Secretaría que lo giró.

"Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

2017 AGOSTO 18 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.
QUEJOSO: [REDACTED]

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE:

"A"

Secretaría

Exp.

2819

Oficio Núm.

VS

ORDINARIO CIVIL

En cumplimiento al requerimiento formulado por esa H. Autoridad Federal a través del oficio 14636/2017 fechado el catorce de agosto del año en curso, y recibido en este Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México el quince de los corrientes, me permito manifestarle a Usted lo siguiente: Que a fin de dar cumplimiento a la Ejecutoria de Garantías de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Suscrito en acatamiento a la misma, a través del auto de fecha dieciséis de agosto del año en curso, aclarado por acuerdo del dieciséis de agosto del mismo año, dejó insubsistente el proveído de tres de febrero del dos mil diecisiete con todas sus consecuencias jurídicas, dictando uno nuevo en el que se determinó que no podía ponerse a disposición del C. [REDACTED] el billete de depósito número V839889 por la cantidad de [REDACTED] hasta en tanto se resolviera por Sentencia Final el recurso de apelación en ambos efectos relativo al toca de apelación 2 [REDACTED] del índice de la SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que se promovió en contra del auto de fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis; además, se ordenó requerir de manera personal por conducto del C. Secretario Actuario de adscripción, a la parte actora [REDACTED] para que en el término de TRES DÍAS hiciera la devolución del billete de depósito que exhibió la parte demandada [REDACTED] por el importe que se fijó



JUAN C. GONZÁLEZ
SECRETARIO ACTUARIO



JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL



como garantía a efecto de que fuera admitida en ambos efectos la apelación interpuesta de su parte en contra del proveído de veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis; y para el caso de que el billete se hubiera cobrado, debe exhibir la cantidad que lo amparaba, esto es, [REDACTED]

[REDACTED] en la misma forma que lo exhibió la parte demandada; apercibiéndolo con un arresto hasta por TREINTA Y SEIS HORAS por desacato, en términos del artículo 73 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México y 192 de la Ley de Amparo; proveído y auto aclaratorio que en copia certificada se anexa al presente; de igual manera se hace del conocimiento de esta Autoridad Federal, que el acuerdo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en comento, fue notificado de manera personal el día diecisiete de agosto del año en curso a la actora del juicio de origen [REDACTED]

[REDACTED] por conducto del C. [REDACTED] persona autorizada de su parte para oír y recibir notificaciones, tal y como se acredita con la copia certificada de la misma que se acompaña al presente y del acuerdo que le recayó; y una vez que conste en autos la devolución del billete de depósito de mérito, de inmediato se hará del conocimiento de dicha autoridad federal.

Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

Ciudad d México a 18 de agosto del 2017

EL C. JUEZ DECIMO SEXTO DE LO CIVIL

LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ.



JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

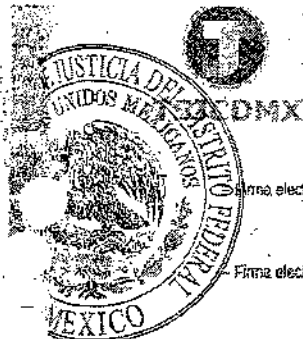
Juzgado _____

Secretaría _____

Exp. _____

Oficio Núm. _____

SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO



Firma electrónica SICOR/TSJDF-Inicio

Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente:

Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-08-17
Firmante: JC163 NAS: 5110-2783-1113-2017-243

Firma electrónica SICOR/TSJDF-Inicio

Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente:

Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-08-17
Firmante: JC163 NAS: 5110-2783-1113-2017-243

Ciudad de México a catorce de octubre del dos mil dieciséis.

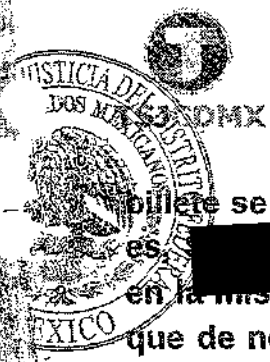
Secretaría

Dada nueva cuenta en los presentes autos, y tomando en consideración que por ejecutoria de fecha veinticinco de julio del dos mil diecisiete emitida por el C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, la Justicia de la Unión Amparó y Protegió al quejoso [REDACTED] por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable; en consecuencia de ello, y en cumplimiento al citado fallo, el Suscrito procede a dejar insubsistente el auto de tres de febrero del dos mil diecisiete con todas sus consecuencias jurídicas, que a la letra dice: "Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, visto el estado de los autos, como lo solicita se pone a disposición de la parte actora el billete de depósito número V839889 y entréguesele por conducto de persona autorizada para recibirlo, previa toma de razón que por su recibo obre en autos.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil Maestro Alejandro Rivera Rodríguez, ante la C. Secretaria Conciliadora Maestra Rosario Ballesteros Uribe, en funciones de Secretaría de Acuerdos 'B' por Ministerio de Ley, quien autoriza y da fe. Doy Fe."; y en su lugar se dicta el siguiente proveído: A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que haya lugar; y dígaselo al ocursoante que por el momento no puede ponerse a disposición del C. [REDACTED]

[REDACTED] hasta en tanto se resuelva por Sentencia Firme el recurso de apelación en ambos efectos relativo al toca de apelación [REDACTED] del índice de la SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que se promovió en contra del auto de fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis. Y en acatamiento al cumplimiento del fallo de garantías de mérito, a través de notificación personal que lleve a cabo el Secretario Actuario de adscripción de este Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, requiérase a la parte actora [REDACTED] en el domicilio que se señaló para oír y recibir notificaciones, para que en el término de TRES DÍAS haga la devolución del billete de depósito que exhibió la parte demandada [REDACTED] por el importe que se fijó como garantía a efecto de que fuera admitida en ambos efectos la apelación interpuesta de su parte en contra del proveído de veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis; billete de depósito que recibió la parte actora a través de comparecencia de ocho de febrero del dos mil diecisiete que obra a fojas 370-vuelta de los antecedentes, por conducto del C. [REDACTED] persona autorizada de su parte en el escrito inicial de demanda para oír y recibir notificaciones; y para el caso de que el

634 63
63

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN D.F. (T.S. de J.) Juzgs.9
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL



billete se haya cobrado, debe exhibir la cantidad que lo amparaba, esto es [REDACTED]

en la misma forma que lo exhibió la parte demandada; en el entendido que de no hacerlo en el término de TRES DÍAS siguientes al que haya recibido el requerimiento por parte del C. Secretario Actuario de Adscripción, se le impondrá un arresto hasta por TREINTA Y SEIS HORAS por desacato, en términos del artículo 73 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México; habida cuenta, que el mandato judicial que debe cumplir el actor [REDACTED] deviene de los lineamientos a que hace alusión el fallo de garantías cuyo cumplimiento se da a través del presente auto, así como lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Hágase del cumplimiento a la Autoridad Federal mediante atento oficio que el Suscrito está realizando las gestiones necesarias para el total cumplimiento de la sentencia de amparo que nos ocupa, para lo cual, anéxese copia certificada del presente proveído; y una vez que se exhibida el billete de depósito exigido a la parte actora en el expediente de origen, de inmediato se hará de su conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL ACTOR. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil LICENCIADO FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA, con quien actúa y da fe. DOY FE

DÉCIMO SEXTO
DÉCIMO SEGUNDO
SECRETARÍA DE JUSTICIA

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin IF4EABEIAAYFAmZyCgkQWyniFedhaZDzVADforyBR0pPpIGG4WtCqVzZnOJO
xocWu4hdv65JvYckA-yGSDRvxBCKbNAv6GcFNR5V6G0H7J0eqPpif3UknB-SJLQ
- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin IF4EABEIAAYFAmZyCgkQWyniFedhaZDzVADforyBR0pPpIGG4WtCqVzZnOJO
yGtYShS4M8m-Hz3DhA-yYUvM68WYKraQ0WTUzN7WU7124U18VlCu0HP-S5Vc

En el Boletín Judicial No. 141 correspondiente al día 12 de Agosto de 2010 se hizo la publicación de Ley.— Conste.
El 13 de Agosto del 2010 surtió efectos la notificación anterior.— Conste.

SECRETARÍA
DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

64
8655
64

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: A Documento; acuerdo publicado: 2017-08-16
Firmante: JC16J NAS: 5110-2788-7685-5481-733

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: A Documento; acuerdo publicado: 2017-08-18
Firmante: JC16SA NAS: 5110-2788-7685-3481-733

EXP: [REDACTED]

Ciudad de México a diecisiete de Agosto del dos mil diecisiete

DADA NUEVA CUENTA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 282-G del Código de Procedimientos Civiles Vigente para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se aclara el proveído que antecede, en cuanto a la fecha del mismo en la parte que dice: "Ciudad de México a catorce de Octubre del dos mil dieciséis...", debiendo ser lo correcto conforme al sello del Sistema Integral para la Consulta de Resoluciones (SICOR): "Ciudad de México a dieciséis de Agosto del dos mil diecisiete..." aclaración que se hace para no dejar en estado de indefensión a las partes, formando éste proveído parte integral del auto antes mencionado.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL ACTOR.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante el C Secretario de Acuerdos "A" Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA, que autoriza y da fe.- DOY FE

DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL
DÉCIMO SEGUNDO
TERCERA
DADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAImVp8ACgkQWymFedneZND7AD+Jy4GhXNht5uYfPqUmjS
KmCB49UJWNGADH+EIAJONSeuWwWkSPuHkG72wCYAHCsMuxU+24296e3=fv/mG

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAImVp8ACgkQWymFedneZNDQEAJ6SM2RqmsKYXGiyWCMsY3
hH4W8HqEuBLh+V1MAWmJaZ5SLXPGAsu2P7iz4PukXf5d37mMQ4YM2Qq8=8Hmu

En el Boletín Judicial No. 142 correspondiente al día 18 de

Agosto de 2017 se hizo la publicación de Ley.— Conste.

El 21 de Agosto del 2017 surtió efectos la notificación anterior.— Conste.

852 85
4 65
650

En la ciudad de México a diecisiete de Agosto del dos mil diecisiete siendo las doce horas con veintitrés minutos del día en que se actúa, comparece ante el local de éste H. Juzgado Décimo Sexto de lo Civil el [REDACTED] persona autorizada por la parte actora en el escrito inicial de demanda quien se identifica con credencial para votar con clave de elector [REDACTED] con Clave Única de Registro de población [REDACTED] expedida a su favor por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, quien en éste acto se da por notificado de manera personal de los proveídos de fechas veintiocho de Septiembre del dos mil dieciséis, dos de Agosto del dos mil diecisiete, así como de los proveídos que obran a fojas 849/850 y auto de diecisiete de Agosto del año en curso, por el que se aclara el proveído que obra a fojas antes mencionadas en cuanto a la fecha del mismo, siendo la correcta la del día dieciséis de Agosto del dos mil diecisiete, auto en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha veinticinco de Julio del año en curso dictada por el C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO AMPARO Y PROTECCIÓN AL QUEJOSO [REDACTED] y en el que en cumplimiento a dicha ejecutoria se requiere al actor [REDACTED]

[REDACTED] a efecto de que ponga a disposición de éste H. Juzgado el billete de depósito V839889 por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] exhibido por la parte demandada, o en su caso, de que para ser cobrado dicho billete de depósito, deberá exhibir la cantidad que ampara el mismo, esto es, la suma antes mencionada en la forma en que fue exhibida por la parte demandada, dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente en que sea notificado para tal efecto, esto es, de la presente comparecencia, con el apercibimiento decretado en dicho proveído consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas por desacato a un ordenamiento en caso de no dar cumplimiento en lo antes señalado. Se tiene por hecha la comparecencia que antecede de persona autorizada por la parte actora, firmando al margen y calce para constancia ante el C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA.- DOY FE

[REDACTED]

[REDACTED]

883 66
7
65
66

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE [REDACTED]
DOMICILIO [REDACTED]
CURP [REDACTED]
ESTADO [REDACTED] MUNICIPIO 010 SECCION 3528
LOCALIDAD [REDACTED] EMISION 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO 14/01/1985
SEXO M

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TERCER TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL
CIRCUITO
CIVIL

10/11/2017
10/11/2017
10/11/2017



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: A Documento: acuerdo publicador: 2017-08-18
Firmante: JC16SA NAS: 6110-2789-7172-3200-663

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: A Documento: acuerdo publicador: 2017-08-18
Firmante: JC16SA NAS: 6110-2789-7172-3200-663

EXP: [REDACTED]

Ciudad de México a diecisiete de Agosto del dos mil diecisiete

A sus autos la comparecencia que antecede de fecha diecisiete de Agosto del dos mil diecisiete, del C. [REDACTED] persona autorizada en el escrito inicial de demanda, por la parte actora [REDACTED] por la que se da por notificado de manera personal a nombre de la accionante, de los proveídos de fechas veintiocho de Septiembre del dos mil dieciséis, dos de Agosto del dos mil diecisiete; ambos respecto al día y hora señalados para el desahogo de la confesional ofrecida a su cargo por la contraria; así como del proveído que obra a fojas 849/850 y auto de diecisiete de Agosto del año en curso, por el que se aclara el proveído que obra a fojas antes mencionadas en cuanto a la fecha del mismo, siendo la correcta la del día dieciséis de Agosto del dos mil diecisiete, auto en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha veinticinco de Julio del año en curso dictada por el C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO AMPARO Y PROTECCIÓN AL QUEJOSO [REDACTED] y en el que en cumplimiento a dicha ejecutoria se requiere al actor [REDACTED] a efecto de que ponga a disposición de éste H. Juzgado el billete de depósito [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] exhibido por la parte demandada, o en su caso, de que haya sido cobrado dicho billete de depósito, deberá exhibir la cantidad que ampara el mismo, esto es, la suma antes mencionada en la forma en que fue exhibida por la parte demandada, dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente en que sea notificado para tal efecto, esto es, de la presente comparecencia, con el apercibimiento decretado en dicho proveído consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas por desacato a un ordenamiento en caso de no dar cumplimiento en lo antes señalado.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante el C Secretario de Acuerdos "A" Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA, que autoriza y da fe.- DOY FE.

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAlmV2kACghQWymFedtheZPpgD+ODnRPmedlajr5YQh4yfrRz
nm12v+de8FHrdh48A02J0+VORUAQYwFqlrFw3qB4y1J2kZANkY2k4R11 =TgKW

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAlmV2kACghQWymFedtheZPpgD+ODnRPmedlajr5YQh4yfrRz
QF57L1QSH8RyR42MJEAFK8e0WUqKPSb3Ejpe9jWwX0FL24UcT+CCnQdCJ1 =29uj



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

En el *Boletín Judicial* No. 142 correspondiente al día 18 de Agosto de 2012 se hizo la publicación de Ley.— Conste.
El 19 de Agosto del 2012, surtió efectos la notificación anterior.— Conste.

68

68

142
18 de Agosto de 2012
21 de Agosto 2012



DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

ESTADO
LIBRE
MEXICO



TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
CDMX

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL C. LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA, SECRETARIO
DE ACUERDOS "A" DEL JUZGADO DECIMOSEXTO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. -----

----- **C E R T I F I C A :** -----

QUE LAS PRESENTE COPIA CERTIFICADA CONCUERDA FIEL Y
LEGALMENTE CON SU ORIGINAL DEL EXPEDIENTE [REDACTED]
EN LOS AUTOS DEL JUICIO **ORDINARIO CIVIL**, PROMOVIDO
POR [REDACTED] EN CONTRA DE [REDACTED]
[REDACTED] SE EXPIDEN EN CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO EN AUTO DE FECHA **DIECISÉIS DE AGOSTO DEL
DIECISIETE**, CONSTANTES DE **7 (SIETE)** FOJAS ÚTILES, MISMAS
QUE VAN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FIRMADAS Y
RUBRICADAS, EXPEDIDA PARA QUE OBRE EN ACTUACIONES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DE **AGOSTO**
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. DOY FE. -----

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".

LIC. CARLOS EMILIO CARMONA



JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

60
660

Ciudad de México, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con los oficios registrados con los números de correspondencia 15421 y 15422, relativos al juicio de amparo [REDACTED] Conste.

Ciudad de México, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio registrado con el folio 15421, signado por el **Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México**, mediante el cual remite copia certificada del proveído de dieciséis de agosto del año en curso, dictado en los autos del juicio de origen, por el que acusa recibo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales se devolvieron en cumplimiento a lo ordenado en auto de *catorce de agosto de dos mil diecisiete*.

Por otra parte, en atención al contenido del oficio registrado con el número de correspondencia 15422, se tiene al **Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México**, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto, remite copia certificada del proveído de catorce de octubre de dos mil dieciséis, aclarado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete; situación de la que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que dentro del término de **tres días**, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave 2ª./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, con el epígrafe y texto siguiente:

"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGE LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA) .- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

Notifíquese personalmente al quejoso y por lista al tercero interesado.

Lo proveyó y firma **Rubén Benítez Hernández, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Encargado del Despacho**, conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de **once de julio de dos mil diecisiete**, por la **Comisión de Carrera Judicial**, según consta en el oficio número **CCJ/ST/3594/2017**, suscrito por el **Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal**, ante la Secretaria **Estela Piza Vázquez**, quien autoriza. Doy fe.

AGB

22 AGO 2017
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día 22 de agosto de 2017, se notificó a las partes la resolución que antecede por medio de lista de acuerdos fijada en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
El 23 AGO 2017, surtió efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (a) Actuario (a) Judicial **ROSALBA GONZÁLEZ**



CONSTANCIA (JUICIO DE AMPARO)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 08:30 HORAS CON
08:30 MINUTOS, DEL DÍA veintidos DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, LA SUSCRITA LICENCIADA TERESA JUÁREZ
CASTRO, ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO EN **PROVEIDO DE FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISIETE** DICTADO EN LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL **JUICIO DE AMPARO**
REGISTRADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE [REDACTED] DEL INDICE DEL
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, ME CONSTITUYO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA EN EL DOMICILIO UBICADO
EN: **AVENIDA** [REDACTED]

BUSCA DEL [REDACTED]

Y CERCIORADA DE SER EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS PARA LA PRÁCTICA DE
LA PRESENTE DILIGENCIA TODA VEZ QUE ELLO SE DESPRENDE DE SENDAS PLACAS
OFICIALES COLOCADAS EN LA ESQUINA DE DIGNA CALLE, POR COINCIDIR LA
NUMERACIÓN, LA COLONIA Y DELEGACIÓN POLÍTICA, ASI COMO POR HABERMELO
MANIFESTADO QUIEN DIJO LLAMARSE Y SE IDENTIFICA COMO [REDACTED]

LA CUAL EN UNA DE SUS CARAS TIENE ADHERIDA UNA FOTOGRAFIA QUE
CONCUERDA CON LOS RASGOS FISIONOMICOS DE SU OSTENTANTE, DOY FE HABER
TENIDO A LA VISTA Y DEVUELVO AL INTERESADO POR CONSIDERAR INNECESARIA
SU RETENCIÓN, PERSONA ANTE QUIEN ME IDENTIFIQUE PLENAMENTE COMO
ACTUARIA JUDICIAL CON UNA CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION QUE ME ACREDITA COMO TAL Y LE REQUERI LA PRESENCIA DE LA
BUSCADA, DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTA O DE ALGUNO DE SUS
AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, HACIENDO MENCION DE LOS
NOMBRES DE TODOS Y CADA UNOS DE ELLOS, A LO QUE MANIFIESTA SER LA
PERSONA BUSCADA, POR LO QUE PROCEDO A **NOTIFICARLE PERSONALMENTE** EL
CONTENIDO DEL **PROVEIDO DE FECHA INDICADA**, ENTREGÁNDOLE EN ESTE ACTO
COPIA INTEGRAL, AUTORIZADA, SELLADA Y COTEJADA DEL **PROVEIDO DE FECHA
INDICADA**, QUIEN MANIFIESTA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD EL MISMO Y FIRMA
PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA, EN UNIÓN DE LA SUSCRITA POR ASI
CONSIDERARLO CONVENIENTE.- CONSTE.- DOY FE.- LA ACTUARIA JUDICIAL
LICENCIADA TERESA JUAREZ CASTRO.-

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MEXICO



15746

JUZGADO DECIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN

"Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

MATERIA CIVIL

2017 AGO 24 P 12:48

TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
DF

Juzgs.-3

ASUNTO: SE INFORMA QUE SE HA DADO TOTAL CUMPLIMIENTO
ALA EJECUTORIA DE AMPARO.
QUEJOSO: [REDACTED]JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Juzgado

"A"

Por medio del presente y en relación al cumplimiento a la ejecutoria de
amparo de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, dictada por esa H.

Autoridad Federal en el Juicio de Amparo, señalado al rubro, se hace de su

Exp. 2895

conocimiento que, derivado del requerimiento que le fue formulado por el

Suscrito al demandado [REDACTED] en el juicio de

Oficio Núm.

origen a través del auto del dieciséis de agosto del año en curso, mismo que le

fue notificado a través de la comparecencia de fecha diecisiete de agosto de los

corrientes; el C. [REDACTED] en su carácter de mandatario

judicial del C. [REDACTED] mediante escrito presentado

ante Oficialía de partes de este Juzgado el día veintidós de agosto del año en

curso, exhibió el billete de depósito número [REDACTED] por la cantidad de

[REDACTED]

mismo que queda en resguardo en el Seguro de este Juzgado hasta en tanto se

resuelva por sentencia firme el recurso de apelación admitido en ambos efectos

relativo al toca de apelación [REDACTED] del índice de la Sexta Sala Civil del

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se promovió en

contra del proveído de fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis; con

lo que el Suscrito da total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que se hace

de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Anexando al

presente copia certificada del escrito a través del cual se exhibió el billete en

comento, del proveído que le recayó, así como del billete de depósito número

[REDACTED] para los efectos conducentes.

Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

Ciudad d México a 24 de agosto del 2017

EL C. JUEZ DECIMO SEXTO DE LO CIVIL

LIC. FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ.

JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO CIVIL



Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

BILLETE DE DEPÓSITO

V [Redacted]

Importe con letra o con protectora	Importe
** (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) **	[Redacted]
Nombre del Depositante	México, CDMX.
[Redacted]	Fecha: 22/08/2017
	Oficina
	Número: 2912
A disposición de:	Clave
JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	9116

Por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo



ORDEN DE PAGO

Páguese a:	
Quien(es) firma(n) en seguida, para fines de identificación, la cantidad que ampara este billete de depósito	Firma del(de los) beneficiario(s) ante la autoridad
[Redacted]	[Redacted]
el [Redacted] a [Redacted] de [Redacted]	el [Redacted] de [Redacted]
Categoría	Categoría
Firma	Firma
Nombre completo	Nombre completo

RECIBO

Recibi(mos) del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, la cantidad que ampara este documento

[Redacted] a [Redacted] de [Redacted] de [Redacted]

Nombre y Firma del beneficiario al recibir el importe

ORDEN DE TRANSFERENCIA*

presente billete de depósito se transfiere a:	
[Redacted] a [Redacted] de [Redacted]	[Redacted] de [Redacted]
el [Redacted]	el [Redacted]
Categoría	Categoría
Firma	Firma
Nombre completo	Nombre completo

*La orden de transferencia sólo podrá dictarse a favor de otra autoridad.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LIC. CARLOS EMILIO
CARMONA DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE
ESTA CAPITAL. -----

-----CERTIFICA-----

QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE ANTECEDE CONCUERDA
FIEL Y LEGALMENTE CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL
EXP. [REDACTED] PROMOVIDO POR [REDACTED]
EN CONTRA DE [REDACTED] DEL JUICIO
ORDINARIO CIVIL, DEBIDAMENTE COTEJADA, SELLADA,
FIRMADA Y LA QUE SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL
AÑO EN CURSO.-DADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE. -----



JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

JUZGADO
DE DISTR
EN LA

JUZGADO DE DISTRITO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

[REDACTED]

VS

[REDACTED]

DANO MORAL
JUICIO ORDINARIO CIVIL
EXPEDIENTE [REDACTED]
SECRETARIA "A"

JUZGADO II CUERPO
DE LO CIVIL

1 883
73
664
73
22 PM 12 52

C. JUEZ DECIMO SEXTO
DE LO CIVIL

169/1ete
V879035
\$225,000.00

[REDACTED]

[REDACTED]

en representación de personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, respetuosamente expongo:

Dentro de término concedido por su Señoría, mediante auto de 16 de agosto del año en curso, mismo que fue notificado personalmente a mi representado el 17 de agosto del 2017, vengo a exhibir en nombre de mi representado billete de depósito número [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] expedido por el Banco de México Nacional y Servicios Financieros S.N.C, documento que adjunto exhibo como anexo 1, al presente escrito.

En tal virtud, solicito se tenga por cumplimentada la resolución emitida por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de esta Ciudad.

Así mismo hago notar a su Señoría hasta en tanto no quede firme el auto de 28 de septiembre del 2016, que ordena se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicho billete de depósito debe quedar en garantía tal y como se encuentra ordenado en autos.

Por lo expuesto,
A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:

se acompaña al presente escrito.

PRIMERO. - Tener por exhibido el billete de depósito

del Juzgado Federal.

SEGUNDO. - Tener por cumplimentada la resolución

TERCERO. - Ordenar quede en garantía el billete de depósito exhibido hasta en tanto quede firme el auto que se indica.

[REDACTED]

53



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-08-24
Emisor: JC16J NAS: 6110-2924-2787-5881-059

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- Instancia: Décimo Sexto de lo Civil Expediente: [REDACTED] Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2017-08-24
Emisor: JC16SA NAS: 6110-2924-2787-5881-059

Ciudad de México a veintitrés de Agosto del dos mil diecisiete.

A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas las manifestaciones que vierte; se tiene por exhibido el billete de depósito [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] con el que da cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento ordenado en auto del catorce de Agosto del año en curso dictado en acatamiento de la ejecutoria de amparo de fecha veinticinco de Julio del Dos mil diecisiete emitido por el C. Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, respecto a la garantía exhibida por la parte demandada y a que se refiere el proveído de fecha once de Octubre del dos mil dieciséis que obra a fojas 289 de autos, mismo que deberá quedar en resguardo en el seguro de éste H. Juzgado hasta en tanto se resuelva por sentencia firme el recurso de apelación admitido en ambos efectos relativo al toca de apelación [REDACTED] del índice de la SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO que se promovió en contra del proveído de fecha veintiocho de Septiembre del dos mil dieciséis. Hágase conocimiento a la autoridad federal que se ha dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo en comento, para lo cual, se debe anexarse al oficio correspondiente copias certificadas del escrito que se provee, del presente proveído, así como el billete de depósito [REDACTED]. -Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ que provee y acuerda ante el C. Secretario de Acuerdos "A" Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da fe.- Doy Fe.-----

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAIndkgACgkQWymFsdhaZCQGGQDra+9Nzsf+hz22qVnouVWtdk
ELeKICRZQyWJ7yN6sA/FerOIV+ZulplwAZanRgYVWNe+UevGsVCZ7hV+5s+24n3

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- IF4EABEIAAYFAIndkgACgkQWymFsdhaZM4RgD/dhKc77d6WLBzeVYqXHKgY
e7Ww+58+67RzDCWtH5BAHDI6UmiBL76uusp5yN8ndt4LwLe2+CXqVjWJIS+PGsD

En el Boletín Judicial No. 146 correspondiente al día 24 de Agosto de 2017 se hizo la publicación de Ley.— Conste.
El 28 de Agosto del 2017 surtió efectos la notificación anterior.— Conste.



**TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA
CDMX**

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

EL C. LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA, SECRETARIO
DE ACUERDOS "A" DEL JUZGADO DECIMOSEXTO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. -----

----- **C E R T I F I C A :** -----

QUE LAS PRESENTE COPIA CERTIFICADA CONCUERDA FIEL Y
LEGALMENTE CON SU ORIGINAL DEL EXPEDIENTE [REDACTED]

EN LOS AUTOS DEL JUICIO **ORDINARIO CIVIL**, PROMOVIDO
POR [REDACTED] EN CONTRA DE [REDACTED]

[REDACTED] SE EXPIDEN EN CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO EN AUTO DE FECHA **VEINTITRES DE AGOSTO DEL
DIECISIETE**, CONSTANTES DE **2 (DOS)** FOJAS ÚTILES, MISMAS
QUE VAN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FIRMADAS Y
RUBRICADAS, EXPEDIDA PARA QUE OBRE EN ACTUACIONES,
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL
MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. DOY FE. ---

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".

LIC. CARLOS EMILIO CARMONA



SECRETARÍA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DECIMOSEXTO CIVIL



6005

JUICIO DE AMPARO

F JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con un oficio al que correspondió el número de registro en el libro de correspondencia 15746, con un anexo. **Conste.**

75

Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada del billete de depósito [REDACTED] que ampara la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] escrito de veintidós y auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, situación de la que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar.

DECIMO TERCER TRIBUNAL
JUEGO EN MATERIA CIVIL
DEL JUICIO CIVIL

Notifíquese.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras**, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la Secretaria **Estela Piza Vázquez**, que autoriza y da fe. Doy fe.

BAEC

AO SEGUNDO
MATERIA CIVIL
DE MEXICO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL

28 AGO 2017, SE NOTIFICA A

las partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. *hu*

CON FECHA 29 AGO 2017,

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

ACTUARIA

Ruth Rocha Hernández
RUTH ROCHA HERNÁNDEZ.

AGUADO
DE SIGUENTE
EN LA OFICINA



TR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

76

667

76

En la Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado, Estela Piza Vázquez **CERTIFICA:** Que después de hacer una búsqueda en el libro de correspondencia del juzgado, no se encontraron promociones por acordar, asimismo que no obran documentos originales agregados en autos. Doy Fe.

En esta misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con estado procesal que guardan los presentes autos. **Conste.**



En la Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil diecisiete.

DECIMO TERCER TRIBUNAL
LEGISLATIVO
DEL PRIMER CIRCUITO

Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que por oficio presentado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, informó el cumplimiento dado al fallo protector (fojas 60 a 68), por acuerdo de veintiuno de agosto de la presente anualidad (foja 69), se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre la observancia dada a la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

Bajo ese contexto, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de

NO SEGUN
MATERIA C
DE MEXICO

Amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional pronunciarse al respecto.

Por lo tanto, con base en la técnica jurídica del juicio de amparo, es preciso mencionar que los efectos para el cual se concedió el amparo por este juzgado federal en la sentencia constitucional terminada de engrosar el **veinticinco de julio de dos mil diecisiete**, (foja 31 a 45), radicó en lo siguiente:

"[...]1.- Dejará insubsistente el auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, dictar otro en el que determine que por el momento no puede ponerse a disposición del tercero interesado el billete de depósito [REDACTED] por la cantidad [REDACTED]

[REDACTED] hasta en tanto se resuelva por sentencia firme el recurso de apelación en ambos efectos relativo al toca de apelación [REDACTED] del índice de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se promovió en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

2.- En el entendido, de que ya se haya entregado dicho documento realice las diligencias necesarias para que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo de mérito, como sería ordenar la devolución del importe correspondiente y para el caso de que el billete se haya cobrado deberá requerir su importe mediante la misma forma de exhibición. [...]"

Por auto de **catorce de agosto de dos mil diecisiete**, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable para que el término de tres días informara lo relativo al cumplimiento dado a esa determinación (foja 52 y 53).

Así, en acatamiento a la determinación de amparo el **Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México**, mediante oficio 2819, remitió copia certificada del auto de



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMATO 2

77
660

77

catorce de octubre de dos mil dieciséis, aclarado el diecisiete de agosto de la presente anualidad, en cuanto a su fecha, por lo que lo correcto es dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el que señaló:

" (...) Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil dieciséis (sic).

(...) el Suscrito procede a dejar insubsistente el auto de tres de febrero de dos mil diecisiete con todas sus consecuencias jurídicas....

Y en su lugar se dicta el siguiente proveído: A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que haya lugar; y dígasele al ocurso que por el momento no puede ponerse a disposición del C. [REDACTED]

[REDACTED] el billete de depósito número [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] M.N.), hasta en tanto se resuelva por Sentencia Firme el recurso de apelación en ambos efectos relativo al toca de apelación [REDACTED] del índice de la SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que se promovió en contra del auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Y en acatamiento al cumplimiento del fallo de garantías de mérito, a través de notificación personal que lleve a cabo el Secretario Actuario de adscripción a este Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, requiérase a la parte actora [REDACTED]

[REDACTED] en el domicilio que se señaló para oír y recibir notificaciones, para que en el término de TRES DÍAS haga la devolución del billete que exhibió la parte demandada [REDACTED]

[REDACTED] por el importe que se fijó como garantía a efecto de que fuera admitida en ambos efectos la apelación interpuesta de su parte en contra del proveído de veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis; billete de depósito que recibió la parte actora a través de comparecencia de ocho de febrero del dos mil diecisiete que obra a fojas 370-vuelta de los antecedentes por conducto del C. [REDACTED]

[REDACTED] persona autorizada de su parte en el escrito inicial de demanda para oír y recibir notificaciones; y para el caso de que el billete se haya cobrado, debe exhibir la cantidad que lo amparaba, esto es, [REDACTED]

[REDACTED]
M.N.), en la misma forma que lo exhibió la parte demandada;..."

Asimismo, por diverso oficio 2895, el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, informó que el mandatario judicial del actor en el juicio de origen, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, exhibió billete de depósito número [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] el cual quedó resguardado en el seguro del juzgado hasta en tanto se resolviera por sentencia firme el recurso de apelación en ambos efectos relativo al toca de apelación [REDACTED] del Índice de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se promovió en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Atento a lo anterior, se considera que el **Juez responsable**, se ciñó a los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo; pues **dejó insubsistente la determinación de tres de febrero de dos mil diecisiete**, dictada en los autos del juicio ordinario civil, y emitió una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada, se pronunció en relación al billete [REDACTED] el cual se había puesto a disposición de [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] asimismo, el actor el [REDACTED] exhibió billete de depósito número [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] el cual quedó resguardado en el seguro del juzgado hasta en tanto se resolviera por sentencia firme el recurso de apelación en ambos efectos relativo al toca de

RECORDO
DE INSTRUMENTO
CENLAOUI

78
660

72

apelación [REDACTED] del índice de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se promovió en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Por las razones anteriores, este juzgado federal considera que, con fundamento en los artículos 77, fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, **SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA**, sin que se advierta que exista exceso o defecto en la misma; pues se reitera que la autoridad responsable se ciñó a los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo.

Por lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del artículo 20 del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, **relativo a la transferencia, digitalización, para ser considerado de relevancia documental.**

Y, atento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se hace constar que el presente expediente **NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL** y, por tanto, **SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN**, según lo previsto en los puntos Segundo, fracciones VI y XV; y Vigésimo Primero fracción IV; luego,

una vez que transcurra el plazo de tres años, tramítense su transferencia y depuración, respectivamente, de conformidad con los diversos puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, fracción IV de dicho ordenamiento.

Finalmente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al trece de septiembre de dos mil diecisiete.

Notifíquese, y por medio de oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público Federal adscrita.

Lo proveyó y firma **Francisco Peñaloza Heras, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, ante la Secretaria **Estela Piza Vázquez**, quien autoriza. Doy fe.

JUZGADO DE
DE DISTRITO
EN LA CIUDAD

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios 15535 y 15536 a las autoridades correspondientes, notificando el auto que antecede. Conste.



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 0.2

670 79

79

Razón. En esta fecha se registró el expediente con el número [REDACTED] y se giraron los oficios **15535 y 15536** a las autoridades correspondientes, notificando el auto que antecede. **Conste.**



BOLETO TERCER TRIBUNAL
JUDICIAL EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO



NO SEGURO
MATERIA CIVIL
12-11-1979

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS
DEL 31 AGO 2017 SE NOTIFICA A

las demás partes

LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE
POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS FIJADA EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO.
DOY FE. *hu*

CON

01 SEP 2017

FECHA

SURTIÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE LA RAZÓN QUE
ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

LA ACTUARIA JUDICIAL


LIC. RUTH ROCHA HERNÁNDEZ.

JUZGADO
DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN




FECHA: TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO: [REDACTED]

PROMOVIDO POR: [REDACTED]

ASUNTO: CUMPLIMIENTO

Código	No. Ofici	Autoridad	Zon
		JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	S/Z
4 201701 553529		(AUTORIDAD RESPONSABLE)	
		AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO	S/Z
4 201701 553529		ADSCRITA (MINISTERIO PÚBLICO)	
DECIMO TERCER TRIBUNAL			
JUZGADO EN MATERIA CIVIL			
DEL ANTECEDENTE: EXP. [REDACTED]			



DECIMO TERCER TRIBUNAL
JUZGADO EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RECEBIDO
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
2017 AGO 31



JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



Handwritten mark at the bottom right corner



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 2

67281

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

81

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

FECHA: TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

EXPEDIENTE: PRINCIPAL

NÚMERO:

PROMOVIDO POR:

ASUNTO: CUMPLIMIENTO

Código No Ofici



4 201701753527



4 201701753527

Autoridad
JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
(AUTORIDAD RESPONSABLE)
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
ADSCRITA (MINISTERIO PÚBLICO)

Zon
S/Z

S/Z

COMO TERCER TRIBUNAL
ANTECEDENTE: EXP
DEL PRIMER CIRCUITO

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

2017 AGO 31 AM 9:37

JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



9571 07 17253

B+A

abogados

JUEZ DÉCIMO SEGUNDO
DISTRITO EN
MATERIA CIVIL
19132

2019 OCT 18 P 2:21

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

QUEJOSO: [REDACTED]

JUICIO: AMPARO INDIRECTO

EXPEDIENTE: [REDACTED]

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA
DE TODO LO ACTUADO

C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

[REDACTED] en mi carácter de Mandatario
judicial del Quejoso [REDACTED], personalidad que
tengo debidamente reconocida y acreditada en los autos del
juicio al rubro citado, ante Usted C. Juez de Distrito con el
debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar
respetuosamente que se ordene expedir a mi costa DOS JUEGOS de
copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente
procedimiento; previo pago de derechos correspondiente y razón
asentada que por su recibo obre en autos.

Autorizando de manera indistinta a los C. [REDACTED]

[REDACTED] para que por su conducto les sean entregadas las
copias certificadas solicitadas.

Por lo anteriormente expuesto;

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamente pido se sirvan:

UNICO.- Se ordene expedir a costa de mi representada las
copias certificadas referidas en el cuerpo del presente
escrito, por conducto y de manera indistinta de las personas
mencionadas para tales efectos.

Ciudad de México a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.



DER. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de amparo

En la Ciudad de México, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el secretario da cuenta al juez, con el escrito registrado con el número de correspondencia 19132. Conste.

Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve.

Agréguese a los autos, el escrito signado por [redacted] autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso [redacted] en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada por duplicado de las constancias que indica, previa toma de razón que por su recibo asiente en el expediente, y como autorizado para recogerlas a las personas que menciona.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma Ricardo Mercado Oaxaca, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el secretario Rubén Benítez Hernández, quien autoriza. Doy fe.

Oficial admvo: <i>lpsu</i>	Secretaria particular: <i>[firma]</i>	Analista SISI: <i>[firma]</i>	Actuario: <i>[firma]</i>
Secretario: <i>RBH</i>			

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL
22 OCT 2019 SE NOTIFICA A

las partes
LA
RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA DE
ACUERDOS FIJADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE
AMPARO. DOY FE.

CON FECHA 23 OCT 2019,
SURTÍÓ TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN A QUE
SE REFIERE LA RAZÓN QUE ANTECEDE, DE CONFORMIDAD CON
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

EL ACTUARIO JUDICIAL


LIC. JOSÉ NAHUM BARRIOS GARCÍA



JUZGADO DÉCIMO
DE DISTRITO EN
EN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CDMA.
PRESIDENCIA

RECIBIDO
- 4 NOV 2019

CIVIL
MÓDULO
No. 31

JUICIO DE AMPARO

CIUDAD DE MÉXICO, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE DE OCHENTA Y CUATRO (84) FOJAS ÚTILES, INCLUYENDO LA FOJA DE LA PRESENTE CERTIFICACION, CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL DEDUCIDA DEL JUICIO DE AMPARO INDICADO ALERUBRO Y QUE SE CERTIFICA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO EL VEINTIUNO DE LOS ACTUALES.
DOY FE.

EL SECRETARIO

RUBÉN BENITEZ HERNÁNDEZ.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



676

TOCA NÚMERO.- [REDACTED]

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día siete del mes noviembre del dos mil diecinueve presente en el local de esta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, [REDACTED]

Quien se identifica con copia certificada de cédula profesional número [REDACTED]
Expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones,

Y dijo que en este acto y a nombre del Tercero Interesado [REDACTED]
[REDACTED]

Y estar autorizado para tales efectos a fojas uno del escrito inicial se notifica del auto de fecha seis del mes de noviembre del dos mil diecinueve, dictado en esta sala en el cuaderno de amparo, asimismo recibiendo una de las copias simples de traslado de la demanda de [REDACTED] de [REDACTED] garantías promovida por [REDACTED] [REDACTED]

de su apoderado [REDACTED]

a fin de quedar por su conducto debidamente emplazado a juicio de garantías al tercero perjudicado, para que acuda ante la autoridad federal a deducir sus derechos

Esto dijo y firma al calce para su constancia. Doy Fe. [REDACTED]



SEXTA SALA CIVIL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

672

6484

En catorce de noviembre de dos mil diecinueve, **José Manuel González Jiménez**, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta al Magistrado Presidente de este órgano colegiado con la boleta de turno [REDACTED] de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, oficio 2998 de la Magistrada Presidenta de la **SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, informe justificado, constancia de emplazamiento del tercero interesado, tocas [REDACTED] [REDACTED] juicio ordinario civil daño moral, expediente [REDACTED] una bolsa cerrada, certificación a que se refiere el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo, instrumento notarial [REDACTED] original de la demanda de amparo con tres legajos anexos, promovida por [REDACTED] [REDACTED] representado por quien se ostenta su apoderado [REDACTED] y dos copias (legajos) de traslado. - **Conste.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DECIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Vista la boleta de turno [REDACTED] de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito y los anexos de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Fórmense expedientes impreso y electrónico, y registrense con el número DC.- [REDACTED]

Agréguese a sus autos, el oficio 2998 de la Magistrada Presidenta de la **SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD**



DE MÉXICO, informe justificado, constancia de emplazamiento del tercero interesado, tocas [REDACTED]

[REDACTED] juicio ordinario civil daño moral, expediente [REDACTED] una bolsa cerrada, certificación a que se refiere el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo, instrumento notarial [REDACTED] original de la demanda de amparo con tres legajos anexos, promovida por [REDACTED] [REDACTED] representado por quien se ostenta su apoderado [REDACTED] y dos copias (legajos) de traslado, contra la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve dictada en el toca [REDACTED]

Acúsese recibo.

Se reconoce [REDACTED] el carácter de apoderado del referido quejoso, en términos del instrumento notarial [REDACTED] pasado ante la fe del Notario Público 80 de la Ciudad de México.

Con apoyo en los artículos 179 y 181 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de garantías de cuenta.

La sentencia de **diez de octubre de dos mil diecinueve**, se notificó al quejoso, por boletín judicial, el **once** del citado mes y año, esa notificación surtió sus efectos el **catorce** siguiente y el plazo de **quince días** establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover juicio de amparo directo, transcurrió del **quince de octubre** al **cinco de noviembre** del presente año, sin contar los días **diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre, uno, dos y tres de noviembre** de este año, por inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En el entendido que el **uno de noviembre de**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

dos mil diecinueve, fue inhábil para la autoridad responsable.

670

Como la demanda de amparo de que se trata, se presentó el **cuatro de noviembre de dos mil diecinueve**, con apoyo en los artículos **103** fracción I, **107**, fracciones III, V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **175, 179, 181** y demás relativos de la Ley de Amparo, **37**, fracción I, inciso c) y **41** fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **SE ADMITE A TRÁMITE.**

Dese vista al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, para los efectos que correspondan.

En cuanto a las pruebas que ofrece el promovente, consistentes en tres anexos que en copias certificadas exhibe con la demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones y la presunción legal y humana, dígasele que con fundamento en el artículo **75** de la Ley de Amparo, solo se tomarán en cuenta las pruebas rendidas ante la autoridad responsable.

De conformidad con el artículo **181** de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento el presente proveído a las partes, para que en el término de **quince días** formulen alegatos si es su deseo, o la tercera interesada promueva amparo adhesivo; una vez cumplido lo anterior, tórnese este expediente **DC.-**

al Magistrado correspondiente para la elaboración de proyecto de sentencia.



3 260036 0800

Se tiene por señalado el domicilio que el promovente indica para oír y recibir notificaciones y documentos de su parte y por autorizados en términos amplios de conformidad con el artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente a los profesionistas [REDACTED]

[REDACTED]

por haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho implementado por el Consejo de la Judicatura Federal con los números de registro **3528 y 104584** respectivamente. Por lo que hace al diverso profesionista y demás personas que refiere, se les tiene por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, aun con medios electrónicos, conforme al artículo 24 de la referida Ley.

Por lo que hace al instrumento notarial de cuenta, previo cotejo con una copia fotostática que se anexa a la demanda de amparo, agréguese a estos autos, déjese a disposición de su oferente, y hágasele saber que de no recogerse hasta antes de dictarse el auto de archivo de este expediente, correrá la misma suerte en caso de que se ordene la destrucción del mismo; por tanto, guárdese en una mica de plástico y agréguese a este expediente.

Finalmente, en su oportunidad procesal, cúmplase con la obligación que disponen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.





TERCER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

679

NOTIFÍQUESE, y por medio de oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, adjuntándole a este último comunicado, copia de la demanda de amparo.

Así lo acordó el Magistrado **Daniel Horacio Escudero Contreras**, Presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con el Secretario de Acuerdos **José Manuel González Jiménez**, que da fe.

En catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se giraron los oficios 7138 y 7139 correspondientes.- Conste.
DC- [REDACTED]
JMGJ/macs

En 15 NOV 2019, siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal. **Doy fe.**

EL ACTUARIO JUDICIAL.

Lic. Diego Bohórquez Ruiz Esparza



3 260036 0800



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DIGITALIZADO

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

680

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LAS
RESPONSABLES DEL AUTO O RESOLUCIÓN DE
FECHA: *catorce de noviembre de dos mil diecinueve.*

DICTADO EN EL EXPEDIENTE: D.C. [REDACTED]

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

2019 NOV 15 PM 1:44

SEXTA SALA CIVIL

INTERPUESTO POR: [REDACTED]

7138/2019 SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.- REF.- [REDACTED]

7139/2019 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA FEDERACIÓN (MINISTERIO PÚBLICO)



4 000260 036081



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

DIGITALIZADO

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

684

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LAS
RESPONSABLES DEL AUTO O RESOLUCIÓN DE
FECHA: *catorce de noviembre de dos mil diecinueve.*

DICTADO EN EL EXPEDIENTE: D.C. [REDACTED]

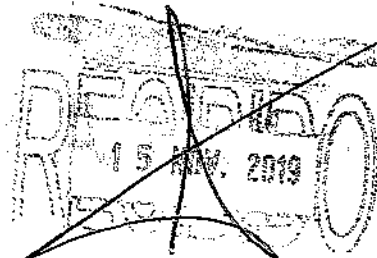
INTERPUESTO POR: [REDACTED]



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
CIRCUITO

7138/2019 SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.- REF.- TOCA [REDACTED]

7139/2019 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA FEDERACIÓN (MINISTERIO PÚBLICO)





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADO DE GUERRE

632

En Ciudad de México, a VEINTISEIS de
NOVIEMBRE del año dos mil diecinueve.

Presente en el local del Décimo Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
EL [REDACTED] quien

tiene el carácter de AUTORIZADO POR EL QUEJOSO en el
expediente [REDACTED] y se identifica con

CREDENCIAL
PARA NOTAR
CON FOTOGRAFIA

número [REDACTED]

expedida a su favor por

EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; documento que

se tiene a la vista y se le devuelve al interesado para
su uso personal, quien en este acto recoge la (s),

~~copia~~ (s) EL INSTRUMENTO NOTARIAL [REDACTED]
(ORIGINAL)

ordenada (s) en el auto dictado en este expediente

el día CATORCE de NOVIEMBRE de dos mil

DIECINUEVE.- Firmando al calce para constancia.- CONSTE.

[REDACTED]
FIRMA





REFERENCIA
039546

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Subsecretaria de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio [REDACTED] signado por el Secretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal. Conste. *[Firma]*

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto el oficio [REDACTED] signado por el Secretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, con el cual se formó y registró el expediente de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción [REDACTED] téngase por recibida la solicitud que formula [REDACTED] a fin de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza de oficio la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo [REDACTED] del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones; y autoriza a los profesionistas y personas que indica, para los efectos que precisa.

En consecuencia, y toda vez que el promovente carece de legitimación para solicitar se ejerza de oficio la facultad de atracción para conocer del asunto en mención, con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sométase a la consideración de la señora Ministra y de los señores Ministros integrantes de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que determinen si alguno de ellos considera hacer suya la referida solicitud.

De igual manera, solicítase al tribunal colegiado, que informe el estado procesal del referido asunto y en caso de no haber sido resuelto, remita vía MINTERSCJN copia del escrito

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

DECIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL

2019 NOV 27 P 154

006751

EL PRIMER SECRETARIO
DEL TRIBUNAL GENERAL

**SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN**

de demanda de amparo así como del acto reclamado, y no lo resuelva hasta en tanto se llega a una determinación sobre la presente solicitud.

Por otra parte, téngase por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; por autorizados para esos efectos e imponerse de autos a las personas referidas en el ocurso de cuenta, en la inteligencia de que si los profesionistas acreditan encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se les tendrá como autorizados con todas las atribuciones del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo si alguna de tales personas ya tiene reconocido expresa o implícitamente el carácter de autorizada en términos amplios, dicha autorización seguirá surtiendo todos los efectos legales en esta instancia.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Subsecretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciada Elsa Guzmán Olguín.



DÉCIMO TERCER
COLEGIO DE
DEL PR...

MVS/gm

El **28 NOV 2019** se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

634

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: 038546.pdf
Secuencia: 2977922

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ISAAC MENDOZA FERREYRA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	MEFM930320HMCNRR05			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e00000000000000000000000000d4d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2019T17:17:06Z / 27/11/2019T11:17:06-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	83 5c 54 3a a4 2f 5a bc 80 db 44 9b 6e f3 dd b7 7b 56 f2 d8 76 e1 6d 42 51 b4 68 a5 66 c5 cb 5c 95 5c 1e 1c 00 84 4c d7 89 0b 65 36 da 08 a1 47 65 7f 9a 19 15 08 5a 69 1a 43 9d be de 9e 38 49 a8 1e 52 28 2f f9 1f 1c 25 f1 20 f2 4b be 8b 2a a5 d0 61 65 dc 48 1e df 4c 2f 1a 38 0b b9 23 1a 12 d9 32 ff ca 00 55 58 72 be cf 1e 15 0d 81 27 2a 08 b2 8e ac 07 62 df b6 7d cf d3 ca 1a f4 6b 18 58 a9 be 36 9b 79 d5 1e f6 17 d1 20 3f 86 ab 36 df 98 b9 aa b9 22 d0 de b7 2c 09 cb cc 52 47 49 1a 17 af 84 a8 3d ab fc 04 0c 64 b7 30 9b bf 14 3d d9 35 24 41 72 36 4a fc a1 67 2b 98 35 a2 ce c1 08 f2 95 7c 5e 09 43 08 e9 9b 6e cd 70 13 7e f1 b4 56 7f fb 0d e9 41 61 f6 b9 f8 d3 fc e4 fd c3 90 7a 57 e7 1a 4e 98 8a ed 1b 76 6d 92 7b 1f 7a aa 47 74 c1 ef 9f 88 95 cc da b1 7b 62 2e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2019T17:17:07Z / 27/11/2019T11:17:07-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e00000000000000000000000000d4d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	27/11/2019T17:17:06Z / 27/11/2019T11:17:06-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2981763			
	Datos estampillados:	33FBA9B8E0238E48AB3047FDE7E7C0FAF5C6C210			



TRIBUNAL
ERIAL CIVIL
QUITO



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 83505/2019

Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fecha de envío del
órgano requirente: 27/11/2019 13:00:42

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requirente: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN [REDACTED]

Núm. oficio del
órgano requirente: MI/PS/2/5952/2019

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requerido: AMPARO DIRECTO [REDACTED]

Fecha de recepción: 27/11/2019 13:53:36

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 27/11/2019	COPIAS DIGITALIZADAS DEL ESCRITO DE DEMANDA Y DE AGRAVIOS INFORME SOBRE EL ESTADO PROCESAL DE UN ASUNTO RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN FORMATO ELECTRÓNICO	(3) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN TRES PÁGINAS.

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion101243.pdf
Secuencia: 2978835

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GOJM650315HVZNMN08			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000097da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2019T19:53:42Z / 27/11/2019T13:53:42-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	97 d3 77 9f 80 72 d8 2a 8a 45 82 a3 a7 28 1e 72 35 b6 6a 42 f1 71 9c 28 93 90 fa c9 e1 68 1d 21 62 58 22 71 76 36 a7 e9 7c 63 1e 8c 9e 05 ec b2 b3 ba 3c 5e 55 59 c2 d6 8d 56 8a a0 1a 3b eb c8 a8 90 e4 09 0a 63 5d ff de 45 15 63 01 01 f8 d0 73 69 3e b1 13 be 9a 5e 07 72 9a b0 cc 0d c5 0e 4b 02 24 04 22 1c a8 88 ea cb ba 95 83 18 69 4f 69 86 1e 4d 07 e0 34 58 26 a9 b9 26 0c 74 c8 0d f3 6c c0 a3 b5 f4 3d 01 f3 15 4a 7e 81 bc 10 7b 13 38 04 b2 95 2e b1 f2 87 d6 5d 4f 77 21 f1 58 ad b4 7b fe 09 ff 3f 4a 89 95 61 f5 92 98 58 1e 65 46 83 1f 2e c9 10 64 33 88 64 ca 03 2c 33 59 13 61 a2 72 78 a1 40 7f c6 2d cc 30 78 ec 6c 18 1d d4 58 52 55 39 82 ed fb b8 c0 89 af ea 91 3d 81 7a a8 77 01 20 2c 0a 7b c3 03 9a 8c 96 0c e6 e3 8d dc 06 27 31 18 40 2c 8b 31 50 9c e7 f5			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2019T19:53:43Z / 27/11/2019T13:53:43-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000097da			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2019T19:53:42Z / 27/11/2019T13:53:42-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2982676			
	Datos estampillados:	C810BEAE28131A7B3E3990EA257B8796B3FBBA70			



DÉCIMO TERCER
BOLEADO EN M
DEL PRIMERO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

638

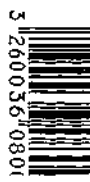
6751

En **veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve**, **José Manuel González Jiménez**, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta al magistrado presidente con los documentos registrados en el Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federal (MINTERSCJN), constante del acuse de envío con el número de oficio **MI/PS/2/5952/2019** en el que se inserta el auto de Presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de **veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve**, y dos evidencias criptográficas. - **CONSTE.**

Ciudad de México, a **veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve**.

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguese a sus autos, para sus efectos, el oficio **MI/PS/2/5952/2019** en el que se inserta el auto de Presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de **veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve**, y dos evidencias criptográfica, por el cual solicita a este órgano colegiado, informe el estado procesal que guarda este juicio de amparo D.C. [REDACTED] y para el caso de que no haya sido resuelto, se le remita, vía (MINTERSCJN), copia de la demanda de amparo, así como del acto reclamado, y solicita que el asunto no se resuelva hasta en tanto se llegue a una determinación respecto a la solicitud de facultad de atracción promovida por el tercero interesado [REDACTED]



Infórmese al máximo Tribunal, que:

a). Por auto de presidencia de **catorce de noviembre de dos mil diecinueve**, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por [REDACTED] [REDACTED] representado por su apoderado [REDACTED] contra la sentencia dictada por la **SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, el **diez de octubre de dos mil diecinueve**, en el toca [REDACTED]

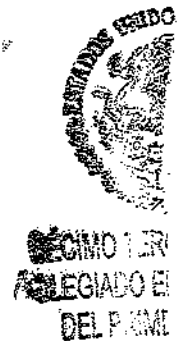
b). A la fecha del dictado de este proveído, en este expediente de juicio de amparo directo, se encuentra transcurriendo el plazo de **quince días** para que las partes formulen alegatos, o la tercera interesada promueva amparo adhesivo, conforme a lo dispuesto en el artículo **181** de la Ley de Amparo.

De ahí, remítase las constancias solicitadas, vía **(MINTERSCJN)**.

Con fundamento en el artículo **366** del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, **se suspende el procedimiento** de este juicio de amparo, hasta en tanto quede definida la facultad de atracción.

Una vez que la superioridad comunique la determinación correspondiente, dese nueva cuenta para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por vía (MINTERSCJN) a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por medio de oficio a la autoridad responsable.





PO: JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

Así lo acordó el Magistrado **Daniel Horacio Escudero Contreras**, Presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con **José Manuel González Jiménez**, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

En esta misma fecha se giraron los oficios 7423 y 7424 correspondientes.- CONSTE.
D.C. [REDACTED]
JMGJ/macs

En 129 NOV 2019 siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo que se hayan ordenado realizar en forma personal.- Doy Fe.

EL ACTUARIO JUDICIAL



TRIBUNAL
MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO

Lic. Daniel Escudero Contreras



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

DIGITALIZADO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

7423/2019 PRESIDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.- REF.- SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD DE ATRACCIÓN. REF.- [REDACTED]

7424/2019 SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TOCA [REDACTED]

En los autos del expediente D.C. [REDACTED], promovido por [REDACTED] el presidente de este Tribunal Colegiado dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguense a sus autos, para sus efectos, el oficio MI/PS/2/5952/2019 en el que se inserta el auto de Presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, y dos evidencias criptográfica, por el cual solicita a este órgano colegiado, informe el estado procesal que guarda este juicio de amparo D.C. [REDACTED] para el caso de que no haya sido resuelto, se le remita, vía (MINTERSCJN), copia de la demanda de amparo, así como del acto reclamado, y solicita que el asunto no se resuelva hasta en tanto se llegue a una determinación respecto a la solicitud de facultad de atracción promovida por el tercero interesado [REDACTED]

Infórmese al máximo Tribunal, que:

a). Por auto de presidencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por [REDACTED] representado por su apoderado [REDACTED] contra la sentencia dictada por la SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el diez de octubre de dos mil diecinueve, en el toca [REDACTED]

b). A la fecha del dictado de este proveído, en este expediente de juicio de amparo directo, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que las partes formulen alegatos, o la tercera interesada promueva amparo adhesivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Amparo.

De ahí, remítase las constancias solicitadas, vía (MINTERSCJN).

Con fundamento en el artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento de este juicio de amparo, hasta en tanto quede



definida la facultad de atracción.

Una vez que la superioridad comunique la determinación correspondiente, dese nueva cuenta para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por vía (MINTERSCJN) a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por medio de oficio a la autoridad responsable.

Así lo acordó el Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras, Presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con José Manuel González Jiménez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Lo que comunico para los efectos legales procedentes.

Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil
diecinueve.

EL ACTUARIO JUDICIAL.



DECIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

D. Diego Bohórquez Ruiz Espinoza



DECIMO TERCER
COLEGIADO EN
DEL PRIMER



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO

Acuse de envío, anexos y acuse de recibo relacionados con el folio electrónico 84600 recibidos por el MINTERSCJN

Folio electrónico: 84600/2019
Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío al órgano requirente: 29/11/2019 16:12:45
Tipo y núm. exp. del órgano requirente: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
Núm. de oficio del órgano requirente: [REDACTED]

Fecha de acuerdo u oficio del órgano requerido: 28/11/2019

Síntesis del acuerdo u oficio del órgano requerido: INFÓRMESE QUE ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGATOS, POR TANTO, REMÍTASELE LO SOLICITADO.

Núm. oficio del órgano requerido: [REDACTED]

Tipo y núm. de exp. órgano requerido: AMPARO DIRECTO [REDACTED]

Acuerdo u oficio respectivo y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio (en su caso constancias)	Tipo de respuesta o constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio: 28/11/2019	REMISIÓN DE AUTOS REQUERIDOS O NO SOLICITADOS	(3) ORIGINAL	INFÓRMESE QUE ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGATOS, POR TANTO, REMÍTASELE LO SOLICITADO.
Constancia 1	CONSTANCIA 1	(117) ORIGINAL	SENTENCIA RECURRIDA.
Constancia 2	CONSTANCIA 2	(79) ORIGINAL	DEMANDA DE AMPARO.

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseEnvio101243.pdf
Secuencia: 2986045

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GOJM650315HVZNMN08			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000097da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	29/11/2019T22:14:45Z / 29/11/2019T16:14:45-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	50 91 8a 57 5c 9f a0 0a 45 cf 50 6d 1c 4a 98 bf 25 f1 e2 99 ad 48 e0 83 8e 29 a8 0d 4f 9a 81 01 72 ed 59 bc a1 d4 9d ee 59 9e b8 a5 03 b2 1b c4 e7 8c 83 c7 13 08 d7 fd 32 2d f4 01 1f 6e e5 b4 4e 93 a5 3b 23 ff 82 c0 4b e9 43 40 62 40 4c 11 79 54 2c 59 ab 8e 17 5a 4d a3 82 1a ce 53 ff 21 d9 ca 61 f7 17 c2 4c d8 90 17 a9 24 93 a7 d0 a4 d2 0b 7a eb e5 55 85 b7 a9 b4 e8 2e b8 59 9a f0 84 c7 bd 16 40 07 45 1f 49 36 6c 99 a9 ff ff 44 d4 cc 34 38 77 53 d6 40 af be 31 c5 26 2f 7a 86 a1 4a 79 34 48 3e 82 6c 26 8e 08 7a b6 f2 9b b8 3f 43 52 39 e9 29 5f 47 e3 21 1d 85 f7 c9 d7 88 8b 62 9e 01 15 ba 6f c4 28 f0 cc 5a c1 5e 0c 15 7b 56 2b de 04 9e 10 0d ff 52 d7 2f 30 b8 a2 22 d6 74 c6 fa 2b 61 8d fd 14 a6 a2 c6 64 99 43 af c5 5c a7 96 b4 90 f6 94 b5 4e 5b 05 33 ee 72 d5			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	29/11/2019T22:14:46Z / 29/11/2019T16:14:46-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000097da			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	29/11/2019T22:14:45Z / 29/11/2019T16:14:45-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2989902			
	Datos estampillados:	E9BF5027CEE35201830C6AD002A9C9AB938F30FE			





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

690

DIGITALIZADO

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LAS
RESPONSABLES DEL AUTO O RESOLUCIÓN DE
FECHA: *veintiocho de noviembre de dos mil
diecinueve.*

DICTADO EN EL EXPEDIENTE: D.C. [REDACTED]

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
PRIMER CIRCUITO

2019 NOV 29 AM 11:23

SEXTA SALA CIVIL



TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

INTERPUESTO POR: [REDACTED]

PRESIDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-
REF.- SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD
DE ATRACCIÓN [REDACTED]

7424/2019 SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO TOCA [REDACTED]



B+A

abogados

2019 NOV 29 P 2:49

006844

691

QUEJOSO:

AMPARO DIRECTO

EXPEDIENTE:

DIGITALIZADO

C. MAGISTRADOS DEL DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

[REDACTED], en mi carácter de apoderado legal de [REDACTED] personalidad que tengo debidamente acreditada, ante Ustedes con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que previo el pago de los derechos correspondientes, solicito se expida a costa de mi mandante, copias certificadas de la Sentencia Definitiva de fecha 26 de marzo de 2019 dictada por el Juez de Primera Instancia, así como de la Sentencia dictada por la Sexta Sala Civil señalada como acto reclamado, de fecha 10 de octubre del 2019.

Autorizo para recoger las copias solicitadas, a los Pasantes en Derecho [REDACTED]

Por lo expuesto,

A USTEDES C. MAGISTRADOS, atentamente solicito se sirvan,

ÚNICO.- Expedir a costa de mi mandante, las copias certificadas arriba señaladas, a través de las personas autorizadas.

[REDACTED]
Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

6844

6844

En dos de diciembre de dos mil diecinueve, José Manuel González Jiménez, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta al Magistrado Presidente con el escrito de [REDACTED] en su carácter de apoderado del quejoso [REDACTED] - Conste.

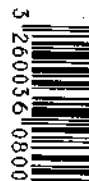
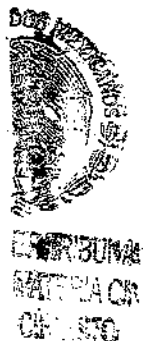
Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil diecinueve.

Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguese a sus autos, el escrito de [REDACTED] en su carácter de apoderado del quejoso [REDACTED], mediante el cual solicita copia certificada de las constancias que indica en dicho escrito.

Se reserva acordar el escrito de cuenta, porque en auto de presidencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se suspendió el procedimiento de este juicio de amparo, a propósito de la solicitud de facultad de atracción promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el tercero interesado [REDACTED] por lo que una vez que la superioridad defina lo relativo a dicha solicitud, y se levante la suspensión procedimental, se acordará lo conducente.

NOTIFÍQUESE.



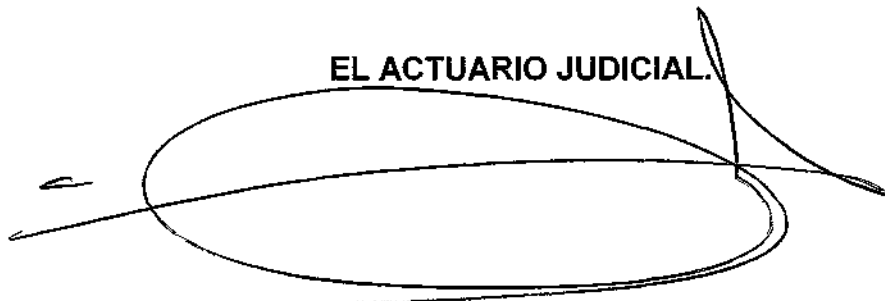
3 260036 0800

Así lo acordó el Magistrado **Daniel Horacio Escudero Contreras**, Presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con el Secretario de Acuerdos **José Manuel González Jiménez**, que da fe.

DC. [REDACTED]
JMGJ/macs

En 03 DIC 2019, siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal. Doy fe.

EL ACTUARIO JUDICIAL.



U. Diego Bohórquez Ruiz Esparza





DIGITALIZADO

FORMA A-84

PROMOCIÓN
78913-MINTER

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el acuse electrónico y anexos, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste.

Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

Agréguese a sus autos el acuse y anexos remitidos vía MINTERSCJN, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase al citado Tribunal Colegiado, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente asunto, informando el estado procesal del juicio de amparo directo de su índice, que ordenó reservar el dictado de su resolución, hasta en tanto se determine lo conducente en la presente solicitud; y remitiendo copias digitalizadas de los documentos solicitados. Acúsese recibo.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez García.

MVS

6 DIC 2019

se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: 78913.pdf
Secuencia: 2995897

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ISAAC MENDOZA FERREYRA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	MEFM930320HMCNRR05			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e00000000000000000000000000d4d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	05/12/2019T16:08:29Z / 05/12/2019T10:08:29-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4e bc 7b 33 83 86 78 93 64 95 41 97 d7 cf d1 ba 36 af 9b 20 1b cf 28 09 84 aa 43 6d b2 e9 2b 97 ed f7 53 f8 77 96 c8 c8 aa 63 cd cb 42 ed 8d a2 67 7e 55 6f 6a 6b 51 d4 ab d1 24 f0 a4 c2 3d e0 01 93 55 17 20 b6 db 8e 2c 60 02 4b d4 ea e6 81 5c c3 0c f7 2b 85 c2 f1 9f 16 36 4f 88 c5 98 2d 7f c8 79 95 fb 29 86 6d b6 59 ce aa 1e 95 1d 4c dc fc 3f 1d a3 31 8a fb 98 25 20 39 c9 1b fd f6 b0 a2 43 34 15 e6 53 99 60 92 d5 ca f6 f1 f1 3b 63 db 5a e9 8e 5d 39 fe c5 05 3f 0b 75 f3 09 9f 41 56 81 16 0e aa 37 ba 57 11 d4 68 ff d1 ed 36 af 4b b7 2e 0b 2e f8 d8 e6 aa 74 9f 89 23 ef da aa d5 d3 10 28 e0 19 94 5d 1e de f3 c4 0e 1c 3d 4e dc 42 d5 d0 2c 3c ae 84 91 b6 0c 8d 72 14 da 38 5d f9 87 19 09 3d 42 50 78 46 8f 46 83 83 de 99 8a 4e 27 9b ed b5 a9 60 8d d1 e3 22 55 a3 5b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	05/12/2019T16:08:31Z / 05/12/2019T10:08:31-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e00000000000000000000000000d4d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	05/12/2019T16:08:29Z / 05/12/2019T10:08:29-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2999754			
	Datos estampillados:	E76BAF5D23A45A06ECD48B13B3C8A7C32DFE5F0D			



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 86326/2019

Fecha de envío de la SCJN: 05/12/2019 11:58

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN [REDACTED]

Tipo de acuerdo: RINDE INFORME, ACUSE DE RECIBO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS

Núm. oficio de la SCJN: MI/PS/2/8664/2019

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: AMPARO DIRECTO [REDACTED]

Fecha de recepción del órgano remitente: 06/12/2019 13:17

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO	(2) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN DOS FOJAS.
Fecha de acuerdo: 05/12/2019		

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion141229.pdf
Secuencia: 2999490

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GOJM650315HVZNMN08			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000097da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/12/2019T19:17:51Z / 06/12/2019T13:17:51-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	00 eb 0d ae 07 ff 51 2f 38 02 76 ff e4 db f3 d8 1f 76 eb e3 c4 15 13 1b 00 37 8f 9b 7f 4c 83 16 e8 9a f9 4a 20 96 73 ec b9 3f 0a da 06 54 55 33 d0 0e 51 41 c7 5b f8 b0 5a e0 15 e9 fa 00 f2 40 b5 b1 de 02 a1 1d af 15 5c c7 12 d6 9a da ca 7b 75 3f 6c 67 33 ed e0 b1 87 a1 af 89 49 f3 6c 04 f9 9b 7a 45 3a 08 3c 8e aa e3 d5 e9 0f d3 12 9c ee 8f d5 12 b9 26 f9 5a 01 94 c2 01 40 42 bc c7 86 51 05 20 4c c6 62 85 5b c1 17 c0 ce 67 e4 d5 37 d5 88 96 04 79 ec 7d 01 f4 73 46 41 33 a5 97 fd e6 ed 80 fe 75 9f 0c 61 0c 3d c7 9e ed 38 b2 03 33 56 5f 4d 8f c2 01 66 8b b0 63 f9 3e dd 4b b3 38 2a 00 16 a1 28 67 8b 00 8e 78 71 b7 98 c6 67 6f 32 85 20 66 0c 4f 9e 63 da 1f f1 0d 0d 3d 76 ae 99 7d 1c c6 a6 11 48 67 3c a4 1a 3f 9c a2 6f 24 d4 40 d3 89 ae 55 9f 6a 32 db 78 2b 95 2e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/12/2019T19:17:52Z / 06/12/2019T13:17:52-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000097da			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	06/12/2019T19:17:51Z / 06/12/2019T13:17:51-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3003347			
	Datos estampillados:	80D1124664DB47DA785F792385231BE791D115DC			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

695

7018

En nueve de diciembre de dos mil diecinueve, José Manuel González Jiménez, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta al magistrado presidente con los documentos registrados en el Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federal (MINTERSCJN), constante del acuse de envío con el número de oficio **MI/PS/2/86642019** en el que se inserta el auto de Presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de **cinco de diciembre de dos mil diecinueve**, y dos evidencias criptográficas.-
CONSTE.

Ciudad de México, a ~~nueve de diciembre de dos mil diecinueve~~.

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguese a sus autos, para sus efectos, el oficio **MI/PS/2/86642019** en el que se inserta el auto de Presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de **cinco de diciembre de dos mil diecinueve**, y dos evidencias criptográficas, del que se obtiene el acuse del oficio 7423/2019 de este índice, y de las constancias que se le remitieron vía (MINTERSCJN).

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordó el Magistrado **Daniel Horacio Escudero Contreras**, Presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con **José Manuel González Jiménez**, Secretario que autoriza y da fe.

D.C. [REDACTED]
JMGJ/macs



En 10 DIC 2019, siendo las nueve horas, se notifica el
proveído que antecede por medio de lista a las partes,
habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este
tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de
Amparo, salvo que se hayan ordenado realizar en forma
personal.- **Doy Fe.**

EL ACTUARIO JUDICIAL

Jc. Diego Bohorquez Ruiz Espaza

007041

696

SECRETARÍA DE JUSTICIA

OFICINA DE

RECEPCIÓN

1 - copia del

LIC. DIC - 9. 11. 3.

mas no escrito

DEL PRIMER CIRCUITO

DEL PRIMER CIRCUITO

QUEJOSO:

TERCERO

INTERESADO:

AMPARO DIRECTO

EXPEDIENTE:

DIGITALIZADO

H. DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

[REDACTED], con la personalidad que tengo debidamente acreditada en autos del juicio principal, en mi calidad de tercero interesado; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la calle [REDACTED] Código Postal [REDACTED] autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en Derecho [REDACTED] con cédula profesional [REDACTED] con cédula profesional [REDACTED] con cédula profesional [REDACTED] autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos, tomar fotografías y recibir toda clase de documentos a [REDACTED] y [REDACTED] indistintamente, respetuosamente expongo:

PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE ALEGATOS

El 15 de noviembre de 2019 se publicó por listas del poder judicial federal el auto de 14 de noviembre de 2019, el cual tuvo por admitido el juicio de garantías en el que se actúa. Surtiendo todos sus efectos legales el 19 del mes y años precitados, mediando los días inhábiles 16, 17 y 18.

El término de quince días otorgado para exhibir alegatos corre del 21 de noviembre al 12 de diciembre, ambos de 2019, mediando los días inhábiles y en los cuales no corrieron términos, los que se describen en estricto apego al artículo 19 de la Ley de Amparo: 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 y 30 de noviembre 1º, 7 y 8 de diciembre, todos de 2019.

En referencia al viernes 22 de noviembre de 2019, el Coordinador Suplente de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, Magistrado Victor Francisco Mota Cienfuegos, conjuntamente con diversos coordinadores de los precitados Tribunales Colegiados, emitieron el 21 del mismo mes y año, un Aviso de suspensión de labores derivado de la concentración masiva de manifestantes en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, ordenando la suspensión de labores el 22 de noviembre del año en curso, sin que transcurran términos judiciales el precitado día.

Con fundamento en el artículo 181 de la Ley de Amparo; en relación con el auto dictado el 14 de noviembre de 2019, vengo a formular los siguientes:

ALEGATOS

Se deberá negar el amparo y la protección de la justicia federal al peticionario de garantías en virtud de que los estériles argumentos que en vía de conceptos de violación vertió en su escrito de garantías, en nada combaten jurídicamente los razonamientos y fundamentos de derecho esgrimidos en la sentencia de 10 de octubre de 2019, dictada por la Sexta Sala Civil, dentro del toca de apelación [REDACTED]

Más aún, en la forma en la que se hará valer, el peticionario de garantías invoca criterios de jurisprudencia y supuestas violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Ley Suprema SIN SEÑALAR de manera lógica y coherente en qué forma se le transgredieron derechos y garantías.

Los conceptos de violación vertidos por el quejoso no combaten la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, son en sí, argumentos novedosos que [REDACTED] JAMÁS hizo valer; argumentos que en vía de excepción debió haber hecho valer al contestar la demanda, motivo por el cual resultan ineficaces, inoperantes e inatendibles.

Los argumentos vertidos por el quejoso, son tendientes a "justificar" las expresiones insultantes, ofensivas y oprobiosas utilizadas por [REDACTED] en contra del ex gobernador de Coahuila, bajo la bandera de "derecho al ejercicio de la información y libertad de expresión".

Al efecto cabe resaltar que LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO, A LA INJURIA, A LAS EXPRESIONES OFENSIVAS Y OPROBIOSAS.

Luego entonces, el derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases que conllevan un menosprecio personal en un individuo, un ataque mediante el uso de expresiones agraviantes que NO SON TENDIENTES A ARTICULAR UNA OPINIÓN O A INFORMAR, más bien, utilizadas de tal forma que la persona se siente agraviada y afectada en su patrimonio moral.

Sin importar las justificaciones que vierte Sergio Aguayo Quezada en el escrito de garantías, el expresar bajo cualquier contexto que un individuo, tiene un hedor, no es informar, es insultar, lo cual se afirma porque la expresión NO ERA NECESARIA PARA INFORMAR.

Más aún, las expresiones vejatorias utilizadas por el hoy quejoso, contrario a informar, desvían la atención del público que lo escucha y/o que lo lee para concentrarse en la animadversión personal que el comunicador tiene en contra del personaje objeto de su ataque, configurándose la malicia efectiva, en la forma en la que se hará valer en el cuerpo del presente escrito.

[REDACTED] pretende justificar su actuar con el contexto que rodeó a las expresiones insultantes que utilizó, cuando, del análisis que se realiza, se acredita con toda certeza que, las expresiones utilizadas fueron:

- a) Ofensivas y oprobiosas, lo cual se desprende del propio contexto e
- b) Impertinentes para transmitir la noticia y lo que pretendía informar.

Fundamento de lo afirmado es el criterio de jurisprudencia, de la Décima Época, dictado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya voz es del tenor siguiente:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO

El escrito de garantías interpuesto por el quejoso, entre citas de diversos autores y manejo de diversas resoluciones no aplicables al presente caso, pretende ignorar el marco normativo de observancia obligatoria

necesario para realizar un correcto análisis de la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, las cuales al efecto se describen:

- a) Declaración Universal de los Derechos Humanos
- b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- c) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
- d) Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la declaración de principios sobre libertad de expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- e) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- f) Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal
- g) Código Civil vigente en la Ciudad de México

Al efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12, en concordancia con su correlativo contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, establecen de igual manera:

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."

Negritas y cursivas propias

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 11, normaliza la protección que a la honra y a la dignidad se debe observar, debiendo ser objeto de análisis y estudio la protección a la libertad de expresión y pensamiento, contenidos en el artículo 13 del ordenamiento en cita:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

- 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.**
- 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.**
- 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.**
- 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:**
 - a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o**

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela, en principio, los derechos humanos y garantías de los gobernados en su artículo 1º y el patrimonio moral en el 6º:

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado...

Del análisis de precitado precepto se colige que la libertad de expresión conlleva como limite el respeto de los derechos de terceros, debiendo prevalecer en todo tiempo la protección al individuo, en estricta

observancia al principio *pro personae*, lo cual se convalida con el principio contenido en el artículo 7º constitucional, el cual se plasma en la parte conducente:

Artículo 7º Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 60. de esta Constitución...

Al efecto, cabe hacer mención, en concordancia con la Ley Suprema hasta ahora invocada que inclusiva, La Ley de Imprenta invocada por el peticionario de garantías, tiene como límite el respeto a la vida privada.

Finalmente, el artículo 16 de la Carta Magna establece:

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..."

Lo puesto es la base y fundamento para regular la libertad de expresión respetando el patrimonio moral de las personas, el reconocimiento a la dignidad, a la honra, en aras de evitar las injerencias arbitrarias y abusivas en la vida personal, honor y reputación del individuo.

Por lo que hace al derecho a informar y a comunicar, todo gobernado es titular del derecho a ejercer la libertad de expresión e información, lo cual no conlleva afectar moralmente al individuo objeto de la información bajo la premisa de comunicar.

En el caso que nos ocupa, [REDACTED] sobrepasó los límites del derecho a informar y a ejercer la libertad de expresión al haber atacado mordazmente a [REDACTED] cuando este ya ni siquiera era Gobernador de Coahuila imputándoles crímenes que no le fueron acreditados, configurándose la temeraria despreocupación con la que actuó.

Lo afirmado se sustenta con los principios contenidos en los artículos 6º y 7º constitucionales ya transcritos, mismos que establecen límites del derecho a la información y libertad de expresión cuando en su ejercicio se daña y ataca el patrimonio moral de terceras personas, es entonces cuando el agraviado tiene derecho a recibir por parte del Estado, de sus autoridades en todos los ámbitos y de la Ley Suprema, protección amplia.

La normatividad invocada en relación con el análisis que se vierte, y con el criterio de jurisprudencia cuya voz enseguida se verterá, es suficiente para sustentar que se configura el estándar de **MALICIA EFECTIVA**, cometida por [REDACTED] en contra de [REDACTED]

701

██████ no únicamente porque la información fue falsa, sino porque fue difundida con LA INTENCIÓN DE DAÑAR y con absoluta despreocupación, teniendo a la mano, el comunicador los elementos para corroborar lo afirmado sin haberlo hecho, esto es imputarle omisión ante la violación de derechos humanos cuando este ya no era gobernador del Estado de Coahuila.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

██████ en su escrito de garantías pretende justificar su actuar con diversas notas informativas que NO son de su autoría, habida cuenta que de constancias del juicio principal se acredita fehacientemente que las mismas fueron **OBJETADAS POR EL ACCIONANTE, YA QUE POR SÍ MISMAS EXCEDÍAN EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.**

No obstante lo anterior, ██████ pretende justificar y minimizar la gravedad de sus expresiones mordaces con las notas periodísticas formuladas por diversas personas, las cuales no son objeto del debate, habida cuenta que ha quedado acreditado que el lenguaje utilizado por el quejoso NO era necesario para transmitir la noticia, no era necesario que Sergio ██████ afirmara de ██████ **"corrupto, que permitió la violación de derechos humanos, abanderado de la impunidad"** para informar sobre la detención de este en España, más aún que **no justifico de manera alguna sus afirmaciones.**

De la lectura del escrito de garantías interpuesto por ██████ se desprende que pretende que, lo que él llama el derecho a la libertad de expresión e información sea absoluto, sin que al efecto medie respeto alguno por la persona, lo cual se afirma porque las expresiones utilizadas por el comunicador las realizó cuando era noticia la detención en España del tercero interesado.

La argumentación puesta por ██████ en su escrito de garantías, **NO COMBATE LOS CRITERIOS DE DERECHO CON LOS CUALES EL ACTO RECLAMADO LLEGÓ A SU DETERMINACIÓN FINAL**, por el contrario, lo argüido por ██████ lo coloca en el estándar de MALICIA EFECTIVA que acredita que se excedió en su derecho a ejercer la libertad de expresión, prueba de lo anterior, es el siguiente análisis:

██████ es detenido en España por el supuesto delito de lavado de dinero =resaltando que nunca le fue acreditado ni emitido el dictado de una sentencia condenatoria= tocante al motivo de la precitada detención debió haberse pronunciado ██████ en su calidad de comunicador, pero no fue así.

██████ VALIÉNDOSE DE SU CARÁCTER DE COMUNICADOR, APROVECHÓ LA DETENCIÓN DE ██████ EN ESPAÑA PARA HACERLO OBJETO DE ESCARNIO Y **ACTUANDO CON TEMERARIA DESPREOCUPACIÓN Y CON EL DOLO QUE FUE SU DESEO EJERCER, DERIVADO DE LO REPENTINO DE LA NOTICIA,**

7 702

IMPUTÓ DELITOS AL HOY TERCERO INTERESADO QUE NO HABÍAN SIDO OBJETO DE LA DETENCIÓN, A SABER, LA SUPUESTA OMISION ANTE TERRIBLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN COAHUILA, LESIONANDO EN SU DIMENSIÓN OBJETIVA EL HONOR DE [REDACTED] YA QUE [REDACTED] NO ACREDITÓ LO AFIRMADO, MAS AUN INCURRIÓ EN FALSEDAD, lo cual se afirma en virtud de que, de constancias de autos se denota que FUE OMISO EN DEMOSTRAR LO QUE TANTA SEGURIDAD AFIRMÓ.

Derivado de lo anterior se configura la REAL MALICIA ejercida por [REDACTED] quien no únicamente fue omiso en corroborar la información difundida por los medios relativa a los motivos de la detención, aparejadamente REALIZÓ SUS PROPIOS JUICIOS Y CON TOTAL DESPREOCUPACION IMPUTÓ ACTOS DE OMISIÓN AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE [REDACTED] CONFIGURANDOSE LA INTENCION DE DAÑAR, violentando adicionalmente el derecho humano consistente en la presunción de inocencia hasta que se acredite lo contrario.

Las expresiones utilizadas por [REDACTED] fueron emitidas con total despreocupación respecto a la veracidad de lo afirmado y con un dolo eventual que se traduce en la intención de dañar el patrimonio moral de la persona que había sido detenida por las autoridades españolas, pretendiendo justificar su actuar con una serie de publicaciones que en nada le benefician, más aún al ostentarse como ferviente protector de los derechos humanos, en la forma en la que lo hizo valer en su escrito de contestación a la demanda.

CABE RESALTAR QUE EL COMUNICADOR [REDACTED] FUE OMISO EN ACREDITAR EL POR QUÉ, LAS EXPRESIONES INSULTANTES UTILIZADAS CONTRIBUYERON A LA CORRECTA Y EFICAZ DIFUSIÓN DE LA NOTICIA, CONFIGURÁNDOSE QUE FUERON REALIZADAS CON EL ÁNIMO DE DAÑAR LA REPUTACIÓN DE [REDACTED] MOTIVO POR EL CUAL NO DEVIENE PROCEDENTE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SOLICITA.

Las declaraciones expuestas por el demandado sobre mi persona por van más allá del derecho a la información, pues abusa de ésta, bajo la bandera de la libre expresión, cuando el insulto no está tutelado por ninguna ley.

[REDACTED] publicó en medios de difusión masiva, a saber, el Periódico Reforma, El Siglo de Torreón y en su cuenta de Twitter, bajo el título "**Hay que esperar**" lo siguiente:

Los conceptos de violación con los que el quejoso pretende combatir el acto reclamado se centran principalmente en los siguientes supuestos.

i.- Que las declaraciones que hizo fueron en ejercicio de su profesión como periodista y conforme al derecho de la libertad de expresión;

ii.- Que la sentencia que constituye el acto reclamado se carece de una debida fundamentación y motivación toda vez que se aplicó de manera inexacta la ley, pues controversia debe regirse exclusivamente por la Ley Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal

iii.- Finalmente, que diversos comunicadores han externado opiniones similares en contra del suscrito.

Dichos razonamientos son improcedentes para concederle el amparo y protección de la justicia federal, pues contrariamente a lo que sostiene el quejoso el acto reclamado, está debidamente fundado y motivado, pues la autoridad responsable precisa exhaustivamente su razonamiento con apoyo en las normas jurídicas aplicables caso en concreto.

Respecto de lo manifestado por el quejoso en el sentido de que se violentó su derecho a la libertad de expresión analizando las expresiones objeto de la litis, se advierte que son improcedentes los conceptos de violación que expone, pues pretende justificar su proceder con lo que han citado otros comunicadores de mi persona, las cuales no son objeto de debate en el presente juicio, es decir [REDACTED] debe hacerse responsable de sus declaraciones que no son noticia sino insultos en mi contra.

A lo largo de la demanda de garantías, se puede advertir que los conceptos de violación son meras justificaciones del quejoso para no responder por su actuar ilícito, bajo el argumento de que nuestra Carta Magna, contempla del derecho a la libertad de expresión, sin embargo, parece olvidar que esta libertad tiene sus limitantes, pues no reconoce el derecho a la injuria o al insulto.

El quejoso es periodista y su labor fundamental es informar, sin embargo, esa calidad no le da derecho de insultar, ya que las manifestaciones que hace en mi contra transgreden la libertad de expresión.

El uso de la libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión, puede conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la libertad de expresión. En este sentido, es importante enfatizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita**, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas. [REDACTED] insulta e injuria al suscrito, sin informar a la opinión pública, por lo que no puede pedir a ese Tribunal Federal a protección de un derecho que no existe.

Las expresiones del quejoso son insultantes hacia la figura del suscrito, que de ninguna manera pueden ni deben considerarse como información, entendiéndose como esta como dar a conocer algún suceso, hipótesis dentro de la que no se encuadran las expresiones del quejoso.

Consecuentemente, el derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección constitucional, es decir, cuando sean absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que sean: a) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; y, b) impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo manifestado.

Las expresiones del quejoso van más allá del derecho a la información, pues no solo denotan desprecio hacia mi persona sino también a la verdad, lo cual no solo me daña sino también lo hace a la opinión pública nacional, violentando el derecho a la información que todo ciudadano tiene derecho de recibirla en forma ética y sustentada en prácticas leales y confiables.

Tal y como se razona en la sentencia que constituye el acto reclamado las expresiones del quejoso me han ocasionado deshonor, descrédito, mala reputación, perjuicio y me expusieron al desprecio de la sociedad, pues afirma que

desprendo hedor corrupto y que fui en el menor de los casos, omiso ante terribles violaciones de los derechos humanos y abanderado de la renombrada impunidad, sin que exista ninguna resolución que haya condenado por ese concepto, SIN ACLARAR EL POR QUÉ DE DICHAS AFIRMACIONES.

Es infundado, improcedente el juicio de garantías con el que el quejoso pretende combatir el acto reclamado, pues de las pruebas aportadas por el suscrito se acredita que su conducta ha incurrido en una violación a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada el Honor y Propia Imagen en el Distrito Federal hoy Ciudad de México, pues el quejoso ha difundido información a sabiendas de que falsa con el único propósito de dañar al suscrito.

La conducta desplegada por el quejoso contrariamente a lo que se señala se adecúa a los supuestos previstos en los 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, razón por la cual debe confirmarse el acto reclamando y negar el amparo y protección de la justicia federal a [REDACTED]

El quejoso se jacta de ser un defensor [REDACTED] sin embargo no ha respetado los del suscrito los cuales están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, pues ha proferido insultos en mi contra bajo el amparo de la libre expresión y el derecho a la información, cuando precisamente el derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección constitucional, es decir, cuando sean absolutamente vejatorias, entendiéndose como tales las que sean ofensivas u oprobiosas, según el contexto así como impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo manifestado tal y como se sustenta en la siguiente jurisprudencia de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la ley de amparo que más adelante se transcribe. [REDACTED]

Las expresiones del quejoso no son una notificación informativa, sino expresiones insultantes y oprobiosas a título personal, trasgrediendo las mismas leyes con las cuales ahora se quiere proteger.

Son infundados los agravios que hace valer el quejoso, pues la divulgación en internet de un acto ilícito como el que expreso [REDACTED] en la web causa impacto e influencia en nuestra sociedad, pues potencializa la seudo información, incluso a nivel internacional.

La afectación a los derechos como el honor y la reputación por la divulgación en internet de expresiones insultantes que además resultan falsas deben ser sancionados ya que nuestra constitución no tolera el derecho al insulto, razón por la cual debe garantizarse su adecuada protección acudiendo a la aplicación del principio pro homine consagrado en el artículo 1o. constitucional, en virtud del cual puede establecerse una interpretación de la norma más amplia o extensiva, sobre todo tratándose de los citados derechos que se entienden como atributos inherentes a la personalidad del individuo, para lo cual también resulta de gran ayuda la ponderación de las circunstancias presentadas en cada caso, en tanto que no debe olvidarse que la adecuada protección de los derechos en comento abarca el análisis de la divulgación de la conducta que ocasione la afectación respectiva y sus efectos.

205

Es obligación del Estado se respeten los derechos garantizados y se consideran esenciales e inherentes al ser humano derivados de su propia naturaleza, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos y el Estado debe reconocerlos.

Ahora, del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas; aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta.

Son infundados los conceptos de violación que se hace valer, pues conforme a los criterios que a continuación se citan no se protege el derecho al insulto.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO. Si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa. Así pues, no todas las críticas que supuestamente agraven a una persona, grupo, o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal, aunque el uso de la libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión, puede conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la libertad de expresión. En este sentido, es importante enfatizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas. Consecuentemente, el

derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección constitucional, es decir, cuando sean absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que sean: a) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; y, b) impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo manifestado. Respecto del citado contexto, su importancia estriba en que la situación política o social de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia.

DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. CONSTITUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL.

Si conforme a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. Ahora, del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio *pro personae*, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la

salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores - Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano.

DAÑO MORAL. TRATÁNDOSE DE AFECTACIÓN AL HONOR POR ABUSO DE LAS LIBERTADES DE INFORMACIÓN Y DE EXPRESIÓN DEBE ANALIZARSE EL CONTEXTO.

Los artículos 14, 15 y 25 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, incorporan los lineamientos dados por la doctrina y la jurisprudencia extranjera que influyó en su creación. La doctrina destaca de las opiniones emitidas en los medios de comunicación, la subjetividad, excluyente de objetividad y veracidad, en cuya valoración entra en juego su comparación con los hechos con que se relaciona, sin poder abusar del derecho de información y libre expresión, pues ha de atenderse a límites que deben ponderarse cuidadosamente a fin de no coartar aquellas libertades, y son determinados por derechos como el del honor, cuyo respeto marca la frontera que no debe cruzarse, y del cual está excluido el abuso manifestado en un ánimo de injuriar, de ofender sin derecho y sin necesidad. La jurisprudencia proscribe el uso de insultos por atentatorios del honor, pone de relieve la prevalencia del honor como límite frente a las libertades de expresión e información, y añade un elemento que por fuerza debe analizarse para determinar la lesividad de ciertas expresiones: el contexto. Éste es relevante, pues si se producen las palabras o frases en un ambiente de crispación, política o de otro tipo, aumenta la tolerancia ante lo expresado, traduciéndose en una disminución de su aspecto ofensivo; también si se alude sólo a calificativas figuradas, e incluso, potenciales, mediante el empleo de la mordacidad o la ironía. En cambio, si ningún entorno de agresión o exasperación hay al tiempo de emitir las expresiones, no hay necesidad de trocar su cariz maltratador por uno ausente de denuesto, sino estimarlas como ofensas que son, carentes de toda justificación, intolerables y generadoras de daño moral por afectación al honor. En la legislación mexicana invocada, se protege la libertad de expresión y el derecho a la información, con un criterio más o menos laxo, en tanto se toleran manifestaciones molestas e hirientes, juicios desfavorables e imputaciones de hechos o actos apegados a la veracidad, siempre y cuando sean de interés público, pero esa tutela tiene su límite en la expresión de insultos, por ser innecesaria para el ejercicio de aquellas libertades, y se atiende al contexto en que se emiten, aunque sin soportar los juicios que son insultantes per se en cualquier entorno, aunque debe atenderse también a la idiosincrasia nacional, entre cuyos rasgos característicos se encuentra el humor de amplio espectro cromático, del blanco al negro, y se usa en la vida cotidiana y en medios de difusión. Tal peculiaridad conlleva el examen cuidadoso de las manifestaciones que, aparejadas a ese humor, se viertan en publicaciones o programas de

índole cómica, predominante o accesorio, a cargo de personas que ejerzan una actividad de dicha naturaleza a nivel profesional, y que tienden al divertimento del público, pues, en esos supuestos, la tolerancia será mayor que en un entorno carente de comicidad. Por el contrario, la ausencia de esas peculiaridades, en el entorno de emisión de las expresiones que se tachan de insultantes, reducirá la tolerancia hacia éstas. En todo caso, ante la duda sobre la posible afectación al honor por expresiones pretendidamente ofensivas, y proferidas en el contexto de un debate o una polémica en torno a cierto tema, se privilegiará la libertad de expresión. Debe atenderse a esos lineamientos para determinar, en cada caso, si se afectó o no el honor con las expresiones respectivas, cuya emisión deberá estar previamente acreditada, como presupuesto del que parte el análisis de su calificación como injuriosas, insultantes o vejatorias, pues basta comprobar que fueron proferidas las palabras o frases de que se trate para que, previo examen de su calidad atentatoria del honor, se estime demostrado el daño moral generador de responsabilidad civil.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LOS PERIODISTAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL.

La exigencia del artículo 32 del ordenamiento en cuestión de demostrar la negligencia inexcusable del demandado debe entenderse dentro del contexto del concepto de "culpa", al constituir una conducta derivada de la falta de cuidado para verificar si la información difundida infringía o no un derecho de la personalidad. En el caso de la prensa, el criterio subjetivo de imputación hace referencia a la diligencia exigible en el desempeño de la actividad periodística. Ahora bien, es importante destacar que el legislador tomó la decisión de imponer un estándar muy exigente para poder atribuir responsabilidad civil a un profesional del periodismo como una estrategia para evitar las restricciones indirectas a la libertad de expresión. Al requerir que se trate de una negligencia inexcusable del demandado, el legislador pretendió que no cualquier clase de negligencia en el ejercicio de la libertad de expresión pudiera servir para justificar una condena por daño moral. La falta de cuidado tiene que ser de tal magnitud que se considere inexcusable. En consecuencia, si un periodista que difunde información íntima de una persona que considera de interés público instrumentó diversas medidas de diligencia para evitar que esa información pudiera vincularse con la persona, es indudable que dicho periodista no incurrió en negligencia inexcusable en la difusión de esa información. Si bien es posible que esas medidas eventualmente no sean totalmente eficaces, entre otras razones porque el periodista no controla todos los factores que pueden llegar a conducir a la identificación de la persona a la que se refiere la información, no debe atribuirse responsabilidad al periodista porque el estándar exige

709

que su negligencia sea de una magnitud muy considerable.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL NO VULNERA LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE LA GRADACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD.

El título quinto de la ley en comento cumple cabalmente con la doctrina de esta Suprema Corte sobre la gradación de los medios de exigencia de responsabilidad. En este sentido, los artículos 39 y 41 contemplan distintas medidas para reparar el daño causado por el ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, que consisten en la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado o, en su defecto, a través de una indemnización. El propio artículo 41 establece una serie de criterios que deberán ser tomados en cuenta al momento de fijar la indemnización, los cuales permiten precisamente graduar la responsabilidad de la persona en función de las circunstancias concretas en las que se realizó la expresión. Esos criterios incluyen "la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso". En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 41 establece la posibilidad de atenuar la medida reparatoria al permitir al juez "disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo" en los casos en que los sujetos afectados por las expresiones sean servidores públicos. Y por otro lado, el artículo 43 hace posible aumentar el monto de la reparación en casos de reincidencia durante el plazo de un año, al dar la posibilidad al juez de "imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización". Finalmente, hay que destacar que también se prohíben algunas consecuencias que desde la perspectiva del legislador podrían considerarse desproporcionadas. En esta línea, el artículo 40 establece que "[e]n ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas". Mientras que el propio artículo 41 estipula que "en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal". Así, las consideraciones anteriores muestran que la ley no viola la doctrina constitucional de esta Suprema Corte sobre la gradación de medios de exigencia de responsabilidad.

DERECHOS A LA INFORMACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SU PROTECCIÓN INVOLUCRA LO REVELADO RESPECTO DE SERVIDORES PÚBLICOS A PARTIR DE RESPONSABILIDADES POSTERIORES AL DESEMPEÑO DE SU CARGO.

La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, no regula el lapso durante el cual es posible difundir información sobre un servidor público;

por lo cual en ejercicio del control de convencionalidad previsto en los artículos 1o. y 133 del Pacto Federal, se debe atender a lo dispuesto en el precepto 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a su interpretación consignada en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría Especial constituida dentro de la Organización de Estados Americanos (aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000). De ahí que conforme a los principios quinto y décimo primero de dicha declaración, la circunstancia de que se hubiera escrito, editado, impreso y distribuido información relativa al desempeño de un representante estatal de elección popular, a través de la venta de un libro publicado con posterioridad al término de su encargo; no implica que sólo por este último hecho, el nivel de protección a su honor se torne equivalente al de una persona privada. Por el contrario, como el ejercicio de los derechos de información y libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura, pues ello significaría aplicar normas sancionadoras a las manifestaciones molestas dirigidas a los funcionarios públicos (o "leyes de desacato"), incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es a partir de responsabilidades posteriores fijadas por la ley que se hace posible cuestionar su desempeño. En tal sentido, para el caso en comento, continúa limitado el derecho al honor del servidor público aun después de concluido su encargo, siendo conducentes los artículos 28 a 34 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

DERECHOS AL HONOR Y A LA REPUTACIÓN. PROTECCIÓN ADECUADA TRATÁNDOSE DE INFORMACIÓN DIVULGADA AL TRAVÉS DE INTERNET, QUE CAUSA UN DAÑO MORAL. Los citados derechos no comparten las cualidades de intangibilidad, inasibilidad y alojamiento en el fuero interno del individuo, en la misma medida o proporción que otros valores esenciales del individuo, que no solamente derivan de la concepción que de sí mismo tenga la persona, sino que también surgen o dependen de la interacción del sujeto con otros factores externos y de las relaciones que se tengan con otros individuos; de ahí que, incluso, sean susceptibles de probarse con elementos de convicción al encontrarse inmersos en el mundo material. Sin embargo, en el caso de la divulgación en internet de un acto ilícito alegado como causante de daño moral por afectación de esos derechos, debe tomarse en cuenta el impacto e influencia de la web en la sociedad actual, lo cual abarca los ámbitos económico, político y social, generando un nuevo tipo de convivencia o comunicación humana que potencializa la transferencia de información y datos debido a la amplia posibilidad de utilizar los servicios que proporciona, los cuales a su vez, cuentan con la característica de otorgar una alta interconectividad e inmediatez entre quienes la utilizan. Por consiguiente, cuando se plantea la afectación de derechos como el honor y la reputación por la divulgación en internet de datos o información de

una persona que resultan falsos, que no fueron autorizados por el afectado, o bien, no se contaba con su consentimiento, debe garantizarse su adecuada protección acudiendo a la aplicación del principio pro homine consagrado en el artículo 1o. constitucional, en virtud del cual puede establecerse una interpretación de la norma más amplia o extensiva, sobre todo tratándose de los citados derechos que se entienden como atributos inherentes a la personalidad del individuo, para lo cual también resulta de gran ayuda la ponderación de las circunstancias presentadas en cada caso, en tanto que no debe olvidarse que la adecuada protección de los derechos en comento abarca el análisis de la divulgación de la conducta que ocasione la afectación respectiva y sus efectos.

En relación con el segundo de los puntos el quejoso se duele de que la Sala Responsable pretende encontrar un camino con el único fin de revocar la sentencia dictada por el Juez Natural, lo cual es una apreciación incorrecta, pues los agravios expresados en su oportunidad resultaron fundados y eficaces para modificar la sentencia dictada en primera instancia, por lo que la resolución que constituye el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado para condenar el quejoso a las prestaciones reclamadas por el suscrito.

De ninguna manera la Sala responsable resuelve un conflicto entre dos personas ni se desvincula de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución, pues contrariamente a lo que sostiene el quejoso la resolución que combate en juicio de amparo funda y motiva los puntos que fueron objeto del debate.

Expone el quejoso que la Sala responsable tenía la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, es decir, como lo es el derecho a la información, lo cual no le fue violentado, pues lo que pretende es se le permita el abuso a ese derecho al proferir insultos al suscrito que no es una noticia.

En referencia al PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN. -

Se resalta, la omisión del quejoso relativo a justificar en qué forma fueron transgredidos por el acto reclamado los principios consagrados en los artículos que invoca de la Ley Suprema de toda la Unión, descrita en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El quejoso, infundadamente, se duele del estudio que, fundada y motivadamente vierte el acto reclamado, lo cual deviene improcedente ya que es de explorado derecho que toda resolución debe ser clara, precisa y congruente, debiendo pronunciarse respecto a todo lo pedido por las partes.

Concretamente, por lo que hace al dictado de las sentencias, el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles establece que las sentencias deben decidir, adicionalmente a lo ya planteado, respecto a todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

Fundamento de lo anterior, es el criterio de Jurisprudencia, de la Novena Época, bajo el número de Registro 176546, Instancia

Primera Sala, de observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuya voz es del tenor siguiente:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.

Esto es, contrario a lo afirmado por [REDACTED] por conducto de su apoderado, entre las garantías que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la de garantía de audiencia, la cual, tramitado que es el procedimiento en estricto apego a las formalidades esenciales del procedimiento, finaliza con el dictado de una resolución debidamente fundada y motivada que dirime las cuestiones debatidas.

Luego entonces, el juzgador está obligado a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, pronunciarse respecto a la litis fijada por las partes, esto es, la demanda, la contestación, excepciones y defensas, incluyendo las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, en resumida cuenta, todos los puntos litigiosos materia del debate.

En virtud de lo anterior, la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, con fundamento en el artículo 16 constitucional, cumplió con la obligación de fundar y motivar debidamente su determinación, expresando cuidadosamente las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado.

De no haberlo hecho así, dejaría en estado de indefensión a las partes, al no contar con los elementos suficientes para controvertir la resolución que les perjudica, aunado al hecho que toda resolución necesariamente, debe estar investida de la fuerza legal suficiente para sustentar el acto de autoridad.

Por lo que hace a la supremacía constitucional, en términos de su artículo 133, de la lectura la resolución que hoy constituye el acto reclamado, cumple íntegramente con las garantías de debido proceso legal y de legalidad, de notoria obligatoriedad de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas, en respeto a las garantías individuales previstas en la Carta Magna, la debida fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional radica en el análisis exhaustivo de los puntos debatidos que integran la litis, debiendo exponerse con la debida claridad los fundamentos jurídicos que son fundamento de la resolución, exposición de motivos y circunstancias especiales, todo lo necesario para fundar y motivar la emisión del acto.

Lo anterior es suficiente para desvirtuar las afirmaciones del quejoso relativas a lo extenso de la resolución que impugna.

Por lo que hace a que el quejoso se duele de la aplicación de dos ordenamientos en los que concurre la reparación del daño moral, por contener sanciones tanto en el Código Civil en su artículo 1916 como en la Ley De Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, El Honor y La Propia Imagen en el Distrito Federal, pretendiendo justificar su inconformidad con los artículos 1º y 2º transitorios de la precitada ley, se aclara en los siguientes términos.

El artículo primero de la Ley De Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, El Honor y La Propia Imagen en el Distrito Federal, establece textualmente el alcance y finalidad de la misma, reconociendo que, en tratándose de daño al patrimonio moral diverso al que regula el artículo que se analiza, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general en el Distrito Federal, y se inspiran en la protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión.

Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al regulado en el párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

Las sanciones aplicadas al comunicador convergen en el daño moral ocasionado al tercero interesado, por ser de distinta naturaleza y como consecuencia el nivel de reparación también, sin que aquello implique una doble condena.

Al efecto, los artículos transitorios invocados por el quejoso cobran sentido, toda vez que la Ley especial fue creada para dimensionar a una mayor escala el daño moral que contemplaba el artículo 1916 y el 1916 bis del Código Civil, motivos por los cuales deviene inoperante el argumento vertido ya que ninguna afectación le causa la convergencia de la Ley especial y el Código Civil en materia de daño moral y reparación del daño.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- *La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.*

SEGUNDO.- *Se deroga el último párrafo del artículo 1916 y el artículo 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal.*

Obra en perjuicio del quejoso la invocación que hace a la Exposición de motivos de la Ley De Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, El Honor y La Propia Imagen en el Distrito Federal, en virtud de que esta establece y resalta que el derecho a la libertad de expresión e información NO SON UN DERECHO ABSOLUTO, señalando que la propia Convención Americana de Derechos Humanos prevé establecer restricciones a la libertad de expresión, cuyo ejercicio abusivo conlleva responsabilidades, más aún cuando el caso que se dilucida y en el que se acreditó el daño moral ocasionado por [REDACTED] en contra de [REDACTED] NO ESTUVO ORIENTADO A COMUNICAR E INFORMAR, ÚNICAMENTE, a degradar la imagen del ex servidor público.

Deviene ineficaz el primer concepto de violación vertido por el quejoso, ya que ninguno de sus argumentos combate los fundamentos y motivos expresados en la sentencia dictada en segunda instancia en aras de acreditar las supuestas violaciones invocadas en contra de sus derechos humanos fundamentales.

714

Tan es cierto lo afirmado que el quejoso únicamente hizo referencia a una interminable lista de artículos violados de la Ley Suprema, sin verter un solo razonamiento con el que sustente su dicho o la referida vulneración a sus derechos humanos consagrados.

Resulta inoperante el concepto que se combate al no contener razonamiento alguno tendiente a combatir eficientemente, con una lógica jurídica la sentencia que hoy constituye el acto reclamado.

Esto es, el quejoso pretende atribuir al Tribunal AQ QUEM responsabilidad ética profesional en virtud de que le resultó notoriamente contraria a sus intereses la acción intentada.

Esto es, el desenvolvimiento del proceso, planteamiento de la demanda, contestación, excepciones y defensas, objeción de documentos (lo cual no realizó el peticionario de garantías), desahogo de pruebas confesionales, en la cual [REDACTED] reconoció haber externado las expresiones insultantes en contra de [REDACTED] en resumidas cuentas, la secuela procesal estuvo a cargo de las partes, acreditándose en constancias de autos con pleno valor probatorio, que fue respetada la garantía de audiencia de los contendientes salvaguardándose en ambas instancias el principio de igualdad procesal, ya que el comunicador ejerció su derecho para manifestar lo que a su derecho conviniese respecto al Recurso de Apelación interpuesto por [REDACTED] en contra de la sentencia de primera instancia.

La sentencia que hoy constituye el acto reclamado contiene razonamientos jurídicos y de derecho debidamente fundados y motivados con los que sustenta la determinación a la que arribó, por lo cual resultan visiblemente ineficaces por injustificados los argumentos vertidos por el tercero interesado en los que pretende atribuir a la resolutora de segunda instancia responsabilidad, por haberle resultado improcedente y contraria a sus intereses la resolución materia del juicio de garantías en el que se actúa.

Más aún, es un hecho notorio que el acto reclamado apoyó su determinación en las normas jurídicas y procesales que rigen la materia de la apelación, las cuales **NO FUERON EFICIENTEMENTE COMBATIDAS POR EL QUEJOSO**, [REDACTED] en su escrito de garantías.

En virtud de lo anterior, deviene improcedente que el quejoso se limite a invocar violaciones a derechos humanos, que no acredita, cuando de constancias de autos se demuestra fehacientemente las omisiones y deficiencias elementales en las que incurrió el contendiente finalmente generaron el dictado de un fallo adverso a sus intereses, convalidándose que reconoció haber realizado las expresiones insultantes que dañaron el patrimonio moral de [REDACTED]

El escrito de garantías interpuesto por [REDACTED] con una evidente deficiencia argumentativa, se limita a realizar manifestaciones genéricas y abstractas, quejas, presuntamente interrelacionadas con la supuesta falta de ética profesional del AD Quem, doliéndose de no haber obtenido una sentencia favorable a sus intereses, pero carente del mínimo esfuerzo jurídico para combatir eficientemente los razonamientos y criterios de derecho invocados por el acto reclamado con los que arribó a su conclusión final; resaltando, sin que al efecto, [REDACTED] haya puesto de manifiesto ante la potestad jurisdiccional federal que realmente existió una violación a sus derechos fundamentales, vulnerando la esencia misma del Juicio de Amparo, limitándose a

715

realizar manifestaciones genéricas y abstractas, omitiendo impugnar el fondo de la sentencia de 10 de octubre de 2019.

En virtud de lo anterior, en el momento procesal oportuno deberá ser negado el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, [REDACTED], ya que, cabe concluir que ante el planteamiento de los conceptos de violación que realizó, tan deficientemente expresados, el juicio de garantías en el que se actúa no pueda prosperar, en virtud de que los conceptos expresados resultan ineptos e insuficientes para que, con fundamento en ellos se pudiese realizar el examen de la falta de constitucionalidad alegada por el quejoso.

En referencia al SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-

El quejoso, [REDACTED] invoca cuestiones que ya fueron resueltas en el debate de origen, a saber, la calidad del actor, sin combatir la sentencia impugnada.

De la lectura del concepto que se analiza, se desprende que el quejoso pretende continuar litigando el asunto cuya secuela procesal fue debidamente agotada, contemplando las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia y el dictado de sentencias en primera y segunda instancias.

Nuevamente, [REDACTED] es omiso en atacar el fondo de la sentencia, limitándose a invocar diversas publicaciones concernientes al tercero interesado, las cuales NO FUERON OBJETO DEL DEBATE, habida cuenta que dichas publicaciones no le dan derecho a ofender y atacar al hoy tercero interesado, más aún al haber reconocido en la tramitación del juicio principal que realizó expresiones insultantes en contra de [REDACTED]

Esto es, [REDACTED] abusó del derecho que tiene a informar y a comunicar; atacar, agredir, ofender NO ES COMUNICAR, es transgredir derechos humanos consagrados constitucionalmente; en otras palabras, el hoy quejoso al referirse a [REDACTED] afirmó que olía a podrido, "hedor" a corrupción, que en el menor de los casos había sido omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos en Coahuila, esto SIN ACREDITAR SUS AFIRMACIONES, con pleno conocimiento del daño ocasionado al patrimonio moral del tercero interesado.

Los criterios invocados por el quejoso en relación con los débiles argumentos planteados en nada le favorecen, ya que no tienen el suficiente peso jurídico para desvirtuar de manera alguna la sentencia que hoy constituye el acto reclamado; al respecto, carece de toda lógica jurídica que [REDACTED] pretenda justificar su actuar con el artículo 5 de la Ley de Imprenta, deviene inoperante e improcedente la cita que al respecto hace en virtud que es de observancia obligatoria la Ley Suprema de la Unión, descrita en el artículo 133 constitucional en materia de derechos humanos.

En referencia al TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-

El quejoso, [REDACTED] expone argumentos ociosos que pretende convalidar con material probatorio que ilegalmente ofrece, ya que de los lineamientos que establece la Ley de Amparo respecto a la tramitación del Amparo Directo, no está el ofrecimiento de material probatorio alguno.

Al efecto el artículo 178 de la ley de la materia es claro al establecer que deberán ser remitidas al Órgano Colegiado la demanda de amparo, los autos del juicio de origen y constancia de traslados a las partes.

En virtud de lo anterior, en este acto se objetan los documentos y material probatorio ofrecido por [REDACTED] siendo ilegal e inatendible su solicitud relativa a valoración de pruebas, quedando de manifiesto la ventaja procesal que pretende ganar el quejoso.

Sustenta lo anterior el criterio de jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2009203, Segunda Sala, Jurisprudencia, cuya voz y texto es del tenor que se vierte:

MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA PREVIA.

Acorde con el precepto legal citado, se sancionará con multa de 100 a 1000 días a la autoridad responsable que no tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos en la Ley de Amparo las constancias que le sean solicitadas en el juicio constitucional. A su vez, **conforme al artículo 178, fracción III, de la misma ley, la autoridad responsable debe rendir un informe con justificación acompañando la demanda de amparo y los autos del juicio de origen al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para darle oportunidad de defender la legalidad y la constitucionalidad de sus actos y, de esa manera, tener una adecuada defensa en el juicio de amparo.** Sobre tales premisas se concluye que el artículo 260, fracción IV, de la ley referida no viola el derecho humano de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es en dicho informe donde la autoridad responsable puede manifestar lo que a su derecho convenga y expresar las razones que a su juicio justifiquen la dilación en la remisión de la demanda de amparo; es decir, la autoridad responsable no carece de un medio para ser escuchada previamente a la imposición de la multa, toda vez que en el informe indicado puede justificar sus actuaciones.

DEVOLUCIÓN AL QUEJOSO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS EXHIBIDAS CON SU ESCRITO DE AMPARO

En virtud de que el juicio de amparo directo no contempla la exhibición de material probatorio alguno a cargo del peticionario de garantías, con fundamento en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los lineamientos que establece la Ley de Amparo, en tratándose de la tramitación del Juicio de Amparo Directo, **debiendo prevalecer la igualdad procesal entre las partes**, deberá dictarse un auto mediante el cual **se ordene la inmediata devolución de los documentos que en vía de pruebas exhibió [REDACTED] toda vez que dicho material probatorio no puede ni debe incidir en el dictado de la sentencia.**

Los razonamientos vertidos en el presente escrito de Alegatos son suficientes para desvirtuar los argumentos de [REDACTED] debiendo dictarse sentencia en el momento procesal oportuno, mediante el cual se niegue el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso.

Por lo expuesto y fundado,

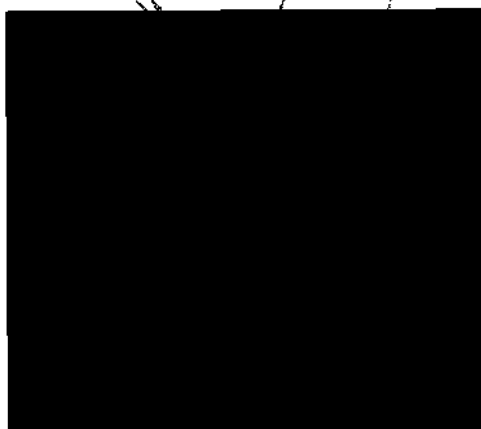
A USTEDES, CC. MAGISTRADOS, respetuosamente, pido se sirvan:

PRIMERO.- Formulando alegatos en contra del escrito de conceptos de violación promovido por el quejoso, [REDACTED]

SEGUNDO.- Solicitando, por igualdad procesal y observancia al procedimiento, **se ordene la inmediata devolución de los documentos que en vía de pruebas exhibió [REDACTED]**, toda vez que dicho material probatorio no puede ni debe incidir en el dictado de la sentencia.

TERCERO.- En el momento procesal oportuno se dicte sentencia mediante la cual se confirme la sentencia recurrida, de 10 de octubre de 2019.

Protesto lo necesario



5-copias del
MEX DIO - R. A. H. E.

manuscrito

QUEJOSO: [REDACTED]

TERCERO INTERESADO: [REDACTED]

AMPARO DIRECTO

EXPEDIENTE: [REDACTED]

**H. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO**

DIGITALIZADO

[REDACTED] con la personalidad que tengo debidamente acreditada en autos del juicio principal, en mi calidad de tercero interesado; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la calle [REDACTED]

[REDACTED] autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en Derecho [REDACTED] con cédula profesional [REDACTED]

[REDACTED]; [REDACTED] con cédula profesional [REDACTED]

[REDACTED] con cédula profesional [REDACTED] autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos, tomar fotografías y recibir toda clase de documentos a [REDACTED]

[REDACTED] indistintamente, respetuosamente expongo:

PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO ADHESIVO

El 15 de noviembre de 2019 se publicó por listas del poder judicial federal el auto de 14 de noviembre de 2019, el cual tuvo por admitido el juicio de garantías en el que se actúa. Surtiendo todos sus efectos legales el 19 del mes y años precitados, mediando los días inhábiles 16, 17 y 18.

El término de quince días otorgado para promover amparo adhesivo corre del 21 de noviembre al 12 de diciembre, ambos de 2019, mediando los días inhábiles y en los cuales no corrieron términos, los que se describen en estricto apego al artículo 19 de la Ley de Amparo: 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 y 30 de noviembre 1º, 7 y 8 de diciembre, todos de 2019.

En referencia al viernes 22 de noviembre de 2019, el Coordinador Suplente de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, Magistrado Victor Francisco Mota Cienfuegos, conjuntamente con diversos coordinadores de los precitados Tribunales Colegiados, emitieron el 21 del mismo mes y año, un Aviso de suspensión de labores derivado de la concentración masiva de manifestantes en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, ordenando la suspensión de labores el 22 de noviembre del año en curso, sin que transcurran términos judiciales el precitado día.

Con fundamento en el artículo 182, fracción I de la Ley de Amparo, el suscrito vengo a interponer AMPARO ADHESIVO tendiente a fortalecer las consideraciones vertidas por la resolución dictada el 10 de octubre de 2019, pronunciada por la H. Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, dentro del número de toca: [REDACTED] las cuales consideraciones determinaron los resolutivos favorables a los intereses del suscrito.

**CONCEPTOS DE VIOLACION
PRIMER CONCEPTO DE VIOLACION**

Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los que se fortalecerán las consideraciones vertidas en la

resolución dictada el 10 de octubre de 2019, la cual hoy constituye el acto reclamado: Los artículos 1º, 6, 7, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los criterios de jurisprudencia que al efecto se vierten y sus correspondientes ejecutorias, las cuales son fundamento para las consideraciones que se vierten.

El concepto que se desarrolla tiene por objeto robustecer los razonamientos vertidos por la sentencia dictada el 10 de octubre de 2019, dentro del toca de apelación [REDACTED] por la Sexta Sala Civil, mediante la cual se configuró el daño moral ocasionado por [REDACTED] en contra de [REDACTED]

La sentencia emitida por la H. Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictada en la toca de apelación [REDACTED] resuelve fundados los agravios hechos valer por el suscrito, determinando lo siguiente:

La sentencia que constituye el acto reclamado **se encuentra ajustada y apegada a derecho**, pues los razonamientos que vierte el Tribunal Ad quem para declarar procedente la acción intentada por el suscrito es acorde a los **principios de exhaustividad y congruencia que toda resolución debe contener**, pues las consideraciones expuestas por la Sala responsable para declarar fundados los agravios son acertadas exponiendo jurídicamente porque las declaraciones de [REDACTED] van más allá del derecho a la libertad de expresión e información, configurándose la real malicia o malicia efectiva.

La sentencia dictada por la autoridad responsable analiza pormenorizadamente el alcance de las declaraciones de [REDACTED] [REDACTED] los cuales denotan desprecio hacia mi persona y hacia la verdad.

Se robustecerán, adicionalmente las siguientes consideraciones, en aras de que se confirme la sentencia impugnada:

Que las imputaciones y calificaciones utilizadas por [REDACTED] carecen de protección constitucional.

Que el ejercicio de la libertad de expresión e información conlleva límites y responsabilidad.

Que las imputaciones y expresiones insultantes realizadas por [REDACTED] en las notas de su autoría y el contexto vertido, configuran la malicia efectiva, al reunir los requisitos que para ello establece la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

Se fortalecerán las consideraciones vertidas por el acto reclamado mediante las cuales expone de manera contundente la razón por la cual el hoy quejoso [REDACTED] va más allá del límite a la libertad de expresión y de la información, pues sus declaraciones son causantes de daño moral, ya que conllevan malicia efectiva.

Los razonamientos que se vierten en el presente amparo adhesivo en relación con los criterios de jurisprudencia que se invocan, de observancia obligatoria, vienen a fortalecer las consideraciones de la sentencia

dictada por la Sexta Sala Civil, las cuales deberán subsistir por estar apegadas a derecho en todas sus partes.

Aunado a lo anterior la Sala Responsable fundamenta su resolución en los tratados internacionales de los cuales nuestro Estado forma parte como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos y El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

La Libertad de expresión, está consagrada en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que la manifestación de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, **sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros.**

Así mismo dicho precepto constitucional señala toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión

Que las imputaciones realizadas por [REDACTED] a manera de hechos no controvertidos violaron la verdad y derechos de terceros, trasgrediendo el derecho del público a recibir información veraz y oportuna, **al formular imputaciones que posteriormente no pudo sustentar**, acreditándose la malicia efectiva, la intención de dañar y una negligencia inexcusable.

Se robustecerá también que la libertad de expresión tiene limitantes, pues esta debe ejercerse dentro del marco legal y **respetando en todo momento la ética de la profesión y sus limitantes a la libertad de expresión, en cuanto se contrapongan violando derechos de terceros.**

De lo anterior se coligue que la libertad de expresión no permite el derecho de formular imputaciones a una persona de sobre situaciones falsas que tienen a dañar su honor.

Las declaraciones vertidas por [REDACTED] bajo el título "*Hay que esperar*" trasgreden el derecho a libertad de expresión, ya que dichas manifestaciones no son más que una serie de insultos y opiniones personales del quejoso, fuera del marco legal y del periodismo veraz.

Las declaraciones vertidas por [REDACTED] violentan el derecho a la libertad de expresión, además de que carecen de veracidad aunado a que los insultos son innecesarios para el ejercicio de aquellas libertades.

El trabajo de [REDACTED] como periodista es informar, pero dentro del marco legal lo cual no le da el derecho a insultar, agredir, injuriar, ya que la libertad de expresión precisamente impone esas limitantes.

El uso de la libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión, es una conducta que debe y tiene que ser sancionada, pues resulta violatoria del artículo 6º de nuestra Carta Magna, pues dicho precepto legal no reconocer el derecho al insulto.

Las expresiones [REDACTED] son insultantes hacia la figura del suscrito, pues no son noticia ni tampoco da a conocer ningún suceso, ya que se limita a emitir opiniones que van más allá del derecho a la información, denotando desprecio hacia mi persona.

Las expresiones de [REDACTED] no son derecho a la libertad de expresión, pues me expusieron al desprecio de la sociedad, pues afirma que desprendo hedor corrupto y que soy omiso ante la violación de los derechos humanos, dicho de otra manera que afirma apesto a corrupción.

No es libertad de expresión el uso de insultos atentatorios del honor, pues el propio artículo 6º de la Constitución pone un límite a las libertades de expresión e información e impide la lesividad de ciertas expresiones cuyo objeto sean el ataque al honor de las personas.

La conducta de [REDACTED] no debe considerarse como derecho a la libertad de expresión y a la información, sino como opiniones personales oprobiosas con la única finalidad de dañar y desprestigiar la imagen del suscrito al señalarme como violador de derechos humanos, sin que aporte ningún elemento de prueba que acredite esa calidad, aunado al hecho de que ejerció su derecho a "informar" divulgando hechos oprobiosos en mi contra como es el hecho que fui omiso ante terribles violaciones a derechos humanos, sin acreditar lo afirmado, más aún, durante la tramitación del juicio, el suscrito comprobé que las imputaciones que el quejoso realizó en mi contra eran falsas, lo cual evidencio con la prueba superveniente que corre agregada en autos del juicio principal, debidamente ofrecida y admitida:

El 16 de julio de 2016, [REDACTED] publicó en su página de internet, con dirección electrónica [REDACTED] el siguiente texto:

"... estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011 (los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300). ÉL [REDACTED] era gobernador en ese momento..."

Nada más falso: es sabido y un hecho notorio que el mandato como Gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a cargo de [REDACTED] concluyó el 4 de enero de 2011, meses antes de los lamentables hechos ocurridos en Allende, Coahuila, los cuales ocurrieron en marzo de 2011.

[REDACTED] me imputó omisión ante terribles violaciones a derechos humanos que NUNCA ACREDITÓ, NI SUSTENTÓ CON MATERIAL PROBATORIO ALGUNO, con notoria negligencia y temeridad.

[REDACTED] dice ser un defensor de los derechos humanos, sin embargo no respeta los del suscrito los cuales están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, pues ha proferido insultos en mi contra bajo el amparo de la libre expresión y el derecho a la información, cuando precisamente el derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección constitucional, es decir, cuando sean absolutamente

222

vejatorias, entendiéndose como tales las que sean ofensivas, según el contexto así como impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo manifestado.

En virtud de que las declaraciones vertidas por [REDACTED] exceden los límites del derecho a la información en términos de lo dispuesto por el artículo 1916 del Código Civil es que procede la aplicación de una sanción y hacer responsable civilmente a quien ejerce más allá su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, que ataque a sus semejantes, produciendo una afectación en su persona, sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, hipótesis dentro de la cual se encuadra la conducta de [REDACTED]

El mismo [REDACTED] reconoce que se excedió en sus declaraciones respecto al suscrito pues quiere acogerse al tope que establece la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, respecto de la sanción pecuniaria que contempla dicho cuerpo de leyes.

La sentencia que constituye el acto reclamado en concordancia con lo previsto en el artículo 63.1 del Pacto de San José señala que cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo que si ello fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, en razón de lo anterior resulta inconstitucionales los artículos 31, 39 y 41 de la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, toda vez que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la convención americana sobre derechos humanos y también el artículo 1 constitucional, toda vez que el tope máximo previsto por dicha legislación permite limitaciones irracionales al derecho de ser indemnizado de manera integral, por lo que en esa tesitura, es obligación del Estado se respeten los derechos garantizados y se consideran esenciales e inherentes al ser humano derivados de su propia naturaleza, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular.

La afectación a los derechos como el honor y la reputación por la divulgación en internet de expresiones insultantes que además resultan falsas deben ser sancionados ya que nuestra constitución no tolera el derecho al insulto, razón por la cual debe garantizarse su adecuada protección acudiendo a la aplicación del principio pro homine consagrado en el artículo 1o. constitucional.

Del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio *pro personae*, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar

las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta.

Ahora bien la sentencia que constituye el acto reclamado analiza la vinculación que existe ente la libertad de expresión y la llamada teoría de la "real malicia" o "malicia efectiva", como se ha expuesto con anterioridad la libre expresión es un derecho fundamental pero también es un derecho limitado, posee límites concretos, ya sean internos o externos, los primeros se relacionan con la obligación sustancial de brindar información veraz, cierta, evitando el error y la falsedad, los límites externos en cambio se relacionan a la inevitable y quizás necesaria colisión de la libertad de expresión con otros derechos subjetivos.

[REDACTED] se extralimito en su derecho a la información pues además de proferir insultos al suscrito faltó a la verdad al proporcionar información falsa, violentando con ello el orden constitucional.

La libertad de expresión, no debe tolerar la falsedad amparada bajo la libertad de expresión, pues sería como tolerar una conducta ilícita como en la que incurrió [REDACTED] y atentar en contra del orden jurídico.

Las declaraciones de [REDACTED] constituyen una ofensa que atenta contra un derecho protegido por la Constitución.

Las declaraciones bajo el título "Hay que esperar" constituyen una ofensa que excede los límites a la libre expresión que están institucionalizados, pues nuestra máxima ley no los tolera pues son actos que tienen efectos punitivos contra abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, que ningún modo esto puede confundirse con algún tipo de censura como lo pretende hacer creer el quejoso.

El suscrito soy un apasionado de la libertad de expresión y de la labor periodística pero siempre defenderé los derechos lesionados y difamados por una noticia falsa, lesiva o abusiva, para dañar el honor, consideración pública o intimidad, por lo que en este sentido corresponde a [REDACTED] probar que sus declaraciones no fueron con malicia, es decir que no actuó con dolo o culpa grave, lo cual en el caso concreto resulta jurídicamente imposible, pues de las pruebas ofrecidas por el hoy quejoso, ninguna justifica su actuar, razón por la cual se configura la malicia efectiva, resultando apegada a Derecho la sentencia dictada por la Sala Responsable, por lo que en su oportunidad deberá negarse la protección constitucional que solicita el quejoso.

Se configura la malicia efectiva pues las declaraciones de [REDACTED] difundidas en los medios de comunicación masiva no se demostró que fueran ciertas acreditándose la falsead

de la noticia, luego entonces que fue difundida con conocimiento de su falsedad, pues el quejoso por su calidad de periodista está obligado a informar con veracidad.

Se reitera que las expresiones difundidas por [REDACTED] contienen hechos falsos cuyo contenido lesiona el honor, prestigio, recato e intimidad del suscrito, por lo que esta autoridad federal debe negar la protección constitucional, pues contrariamente a lo que sostiene el quejoso, dista de ser labor periodística, pues dichas expresiones fueron difundidas a sabiendas de que eran falsas, pues durante la secuela procesal, el hoy quejoso no acreditó lo contrario.

Tal y como en su oportunidad se acreditó el suscrito demostró que [REDACTED] actuó con real malicia, es decir, dolo, intención manifiesta, negligencia o culpa al difundir una noticia a sabiendas de su falsedad con la intención de dañar la imagen y prestigio del suscrito.

Como ha quedado expresado en líneas anteriores la intromisión indebida en el ámbito privado no se relaciona a un contenido de verdad o falsedad, pero cuando la noticia es inexacta o falsa el ejercicio del derecho de informar constituye un ejercicio abusivo porque choca con el límite interno de la libertad de expresión, límite interno que debe contemplar lo antes dicho sobre el elemento objetivo de vinculación de la noticia con el contenido de la verdad, es decir la actitud de [REDACTED] sobre el contenido de verdad de lo informado o publicado.

Por ello, la "real malicia", supone la exigencia de un factor de atribución de responsabilidad específica vinculado al aspecto subjetivo del límite interno de la libertad de expresión y en tanto se refiera a límites externos integrantes de aspectos del honor, recato, prestigio y desempeño de sujetos públicos o funcionarios públicos en ocasión de actos públicos o de interés público.

[REDACTED] no actuó con diligencia no obstante que desenvuelve en el ámbito periodístico, lo que no lleva a considerar que conocía y tenía a su alcance acceso a los archivos periodísticos, entrevistas, y todo otro material, acerca de que si era o no violador de derechos humanos y que apestaba a corrupción y no obstante ello lo afirmó, sin que haya aportado elementos para probar la verdad del contenido de la noticia que difundió, por lo que estamos en presencia de la malicia efectiva, ya que no actuó con diligencia.

La Sala responsable observo en el fallo reclamado el tema sobre la libertad de expresión, que los límites de la crítica pueden ser más amplios si se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas están expuestas a un riguroso control de sus actividades, sin embargo no justifica el insulto, difundiéndolo como noticia.

No forman opinión las declaraciones de [REDACTED] bajo el título "Hay que esperar" lo que crean es descrédito hacia el suscrito, razón por la cual se acredita la malicia efectiva, ya que se difundió una noticia a sabiendas de su falsedad, sin la menor preocupación con la única finalidad de dañarme.

En consonancia con lo anterior, es acertada la sanción impuesta a [REDACTED] por difundir información de interés público, que no puede depender solamente de que sea verdadera o falsa sino que

se acreditó que fue publicada a sabiendas de su falsedad, sin tomar ningún tipo de diligencia en su recopilación o análisis lo cual evidencia una despreocupación y desinterés total por la información y sus efectos, y que, en torno a nivel de negligencia del informador se acredita la malicia efectiva ya que no se trató de un simple descuido, pues el propio quejoso se ufana de ser una gran periodista, además de tener a su alcance todos los medios que le permitieran autenticar su información.

Se sostiene que existe malicia efectiva porque existe un dolo eventual lo cual presupone las existencia de elementos objetivos que permiten acreditar que [REDACTED] tenía conocimiento sobre la inexactitud de la información difundida y estaba plenamente consciente de ella, por los recursos para verificar de manera inmediata y sin mayor esfuerzo aquella inexactitud y sin embargo a pesar de ese estado de conciencia decide exteriorizar su opinión en medios masivos de comunicación obrando de forma temeraria y mal intencionada.

En ese sentido puede afirmarse que existe dolo eventual y consecuentemente malicia efectiva al publicarse un artículo que puede ser verificado, faltado con ello a la verdad, al suscrito y a la ciudadanía en general.

De esta forma el suscrito fui afectado en mi patrimonio moral resultado procedente una reparación civil la acreditarse que la información fue difundida a sabiendas *i.-* de su falsedad, *ii.-* que fue difundida con total despreocupación y *iii.-* que se hizo con el único propósito de dañar.

En ese orden de ideas no asiste la razón al hoy quejoso [REDACTED] para obtener la protección de la justicia federal al configurarse las tres fracciones del artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada y la Propia Imagen en la Ciudad de México, sin que sea necesario acreditar conjuntamente los tres.

Lo anterior porque como ya se ha expresado la Primera Sala de nuestro máximo tribunal la definió claramente que para que se actualice los supuestos de la malicia efectiva se requiere acreditar que el demandado tenía conocimiento de que la información era inexacta o la menos duda sobre su veracidad y una total despreocupación por verificarla, pues solo así puede acreditarse la intención de dañar.

[REDACTED] era consciente de la inexactitud de hechos difundidos pero ello no le importó, a pesar de tener todos los elementos a su alcance, razón por la cual debe negarse el amparo y protección de la justicia federal.

Los razonamientos expuestos son suficientes para confirmar la sentencia que hoy constituye el acto reclamado y que declaró procedente la acción intentada por el suscrito.

SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACION

Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los que se fortalecerán las consideraciones vertidas en la resolución dictada el 10 de octubre de 2019, la cual hoy constituye el acto reclamado: Los artículos 1º, 6, 7, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; en relación con los criterios de jurisprudencia que al efecto se vierten y sus correspondientes ejecutorias, las cuales son fundamento para las consideraciones que se vierten.

Los razonamientos que se desarrollan robustecen lo afirmado por la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, a saber, que el quejoso, [REDACTED] en abuso a la libertad de información y expresión, incurrió en el estándar de malicia efectiva o real malicia, derivado de mal uso que dio a su derecho para ejercer la información y a la libertad de expresión, acreditándose la procedencia de la condena.

Se robustecerán, adicionalmente las siguientes consideraciones, en aras de que se confirme la sentencia impugnada:

Que las imputaciones y calificaciones utilizadas por [REDACTED] carecen de protección constitucional.

Que el ejercicio de la libertad de expresión e información conlleva límites y responsabilidad.

Que las imputaciones y expresiones insultantes realizadas por [REDACTED] en las notas de su autoría y el contexto vertido, configuran la malicia efectiva, al reunir los requisitos que para ello establece la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

Se fortalecerán las consideraciones vertidas por el acto reclamado mediante las cuales expone de manera contundente la razón por la cual el hoy quejoso [REDACTED] va más allá del límite a la libertad de expresión y de la información, pues sus declaraciones son causantes de daño moral, ya que conllevan malicia efectiva.

Los razonamientos que se vierten en el presente amparo adhesivo en relación con los criterios de jurisprudencia que se invocan, de observancia obligatoria, vienen a fortalecer las consideraciones de la sentencia dictada por la Sexta Sala Civil, las cuales deberán subsistir por estar apegadas a derecho en todas sus partes.

El Amparo Adhesivo que se promueve tiene como base el criterio de Jurisprudencia y su correspondiente ejecutoria, de la Primera Sala, bajo el número de registro 2020798, publicada el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre de 2019, cuya voz es del tenor siguiente:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

Primigeniamente se describen los derechos en pugna y al efecto se vierten:

- a) El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información;
- b) El derecho al honor del individuo

727

Para una mayor comprensión cabe diferenciar lo siguiente:

Que el derecho a la libertad de expresión versa sobre opiniones, juicios de valor, pensamientos e ideas;

El derecho a la información comprende el derecho a difundir HECHOS QUE SON NOTICIA, que pueden y deben ser verificables, motivo por el cual el estándar de malicia efectiva se configura cuando se ejerce con negligencia inexcusable, con temeridad relativa a difundir como hechos indubitables cuestiones que no son ciertas y absolutamente verificables.

Aclarado que fue lo anterior, continuando con el análisis de los derechos en pugna, ambos están regulados en los artículos 6º y 7º de nuestra Carta Magna.

El artículo 6º constitucional establece que la manifestación de ideas, no será objeto de inquisición judicial alguna, únicamente en el caso de que ataque la moral, vida privada o los derechos de terceras personas.

El 11 de junio de 2013, fue adicionado el párrafo que otorga al individuo el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información.

El artículo 7º refiere el derecho a la libertad de expresión, la cual es inviolable e irrestringible, sin más límites que los previstos en el primer párrafo del precitado artículo 6º.

Ahora bien, si bien es cierto, la libre manifestación goza de protección constitucional, existe una marcada diferenciación entre la libertad y el libertinaje utilizado por quienes se ostentan como profesionales de la comunicación, habida cuenta que todo privilegio (comunicar y transmitir la información) conlleva un importante grado de responsabilidad.

Esto es, el Estado Mexicano Democrático protege el derecho a la información, a la libre circulación de ideas, opiniones y puntos de vista, promueve constitucionalmente la difusión de hechos y noticia, vigilando que no sea coartado el derecho a transmitir y/o recibir información, máxime en tratándose de hechos y acontecimientos que involucran a la sociedad mexicana.

No obstante lo anterior, dicha protección no comprende la inexacta e inoportuna transmisión de supuestos hechos no corroborados y sin sustento; mucho menos que, quien se dice ser "profesional del periodismo" vierta información con temeraria despreocupación y con el único ánimo de causar daño a la persona sobre la cual versa la noticia.

Son objeto de análisis riguroso los requisitos que debe reunir el derecho a la información que protege la Constitución, a saber:

Debe ser veraz e imparcial.

La veracidad e imparcialidad constituyen los límites que conlleva el derecho a informar, el derecho a la información; el dicho impertinente de quien se dice comunicador de ninguna manera está protegido constitucionalmente, ya que tiene un efecto negativo en la vida de las personas implicadas en la "noticia".

728

Con dicho antecedente, se acredita que [REDACTED] al "informar" realizó graves imputaciones en contra de [REDACTED] con absoluta falta de un razonable ejercicio de investigación y comprobación, a fin de determinar si lo difundido tenía o no, sustento en la realidad, a saber, que [REDACTED] tuvo responsabilidad en los lamentables hechos ocurridos en marzo de 2011, en Allende, Coahuila.

El 16 de julio de 2016, [REDACTED] publicó en su página de internet, con dirección electrónica <http://www.sergioaguayo.org/index.php/la-demanda-de-humberto-moreira>, el siguiente texto:

"... estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011 (los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300). Él [REDACTED] era gobernador en ese momento..."

Nada más falso: es sabido y un hecho notorio que el mandato como Gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a cargo de [REDACTED] concluyó el 4 de enero de 2011, meses antes de los lamentables hechos ocurridos en Allende, Coahuila, los cuales ocurrieron en marzo de 2011.

Acreditándose que [REDACTED] INCURRIÓ EN EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA al no justificar de manera alguna sus afirmaciones, difundiendo información a sabiendas de su falsedad, con la clara intención de dañar la imagen y patrimonio moral de [REDACTED] configurándose el dolo con el que actuó, la animadversión que siente por este y el exceso en el derecho a informar, al haber divulgado como hechos ciertos e indubitables, situaciones falsas.

Señalado lo anterior se robustece el análisis que el acto reclamado realizó relativo al estándar de la malicia efectiva, contenido en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, la cual establece la pauta para las figuras públicas que se sienten afectadas en su patrimonio moral, debiendo acreditar lo siguiente:

- a) Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad
- b) La información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa o no; y
- c) Que se realizó con el único propósito de dañar

Se procede a su análisis y debida acreditación de la malicia efectiva que en el presente caso se configura, cometida por [REDACTED]

- a) Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad

"que en el mejor de los escenarios fue omiso [REDACTED] ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ...".

Al efecto y para mayor precisión, se resalta que [REDACTED] ACTUÓ CON PLENO CONOCIMIENTO RELATIVO A QUE ESTABA DIFUNDIENDO INFORMACIÓN NO CORROBORADA EN CARÁCTER DE HECHO INDUBITABLE, propasando su derecho a la información y configurándose el estándar de malicia efectiva.

Esto es, [REDACTED] derivado del carácter de comunicador e investigador con los que se ostenta, está en la obligación de respetar el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, salvaguardado constitucionalmente, en el artículo 6º, debiendo difundir información veraz, lo cual se aclara:

El derecho a la libertad de expresión asequible a todo gobernado comprende la transmisión de ideas, puntos de vista, opiniones personales, juicios de valor y pensamientos.

Por otro lado, configurándose la malicia efectiva cometida por [REDACTED] el derecho a la información comprende el derecho a difundir HECHOS QUE SON NOTICIA, que pueden y deben ser verificables.

La real malicia se configura en el presente caso, al haber sido publicado por [REDACTED] a sabiendas de su falsedad y con toda la intención de dañar la imagen, honor y patrimonio de [REDACTED] que este había sido omiso ante terribles violaciones a derechos humanos.

[REDACTED] dolosamente y sin fundamento, imputó a [REDACTED] omisión ante terribles violaciones a los derechos humanos en el Estado de Coahuila, sin contar con el debido fundamento que sustentara dicha imputación, motivo por el cual, el estándar de malicia efectiva se configura, ya que el derecho a la información ejercida por el comunicador e investigador fue realizado con absoluta negligencia inexcusable.

El investigador, [REDACTED] actuó con una temeraria despreocupación al haber realizado las imputaciones realizadas en contra de [REDACTED], con la única intención de dañarlo y sin que tuviera la intención alguna de acreditar lo afirmado.

El impresionante currículo que ostenta el quejoso, [REDACTED] en su escrito inicial de contestación a la demanda confirma que actuó con toda la intención de dañar el honor, nombre, reputación y patrimonio moral de [REDACTED] ya que el estándar intelectual y académico que maneja le permite realizar ejercicios de investigación para comunicar hechos veraces y comprobables.

[REDACTED] se ostenta como una persona que cuenta con un elevado nivel de educación superior, que actualmente participa y ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, motivo por el cual es claramente ostensible que no puede invocar ignorancia alguna relativa a la falsedad de las imputaciones que realizó en contra de [REDACTED] como si de hechos indubitables se tratase.

[REDACTED] presume contar con la producción intelectual, la cual inició profesionalmente a partir del año 1977 a 2016, que de manera enunciativa, más no limitativa, se vierte:

PRODUCCIÓN INTELECTUAL

• Libros publicados	30
<i>Traducidos al inglés</i>	5
<i>Traducido al holandés</i>	1
• Monografías	18
• Artículos académicos o capítulos de libro	96
<i>Traducidos a otro idioma</i>	14
• Cursos impartidos	48
• Participación en Tesis	31
• Participación en congresos, seminarios y conferencias	609
<i>En México</i>	448
<i>En el extranjero</i>	161

FORMACIÓN ACADÉMICA

1987 – 1988

Estadía posdoctoral en la Universidad John Hopkins (Washington D.C.) en materia de investigaciones.

1977 – 1984

Doctorado en Relaciones Internacionales. Escuela de Altos Estudios Internacionales de la Universidad John Hopkins, con distinción en el proyecto de tesis.

1975- 1977

Maestría en Relaciones Internacionales. Escuela de Altos Estudios Internacionales de la Universidad John Hopkins

1971 – 1975

Licenciatura en Relaciones Internacionales. En el Colegio de México.

Idiomas: Español, inglés, italiano y lectura en francés.

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

De diversas vertientes, entre las que se incluyen, **únicamente**, en materia de derechos humanos, no menos de sesenta, las cuales comprenden libros y artículos académicas, propias y en coautoría.

En alcance al currículo que ostenta [REDACTED], **quien no puede argumentar un desconocimiento en materia de investigación, se configura la negligencia inexcusable, la "temeraria despreocupación", con la actuó al haber imputado sin sustento alguno, a [REDACTED] omisión ante terribles violaciones de derechos humanos, acreditándose la intención de dañar.** Se explica:

Al efecto, es de correcta aplicación el criterio de Jurisprudencia, Décima Época, con número de Registro 2003303, Primera Sala, cuya voz es del tenor siguiente:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA

El criterio que se vierte sostiene que, en tratándose de personas que se dedican a actividades públicas, el nivel de intromisión es mayor y los límites de crítica, más amplios, consideraciones que no son motivo de disenso.

Sostiene, adicionalmente, que la principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como "real malicia" o "malicia efectiva"; incorporada al ordenamiento jurídico mexicano, contenida en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México

La doctrina de malicia efectiva contempla la imposición de sanciones civiles, **única y exclusivamente para el caso en el que se difunda información falsa, no acreditada cuando se ejerce el derecho a la información, con la intención de dañar, al haber transmitido una noticia en carácter de hecho indubitable, esto es, con "real malicia".**

La nota publicada por [REDACTED] intitulada "*Hay que esperar*" y su contexto, son las pruebas idóneas para acreditar la intención de dañar la reputación, honor, imagen, en general el patrimonio moral de [REDACTED]

Del análisis que se realiza sobre el artículo autoría del quejoso, intitulado "*Hay que esperar*", se determina con toda certeza que el comunicador, [REDACTED] realizó fuertes afirmaciones y opiniones en contra de [REDACTED], dándoles la tesitura de información indubitable, afectando el patrimonio moral del hoy tercero interesado, configurándose el estándar de malicia efectiva.

[REDACTED] utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, haciendo uso de la libertad de información, formuló declaraciones en contra de [REDACTED] OTORGANDOLES EL CARÁCTER DE INFORMACIÓN INDUBITADA, INEQUIVOCA E INFALIBLE, afirmando sin sustento alguno y sin material de comprobación, que, en el mejor de los escenarios [REDACTED] había sido omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila.

El 20 de enero de 2016, [REDACTED] pretendida y parcialmente, con el solo ánimo de causar un daño, "transmitió la noticia" relativa a la detención de [REDACTED]

De la lectura del artículo intitulado "*Hay que esperar*", publicado en el diario "Reforma"®; en el diario el "Siglo de Torreón"®, así como la expresión pública que realizó en su cuenta de Twitter®, todos en la precitada fecha 20 de enero de 2016, la cual es y continua siendo reproducida republicada en cientos de ocasiones, se acredita que [REDACTED] realizó las declaraciones que se transcriben:

El Siglo de Torreón, edición impresa y disponible para su ulterior consulta en la página: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1189808.hay-que-esperar.html>

Noticia publicada en EDITORIAL de El Siglo de Torreón el miércoles 20 de enero de 2016, 8:04am

'Hay que esperar'

[REDACTED] se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que **con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos.**

Luego de la detención, el viernes 8 de enero, de "El Chapo" Guzmán, la canciller Claudia Ruiz Massieu alabó, ante embajadores y cónsules, el mensaje de la #MisiónCumplida del presidente eufórico; además, le informó al presidente que los ahí reunidos estaban "listos para llevar a todos los rincones del mundo" la "visión que usted nos inspira a transmitir" y que incluía el "Estado de Derecho" y las "instituciones sólidas".

El viernes 15 del mismo mes **[REDACTED]** fue detenido y encarcelado en Madrid. El golpe, brutal, resucitó el corrosivo juicio del New York Times en su editorial de principios de año: Peña Nieto "será recordado" como el "jefe de gobierno que evitó rendir cuentas". La detención también revolcó la respuesta del coordinador de Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia, Paulo Carreño King, al mismo diario. No hay forma de creerle que el gobierno "trabaja en la mejoría del Sistema Nacional de Anticorrupción".

El Auto judicial tiene la sequedad y aridez de la meseta castellana. Según el documento (tengo copia), en 2013 **[REDACTED]** recibió de empresas mexicanas 199,079.48 euros. La autoridad sospechó y en marzo de 2014 iniciaron las pesquisas que llevaron a su arresto por los "delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho". De ser condenado, se pasará once años en la prisión. **Como el caso que se lleva en Estados Unidos es independiente del de Madrid, [REDACTED] dará tumbos durante varios años.**

Cuando lo detuvieron, la Policía Nacional Española (@policia) mandó un tuit al que le añadieron el hashtag #misióncumplida. Algunos círculos mexicanos lo consideraron una burla al presidente mexicano. Sin embargo, estamos ante la mezcla del peculiar estilo de un tuit famoso y popular en España, por su humor y mala leche, y el poco respeto que se tiene al gobierno mexicano en amplios círculos internacionales. Se justifica el menosprecio porque es una vergüenza que las instituciones mexicanas no sancionaran a **[REDACTED]** por endeudar a Coahuila -su estado- por 36 mil millones de pesos, mientras que España lo apresaron por la transferencia irregular de sólo tres millones y medio de pesos!

La saga **[REDACTED]** tiene un ángulo desconcertante. Alejandro Gutiérrez, corresponsal de Proceso en Madrid, escribió en el número 2046 de la revista que la defensa jurídica de **[REDACTED]** está en manos del "abogado Manuel Ollé", un letrado cercano al juez español Baltasar Garzón y, como él, famoso por la defensa de los derechos humanos en el mundo. Como fue el único medio mexicano que incluía ese ángulo, conversé telefónicamente con Alejandro quien me confirmó que fiscales anticorrupción españoles le aseguraron en

737

privado que la primera opción de [REDACTED] fue Garzón, quien le sugirió a Ollé. Alejandro también me aclaró que fuentes cercanas a Ollé aseguran que éste se presentará a defender a [REDACTED] el próximo viernes.

Sería una pena confirmar que [REDACTED] es defendido judicialmente por un abogado del círculo de Baltazar Garzón quien, en septiembre de 2015, sostuvo en Buenos Aires la tesis de que la justicia universal debe incluir las "agresiones al medio ambiente y los ilícitos financieros y económicos". Y [REDACTED] es un político que **desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana.**

Cuando le preguntaron a Enrique Peña Nieto su opinión sobre el caso [REDACTED] respondió que no podía "decir nada [...] porque no [tenía] información". "Hay que esperar", sentenció. Algo parecido dijeron varios jerarcas priistas. ¿Y cuánto tenemos que esperar, señor presidente, para que su gobierno empiece a meter en la cárcel a los funcionarios que saquean presupuestos o entregan contratos inflados a empresarios favorecidos? ¿Hay alguna fecha para que el Instituto Nacional Electoral acote en serio la corrupción de los partidos? ¿Se sabe en qué momento los Tribunales Contenciosos Administrativos frenarán el saqueo urbanístico? La falta de respuestas precisas por parte del Estado mexicano hace tan admirables a los jueces extranjeros que persiguen a corruptos mexicanos. Afortunadamente, ellos ignoraron el llamado a esperar.

Comentarios: [REDACTED]

Diario Reforma, edición impresa y disponible para su ulterior consulta en la página:

<http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=80298>

'Hay que esperar'

20 Ene. 2016

[REDACTED] se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que **con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos.**

Luego de la detención, el viernes 8 de enero, de El Chapo Guzmán, la canciller Claudia Ruiz Massieu alabó, ante embajadores y cónsules, el mensaje de la #MisiónCumplida del Presidente eufórico; además, le informó al Presidente que los ahí reunidos estaban "listos para llevar a todos los rincones del mundo" la "visión que usted nos inspira a transmitir" y que incluía el "Estado de Derecho" y las "instituciones sólidas".

El viernes 15 del mismo mes [REDACTED] fue detenido y encarcelado en Madrid. El golpe, brutal, resucitó el corrosivo juicio del New York Times en su editorial de principios de año: Peña Nieto "será recordado" como el "jefe de gobierno que evitó rendir cuentas". La detención también revolcó la respuesta del coordinador de Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia, Paulo Carreño King, al mismo diario. No hay forma de creerle que el gobierno "trabaja en la mejoría del Sistema Nacional de Anticorrupción".

El Auto judicial tiene la sequedad y aridez de la meseta castellana. Según el documento (tengo copia), en el 2013 [REDACTED] recibió de empresas mexicanas 199,079.48 euros. La autoridad sospechó y en marzo de 2014 iniciaron las pesquisas que llevaron a su arresto por los "delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho". De ser condenado, se pasará once años en la prisión. **Como el caso que se lleva en Estados Unidos es independiente del de Madrid, [REDACTED] dará tumbos durante varios años.**

Cuando lo detuvieron, la Policía Nacional Española (@policia) mandó un tuit al que le añadieron el hashtag #misióncumplida. Algunos círculos mexicanos lo consideraron una burla al presidente mexicano. Sin embargo, estamos ante la mezcla del peculiar estilo de un tuit famoso y popular en España, por su humor y mala leche, y el poco respeto que se tiene al gobierno mexicano en amplios círculos internacionales. **Se justifica el menosprecio porque es una vergüenza que las instituciones mexicanas no sancionaran a [REDACTED] por endeudar a Coahuila -su estado- por 36 mil millones de pesos, mientras que en España lo apresaron por la transferencia irregular de sólo ¡tres millones y medio de pesos!**

La saga [REDACTED] tiene un ángulo desconcertante. Alejandro Gutiérrez, corresponsal de Proceso en Madrid, escribió en el número 2046 de la revista que la defensa jurídica de [REDACTED] está en manos del "abogado Manuel Ollé", un letrado cercano al juez español Baltasar Garzón y, como él, famoso por la defensa de los derechos humanos en el mundo. Como fue el único medio mexicano que incluía ese ángulo, conversé telefónicamente con Alejandro quien me confirmó que fiscales anticorrupción españoles le aseguraron en privado que la primera opción de [REDACTED] fue Garzón, quien le sugirió a Ollé. Alejandro también me aclaró que fuentes cercanas a Ollé aseguran que éste se presentará a defender a [REDACTED] el próximo viernes.

Sería una pena confirmar que [REDACTED] es defendido judicialmente por un abogado del círculo de Baltasar Garzón quien, en septiembre de 2015, sostuvo en Buenos Aires la tesis de que la justicia universal debe incluir las "agresiones al medio ambiente y los ilícitos financieros y económicos". Y [REDACTED] **es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana.**

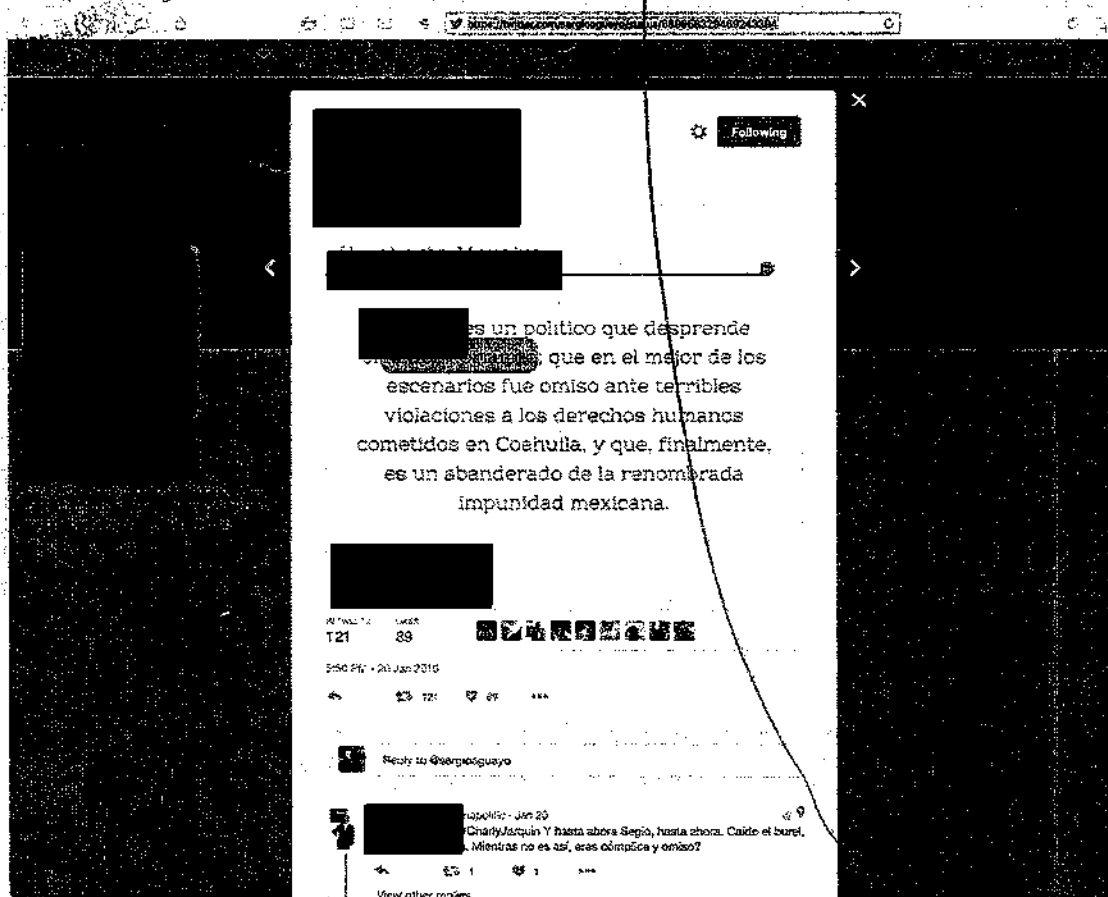
935

Cuando le preguntaron a Enrique Peña Nieto su opinión sobre el caso [REDACTED] respondió que no podía "decir nada [...] porque no [tenía] información". "Hay que esperar", sentenció. Algo parecido dijeron varios jerarcas priistas. ¿Y cuánto tenemos que esperar, señor Presidente, para que su gobierno empiece a meter en la cárcel a los funcionarios que saquean presupuestos o entregan contratos inflados a empresarios favorecidos? ¿Hay alguna fecha para que el Instituto Nacional Electoral acote en serio la corrupción de los partidos? ¿Se sabe en qué momento los Tribunales Contenciosos Administrativos frenarán el saqueo urbanístico? La falta de respuestas precisas por parte del Estado mexicano hace tan admirables a los jueces extranjeros que persiguen a corruptos mexicanos. Afortunadamente, ellos ignoraron el llamado a esperar.

Colaboró Maura Álvarez Roldán.

[REDACTED]

Por si lo anterior fuera poco, ese mismo 20 de enero de 2016, en su cuenta de Twitter®, que es un medio de difusión masivo, el demandado realizó las siguientes manifestaciones:



Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica:

[REDACTED]

FIN DE LAS NOTAS

[REDACTED] utilizando el contexto ya transcrito, relativo a la detención de la que [REDACTED] fue objeto, sin que viniera al caso, esto es, sin sustento, ni material de comprobación, ALEJADO DE TODO SENTIDO DE IMPARCIALIDAD Y NEGANDO A LA

736

AUDIENCIA EL DERECHO A RECIBIR INFORMACION FIDEDIGNA, simple y llanamente se atrevió a afirmar:

"Y [REDACTED] es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana."

[REDACTED] escribió y publicó una nota según su dicho "periodística", mediante la cual imputó a [REDACTED] omisión ante terribles violaciones a los derechos humanos, obrando en perjuicio del comunicador e investigador, la nota que publicó y su contexto, al no contener base o fundamento alguno de investigación que sustente la imputación realizada, CONFIGURÁNDOSE EL ESTANDAR DE MALICIA EFECTIVA, por haberlo realizado con la única intención de dañar.

La nota producida por [REDACTED] reúne los elementos consistentes en temeraria negligencia y despreocupación, sin ejercer el menor control de los hechos que afirmó y sin haber aportado la fuente de información alguna que sustentara la imputación realizada.

[REDACTED] produjo la expresión agravante a sabiendas que estaba difundiendo hechos falsos, concretamente, **"que en el mejor de los escenarios fue omiso [REDACTED] ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ..."**

Esto es, [REDACTED] incurrió en el estándar de la malicia efectiva, ya que, en su calidad de comunicador, con el ánimo de causar daño, con absoluta parcialidad e intención de causar daño, transmitió información que no era veraz, a sabiendas de ello, lo cual se acredita en el contexto de la nota de su autoría.

Tan es cierto lo afirmado, a saber, que [REDACTED] **NO TENÍA BASES PARA IMPUTAR A [REDACTED] LA OMISIÓN ANTE LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS, QUE LO MANEJÓ COMO UNA AFIRMACIÓN AISLADA Y UNILATERAL, dentro de la nota relativa a la detención en España.**

[REDACTED] realizó la gravísima imputación en contra de [REDACTED], en medio de un contexto que NADA TENÍA QUE VER CON LA OMISION RELATIVA A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y SIN ACREDITAR LO AFIRMADO, lo cual es comprobable de la lectura imparcial de la nota denominada "Hay que esperar".

Esto es, dentro de la nota denominada "Hay que esperar", de la autoría de quien dice ser investigador y comunicador, [REDACTED] publicada como consecuencia de la detención de [REDACTED] en España, **se jacta de tener fuentes fidedignas respecto a hechos concretos**, afirmando que cuenta con copia de un auto judicial, comunicación directa con diversas personas, entre estos un corresponsal de Proceso en Madrid, informes obtenidos de diversos "twitts" y hashtag, de manera enunciativa, más no limitativa.

No obstante lo anterior y sin más de por medio, con temeraria despreocupación y configurándose el dolo eventual y la animadversión en contra del tercero interesado, difundió la "información" inexacta, carente de apoyo, a saber, **"que en el mejor de los escenarios fue**

omiso [REDACTED] ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ...", configurándose la malicia efectiva ya que, inclusive, de constancias de autos no se acredita que en algún momento haya podido sustentar fehacientemente su temeraria afirmación.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciándose respecto al derecho a la información, sostiene que, en aras de propugnar por la democracia y por la libertad de la circulación de la noticia, la veracidad no implica informar sobre hechos que sean incontrovertiblemente ciertos, lo cual limitaría el ejercicio del derecho de la comunicación, no está en tela de juicio y no se combate.

Sin perjuicio de lo anterior, [REDACTED], tenía conocimiento fehaciente respecto a la falsedad de sus afirmaciones, relativas a que [REDACTED] **.. en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ...**", configurándose el estándar de malicia efectiva y mala fe, ya que en su condición de investigador, tal como lo afirmó en su contestación a la demanda y durante el procedimiento, **el comunicador e investigador, [REDACTED] tenía a su alcance los medios para corroborar o no, lo afirmado y retractarse oportunamente de su dicho, sin haberlo hecho así,** dándole como consecuencia, el carácter de información indubitada, habida cuenta que de la lectura de su desplegado se acredita la animadversión que tiene en contra de [REDACTED] configurándose la procedencia de la sanción civil.

Luego entonces, [REDACTED] en todo momento, inclusive durante la tramitación del procedimiento estuvo consciente de la inexactitud de las afirmaciones que realizó, habida cuenta que no acreditó tener fundamento que sustentase sus imputaciones.

Es precisamente, este estado de conciencia el que coloca a [REDACTED] en la postura de haber actuado con temeraria despreocupación, toda vez que tenía a la mano los medios, recursos, experiencia, formación intelectual y académica (la cual obra en su contra) para verificar que lo afirmado era inexacto, pudiendo retractarse, sin haberlo hecho así.

Acreditado que fue el estándar de "real malicia", se analiza la gravedad de las imputaciones, esto es, **"que en el mejor de los escenarios fue omiso [REDACTED] ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ..."**.

[REDACTED] quien, según lo afirmó, ha publicado diversos libros y artículos concernientes a derechos humanos, por lo menos sesenta, **fue omiso en sustentar las imputaciones ya descritas en contra del exgobernador del Estado de Coahuila.**

[REDACTED] **actuó con negligencia inexcusable y temeraria despreocupación, elementos necesarios para acreditar la malicia efectiva, con pleno conocimiento que [REDACTED] no realizó los hechos que le imputó, los cuales transmitió como indubitables.**

Muestra de lo afirmado es la prueba superveniente ofrecida por [REDACTED] mediante escrito presentado el 3 de agosto de 2016, ante el juzgado del conocimiento y **admitida**, lo cual consta en auto de 31 de agosto de la misma fecha, mediante la cual [REDACTED]

imputó a [REDACTED] responsabilidad respecto a los lamentables hechos ocurridos en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.

Esta probanza corre agregada en autos del juicio principal en carácter de superveniente, debidamente admitida.

El 16 de julio de 2016, [REDACTED] publicó en su página de internet, con dirección electrónica [REDACTED] el siguiente texto:

"... estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011 (los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300). Él [REDACTED] era gobernador en ese momento..."

Nada más falso: es sabido y un hecho notorio que el mandato como Gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a cargo de [REDACTED] concluyó el 4 de enero de 2011, meses antes de los lamentables hechos ocurridos en Allende, Coahuila, los cuales ocurrieron en marzo de 2011.

[REDACTED] con el nivel intelectual que ostenta, dedicado durante más de 40 años a la labor de investigación, según se acredita en el currículo que obra en su contestación a la demanda, con notoria temeridad y negligencia inexcusable, sin fundamento, ni sustento, imputó a [REDACTED] el hecho consistente en haber permitido (sido omiso) en la violación a los derechos humanos consagrados y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en conjunto con los Tratados Internacionales signados por el Estado Mexicano constituyen la Ley Suprema. ■

CON PLENO CONOCIMIENTO RELATIVO A QUE EL SEÑOR [REDACTED] ya no era gobernador del Estado de Coahuila para el momento en el que ocurrió la denominada Masacre de Allende, haciendo uso de la libertad de expresión consagrada constitucionalmente en el artículo 6º, incurrió en la negligencia inexcusable que justifica la condena por daño moral impuesta en la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, al haber realizado imputaciones que dañaron el patrimonio moral del tercero interesado, a sabiendas de la falsedad de lo afirmado, configurándose el segundo de los elementos que acredita la malicia efectiva, a saber:

b) La información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa o no

La nota informativa del artículo intitulado "Hay que esperar", publicado en el diario "Reforma"®, en el diario el "Siglo de Torreón"®, así como la expresión pública que realizó en su cuenta de Twitter®, [REDACTED] todos de 20 de enero de 2016, la cual es y continua siendo reproducida republicada en cientos de ocasiones y mediante la cual imputó a [REDACTED] **"que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ..."**, tuvo como base, según el propio dicho de [REDACTED], los lamentables hechos acontecidos en Allende, Coahuila, en marzo, 2011, cuando [REDACTED] ya no era

gobernador del Estado de Coahuila, acreditándose que **difundió la noticia con total despreocupación, a sabiendas del hecho notorio e indubitable relativo a que el mandato a cargo de [REDACTED] ya había concluido.**

Mas aun, en el texto publicado por [REDACTED] el 16 de julio de 2016, en su página de internet, con dirección electrónica [REDACTED] en el margen superior izquierdo, aparece el nombre de [REDACTED] y enseguida sus distintivos: "**Profesor – Investigador**", configurándose el elemento que se analiza, necesario para acreditar la malicia efectiva, a saber, negligencia inexcusable y total despreocupación por la falsedad de la nota publicada el 20 de enero de 2016, ya que el quejoso contaba, en exceso, con los elementos para allegarse de los elementos que le permitieran conocer la realidad.

La magnitud de la negligencia en la que incurrió [REDACTED] obra en constancias de autos, cuando en su calidad de demandado, manifestó:

*"... no existe daño alguno del cual se pueda doler el hoy actor, ya que **el suscrito soy periodista, y simplemente cumplí con mi obligación de informar a la sociedad un hecho que formaba parte de la opinión pública nacional e internacional al amparo del derecho fundamental de Libertad de Expresión**".*

Gursivas y negritas propias

Reconociendo en la prueba confesional a su cargo, que efectivamente realizó las imputaciones que hoy acreditan la malicia efectiva en la que incurrió.

[REDACTED] en su calidad de investigador, profesor, periodista y comunicador, violentó en perjuicio de [REDACTED] el **derecho a la información, el cual debe contener la difusión de hechos ciertos y comprobables**, configurándose que este difundió la "noticia" relativa a que, **"que en el mejor de los escenarios fue omiso [REDACTED] ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ..."**. Cuando [REDACTED] ya no era gobernador del Estado de Coahuila.

[REDACTED] actuó con pleno conocimiento de la falsedad de las afirmaciones que transmitió como hechos y excediendo los límites del respeto a la reputación y derechos de terceros.

[REDACTED] no tiene elemento de convicción alguno a su favor para acreditar que desconocía el hecho notorio relativo a que [REDACTED] ya no era gobernador del Estado de Coahuila cuando ocurrieron los lamentables hechos acontecidos en Allende, Coahuila, en marzo de 2011, motivo por el cual se configura la malicia efectiva, ya que el informador tenía conocimiento que la información vertida en su nota de 20 de enero de 2016 era inexacta y falsa, mostrando una absoluta despreocupación por verificarla, lo cual denota mala fe, al no ser diligente en el análisis e investigación de lo afirmado.

Los razonamientos hasta ahora vertidos acreditan la existencia de elementos objetivos que permiten acreditar fehacientemente que [REDACTED] tenía conocimiento de la inexactitud de lo afirmado, por las circunstancias de hecho del caso concreto, a saber:

740

Que [REDACTED] YA NO ERA GOBERNADOR DE COAHUILA cuando sucedieron los eventos de Allende, en marzo de 2011, habida cuenta que el investigador y periodista DISPONÍA DE LOS RECURSOS Y ELEMENTOS QUE LE PERMITIAN VERIFICAR, DE MANERA INMEDIATA Y SIN MAYOR ESFUERZO, LA INEXACTITUD DE LO ESBOZADO, sin haberlo hecho así.

Resaltando que para que se configure la malicia efectiva la información difundida debe versar sobre cuestiones de interés público y si la información difundida está vinculada con el desempeño del agraviado dentro del cargo público, como fue el caso, por tratarse de lo que [REDACTED] denominó: "que en el mejor de los escenarios fue omiso [REDACTED] ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, ...", se configura finalmente el tercer elemento que prueba la malicia efectiva, esto es:

c) Que se realizó con el único propósito de dañar

Los razonamientos hasta ahora vertidos, las circunstancias de hecho y derecho que obran en constancias de autos, que [REDACTED] NO HAYA OBJETADO LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN EXHIBIDOS POR EL ACTOR Y QUE HAYA RECONOCIDO LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN CUANDO DESAHOGÓ LA PRUEBA CONFESIONAL A SU CARGO, acreditan que las afirmaciones vertidas por el comunicador fueron realizadas con el único propósito de dañar, dañar la imagen, reputación y patrimonio moral de [REDACTED] quien en el momento de las declaraciones proferidas por [REDACTED] se encontraba detenido por las autoridades españolas.

La lectura objetiva de la multicitada nota de 20 de enero de 2016, conlleva animadversión, parcialidad, información tergiversada y una difusión intencional de inexactitudes que dañaron el patrimonio moral de [REDACTED] transmitiendo información que no está constitucionalmente protegida, ya que no reunió los requisitos de veracidad e imparcialidad como límites del derecho a la información.

El amparo directo en revisión [REDACTED] señaló lo que se denomina el *"doble juego de la exceptio veritatis"*, a saber: *"la persona que se expresa debe siempre poder bloquear una imputación de responsabilidad ulterior probando que los hechos a que se refiere son ciertos y no puede ser obligada a probar que los hechos afirmados son ciertos"*.

No obstante, es requisito indispensable, que el transmisor de la información TIENE EL DEBER, SIEMPRE, DE PODER PROBAR QUE ES CIERTO LO QUE AFIRMÓ PARA BLOQUEAR UNA IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD AL HABER INVADIDO LA REPUTACION DE UNA PERSONA.

Así las cosas, [REDACTED] afirmó como hechos indubitables cuestiones que no son ciertas, a saber, que [REDACTED] era gobernador de Coahuila cuando ocurrió lo que el denomina la matanza de Allende, afectando notoriamente la reputación del tercero interesado.

Luego entonces, el derecho al honor reclamado por [REDACTED] prevalece al haberse acreditado fehacientemente y en constancias de autos que la libertad de información ejercida por [REDACTED]

741

■■■■■ está fuera de la protección constitucional, al haberse configurado los tres elementos que, en conjunto prueban la malicia efectiva.

Los razonamientos vertidos en el presente amparo adhesivo robustecen las consideraciones esgrimidas en la sentencia que hoy constituye el acto reclamado, fundándolos en el criterio de Jurisprudencia y su correspondiente ejecutoria, de la Décima Época, con número de registro: 2020798, Primera Sala, publicada el viernes 11 de octubre de 2019, de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre de 2019, cuya voz es del tenor siguiente:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

Conforme al criterio invocado, para que se actualice la malicia efectiva, se requiere demostrar que la información difundida es falsa y fue publicada por ■■■■■ a sabiendas de su falsedad, adicionalmente con total despreocupación respecto a la mentira difundida, acreditándose que la publicó con toda la intención de dañar a ■■■■■ ■■■■■

Por lo que hace a al nivel de diligencia o negligencia que demostró el informador, la doctrina de la "malicia efectiva" señala que se requiere la comisión de una negligencia inexcusable, o una "temeraria despreocupación", referida a un dolo eventual, acreditándose como hecho notorio la existencia de elementos objetivos, a saber, que ■■■■■ ya no era gobernador de Coahuila cuando ocurrieron los lamentables hechos acontecidos en Allende, Coahuila, lo cual permite acreditar que el comunicador era consciente de esa inexactitud por las circunstancias de hecho del caso concreto, disponiendo de los recursos que le permitían verificar, de manera inmediata y sin mayor esfuerzo, aquella inexactitud, lo cual no hizo ya que de constancias de autos se confirma que, pesar de ese estado de conciencia y de contar con los medios idóneos para corroborar la información, prescindió de ellos y decidió exteriorizar la incorrecta información como si de un hecho indubitable se tratase.

Por tanto, se acredita la intención de dañar, lo cual se afirma en virtud de que el informador e investigador, ■■■■■ tenía conocimiento de que la información era inexacta, manifestando una total despreocupación temeraria por transmitir hechos verídicos.

Los razonamientos vertidos son suficientes para robustecer las consideraciones y criterios de derecho vertidos en la sentencia dictada el 10 de octubre de 2019, motivo por el cual en el momento procesal oportuno deberá negarse el amparo y la protección de la justicia federal solicitados por ■■■■■ debiendo confirmarse la resolución que hoy constituye el acto reclamado, en virtud de haberse acreditado la malicia efectiva cometida por el peticionario de garantías.

Por lo expuesto y fundado,

A USTEDES, C.C. MAGISTRADOS, atentamente pido, se sirvan:

PRIMERO.- Tener por acreditada la personalidad con la que me ostento.

SEGUNDO.- Por autorizadas a las personas que se describen.

TERCERO.- Por señalado el domicilio que se vierte.

CUARTO.- Interponiendo Juicio de Amparo Adhesivo, tendiente a fortalecer las consideraciones de la sentencia dictada el 10 de octubre de 2019.

QUINTO.- En el momento procesal oportuno, declarar fundado el amparo adhesivo que se promueve, debiendo confirmar la sentencia que hoy constituye el acto reclamado.

SEXTO.- Negar el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, [REDACTED] habida cuenta que se configura el daño moral ocasionado y la malicia efectiva cometida por el peticionario de garantías.

Protesto lo necesario





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

743
FORMA B

7040 y 7041

En diez de diciembre de dos mil diecinueve, José Manuel González Jiménez, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta al Magistrado Presidente con dos escritos del tercero interesado

██████████ - Conste.

Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil diecinueve.

Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguese a sus autos, los escritos de ██████████ con los cuales formula alegatos y promueve demanda de amparo adhesiva, respectivamente.

Se reserva acordar los escritos de cuenta, porque en auto de presidencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se suspendió el procedimiento de este juicio de amparo, a propósito de la solicitud de facultad de atracción promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el referido tercero interesado, por lo que una vez que la superioridad defina lo relativo a dicha solicitud, y se levante la suspensión procedimental, se acordará lo conducente.

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordó el Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras, Presidente del Décimo Tercer

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
y firma con el Secretario de Acuerdos **José Manuel
González Jiménez**, que da fe.

JMGJ/macs

11 DIC 2019

En _____, siendo las nueve horas, se notifica
el proveído que antecede por medio de lista a las partes,
habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este
tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de
Amparo, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma
personal. **Doy fe.**

EL ACTUARIO JUDICIAL.

11 Dic 2019 11:00 AM
Actuario Judicial

DIGITALIZADO

OFICIO SECRETARIAL
CONSEJO EN
REVISIÓN

QUEJOSO: [REDACTED]

TERCERO INTERESADO: [REDACTED]

AMPARO DIRECTO

EXPEDIENTE [REDACTED]

000380

2020 ENE 16 A 9:52

H. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

[REDACTED] con la personalidad que tengo reconocida en autos, en mi calidad de autorizada por [REDACTED] en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; obrando las precitadas autorizaciones dentro de los escritos consistentes en expresión de alegatos y amparo adhesivo, respetuosamente, expongo:

Con fundamento en los artículos 79, 80 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, mi representado viene a ofrecer en calidad de prueba superveniente la sentencia dictada en el Amparo Directo en Revisión [REDACTED] tramitado ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sesionado el 16 de octubre de 2019, adjuntando para tales efectos, copia certificada de la resolución descrita; derivada del juicio de daño moral incoado por [REDACTED]

La suscrita, manifiesto bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento de la sentencia que hoy se ofrece en calidad de prueba superveniente, mediante publicación de 9 de enero de 2020, surtiendo todos sus efectos legales el 10 del mismo mes y anualidad; motivos por los cuales se computa el término para el ofrecimiento de la prueba superveniente del 13 al 15 de enero de 2020.

Con esta prueba se convalida la determinación tomada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro de la sentencia que hoy constituye el acto reclamado consistente en el monto fijado por concepto de daños punitivos a cargo de [REDACTED] en virtud de los daños ocasionados al tercero interesado.

Se acredita que es ilegal la imposición de un monto máximo por concepto de indemnización correspondiente a la reparación integral, en la forma en la que lo establece el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

Esto es, la sentencia que en calidad de prueba superveniente se ofrece acredita que, los límites que fija el precitado artículo violentan los derechos del justiciable en tratándose de la reparación del daño derivado de la lesión a sus derechos humanos, como es el caso que nos ocupa.

La prueba ofertada sustenta la determinación del acto reclamado consistente en haber fijado un monto de condena a cargo del infractor, habiendo realizado, para llegar a dicha conclusión un análisis de la afectación en lo particular y que no existe razón suficiente para que prevalezca la norma que impone montos máximos por concepto de indemnización, acreditándose la irregularidad del artículo 41 de la Ley analizada e invocada.

Con esta probanza también se acredita que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada,

6 marzo

c/500113

63

OFICIO SECRETARIAL
CONSEJO EN
REVISIÓN

2020 ENE 16 A 9:52

000024

OFICIO SECRETARIAL
CONSEJO EN
REVISIÓN

1- carta en copia
certificada y s-co
para el
mismo
escrito

[REDACTED]

el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, vulnera el derecho humano a recibir una reparación integral cuando su patrimonio moral ha sido quebrantado.

Adicionalmente se acredita que fue fundada y motivada la determinación del acto reclamado, consistente en haber fijado el monto de condena a cargo de [REDACTED] al valorar prudencialmente y de conformidad con las particularidades del caso, las circunstancias bajo las cuales se violentó el patrimonio moral del hoy tercero interesado, siendo el juzgador quien, con pleno conocimiento de constancias de autos, puede fijar el monto a reclamar.

Esta prueba acredita de manera fehaciente la irrazonabilidad del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, consistente en que el juzgador imponga una cantidad máxima a la reparación del daño o reparación integral; lo anterior en virtud de que hace nugatorios los derechos del justiciable, violentando las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo último fin es el dictado de una sentencia justa.

Adicionalmente a lo afirmado, deja sin efectos la labor judicial consistente en el cálculo de una justa indemnización equivalente a las particularidades del caso, en plena observancia a los principios de equidad que deben prevalecer en toda contienda judicial.

Con esta prueba se acredita que la ponderación de la reparación integral en estrecha relación con las particularidades del caso se ve entorpecida al establecerse un tope máximo, de tal suerte que, tramitado que fue el procedimiento en sus diferentes etapas, de sobrepasarse los límites que impone arbitrariamente el legislador, la consecuencia fatal se limita a reducir dogmáticamente la cantidad al tope máximo que establece el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

La probanza ofertada continúa acreditando que el juzgador debe valorar en lo particular, las circunstancias de cada caso, particularmente las que no fueron contempladas por el legislador en el contenido del artículo 41 de la Ley analizada, ya que cada caso en particular requiere especial atención atendiendo a la dimensión individual del exceso y abuso que se realizó ejerciendo la libertad de expresión.

La sentencia que se ofrece como prueba superveniente acredita que son infundados e inoperantes los conceptos de violación vertidos por el hoy quejoso, derivado del análisis realizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que cada caso en particular es objeto de análisis minucioso; corroborándose que NO se admite la impunidad en el ejercicio indebido de las libertades de expresión e información derivado de daño al patrimonio moral de terceras personas.

Se acredita, adicionalmente, en concordancia con lo previsto en el artículo 63.1 del Pacto de San José, la legalidad relativa a que, cuando se decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados.

Señalando que, si ello fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, corroborándose en razón de lo anterior la inconvencionalidad del artículo 41 de la Ley de

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, al topar el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la convención americana sobre derechos humanos y también el artículo 1 constitucional, toda vez que el tope máximo previsto por dicha legislación permite limitaciones irracionales al derecho de ser indemnizado de manera integral, por lo que en esa tesitura, es obligación del Estado se respeten los derechos garantizados y se consideran esenciales e inherentes al ser humano derivados de su propia naturaleza, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular.

Se acredita adicionalmente, la importancia del estudio de cada caso en lo particular y en el que nos ocupa, que la afectación a los derechos como el honor y la reputación por la divulgación en internet de expresiones insultantes que además resultan falsas deben ser sancionados ya que nuestra constitución no tolera el derecho al insulto, razón por la cual debe garantizarse su adecuada protección acudiendo a la aplicación del principio *pro homine* consagrado en el artículo 1o. constitucional.

Del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio *pro personae*, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta.

Con esta prueba se acredita que, respecto al monto de la indemnización que reclama el quejoso, fundándose para ello en el límite de -Trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional e inconvencional**, puesto que dicho "límite máximo" transgrede las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los instrumentos internacionales que se mencionarán a continuación.

La sentencia que se ofrece como prueba superveniente acredita ciertamente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia, criterios relativos a la naturaleza y alcances de la -Obligación de Reparar- y dentro de éstos el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlo, atendiendo al daño causado.

Así, el concepto relativo a una "justa indemnización" o "indemnización integral" implica el restablecimiento de la situación anterior y de no ser esto posible, establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar.

La reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido.

Las "reparaciones" como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos.

En el documento denominado "Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones" aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el diecinueve de febrero de dos mil ocho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la reparación adecuada del daño sufrido debe concretizarse mediante medidas individuales tendientes a restituir e indemnizar. "

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas también ha emitido principios y directrices que determinan los alcances del derecho a obtener reparaciones; en esencia, dichos principios establecen que la obligación que tienen los Estados de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos dentro de su Estado, tal es el caso de la relativa a proporcionar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, en las formas de restitución e indemnización.

Los Estados, incluido el legislador, tienen la obligación genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su ámbito o extensión material al regularlo.

Por lo anterior, la sentencia ofrecida acredita válidamente que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces **inconstitucional**, puesto que el "límite máximo de indemnización" previsto por dicha norma jurídica; implica una restricción injustificada a los derechos constitucionales, por lo que la resolución que dicte su Señoría no debe limitarse al tome a que se refiere la disposición legal antes señalada.

El referido "tope" es inconstitucional, porque la existencia de límites a las indemnizaciones debidas a los perjudicados por daños morales causados; restringe injustificadamente el derecho a una reparación "justa e integral" ya que si bien es cierto que la voluntad del legislador fue la de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, no menos cierto es que axiológicamente, el derecho a las medidas compensatorias en los casos que justamente lo ameritan, tiene mayor valor que la pretendida voluntad estatal de "limitar" el monto de las reparaciones.

En efecto, la fijación del tope máximo de -Trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal- no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den, ni resulta necesaria para evitarlos, ya que las previsiones legales generales -en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que

pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas.

El tope máximo previsto por el precepto legal examinado, es una medida legislativa no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir; además contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño.

Consecuentemente, al momento de establecer en definitiva el monto de la indemnización que deberá cubrir el quejoso a favor del suscrito; fue correcto que la sala responsable haya omitido atender al límite máximo previsto por el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, ya que de lo contrario se verían vulnerados los derechos del suscrito a recibir un justa indemnización.

La sentencia que se ofrece como prueba superveniente acredita que el artículo 63.1 del Pacto de San Jose señala que cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo que si ello fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, en razón de lo anterior resulta inconstitucionales los artículos 31, 39 y 41 de la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, toda vez que se vulnera el derecho a una justa indemnización dispuesta por el artículo 63 apartado 1, de la convención americana sobre derechos humanos y también el artículo 1 constitucional, toda vez que el tope máximo previsto por dicha legislación permite limitaciones irracionales al derecho de ser indemnizado de manera integral.

En mérito al razonamiento antes vertido el hecho de limitar la indemnización a lo previsto en la Ley la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene en inconstitucional.

Considerar un tope máximo implicaría resarcir cierto tipo de derechos, pero se pasarían por alto otro tipo de afectaciones como el sufrimiento, ansiedad o menoscabo de la dignidad, por lo que debe considerarse una justa indemnización basada en las particularidades del caso y en los principios de equidad.

Mi representado, [REDACTED] es una persona conocida en el ámbito nacional e internacional y debido a las declaraciones del demandado respecto de la detención en España, se afectó la imagen internacional de este en España, imputándole inclusive que permitió se cometieran graves violaciones a derechos humanos en el Estado de Coahuila, cuando mi representado ya ni siquiera era gobernador en funciones, resaltando que dichas imputaciones trascendieron más allá del nuestro país.

En ese sentido debe atenderse a que mi representado es una figura pública que se distingue de las demás personas sujetos a la reparación del daño moral, por lo que, en el momento procesal oportuno, deberá dictarse sentencia mediante la cual se confirme la sentencia recurrida y prevalezca la sanción impuesta al quejoso, la cual no solo debe ser condenatoria en el sentido de la publicación de la sentencia y de la retractación de los comentarios hechos en mi contra, sino debe atender a la reparación económica fijada y sin que se aplique el tope máximo que prevé el artículo 41 de la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, sino a una justa indemnización basa en las particularidades del presente caso.

Sirve de apoyo y fundamento legal a mis anteriores afirmaciones, el criterio de jurisprudencia que en este acto se ofrece como prueba superveniente.

Las razones y los motivos por los cuales mi representado, [REDACTED] considera que acreditará sus afirmaciones con la presente prueba superveniente obedecen a que se trata de un documento público que goza de pleno valor probatorio.

Las razones y los motivos por los cuales mi representado, [REDACTED] considera que acreditará sus afirmaciones con la presente prueba superveniente obedecen a que se trata de una determinación judicial aplicable al presente caso, derivado de un juicio tramitado por la vía civil, de daño moral, con particularidades similares que aportan luz a sus Señorías para el dictado de una sentencia apegada a derecho.

Esta prueba se relaciona con el escrito de expresión de alegatos y amparo adhesivo interpuestos por mi representado.

Por lo expuesto y fundado,

A USTEDES, C.C. MAGISTRADOS, atentamente pido, se sirvan:

PRIMERO.- Tener por acreditada la personalidad con la que me ostento, en mi calidad de autorizada de [REDACTED]

SEGUNDO.- Ofreciendo el calidad de prueba superveniente la sentencia que en copia certificada se adjunta.

TERCERO.- Dar vista al quejoso por tres días.

CUARTO.- Dictar la sentencia que en derecho proceda, debiendo valorar la probanza ofrecida.

Protesto lo necesario

[REDACTED]

750

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

[REDACTED]

**COPIA CERTIFICADA DE LA
EJECUTORIA DICTADA EN EL
EXPEDIENTE CITADO AL RUBRO.**

RECEIVED
JUL 10 1970



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

1751
FORMA A-03
98

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
RECURRENTE:
(TERCERO INTERESADO)

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver los autos relativos al amparo directo en revisión [REDACTED] interpuesto por [REDACTED] por su propio derecho, en contra de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo [REDACTED] relacionado con el diverso [REDACTED]; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete, en la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, [REDACTED] por propio derecho, promovió demanda de amparo directo¹ en contra de la siguiente autoridad y acto reclamado:

¹ Fojas 5 a 31 del cuaderno del juicio de amparo directo [REDACTED]

- La Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien dictó sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el toca [REDACTED]
- El Juez Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en su calidad de ejecutora.

Hecha la remisión correspondiente, el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, ordenó el registro de la demanda con el número de expediente [REDACTED] a admitió a trámite y tuvo como tercero interesado a [REDACTED]

Posteriormente, por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes del órgano de amparo, el tercero interesado, por conducto de su apoderado, presentó demanda de amparo adhesivo³; como consecuencia, el Presidente del tribunal del conocimiento lo tuvo por admitido, mediante proveído de veintiuno de febrero siguiente⁴.

Seguidos los trámites procesales correspondientes, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en la que **concedió el amparo principal y negó el adhesivo**⁵.

SEGUNDO. Recurso de revisión. Inconforme con la resolución, mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,

² Fojas 38 a 39 vuelta, ibídem.

³ Fojas 46 a 64, ibídem.

⁴ Fojas 71 y 71 vuelta, ibídem.

⁵ Fojas 95 a 209 vuelta, ibídem.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

[REDACTED] por su propio
derecho, interpuso recurso de revisión⁶.

Por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el Presidente del órgano colegiado tuvo por interpuesto el recurso, ordenó dar el trámite respectivo y remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁷.

TERCERO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la remisión anterior, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, ordenó formar y registrar el recurso de revisión con el número [REDACTED], lo admitió, y turnó el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo⁸.

Mediante acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente⁹.

Posteriormente Oscar I. Ramírez Zavala, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, presentó el alegato ministerial 34/2019, por virtud de oficio presentado el trece de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁰;

⁶ Fojas 3 a 29, cuaderno del amparo directo en revisión 1611/2019.

⁷ Fojas 238 y 238 vuelta, ibídem.

⁸ Fojas 32 a 35, del cuaderno del amparo directo en revisión 1611/2019.

⁹ Fojas 55 y 55 vuelta, ibídem.

¹⁰ Fojas 56 a 59, ibídem.

así, por auto de dieciocho de junio siguiente, el Presidente de esta Primera Sala tuvo por hechas las manifestaciones¹¹.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mismo mes y año, por el Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que el presente recurso tiene como antecedente mediato un juicio ordinario civil, cuya materia en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a la especialidad de esta Sala y, su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.

El recurso de revisión se interpuso en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se notificó personalmente al autorizado del tercero interesado, el

¹¹ Foja 60, ibídem.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

353
100

diecinueve de febrero de dos mil diecinueve¹², surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el **veinte del mismo mes y año**, de conformidad con la fracción II, del artículo 31 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del **veintiuno de febrero al seis de marzo de dos mil diecinueve**, sin contar en dicho plazo los días veintitrés y veinticuatro de febrero, así como dos y tres de marzo (correspondientes a fines de semana), por ser inhábiles conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el **cuatro de marzo de dos mil diecinueve**, entonces es evidente que se interpuso oportunamente.

TERCERO. Legitimación. Ahora bien, esta Primera Sala advierte que [REDACTED] quien interpuso el recurso por propio derecho, se encuentra legitimado para acudir a esta instancia; lo anterior, toda vez que se le tuvo el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo, según consta en el auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Presidente del tribunal colegiado.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para resolver la problemática antes señalada, se estima necesario hacer una breve referencia de los antecedentes del asunto, los conceptos de violación que se hicieron valer, las consideraciones que

¹² Foja 2016, del cuaderno del juicio de amparo directo [REDACTED]

rigen el sentido de la sentencia que aquí se recurre y los agravios formulados en su contra.

I. Antecedentes. De la sentencia de amparo que ahora se recurre, se advierte que el quince y diecisiete de enero de dos mil dieciséis, [REDACTED] realizó diversas afirmaciones e imputaciones en contra de [REDACTED] en el programa transmitido en vivo "Ferriz LIVE TV", así como en la cuenta "Ferrizcope", ambos publicados en el sitio de internet de Youtube.

Juicio ordinario civil [REDACTED]: Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, [REDACTED] demandó a [REDACTED] las siguientes prestaciones:

"a) La declaración judicial consistente en que el demandado [REDACTED] en abuso al derecho de información y de la libertad de expresión, utilizando palabras, frases y expresiones insultantes por sí mismas, innecesaria para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral sobre mi persona afectando mi vida privada, honor y mi propia imagen según se describe en los hechos expuestos en la presente demanda, derivado del uso abusivo del derecho de la información y de la libertad de expresión, pasando por alto la protección de los derechos de personalidad a la luz de los Tratados Internacionales y Convenios Internacionales en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Como consecuencia de la prestación marcada en el inciso que antecede, el pago de una indemnización en dinero por el daño causado sobre mi persona, en mi vida privada, honor y propia imagen, según se describe en los hechos expuestos en la presente demanda, debiendo atender a que la valoración del daño al patrimonio moral, deberá realizarse tomando en cuenta la personalidad de la víctima, su edad, posición socioeconómica y naturaleza pública o privada, la índole del hecho ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la mayor o menor divulgación.

Respecto al monto de la indemnización que por esta vía se reclama, desde ahora hago notar respetuosamente a su señoría que el límite de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal previsto por el artículo 41 de la Ley de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que dicho "límite máximo" transgrede las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1 y (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se demostrará con la amplitud debida en el capítulo de 'hechos' de la presente demanda.

Consecuentemente, solicito respetuosamente a su señoría que al momento de establecer la cantidad líquida o monto de la indemnización a que el demandado Pedro Ferriz de Con deberá ser condenado, no se atienda al límite máximo previsto por la norma jurídica anteriormente invocada.

De otra parte, se hace notar a su señoría que la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, en su artículo 3 contempla únicamente el derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen de las personas en el Distrito Federal.

c) El pago de por lo menos [REDACTED] por concepto de indemnización por la reparación del daño moral extrapatrimonial que me ha causado el demandado, en mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás, por lo que dicho daño ocasionado debe regirse en cuanto a su reparación, por lo dispuesto en el artículo 1916 y demás relativos y aplicables del Código Civil.

d) El pago de por lo menos [REDACTED] por concepto de indemnización por el perjuicio extrapatrimonial que me ha ocasionado el demandado, toda vez que con motivo de sus declaraciones he dejado de recibir ganancias lícitas por la cancelación de los contratos que se describen en los hechos de la presente.

e) El pago de la cantidad que su señoría determine como daños punitivos en liquidación de sentencia, atendiendo, respecto de la víctima: El aspecto cualitativo del daño o daño moral en sentido estricto; el tipo de derecho o interés lesionado; la pluralidad de los intereses lesionados; si se ha causado una afectación leve, media o severa; la existencia del daño y su nivel de gravedad. Respecto del demandado: El grado de responsabilidad; el tipo de bien o derecho puesto en riesgo; grado de negligencia, debiendo valorarse sus agravantes; la relevancia social del hecho a la luz de los deberes legales incumplidos, los deberes genéricos de responsabilidad del desarrollo de la actividad que generó el daño; situación económica.

f) El pago del interés legal que genere la cantidad que determine su señoría como indemnización por la reparación del grave daño moral que se me ha ocasionado, contado a partir de la fecha en que se deba cubrir esa cantidad y hasta la fecha en que efectivamente se cubra.

g) Se condene al demandado a retractarse públicamente de las declaraciones formuladas en:

- i) El Programa transmitido en vivo el quince de enero de dos mil dieciséis denominado "Ferriz LIVE TV" y publicadas en la página de Internet: <https://www.youtube.com/watch?v=Yswi7Yu4zv0> y
- ii) Las declaraciones formuladas el diecisiete de enero de dos mil dieciséis en su cuenta denominada 'Ferrizcope' publicadas en la página de Internet <https://www.youtube.com/watch?v=U1QUGVJOUag> mediante las cuales causó al suscrito daño moral, afectando mi vida, honor y mi propia imagen en términos del artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen.

h) La declaración judicial consistente en que se ordene a cargo del demandado la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, en un diario de circulación nacional de un extracto de la sentencia definitiva que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma en los principales periódicos del país, debiendo ser en páginas centrales completas.

i) La declaración judicial consistente en que se ordene al demandado, someterse a tratamiento psicológico a fin de que cesen las conductas hostiles y agresivas que desde hace varios años y en innumerables ocasiones, ha venido perpetrando en contra del suscrito y de terceras personas a quienes ha afectado gravemente en sus sentimientos, decoro, honor, y demás atributos de personalidad.

j) El pago de los gastos y costas que se generen con motivo del presente juicio hasta su total conclusión".

Correspondió conocer al Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México y se registró con el número de expediente [REDACTED] seguidos los trámites procesales, el juez del conocimiento dictó sentencia el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"Primero.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada por la parte accionante [REDACTED] en el (sic) cual no probó su acción, y la parte demandada [REDACTED] justificó sus defensas y excepciones, en términos de los considerandos que anteceden, en consecuencia;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Segundo.- Se absuelve a Pedro Ferriz de Con de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en términos de los considerandos que anteceden.

Tercero.- No se hace especial condena en gastos y costas en la presente instancia, en términos de los considerandos que anteceden.

Cuarto.- Notifíquese...

1.2. Recurso de apelación En contra de la determinación anterior, [REDACTED] interpuso recurso de apelación, mismo que conoció la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y dictó sentencia el once de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de revocar la sentencia recurrida.

En lo que interesa al presente asunto debe decirse que la sala responsable aplicó el control de convencionalidad *ex officio* en los siguientes términos:

"A fin de resarcir el daño causado al actor debe señalarse que si bien, dadas las facultades con las que esta alzada cuenta, no es competente para declarar la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (sic), como lo pretendió la parte actora en la prestación b) de su demanda; sin embargo, esta sala sí puede prescindir de aplicar el precepto mencionado si se considera que con su aplicación no cumple con una justa indemnización y reparación integral, lo que acarrearía la infracción a los derechos humanos de la víctima, ello en atención a las siguientes consideraciones.

Cabe destacar que el legislador, en la exposición de motivos de la ley antes mencionada que se puede visualizar a través de la siguiente página electrónica:

(<http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=ocbvjXjq9krUTOeL/uraYVe7inoFUFpQHIn3sTR7+5bGCby3Bd8FK8+Cb2niz64Gr1Df3aGJ36l6lGzrB2t+ZA==>), establece que las razones que subyacen a la emisión de esa ley, son la salvaguarda de los derechos a la vida privada, al honor y a la propia imagen, a la luz de los estándares democráticos internacionales; deja a salvo el derecho a la libertad de expresión y la libre circulación de ideas y debate público; blinda la libre expresión de ideas de la intervención penal del Estado y sustituye el régimen penal por uno

de responsabilidad civil, en virtud del principio de intervención mínima y última, razón que rige en el derecho penal, en aras de no imponer límites estatales directos o indirectos al derecho humano a la libertad de expresión.

La ley precitada consideró basándose en estándares internacionales en la materia, que la libertad de expresión puede estar válidamente sujeta a ciertos límites, más aún, en aquellas situaciones en las que, por ejemplo, la intención de la información vertida en estas expresiones sean difundidas a sabiendas de su falsedad, sea difundida con total despreocupación sobre si era falsa o no y que se haga con el único propósito de dañar; a éstos y otros potenciales que limitan la libertad de expresión, la ley mencionada les ha contemplado una sanción derivada del reproche estatal al que pueden estar sujetos.

Este régimen sancionador es reconocido como régimen de responsabilidades ulteriores, el cual debe tener ciertas características que lo doten de claridad y responsabilidad para no intervenir de forma arbitraria, en la esfera de derechos de quienes se pueden ver ante una sanción derivada del mismo; dicho régimen goza del estatus de temporalidad, pues con éste se busca evitar que el Estado mexicano establezca censura previa a cualquier tipo de expresión, la cual, además ha sido proscrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 'La Última Tentación de Cristo' (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Reparaciones y Costas. 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73), visible en la siguiente dirección electrónica:
(http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/olmedo_28_11_02.pdf).

Como consecuencia de este régimen de responsabilidades ulteriores, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (sic), establece otro tipo de reparación al daño causado a la víctima; esta reparación consistirá, por regla general, en la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral, de acuerdo al artículo 39 de la citada ley; también dicha ley prevé que la regla general antes mencionada cederá ante la regla especial cuando no sea posible resarcir el daño causado a través de la publicación de la sentencia; en este caso, la reparación consistirá en una indemnización, la cual será calculada tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, de conformidad con el numeral 41 de dicho ordenamiento jurídico, el cual, además establece que esta indemnización en ningún caso deberá exceder de trescientos cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, esto es \$26,421.50 (veintiséis mil cuatrocientos veintiún pesos 50/100 moneda nacional), que se obtiene de multiplicar el valor de cuenta de la Ciudad de México para el dos mil diecisiete, que equivale a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), por los trescientos cincuenta; lo anterior conforme a la Ley de Ingresos de la Ciudad de



México del ejercicio fiscal vigente y que se visualiza en la dirección electrónica que cuenta con los siguientes datos:

(https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/unidad_cuenta.html)

El modelo de reparaciones plasmado en la ley permite que los juzgadores valoren si cuando es dable condenar por daño moral a una persona que ha excedido los límites de su libertad de expresión es posible que la publicación de la sentencia en el medio y formato donde fue difundido y a costa del demandado, constituya una reparación suficiente y proporcional al daño perpetrado, no obstante, si no fuera posible lo anterior, el juez podrá optar por la regla especial y fijar una indemnización a partir de la ponderación y valoración de los aspectos que se señalan en el artículo 41.

El contenido del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estatuye que: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De la transcripción anterior se aprecia que el régimen convencional contempla un régimen de reparación integral de derechos humanos, donde la reparación ideal, luego de una violación de derechos humanos, es la plena restitución a la víctima, la cual consiste en restablecer la situación al estado que guardaban sus derechos antes de la violación; no obstante ante la limitada posibilidad de que todas las violaciones de derechos humanos sean reparadas en su totalidad, la doctrina ha desarrollado una amplia gama de medidas reparatorias que intentan compensar a la víctima de violaciones de derechos humanos, mediante reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Ilustra lo anterior la tesis aislada siguiente:

Época: Décima Época, Registro: 2010414, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1ª. CCCXLII/2015 (10ª.), Página: 949. ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO. [La transcribe].

Por tanto, la única forma en que el régimen de reparaciones que contempla la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (sic), podría ajustarse al parámetro de control de regularidad constitucional, es estableciendo ambas formas de reparación, es decir, tanto la publicación de la sentencia en el formato y medio en el que fue difundida la expresión que excedió los límites, como condenando al pago de una justa indemnización.

Así, para obtener una indemnización justa, esto es, sin poner tope alguno y sin ser excesiva, es atribuyendo a la autoridad judicial la facultad de determinarlas con base en un principio: las indemnizaciones deben corresponder a la reparación integral del daño; su determinación debe hacerse en forma individualizada, atendiendo a las particularidades de cada caso, incluyendo la naturaleza y extensión de los daños causados, la posibilidad de cubrir los gastos y tratamientos cuando sean necesarios, el grado de incapacidad que pudiera determinarse, el grado de responsabilidad de las partes, su situación económica con la finalidad de fijar el pago de una indemnización por un monto suficiente para atender a las necesidades de cada caso; cabe precisar que la indemnización justa no está necesariamente encaminada a la restauración del equilibrio patrimonial perdido, pues la reparación se refiere a los bienes de la personalidad, de manera que lo que se persigue es una reparación integral, entendida como suficiente y justa para que el afectado pueda atender todas sus necesidades de manera que le permita una vida digna.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso (Velázquez Rodríguez vs. Honduras) consultable en la siguiente dirección electrónica:

(http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf)

estableció que las reparaciones por causa de violación a los derechos humanos, particularmente en lo que toca al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, debe calcularse con base en los principios de equidad y en la apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso; y si bien, dicho Tribunal Interamericano ha utilizado estos principios para calcular indemnizaciones en casos cuyas víctimas han resistido violaciones de derechos protegidos predominantemente por la materia penal, ello no impide que pueda tomarse como referencia, pues considerar un tope máximo dependiendo de la materia, implicaría afirmar que resarcir cierto tipo de derechos se justifica por la mayor importancia de éstos, lo cual sería un desconocimiento de la indivisibilidad que caracteriza a los derechos humanos.

De esta manera, son las circunstancias de cada caso por las que no resulta razonable que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (sic), imponga una cantidad máxima, pues con ello se obstaculiza la labor del juez en el cálculo de una justa indemnización que debe estar basada, como va se ha dicho, en las particularidades del caso y en los principios de equidad, por ello es pertinente desarrollar el contenido de las circunstancias especiales para fijar la indemnización correspondiente.

En mérito de lo anterior, atendiendo a una interpretación de la norma en conjunción con la Constitución Política Federal, los Tratados Internacionales y ejerciendo el principio pro persona y de control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, que obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

FORMA-55

104
257

cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, como sería la de obtener una indemnización justa e integral, es que esta sala prescinda de la aplicación del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (sic), para restituir a la parte actora de su derecho patrimonial violado.

Da pleno sustento al anterior razonamiento, las tesis de jurisprudencia que rezan de la siguiente manera:

Época: Décima Época, Registro: 2014332, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1ª/J: 37/2017 (10a.), Página: 239. INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. [La transcribe].

Época: Décima Época, Registro: 2010954, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1ª/J: 4/2016 (10ª.), Página: 430. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. [La transcribe].

Bajo esa óptica, es que se condena al demandado a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del enjuiciado en el programa televisivo denominado "FERREZ LIVE TV" y en la cuenta del demandado denominada "Ferrezo" en su sección #ElBúhoNoHaMuerto, de internet, al ser en dicho medio y formato donde se difundieron los hechos y opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral del actor, lo anterior se deberá efectuar en el plazo de veinte días contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, pues este término se estima prudente para su cumplimiento, atendiendo a las circunstancias del hecho y de las personas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic).

[...]

Por otra parte, a efecto de establecer un monto de indemnización para la reparación del daño, debido a que se estima insuficiente la condena anterior para restablecer al actor en sus derechos lesionados, debido al tipo de derecho lesionado (honor) y la gravedad del mismo (medio), por los razonamientos expuestos anteriormente y que para mayor claridad más adelante se reiteran; es dable considerar los siguientes aspectos o parámetros de cuantificación del daño moral. Respecto a la víctima, en cuanto al aspecto cualitativo, debe decirse que el tipo de derecho o interés lesionado fue el del honor y su nivel de gravedad se estima medio, ya que fue un servidor público y está expuesto a la crítica generalizada de la población, por los cargos que ocupó dentro de la política, empero, que fue lesionado con frases que se hicieron

públicas de corte ofensivo, denostativas, oprobiosas, que incluso llegaron a la imputación de haber cometido conductas delictuosas; y concerniente al aspecto cuantitativo, no existe probanza alguna con la cual demuestre su situación económica, además de que no comprobó el actor que devengó o tuviera que devengar algún gasto por el daño moral que se le causó; en cuanto a la persona que cometió el daño, su grado de responsabilidad igual se cataloga medio, atendiendo al nivel de gravedad y tipo de derecho lesionado; en cuanto a su situación económica, fueron exhibidos durante la secuela procedimental tres estados de cuenta a nombre del demandado relativos a la cuenta [REDACTED] de Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil doce, teniendo un valor en ese último mes de [REDACTED] y que posteriormente fue cancelada; así como diversos estados de cuenta atinente a la número [REDACTED] de la institución BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, por un periodo del uno de diciembre de dos mil once, al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, con un saldo de [REDACTED] así como de la cuenta [REDACTED] de la misma institución, misma que fue cancelada el veintinueve de julio de dos mil trece; sin contar con inmuebles registrados ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, como consta en el oficio número RPPyC/DJ/SCA/6963/2016, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Subdirector de lo Contencioso y Amparos del referido Registro Público; siendo propietario de un vehículo modelo 1996, sedán, marca Mercedes-Benz, cuatro puertas, como fue informado por el Subdirector de Información registral de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio número SIR-12932-2016, del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

Debe destacarse también que respecto a las demás circunstancias del caso, la parte actora, como se ha señalado, fue un servidor público al haber ocupado diversos cargos dentro de la administración pública en sus tres niveles de gobierno; también fue Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional y que actualmente no se desprende de las actuaciones, si ocupa algún cargo público; en tanto que el demandado es un periodista, conferencista y empresario mexicano con muchos años ejerciendo su profesión en distintos medios de comunicación e internet, como en el que precisamente se divulgaron los hechos o actos causantes del daño al patrimonio moral del actor.

Ilustra la anterior consideración, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación:

‘Época: Décima Época, Registro: 2006880, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 1ª. CCLV/2014, (10ª.), Página: 158. PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE.’ [La transcribe].



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo anterior, se condena al demandado a pagar a la parte actora o a quien legalmente represente sus derechos, [REDACTED]

[REDACTED] por concepto de reparación del daño por la lesión cometida en el patrimonio moral de la parte actora, debido a los parámetros analizados en párrafos que anteceden y en razón de que corresponde al juzgador determinar su cuantificación; lo que deberá cumplir el demandado en el plazo de cinco días contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic).

Los puntos resolutivos quedaron en los siguientes términos:

"PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada por la parte accionante [REDACTED] en la cual probó parcialmente su acción, y la parte demandada [REDACTED] justificó parcialmente sus defensas y excepciones, en términos de los considerandos que anteceden, en consecuencia:

Segundo.- Se declara que el demandado [REDACTED] en abuso al derecho de libertad de expresión, utilizando palabras, frases, expresiones insultantes por sí mismas, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral a la parte actora [REDACTED] afectando su honor, por los motivos y fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Tercero.- Se condena a la parte demandada a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su costa en el programa denominado 'Ferriz LIVE' y plataforma 'Ferrizcope' en su sección '#ElBúhoNoHaMuerto' de Internet, al ser en dicho medio y formato donde se difundieron los hechos y opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral del actor. Lo anterior deberá cumplir el demandado en el plazo de veinte días contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, pues este término se estima prudente para su cumplimiento atendiendo a las circunstancias del hecho y de las personas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic).

Cuarto.- Se condena al demandado a pagar a la parte actora o a quien legalmente represente sus derechos \$ [REDACTED] pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reparación del daño por la lesión cometida en el patrimonio moral de la parte actora, debido a los parámetros analizados en la parte considerativa de esta resolución y en razón de que corresponde al juzgador determinar su cuantificación; lo que deberá cumplir el demandado en el plazo de cinco días contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

506 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic).

Quinto.- Se absuelve a la parte demandada de las prestaciones reclamadas por la actora en los incisos c), d), e), f), g), h) e i), por los motivos y fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo.

Sexto.- No se hace especial condena en gastos y costas en la presente instancia, en términos de los considerandos que anteceden.

Séptimo.- Notifíquese..."

1.3. Juicio de amparo directo Inconforme,

resentó demanda de amparo.

II. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, se hicieron valer diversos conceptos de violación en los que se intentó justificar que las expresiones no violaban el derecho al honor del actor, que no se había probado adecuadamente el daño sufrido, así como que la condena se fijó sin atender la litis y que, en todo caso, estaba imposibilitado para cumplir la condena.

Aunado a lo anterior, en los conceptos de violación sexto y séptimo, el quejoso se dolió del control de convencionalidad que realizó la sala responsable, que llevó a desaplicar el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal; así, en lo que interesa al presente asunto, los argumentos consistieron en:

Sexto:

- La sala responsable realizó un control de convencionalidad indebido y dejó de aplicar los artículos 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Para el control, se debe constreñir a establecer la legalidad del asunto con base en los hechos de la demanda y contestación, así como pruebas y alegatos presentados, velando siempre por los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
- Se necesitan requisitos mínimos como que las normas aplicadas al caso concreto no contravengan ni vulneren ningún derecho humano, lo que obliga al órgano jurisdiccional a realizar un análisis del mismo sin violentar

9
106
759PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de lo planteado por las partes.

- En el caso, las normas no contravienen los derechos humanos, con lo que la decisión de la sala responsable viola el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, así como certeza y seguridad jurídica.
- El acto reclamado no considera la presunción de constitucionalidad que gozan los artículos 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, así, ese pronunciamiento es contrario al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: **"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL NO VULNERA LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE LA GRADACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD"**.
- Así, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevalece y debía aplicarse.
- La sala realiza distinciones y tratos arbitrarios, ya que se pretende aplicar normas y criterios que a todas luces no van dirigidos a resolver el caso concreto, como la tesis aislada de rubro: **"ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO"**.
- La hipótesis prevista se refiere a la reparación cuando las víctimas han sufrido un daño realizado por parte de las autoridades, no así de un particular. No obstante lo anterior, la sala responsable, con base en el criterio, estableció que la única forma en que el régimen de reparaciones podría ajustarse al parámetro de control de regularidad constitucional, es estableciendo ambas formas de reparación, es decir con la publicación de la sentencia y condenando a una justa indemnización.
- La sala considera que el caso Velázquez Rodríguez Vs Honduras, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un parámetro para el cálculo de una indemnización en materia penal, con el argumento de que "ello no impide que pueda tomarse como referencia, pues considerar un tope máximo dependiendo de la materia".
- Se insiste que es indebido ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, respecto de artículos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró constitucionales, porque no violan la doctrina sobre la gradación de medios de exigencia de responsabilidad. Esto es suficiente para no tener sospechas de invalidez de la norma, pues la presunción de constitucionalidad no se ha puesto entredicho.
- La sala incumplió con la obligación prevista en el artículo 1 de la Constitución Federal que considera como última opción la inaplicación de una norma. La responsable dejó de aplicar una norma sin justificar razonadamente cómo es que se destruyó la presunción de constitucionalidad ni consideró una interpretación conforme previo a la determinación.

Séptimo:

- Se violan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la sala fijó una indemnización en términos

del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen el Distrito Federal a pesar que el numeral señala que la indemnización procederá en los casos en que no fuera posible resarcir el daño en términos del diverso artículo 39 de la misma ley.

- En el presente caso, sí se puede llevar a cabo la reparación en términos del artículo 39, pues es posible la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato que fueron difundidas las expresiones ilícitas.
- La reparación es posible, pues en el acto reclamado se ordena que en términos del artículo 39, se divulgue la sentencia condenatoria en la plataforma "Ferrizcope" con una sección "#ElBúhoNoHaMuerto" pese a que no lo había reclamado el actor en el escrito inicial de demanda.
- Lo anterior se traduce en que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil no es aplicable.
- Aunado, se vulnera el principio de congruencia al considerar que no se puede reparar en términos del artículo 39 y por otra parte condena a la divulgación de la sentencia.
- Esto implica una vulneración, ya que se condena a pagar una indemnización de manera arbitraria, aun cuando es posible reparar el daño en términos del artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil.
- En adición, la indemnización fue por [REDACTED] M.N.), pero no se fundó ni motivó adecuadamente para conocer con base en qué precepto se condenó a ese monto. La sala tampoco expresa de forma clara, precisa y suficiente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para concluir que debía condenarse a ese monto preciso.
- La sentencia adolece de una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables respecto a la magnitud o nivel del tipo de derecho o interés lesionado considerando "su nivel de gravedad se estima medio"; así, se abstuvo de motivar adecuadamente de forma que se cumpla el requisito constitucional para todo acto de molestia y justificar que se trataba de un nivel medio de gravedad en el supuesto derecho lesionado. Tampoco tomó en cuenta la mayor o menor divulgación ni las circunstancias del caso, con lo que se violó la seguridad jurídica.
- Adolece de la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso respecto la magnitud o nivel del grado de responsabilidad de la persona que cometió el daño considerando que se "cataloga medio atendiendo al nivel de gravedad".

III. Consideraciones de la sentencia recurrida. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al emitir la sentencia correspondiente, concedió el amparo al quejoso principal y declaró inoperantes los conceptos de violación hechos valer en la demanda adhesiva, al considerar en esencia lo siguiente:

- En un principio, el tribunal colegiado concluyó que los comunicados de quince y diecisiete de enero de dos mil dieciséis traspasaron los límites al



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

10
FORMA A-55

107
760

derecho a la libertad de expresión; esto, toda vez que el quejoso se manifestó con la única finalidad de dañar el honor del tercero interesado.

- Posteriormente, en la parte del estudio titulada "4. Indemnización", el órgano de amparo determinó que eran **parcialmente fundados** los argumentos hechos valer en el **concepto de violación sexto**.
- Para sustentar lo anterior, indicó que los artículos 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen aplicable en la Ciudad de México, establecen como sanción reparatoria principal la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral; como sanción reparatoria establecen una indemnización que no deberá exceder trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, sin incluir los gastos y costas que deberán sufragar y que podrán restituirse conforme al Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
- En ese sentido, advirtió que el patrimonio moral podía ser restituido o reparado, según el caso, conforme a los límites establecidos en la propia norma.
- Luego, puso de manifiesto que el artículo 41 regula una indemnización general y una particular, de forma que los servidores públicos pueden tener una indemnización cuando se viola el patrimonio moral protegido por esa norma; de ahí que, precisó que la sala responsable no debió acotar el análisis de control de convencionalidad al supuesto general, sino que además debió introducir la norma particular, lo anterior, para determinar si efectivamente se transgredía el derecho a una indemnización justa para el caso de afectaciones en derechos extrapatrimoniales.
- Por lo anterior, el tribunal colegiado propuso analizar tanto la indemnización general como particular para determinar si ese precepto transgrede el derecho señalado por la sala responsable.
- Dicho lo anterior, puntualizó que la doctrina de reparaciones integrales emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guarda relación directa con violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos cometidas por parte del Estado; por ello, consideró que su aplicación al caso concreto debía modularse.
- Desde esa perspectiva, consideró que era **ineficaz** la alegación del quejoso en cuanto que bastaba la publicación de la sentencia para reparar la afectación moral del tercero interesado.
- Así, precisó que el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen aplicable en la Ciudad de México, prevé una excepción que debe demostrarse; esto es, si la mera publicación de la sentencia repara la afectación del honor, entonces se debe demostrar fáctica y argumentativamente por quien tiene el carácter de demandado. En ese sentido, como el quejoso no demostró las razones por las que basta la publicación de la sentencia para reparar el patrimonio moral del actor, entonces el tribunal colegiado declaró ineficaz de su argumento.
- En otro orden de ideas, el órgano de amparo advirtió que **el quejoso tenía razón** en cuanto a que el análisis de la norma debió partir de la presunción de constitucionalidad, después de realizar el control difuso de la norma y

- desaplicar sólo en caso de no ser posible sostener la convencionalidad o constitucionalidad mediante la interpretación extensiva o restrictiva.
- Así, consideró que la ley en comento prima la publicación de la sentencia como medio efectivo para reparar las afectaciones de los bienes extrapatrimoniales por el ejercicio indebido del derecho de libertad de expresión. Cuando la publicación de la sentencia es insuficiente para restituir al afectado, entonces se requiere adicionalmente imponer una indemnización en cantidad líquida. Reiteró que el artículo 41 de la multicitada ley regula una indemnización general y una particular.
 - Luego, indicó que los artículos 39 y 41 no son excluyentes, sino complementarios. Lo anterior, de forma que cuando no baste la mera publicación de la sentencia para reparar los daños ocasionados al actor, entonces es necesaria una indemnización pecuniaria adicionalmente.
 - Posteriormente, puso de manifiesto que la norma legal establece un mínimo y un máximo para que los órganos jurisdiccionales condenen al pago de una suma de dinero como medida reparatoria, siempre tomando en cuenta las circunstancias de cada caso.
 - En ese sentido, consideró que para determinar si los límites respetan el derecho fundamental a una indemnización justa, era necesario hacer las siguientes reflexiones:
 - Primero, hizo notar que en el caso estaban en conflicto el derecho a la libertad de expresión de una persona dedicada a la labor periodística y, por otra parte, el derecho al honor de un servidor público.
 - Dicho lo anterior, señaló que el sistema de protección dual que establece la norma para esos derechos, debe guiarse por la doctrina de restricciones previas y responsabilidades ulteriores.
 - Al respecto, retomó la obra de Fernando M. Toller, de título *"El formalismo, en la Libertad de Expresión, Crítica de la Distinción Absoluta, entre Restricciones Previas y Responsabilidades Ulteriores"*, y destacó que la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica desarrolló, en el caso *Blackstone*, la doctrina moduladora del ejercicio de la libertad de expresión frente a la censura.
 - Señaló que la censura previa o responsabilidad ulterior pueden generar perjuicios graves o de carácter irreparable, según el derecho que se pretende tutelar, por lo que debe analizarse el tipo de sanción que se impondrá en cada caso.
 - Resaltó que el autor refiere a la doctrina mayoritaria emitida sobre el artículo 13, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues favorece la postura de vedar toda intervención previa (censura) a la libertad de expresión, y en consecuencia, la persona que afecta un derecho fundamental mediante el ejercicio de esta libertad, sólo sea objeto de responsabilidades ulteriores.
 - También destacó que para el autor la doctrina debe tener un funcionamiento objetivo para lograr la protección de los derechos en juego. Así, destacó que las responsabilidades ulteriores enfrían la libertad de expresión, pero las medidas previas la congelan; por ello, la incertidumbre de ser o no demandado o procesado y, eventualmente sancionado por una sentencia impredecible (económicamente hablando), puede impactar directamente en la difusión de la información, más allá del efecto que en concreto tenga contra quien se aplique por abuso de un derecho.
 - Dicho lo anterior retomó el caso *Lingens Vs Austria*, donde el Tribunal Europeo destaca el hecho que la aplicación de una sanción a un informador



puede desanimar al resto de los periodistas a contribuir a la libre discusión de los problemas que afectan a la comunidad.

- Dicho lo anterior, el tribunal colegiado advirtió que la censura previa tiene dos vertientes: (i) la directa que se verifica cuando se establecen normas jurídicas que coartan la circulación de determinadas ideas en la sociedad; y (ii) la indirecta que se actualiza cuando las normas jurídicas, sin coartar la libre circulación de ideas, establecen sanciones de tal magnitud que inhiben el debate abierto de ideas.
- De este modo, determinó que las sanciones ulteriores deben tener una graduación específica, así como que de ninguna manera deben generar la inhibición de la libre expresión de ideas, porque se generaría una censura previa indirecta.
- Por otro lado, manifestó que al igual que en el derecho al honor, los periodistas adquieren prestigio por sus comunicados y la sanción consistente en publicar una sentencia en la que se determine que afectaron el honor de una persona en sí misma es relevante para restituir al actor de las afectaciones a sus bienes extrapatrimoniales.
- De esta forma, estableció que la norma otorga una relevancia especial a la publicación de la sentencia como medida reparatoria, que al posible pago económico que pueda recibir el afectado.
- Por lo expuesto, el tribunal colegiado concluyó que las sanciones que establezca la norma legal por afectación del derecho al honor, debe permitir obtener una restitución y reparación del afectado, sin trastocar la libertad de expresión.
- Dicho lo anterior, señaló que la sala responsable desaplicó indebidamente el artículo 41 de la ley multicitada, pues la libertad de expresión no puede sujetarse a sanciones económicas excesivas, que para el caso concreto se tradujo en la inexistencia de parámetros que los comunicadores conozcan de antemano, ante el abuso del ejercicio de la libertad de expresión.
- De modo que, como medida reparatoria, la sanción económica no es aislada, siempre se acompaña de la publicación de la sentencia que determine, que un periodista realizó un ejercicio indebido de la libertad de expresión.
- Como consecuencia, indicó que la sala no debió aplicar de manera absoluta la doctrina de reparaciones integrales desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto, pues soslayó que está en juego la libertad de expresión y no la violación grave y sistemática de derechos humanos por parte del estado.
- En tal virtud, el artículo 41 es acorde a la libertad de expresión y el derecho al honor, especialmente cuando se trata de un servidor público, y por tanto, fue incorrecto que se ordenara su desaplicación por el tribunal de alzada, cuando su finalidad es evitar la censura previa indirecta.
- Por lo anterior, consideró que debía restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, y otorgó el amparo para que el tribunal de alzada:
 - Dejara insubsistente la sentencia reclamada.
 - Reiterara las consideraciones que no forman parte de la ejecutoria.
 - Desestimara los agravios expresados contra el parámetro establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil

para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, como medida reparatoria del derecho al honor.

- Realizara una versión simplificada de la sentencia en cuestión, siguiendo los parámetros dados en la ejecutoria.
 - Fijara una reparación económica con libertad de jurisdicción, dentro de los límites previstos en el precepto citado con antelación.
- Finalmente, en cuanto al amparo adhesivo, el tribunal colegiado declaró que los conceptos de violación eran inoperantes, pues no abundaron sobre los aspectos analizados por la sala responsable ni explicó bajo qué otra óptica podrían analizarse los programas en que se sustentó la sentencia condenatoria, para llegar a la misma conclusión, es decir, no se encaminaron a fortalecer las consideraciones de la sala.

IV. Agravios. En el escrito de agravios la recurrente argumenta, en síntesis:

Primero

- La sentencia impugnada es ilegal en el numeral denominado "4. *Indemnización*", ya que limitó la protección de los derechos humanos y el patrimonio moral del afectado, con base en un ordenamiento inferior e inconstitucional (los artículos 33 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México).
- En concreto, el tribunal colegiado afirmó que los daños extrapatrimoniales —como el honor, dignidad humana, sentimientos, concepto que los demás tienen de una persona— no pueden sujetarse a sanciones económicas excesivas. Se pasa por alto que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal, el Estado tiene la obligación de respetar sin distinción o discriminación los derechos y libertades.
- Así, el tribunal colegiado privilegió los artículos 33 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México por violentar los derechos humanos al haber



determinado que el carácter de servidor público le hace menos merecedor de respeto a los derechos humanos.

- Esa determinación implica que el patrimonio moral del afectado carece de valor y queda al libre arbitrio del juzgador establecer que la afectación causada, no está sujeta a sanciones económicas excesivas; asimismo, como consecuencia se considera que la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, es suficiente para que opere la reparación del daño.
- No debe pasar desapercibido que el demandado afectó el patrimonio moral por medios electrónicos (la emisión del quince de enero de dos mil dieciséis, en la plataforma "Ferrizcope", en la sección "#ElBichoNoHaMuerto", así como en una entrevista documentada en la página de internet de [REDACTED]).
- Luego, si la publicación de la sentencia condenatoria se realiza en los medios y formatos señalados, en realidad sería una sanción reparatoria laxa, toda vez que el costo por publicitar vía electrónica es bajo.
- Lo anterior es relevante si se toma en cuenta el nivel y capacidad económica del demandado, pues de las constancias que obran en autos —concretamente los informes rendidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores—, se sabe el monto al que ascienden sus ingresos, vive en una de las colonias más caras y exclusivas de la Ciudad de México, se traslada en autos de lujo de su propiedad y lleva una vida acomodada y ostentosa. Todos estos son los motivos por los que la sentencia condenatoria no castiga el comportamiento ilícito del comunicador, pues no se recibe una indemnización justa.

- De conformidad con la sentencia de amparo, el tribunal colegiado señaló que [REDACTED] afectó el patrimonio moral del actor y causó daño moral que no puede ser restituido; entonces, es evidente que procede el pago de una justa indemnización. Lo anterior con motivo del valor supremo que tiene la dignidad humana, la cual debe respetarse en su calidad de derecho moral.
- Así, con la lesión en la dignidad, honor y reputación, no existe motivo para que la reparación sea menor, ya que conllevaría a discriminación. La dignidad humana constituye el derecho de las personas a ser tratadas como tal y a no ser humilladas, degradadas o envilecidas, por lo que la norma jurídica debe tutelar, consagrar y defender el derecho fundamental descrito por igual.
- Por lo anterior, la sentencia impugnada viola derechos humanos, ya que establece un límite a la reparación del patrimonio moral con el argumento relativo a que el artículo 41, estrechamente relacionado con el diverso 33, de la multicitada ley, regula una indemnización general y una particular, de lo que se obtiene que los servidores públicos son susceptibles de indemnización hasta un 30% (treinta por ciento) del monto señalado en la parte general del precepto.
- De esta forma, los artículos tildados de inconstitucionales restringen el goce de los derechos humanos relativos a la dignidad humana, honor, en general, del patrimonio moral; esto, en franca discriminación, como consecuencia del ejercicio de las funciones que se desempeñaron como funcionario público.
- Se estima que es erróneo e ilegal el valor otorgado en los artículos 41 y 33 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México que regulan indemnizaciones en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

lo general y lo particular, así como la afirmación relativa a que la sala responsable no debió acotar el control de convencionalidad al supuesto

general, refiriendo que debió introducir la norma particular para determinar si efectivamente se violaba el derecho a una justa indemnización en caso de afectación a los derechos patrimoniales.

- El control de convencionalidad *ex officio* impone la obligación a los tribunales colegiados para que en el amparo directo analicen preponderantemente el respeto de los derechos y libertades que han sido violados, disponiendo que deberán repararse las consecuencias del daño o en su defecto, el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. De esa forma, donde la ley no distingue, no debe hacerlo el juzgador, de conformidad con los artículos 10, 11 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- En el caso, el órgano de amparo demostró los derechos humanos y la dignidad del recurrente, puesto que refirió que la doctrina de reparaciones integrales emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo era aplicable para violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas por parte del Estado. En ese sentido, estableció una modulación en materia de reparación pecuniaria que violenta los derechos del recurrente.
- El modelo de control difuso de constitucionalidad es obligatorio. Por ello, el control por parte de los juzgadores en materia local durante los procesos ordinarios, implica que están obligados a preferir los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, por lo que debe dejar de aplicarse la norma inferior cuando lo amerite. De conformidad con el artículo 1 de la

Constitución Federal, los juzgadores tienen la obligación de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad *ex officio*.

- De forma incorrecta, el tribunal colegiado estimó que el tribunal de alzada desaplicó indebidamente la normatividad contenida en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (concretamente artículos 33 y 41). Lo anterior porque señaló que la libertad de expresión no puede sujetarse a sanciones económicas excesivas; asimismo, resaltó que tratándose de servidores públicos, el pago económico es de relevancia menor frente a la publicación de la sentencia, por lo que la retribución monetaria puede disminuirse en hasta un 70% (setenta por ciento).
- Las consideraciones del órgano de amparo (los artículos son acorde a la libertad de expresión y el derecho al honor especialmente para el caso de servidores públicos, así como que la justa indemnización es para violaciones graves y sistemáticas por parte del Estado) son incorrectas, puesto que el numeral 1 del artículo 63, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no hace distinción alguna relativa a las actividades o funciones que desempeña la persona cuyos derechos o libertades han sido violados. El artículo simplemente establece que las consecuencias del daño deben repararse o, en su caso, proceder al pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
- De la misma forma, el artículo 11 de la convención tampoco hace distinción alguna respecto de la función pública del afectado, sino que se protege la honra y dignidad por el simple hecho de ser humano.



14
FORMA-05
111
969

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

• Así, no hay razón para distinguir, como indebidamente lo hizo el tribunal colegiado, los derechos previstos en los artículos 10, 11 y 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de rubro: **"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DEL QUE SE TRATE ESTE CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL"**, se establece la obligación de ejercer el control en cualquier circunstancia, aun en casos en los que el derecho humano esté regulado en la Constitución Federal; esto, ya que las autoridades están obligadas a velar por los derechos humanos sin distinción.

Segundo

- Los artículos 33 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México pugna con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Para acreditar lo anterior, se retoma la exposición de motivos de la legislación local, cuyo fundamento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, de conformidad con la exposición de motivos, se destaca que las libertades de expresión e información no son un derecho absoluto, con lo que la legislación local, lejos de ser tolerante —hablando pecuniariamente— con el infractor, es el camino para lograr una reparación del daño por la vía civil y reducir en mayor medida la solución por la vía penal.

- El párrafo 17 de la exposición de motivos establece que se busca reservar el expediente penal para el menor número de casos, pero esto no significa justificar conductas ilícitas o autorizar la impunidad de éstas; lo anterior, simplemente implica reconducir al justiciable a la vía civil, de forma que los hechos se juzguen racionalmente y el auto sea sancionado como corresponda. La despenalización no significa autorización ni impunidad.
- Los artículos 33 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México violenta los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, al establecer parámetros ilegales en materia de derechos humanos y reparación del daño. En la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "**DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE**", refiere que el derecho no debe restringirse innecesariamente, como acontece.
- De la misma forma, los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que el derecho a la reparación integral del daño debe anular las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación al momento antes del ilícito, y de no ser posible, se procede al pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados.
- El criterio establece que limitar la responsabilidad fijando un tope o tarifas es injusto y margina las circunstancias del caso; de ahí que, devienen inconstitucionales los artículos 33 y 41 de la ley multicitada, más cuando ya se acreditó que es imposible restablecer el patrimonio moral como estaba antes del ilícito.



- Al limitar la responsabilidad del agraviante, también restringe al juzgador para cuantificar justa y equitativamente según las particularidades del caso, con lo que se violan los derechos humanos, la Constitución Federal y genera falta de certeza y seguridad jurídica.
- El tribunal colegiado omitió realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad *ex officio*, pues se limitó a citar criterios y casos concretos cuando el deber era dar el carácter de obligatoriedad a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los criterios del Alto Tribunal no son susceptibles de someterse a control de constitucionalidad o convencionalidad por órganos judiciales de menor grado, pues genera falta de certeza y seguridad jurídica.
- Es inconstitucional el razonamiento del tribunal colegiado respecto del monto de la indemnización. Oportunamente se hizo notar que el límite (trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México) previsto en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México, pues el límite máximo previsto en el artículo 41 trasgrede las garantías individuales y los derechos humanos previstos en los artículos 1 y 133 constitucionales, así como los tratados internacionales. Así, se estima inconstitucional, pues va más allá del derecho a la justicia completa.
- Los artículos 33 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen deben declararse inconstitucionales, pues no hay una justa reparación. La sanción impuesta al demandado en el juicio de origen atenta contra el principio de "justa indemnización" o "indemnización integral" que se traduce en el restablecimiento de la situación anterior y de no ser esto posible establecer el pago

de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar, el cual debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió existir si es que el acto no hubiere acontecido.

- Es aplicable el criterio de rubro: ***"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA"***.
- El tribunal colegiado viola los artículos 1 y 133 constitucionales, así como los lineamientos de la corte interamericana, relativos a la naturaleza y alcances de la obligación de reparar y dentro de éstos, el concepto de daño inmaterial, así como los supuestos en los que corresponde la indemnización según el daño causado.
- El documento denominado "Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones" aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Corte Interamericana señaló que la reparación adecuada del daño sufrido debe concretizarse con medidas individuales tendientes a restituir e indemnizar.
- Por lo anterior, el artículo 41 de la ley en comento es inconstitucional porque establece límites a las indemnizaciones debidas a los perjudicados por daños morales, con lo que restringe injustificadamente el derecho a una reparación justa e integral. Si bien es cierto que la voluntad del legislador fue la de evitar reclamos injustificados e indemnizaciones excesivas, también lo es que el derecho a obtener medidas compensatorias en los casos que lo ameritan, tiene mayor valor que la voluntad estatal de limitar el monto de las reparaciones.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

16
CORONA-BS
113
266

- El artículo 63.1 del Pacto de San José señala que cuando se determine que existió una violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención; la Corte Interamericana dispone que se garantice al lesionado con el goce de su derecho o libertad conculcados; lo anterior, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias o la situación anterior a la vulneración de los derechos y el pago a una justa indemnización.
- Por lo anterior, son inconstitucionales los artículos 33, 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México, en tanto que se vulnera el derecho a una justa indemnización previsto en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 1 constitucional. El tope máximo establecido permite limitaciones irracionales al derecho a ser indemnizado de manera integral.

Tercero

- Se ha sido objeto de discriminación en relación con la violación a la dignidad como ser humano, lo que se traduce en la inconstitucionalidad de los artículos 33, 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
- Se llevó a cabo un trato desigual al aminorar la reparación del daño, en virtud de la calidad de servidor público. Las personas, como individuos, tienen el derecho humano fundamental a ser tratado de forma que se reconozca como persona, por lo que no hay que distinguir donde la propia ley no lo hace. La dignidad tiene valor, mas no precio, por lo que nadie puede ser menospreciado.

- La protección de la dignidad no le compete al individuo, sino al Estado mexicano, pues éste quien vela, responde y privilegia la defensa en la forma establecida en el artículo 1 constitucional.
- Los artículos 33, 39 y 41 de la ley en comento, violan el artículo 1 de la Constitución Federal y menoscaban los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales; esto, toda vez que limitan los derechos a la protección de la dignidad como humano, al supeditarla a la condición de servidor público en términos del artículo 33.
- La dignidad es incuantificable, por lo que fijar un tope a la indemnización y disminuir hasta en un 70% (setenta por ciento) la cantidad máxima establecida en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, se traduce en actos de humillación y degradación consentidos.
- El artículo 33 de la citada ley violenta flagrantemente derechos humanos y dignidad del justiciable al imponer grados o topes dependiendo de la función pública. La dignidad que se posee como persona no puede ser motivo de grados, topes o medidas, pues no puede hablarse de menos o más dignidad dependiendo de puestos de responsabilidad u ocupaciones. La dignidad es intrínseca a la persona y no por la actividad que desarrolla.
- La distinción es inconstitucional, pues de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se prevén los derechos humanos sin distinción alguna que sustenta la universalidad en la esencia humana, que es la misma en todo humano.
- El Preámbulo de la Declaración refiere que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Asimismo, los artículos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

17
114
867

1 y 2 confirman el preámbulo. Todos los preceptos internacionales condenan toda discriminación sobre los derechos de los humanos. Esos preceptos establecen la igualdad ante la ley e igual protección contra toda discriminación y provocación, tal como lo establece el artículo 7 de la Declaración.

- Por lo anterior, los artículos 33, 39 y 41 de la ley multicitada son discriminatorios al limitar los derechos de los servidores públicos por encuadrarse su actividad profesional dentro de esa categoría.
- Los razonamientos y fundamentos de igualdad y no discriminación son suficientes para acreditar la ilegalidad de la sentencia en revisión, la cual pretende imponer restricciones a los derechos humanos.
- El tribunal colegiado pretende restringir el honor y la reputación, al señalar que los derechos no se reconocen expresamente en el texto constitucional. Esa afirmación es a todas luces discriminatoria, inconstitucional y violatoria de derechos humanos. El hecho que la Constitución Federal no los mencione explícitamente no hace menos grave la falta cometida por el demandado, ya que se encuentran implícitos en el reconocimiento a la dignidad humana.
- El hecho de no proteger porque el texto constitucional no contempla el término, es hacer letra muerta el trabajo realizado en materia de derechos humanos. Si los derechos al honor y la reputación no se encuentran reconocidos expresamente, la protección a la dignidad sí lo está, con lo que no puede estar correctamente regulada si intrínsecamente no se da valor a los derechos en conflicto.
- La base esencial de los derechos humanos es la dignidad, pues no pueden existir sin ésta. El respeto a la dignidad de las

personas está inmerso. En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar y hacer respetar la dignidad, con lo que se limita a las autoridades para que no traten a un individuo de forma contraria.

- Por lo anterior, el tratamiento dado al quejoso en la sentencia de amparo contradice los principios de protección a derechos humanos.
- El Estado debe garantizar los derechos humanos, por lo que debe decretar la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México. De conformidad con el caso *Velázquez Rodríguez vs Honduras*, el Estado está obligado a generar las condiciones legales para asegurar a todo justiciable el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, incluyendo los caos en los que las violaciones se cometen por particulares; esto, de conformidad con el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
- Asimismo, el Estado tiene el deber de resarcir a la víctima de los daños causados; entendiendo que la reparación es volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de cometida la violación o, en su defecto, remediar las consecuencias generadas por el agravio cometido. Como menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Garrido y Baigorria vs Argentina*, la reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad, lo cual involucra una indemnización apropiada.
- Las medidas resarcitorias o indemnización no deben limitarse fijando un techo cuantitativo. Así, una indemnización no es justa ni equitativa cuando se sujete a topes y tarifas el monto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

FORMA 18
115
768

indemnizatorio, ya que el legislador no debe tener la facultad de cuantificar. Sólo puede hacerlo el juez, puesto que conoce las particularidades del caso. Lo anterior se fundamenta con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **"DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE"**.

Cuarto

- El criterio de rubro: **"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS"** establece que ningún derecho fundamental es absoluto; por lo que admite restricciones; no obstante, las restricciones no pueden ser arbitrarias y deben cumplir ciertos requisitos.
- Así, la suspensión y restricción de derechos humanos no es aplicable en el caso particular. La Constitución Federal prevé que cuando la sociedad o el propio Estado están en condición de peligro grave, el ejercicio de determinados derechos y garantías puede suspenderse o restringirse; esto, para hacer frente a la situación como una medida pronta y eficaz que garantice la función del sistema. Aunado, el artículo 29 constitucional establece los casos en los que se podrán restringir o suspender los derechos humanos y sus garantías, para hacer frente a los casos de perturbación o invasión de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro grave o conflicto.
- Por lo expuesto, no existe motivo ni razón fundada para que la sentencia impugnada no haya respetado los derechos humanos y garantías del quejoso por el simple hecho de ser servidor

público, según se establece en el artículo 33 de la ley en la materia.

- Aunado a lo anterior, el artículo 29 de la Constitución Federal establece que en ningún tiempo se puede restringir ni suspender el ejercicio de los derechos a la no discriminación y la integridad personal, debiendo ser proporcional al peligro que se hace frente, anteponiendo los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad y no discriminación.

Quinto

- En la sentencia de amparo, se estableció que el demandado incurrió en responsabilidad civil, ya que violentó el honor del actor al acreditar que las expresiones se hicieron con malicia efectiva; sin embargo, **no debe existir un tope indemnizatorio** en los términos que establece el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil, toda vez que no puede considerarse que las expresiones ilícitas justifiquen un tope por el daño generado.
- Ya se acreditó que las expresiones de [REDACTED] fueron ilícitas, por lo que es suficiente para acreditar que la sanción pecuniaria **no debe toparse en términos del artículo 33** de la Ley de Responsabilidad Civil. Las expresiones se hicieron con el único propósito de dañar, con total despreocupación y a sabiendas de que las afirmaciones eran falsas.
- Asimismo, por lo anterior se estima que el artículo 33 de la Ley de Responsabilidad Civil es contrario al derecho a una justa indemnización previsto en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Finalmente, se destaca que una indemnización alta no debe considerarse como censura previa indirecta o inhibidora del ejercicio de la libertad de expresión; esto, ya que quedó



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

19
FORMA A-55
116
769

establecido que no existe protección constitucional hacia el insulto ni conductas dolosas o temerarias del comunicador que difunde información falsa, con total despreocupación y con el único propósito de dañar.

QUINTO. Requisitos indispensables para la procedencia del recurso. Una vez que se conocen las cuestiones que se estiman necesarias para resolver el presente asunto, en primer término se debe establecer si el presente recurso es procedente.

Para ese efecto, se debe tener presente que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras".

En la exposición de motivos de la reforma que dio origen a la redacción del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se señala que entre los objetivos de la reforma se persigue fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra

Constitución, a fin de que pueda concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que revistan la mayor importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico nacional y del Estado Mexicano en su conjunto.¹³

De esta manera, la Ley de Amparo, en el numeral conducente establece:

"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

[...]

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras".

Lo anterior pone en claro que la procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias emitidas en los juicios de amparo

¹³ En la exposición de motivos mencionada se indica, entre otras cosas, lo siguiente:

"... Siendo la idea eje de la reforma, como lo afirma la exposición de motivos, la de perfeccionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como supremo interprete de la Constitución y asignar a los Tribunales Colegiados el control total de la legalidad en el país.

Estas fueron las reformas que habilitaron y fueron el antecedente directo para la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación efectuado en la reforma de diciembre de 1994, de donde resultó la organización competencial y estructural actual de los órganos que lo integran. Esta última reforma no es, entonces, una modificación aislada, sino una más en una línea continua y sistemática de modificaciones con las mismas ideas fundamentales que se fueron gestando desde la década de los cuarentas en nuestro país y que le ha permitido una constante evolución y perfeccionamiento de la estructura y función de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación.

La reforma que aquí se presenta a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se inscribe en esta lógica, la de fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra Constitución que pueda concentrarse en la resolución de los asuntos de importancia y trascendencia para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del estado mexicano en su conjunto.

Lo anterior claramente debe pasar por el fortalecimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito y el reconocimiento de sus integrantes como conformadores de los criterios de interpretación de legalidad. Este fortalecimiento debe ser, además, consistente con las anteriores reformas y con las ideas que las sustentan para lograr una consolidación adecuada del sistema en su totalidad y no como soluciones parciales y aisladas que no son consistentes con la evolución del sistema judicial mexicano."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

20
FORMA A-05
117
770

directo es de carácter excepcional; y que por ende, para su procedencia, es imprescindible que se surtan los siguientes requisitos:

1. Que en la sentencia recurrida se haya hecho un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o derecho humano establecido en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte; o que habiéndose planteado expresamente uno de esos temas en la demandada de amparo, el Tribunal Colegiado haya omitido pronunciarse al respecto, en el entendido de que se considerará que hay omisión cuando la falta de pronunciamiento sobre el tema, derive de la calificativa de inoperancia, insuficiencia o ineficacia de los conceptos de violación efectuados por el Tribunal Colegiado¹⁴; y

2. Que el problema de constitucionalidad resuelto u omitido en la sentencia de amparo, sea considerado de importancia y trascendencia, según lo disponga el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus acuerdos generales.

Con relación a este segundo requisito el Pleno de este Alto Tribunal emitió el Acuerdo General 9/2015, en el cual se consideró que la importancia y trascendencia sólo se actualiza cuando:

- i) El tema planteado permita la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional;
- o

¹⁴ Esto es acorde con lo establecido en el Punto Tercero, inciso III del Acuerdo General 9/2015.

- ii) Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de algún criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entendido de que el criterio en cuestión necesariamente deberá referirse a un tema de naturaleza propiamente constitucional, ya que de lo contrario, se estaría resolviendo en contra de lo que establece el artículo 107, fracción IX de la Constitución Federal.

SEXTO. Análisis de los requisitos de procedencia en el caso concreto. Expuesto lo anterior, esta Primera Sala estima que el presente asunto cumple parcialmente con los requisitos de procedencia, como se demuestra a continuación.

En un principio, se pone especial énfasis en que el recurrente tuvo el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo, de tal forma que el planteamiento de constitucionalidad se hizo hasta la exposición de los agravios, no así en la demanda de amparo. Al respecto, debe recordarse que, por regla general, no es posible introducir cuestiones de constitucionalidad en los agravios del recurso de revisión, si los planteamientos no se hicieron valer en la demanda de amparo.

No obstante, esta regla sólo es aplicable cuando, derivado de las particularidades del caso, los agravios son la única vía con la que cuenta el recurrente para hacer valer sus planteamientos de constitucionalidad; lo anterior acontece, por ejemplo, cuando no se está en aptitud de acudir al juicio de amparo en calidad de quejoso, o porque estándolo, el planteamiento de constitucionalidad deriva de la resolución del tribunal colegiado de circuito, al ser esta sentencia el primer acto en el que se aplica la norma combatida.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

21
FORMA A-65

118
771

Lo anterior tiene fundamento en la tesis aislada emitida por esta Primera Sala, de rubro y

texto:

Tesis: 1a. XLII/2017 (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época	2014101	1 de 11
Primera Sala	Tomo 41, Abril de 2017, Tomo I	3	Tesis Aislada (Común)

"AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SUPUESTO EN EL QUE LA INTRODUCCIÓN DEL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO PUEDE DAR LUGAR POR EXCEPCIÓN A SU PROCEDENCIA. Esta Primera Sala ha sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, que no es posible introducir cuestiones de constitucionalidad en los agravios del recurso de revisión si dichos planteamientos no se hicieron valer en la demanda de amparo. Sin embargo es importante entender que dicha regla está construida bajo un presupuesto lógico específico, que tales planteamientos hubieran podido ser formulados desde la demanda de amparo, por lo que si el quejoso estuvo en aptitud de hacerlo y fue omiso, entonces no resulta posible que los introduzca con posterioridad, en los agravios del recurso de revisión, pues ello implicaría variar la litis del juicio de amparo. En consecuencia, debe decirse que esta regla no cobra aplicación cuando derivado de las particularidades del juicio de amparo, los agravios formulados en el recurso de revisión constituyen la única vía con la que cuenta el recurrente para hacer valer sus planteamientos de constitucionalidad, ya sea porque no estaba en aptitud de acudir al juicio de amparo en calidad de quejoso, o bien porque estando el planteamiento de constitucionalidad deriva de la resolución del tribunal colegiado de circuito, al ser dicha sentencia el primer acto de aplicación de la norma combatida o la primera vez que se introduce la interpretación constitucional que se controvierte, sin que ello de ninguna manera implique derogar los requisitos de procedencia del recurso de revisión, ni mucho menos desvirtuar su naturaleza excepcional".

En ese sentido, cuando en el recurso de revisión se plantea el análisis de constitucionalidad de una norma aplicada por primera vez en la sentencia del tribunal colegiado, se debe verificar que: (i) de las consideraciones de la resolución emitida por el órgano colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de aplicación de la norma general cuya regularidad constitucional se impugna en la revisión; (ii) ello trascienda al sentido de la decisión adoptada; (iii) se verifique en la secuela procesal del asunto que se trata del primer acto de

aplicación de la norma en perjuicio del recurrente; y (iv) se presenten argumentos mínimos para combatirla. Sirve de apoyo y se comparte la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro y texto:

Tesis: 2a./J. 13/2016 (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época.	2010986	4 de 11
Segunda Sala	Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I	Pág. 821	Jurisprudencia(Común)	

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCI/2014 (10a.) (*), sostuvo la posibilidad de plantear en el recurso de revisión la inconstitucionalidad de una norma general aplicada por primera vez en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito. Así, cuando esto suceda, es necesario hacer un análisis integral del asunto, en el que se verifique lo siguiente: 1. De las consideraciones de la resolución emitida por el órgano colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de aplicación de la norma general cuya regularidad constitucional se impugna en la revisión; 2. Que ello trascienda al sentido de la decisión adoptada; 3. Verificar en la secuela procesal del asunto, que se trate del primer acto de aplicación de la norma en perjuicio del recurrente, ya que de lo contrario tuvo la obligación de reclamarla desde la demanda de amparo, con lo cual se cierra la posibilidad de que se utilice ese recurso como una segunda oportunidad para combatir la ley, lo que no es jurídicamente posible en términos de la jurisprudencia 2a./J. 66/2015 (10a.) (**); y, 4. Se estudien en sus méritos los agravios, para lo cual, debe tenerse presente que, acorde con la manera en que deben impugnarse las leyes en el juicio de control constitucional, el accionante debe presentar argumentos mínimos, esto es, evidenciar, cuando menos, la causa de pedir; por ende, resultan inoperantes o ineficaces los contruidos a partir de premisas generales y abstractas, o cuando se hacen depender de situaciones particulares o hipotéticas”.

De esta forma, del análisis de los autos se advierte que el recurrente acude a esta instancia y se duele principalmente, de la inconveniencia e inconstitucionalidad de los dos párrafos que conforman artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, en relación con los diversos 33 y 39 de la misma ley.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

22
FORMA A-25
119
772

Como consta en el considerando anterior, se advierte que en la primera instancia, el juez de origen señaló que era improcedente la acción. En la sentencia de apelación, la sala revocó la resolución recurrida y sustancialmente indicó que el demandado (quejoso en el juicio de amparo) había incurrido en responsabilidad, toda vez que sus publicaciones habían vulnerado el derecho al honor del actor (tercero interesado, ahora recurrente); aunado a lo anterior, el tribunal de alzada llevó a cabo el control de convencionalidad difuso y desaplicó parte de los artículos 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, en tanto que el primer precepto no permitía que en la condena coexistiera la publicación del extracto de la sentencia, así como una indemnización monetaria, y por otra parte, estimó que no podía establecerse un tope máximo para el cálculo de la indemnización, pues era contrario al derecho a una indemnización justa reconocido en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hecho lo anterior, condenó tanto a la publicación de la sentencia, como a la indemnización de una cantidad mayor al tope establecido en el artículo 41 de la ley en comento.

Como consecuencia de lo anterior, el demandado acudió al juicio de amparo, y se solicitó de la desaplicación realizada con motivo del control de convencionalidad difuso.

Luego, el tribunal colegiado determinó que la decisión de la sala responsable era indebida; esto, toda vez que: (i) los artículos 39 y 41 no son inconstitucionales, pues no debían interpretarse como excluyentes, en tanto que es posible decretar el pago de una cantidad en efectivo cuando se justifique que la publicación del extracto de la

sentencia condenatoria no sea suficiente para restituir al afectado en sus derechos; (ii) sólo se estudió la constitucionalidad de la indemnización general prevista en el artículo 41, con lo que debía hacerse el estudio tanto del supuesto general, como del particular (relativo a los servidores públicos); y (iii) el artículo 41 era constitucional, ya que, en temas de libertad de expresión, las sanciones debían tener una graduación específica para que no fueran excesivas y que los comunicadores conocieran los parámetros de antemano, con lo que se pretende evitar la censura previa indirecta.

Dadas las consideraciones, el tribunal colegiado concedió el amparo a la parte quejosa y ordenó que se revocara la sentencia de segunda instancia; lo anterior, para efecto que se dictara otra resolución en la que desestimara los agravios expresados contra el parámetro establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, y fijara una reparación económica con libertad de jurisdicción, dentro de los límites previstos en dicho precepto.

Expuesto lo anterior, se tiene parcialmente cumplido el primer requisito, puesto que efectivamente se trata del primer acto de aplicación únicamente por lo que hace a la primera parte del artículo 41 multicitado, no así por lo que hace a la segunda; esto, se evidencia en atención al artículo que estudió el tribunal colegiado, que es al tenor literal siguiente:

“Artículo 41. En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

13
FORMA-05
120
773

sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código (sic) Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo.

De la transcripción, se advierte que el límite previsto en el primer párrafo es aplicable para todos los casos y sin opción para el juzgador; de ahí que, si bien no ha perjudicado directamente al tercero interesado, existe una aplicación inminente que la sala responsable no podrá eludir.

No obstante, por lo que hace al segundo párrafo se trata de un caso diferente, en tanto que el precepto establece que la indemnización que se fije puede disminuirse cuando el afectado sea un servidor público, siempre y cuando el juzgador lo considere viable en atención a las particularidades del caso; en ese sentido, la aplicación de ese precepto es incierta, toda vez que el contenido del mismo no obliga a su aplicación tajante sino que establece la alternativa para que el juzgador reduzca el monto en atención a las circunstancias que se someten a su consideración.

Hecha la precisión anterior y acatando, se estima que se cumple con el siguiente requisito, pues es claro que se trata del primer acto de aplicación de las normas en perjuicio del ahora recurrente, ya que no aconteció previamente en la secuela procesal; si bien el tribunal de alzada hizo mención del artículo 41, en realidad lo desaplicó por considerar que era inconveniente con lo que no existe acto de aplicación previo.

Adicionalmente, se considera que la determinación del tribunal colegiado trascendió en el resultado del fallo, puesto que concedió el amparo a la parte quejosa y ordenó que el tribunal de alzada desestimara los agravios expresados —mismos que se limitaron a impugnar el primer párrafo del artículo 41—, realizara una versión simplificada de la sentencia para su publicación como condena y fijara una reparación económica con libertad de jurisdicción dentro de los límites previstos en el artículo 41 citado (lo que inevitablemente implica una reducción sustancial al monto que ya se había fijado, mismo que no podrá exceder trescientos cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente).

Finalmente, también se estima que se cumple con el último requisito, toda vez que el recurrente impugna esa determinación y hace valer la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos tanto del artículo 41, como de los diversos 33 y 39 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal con base en tres argumentos: (i) se vulnera el derecho a una indemnización justa porque los preceptos establecen un tope máximo para que el juez fije la indemnización económica; (ii) se vulnera el principio de igualdad al establecer un tope máximo aún menor cuando los afectados son funcionarios públicos, y en consecuencia, se limita su derecho al honor y dignidad; y (iii) la restricción a su patrimonio moral es indebida porque no encuentra justificación en los supuestos del artículo 29 constitucional.

Una vez acreditado que subsiste la materia de constitucionalidad sólo por lo que hace a los agravios planteados en relación con el primer párrafo del artículo 41 de la de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

24
FORMA A-05
121
774

Imagen en el Distrito Federal, esta Primera Sala estima que también se satisface el segundo requisito de procedencia; esto, toda vez que la resolución daría lugar a reiterar el criterio y crear jurisprudencia respecto del tema relacionado con el derecho a una indemnización justa y a la reparación integral conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en concreto, en el caso en que se transgredió el derecho al honor por el ejercicio indebido del derecho a la libertad de expresión, en el marco de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

SÉPTIMO: Estudio de fondo. Ahora bien, como se anticipó, el recurrente impugna la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 33, 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Para ello, se hicieron valer cinco agravios; sin embargo esta Primera Sala advierte que para un mejor análisis, es posible agrupar los argumentos y analizarlos en un orden distinto al propuesto en el escrito, para que quede en los siguientes términos:

- a) Los artículos 33, 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal son inconvencionales porque establecen un límite o tope máximo, con lo que se viola el derecho a una indemnización justa, reconocido en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (agravios segundo y parte del quinto).
- b) Los artículos 33, 39 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor

y la Propia Imagen en el Distrito Federal violan el artículo 1 de la Constitución Federal, así como los diversos 10, 11 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En concreto, se vulnera el principio de igualdad —y en consecuencia el honor y la dignidad humana—, puesto que establecen una distinción indebida para los servidores públicos, al prever una reducción sustancial en el tope máximo de indemnización económica (parte de los agravios primero y tercero).

- c) La suspensión o restricción que llevó a cabo el tribunal colegiado no es posible en el caso, ya que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (agravio cuarto).

En cuanto al planteamiento de constitucionalidad señalado en el inciso a), el recurrente desarrolla que los artículos 33, 39 y 41 de la multicitada ley son inconvenientes porque:

- establecen un límite injustificado a la reparación del daño moral sufrido, pues la doctrina de reparaciones integrales emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo es aplicable para violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas por el Estado;
- violan el derecho a una justa indemnización el cual prevé que se deben anular las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación anterior y, en su defecto, proceder al pago de una indemnización como medida resarcitoria;
- limitan al juzgador para cuantificar justa y equitativamente la indemnización en atención a las particularidades del caso;
- no garantiza que el afectado goce de su derecho o libertad conculcados;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

15
FORMA-SS

122
775

- el tope máximo implica una limitación irracional al derecho a ser indemnizado de forma integral;
- las medidas resarcitorias o de indemnización no deben fijar límites mediante un "techo" cuantitativo, pues el legislador, contrario al juzgador, no conoce las particularidades del caso para fijar una indemnización justa;
- el demandado causó el daño moral por las publicaciones en medios electrónicos, de forma que si la publicación del extracto de la sentencia condenatoria se hace por los mismos medios tiene un costo bajo, entonces la sanción reparatoria es laxa; aunado, si se toma en cuenta el nivel y la capacidad económica del demandado son altos, según las constancias que obran en autos, entonces es claro que la sentencia no castiga el comportamiento ilícito del comunicador, a no recibir la condena que merece;
- una indemnización alta no debe considerarse censura previa indirecta o inhibitoria del ejercicio de la libertad de expresión, cuando ya se ha establecido que no existe protección constitucional hacia el insulto ni conductas dolosas o temerarias del comunicador.

Antes de entrar a analizar estos argumentos, se advierte que el recurrente se duele porque la norma establece un límite máximo que el juez no debe sobrepasar al momento que fija la indemnización para reparar el derecho de la personalidad violado. Asimismo, se observa que, a juicio del recurrente, el agravio lo causan tres artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal:

“Artículo 33. Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público.

Artículo 39. La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral.

Artículo 41. En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código (sic) Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo”.

De la transcripción anterior se tiene que el artículo 33 –que se encuentra en el capítulo de malicia efectiva– establece que los servidores públicos tienen limitados los derechos de la personalidad como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público. Posteriormente, el artículo 39 establece una de las medidas de reparación del daño consistente en la publicación de la sentencia condenatoria bajo ciertos lineamientos.

Finalmente, el numeral 41 establece la posibilidad de condenar a una indemnización monetaria y dos parámetros: (i) el primero, aplicable en todos los supuestos sin importar la calidad de quien fue afectado en su patrimonio moral, refiere que la indemnización debe fijarse atendiendo a las particularidades del caso, pero también establece un tope; y (ii) el segundo, sólo para los casos en los que el sujeto afectado es un servidor público, establece la posibilidad, en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

26
FORMA-SS
123
776

atención a las particularidades del caso, de atenuar la medida reparatoria mediante la disminución de la cantidad máxima permitida¹⁵.

Así, es evidente que el reclamo del recurrente que se estudia en este momento, no deviene del contenido de los artículos 33 y 39 de la ley en comento, sino exclusivamente de la primera parte del artículo 41, puesto que ahí se contempla el tope máximo que debe considerar el juzgador al momento de calcular la indemnización en una cantidad líquida y exigible.

En ese sentido, esta Primera Sala estima que el presente estudio de convencionalidad debe hacerse únicamente respecto del primer párrafo, del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, no así de los otros dos preceptos; esto, en tanto que los argumentos desarrollados por el recurrente no guardan relación con el contenido de las normas restantes y la afectación alegada únicamente deriva del límite máximo establecido por el legislador.

Finalmente, se estima que no es óbice a lo anterior el hecho que el tribunal colegiado se haya referido erróneamente al texto del artículo 41 anterior a la reforma de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, tomando en cuenta que tanto las publicaciones impugnadas

¹⁵ Debe decirse que al resolver el amparo directo (fallado por unanimidad de cinco votos, el treinta de enero de dos mil trece), esta Primera Sala explicó el contenido del capítulo V de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen para el Distrito Federal. En cuanto al segundo párrafo del artículo 41, se le entendió como una atenuante y no como un límite como el caso del primer párrafo; al respecto, se indicó:

"En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 41 establece la posibilidad de atenuar la medida reparatoria al permitir al juez "disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo" en los casos en que los sujetos afectados por las expresiones sean servidores públicos. Y por otro lado, el artículo 43 hace posible agravar el monto de la reparación en casos de reincidencia durante el plazo de un año, al dar la posibilidad al juez de "imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización".

como la demanda, acontecieron en dos mil dieciséis. Se concluye lo anterior, ya que la modificación del texto legal sólo fue para modificar la base para calcular que pasó de días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México; de ahí que, en esencia, persiste el límite que alega el recurrente.

Ahora bien, para dar respuesta a los planteamientos del recurrente, es conveniente retomar las consideraciones emitidas en el **amparo directo en revisión** [REDACTED] En el asunto mencionado se precisó que el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁷ prevé el régimen de reparaciones integrales; asimismo, se indicó que el derecho en cuestión no admite límites injustificados para reparar el daño causado a las personas con motivo de la lesión de sus derechos humanos.

De esa forma, se determinó que no existía razón suficiente para que el legislador impusiera un monto máximo para la indemnización, por lo que se advirtieron vicios de irregularidad en la porción normativa del anterior artículo 41 que establecía *"en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de vigente en el Distrito Federal"*, al vulnerar el derecho humano a una reparación integral; aun cuando se tuvieran los límites, se precisó que el precepto preveía parámetros para otorgar una indemnización económica que respetara el derecho a una justa indemnización, pues se encontraban elementos o márgenes de apreciación para que se valorara casuística y prudencialmente las circunstancias bajo las cuales la intromisión a la vida privada y el honor han tenido lugar.

¹⁶ Resuelto en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por unanimidad de cinco votos.

¹⁷ **Artículo 63.1**

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

27
FORMA A.05
124
272

Se puso de manifiesto que para la doctrina y algunos tribunales extranjeros, una indemnización no es justa cuando se le limita con topes o tarifas, pues en lugar de ser el juez quien la cuantifique con base en criterios de razonabilidad, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y su realidad. Por ello, se afirmó que sólo el juez, que conoce las particularidades del caso, puede cuantificar la indemnización con justicia y equidad.

Atendiendo al equilibrio y protección de la libertad de expresión, se manifestó que una forma de garantizar que las indemnizaciones no sean excesivas, es atribuyendo a la autoridad judicial la facultad de determinarlas con base en un principio: las indemnizaciones deben corresponder a la reparación integral del daño. La determinación debe hacerse en forma individualizada, atendiendo a las particularidades de cada caso, la naturaleza y extensión de los daños causados.

Posteriormente se puso especial énfasis en que la indemnización justa no estaba necesariamente encaminada a la *restauración del equilibrio patrimonial perdido*, pues la reparación se refiere a los bienes de la personalidad, de manera que lo que persigue es una reparación integral, entendida como suficiente y justa, para que el afectado pueda atender todas sus necesidades, de manera que le permita llevar una vida digna.

Se citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*, pues ésta estableció que las reparaciones por causa de violación a los derechos humanos, particularmente en lo que toca al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales debe

calcularse con base en los principios de equidad y en la apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso.

Dicho lo anterior, se destacó que el tribunal interamericano ha utilizado estos principios para calcular indemnizaciones en casos cuyas víctimas han resistido violaciones de derechos protegidos predominantemente por la materia penal, pero que esa circunstancia no implicaba necesariamente que no fueran aplicables a los casos de violación de los derechos de la personalidad (honor, imagen y vida privada) ante el ejercicio indebido de la libertad de expresión o información; máxime cuando considerar que un tope máximo dependiendo de la materia de la controversia implicaría afirmar que resarcir cierto tipo de derechos de cierta forma se justifica por la mayor importancia de éstos, lo cual sería un completo desconocimiento de la indivisibilidad como característica de los derechos humanos.

Se puso de manifiesto que la jurisprudencia internacional y la doctrina coinciden en que el cálculo de los daños no pecuniarios sigue representando una labor complicada (cuantificar las afectaciones como sufrimiento, nerviosismo, ansiedad, menoscabo en la dignidad y otras afines), en tanto que son una cuestión personal que se resiente de forma particular y que puede incluso ser valorada con amplias diferencias por distintos jueces; sin embargo, por esa misma circunstancia esta Primera Sala consideró que no resulta razonable que el legislador imponga una cantidad máxima, pues con ello obstaculiza la labor del juez en el cálculo de una justa indemnización que basarse en las particularidades del caso y en los principios de equidad.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

178
FORMA 1-83
778

Se indicó que el propio artículo 41 de la multicitada ley, estaba encaminado a que los jueces sopesaran las circunstancias del caso con la intención de establecer una indemnización para reparar una violación de derechos; de ahí que, la labor ponderativa correspondiente a los juzgadores, se veía entorpecida cuando una regla de aplicación subsuntiva -como es el establecimiento de un tope máximo-. De tal suerte, que cuando el juez haya sopesado las circunstancias y valorado con base en los principios mencionados una indemnización y ésta sobrepase el límite impuesto por la legislación, no habría otro curso de acción que reducir dogmáticamente la cantidad hasta que se ajuste al tope máximo.

Así, esta Primera Sala indicó que proceder de esa forma conllevaría a una resolución formalista, ya que se tomaría una decisión cuya única justificación sería la prohibición de la ley de exceder el límite establecido e ignorar las circunstancias que subyacen al caso concreto.

Dicho lo anterior, se consideró pertinente desarrollar el contenido de las circunstancias especiales que el juez tendría que valorar para fijar la indemnización correspondiente, particularmente aquellas que no han sido advertidas expresamente por el legislador en el artículo 41 de la citada ley y que pueden circunscribirse al contexto en que esta indemnización habrá de fijarse atendiendo a la dimensión individual y social de la libertad de expresión.

Para desarrollar ese punto, se indicó que en la relación entre Estado y periodistas, debe considerarse que el periodista ostenta una

posición de debilidad frente a la fuerza estatal, razón por la cual las autoridades, y en este caso los jueces, deben ser diferentes cuando se trate de imponer sanciones derivadas del reproche estatal al exceder el ejercicio de la libertad de expresión. Por lo anterior, se consideró que el juez debe advertir, al momento de fijar el monto de la indemnización por daño moral, que la posición del periodista está en desventaja, puesto que permanentemente son susceptibles de crítica y escrutinio público en virtud de su labor de informar y emitir opiniones.

De esta forma, para dotar de significado constitucional al artículo 41 en comento y evitar una injerencia excesiva en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, se determinó que atendiendo a la literalidad del precepto, los operadores jurídicos cuentan con margen de apreciación para observar determinadas circunstancias especiales de la víctima, como se sigue de la literalidad del enunciado normativo en cuestión. De la misma forma, debe sopesarse la mayor o menor divulgación que las expresiones hayan tenido.

Sin embargo, advirtió que en el mismo precepto se establece que deben tomarse en cuenta "el resto de las circunstancias del caso", y que para esa frase debía entenderse que el juzgador debe atender a los criterios de esta Primera Sala de la Suprema Corte para no soslayar que en cualquier medida estatal que tenga por objetivo regular un tema que pueda tocar la libertad de expresión en cualquiera de sus vertientes, es necesario que sea en extremo cauteloso para que la medida pretendida no produzca un efecto inhibitor.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

29
126
779

Al respecto, se expresó que en diversas ocasiones, esta Primera Sala ha desarrollado una línea jurisprudencial en la que se prevé que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia constitucional, por lo que la libre circulación en este sentido resulta esencial para el desarrollo individual y colectivo de las personas en la sociedad. Así, se dijo que el derecho incluye algunas expresiones que pueden incomodar a sus destinatarios, sean personas o el mismo Estado, tales como en algunos casos ofensas e insultos.

Destacó que lo anterior era relevante al concebir que el debate libre entre personas es un valor esencial para la circulación de ideas; de ahí que debiera respetarse la autosuficiencia del ciudadano para decidir libremente cómo formar su opinión y qué expresiones debe preferir de las encontradas en el debate público. Todo esto, sin la necesidad de la intervención del Estado para señalar cuáles expresiones deben juzgarse como correctas.

En ese sentido, se determinó que esos aspectos deben tomarse en cuenta cuando los juzgadores apliquen el artículo 41 en cuestión, con lo que siempre debe tenerse presente que con la imposición de una sanción económica puede generarse un efecto inhibitor para que cualquier persona, y especialmente quienes ejercen profesionalmente el periodismo; esto, pues es claro que se detendrían al momento de expresar sus ideas con temor de un potencial reproche.

Asimismo, se puso énfasis en que esa determinación no tenía por objeto que los derechos de la personalidad no operaran, sino que simplemente, debía tomarse en cuenta que esos derechos se ven

reducidos o disminuidos frente al carácter preferencial del derecho a la libertad de expresión. Así, se estableció que al aplicar el artículo 41 de la Ley, los jueces y tribunales deben hacer lo que esté en su alcance para favorecer la libertad de expresión sobre los derechos de personalidad, particularmente cuando la controversia se dé entre personajes públicos. Finalmente, se insistió que esa determinación no implicaba que se dejara de hacer un ejercicio de ponderación por los juzgadores para determinar el fondo de la litis, sino que dicho ejercicio debe tener como premisa mayor el carácter preferencial de la libertad de expresión.

Dicho lo anterior, como se anticipó, le asiste la razón al recurrente parcialmente, puesto que el límite máximo previsto en el artículo 41 vulnera el derecho a una indemnización justa contemplado en el artículo 61.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Efectivamente, el legislador no puede poner un tope, ya que es imposible que conozca las particularidades del caso, y esto genera un obstáculo para que el juzgador, quien se ha allegado de las circunstancias del asunto, fije la indemnización correspondiente.

Como ya lo mencionó previamente esta Primera Sala en el precedente citado, para que una indemnización sea justa, debe atender a las particularidades (como las cuestiones a las que hace mención la parte inicial del artículo 41 de la ley multicitada) y en consecuencia, efectivamente se establezca un monto acorde al caso concreto. Lo anterior, recalando que el juzgador debe buscar equilibrio de forma que se restituya o compense la situación anterior al hecho ilícito, sin que se genere un efecto inhibitorio o de censura, pues dentro de las particularidades del asunto, como bien mencionó esta Sala, no debe pasar desapercibido el carácter preponderante que se le ha dado a las libertades de expresión e información cuando se ejercen



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

30
FORMA X-03
127
780

por la prensa, para generar el debate público en sociedades democráticas.

Por estos mismos motivos, se estima que no le asiste la razón al recurrente cuando alega que una indemnización alta no es censura, así como que la indemnización debe aumentar cuando los costos para publicar el extracto de sentencia son bajos, pues de lo contrario no se castiga al comunicador que excedió el ejercicio de sus derechos, lo cual es contrario a la indemnización justa. Así, se considera que estos argumentos están encaminados a plantear una indemnización de carácter sancionador o punitivo, en adición a la restitución del daño moral causado.

No obstante, esta Primera Sala considera que la pretensión del recurrente es a todas luces contraria a la doctrina constitucional que se ha desarrollado para resolver conflictos entre el ejercicio de la libertad de expresión e información por parte los medios de comunicación, en contraposición a los derechos de la personalidad como el honor; esto, en tanto que fijar una indemnización por el simple hecho de establecer un castigo como un rubro específico y adicional a la restitución de la situación anterior al daño o la compensación en caso de imposibilidad, no es compatible con la esencia de las libertades en cuestión.

Como se ha recalcado, las libertades de expresión e información tienen una dimensión individual y otra social o política que constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento adecuado de la democracia representativa. Asimismo, se ha hecho especial énfasis en lo importante que es la libre circulación de ideas para un debate abierto sobre asuntos públicos, pues da lugar al cumplimiento de

diversas funciones que son sustanciales en un gobierno representativo.

Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2008101	1 de 1
Primera Sala	Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I	Pág. 234	Tesis Aislada (Constitucional)	

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La libertad de expresión en su vertiente social o política, constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. En este sentido, se ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado. Dicho ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las decisiones de interés público”.

Aunado a lo anterior, se ha señalado que uno de los elementos de la dimensión colectiva de la libertad de expresión es la existencia de medios de comunicación profesionales e independientes; en ese sentido, se ha recalcado la importancia de los medios de comunicación, pues éstos constituyen una pieza clave para el adecuado funcionamiento de una democracia, al ser un vehículo para la expresión de ideas sobre asuntos de interés público, así como para la recepción de información y conocimiento de opiniones de todo tipo.

Tesis: 1a. XXIII/2018 (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2016429	1 de 9
Primera Sala	Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I	Pág. 1107	Tesis Aislada (Constitucional, Común)	

“TRIBUNALES DE AMPARO DEBEN GARANTIZAR UN CLIMA DE SEGURIDAD Y LIBERTAD PARA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUEDAN CUMPLIR CON SU IMPORTANTE FUNCIÓN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Uno de los elementos de la dimensión colectiva de la libertad de expresión es la existencia de medios de comunicación profesionales e



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

31
FORMA A-05
128
781

independientes. En este sentido, esta Suprema Corte ha destacado que los medios de comunicación son una pieza clave para el adecuado funcionamiento de una democracia, toda vez que permiten a los ciudadanos recibir información y conocer opiniones de todo tipo al ser precisamente el vehículo para expresar ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas entre la sociedad. En estas condiciones, corresponde a los tribunales de amparo garantizar la existencia de un clima de seguridad y libertad en la que los medios puedan desplegar vigorosamente la importante función que están llamados a cumplir en una sociedad democrática como la mexicana".

Establecido el alcance especial, debe decirse que una condena de carácter punitivo o que implique un castigo, en adición a la restitución, no sólo afecta directamente al comunicador en su patrimonio, sino que manda un mensaje a la sociedad en el que existe una sanción para la difusión de opiniones e ideas que exceden de la protección constitucional, cuyas consecuencias no terminan con una compensación justa, sino que además se busca reprender al elevar el monto de las mismas. Lo anterior, en atención al aspecto social de los derechos humanos en juego, llevaría a inhibir a todos aquéllos que hacen de su profesión la emisión de opiniones y divulgación de información y, finalmente, la circulación de noticias, ideas y opiniones en atención a la dimensión política que tienen esas libertades.

Por ello, se insiste, que el hecho de establecer la indemnización como un medio para imponer un castigo es incompatible con la naturaleza y el carácter preferencial que se le ha concedido a las libertades de expresión e información en una sociedad democrática. De tal forma que la imputación de responsabilidad y reparación del daño con motivo del ejercicio indebido de las libertades en comento por parte de la prensa, debe hacerse con el cuidado máximo y tomando en cuenta que la finalidad de las condenas recae exclusivamente en la restitución de la situación anterior al daño, en la medida de lo posible, o en su defecto, compensar la imposibilidad mediante el otorgamiento de una

cantidad que se cuantifique de forma justa, siempre atendiendo las particularidades del caso.

Finalmente, debe decirse que lo anterior no debe entenderse como que se admite la impunidad en el ejercicio indebido de las libertades de expresión e información por dañar derechos de la personalidad, puesto que esta determinación no impide que se imponga una sanción tan elevada o baja para restituir la situación anterior al hecho ilícito, según lo ameriten las circunstancias del caso concreto. Simplemente, lo que no se estima congruente, es que se plantee una especie de agravante o el cálculo de una cantidad determinada exclusivamente bajo el concepto de castigo.

Ahora bien, en otro orden de ideas, no pasa desapercibido que el recurrente hizo valer otras dos líneas de argumentación a lo largo de su escrito de agravios: por una parte, se alegó la violación al principio de igualdad por establecer una disminución en la indemnización decretada en beneficio de los servidores públicos afectados y por otra, se estableció que se restringían derechos humanos violando lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, por lo que hace al primer argumento, como se adelantó desde el considerando de procedencia, esta Primera Sala no puede hacer el estudio correspondiente, puesto que aún no existe un acto de aplicación en perjuicio del recurrente, ni se vislumbra una aplicación inminente; y por lo que hace a los agravios relacionados con el artículo 29 constitucional, se estima que a ningún efecto práctico traería su estudio, toda vez que éstos dependían de que persistiera la constitucionalidad del límite máximo establecido en el artículo 41 de la ley.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

32
FORMA A-63
129
782

Así, en atención a las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, se revoca la sentencia recurrida y se ordena que el tribunal colegiado dicte otra en la que:

- decrete, con base en las consideraciones de la presente ejecutoria, la inconvencionalidad del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal y confirme la desaplicación que realizó la sala responsable, sólo por lo que hace al control difuso relacionado con la fijación de límites máximos por vulnerar el derecho a una indemnización justa; y,
- estudie, con libertad de jurisdicción, el concepto de violación séptimo en el que se alega que el monto fijado por la sala responsable adolece de una debida fundamentación y motivación por no tomar en cuenta las particularidades del caso.

Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

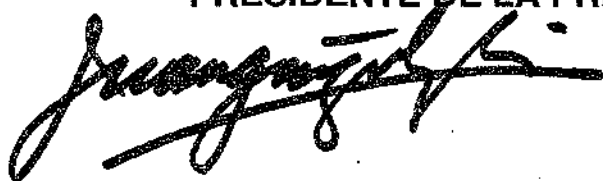
SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para los efectos precisados en la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, quien señaló que está con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, y Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente.

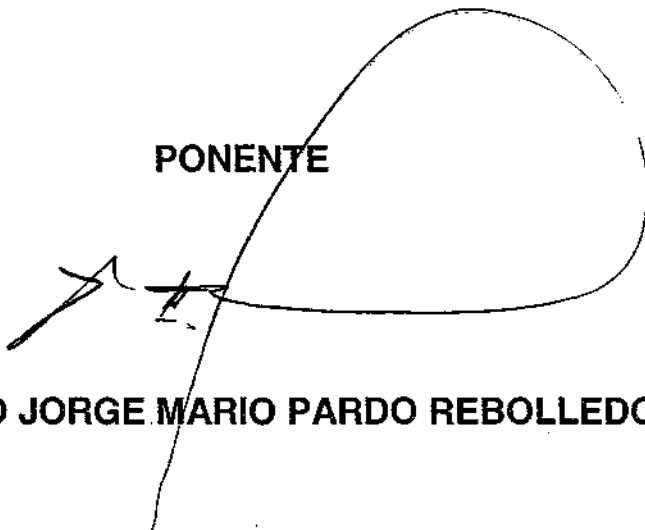
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA



MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

PONENTE



MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN



33
FORMA A-83
130
783

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

M

LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

A

Esta hoja corresponde a la sentencia dictada en el AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN, *[Redacción]* fallado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Conste.

RECIBIDO
SECRETARIA DE ACUERDOS
PRIMERA SALA

SENTENCIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL SEÑOR
MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
CARRANCÁ EN EL AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN

POSTURA ESENCIAL DEL VOTO: Dejar a salvo mi criterio relativo a que, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, no debe aceptarse que los Tribunales Colegiados de Circuito aplican por primera vez las normas que rigen los juicios naturales; y modular mi postura en cuanto al límite monetario que debe respetar la indemnización por daño moral en los casos en los que está de por medio el derecho a la libertad de expresión.

1. En sesión de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, esta Primera Sala resolvió por unanimidad de cinco votos¹ el asunto citado al rubro, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento.
2. Si bien comparto el sentido de la decisión alcanzada, disiento de algunas consideraciones, especialmente, aquellas referentes a que en el recurso de revisión en amparo directo es posible analizar la regularidad constitucional de normas generales que rigen el juicio de origen y que los Tribunales Colegiados de Circuito "aplicaron" por vez primera en perjuicio de algunas de las partes, en la sentencia de amparo; y en cuanto al límite monetario que debe respetar la indemnización por daño moral en los casos en los que está de por medio el derecho a la libertad de expresión.

Razones de la mayoría

3. En cuanto al fondo, la mayoría de los integrantes de esta Primera Sala consideró, esencialmente, que el presente amparo directo en revisión resultaba procedente en tanto el Tribunal Colegiado del conocimiento aplicó por primera vez el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y el recurrente combatió su regularidad constitucional en vía de agravios.

¹ De la Señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández y de los Señores Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Profrancisco Muñoz Jim. Col Nava

4. Por lo que se refiere al fondo, se consideró que el referido precepto 41 es inconstitucional por ser contrario al derecho humano a la justa indemnización, al establecer que la indemnización por daño moral sólo podrá ser hasta el equivalente a 350 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México, situación que constituye un obstáculo para que el juzgador fije una indemnización adecuada a las particularidades de cada caso concreto.

Razones del disenso

5. Respetuosamente no comparto las consideraciones sostenidas en la ejecutoria respecto a que en el recurso de revisión en amparo directo es posible analizar la regularidad constitucional de normas generales que regulan el juicio de origen y que "aplicaron" los Tribunales Colegiados de Circuito por primera vez en perjuicio de alguna de las partes, en la sentencia de amparo recurrida.
6. Desde mi punto de vista, la cita que de un precepto efectúa un Tribunal Colegiado no puede ser considerado como el primer acto de aplicación en perjuicio del justiciable, para efectos de la procedencia del recurso de revisión, sobre lo cual comparto el criterio que informa la tesis siguiente:

AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE UNA NORMA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, NO PUEDE SERLO UNA SENTENCIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN AMPARO DIRECTO O UN RECURSO DE REVISIÓN. La sentencia de un Tribunal Colegiado de Circuito que resuelve un amparo directo o el recurso de revisión, y que por primera vez trae a colación en la secuela histórica del negocio jurídico la aplicación de una norma, no puede ser considerada como primer acto de aplicación para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, en virtud de que dicho tribunal no puede sustituir a la responsable por efectos de la técnica del amparo; además, lo que resuelva a propósito de la aplicabilidad de una norma, sólo constituye una declaratoria inmaterializada que, para generar agravio e incidir en la esfera del gobernado, requerirá de un nuevo acto en acatamiento de la ejecutoria por parte de la autoridad competente.²

² Tesis aislada 2a, XCVII/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y tres, del Tomo XVIII, julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VOTO CONCURRENTENTE
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

7. Al respecto, parto de la base de que el recurso de revisión en amparo directo es excepcional, su procedencia está sujeta al estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme a los cuales, para que el recurso de revisión interpuesto contra las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo directo sea procedente, es necesario que las mismas decidan sobre la constitucionalidad de normas generales (leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien que en dichas resoluciones se omita hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se hubiera planteado en la demanda de garantías (para tales efectos se incluye también el supuesto en que el tribunal declara la inoperancia o insuficiencia de los conceptos de violación respectivos). Además, conforme a los Acuerdos Generales tomados por este Alto Tribunal, se requiere adicionalmente que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de fijar un criterio de importancia y trascendencia.

8. Así, cuando se trata de la impugnación de normas generales, un eventual análisis de constitucionalidad está sujeto a que exista el acto de aplicación del precepto a cargo de la autoridad responsable, de otra manera, el quejoso no estaría en posibilidad de alegar en su demanda de amparo la inconstitucionalidad de la norma que ni siquiera funda el acto reclamado y que, por ende, no causa afectación a su esfera jurídica.

9. Ahora bien, existen casos en los que el tribunal de control constitucional encuentra que el fundamento legal empleado por la autoridad responsable es equivocado, en cuyo caso la técnica de amparo le obliga a conceder la

protección constitucional para que se corrija el yerro, especificar cuál es la disposición aplicable y ordenar a dicha autoridad la resolución del asunto con base en esa norma, de hecho, solamente de esa manera el acto reclamado llegará a cumplir con el requisito de una debida fundamentación.

10. La cita de ese precepto legal a cargo del órgano colegiado, que bien puede ser la primera que se haya efectuado durante todo el trámite que hasta entonces haya tenido lugar en el juicio, no puede ser considerado, sin embargo, el primer acto de aplicación en perjuicio de aquél que encuentre en la determinación del órgano de amparo un fallo adverso.
11. Lo anterior, porque la decisión del órgano colegiado sólo constituye una declaratoria de aplicabilidad del precepto que no se encuentra materializada, pues para que se llegue a generar el agravio e incida en la esfera del quejoso requiere el acatamiento por parte de la autoridad responsable y es éste, en todo caso, el acto que eventualmente puede llegar a afectar los intereses de alguna de las partes.
12. Afirmar que la cita del precepto a cargo del Tribunal Colegiado constituye un acto de aplicación, necesariamente implica sostener que el juicio de amparo es una instancia más y que el órgano de control constitucional puede sustituir a la autoridad responsable para la resolución del litigio original, interpretación que además de ir en contra de la técnica de amparo que reconoce en el juicio de garantías un medio de defensa extraordinario, dirigido a examinar que la actuación de la autoridad se ciña a los contenidos de la Norma Fundamental más que a resolver la cuestión de origen, trastoca la esfera competencial de los tribunales de la Federación y la soberanía de las entidades que la conforman en aquellos casos en que la controversia derive de un juicio o se trate de un acto del orden local, pues es a sus órganos jurisdiccionales a los que corresponde la aplicación de su derecho.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VOTO CONCURRENTENTE
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

13. En esa línea de pensamiento, si los efectos del amparo vinculan a la autoridad responsable a dictar una nueva resolución, debe entenderse que será en ésta en la que se lleve a cabo el primer acto de aplicación del precepto legal reclamado, tal como se explica en la tesis aislada número 2ª.XCVII/2003, a la que he hecho referencia y cuyo criterio no ha sido abandonado y, por ende, será al promover el juicio de amparo en contra del fallo que cumplimente la decisión del tribunal de amparo que el ahora recurrente pueda impugnar la constitucionalidad de la norma cuestionada.
14. Por otra parte, si bien comparto la decisión que esta Primera Sala alcanzó en este asunto, en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) por ser contrario al derecho humano a la justa indemnización; desde mi óptica, de acuerdo con el precepto 39 de la Ley en mención, la medida reparatoria en este tipo de asuntos consiste en la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral; y de acuerdo al artículo 41 de referencia, la medida reparatoria consiste en una indemnización monetaria, situación que implica, a mi parecer, que estas normas generales no sean excluyentes sino complementarias, de manera que, en casos en los que no baste la publicación de una sentencia para reparar los daños morales ocasionados, entonces es necesaria una indemnización pecuniaria adicional.
15. Así, desde mi punto de vista, al estar en conflicto en estos casos el derecho a la libertad de expresión de un periodista y el derecho al honor de un servidor público, es importante tener presente que las sanciones pecuniarias adicionales a las medidas reparatorias, no deben ser desproporcionadas o

excesivas, pues de ser así podrían impactar directamente en la difusión de información y generar cesura previa indirecta, ya que es posible que los periodistas, ante la inseguridad jurídica que tendrían sobre los montos monetarios con los que serían sancionados por difundir determinado contenido, se vean disuadidos a publicarlo, en perjuicio de su libertad de expresión.

16. Por esas razones, creo que las sanciones a las que hacen referencia los artículos en cita deben permitir una restitución y reparación a favor del afectado, sin ser excesivas al grado de trastocar o desalentar el ejercicio de la libertad de expresión, cuya dimensión política y social constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento adecuado de la democracia representativa, ni para la libre circulación de ideas para un debate abierto sobre asuntos públicos en un gobierno democrático. Objetivo que se alcanza publicando la sentencia; estableciendo parámetros objetivos para el establecimiento de sanciones económicas, que los periodistas y comunicadores conozcan *ex ante* y que no los inhiba a publicar determinado contenido; y obligando a los jueces a que establezcan tales sanciones monetarias de forma proporcional al daño que se busca indemnizar.
17. Por los motivos apuntados, me aparto de las consideraciones que sustentan la resolución alcanzada en este recurso de reclamación.

Razones por las que comparto el sentido de la decisión alcanzada

18. A mi parecer, fue correcta la determinación sustentada por esta Primera Sala en el asunto identificado al rubro, toda vez que, como se sostiene en la ejecutoria, el recurso de revisión era procedente en tanto desde la demanda de amparo, el quejoso alegó que fue incorrecta la inaplicación que la Sala Responsable hizo del artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) al considerarlo inconvencional en un control ex officio, y si el Tribunal Colegiado lo declaró



37 134
787

VOTO CONCURRENT E
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

constitucional y estimó incorrecta a tal inaplicación, motivo por el cual, desde mi óptica, en este medio de impugnación subsiste un tema propiamente constitucional que emanó desde la inaplicación que el Tribunal; y porque el mencionado enunciado normativo es inconvencional por ser contrario al derecho humano a la justa indemnización en tanto dispone que la indemnización por daño moral sólo podrá ser hasta el equivalente a 350 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México, situación que constituye un obstáculo para que el juzgador fije una indemnización adecuada a las particularidades de cada caso concreto.

[Firma manuscrita]
JUNIO

MINISTRO JUAN LUIS GONZALEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

PFMD/grh



3888
FORMA-A-53

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LA LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HACE CONSTAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AL CONCLUIR LA SESIÓN PÚBLICA DEL DÍA DE HOY SE FIJÓ EN LOS ESTRADOS DE ESTA SUPREMA CORTE UNA LISTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN DICHA SESIÓN, EN LA QUE SE INCLUYÓ EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN



CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE.

EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL SE PUBLICÓ EN LOS ESTRADOS Y EN EL PORTAL DE INTERNET DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. CONSTE.

ACTUARIO
JUAN CARLOS REBOLLO PONCE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
CONSTE.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

LA PRESENTE ES COPIA QUE SE OBTUVO DE SU ORIGINAL,
QUE TUVE A LA VISTA Y SE CERTIFICA EN TREINTA Y OCHO FOJAS
ÚTILES, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

LA SUBSECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. ELSA GUTIÉRREZ OLGUÍN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTES DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

IRD/rbh



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

989

380

En diecisiete de enero de dos mil veinte, José Manuel González Jiménez, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta al Magistrado José Rigoberto Dueñas Calderón, en sustitución de la Magistrada Presidenta María Concepción Alonso Flores, con el escrito original y un anexo en copia certificada, que exhibe [REDACTED] quien se ostenta autorizada en terminos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del tercero interesado [REDACTED]

- Conste.

Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos mil veinte.

Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguese a sus autos, el escrito original y un anexo en copia certificada, que exhibe [REDACTED] quien se ostenta autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del tercero interesado [REDACTED] cuyo anexo dice ofrecer como prueba superveniente.

Se reserva acordar el escrito de cuenta, porque en auto de presidencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se suspendió el procedimiento de este juicio de amparo, a propósito de la solicitud de facultad de atracción promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el referido tercero interesado, por lo que una vez que la superioridad defina lo relativo a dicha solicitud, y se levante la suspensión procedimental, se acordará lo conducente.



3 12600 36 108006

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordó el Magistrado **José Rigoberto Dueñas Calderón**, en sustitución de la Magistrada **María Concepción Alonso Flores**, Presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y firma con **José Manuel González Jiménez**, Secretario de Acuerdos que da fe.

JMGJ/

En 20 ENE 2020, siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal. **Doy fe.**

EL ACTUARIO JUDICIAL.

Dr. Diego Salazar Ruiz Espinoza



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
LEMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIGITALIZADO

DC

790

REFERENCIA
PS-00181

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN

En treinta de enero de dos mil veinte, la Subsecretaria de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el estado que guardan los presentes autos. Conste. *Elsa*

Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil veinte.

En sesión privada del día veintinueve del presente mes y año, ante la falta de legitimación de [REDACTED] el **MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA**, decidió de oficio hacer suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción respecto del amparo directo [REDACTED] del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicítase al Tribunal Colegiado en mención remita los autos del amparo directo de referencia, a la Presidencia de esta Primera Sala.

Por otra parte, comuníquese la presente determinación al Titular de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, para los efectos que considere pertinentes.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Subsecretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada Elsa Gutiérrez Olguín.

Juan González Alcantara Carranca

Elsa

000788

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA

2020 FEB -4 A 11 51

MVS/GUT

31 ENE 2020

se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: 00181.pdf
Secuencia: 3076521

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ISAAC MENDOZA FERREYRA	Validex:	OK	Vigente
	CURP:	MEFM930320HMCNRR05			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000d4d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	30/01/2020T16:50:11Z / 30/01/2020T10:50:11-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	17 02 3a fb ba 39 9a 6b 07 0f 84 95 6d dc 08 96 31 3b 84 b4 bb ed 3e b0 40 12 af 56 8f e7 4e f4 6c aa c6 e8 d1 3f d7 35 67 87 88 52 44 96 bd 13 2a d6 f2 cd 04 e4 a3 31 1c 2a 98 7f ce 0a 44 3b 3f 37 69 e6 8c dc 04 d2 79 cb 07 5c 92 ee 42 33 24 e0 6a fb 5c bf f1 f5 5d 18 f9 8f b9 66 c5 d5 ff 82 4b 8e 79 dd cf ce 9e 04 65 85 35 94 e9 37 2d 2b 1f 84 1f da d8 7d 66 fb a3 a9 26 48 29 40 4a 60 47 94 a5 e5 51 86 e3 8c a8 45 dd e4 e7 94 3f f6 c2 0b 91 03 21 47 e2 94 6c ed 0c 83 16 d3 b2 0f ae 8b 25 4e 5d 6f 97 d5 2a 7a d7 d0 16 20 ea ec 2c 06 aa 53 d0 63 f1 d8 d7 1c 2f 4e 18 71 d3 36 7a d5 03 10 a6 26 0f 06 55 8d 2f 80 fd a9 ef 0a 48 e2 7a 60 d3 78 74 71 64 0f e6 05 85 01 65 fe 7b 90 60 76 e7 1a 22 a2 9e a1 97 39 78 06 c9 f5 e7 a8 7c ac e0 af c1 c0 67 10 ae 7e 39 73			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	30/01/2020T16:50:24Z / 30/01/2020T10:50:24-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000d4d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	30/01/2020T16:50:11Z / 30/01/2020T10:50:11-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3080457			
	Datos estampillados:	BF237E9174EF6A65A499C71203E39DC0B528014B			



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 8842/2020

Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fecha de envío del
órgano requirente: 30/01/2020 14:00:38

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requirente: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN [REDACTED]

Núm. oficio del
órgano requirente: MI/PS/2/6020/2020

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requerido: AMPARO DIRECTO [REDACTED]

Fecha de recepción: 04/02/2020 11:49:44

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO	AUTOS (SOLO EL REQUERIMIENTO SE REALIZA POR VÍA ELECTRÓNICA)	(2) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN DOS PÁGINAS.
Fecha de acuerdo: 30/01/2020			

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion105228.pdf
Secuencia: 3082851

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GOJMB50315HVZNMN08			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000000097da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/02/2020T17:49:26Z / 04/02/2020T11:49:26-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0e 95 15 d2 7c 21 07 08 e4 c0 cf 17 42 20 83 56 7c 9a f8 ce 26 84 95 f4 e8 dc ad a9 70 e3 24 23 b4 8c d4 9e 2e b9 97 1e 2e 3c 84 1d 31 d8 70 87 74 20 fa 4e ce 78 fa 1e ed 1e 44 33 fb 76 94 1e 95 c4 dc d3 55 12 dd c7 e8 03 e7 b7 e0 07 7a 8a 2b cd 63 86 28 6b 97 73 c8 72 7c a6 1a e1 d8 f7 05 e4 ad 8e 91 68 b9 64 7f 02 58 77 17 ef ee b7 4e 08 f5 63 b9 9d a5 6c c0 59 95 33 4a 75 d3 33 ff ec 1b 2c 62 e4 a5 33 ea 08 0d c7 75 9b b8 9f e1 fe a2 aa e9 f3 f5 37 28 2d e4 88 d0 fa 7c e7 51 15 ab bd 96 90 6f a8 b3 d6 01 0e 57 7c de 0a 36 7e 41 80 75 99 e7 e5 98 53 1b 66 70 00 bd 54 91 bb ee 60 9d 3a a7 72 00 97 9d 87 e6 67 46 09 ca ab f9 f6 e1 51 7d 87 99 13 70 92 84 2a c0 1a 63 62 ca 1f 57 63 e7 db 15 18 16 b9 a2 c5 81 b8 d3 d4 21 df 43 a0 6e 90 ca e5 28 12 4c 20 94 40			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/02/2020T17:49:50Z / 04/02/2020T11:49:50-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a6600000000000000000000000097da			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	04/02/2020T17:49:26Z / 04/02/2020T11:49:26-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3086787			
	Datos estampillados:	45AEAD95FA36071CDD4D31517ACE8BC04FB8C8F0			



788

En **seis de febrero de dos mil veinte**, **José Manuel González Jiménez**, Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, doy cuenta a la magistrada presidenta con los documentos que aparecen en el Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federal (MINTERSCJN), constante del acuse de recibo con el número de oficio **MI/PS/2/6020/2020**, copia del auto de Presidencia de la **Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, de **treinta de enero de dos mil veinte**, y dos evidencias criptográficas.- Conste

Ciudad de México, a seis de ~~febrero~~ de dos mil veinte.

Visto el estado procesal que guarda este expediente [REDACTED] y la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

Agréguese a sus autos, para sus efectos, los documentos que aparecen en el Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federal (MINTERSCJN), constante del acuse de recibo con el número de oficio **MI/PS/2/6020/2020**, copia del auto de Presidencia de la **Primera Sala** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de **treinta de enero de dos mil veinte**, y dos evidencias criptográficas, del que se obtiene que:

a). En sesión privada de **veintinueve de enero de dos mil veinte**, el Ministro [REDACTED]

ORTÍZ MENA, decidió de oficio, hacer suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo, expediente **D.C.** [REDACTED] de este índice,

b). Solicita se remitan los autos del asunto de referencia a la presidencia de la mencionada Sala.

Se levanta la suspensión del procedimiento decretada en auto de presidencia de **veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve**.

En cumplimiento a la determinación tomada por el Ministro Presidente de la **Primera Sala** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme al respecto, envíesele el juicio de amparo directo, expediente **D.C.** [REDACTED] de este índice, los tocos [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] juicio ordinario civil daño moral, expediente [REDACTED] en dos tomos, y una bolsa cerrada que contiene documentos, para los efectos correspondientes. **Solicítese el acuse de recibo**.

Comuníquese esta determinación a la **SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, para los efectos legales correspondientes.

Previa anotación en el libro de control que se lleva en este Tribunal, dese de baja estadísticamente de este órgano colegiado.

NOTIFÍQUESE, y por oficio a la **Primera Sala** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B.2

793

SEXTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Así lo acordó la Magistrada **María Concepción Alonso Flores**, Presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con **José Manuel González Jiménez**, secretario de acuerdos que da fe.

En esta misma fecha se giraron los oficios 954 y 955 correspondientes.- **CONSTE.**
D.C. [REDACTED]
JMGJ/macs

En 10 FEB 2020, siendo las nueve horas, se notifica el proveído que antecede por medio de lista a las partes, habiéndose hecho la publicación de ley en los estrados de este tribunal colegiado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, salvo que se hayan ordenado realizar en forma personal.- **Doy Fe.**

EL ACTUARIO JUDICIAL